HERBERT S. KLEIN

HISTORIA DE BOLIVIA

DE LOS ORIGENES AL 2010

4ta. EDICIÓN
AUMENTADA Y CORREGIDA



Librería Editorial "G.U.M."
La Paz - Bolivia

HERBERT S. KLEIN

HISTORIA DE BOLIVIA

DE LOS ORIGENES AL 2010

Cuarta edición, aumentada y corregida

Versión castellana de Josep M. Barnadas

LIBRERIA EDITORIAL "G.U.M."
LA PAZ - BOLIVIA
2011

DEPÓSITO LEGAL: 4-1-1073-11

La presente edición
es propiedad del Editor.
Quedan reservados todos
los derechos de acuerdo a Ley.
Están prohibidas y penadas por ley
la reproducción y la difusión
totales o parciales de esta obra,
en cualquier forma, por medios
mecánicos o electrónicos,
inclusive por fotocopia, grabación
magnetofónica y cualquier otro sistema
de almacenamiento de información,
sin previo consentimiento
escrito del Editor,
ya que tales actos son delitos
tipificados en el Código Penal.
Capítulo X, Art. 362.

Impreso en Bolivia - Printed in Bolivia

Impresiones: Libreria Editorial "G.U.M."
Calle Puerto Rico N° 1135 Miraflores
Telf.: 2221938 • Fax: 02-2221938
editorialgum@gmail.com
La Paz - Bolivia

A

Michael Harry Pintouri III

INDICE

Nota a la Edición Boliviana..... 7

Nota del Traductor..... 8

Prefacio a la Cuarta Edición..... 9

Prólogo a la Tercera Edición..... 11

Prólogo a la Segunda Edición..... 12

Prólogo a la Primera Edición..... 13

CAPITULO I
Geografía y civilizaciones Precolombinas..... 19

CAPITULO II
La Creación de una sociedad colonial..... 40

CAPITULO III
Sociedad colonias tardía crisis y crecimiento..... 77

CAPITULO IV
Revolución y creación de un estado nacional, 1809-1841..... 107

CAPITULO V
La crisis del estado, 1841 - 1880..... 138

CAPITULO VI Las épocas de la plata y el estaño, 1880 - 1932..... 164

CAPITULO VII
La disolución del orden establecido, 1932 - 1952.. 200

CAPITULO VIII
De la Revolución Nacional a la Guerra Fría,
1952 - 1982..... 235

CAPITULO IX
Creando una democracia multiétnica, 1982 - 2002..... 268

CAPITULO X
La aparición de una élite mestiza e indigena 2002 - 2010 295

ENSAYO BIBLIOGRAFICO..... 326

CRONOLOGIA HISTORICA..... 363

CUADROS ESTADISTICOS..... 369

NOTA A LA EDICIÓN BOLIVIANA

Esta ***Historia*** *fue escrita para el público en general y para el estudidnte universitario no boliviano y se propuso darle los rasgos globales de la evolución histórica de la sociedad boliviana. Por tanto, es más un ensayo de síntesis que una reinterpretación original de las fuentes históricas primarias.*

Al mismo tiempo y como es de rigor en este tipo de libros en Europa y Estados Unidos, también trata de ofrecer al lector informado los resultados de la más reciente investigación. Por lo que se refiere a Bolivia, durante los últimos treinta años se ha producido un crecimiento importante en los estudios sobre la historia tanto dentro como fuera del país; este interés abarca por igual la economía como la historia del arte, la antropología como los enfoques más tradicionales del análisis político. He tratado de asimilar en la obra todos estos nuevos y diversos estudios, además de reexaminar las cuestiones que gozan de mayor tradición entre los historiadores bolivianos.

Asi pues, el lector boliviano probablemente tendrá pocas sorpresas en el contenido del libro; más espero que se podrá ver hechos y procesos bien conocidos desde las diversas y divergentes perspectivas de las demás ciencias humanas, así como desde los intereses de los historiadores tanto bolivianos como extranjeros, Por fin, también abrigo la esperanza de que esta Historia ofrezca a los investigadores bolivianos una introducción útil a los estudios internacionales sobre el pasado de Bolivia.

Nueva York, abril de 1982
H.S.K.

NOTA AL TRADUCTOR

Con el fin de evitar toda perplejidad en el lector desprevenido, ofrecemos a continuación la equivalencia entre las formas gráficas empleadas en el texto y algunas de las que han venido usándose hasta el presente. Nuestras opciones tratan de inspirarse en criterios internos a las lenguas andinas, de cuyas culturas forman parte los términos en cuestión:

FORMA USADA	FORMA TRADICIONAL
Atawallpa	Atahualpa. Atagualpa
Inka (ico)	Inca (ico)
Janansaya	Hanansaya
Kilakata	Hilacata
Kechua	Quechua
Lupaqa	Lupaca
Manco Qhapaq	Manco Capac (Kapac)
Mit'ayuq (Kuna)	Mitayo (s)
Mitmaq (Kuna)	Mitima (es)
Qulla	Colla
Qullasuyu	Collasuyu (Kollasuyu)
Titu Yupanki	Tito Yupanqui
Tupaq Amaru	Tupac Amaro
Tupaq Katari	Tupac Catari
Waq'a	Huaca
Waskar	Huascar
Yana (kuna)	Yanacona (s)

PREFACIO A LA CUARTA EDICIÓN

En esta edición de mi Historia de Bolivia, básicamente la cuarta, me he encontrado con los problemas habituales en la periodización de la historia contemporánea. Como podrán advertir los lectores de las ediciones precedentes, no he dejado de ir cambiando los períodos posteriores a 1952; los historiadores y científicos sociales bolivianos no cesan de cambiar su percepción de lo que constituye los 'recodos' del pasado reciente. Así pues, he tomado las elecciones de 2002 como el punto de ruptura entre los dos últimos capítulos, habida cuenta de que los comentaristas locales han subrayado su relieve político en cuanto anuncio de la aparición de un nuevo sistema político. Hay que reconocer que esta periodización no se aplica a las tendencias social y económica, que abarcan ambas orillas de la censura; y que es muy probable que ésta quede reformulada en el futuro. También reconozco que estoy juzgando tendencias contemporáneas en plena vorágine de algunos cambios muy profundos que se producen en la sociedad y en la política de Bolivia; y que los futuros historiadores verán esos cambios desde perspectivas diferentes. Está claro que algunos de estos cambios políticos, económicos y sociales contemporáneos darán lugar a unas evoluciones imprevistas. Aunque algunos lectores quizás piensen que esto equivale a evaluar prematuramente lo sucedido en los últimos cuatro años, me contentaré con responder que he llegado a una edad en la que ya no me será posible presenciar el desenlace de todo. Pero mi fascinación por Bolivia me ha empujado a emprender esta última versión porque he creído poder ofrecer, aun en esta etapa primeriza del proceso de cambio, algunos puntos de vista basados en mi interpretación del pasado y en mi larga experiencia de este país, que me ha fascinado durante la mayor parte de mi carrera académica.

En los ocho años transcurridos desde la última edición ha aparecido toda una nueva generación de científicos sociales y de centros de investigación, los que han producido una importante

bibliografía dedicada a analizar el cambio contemporáneo. En años recientes también ha habido un cambio sutil de definiciones en la sociedad boliviana, con un lento abandono de la palabra 'cholo' (que ahora se ha convertido en peyorativa) a favor de la etiqueta más genérica de 'mestizo'. Quisiera destacar que la definición boliviana de 'mestizo' se aparta considerablemente del sentido más general que esa etiqueta tiene para la mayoría de los latinoamericanos: en Bolivia el 'mestizo' se identifica más íntimamente con su pasado indígena que con el componente occidental de su cultura, tendiendo a mantener la vestimenta y otros símbolos identitarios, aunque adopte el español como su lengua principal. También el término 'indígena' se ha impuesto para definir a cuantos se autoidentifican como miembros de un grupo amerindio, aunque en realidad sean 'mestizos'. Si bien he adoptado esta nueva terminología en los últimos capítulos del libro, he dejado intacta la antigua en los capítulos que se ocupan del período anterior a 1980, pues por entonces no se daban los nuevos sentidos a aquellos términos.

A menos que indique otra cosa, toda la información estadística actual que menciono procede de fuentes gubernamentales bolivianas, sobre todo del Instituto Nacional de Estadística (INE); de la Unidad de Análisis de Políticas (Sociales y Económicas) (UDAPE), del Banco Central de Bolivia (BCB), y de los respectivos ministerios del gobierno. Para la información estadística latinoamericana comparada dependo de los datos de la ONU y de sus grupos de investigación latinoamericanos la CEPAL y la CELADE. Para llevar a cabo esta nueva edición me ha ayudado grandemente mi asistente José Antonio Pérez Cajías. Los amigos, colegas y exalumnos que aparecen en la edición anterior han seguido prestando su apoyo y consejo.

Menlo Park, CA, junio de 2010.

PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN

En esta revisión se ha escrito nuevamente los capítulos 3, 8 y 9; como también cambiado los cuadros estadísticos y la bibliografía. En este trabajo he sido colaborado por Eric Langer, Clara López Beltrán, Manuel Contreras, Antonio Mitre y Harriet E. y Manelis Klein. Manuel Contreras me han prestado una gran ayuda al mantenerme al día con la producción literaria sobre temas sociales y económicos. Clara López Beltrán ha seguido el trabajo de prensa de esta tercera edición y también me ha proporcionado significativa ayuda con los temas coloniales. Quiero, además, expresar mi consideración al Banco Central de Bolivia, al Instituto Nacional de Estadística, UAPSO, Congreso Nacional, UNDP en Bolivia como también a las Naciones Unidas, al Banco Mundial y sus varias agencias, cuyos materiales estadísticos sobre Bolivia han sido puestos a disposición de académicos a través de sus portales electrónicos. Finalmente, el constante apoyo de Judith C. Schiffner, ha convertido este proceso de revisión de mi ***Historia de Bolivia*** *en una maravillosa experiencia.*

Nueva York, 9 de octubre de 2001

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Al actualizar este texto he tratado de destacar en lo posible las tendencias a largo plazo que han influído en la evolución de los acontecimientos bolivianos recientes. Como sólo ha transcurrido una década desde la terminación de la primera edición, no siempre ha sido fácil comprender e interpretar los cambios estructurales más profundos que les subyacían. Las intensas luchas políticas de la última década con frecuencia han enmascarado aquellas transformaciones. Si los rápidos cambios en la economía nacional han tomado por sorpresa a la mayoría de los analistas, las evoluciones sociales de larga duración han sido todavía menos fáciles de interpretar tanto para los bolivianos como para los extranjeros. En una historia general como la presente, también es inevitable (y lamentable) que cuanto más uno se acerca al tiempo contemporáneo, cada capítulo abarca un periodo de tiempo más breve y se hace más cuesta arriba distinguir entre los sucesos efímeros y los cambios estructurales más profundos que influirán más en el futuro. Así se explica que en esta segunda edición haya que tomar como simples valoraciones provisionales, tanto la revisión a fondo del capítulo 9 como la inclusión de un nuevo capítulo final. No ha planteado, en cambio, tanto problema la revisión del ensayo bibliográfico, que espero deje debida constancia de la extraordinaria productividad de los estudios bolivianos durante la década pasada.

En esta tarea de revisión he seguido beneficiándome de la ayuda y las críticas de los amigos y colegas mencionados en la primera edición, además de Silvia Rivera, Ricardo Godoy, Erwin Grieshaber y Eric Langer. También deseo agradecer a mis ex-alumnos Brooke Larson, Clara López B. y Manuel Contreras por compartir conmigo sus ideas y su trabajo; y a Maria Ligia Coelho Prado por su lectura crítica de los nuevos materiales.

Nueva York, 18 de junio de 1990

PROLOGO A LA PRIMERA EDICION

La Historia de los pueblos de Bolivia es una de las evoluciones más complejas y fascinantes. Sociedad creada por conquistas imperiales y adaptaciones indígenas, actualmente sigue siendo una nación dominada por su campesinado de origen precolombino, aunque con una plena participación en la economía mundial. Es también la más india de las repúblicas americanas, donde en fechas tan recientes como las del censo de 1976 aparece que sólo una minoría de la población es hispano hablante monolingüe. Las lenguas amerindias quechua y aymara predominaron, incluso siguen hablándose lenguas preincaicas tales como el uru y el puquina. Así pues, Bolivia no es simplemente una réplica colonial de su último conquistador, el español, sino una amalgama nueva y compleja de culturas y etnias, en la que coexisten elementos importantes de normas occidentales y no occidentales. En el altiplano Andino y en los valles montañosos, con un clima extraordinariamente duro y hermoso, los bolivianos han creado una nueva sociedad multiétnica.

Para la masa de los bolivianos, de la que dos tercios son campesinos, su cultura es mescolanza de normas e instituciones precolombinas y posteriores a la conquista. Los sistemas hispanos de gobierno fueron injertados en las organizaciones de parentesco prehispánicas, poblaciones ecológicamente dispersas se transformaron en aldeas nucleares y religiosas locales estatales fueron objeto de sincretismo, dando lugar a un nuevo catolicismo popular sumamente mezclado con los símbolos y mitos de la religión popular mediterránea. Los sistemas tradicionales de intercambio coexisten con un mercado sumamente desarrollado y el trigo es cultivado juntamente con otros cultivos precolombinos, como la papa y la

coca. En las lenguas quechua y aymara los préstamos castellanos constituyen una parte importante del vocabulario y entre los mineros aculturados y las clases obreras urbanas los sistemas de creencia precolombinos se encuentran mezclados con normas occidentales modernas.

Pero esta descripción de Bolivia como una sociedad dual no significa presuponer que Bolivia es simplemente un laboratorio de campesinos que avanzan hacia un nuevo idioma cultural, dentro un entorno duro, pero bello. Pues Bolivia es y ha sido desde la conquista castellana del siglo XVI, una sociedad de clases capitalista y occidental, en la que los indios han sido y siguen siendo una clase rudamente explotada de trabajadores. El gobierno que ha extraído el excedente de los campesinos y obreros, tradicionalmente ha sido un gobierno a cargo de y para la élite "blanca", de habla castellana y orientación occidental. Si bien los "blancos" bolivianos por su fenotipo se parecen en gran manera a sus antepasados indios, su posición económica, social y cultural los ha encajado en el molde clásico de una sociedad occidental europea. Educados por europeos en normas europeas, incluso practicando una religión diferente del catolicismo popular de los campesinos, los "blancos" han dominado al campesino, explotándolo con la ilusión de formar una raza aparte. Pero la élite, que en un comienzo estaba compuesta por conquistadores europeos, poco a poco se ha ido mezclando, igual que todas las sociedades multirraciales de este tipo, y con el paso de los siglos ha surgido un nuevo tipo biológico de antecedentes mestizos.

Así Bolivia, como la mayoría de las sociedades multiétnicas en América, ha llegado a definir la raza más como un concepto etnosocial que genético o incluso fenotípico. Las clases superiores, de habla castellana, vistiendo vestidos occidentales y consumiendo alimentos no autóctonos, son blancas o, según los llaman los campesinos, gente decente. Las clases urbanas inferiores, la clase media inferior, y los agricultores rurales libres que visten vestidos europeos y por lo general son

bilingues en castellano y una de las lenguas indias, son mestizos, o, según se los llama en Bolivia, cholos. Los campesinos son los indios sin que importe sus antecedentes, y ha servido con obreros agricultores, mineros y soldados de la sociedad. Se les ha negado el acceso al poder , a menos que abandonaran sus normas y lenguas tradicionales y se integraran a la sociedad nacional en calidad de cholos o blancos. Así los campesinos, más marginales, ambiciosos o capaces no han cesado de nutrir a las clases de los blancos y cholos. Incluso entre el campesinado monolingüe tradicional ha habido divisiones internas entre ricos y pobres y entre individuos de condición hereditaria alta y gente del común.

En su evolución política Bolivia también resulta típica de estas sociedades multiétnicas en la historia de la dominación de un grupo y de su lucha por mantener su poder monopolítico, con fines de explotación, durante los siglos XIX y XX los blancos primero intentaron organizarse en un grupo cohesionado capaz de negar el poder a los cholos e indios e intentó hacer funcionar los regímenes republicanos parlamentarios limitados, que constituían el privilegio exclusivo de la pequeña élite de los que hablaban en castellano; pero al igual que la mayoría de tales sistemas de América. El impacto del cambio económico moderno que tiene lugar en la década de los años 80 del siglo XIX, provocó la desintegración de estos mundos políticos cerrados y Bolivia pasó por épocas tormentosas al ampliar su sistema político como para que incluyan a la clase media y obreros. Pero este proceso de inclusión parcial y democratización creciente acabó derrumbándose. En este punto de su evolución política Bolivia se apartó nítidamente del esquema general americano, cuando un masivo movimiento revolucionario popular de obreros y clase media arrasó con todo el sistema político preexistente durante la revolución Nacional de 1952. Las reformas social, económica y política resultantes, si bien no destruyeron la sociedad dual ni eliminaron la culturización unilateral de los indios, redujo radicalmente el nivel de explotación. Por fin se dio a los indios poder

político juntamente con sus tierras, y la mayoría del sector explotador básico fue nacionalizado, Con su política, su economía y su sociedad tan drásticamente transformadas, la evolución de Bolivia durante las últimas décadas, si bien comparte la crisis de los gobiernos civiles latinoamericanos y el violento conflictŏ de las clases, no por ello ha cesado de encaminarse por derroteros aparte de los del resto del continente.

También en su desarrollo económico Bolivia ha demostrado ser una nación relativamente insólita. Dentro de la gama de economías del mundo. Bolivia está situada en un punto extremo, en calidad de un caso casi clásico de economía abierta. Concentrándose en la exportación de minerales desde el siglo XVI hasta nuestros días, la economía boliviana es extraordinariamente sensible a las condiciones del mercado mundial. Los cambios internacionales en la oferta y la demanda se sienten inmediatamente en la economía nacional, que depende totalmente de la exportación de minerales para obtener divisas extranjeras. Dado el pequeño tamaño y la densidad extremadamente baja de la población nacional (la más baja de América Latina), prácticamente está excluida la posibilidad que se desarrolle una estructura industrial nacional, a no ser en las más extremas condiciones de crisis social o de integración internacional. Así, Bolivia se aparta de la mayoría del Tercer mundo en su lealtad al sistema de la ventaja relativa, incluso a pesar de la nacionalización de la mayor parte de su economía minera. Esto ha significado durante siglos inversiones en la minería y dependencia de las importaciones para abastecer todas las necesidades, excluidas las básicas. Así, la evolución histórica posterior a la conquista sigue de cerca las líneas de expansión y contracción de la economía mundial

Pero a pesar de esta dependencia externa, Bolivia posee también en un grado extraordinario el control nacional de sus propios recursos, especialmente durante el período nacional. Los empresarios bolivianos, compuestos de blancos y cholos, han denominado la industria minera y logrado traspasar su

control de la nación, sin la intervención masiva de empresarios extranjeros y todas las penurias que ello comporta para el desarrollo nacional. Naturalmente, Bolivia no ha estado exenta de las conjuras de sus vecinos o de potencias más lejanas. Pero el espíritu creativo de sus pueblos le ha permitido sobrevivir y condicionar estas intervenciones externas en el contexto de sus propias necesidades y preocupaciones.

Con toda su evolución histórica fascinante y los rápidos cambios que sin duda han tenido lugar en el período contemporáneo, Bolivia sigue siendo una sociedad pobre y relativamente atrasada, una de las más duras, si tenemos en cuenta la escala de supervivencia humana en America. Todavía hoy sus 4.6 millones de habitantes padecen las más altas tasas de mortalidad, las más bajas de esperanza de vida, los ingresos más bajos per cápita del hemisferio occidental. Por el contrario, su perfil social y económico resulta típico de la mayoría de los países pobres africanos y asiáticos, compartiendo así, por desgracia, un bloque común de condiciones con la mayoría de los pueblos del mundo.

Siendo Bolivia única en tantos aspectos, forma parte íntima de la historia común de la Humanidad, desde su desarrollo como sociedad conquistada multiétnica hasta su aparición contemporánea como una nación que ha sufrido profundas transformaciones sociales y un cambio político masivo. Espero explorar en las páginas que siguen esta interacción de esquemas occidentales y tradiciones precolombinas, de organización clasista y sistemas sociales duales, de pobreza y explotación y vigorosa independencia y creatividad social.

Al emprender esta investigación de la historia boliviana, he tratado de extraer y destilar unos veinte años de lectura, investigación y observación participante sobre el tema. Aunque quien no ha nacido en una cultura perderá de vista muchos de sus matices, espero que mi distancia del tema compensará

las posibles deformaciones. Asimismo, como miembro de una sociedad industrial avanzada, he tratado de permanecer tan objetivo como fuera posible, sin dejar en suspenso mis propios juicios morales o intelectuales y al mismo tiempo, eludiendo todo resabio de condescendencia paternalista.

En mi larga educación como bolivianista he gozado del consejo, la instrucción y el apoyo constante de un grupo numeroso de estudiosos y amigos. Bernardo Blanco Gonzáles y Teresa Gisbert me introdujeron en el campo de estudio: Gunnar Mendoza y Alberto Crespo guiaron mis investigaciones. Silvia Rivera y Antonio Mitre no han dejado de desafiar mis presupuestos, poniéndome frente a los desarrollos más recientes, entre investigadores más jóvenes. También soy deudor de la guía, críticas y apoyo de Xavier Albo, Josep M. Barnadas, Philip Blair, Tristan Platt, Thierry Saignes, Karen Spalding, Enrique Tandeter y Nathan Wachtel. Como mentores intelectuales e íntimos amigos, Marcello Carmagnani y Nicolás Sánches - Albornoz han resultado de valor inestimable en este proyecto. También desearía agradecer a Stanley Engerman, Harriet Manelis Klein y Richard Wortman la lectura crítica del manuscrito.

Washington, mayo 1981.

CAPITULO I

GEOGRAFIA Y CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS

La evolución histórica de la sociedad boliviana no se puede comprender sin conocer el contexto ambiental en que se ha producido. Bajo muchos aspectos Bolivia constituye una paradoja dentro del contexto de la evolución americana. A pesar de su situación cercana al Ecuador, Bolivia presenta pocos aspectos comunes con el trópico. Desde el asentamiento humano más primitivo hasta nuestros, dias su población ha vivido fundamentalmente a una altura comprendida entre 2.500 y 3.900 mts. sobre el nivel del mar, encontrándose la mayoría de la población y sus culturas más avanzadas a 3.600 mts. de altura o más. Si bien se trata de un medio no absolutamente inhabitable, las tierras altas presentan unos suelos más pobres, unos climas mucho más fríos y secos deben hacer frente a unos condicionamientos ausentes en las tierras más bajas. Esta ecología exigió la domesticación sin par de plantas y animales al altiplano e incluso tuvo un efecto sorprendente sobre la fisiología humana: dado que las poblaciones altiplánicas se vieron forzadas a adaptarse a una cantidad limitada de oxígeno y a unas medidas totalmente diferentes de presión atmosférica.

Aunque unos dos tercios del territorio boliviano se componían de llanos tropicales y semitropicales, situados entre los desiertos costeños del pacífico en la región de Atacama (hasta el siglo pasado) por el oeste y los inmensos trechos de llanos orientales y llanuras que constituyen una parte de la cuencas fluviales del Amazonas y del Pilcomayo por el este, la humanidad se concentró en las tierras altas desde los tiempos más remotos hasta la actualidad. Como pueden apreciarse en el mapa las zonas ecológicas de Bolivia, las tierras altas y sus valles montañosos asociados constituían sólo una pequeña parte de todo el escenario boliviano.

Si bien las tierras bajas podían ofrecer unos suelos mejores y la posibilidad de una vida más desahogada, su inaccesibilidad hasta la época moderna los hacía inútiles para todos, a excepción del pequeño número de cazadores y recolectores seminómadas, aislados de todo contacto de importancia con los centros importantes de civilización avanzada. Por otro lado, el altiplano estaba bien articulado con las poblaciones bien densas de culturas avanzadas del Perú costeño y central. Así, a pesar de sus limitaciones, la amplia extensión de sus tierras arables, su potencial como zona ganadera de importancia y sus yacimientos de minerales accesibles hicieron de las tierras altas bolivianas el centro lógico de población humana.

Conocidas por los españoles con el nombre de altiplano, estas tierras altas bolivianas se componían de una enorme llanura, como una tabla, a una altura sumamente alta. Comenzando por el norte del lago Titicaca, el altiplano se extiende por unos 800 kms. hacia el sur, con una altura media de unos 3.900 mts. Formado por una apertura de los Andes meridionales en dos cadenas montañosas separadas hacia 9° de latitud sur, el altiplano oscila entre una anchura de pocos kms. en sus comienzos hasta unos 160 kms. en sus zonas centrales. Gran esfera elíptica, con el lago enorme en su cumbre, el altiplano es la llanura más alta y extensa de los Andes, que a su vez son la cadena montañosa más extensa del mundo. Dos tercios, de los casi 130.000 kms^2 que abarca el altiplano, se encuentran dentro de las actuales fronteras de Bolivia.

Cada una de las cordilleras que bordean el altiplano presentan rasgos completamente diferentes. La cadena del oeste se llama Cordillera Occidental, siendo una cadena extremadamente estrecha y nítida, con una altura media de unos 4.950 mts., llegando a su punto más alto a más de 6.300 mts. Posee pocos valles fluviales o llanuras habitables, formando una abrupta barrera que cierra el altiplano a todo acceso fácil al mar y a la costa del desierto de Atacama. Se constituyó como efecto de la actividad volcánica; está sometida a una considerable erosión y al mismo tiempo posee relativamente pocos minerales dignos de explotación. En las estribaciones orientales que dan al altiplano sus suelos son muy áridos y en algunos puntos se constituyen enormes superficies salitrosas (las que están situadas en Uyuni son de tamaño mayor que el propio lago Titicaca). Así que la Cordillera Occidental constituye una dura barrera que impide el acceso fácil a la costa. Pero en sus extremos septentrional y meridional, la cordillera permite el paso de unas vías más accesibles al mar, facilitando la integración de Bolivia con la costa, en

una dirección más al norte o al sur. La Cordillera Occidental misma ofrece pocos atractivos a la población humana, tanto dentro como cerca de sus límites, convirtiendo así la mitad occidental del altiplano en la zona de población menos densa de la región.

Es totalmente diferente la Cordillera Oriental, que se conoce con los varios nombres de Cordillera Real, Central u Oriental. Mucho más ancha y mucho más quebrada que la Cordillera Occidental; la Cordillera Real contiene numerosos llanos fértiles y valles fluviales en todas las alturas que van entre los 4.200 mts. hasta unos pocos centenares de metros sobre el nivel del mar. A causa de su aspecto quebrado también facilita el acceso a las estribaciones orientales (conocidas con el nombre de región de la montaña) y a los llanos bajos del Oriente.

Los valles y llanos de la Cordillera Real son muy complejos, pero se pueden agrupar aproximadamente en grandes divisiones según su altura y extensión. Los llanos de altura mayor están definidos como valles de subpuna y poseen un medio básicamente templado, una buena capa acuífera, aunque con un clima relativamente seco y una altura media sobre el nivel del mar de unos 2.460 mts. Por lo común son llanos largos abiertos, con una accesibilidad relativamente fácil desde el altiplano más alto; los más densamente poblados son los valles de Cochabamba, Chuquisaca, la parte occidental de Potosí y la región de Tarija.

Los valles fluviales abruptos de la parte central de la cordillera, llamados Yungas, son más húmedos y más tropicales. De una altura que oscila entre los 2.460 y los 960 mts., estos valles se caracterizan por una alta humedad, debida a los vientos amazónicos; así, poseen cultivos extensos de productos tropicales y semitropicales. Los más importantes de tales yungas son los que están situados cerca de la ciudad altiplánica de La Paz; se llaman Nor y Sur Yungas, Larecaja, Muñecas e Inquisivi. Históricamente estos valles fueron el centro de la producción de maíz y coca, dos productos fundamentales de gran demanda en el altiplano y que no se pueden cultivar allí. También fueron la zona de producción intensa de cítricos, frutas y café en el período posterior a la conquista, siendo así complementarios de los centros altiplánicos. Otra serie de valles semitropicales fueron los que están más aislados y que se encuentran en las provincias de Cochabamba y Santa Cruz. Aptos para producir los mismos productos que los valles de Yungas, en su mayor parte permanecieron despoblados e inaccesibles hasta el siglo XX.

La otra zona importante de producción y poblamiento fueron los valles más templados y abiertos de subpuna situados en la

Cordillera Real. El mejor ejemplo es el sistema del valle de Cochabamba, esos valles amplios que se convirtieron en los principales productores de maíz, en la época precolombina, y de trigo, después de la conquista castellana. También fueron los principales manufactureros de chicha, la bebida alcohólica hecha de maíz. Dada la importancia de todos estos productos, los valles de subpuna permanecieron en constante contacto con el núcleo de las poblaciones altiplánicas. Estos valles también se convertirían en los primeros centros de producción ganadera boliviana, de la misma forma que el altiplano se convirtió en el centro de la oveja española.

Antes de alcanzar los llanos de las tierras bajas amazónicas y chaqueñas, la Cordillera Real se diversifica en una serie de pequeñas colinas y montañas, que forman la zona de montaña. Una vez atravesadas, se entra al mar abierto de las llanuras. Estas se dividen en dos zonas distintas: Por el norte están los Llanos de Mojos, a veces llamados los Llanos húmedos septentrionales o los Llanos del Beni. Estas sabanas tropicales suelen inundarse seriamente durante la estación lluviosa de verano (diciembre – abril). En su centro se encuentra el río Mamoré, que forma parte del sistema de la cuenca amazónica. Al sur de los Llanos de Mojos están las tierras altas del Macizo Chiquitano, llamado así por la antigua provincia de Chiquitos. De una altura ligeramente superior, esta zona comparte muchos de los rasgos del medio de Mojos, pero también es centro de yacimientos minerales. Luego, hacia el sur están los llanos secos del Chaco. Extendiéndose desde Santa Cruz hacia el sur por las fronteras con el Brasil, Paraguay y Argentina y aún más allá, están las llanuras chaqueñas, secas y arenosas, que forman la cuenca del Pilcomayo; están cubiertas de vegetación dispersa y forman una amplia parte del territorio del país, aunque sólo abrigan a un quinto de su población.

A causa de su inaccesibilidad y acusadas variaciones estacionales, estas tierras bajas permanecieron sin explorar ni ser explotadas hasta tiempos recientes. Si bien durante el período colonial hubo cierta producción de coca y cría de ganado a lo largo del extremo oriental de la montaña de las tierras bajas en la áreas cercanas de las ciudades de Santa Cruz y La Paz, sólo con el desarrollo de la producción comercial de la goma silvestre, en la segunda mitad del siglo XIX, comenzó a ser importante la explotación y comercio sistemático. A partir de entonces la producción agrícola comercial de azúcar y algodón se han convertido en industrias importantes, y la cría ganadera ha llegado a concentrarse en la regiones del noreste (Mojos y Beni). Pero estas in-

novaciones no tuvieron lugar a escala perceptible hasta los decenios centrales del siglo XX y aún, incluso ahora, sólo vive allí un tercio de la población nacional.

Así pues, a lo largo de la historia de la población humana en Bolivia, el altiplano y sus valles orientales conectados con él fueron la zona fundamental de actividad humana, siendo el altiplano el núcleo del sistema. Pero a pesar de su posición central y de la densidad de su población, el altiplano no contenía en toda su área de forma uniforme la población humana. La mitad occidental del altiplano contenía pocos minerales, suelos en su mayoría estériles y un clima extraordinariamente seco; en cambio, la mitad oriental poseía suelos bastantes fértiles, enormes yacimientos mineros y un clima relativamente más húmedo y caliente, debido a la presencia del lago Titicaca. Con sus 9.765 Km^2, el Lago Titicaca ejerce una enorme influencia sobre el clima local, proporcionando humedad y relativo calor, de que no dispone el resto del altiplano. El resultado fue que la agricultura y pastoreo intensivos llegaron a ser ocupaciones esenciales de los pueblos que rodeaban el lago, proporcionando la base ecológica para la creación de un importante excedente alimenticio. Esto, a su vez, trajo el incentivo para la creación de sistemas culturales más complejos. el poblamiento en torno al lago se produjo en una serie de llanuras abiertas determinadas por las estribaciones y que se conocen por el nombre de cuencas, que se extienden por el sur hasta el gran valle fluvial que habría convertirse en la ciudad de La Paz, a unos 90 Kms. al sur del lago. Las cuencas de las orillas del lago y la de Jesús de Machaca son las más valiosas por lo que se refiere a suelos y humedad, conectándose por el río Desaguadero. Este, a su vez, comunica los dos lagos del Titicaca al norte y del Poopó al sur, atravesando también las dos cuencas meridionales de Oruro y Uyuni. Sin embargo, la cuenca de Oruro sólo se encuentra medianamente poblada, mientras que la de Uyuni — la zona más seca de toda Bolivia— es el centro de salares y en su mayor parte está deshabitada.

El altiplano fue el hogar de la domesticación de los productos básicos alimenticios de la civilización andina, desde el distante pasado precolombino hasta hoy. En la región del lago Titicaca se domesticó la papa, innovación que iba a tener impacto tan profundo sobre la población mundial, así como la quinua y una serie de tubérculos alimenticios. Helados y deshidratados, estos tubérculos se convirtieron en alimentos fundamentales de la dieta boliviana.

El altiplano fue también el hogar de la domesticación de los camélidos americanos: la llama, la alpaca y la vicuña. Animales de carga, productores de lana y fuentes de carne, fertilizantes y calor, estos camélidos jugarían un papel importante en la ecología y economía andinas. Desde los tiempos más remotos estos animales se encuentran en íntimo contacto con las poblaciones humanas del altiplano, aunque la domesticación y uso de los mismos, sólo alcanzó su máxima evolución en la época de los reinos aymaras históricos, sus rebaños fueron tan importantes que los aymaras anteriores a los incas previeron espacios para sus animales lo mismo que para su gente en todos sus poblamientos fortificados. Excelente zona de cría con pastos naturales y artificiales, el altiplano fue también el hogar de la oveja europea domesticada después de la conquista hispánica. Aunque por lo general es incompatible con otro ganado, la oveja se integró con éxito a los camélidos americanos y actualmente ambos siguen siendo partes integrales de la economía ganadera amerindia. Así, entre los grandes rebaños y la agricultura intensiva de tubérculos, las poblaciones indias del altiplano pudieron producir suficientes alimentos y lanas tanto para su propia supervivencia y reproducción, como el excedente para canjear por pescado, fruta, especias, maíz, coca, etc. que no producían en las tierras altas.

El altiplano también poseía riquezas en yacimientos mineros, que se han explotado desde tiempos precolombinos hasta nuestros días y que definen a esta región como una de las grandes zonas mineras del mundo. La distribución de estos minerales sigue de cerca a las áreas fundamentalmente agrícolas del altiplano. Así, de la misma forma que los mejores suelos están situados en la mitad oriental del altiplano, un 80% de los inmensos yacimientos minerales de Bolivia se encuentran en la misma zona. Concentrados en una región a la que se ha dado el nombre general de "faja estañífera", la mayoría de los minerales de Bolivia se encuentran en la Cordillera Real y las llanuras conectadas con ella y valles superiores, que corren desde el noreste del lago Titicaca, pasando por la cordillera Oriental hasta la frontera con Argentina, al sur de Bolivia. De norte a sur la faja minera se divide en varias zonas definidas aproximativamente. Desde el sur del Perú hasta alrededor del nivel del Mururata existe la del sector más antiguo, que contiene todos los yacimientos de oro, explotados en su mayoría mediante la minería de placeres desde la época precolombina, así como los del wólfram y otros metales. Desde el Mururata hacia el sur hasta Oruro, hay más yacimientos del wólfram y los primeros

importantes de estaño. Pero los distritos estañíferos importantes aparecen en la tercera zona, hacia el sur, que es la región que va de Oruro hasta la frontera meridional pasando por Potosí, conocida como la "provincia polimetálica", a causa de su combinación sin par del estaño con la plata; esta región es el cogollo de los yacimientos mineros de Bolivia, conteniendo no sólo estaño y plata en una abundancia extraordinaria, sino una multitud de metales raros, de los que muchos son exclusivos de Bolivia, fuera de tales minerales como plomo, bismuto, zinc y antimonio. Los únicos yacimientos importantes situados fuera de esta zonas son los de cobre en el altiplano occidental y grandes concentraciones de nitrato y cobre al otro lado de la cordillera occidental, en el desierto de Atacama. El valle de Cochabamba contiene una multitud de metales no ferrosos; en las estribaciones orientales hay grandes yacimientos de gas natural y petróleo, así como el único yacimiento de hierro de toda la región. Así, los únicos minerales e hidrocarburos de que carecía Bolivia eran el carbón, la pauxita, el cromo, el platino y las piedras preciosas. Esta extraordinaria herencia mineral, si bien explotada modestamente en la época precolombina, se convertiría en la base de la importancia de Bolivia en la economía mundial, una vez esta región fuera descubierta por Europa. Además, incluso durante sus comienzos más modestos anteriores al siglo XVI, la metalurgia de las poblaciones altiplánicas constituyó un importante sector de comercio entre ellas y las altas civilizaciones de la costa peruana; las poblaciones bolivianas primitivas mostraron su máxima originalidad en la metalurgia y en su creación de una ecología altiplánica única adaptada a las necesidades humanas.

Dada la extraordinaria importancia de los minerales, de los tubérculos y de los productos de los camélidos en la economía andina, las tierras altas siguieron siendo la zona fundamental de explotación para los pueblos de Bolivia anteriores a la conquista, estableciendo así el modelo que predominaría hasta nuestros días. Pero la utilidad del medio ambiente del altiplano, a pesar de la creatividad de sus poblaciones humanas, era limitada. Por esta razón las poblaciones altiplánicas han entrado constantemente en contacto con las poblaciones de los valles y de los llanos bajos para obtener productos alimenticios complementarios básicos que no podían producir. Esto, que se llama la "integración ecológica vertical" e implica intercambios de productos entre zonas ecológicas acusadamente diferentes, ha sido un rasgo común de la vida humana en esta región desde los comienzos. En efecto, desde los más remotos tiempos conocidos,

colonos del altiplano figuran en todos los valles orientales y también incluso tan lejos como la costa del Pacífico por el oeste. Un intenso comercio interregional se convirtió en el sello distintivo de todas las culturas avanzadas del altiplano. Comerciando tubérculos, carne y lanas de sus inmensos rebaños de llamas, alpacas y vicuñas, las poblaciones altiplánicas obtenían coca, maíz, pescado, frutas y legumbres de las zonas de tierras bajas, manteniendo así una base de subsistencia variada. A lo largo de siglos de expansión, cambio, y por fin, la conquista europea, los pueblos altiplánicos mantuvieron esta integración ecológica vertical y lucharon contra todos los intentos de aislar el altiplano de sus fuentes regionales de comercio. En realidad, hasta nuestros mismos días la integración ecológica vertical es un tema dominante de la organización social y económica en la Bolivia rural.

A este respecto, como en tantas otras cosas, la zona que acabaría formando la república de Bolivia tenía mucho en común con toda la región andina, de la que sólo constituía el sector meridional. Las tierras altas, central meridional del Perú actual, con contextos geográficos semejantes dieron lugar a esquemas de integración semejantes, particularmente en la región al norte del lago Titicaca. Además, toda la región andina compartiría una misma historia cultural.

La llegada del hombre primitivo en la región andina data por lo menos de 21.000 años, aunque los restos de su presencia en las tierras altas han tenido una peor conservación que a lo largo de la línea costera del Pacífico. Pero tanto el área cultural altiplánica como la costera compartieron en el período anterior a 2.500 a. C. un sistema de subsistencia basado en su mayor parte en la caza y recolección con poblaciones seminómadas. Mientras que en la zona costera la población humana se concentró en los recursos marítimos, los pueblos altiplánicos se dedicaron para su subsistencia a la caza de los animales salvajes. Desde fines del último período glacial ca. 8.000 a.C., Comenzó el lento desarrollo de la domesticación de las plantas y animales. La agricultura y la ganadería acabaron siendo las formas predominantes de subsistencia, sólo después de unos 6.000 años de experimentación.

Hacia 2.500 a.C. las tierras altas del Perú fueron el escenario de una transformación fundamental hacia una agricultura basada en aldeas. La sedenterización, el aumento en la densidad demográfica y una organización social más compleja en cuanto a gobiernos multicomunitarios, pasó a ser la norma. Durante el milenio siguiente tanto la costa como las tierras altas vivieron

este ritmo creciente de la vida agrícola aldeana. Nacieron centros urbanos más dignos de tal nombre y la formación de centros ceremoniales religiosos marcó los comienzos de sectores sociales no productores de alimentos que prestaban servicios a los agricultores a tiempo completo.

Si bien no está todavía esclarecido el proceso que impulsaba a los horticultores aldeanos a sacrificar una parte de su excedente en favor de los grupos no productores de alimentos, los indicios procedentes de los Andes sugieren que se trataba fundamentalmente de motivaciones técnicas y/o religiosas, que condujeron a la formación de gobiernos complejos intercomunitarios. La existencia de centros ceremoniales aislados de los poblados agrícolas y la creación de sistemas complejos de regadíos parecen reforzar esta interpretación.

La siguiente etapa importante en la evolución Andina, el uso difundido de la cerámica llegó tarde al área peruana: sólo ca. 1800 a.C. la cerámica, junto con el desarrollo de la tecnología metálica, fueron indicadores importantes de la creación de estados cada vez mayores y de poblaciones más densas. En las tierras altas, piezas de cobre de la cultura Wankarani, procedentes de la región cercana a Oruro, datan de 1200 a1000 a.C., mientras que se encuentra cerámica en todos los yacimientos costeros y altiplánicos que datan de este período.

Alrededor de 800 a.C. la evolución de la cultura Chavín trajo innovaciones por todo el área andina. Esta cultura, cuyo núcleo central se encontraba en las tierras altas centrales y valles costeros conectados, conoció la primera expansión masiva de la influencia de una cultura importante sobre una región muy extensa. Fue un período caracterizado por el uso generalizado de textiles y oro, así como por el desarrollo de técnicas avanzadas de cerámica y la urbanización. Se construyeron centros ceremoniales importantes a lo largo de la costa y del altiplano; casi todos los valles y llanuras ahora fueron permanentemente poblados. En todos estos desarrollos las tierras altas meridionales de Bolivia, aunque comparten muchos de los rasgos encontrados en otras partes, parecen concentrarse en la metalurgia tanto de metales puros como el oro y la plata como también de las aleaciones refinadas. Aunque la cultura Chavín no alcanzó tan al sur como el lago Titicaca, una cultura limítrofe y posterior, conocida con el nombre de Paracas, influenció las áreas costeña y altiplánica meridionales, aunque todavía no se conoce por completo su alcance.

Hacia el 100 a.C. el estilo Chavín desapareció de la zona andina, siendo sustituido por estilos locales pujantes, limitados a un

valle o a una zona de drenaje. En la costa surgieron las culturas Mochica y Nazca. En las tierras altas creció la cultura Wari, cerca del Cuzco, y apareció un centro importante en la pequeña aldea de Tiwanaku, al sur del lago Titicaca. Estas culturas vivieron la introducción y la domesticación final de todas las plantas y animales conocidos, así como el pleno desarrollo de la tecnología peruana. En las tierras altas bolivianas se descubrió el cobre y la aleación de estaño (bronce). Aunque desarrollado en su plenitud por los altiplánicos meridionales, el bronce no fue adoptado universalmente en la zona andina para un uso bélico o agrícola y, a diferencia de Eurasia, produjo un escaso impacto tecnológico.

El crecimiento de un centro de cultura viable importante en Tiwanaku constituyó una innovación de peso en la historia boliviana. Situado a unos 17 kms. al sur del lago Titicaca y a una altura de 3.936 mts. Tiwanaku fue una población agrícola avanzada con objetos de cerámica y metálicos a partir de ca. 100 d.C. Sin embargo, sólo después de 600 d.C. esta influencia comenzó a extenderse más allá de su perímetro local. Su importancia en la historia andina se debió tanto a su ubicación insólita como a su dominio dentro de toda la región desde aproximadamente el siglo VII hasta el siglo XIII de nuestra era. El más meridional de los grandes imperios andinos precolombinos, fue también uno de los pocos altiplánicos. Porque sus estilos artísticos y diseños característicos influenciaron la cerámica a lo largo de todas las tierras altas y en la mayoría de las tierras costeras, en un principio se pensó que el imperio tiwanacota surgió mediante la conquista. Así, algunos investigadores han supuesto que la influencia de Tiwanaku fue puramente religiosa y que reinos profanos tales como el de Wari (700 — 1100 d.C.), situado en la región de Ayacucho, fueron más importantes en la difusión de su influencia. El interrumpido descubrimiento de nuevos centros "religiosos" tiwanacotas con su plaza o plataforma rectangular característica, rodeada de bloques de arenisca y basalto (llamadas Qalasasayas), han sugerido una posible tercera interpretación: la de colonias religiosas y/o comerciales tiwanacotas distribuidas entre las regiones altiplánica, valluna y costera, que difundieron la influencia de la cultura tiwanacota por medio del contacto directo.

En las tierras altas este período va asociado a una intensificación de la agricultura y a una nueva expansión importante del cultivo en terrazas. Así se puede suponer que la civilización tiwanacota estuvo vinculada a un aumento importante en el ritmo de los cambios económicos del altiplano. Pero

lo que hizo que este nuevo imperio se extendiera tan rápidamente después del 1.000 d.C. y por qué se vino abajo tan repentinamente después del 1.200 d.C. todavía resulta desconocido a causa de la falta de pruebas arqueológicas sistemáticas.

Con el derrumbe de Tiwanaku y la coetánea ruina del imperio Wari, en el área andina surgieron durante tres siglos una multitud de estados e imperios regionales. Entre los más distinguidos de estos nuevos estados figura el de Chimú, en la costa peruana septentrional, con su gran centro urbano en Chan — Chan. En las tierras altas en torno al lago Titicaca los grupos más importantes fueron la federación Chanka, al norte del Cuzco, y los reinos aymaras a orillas del lago Titicaca y en el altiplano meridional.

La evolución de los reinos aymaras señala el comienzo del período histórico en la historia de boliviana. Los aymaras fueron los que dominaron las tierras altas centrales de Bolivia desde fines del siglo XII hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. Según las tradiciones orales recogidas por las crónicas españolas y mestizas y el testimonio arqueológico, resulta claro que los reinos aymaras representan una desviación importante del período tiwanacota precedente. La concentración de poblaciones a lo largo de la orilla lacustre en comunidades abiertas, la comunidad de los estilos y decoración cerámicos y la concentración en la agricultura de terrazas ahora queda reemplazada por poblaciones fortificadas *(pukara)* en las cumbres, un desarrollo mucho más intenso de una cultura ganadera camélida y una religión más localizada, según viene representada por las *chullpas* o edificios ceremoniales y funerarios locales en todas las comunidades.

Los pueblos de lengua aymara, más bien belicosos y agresivos, parecen haber llevado a su último extremo la tendencia peruana a la organización dual. Si bien se considera generalmente que hubo por lo menos siete "naciones importantes" de hablantes aymaras, parece como si cada nación estuviera dividida en dos reinos separados. Así los Lupaqa y los Qolla, para mencionar sólo las más numerosas de estas naciones, tendrían un gobierno *Urqusuyu y Umasuyu*, cada uno con su propio "rey" y controlando cada uno territorios diferentes. Las pruebas lingüísticas y geográficas sugieren que la mitad *Urqusuyu* de cada nación estaba concentrada fundamentalmente en los centros fortificados de las cumbres montañosas, situadas al oeste y sudoeste del lago Titicaca, con sus colonias agrupadas a lo largo de la costa pacífica, mientras que el *Umasuyu* de cada nación se situaba en las tierras altas orientales y poseía la mayoría de sus

colonias en los valles orientales anexos y en la región de montaña.

Los reinos aymaras se extendían desde inmediatamente al sur del Cuzco hacia las tierras altas septentrionales de lo que hoy es Bolivia. El núcleo de la región eran los poblados altiplánicos; la división dual de las "naciones" corría más o menos uniformemente a lo largo del eje noreste – sudeste que cruza el lago Titicaca. Los estados más poderosos eran los que estaban centrados en torno al lago, que se puede considerar el corazón de los pueblos aymaras. Entre ellos, los Qolla y los Lupaqa controlaban la mayor parte de la ribera del Titicaca y, juntamente con los Kana al norte, eran considerados los reinos aymaras más importantes.

Igual que la sociedad inkaica, que conoce mejor, los reinos aymaras prehispánicos estaban bien organizados en una compleja amalgama de estructuras corporativas y de clase. Habían los *Ayllu* o grupos de parentesco, cada uno de los cuales se dividía en una mitad superior *(Janansaya)* e *(Urinsaya)*, a las que pertenecían todos sus miembros. Pero la nobleza de cada reino particular estaba asociada con los *ayllu janansaya*, mientras que el vulgo formaba parte de la mitad *urinsaya*. Aunque la pertenencia resultaba vital para todos los indios y sus derechos comunes a la tierra dejan extender una estructura comunal de estilo corporativo, los aymaras también tenían jefes regionales o *kuraka*, quienes poseían tierras con independencia de los *ayllu* y se aprovechaban del trabajo libre de los miembros de los *ayllus* que gobernaban. A su vez, estos *kuraka* gozaban del servicio de miembros del *ayllu* a nivel local, conocidos con el nombre de *jilakata*, que parecen haber sido los jefes de cada lugar.

Así pues, entre los reyes, los *kuraka* y los jefes locales *(jilakata)*, hubo un grupo de individuos con acceso a la propiedad privada y con derechos hereditarios a las tierras y a la prestación de trabajo independiente de la estructura básica del *ayllu*. No se sabe si éstos dependían en último término del favor real o eran verdaderamente personales, con lo que habrían sugerido una incipiente estructura clasista. También hubo varios grupos de obreros y artesanos que acaso no pertenecieron a ningún *ayllu*, sino que dependieron directamente de la nobleza. En la época inkaica se los llamó *yanakuna*, pareciendo ser o siervos o esclavos.

Además de las estructuras socio políticas y económicas complejas que existieron en el núcleo de las regiones altiplánicas, tanto los *kuraka* como los *ayllu* también poseían colonos que trabajaban para ellos en diferentes zonas ecológicas. Conocidos

con el nombre de *mitmaqkuna*, estos colonos altiplánicos eran el lazo vital que unía la economía interregional y multiecológica, tan crucial para su sustentación de las poblaciones nucleares altiplánicas. Cada *ayllu* y cada nación con su nobleza tenía colonos que cultivaban los valles templados y semitropicales. A cambio de carne altiplánica, papa, quinua y productos de lana, estos colonos pagaban con cualquier cosa (desde el pescado y la sal del excedente de las aldeas costeras pacíficas hasta el maíz, la coca y las frutas de los yungas y valles de subpuna). En estas regiones lejanas muchos colonos convivían con las poblaciones locales no aymaras. Así, muchos de los valles orientales escarpados mantenían un conjunto de instituciones, comunidades y propiedades que iban desde las fincas privadas de los *kuraka* y comunidades de colonos de los *ayllu* altiplánicos hasta los *ayllu* autóctonos de los grupos locales. De esta forma en estos valles y tierras bajas coexistió el trabajo esclavo y libre; las aldeas dependientes y aun las naciones independientes.

Todo este sistema de integración vertical de sistemas microecológicos (que ha sido comparada a un archipiélago), basado en la producción de diferentes cultivos y ligado a una economía no de mercado por medio de refinados sistemas de parentesco, intercambio y obligaciones laborales, fue fundamental para mantener una sociedad poderosa y económicamente vital en el altiplano. Fueron tan extensos estos acuerdos núcleo — colonia, que los pueblos altiplánicos llegaron a mantener colonias para la minería del oro y la plata en Carabaya y otros valles orientales, convirtiendo a los Aymara en los primeros productores de oro de los Andes, así como los pastores de mayor pericia. La riqueza de estos reinos fue tal, que incluso a pesar de las conquistas inkaica y castellana, en los siglos XVI y XVII todavía se las consideraba provincias extraordinariamente ricas.

Pero los Aymara no estaban solos en el altiplano. Junto con estos pueblos coexistía un gran número de pueblos de habla uru y pukina, conocidos con el nombre general de Uru. Agrupados como los Aymara en *ayllus* duales, los Uru tenían sin embargo cerrado el acceso a las tierras y rebaños, a pesar de vivir entre los Aymara. Carecían de organizaciones políticas amplias y trabajaban ante todo como pescadores y agricultores para los Aymara. Resulta difícil decir si eran pueblos sometidos y conquistados, puestos bajo su control por los Aymara. El idioma pukina de los Uru representaba una de las tres principales lenguas altiplánicas del Perú anterior a la conquista, juntamente con el kechua y el aymara. Pero en el momento de la conquista

hispánica los Uru eran pueblos pobres, que vivían en pequeños grupos en todos los reinos altiplánicos , aunque todavía conservaban colonias dispersas a lo largo de la costa pacífica y en los llanos orientales. Además, el respeto cultural, ya que no político ni económico, que los Aymara demostraban por los Uru, parece presuponer que éstos fueron anteriores a los Aymara y eran los restos de una civilización precedente y más avanzada. Ha habido incluso quien ha argumentado que fueron los que construyeron Tiwanaku. Sea lo que fuere de ello, en el momento de la llegada de los españoles los Uru, aunque todavía muy numerosos, eran en su totalidad tan pobres que en su mayoría pudieron eludir el tributo colonial.

Guerreros, económicamente poderosos y abarcando la mayor parte del altiplano y de las regiones al este y oeste del mismo, los Aymara en la segunda mitad del siglo XIV fueron los pueblos dominantes dentro de Bolivia y en un sector importante del Perú meridional. Pero a causa del crecimiento de la población y de la riqueza a lo largo de los Andes, por esta época resultaba inevitable que se intentará una nueva organización imperial de la región. Mientras muchos estados poderosos florecían en la costa peruana, las culturas altiplánicas se habían convertido en centros vitales de estados expansionistas desde la época de Tiwanaku. Desde la última mitad del siglo XV los numerosos reinos aymaras se encontraron en directa competencia con el estado imperial de una nación de habla kechua que nacía en la región del Cuzco, al norte del Titicaca. En las primeras décadas del siglo XV los varios estados en competencia de las tierras altas centrales se habían dividido en agrupaciones principales, surgiendo los que hablaban Kechua, del Cuzco, como la más poderosa de las nuevas naciones. En las décadas centrales del siglo los Kechua expansionistas, que pasaron a ser llamados Inka por el nombre de sus gobernantes, se había extendido hasta las tierras altas septentrionales y penetraban lentamente por el sur hacia las regiones del lago Titicaca. En la década de los años sesenta pudieron extender su influencia a los reinos aymaras, incapaces de unirse contra la amenaza inkaica a causa de las quisquillosidades tradicionales internas. En último término esta debilidad, a pesar del relativo poder de los Aymara — que, sin duda, eran los oponentes posibles más fuertes contra una hegemonía inkaica en toda la región altiplánica — condujo a la pérdida gradual de independencia de los reinos Aymaras a fines de aquella década.

La llegada de los Inka en la segunda mitad del siglo XV cambió, sorprendentemente, poca cosa de la organización social,

económica y política de los reinos aymaras. Conservando a sus jefes tradicionales y contentándose con sacar excedentes mediante el pago de tributos, los Inka poca cosa hicieron para perturbar el edificio de la vida aymara. Esta región fue organizada como provincia propia, conocida con el nombre de *Qollasuyu* (uno de los cuatro *suyu* del imperio). No obstante, la integración no fue pacífica y en 1460 se produjo una importante rebelión contra los Inka en la zona de los reinos del lago. El resultado fue que los restantes reinos independientes fueron conquistados, instalándose *mitmaqkuna* de habla Kechua en colonias por todos sus territorios, especialmente en el valle de Cochabamba. En realidad, fue esta rebelión y las guerras conectadas con ella las que determinaron la composición lingüística de Bolivia desde el siglo XV hasta nuestros días.

Entre los Aymara, los *Lupaqa* y los *Qolla* conservaron la máxima autonomía, aunque ahora cada vez fueran integrados más estrechamente al Imperio Inkaico a medida que las carreteras, almacenes, fortalezas, nuevos centros urbanos y colonos militares fueron ocupando las tierras altas y valles. Igual que los otros tres distritos del Imperio Inkaico, el *Qollasuyu* había de pagar tributo, enviar sus objetos sagrados al Cuzco y permitir que su juventud noble fuera educada por los gobernantes de aquella ciudad. El que conservaran sus lenguas y las estructuras social, económica y aun política autónomas en tal medida, es un tributo a su riqueza y poder en la época preinkaica, así como a su sentido de identidad étnica poderosa. Ni siquiera la conquista castellana, con su apoyo deliberado a una kechuización en aumento, pudo borrar la cultura aymara.

Para cuando los Inka habían dominado por completo los reinos aymaras, a sus aliados y a los pequeños grupos de los valles de subpuna y yungas dentro de la zona cultural altiplánica, ya habían elaborado por completo los rasgos básicos de su organización imperial. Pero los principios de un sistema económico, social y político coherente se encontraban todavía en un lento proceso de implantación cuando, unos 80 años más tarde, los españoles pusieron fin al experimento de la organización inkaica. La prematura cancelación del estado Inka en el momento en que sólo comenzaba a madurar, ha hecho extremadamente difícil el análisis de la naturaleza precisa de la sociedad inkaica en la segunda mitad del siglo XV y primera del XVI.

Según el relato oficial de los españoles, el estado inkaico era una organización autoritaria y paternalista, basada en principios racionales de igualdad y justicia. Al prohibir la propiedad

privada, el estado distribuía bienes y servicios cobrando impuestos que podían subir hasta los dos tercios de la producción del campesinado andino. Los campesinos, a su vez, estaban organizados jerárquicamente en grupos decimales de 10, 100, etc.; por fin, el mismo imperio estaba administrado en cuatro distritos básicamente homogéneos, con una burocracia estatal que dependía por completo del Inka y estaba asociada por agrupaciones de clan a los gobernantes del estado. Una religión estatal que acentuaba las virtudes cívicas y era totalmente sincrética respecto a la totalidad de las religiones precedentes, fue el instrumento que garantizó el consenso de las masas populares.

Mientras que los gobernantes del imperio acaso se dieron cuenta de su sociedad de una forma totalmente coherente y racional, en realidad la rápida y fresca conquista de todo tipo de pueblos dio lugar a una sociedad relativamente heterogénea. Es verdad que la red caminera fue construida en su totalidad y el increíblemente extenso sistema de almacenes existió, de manera que en realidad los Inka podían almacenar el excedente de cualquier área para el uso en todo el imperio en épocas de escasez o de necesidad imprevista así como para mantener a los artesanos no agricultores y a un ejército profesional. Pero existieron importantes elementos de propiedad privada dentro de este amplio sistema no mercantil. Así, los nobles que se habían sometido pacíficamente a los Inka conservaban sus tierras y sus trabajadores, de la misma forma que los nobles inkaicos distinguidos podían conseguir tierras privadas y la explotación de *yanakuna* o siervos sin tierra. Además, aunque los estados preexistentes podían quedar organizados dentro de provincias más amplias en la estructura inkaica, conservaron muchas formas de gobierno pre Inkaico; por fin, a pesar del traslado de objetos religiosos al Cuzco y la quechuización forzosa de las élites locales, las masas tendieron a conservar las religiones locales intactas y a seguir hablando las lenguas locales. Por otra parte, como lo demuestra el caso de los Aymara, los acuerdos anteriores a la conquista entre colonos altiplánicos y pueblos dependientes quedaron vigentes en buena parte, pues los Inka no pusieron en duda seriamente la viabilidad de las estructuras sociales y políticas antiguas mientras no constituyeran una amenaza a su propio control.

Así, el Imperio inkaico mantuvo un mosaico de estructuras políticas, religiones y lenguas; incluso conservó un importante sector de privada dentro de sus fronteras. Aunque no estaba por completo de acuerdo con su propia idea, el Imperio inkaico fue, sin embargo, una fuerza poderosa y cohesiva y, probablemente,

el estado y la estructura económica más sofisticados que elaboraron los pueblos americanos con anterioridad al siglo XVI. También llevó a cabo algunos proyectos de ingeniería agrícola más imponentes de América. Desde el Ecuador hasta la frontera meridional boliviana se construyó una red carretera que facilitaba el acceso de todos los sectores del Imperio al Cuzco para el hombre y los animales. Miles de hectáreas de nuevas tierras agrícolas se crearon mediante complejas obras de andenes en las faldas abruptas andinas; inmensos complejos de almacenes fueron construidos para albergar enormes cantidades de alimentos duraderos para toda la población. Así, el Imperio funcionó como gran distribuidor de bienes y servicios por una vía no mercantil y probablemente creó un bienestar y una riqueza entre toda la población sin paralelo desde aquellos tiempos hasta nuestros días. Por fin, su organización económica y social extremadamente coherente proporcionó un grado extraordinario de justicia social y económica tal como reconocieron incluso los españoles, pues los Inka hicieron grandes esfuerzos para aliviar las condiciones pesadas de trabajo mediante reclutamiento de mano de obra cuidadosamente seleccionada de corta duración y con plenas garantías por parte del estado en cuanto se refiere a proporcionar el sostén y retribución a las familias de los trabajadores. Así, el campesinado debía acudir por *mit'a* o turno de trabajo forzado a las minas o proyectos de ingeniería, al ejército o al servicio personal durante períodos de tiempo perfectamente delimitados, plena y efectivamente retribuidos en su trabajo.

La organización inkaica fue tan eficaz que demostró ser un poder militar al que nadie podía oponerse; podía movilizar grandes cantidades de tropa, alimentarla y armarla por largos períodos de tiempo, con lo que se salvaba de los ciclos agrícolas. Los Inka pudieron agotar a sus oponentes por su número, armamento y persistencia. En el lapso de menos de un siglo que existió el Imperio arrasó con todo adversario, apoderándose fácilmente de las sociedades tanto costeñas como altiplánicas; en realidad, conquistando todos los estados en que había un campesinado sedentario. Al final pocos estados pudieron resistir la *pax Inkaica* y muchas sociedades se sometieron voluntariamente al nuevo Imperio poderoso. En el momento de la llegada de los conquistadores europeos era uno de los máximos experimentos de organización humana que ha conocido el mundo.

Pero la expansión inkaica tuvo sus límites y éstos quedaron definidos más por la organización social y económica que por la actividad militar. A pesar de todo su uso de colonos y ejérci-

tos, los Inka demostraron ser incapaces de someter culturas que no se basaran fundamentalmente en la agricultura campesina. Esto se puso especialmente en evidencia en la región del *Qollasuyu* o distrito que abarcaba la actual Bolivia. Aquí los Inka habían tenido éxito en la conquista de los Aymara, de sus Uru dependientes y de las poblaciones menores que vivían asociadas a los altiplánicos, es decir, las culturas de los valles de subpuna y yungas. Aunque evidentemente hablaban lenguas diferentes de la pukina, aymara y kechua, estas poblaciones fueron fácilmente sometidas por el estado inkaico, tanto durante el período inkaico como en el posterior a la conquista. Los programas de kechuización destruyeron sus lenguas, pasándolos al kechua. Está claro que el dominio del kechua sobre el aymara como legua principal en toda la región boliviana tiene mucho que ver con la conversión de estos grupos de lenguas locales al kechua, así como con la instalación de colonos kechuas en estos territorios antiguamente dominados por los Aymara.

Fuera de este sistema altiplánico, había una importante frontera humana en la región de la montaña y llanos de las tierras bajas. Aquí existía una compleja combinación de cazadores y recolectores, agricultores aldeanos e incluso estados multialdeanos, lo que impedía a los pueblos altiplánicos la expansión oriental. Aunque los Inka trataron de conquistar esta región, no lo consiguieron y los pueblos de estas zonas cerraban el paso a la penetración y dominio cultural del altiplano. Llamados por los españoles genéricamente *Chiriguano*, en la época posterior a la conquista, estos pueblos de las tierras bajas estaban compuestos de gran número de diferentes grupos que iban desde los cazadores y recolectores del tipo de los *Sirionó*, en un nivel primario de desarrollo, hasta los refinados aldeanos de las tierras inundadas de los llanos de Mojos. Estos últimos, probablemente el grupo más avanzado de la región, desaparecía en la época de la conquista castellana; no obstante, de sus restos se hace evidente que fueron unos grandes constructores de terraplenes y obras agrícolas, mediante las cuales conseguían cultivar durante todo el año en las tierras bajas inundadizas del noreste de Bolivia. Construyendo anchos terraplenes que se extendían en algunos casos por centenares de kms., los indios que vivían en la región mojeña resolvieron exitosamente las crisis de la inundación anual, conservando y manteniendo poblaciones notablemente densas y estructuras gubernamentales complejas sobre este terreno alto artificialmente construido.

Esta frontera fue tan fuerte que cerró el paso tanto a la cuenca amazónica como a la del Pilcomayo en dirección noreste y su-

deste, e incluso al llegar los españoles estos fueron definitivamente incapaces de conquistar y poblar esta región. En realidad, algunas de las tribus de las tierras bajas siguieron sin entrar en contacto hasta el siglo XX; de forma general, las tribus de estas tierras han conservado hasta fechas recientes un porcentaje sorprendentemente alto de sus lenguas y culturas.

Hacia el sudoeste se oponía al acceso del Inka a los llanos costeños chilenos otra frontera de indios que resistía con éxito. Estos, llamados Araucano, aunque bastante avanzados materialmente, eran gobernados por tenues confederaciones intercomunitarias. Con todo demostraron ser un grupo militar extremadamente eficaz, que a pesar de los repetidos intentos de los Inka, cerraron el paso a la penetración altiplánica a las costas del sudoeste. Sin embargo parece que la frontera fue ligeramente más porosa que la de las tierras bajas orientales, pues fue más frecuente el comercio y el contacto de ambas regiones.

Sólo en dirección recta hacia el sur, en la estribaciones andinas donde las dos cordilleras vuelven a unirse, en el actual noroeste argentino, hubo una fuerte conquista y penetración altiplánicas. Los colonos militares kechuas entraron exitosamente en este territorio y sin duda habrían poblado totalmente la región de llanuras del norte argentino si no hubiera sobrevenido la prematura destrucción del estado inkaico con la conquista hispánica.

Así pues, si bien no estaba totalmente bloqueada la expansión posible, el Imperio inkaico había tocado ya sus límites naturales en el momento de la conquista castellana; estos límites, (resulta bastante interesante notarlo) habían de resultar los límites de la expansión española durante la mayor parte del período colonial. Pues las organizaciones estatales avanzadas y complejas de la zona andina dependieron en último término de la existencia de un campesinado que pudiera tributar y fuera estable. Donde existió y vivió este campesinado los Inka y sus sucesores pudieron edificar poderosas organizaciones estatales, sobre la base del excedente de la clase campesina; con recursos abundantes en terrenos, el factor mano de obra fue siempre costoso en la sociedad americana, siendo la estabilidad y productividad de ese factor esencial para la existencia de clases no productoras de alimentos.

Así, los campesinos estaban en la base de la cultura andina, agrupados en organizaciones ficticias de parentesco débilmente

anudadas y que se conocen con el nombre genérico de *ayllu*, que organizaban el trabajo y distribuían la tierra entre sus miembros. Si bien habían algunas clases fuera de la estructura del *ayllu*, la mayoría abrumadora de los comunarios, nobles y gobernantes formaban parte de un *ayllu*. A diferencia de las comunidades campesinas indias contemporáneas o de las comunidades libres organizadas por los españoles y llamada *ayllu* después de la conquista, el *ayllu* precolombino fue esencialmente un grupo parental que no se definía por una comunidad residencial única. Los *ayllu* tenían miembros en todas las diferentes zonas ecológicas y aunque conservaban una zona residencial central, no estaban confinados a un espacio único. Aunque los derechos sobre la tierra residían en último término en el *ayllu*, que se había de conceder a sus miembros sobre una base individual, los miembros podían tener tierra en una disposición regional espacialmente amplia y dispersa, desde la costa hasta el altiplano y de éste a los valles orientales. Este esquema geográfico relativamente estructurado fue la respuesta inevitable a las zonas ecológicas profundamente diferentes que habitaban los pueblos andinos. este es un agudo contraste con el esquema de aldeas enclaustradas de los campesinos mediterráneos y que había de caracterizar a la cultura hispánica. También era totalmente diferente del estilo de comunidad corporativa cerrada que describen los antropólogos y que surgiría como forma dominante de organización campesina en el período posterior a la conquista.

En las primeras décadas del siglo XVI había surgido dentro de las tierras altas meridionales andinas una sociedad sumamente desarrollada y una organización estatal firmemente anclada en un sistema agrícola aldeano denso y complejo. Alrededor de unos 3 millones de indios estaban bajo el control del Inka (frente a unos 7 millones de españoles en aquella época), de los que cerca de una tercera parte se encontraban en el distrito sureño del Qollasuyu. En él una multiplicidad de sociedades que hablaban diferentes lenguas se agrupaba en un inmenso sistema de intercambio no mercantil, que implicaba una permanente transferencia de productos de sistemas ecológicos profundamente diferentes. Fue ésta también una de las regiones mineras más ricas del mundo y una de las sociedades campesinas más densamente pobladas en aquella época. Supuesto este potencial, resultaba inevitable que la región meridional andina se convirtiera en uno de los centros más importantes de colonización castellana en América. A su vez, las tierras altas bolivianas, una

vez integradas al imperio ultramarino en expansión de la Europa occidental, llegarían a ser una fuente de nuevos productos alimenticios y mineros, que producirían un profundo impacto en toda la economía mundial.

CAPITULO II

LA CREACION DE UNA SOCIEDAD COLONIAL

La península ibérica de los siglos XV y XVI fue el centro de la expansión europea en el escenario mundial. Los portugueses iniciarían el dominio mundial europeo mediante la conquista de las rutas comerciales oceánicas de Asia y Africa. Pero fue concretamente la corona castellana, dentro de la combinación de monarquías peninsulares, la que emprendió la conquista y poblamiento de inmensos territorios en el hemisferio occidental. América, a diferencia de Africa y Asia, resultaba desconocida y ajena al sistema mundial anterior al siglo XV. En virtud de la conquista americana, Castilla proporcionaría un campo de acción totalmente nuevo al poblamiento y desarrollo exclusivos europeos, los que, a su vez, darían a Europa una clara ventaja en su carrera por la influencia mundial. Así la conquista castellana de las tierras de América, juntamente con la conquista portuguesa de las rutas marítimas internacionales, acabaría inclinando la balanza del poder económico mundial a favor de Europa, contribuyendo a preparar el camino a su definitivo dominio industrial. La conquista de América a fines del siglo XV y comienzos del XVI fue, pues, crucial en el cambio de la función relativa de Europa en el mundo y en el comienzo de una nueva era histórica mundial.

Si bien los europeos en un comienzo acaso consideraron a América como una tierra vacía, llena de poblaciones simples que había que explotar para beneficio de Europa, en realidad América también cambiaría lo que los actuales científicos so-

ciales llaman el "mapa cognitivo" de los propios europeos; América no encajaba en la visión mundial de la Europa cristiana primitiva, pues estaba totalmente al margen de la tradición cultural mediterránea y de sus concepciones subculturales cristianas. La Biblia no mencionaba América y sus indios nunca habían oído ni de Cristo ni de las religiones más antiguas de la masa terráquea eurasiática. En un comienzo los europeos ignoraron estos datos fácticos totalmente nuevos en la concepción de la realidad histórica, pero a lo largo de los tres siglos siguientes el papel de América comenzaría a contribuir a erosionar algunas de las creencias y verdades tradicionales de las normas culturales europeas. Así, el impacto de América comenzó a minar lentamente, juntamente con el carácter cambiante de la estructura económica, unos sistemas europeos de creencias mantenidos largo tiempo.

Finalmente, la posesión de imperios americanos definió el poder relativo dentro de la misma Europa entre los varios estados contendientes. Los territorios del Nuevo Mundo proporcionaron a un estado europeo un importante mercado nuevo, así como una poderosa marina, para hacerse sentir en las luchas intraeuropeas. El hecho de que Castilla fuera la primera que participara en la carrera hacia un imperio americano y poseyera la mayor parte de sus tierras, recursos y población, dio a la monarquía castellana un poder sobre sus contrincantes europeos que permaneció intacto hasta avanzado el siglo XVII. Durante cerca de un siglo y medio la monarquía hispánica sería el poder dominante en Europa, precisamente en el momento en que la misma Europa afianzaba su hegemonía económica sobre el resto del mundo, siendo América la que constituía esta diferencia.

La monarquía hispánica, que descargaba los recursos de Europa sobre América, era por entonces la más moderna y una de las de más reciente formación del continente europeo. Por consiguiente, podía combinar una amplia gama de iniciativas privadas en las conquistas y poblamiento de América con una integración muy rápida de estos territorios nuevamente ganados en un imperio coherente y controlado centralmente, administrado desde Europa. Así como sus antecesores inkaicos fueron conocidos por su capacidad administrativa y organizativa, el genio hispánico residiría últimamente en su capacidad de integrar el poderoso impulso europeo de la iniciativa privada en el contexto de estructuras gubernamentales formales. Fue también el primer pueblo que en la historia mundial creó y sostuvo un imperio intercontinental durante cuatro siglos.

Así pues, la conquista de América significó tanto su integración en el mercado mundial como su organización dentro de la mayor estructura imperial del mundo. Hasta el siglo XVIII ningún poder europeo podrá rivalizar con el imperio español. Y este imperio se extendía desde la tierra de Fuego hasta Puget Sound y desde Sicilia por el este hasta las islas filipinas por el oeste. Pero a pesar de la importancia vital del imperio colonial americano para la corona de Castilla en cuanto le proporcionaba los recursos para dominar la política europea, no era el único de la monarquía hispánica. Aún sin América, Castilla pasó a ser durante el siglo XVI una de las naciones más acaudaladas de Europa, con un comercio internacional lanero pujante y un conjunto complejo de exportaciones de los productos clásicos mediterráneos. También contaba con un importante sector minero y una población comercialmente activa muy densa. Así pues, podía poner en movimiento enormes recursos internos que, con los que venían de América, se usaron para crear el ejército y la marina más poderosa de Europa. Con esta fuerza invencible la monarquía hispánica no sólo combatió el poder turco hasta neutralizarlo en el Mediterráneo oriental, sino que conquistó sectores importantes de la Italia meridional y Sicilia y mantuvo una zona colonial de importancia en los Países Bajos. Intervino activamente en la política de los estados alemanes, en las regiones francesas e incluso se entrometió en las luchas dinásticas de Inglaterra.

De esta forma, pues, tanto dentro de la península como en Europa misma, habían bastantes posibilidades de progreso personal de los miembros en ascenso de la sociedad hispánica. Castilla misma tuvo una expansión tremenda. su burocracia iba convirtiéndose en la mayor de Europa y su ejército y sectores comerciales avanzaban al mismo ritmo. Por tanto, atraían a los más osados y más marginados entre los grupos no campesinos peninsulares. Fueron a América los jornaleros pobres y no los maestros artesanos, los hijos bastardos de la nobleza empobrecida y no los primogénitos y ni siquiera los segundones de los latifundistas muy acomodados.

Los sobrinos menores de las familias destacadas de mercaderes en Sevilla salieron hacia América, así como los abogados y notarios más pobres que carecían de los recursos para comprar una posición después de graduarse. En resumen, fueron a América los grupos ínfimos dentro de las clases que podían tener una movilidad ascendente. En cuanto a la nobleza mediana y superior, les iba suficientemente bien en la península y Europa como para necesitar lanzarse al riesgo de larga travesía

atlántica, mientras que el inmenso campesinado era demasiado pobre para emprender el viaje.

Este telón de fondo ayuda a explicar el carácter sorprendente de la estructura social que crearían los españoles en su imperio americano. En primer lugar, hubo la ausencia total de la clase campesina hispánica, que fue reemplazada en el Nuevo Mundo por los campesinos indios americanos. Además, al no haber instituciones o clases preexistentes que presentaran competencia y con unos recursos humanos escasos, todos los que iban a América tuvieron un ascenso extremadamente rápido en su rango, comparado con las anteriores posiciones dentro de la sociedad metropolitana. Para muchos de estos individuos su éxito en América, en realidad, les imposibilitaría volver a su tierra de origen. Aunque cuajó en el mito clásico (tanto en España como en el resto de Europa), según el cual se podía ir a forjar la fortuna propia en América y volver como ricachón glorioso —según lo llamaban los ingleses—, en realidad los americanos afortunados no podían encontrar lugar en las estructuras españolas más rígidas. Así, mientras los escasos conquistadores como Pizarro y Cortés conseguirían una riqueza parecida a la de los más grandes acaudalados de España, comprobaron que la nobleza española rechazaba incorporarlos a sus filas y que su riqueza no les podía comprar un lugar en España equivalente a su rango en América. Muchos de estos conquistadores famosos, después de una breve visita a Europa, volvieron a su hogar americano. Esto mismo sucedió en todos los niveles de la sociedad, con los jornaleros que buscaban acabar su aprendizaje en Europa y que rápidamente se convirtieron en artesanos poderosos y ricos en América, pero que no pudieron trasladar su nuevo rango a Europa. Sólo quienes habían conseguido sus títulos o contaban con relaciones anudadas con anterioridad a su migración, podían emplear la riqueza que habían obtenido en el Nuevo Mundo para conquistarse una posición en la península. El abogado o notario, anteriormente pobres, ahora podían comprar una plaza codiciada en España y así lo hicieron rápidamente. Y además el sobrino pobre rápidamente se convirtió en el acaudalado mercader americano, dejando a su vez a sus parientes pobres tras él al volver a Europa. Pero éstas eran unas pocas excepciones de la regla general, según la cual resultaba difícil volver a la casa para quienes habían emigrado a América.

Estos factores contribuyeron, por tanto, a establecer una sociedad hispánica o criolla en América prácticamente desde los primeros días. Fue también una sociedad que demostró de muchas formas una movilidad muy superior a la de sociedad de ori-

gen. Mientras que la primera generación de conquistadores trataría de mantener su carácter transitorio, incluso cuando una riqueza y rango cambiaba, sus hijos ya no tuvieron tales condicionamientos. En la segunda generación los títulos honoríficos de "don", "Doña" ya no seguían restringidos cuidadosamente a la élite, sino que se convertían en generales para todos los blancos. Por otra parte, la rígida estructura gremial peninsular no se pudo transferir a América, con los que los oficios se convirtieron en relativamente permeables a todas las personas que deseaban participar en ellos, en las restricciones anteriores.

Esta apertura no significa que la América hispánica criolla fuera una sociedad sin clases; en realidad los criollos maniobraron con mucha rapidez para trazar las líneas de clase, absorbiendo rápidamente los mejores recursos dentro de una distribución desigual. Así se formó rápidamente una estructura clasista, que incluso existió en el mismo momento de la conquista: el botín de guerra se dividiría estrictamente según la inversión económica y el rango relativo de los miembros de la hueste conquistadora. La nueva elite también recurrió a mecanismos no mercantiles tales como concesiones de tierra libre y alianzas de parentesco y matrimonio para consolidar las adquisiciones de tierra, recursos y capitales, para cerrar la entrada a sus filas en cuanto fuera posible. Pero la celosa corona castellana nunca les permitió crear una estructura de clases tan rígida como la que existía en la Metrópoli. Hasta el final del período colonial raramente se practicó el mayorazgo y la progenitura en América; la clase superior tuvo que mantenerse en el contexto de amplia apertura de herencia divisible, en la que todos los hijos de ambos sexos participaban sobre una base igualitaria. Que lograron conservar las líneas fronterizas de clase, resulta evidente al examinar la estructura clasista en cualquier lugar de América; sin embargo, estas sociedades contaban con una movilidad muy superior a la que se percibía en la sociedad metropolitana hispánica.

Así como la élite hispanoamericana fue más móvil que su contraparte metropolitana, también era menos poderosa políticamente. Se le negó el control de la estructura de gobierno local, tenía que compartir su poder con una burocracia real ajena a las influencias locales en una medida desconocida en Europa. Que la élite influyó en esa burocracia era evidente, pero incluso con toda su riqueza no pudo controlar o dominar el gobierno de la forma como lo hacía en Europa. No obstante, en una zona superaron a sus pares del Viejo Mundo: en relación a los indios todos los españoles ejercieron más poder y control que los

grupos equivalentes en relación con los campesinos de la península. La excusa de la conquista y las diferencias culturales y raciales dieron a los españoles que llegaban – sea cual fuere su clase y antecedentes– una posición dominante desconocida en Europa.

La creación de la sociedad indiana estuvo influenciada tanto por la naturaleza del mismo proceso de conquista como por los antecedentes sociales y la estructura política metropolitana. Pues el imperio americano castellano, en especial tal como fue establecido en el mundo andino, fue fundamental y primariamente una creación de la conquista: una minoría compuesta de blancos y de sus esclavos negros dominaría a una masa de indios americanos, en un comienzo separados y totalmente diferentes. Por más diferenciados que fueran internamente, los indios fueron considerados como una masa aislada y reprimida de un rango inferior al del conquistador más pobre y analfabeto.

Al principio los españoles aparecieron a las poblaciones andinas simplemente como un grupo conquistador extranjero más poderoso que no se diferenciaba en nada importante de las fuerzas conquistadoras incaicas. Por esto y por el carácter relativamente reciente del sometimiento por parte del Inka, así como por la existencia de antagonismos entre grupos no kechuas todavía no asimilados dentro de sus fronteras, la conquista castellana fue en un comienzo un proceso fácil. Como los conquistadores parecieron prometer la continuación de las estructuras internas de clase, el reconocimiento de las noblezas tradicionales indias y de todos los otros tipos de privilegio especial concedidos al grupo que prestara su apoyo durante una guerra de conquista, muchos indios se unieron a los conquistadores en calidad de aliados. El futuro esquema de discriminación y opresión racial todavía no era perceptible en la primera fase de la conquista castellana, es decir, en la década de los años treinta del siglo XVI.

Así, la conquista castellana del Perú avanzó de una forma muy parecida a la de México. Una tecnología inmensamente superior permitió que unos centenares de españoles dominaran ejércitos de millares de indios. Al propio tiempo, los españoles utilizaron eficazmente tanto el carácter reciente de la conquista inkaica a lo largo de sus fronteras, como los resultados de la guerra civil interna entre los hermanos Inka Wascar y Atawallpa para favorecer sus propios objetivos. Al comienzo convencieron a la élite directora inkaica de que eran simplemente una fuerza mercenaria que saldría en cuanto saciaran sus apetitos de oro y plata. A los estados y tribus anteriormente independientes con-

quistados por los Inka se proclamaron asimismo liberadores, mientras que al bando perdedor de Wascar de la famosa guerra civil inkaica le prometieron hacer justicia y recompensar de todas sus pérdidas.

Utilizando con astucia todos estos títulos, los españoles aislaron eficazmente al recientemente victorioso Atawallpa y a sus ejércitos profesionales quiteños del resto de la población meridional del Ecuador, consiguiendo la información tan necesaria, abastecimiento y aliados militares auxiliares indígenas. Una vez dispersadas las tropas quiteñas y asesinado Atawallpa, crearon sus propios Inka títeres entre la facción de Wascar, previamente derrotada. Cuando, a su vez, estos jefes se rebelaron, obtuvieron el apoyo de sus propios sirvientes indios *yanakuna* y de las fuerzas antiinkaicas, que les ayudaron a someter las últimas grandes rebeliones inkaicas. Esta ayuda india, junto con su superioridad militar en toda línea, significaron que solamente en casos raros y especiales de toda esta lucha feroz y sangrienta murieron números considerables de españoles. Estos sufrieron más bajas por las batallas internas entre ellos que con los indios. Por fin, sea cual fuere la esperanza que las victorias indias engendraran, la embestida de nuevas tropas e inmigrantes españoles que llegaban diariamente, significaron con claridad que la pérdida de unos pocos centenares de soldados de ninguna forma mellaba la capacidad hispánica para resistir durante un siglo una guerra de conquista y colonización.

Sólo el progresivo endurecimiento del dominio español, la extracción cada vez más odiosa de recursos del excedente de la élite y del campesinado indios, acabaron impulsando a las diferentes fuerzas indias hacia un frente siquiera moderadamente antiblanco. Esta odiosidad resultaba inevitable supuesto el constante flujo de colonos hambrientos que se proponían arrancar cuanto pudieran de la población, que ya había sufrido un despojo total. Pero para entonces los españoles eran ya demasiado poderosos y los rebeldes indios demasiado débiles para expulsar hacia el mar a los conquistadores. Así pues, las grandes rebeliones dirigidas por el Inka, de la segunda mitad de la década de los años treinta en adelante, estaban condenadas a una total derrota.

En el contexto de este tejido intrincado de alianzas y rebeliones los grupos altiplánicos al sur del lago Titicaca entraron, por fin, en la historia de la conquista castellana del Perú. La gran rebelión del presunto títere Manku Inka de abril de 1537 planteó la necesidad a varios grupos aymaras de optar al fin por un bando. Si bien en un comienzo habían apoyado a los españoles a

causa de su propia alianza anterior con la facción perdedora de Wascar en las guerras civiles anteriores a la conquista, la deserción del jefe de aquella facción de la causa hispánica los forzó a escoger sus lealtades. Durante el gran asedio al Cuzco por parte de los Inka rebeldes, levas de milicianos fueron enviados desde muchas de las zonas altiplánicas, destacándose los Lupaqa por su decidido apoyo a la rebelión. Sin embargo, los Qolla permanecieron indefectiblemente hispanófilos, hecho que acabó provocando un ataque combinado Inka – Lupaqa contra los Qolla.

A ir en defensa de los Qolla en aprietos en 1538, Francisco Pizarro encabezó una considerable fuerza expedicionaria hasta Chucuito y el río Desaguadero para destruir los ejércitos rebeldes inkaicos y los de Lupaqa. El resultado final fue el ya acostumbrado de la victoria total de los españoles, a causa de su absoluta superioridad en armamento, armas de acero y caballos. Atrapados en la llanura abierta, los rebeldes no pudieron ofrecer resistencia a las cargas masivas de la caballería, siendo destruidos. En este momento Pizarro decidió dejar a sus hermanos en aquella región para que emprendieran la colonización en gran escala de las tierras altas y valles bolivianos, mientras él regresaba al Cuzco. Así pues, unos seis años después del comienzo de la conquista, la región andina que va del Lago Titicaca hacia el sur fue por fin pacificada por los españoles.

La llegada de los españoles en 1532 para la definitiva conquista del Perú en un principio había pasado desapercibida en el altiplano y valles al sur del lago Titicaca; región rica en campesinos, rebaños, lanas y los productos alimenticios tradicionales indios, no albergaba ni ejército ni el oro ni la plata tan codiciados por los españoles. Los centro urbanos de los reinos aymara y las colonias kechuas eran pequeños y relativamente menos desarrollados que los cuzqueños. Por otra parte, la región había permanecido profundamente leal al bando de Wascar en la guerra civil inkaica, por lo que al comienzo saludó con alborozo la intervención hispánica, considerándola una victoria sobre sus enemigos. A causa de esta lealtad, ninguno de los ejércitos quiteños que tanto preocuparon a los españoles en los primeros años, permaneció en la zona, por lo que no atrajo la atención militar española.

Sólo con la conquista en gran escala del Cuzco por obra de Pizarro y sus seguidores en 1533 y la subsiguiente división real del Perú, se enviaron expediciones formales hacia el altiplano. La primera de ellas estaba comandada por Diego de Almagro (el competidor de Pizarro en pos del título sobre los territorios meridionales), atravesando la región en 1535 con un numeroso

contingente de tropas inkaicas leales a Wascar bajo la dirección del hermano de Manku Inka, Paullu Inka, quien mantenía estrechos vínculos con los reinos aymaras. La expedición atravesó rápida y pacíficamente el extremo occidental del altiplano por el río Desaguadero, dirigiéndose luego por el lago Poopó, cruzando después los Andes y llegando a Chile.

Pero Almagro y sus seguidores concentraron su atención ante todo en Chile y, luego, en una larga y amarga guerra civil con la familia Pizarro por el control del Cuzco. Así pues, quedó en manos de Francisco Pizarro (quien ahorcó a Almagro a comienzos de 1538) emprender el poblamiento definitivo de la región al sur del lago Titicaca que los españoles llamarían Charcas. En la segunda mitad de 1538 los dos hermanos de Pizarro, Hernando y Gonzalo, hicieron su entrada por la parte meridional de la cordillera oriental, asentando dos núcleos de importancia; el primero y más decisivo fue la Villa de Chuquisaca (Hoy Sucre), en un valle de subpuna densamente poblado, en el extremo meridional de la cordillera; el segundo fue un pequeño campamento minero en Porco, hacia el oeste de la Villa de Chuquisaca, en plena zona montañosa.

Con la fundación de estas dos poblaciones españolas, por fin comenzó el poblamiento de la región de Charcas, unos cinco años después de la captura del Inka en Cajamarca. Si bien Charcas era una región apetecible en cuanto a indios y minas se refiere, los españoles al comienzo estuvieron demasiado ocupados en asegurar el control efectivo de la parte baja del Perú y en luchar entre ellos para prestar atención a esta región meridional. Esta relativa indiferencia, sin embargo daría un giro de 180° cuando algunos de los mineros de Porco descubrieron las betas de plata más ricas del continente en la zona cercana que pasaría a llamarse Potosí en 1545. Así, en el cenit de la última guerra civil hispano – peruana de importancia, en la que Gonzalo Pizarro trata de desafiar al Virrey de nombramiento real, el Cerro Rico fue descubierto en Potosí, progresando la fiebre minera. En cuanto Gonzalo Pizarro fue derrotado en la zona costeña peruana, las autoridades de Lima enviaron una nueva expedición a la región de Charcas, que en 1548 aseguró el eje Chuquisaca – Potosí – Cuzco con la creación de la Villa crucial de La Paz, en el corazón de la región aymara. La Paz se convirtió rápidamente en un importante centro comercial y de transbordo, así como una población de mercado agrícola de importancia.

Pero sería Chuquisaca la que iba a demostrar ser la población fronteriza dinámica de la nueva región chaqueña. Mientras que tanto Potosí como La Paz se concentraron hacia dentro

para el desarrollo de sus regiones locales, Chuquisaca fue la zona en que se prepararon varias expediciones importantes hacia las regiones nor-orientales argentinas, en torno a Tucumán. De hecho, durante las próximas décadas siguientes Chuquisaca trató de convertir a Tucumán y a las poblaciones septentrionales argentinas en una región satélite suya. Aunque acabó perdiendo el control administrativo en favor de Santiago de Chile; sin embargo, Charcas hizo de la región septentrional argentina una región económicamente dependiente, mediante la estrecha participación de la última en la economía minera altiplánica. Entretanto el bullicio fomentado por Pizarro desde el norte hacia el sur se había topado con otra corriente de signo contrario, procedentes de otro grupo español que arrancaba de las lejanas regiones orientales de la zona del Río del Plata. A mediados de la década de los años treinta los españoles, por fin, poblaron el puerto fluvial de Asunción, sobre el río Paraguay; los empresarios locales, decidiendo que su futura riqueza se podía conseguir en las tierras interiores orientales, se dedicaron a explorar toda la región chaqueña. En 1547 un grupo paraguayo había atravesado con éxito el Chaco y a comienzos de la década de los años cuarenta asentaba avanzadas permanentes en la región de Chiquitos y Mojos, cerca de las estribaciones Andinas. Chocando rápidamente con la oposición de los aventureros de Lima y el Cuzco, los conquistadores paraguayos se vieron finalmente forzados a aceptar como frontera las tierras bajas y, después de varias expediciones, se establecieron en la región de Santa Cruz a fines de la década de los años cincuenta, fundando por fin la población de Santa Cruz de la Sierra en 1561, con tropas paraguayas.

En los años sesenta los límites externos de la frontera chaqueña quedaban, pues, plenamente definidos. Los paraguayos habían abierto una ruta a las tierras altas y aseguraron unas pocas poblaciones estratégicas, que mantenían débiles comunicaciones con el sudeste. Pero era una región fronteriza, llena de indios hostiles y seminómadas, sin ninguna clase de metales y escasos campesinos agricultores sedentarios, todo lo cual demostró ser poco atrayente para el poblamiento hispánico. Además, los Chiriguano, Toba y otros grupos de indios del Chaco y de las tierras bajas adaptaron rápidamente su sistema de guerra al de los españoles, logrando matar a muchos soldados españoles. Esta misma frontera hostil india oriental y sudoriental a veces se ampliaba hacia el oeste y habían indios seminómadas que con frecuencia interrumpían los lazos de comunicación con el sur hacia la región tucumana, tan esenciales,

y por tanto hacia los pueblos atlánticos del río de la Plata. La región de llanuras de las tierras bajas del Gran Chaco fue una frontera tan violenta que hicieron falta los misioneros y fortines permanentes para mantenerla contra las tribus que la poblaban; incluso a fines del período colonial todavía seguía independiente del control español directo.

Dentro del territorio chaqueño poblado, la orientación fundamental fue, pues, norte — sur. Al convertirse el centro minero de Potosí en una de las razones fundamentales de la presencia española en la región de Charcas, el abastecimiento de estas minas con animales y equipo fue la razón de ser de las poblaciones del noreste argentino. Al mismo tiempo, Chuquisaca llegó a ser el centro administrativo de Potosí y su más cercano núcleo de abastecimiento agrícola. La Paz servía al mismo tiempo como principal eslabón urbano que enlazaba Potosí con la carretera que iba a Arequipa, Cuzco y Lima y, por tanto, por mar hasta España y se convirtió en sí misma, en un centro importante de abastecimiento en mano de obra y mercancías para las minas.

Aunque éstas fueran el principal objetivo de los españoles, la región de Charcas abundaba en aquel otro recurso extraordinario tan limitado en América: la mano de obra india. Las regiones del Cuzco y La Paz eran las zonas campesinas indias más densamente pobladas del Perú y los españoles tenían conciencia de la riqueza potencial de este recurso escaso. Dejando las tierras en manos de los campesinos indios, trataron de proseguir los esquemas de dominio inkaico mediante el gobierno indirecto. Así se mantuvo a los *ayllu* y a la nobleza local — los *kuraka*, o caciques como a veces los llamaban los españoles— fueron ratificados en sus derechos. A cambio, los bienes y servicios que anteriormente iban al gobierno inkaico y a la religión estatal, ahora fueron encaminados exclusivamente a los españoles. Las comunidades indígenas campesinas quedaron divididas en distritos y éstos a su vez, en encomiendas. El beneficiario de estos impuestos, llamado encomendero, era un español que había de pagar la instrucción religiosa o, en otro caso, preocuparse por la aculturación de los indios según las normas hispánicas; a cambio de ello se le concedía el derecho sobre la mano de obra y los bienes producidos localmente por estos indios. Tales concesiones eran la mayor fuente de riqueza particular que había de existir en el Perú del siglo XVI, dándose a un porcentaje muy pequeño de conquistadores españoles. Así pues, la concesión de las encomiendas dio lugar a una nobleza española local en todo, menos en el nombre. En realidad, los encomenderos se convirtieron en la autoridad gobernante de aquellas regiones y tenían

a su disposición una considerable mano de obra. Aunque se trataba de un sistema sumamente explotador, la encomienda se basaba fundamentalmente en la idea de la conservación de la sociedad y gobierno indios preexistentes.

Dentro de la región Charqueña hacia mediados del siglo XVI había unas ochenta y dos de tales encomiendas, de las que veintiuna abarcaban más de mil indios cada una. Si bien el total de los encomenderos charqueños era pequeño comparado con los 292 de sólo la región Arequipa — Cuzco por el mismo período, esta última región poseía sólo catorce encomiendas de más de 1.000 indios cada una. Así pues, los encomenderos de Charcas, aunque en un número mucho menor, tendieron a ser más acaudalados y poderosos en promedio que sus colegas de la región meridional peruana actual. El promedio de las encomiendas Cuzco — Arequipa contaba con unos 400 indios, mientras que el promedio de las encomiendas charqueñas doblaba aquella cifra, es decir, tenía unos 800 indios. También este grupo de la élite de encomenderos charqueños era relativamente nuevo o, por lo menos, había militado con los grupos antipizarristas durante las varias guerras civiles, pues hacia la década de los años sesenta la inmensa mayoría de ellos había conseguido sus encomiendas de los Virreyes de Lima. Probablemente por entonces los encomenderos vivieron su cenit, más de la mitad de los encomenderos se encontraba ya en la segunda generación y la corona había logrado arrebatarles unas veinte encomiendas para su provecho.

Si bien la organización de la vida rural charqueña había seguido unos principios hispánicos bastante bien establecidos, que remontaban a Cortés y a la conquista de México, la creación de una fuerza de trabajo minera eficaz resultaba algo nuevo; en el Perú fueron surgiendo todo un conjunto nuevo de instituciones para extraer la mano de obra india para las minas. Aquí los españoles lo intentaron todo, desde la esclavitud hasta el trabajo asalariado, para terminar estableciendo un sistema de trabajo forzado rotativo entre una gran cantidad de poblaciones indígenas. Pero para sistematizar esta maquinaria y también resolver los problemas gubernativos en la zona rural era necesario reformar totalmente la ley y costumbres locales. Esta fue, en efecto, la tarea que correspondió al gran Virrey de Lima, Francisco de Toledo, quien realizó la visita de Charcas durante el periodo de 1572 — 1576, en el tramo central de su gobierno virreinal.

Las reformas toledanas significaron un gran viraje en la organización social y económica del Imperio castellano en Char-

cas. Enfrentado con varios problemas de envergadura, Toledo decidió reorganizar el esfuerzo español a la luz de las necesidades reales y de las exigencias coloniales. También intentó legitimar más eficazmente la explotación, vinculándola con el sistema organizativo preexistente inkaico. Para empezar, Toledo se enfrentó con dos problemas cruciales en la zona de organización rural y económica. Por un lado, los españoles habían tratado de conservar cuanto pudieron la población y el gobierno preexistentes, con el fin de obtener los máximos beneficios con los costos menores. Pero las enfermedades europeas que trajeron consigo diezmaron a los indios de las tierras bajas y afectaron gravemente también a la población altiplánica. Para los años setenta resultaba claro que todas las regiones del Perú habían pasado por disminuciones graves de la población desde el comienzo de los conquistadores y que este diesmamiento proseguía. Así pues, la encomienda ya no era una institución tan remunerativa financieramente como antes.

En segundo lugar la corona había informado a Toledo de su hostilidad a crear una nobleza española colonial local basada en las encomiendas, buscando presionar a la élite para que renunciara a esta institución y permitiera que las poblaciones indias pasaran de nuevo al control real como aldeas de "propiedad" real. Pero aun aquí Toledo se enfrentaba con el problema de mantener las poblaciones aldeanas, a la vista de su constante explotación y de su descenso demográfico. Para él la única solución consistía en reorganizar las bases social y económica de la vida andina. A tal fin decidió "reducir" los indios a aldeas fijas permanentes, tratando de convertir al resto de los *ayllu* en comunidades concentradas. El modelo que empleó era, evidente, la comunidad agrícola mediterránea; pero en las tierras altas las comunidades se componían de muchos *ayllu* , todos los cuales poseían colonos en diferentes regiones ecológicas. La meta de Toledo fue obligar a estos ayllu altiplánicos a desvincularse de sus colonias por un lado y por otro a reagruparse en poblaciones mayores más permanentes, con tierras fijas y contiguas, que pudieran ser administradas y gravadas con mayor facilidad. Así pues, el modelo de comunidad indígena procede de la época de Toledo; a pesar de la rápida creación de numerosas reducciones, costó por lo menos un siglo consolidar sus reformas. Se puede ver en las cifras que implicaba el volumen masivo de una operación como la de la campaña de reducciones. En unos cinco distritos tomados como muestra (de los muchos de que se componía Charcas por entonces), 900 comunidades que implicaban más de 129.000 indios fueron reducidas a sólo 44 pueblos. Mientras que

con anterioridad a esta "congregación" de indios sus aldeas tenían un promedio de 142 personas, la política reduccional de Toledo creó pueblos con unas 2.900 personas cada uno. Gran cantidad de estos pueblos "reducidos" creados por Toledo fueron abandonadas y muchas de las comunidades bajas y vallunas nunca lograron ser separadas eficazmente de sus *ayllus* nucleares altiplánicos, pues los indios lucharon, para conservar de la destrucción, su sistema interregional ecológicamente diverso. Pero en conjunto, el sistema creado por él acabó siendo dominante en los Andes.

En otros puntos Toledo tuvo éxito más inmediatamente. Quebró el poder de los encomenderos y limitó la mayoría de las encomiendas a tres generaciones, con lo que se lograba reconquistar para la corona el control directo sobre las poblaciones indias. Además, sistematizó el tributo con que a partir de ahora los indios bajo control real habrían de contribuir a la corona. A partir de entonces las comunidades indias libres habrían de pagar la mayoría de sus impuestos en efectivo, más que en especie. Esta medida sistematizó la estructura tributaria india, generalizando a todos la unidad tributaria, pues las variaciones no se basaban en el valor mercantil cambiante de las mercancías recolectadas por los cobradores fiscales, sino en algún principio convenido con la capacidad relativa de pago de los indios. Se hizo corresponder el monto del tributo a la cantidad y calidad de tierra que poseían los indios.

Esta aparente racionalización de la estructura fiscal en el último término demostró ser una gran arma que forzaba a los indios a integrarse en la economía colonial. Como sólo se podía conseguir dinero vendiendo bienes en los mercados españoles, en los que se cambiaba el dinero por bienes y servicios, los indios o bien tenían que entregar los bienes exigidos por los españoles o habían de ofrecer su mano de obra a cambio de salarios en ese mercado. A fin de cuentas, acabaron haciendo ambas cosas. Se producía trigo y telas especialmente producidas de cara al mercado urbano; productos tradicionales eran llevados para su venta a los nuevos centros urbanos españoles. Los indios de comunidades libres también acudían a la demanda de los agricultores, mercaderes y artesanos españoles para el trabajo de la cosecha, estacional o incluso temporal, quienes vendían esa mano de obra en los mercados españoles a cambio de dinero. Aunque los mercados tradicionales de trueque de bienes indígenas siguieron funcionando en el Perú, en particular mientras persistió el imperativo ecológico de producir diferentes cosechas, gran parte de la población campesina india se

vio forzada a ingresar en el mercado monetario creado por los españoles. Así, la necesidad de dinero para pagar los impuestos reales demostró ser un gran factor para integrar duales que se desarrollaban en la región Charqueña.

Así como Toledo había de reorganizar la estructura dual de la sociedad charqueña, también pudo reordenar impresionantemente su economía minera. Desde 1545 hasta comienzos de la década de los sesenta, Potosí había producido una cantidad de plata siempre mayor, convirtiéndose rápidamente en la fuente particular más rica de este mineral del mundo. Pero este crecimiento se basaba en la extracción de yacimientos superficiales que contenían una ley extremadamente alta y que se refinaban fácilmente por medio de los procesos tradicionales precolombinos de fundición. Pero cuando estos yacimientos superficiales desaparecieron y fue creciendo la minería de galería y fue bajando la pureza del mineral, los costos de fundición subieron y su productividad decayó. Así, cuando Toledo llegó al altiplano en 1570, la industria minera se encontraba en plena crisis, con un decaimiento de la producción, preocupándose desesperadamente la corona por conservar este recurso enorme.

Toledo atacó el problema potosino en varios frentes. Ante todo en 1572 introdujo el proceso de amalgamación, por el que el mineral de plata se separaba de los demás metales mediante la amalgama con mercurio. De un golpe quebró el control indio de la fundición, reemplazando más de 6.000 indios fundidores al aire libre por unos pocos centenares de ingenios grandes de refinamiento, controlados por españoles y accionados por energía hidráulica. Para asegurar el abastecimiento de mercurio que necesitaban los mineros potosinos, Toledo también organizó la mina real de mercurio de Huancavelica, en la parte baja del Perú, que a partir de entonces se convirtió en el único abastecedor de mercurio para las minas del altiplano.

Para encarar el problema del control gubernamental de la industria minera y el problema clásico del contrabando y la evasión Toledo también creo una casa Real de Moneda en Potosí, exigiendo que toda la plata extraída y refinada en la Villa fuera convertida en barras y moneda en aquella casa. En ella la corona se quedaba con el quinto de la producción, así como con los demás impuestos de monedaje. Además ahora que el mercurio pasaba a ser una necesidad fundamental para la extracción de la plata, la corona estableció el monopolio que no sólo le daba una ganancia sobre un producto de primera necesidad, sino que además le permitía evaluar la producción real, cerrando así la puerta a la evasión fiscal. Registrando la corona todas las com-

pras de mercurio, los propietarios de los ingenios, llamados azogueros, tenían dificultad de embarcar plata no amonedada o que no hubiera pagado los impuestos, pues la amalgama de mercurio en general se realizaba en una proporción bastante fija. Así, se conocía la producción potencial de plata de todos los azogueros.

Toledo también estableció el código minero fundamentalmente. Ratificó las pretensiones reales clásicas al monopolio sobre las riquezas del subsuelo, exigiendo que los mineros pagaran el quinto de su producción por el uso de una propiedad real. Por otras parte, el registro de las pretensiones y derechos en el uso de galerías y otros asuntos técnicos también fue objeto de legislación por parte de Toledo. El establecimiento de normas legales era especialmente importante en Potosí, a causa del carácter extremadamente complejo de la propiedad minera. A diferencia de otras zonas mineras del Nuevo Mundo, el carácter concentrado de las betas argentíferas en una inmensa montaña de mineral daba lugar en Potosí, a una multitud de galerías superpuestas. Ningún minero poseía más que unas pocas bocas de mina que conducían a una de las innumerables betas de plata, utilizando numerosos propietarios diferentes galerías, pero trabajando con frecuencia una misma beta. En 1585 había alrededor de 612 minas de propiedad individual en el Cerro Rico, representando cada una de ellas una galería diferente. La necesidad de elaborar normas para determinar la propiedad de las betas era esencial para evitar un permanente conflicto armado.

Por fin y lo más importante de todo, Toledo resolvió la cuestión de la mano de obra para los mineros. La minería de galería era una empresa sumamente costosa, siendo la mano de obra el factor más caro de todo el proceso. Construir y mantener una galería adecuadamente costaba tanto como construir una catedral. Por otra parte, las enormes cantidades de agua que se necesitaban para poner en movimiento las piedras de moler en los procesos de fundición, acabaron exigiendo la construcción de una complicada serie de represas y de unas veinte lagunas artificiales, cuyo costo total se calculó en la extraordinaria suma de más de dos millones de pesos. Según los salarios pagados a la mano de obra libre en las minas durante la década de los años setenta, resultaba evidente que simplemente no había suficiente capital disponible para proseguir con la masiva producción minera que la corona deseaba conservar. Como ya estaba reorganizando las comunidades rurales y sistematizando su estructura fiscal, Toledo dio un paso más y decidió recurrir al sistema de trabajo forzado precolombino, llamado *mit'a*, para obtener mano de obra forzada con destino a las minas de Potosí.

Como abastecedores de la *mit´a* se designaron unas dieciséis provincias que escalonaban entre Potosí y el Cuzco, en la zona altiplánica. En ellas una séptima parte de los adultos varones habían de quedar sujetos al servicio de un año en las minas, trabajando sólo una vez cada seis años. Esto proporcionaba una fuerza de trabajo anual de unos 13.500 hombres, la que a su vez se dividía en tres grupos de más de 4.000 cada uno. Estos últimos grupos trabajaban de una forma rotatoria tres semanas y descansaban otras tres, manteniendo así un abastecimiento permanente de mano de obra y al mismo tiempo se les daba períodos de descanso. Si bien los mineros quedaban obligados a pagar a los *mit´ayuqkuna* un pequeño salario, éste no llegaba a cubrir ni siquiera las necesidades para su subsistencia. De hecho, las comunidades de *mit´ayuqkuna* necesitaban abastecer de alimento a sus obreros, así como mantener a las familias de sus *mit´ayuqkuna* ausentes y pagar su traslado a las minas. La mayor parte de los alimentos y la coca que se consumían en las minas la pagaban, a su vez, los propios obreros. Así, de un solo golpe entre la mitad y dos tercios de la fuerza de trabajo minera la corona la proporcionaba a los propietarios de minas a unos precios extremadamente bajos, lo que estimuló en gran manera la producción.

La introducción del proceso de amalgama con mercurio, la reglamentación de la estructura legal minera, el abastecimiento de mercurio y la satisfacción de las necesidades de mano de obra de los mineros a costo muy bajo, todo tuvo su impacto en la industria que se elevó en la segunda mitad de la década de los setenta y el famoso auge de Potosí prosiguió, alcanzando la producción de plata niveles extraordinarios entre la década de los setenta del siglo XVI y la de los cincuenta del siglo XVII.

Habiendo resuelto los problemas de la organización rural y la reorganización de la industria minera, Toledo entonces se dedicó a los problemas del poblamiento hispánico de la región. Si bien las fronteras de Charcas estaban ahora bien definidas, habían muchas regiones interiores que todavía no habían sido plenamente explotadas por los colonos. Así pues, Toledo favoreció toda una nueva ola de poblamientos españoles. La más importante de estas nuevas poblaciones promovidas por Toledo fue la Villa de Cochabamba, fundada en 1571. Situada en el corazón de una amplia serie de valles de subpuna, Cochabamba también se convirtió en la población central para el control de los indios Kechua y vallunos. También se convirtió rápidamente en la región más productora de trigo y maíz de Charcas, vinculándose estrechamente con el mercado potosino durante el siguiente si-

glo de crecimiento económico. Toledo también integró mejor la región andina meridional con la fundación de la Villa de Tarija en 1574. Como Cochabamba, estaba situada en anchos valles de subpuna densamente poblados con campesinos indios. Por fin, para asegurar la frontera oriental contra los Chiriguano, Toledo estimuló el poblamiento de la Villa de Tomina en 1575.

Entre el poblamiento final de las fronteras y de las villas interiores, el crecimiento de la nueva industria minera y la integración de la antigua base agrícola indígena a la española nueva, Charcas llegó a ser uno de los centros más ricos del nuevo imperio castellano de América. Sus densas poblaciones de indios sedentarios proporcionaron una mano de obra aparentemente inagotable, mientras sus minas pasaban a ser rápidamente reconocidas como la principal fuente de plata de América, sino de todo el mundo, en la época. Así, la corona no tardó en fundar un gobierno viable y semiautónomo para controlar el destino de esta región y garantizar su adhesión al imperio.

Mientras que Lima y el Cuzco siempre habían deseado dominar las tierras altas meridionales, de hecho todas las rebeliones durante la famosa época de las guerras civiles, demostraron que Charcas podía actuar fácilmente como un factor independiente y muy peligroso. A regañadientes las autoridades limeñas, por tanto, tuvieron que aceptar la creación de un poder separado y poderoso, bajo la suprema autoridad virreinal en la zona meridional del Lago Titicaca, esta decisión llevó en 1559 a la creación de una audiencia independiente, asentada en la Villa de Chuquisaca. La audiencia de Charcas demostraría ser una de las pocas audiencias creadas en el nuevo mundo con autoridad judicial y al mismo tiempo poder ejecutivo. El presidente de la audiencia, también juez, se convirtió así en la autoridad administrativa y ejecutiva principal de la región.

Para controlar a la minoría de la población urbanizada y occidental, la audiencia elaboró un sistema de gobierno muy parecido al que existía en España con anterioridad a la conquista. Se crearon gobiernos municipales basados en el sufragio libre de los vecinos, dotados estos gobiernos de amplios poderes. Extendiéndose sus límites jurisdiccionales hasta el interior rural, en los primeros días fueron los principales concesionarios de encomiendas, controlaron los mercados locales y atendieron la justicia local y los poderes policiales. En cada población principal habían también funcionarios reales, que iban desde una autoridad ejecutiva llamada corregidor (a comienzos del siglo

XVII había unos cuatro corregimientos españoles), hasta una serie de oficiales reales cuya tarea consistía en cobrar los impuestos sobre el comercio y la producción. A pesar de la presencia de funcionarios reales, estos gobiernos locales americanos llegaban a ser más representativos de los intereses y necesidades de la élite local que de España.

Las áreas rurales contenían más del 90% de la población, de la que — con excepción de un 10% — todos eran campesinos indios monolingües. Para ellos los españoles prepararon un complejo sistema de gobierno indirecto. Toledo en sus reformas había garantizado la autonomía local a los nuevos pueblos "congregados" o "reducidos", comenzando a desarrollarse a nivel local un gobierno complejo de anciano de la comunidad. Elegidos formalmente por los originarios (Miembros antiguos de la comunidad), estas administraciones locales estaban compuestas de representantes de todos los *ayllu* locales que componían la comunidad y tenían a su cargo la división y distribución locales de tierra y la recaudación de todos los impuestos. Este mismo gobierno también mantenía la iglesia de la comunidad local y patrocinaba las fiestas dedicadas a la celebración del santo patrono de la comunidad. Estos gobiernos comunitarios, aunque aparentemente elegidos según el estilo hispánico, con toda probabilidad prosiguieron las prácticas anteriores a la conquista, seleccionando a los ancianos más experimentados y más afortunados para representarlos. Estos hombres tuvieron la tendencia de ser sumamente conservadores, siendo los más ancianos y los más responsables de la comunidad. Por su parte, las autoridades reales los hicieron responsables de todo, desde el mantenimiento de la paz local hasta la función esencial de proveer los impuestos y la mano de obra de la *mit'a*. Mientras las exacciones sobre la comunidad, sus miembros las consideraron razonables, tal gobierno de ancianos en cabildos y bajo sus líderes locales *(o jilakata)* demostró ser un baluarte de estabilidad conservadora; pero cuando estos dirigentes se convencieron que las exacciones de sus excedentes pasaban los límites aceptables, ellos mismos demostraron ser el más poderoso de sus enemigos, pues podían convocar a toda la comunidad en su apoyo. Las inumerables rebeliones indias en el período posterior a Toledo, nunca fueron asuntos individuales desorganizados, sino esfuerzos de toda la comunidad, exclusivamente dirigidos por sus ancianos. Esto explica el fenómeno frecuentemente extraño de rebeliones limitadas a unas pocas comunidades locales fácilmente definidas, sin afectar a sus vecinos.

Además, estos gobiernos comunitarios con el tiempo comenzaron a servir no sólo como una institución de gobierno y dirección, sino también como un medio de redistribución interna de recursos dentro de la comunidad. Enfrentadas a un medio ambiente hostil y amenazante (tanto ecológicamente como por la explotación económica), las comunidades no podían permitirse una diferenciación interna apreciable entre sus miembros componentes originales. Por tanto, surgió un sistema complicado de "empobrecimiento ritual" en muchas de estas comunidades: en virtud de ella se redujeron considerablemente las distinciones en riqueza por medio de la dispersión forzosa de los ahorros de sus miembros más afortunados o dotados. Sólo se escogía a los agricultores afortunados para los cargos de la jerarquía civil o religiosa que componían el gobierno comunitario local, exigiéndoseles gastar considerables sumas de dinero y gran cantidad de tiempo en el desempeño de sus cargos anuales. En especial, en el aspecto religioso de sus obligaciones, cargos o deberes se les obligaba a patrocinar las fiestas religiosas locales que exigían el gasto de sus ahorros. A cambio del gasto del tiempo, alimento, bebida y dinero, los ancianos afortunados eran recompensados con honor y poder local. Pero por lo general reducían ahorros de toda la vida, con lo que tendían —mediante todo el proceso ritual— a reducir su patrimonio al nivel general de la comunidad. Tal sistema aseguraba que ningún miembro originario de la comunidad con acceso a la tierra dominara a los demás y acumulara una ventaja que pudiera poner en peligro la naturaleza comunaria de la propiedad y la integridad de la misma. El ejercer cargos civiles y religiosos y el empobrecimiento ritual fue un modelo general de un sistema completo que no estuvo totalmente en acción en todos los lugares ni en todos los tiempos. Como veremos, tampoco impidió que surgieran grupos de indios sin tierras que vivían en las comunidades; pero para los miembros con tierras, cuando funcionó eficazmente, contribuyó a impedir que el funcionamiento del mecanismo normal de mercado destruyera la unidad comunal.

Durante la mayor parte del período colonial también existió en las zonas rurales un grupo de nobleza india local conocido con el nombre de *kuraka*, que jugó básicamente la misma función que había tenido bajo los Inka. Generalmente los *kuraka* tenían a su cargo varias aldeas y, en cuanto nobles locales, tenían recurso a sus propias propiedades privadas dentro de varias comunidades, así como los derechos a mano de obra de la comunidad y a una determinada cantidad de otros recursos legales. A cambio de ello, los *kuraka* habían de proteger la

religión y costumbres locales de los miembros de la comunidad, representarlos formalmente ante las autoridades coloniales y actuar de amortiguador entre los campesinos locales o sus jilakata y las autoridades españolas. La suya era una posición trágicamente difícil, no sólo por que el *kuraka* era un terrateniente y explotador de la mano de obra, sino porque él mismo sufría una pesada tributación por parte de las autoridades españolas y había de garantizar el cumplimiento de todos los impuestos locales y las obligaciones de la *mit'a*. Naturalmente, se apoyaba en los *jilakata* para llevar a cabo estas exigencias en las comunidades locales; pero él, sus tierras y sus bienes eran en último término la garantía en caso de que no se recaudara por completo los impuestos o no se entregara la totalidad de la mano de obra. Así, a lo largo de los tres siglos de gobierno colonial español, la clase noble indígena local poco a poco iría hundiéndose a causa de las exigencias españolas y acabaría quedando reducida al rango campesino si se quedaba en el campo, o absorbida en las clases media o alta si escapaba a las ciudades. Además, toda la institución acabaría desapareciendo como fuerza realmente eficaz en la gran rebelión de Tupaq Amaru de 1780, en la que los *kuraka* jugaron un papel organizativo tan decisivo.

Por más indirectos que fueran sus principios de gobierno, los españoles controlaban en último término el sistema por esta razón dividieron todas las zonas rurales, de la misma forma que las urbanas, en corregimientos rurales bajo el control de autoridades reales llamadas corregidores de indios. Estos funcionarios mal pagados tenían bajo su responsabilidad el cobro de los impuestos y la salida de la mano de obra de su distrito; para cobrarse sus servicios podían obligar a sus súbditos indios a comprar mercancías que importaban a las zonas rurales. Las ventas forzadas de productos españoles a las comunidades indias demostraron ser una fuente enorme de riqueza y corrupción de estos funcionarios, convirtiéndolas en objeto de odio permanente de parte de las poblaciones locales indígenas.

Por fin, para asegurar la lealtad al estado tanto de los españoles como de los indios recientemente evangelizados, la corona patrocinó vigorosamente la implantación de la religión católica en Charcas. Con la llegada de los primeros colonos en 1538 había llegado el clero secular para atender las necesidades de los conquistadores e iniciar la conversión de los indios. Estos eclesiásticos seculares se vieron acompañados rápidamente por misioneros religiosos de todas las principales ordenes de América: dominicos, franciscanos, agustinos, mercedarios y, al cabo de unos treinta años, jesuitas. La dirección para toda esta

actividad procedía del Cuzco y, en el último término, de Lima. Pero este sistema cambió en 1552 con la creación del primer obispado de la región y nombramiento de su primer prelado. Llevando el nombre de la Plata, tuvo su sede en la Villa de Chuquisaca, donde al cabo de una década también se instaló la real audiencia. La creación de una autoridad eclesiástica autónoma fue crucial en la formación de un centro colonial independiente en Charcas.

Entre tanto toda la iglesia peruana se preocupaba por la evangelización. En 1555 comenzó una serie de concilios peruanos, cuyos resultados fueron una serie de instrucciones al clero regular y secular para el proceso evangelizador. El segundo concilio de ellos, celebrado en 1561, mandó que los textos catequéticos fueran traducidos al kechua, mientras que el tercer concilio (1582 — 1583), por fin, dispuso que también se preparara todo un bloque de materiales en aymara. El resultado fue la publicación de la primera obra en aymara, hecha en Lima en 1584. En las primeras décadas del siglo XVII los jesuitas Ludovico Bertonio y Diego de Torres Rubio publicaron una gramática y diccionario extensas. Esto sucedía casi una generación después de la publicación de catecismos, gramáticas y diccionarios kechuas, obra también emprendida por diferentes misioneros. Dado el predominio del kechua, incluso en Charcas, este comienzo tardío del aymara resulta comprensible; pero esto significaba que cada vez más el kechua se convertía en una lengua franca, impulsada por los misioneros, incluso en las zonas altiplánicas tradicionales aymaras y valles adyacentes. Esta preocupación temprana del Bajo Perú por la evangelización kechua ayuda a explicar la desaparición de todas las lenguas que no fueran el aymara o el kechua en los valles de subpuna después de la conquista, que en la mayoría de los casos sería reemplazada por el kechua dominante, traído por los misioneros.

En otros aspectos, la iglesia no se quedó atrás en introducirse en las poblaciones aymaras. Ya 1582 el obispo de La Plata había concedido a los *kuraka* de Copacabana el derecho de fundar una cofradía en honor a la Virgen en este centro religioso tradicional aymara del lago Titicaca. El santuario construido allí en honor a la Virgen de Copacabana, junto con el santuario dedicado a la Santa Cruz construido por la misma época en Carabuco, se convirtieron en símbolos sincréticos vitales del proceso evangelizador. En realidad, la imagen de la Virgen de Copacabana llegó a ser el símbolo religioso central indiscutido de la región. Esta creación de las formas exteriores de cristianismo no significa que la religión anterior a la conquista desapareciera ni que el

clero tuviera un éxito universal con la evangelización de los indios. La existencia de encomiendas privadas en la mayoría de las zonas hasta fines del siglo XVI impidió el acceso directo a los indios e incluso con la división de Charcas en jurisdicciones propias de las diferentes órdenes misioneras, siempre hubo menos clero disponible del que se necesitó. Ahora cada pueblo reducido y antiguo poblado contaba con un templo, aunque la mayoría de los indios sólo rara vez veían a un sacerdote. De esta forma las creencias tradicionales, en especial las que se relacionaban con la familia y el trabajo, en gran medida se mantuvieron, siendo también sistemáticamente protegidas por los *jilakata* y los *kuraka* locales. El cristianismo se hizo sentir en las máximas esferas de la religión estatal y en orden cosmológico más amplio. La mejor prueba de este cambio se puede encontrar en la decadencia progresiva de la rebeliones anticristianas a lo largo del siglo y en su reemplazo a fines del siglo XVII por las rebeliones impulsadas por el simbolismo cristiano mesiánico, que al mismo tiempo era profundamente católico y totalmente antihispánico. Ya no habían los *w'aqa* locales ni objetos religiosos comunitarios (generalmente piedras) que se invocaran en apoyo durante los combates contra los españoles odiados; ahora se invocaba a la Virgen Morena de Copacabana para que guiara a los Aymara y Kechua contra sus opresores blancos.

Que la creencia total cambió poco también se pone en evidencia en las visitas pastorales e investigaciones inquisitoriales de fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, que demuestran que en las curaciones, en las actividades relacionadas con la plantación y cosecha y con todos aquellos sucesos vinculados al robustecimiento de los lazos familiares de parentesco y del ayllu local, predominaba la creencia y práctica religiosa prehispánica, practicada con frecuencia por sacristanes de la iglesia católica local. Mientras que el alto clero más celoso y consciente trató de destruir estas creencias, la debilidad de su número y las preocupaciones por el mantenimiento del gobierno indirecto garantizaron fundamentalmente la conservación de las creencias locales, mientras no pusieran en peligro la legitimidad del cristianismo en su nivel estatal y social.

En cuanto se refiere a la iglesia misma, prosiguió el período de organización interna, que de alguna forma se adaptó a la cambiante importancia económica y social de Charcas como centro minero durante el período posterior a Toledo. En reconocimiento del crecimiento del distrito paceño como centro de la civilización altiplánica aymara, la corona y el papado crearon el nuevo obispado de La Paz en 1605, mientras que toda

la zona fronteriza de las tierras bajas fue separada, como zona independiente, con la creación del obispado de Santa Cruz aquel mismo año. Para los misioneros el trabajo con los campesinos aymaras y kechuas perdió rápidamente algo de su atractivo romántico, con lo que atrajo vigorosa actividad misionera, en particular en el siglo XVII, una serie de misiones de la zona de Mojos, en las cercanías de Santa Cruz y al sur en el Chaco. La elevación de Santa Cruz a la categoría de obispado impulsó esta obra. Para completar la organización colonial el obispado de La Plata fue elevado a la categoría de arzobispado cuatro años después, con la que La Plata se convirtió en la sede primada de la iglesia charqueña. La preponderancia del centro administrativo chuquisaqueño quedó finalmente coronada con la creación de una Universidad en aquella Villa en 1624. Así Charcas podía ahora graduar a su propio clero en todos sus grados superiores, en 1681 este centro fundamentalmente teológico pudo también conceder títulos jurídicos, con lo que se convirtió en la institución jurídica principal de todo el Río de La Plata y la zona del Cono Sur hasta fines del período colonial.

Así pues, con sus burocracias estatales e iglesia estatal, los españoles consolidaron rápidamente el gobierno efectivo en las zonas campesinas pobladas de Charcas. Unas seis poblaciones principales de españoles (La Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija), estaban situadas estratégicamente para controlar inmensos *hinterlands* y diferentes zonas ecológicas y económicas. También se crearon poblaciones fronterizas seguras, con una frontera misionera eficaz en las tierras bajas orientales para impedir que los indios seminómadas ingresaran en las zonas pobladas; por fin, se introdujo un completo sistema de gobierno indirecto para controlar las poblaciones campesinas indias. Pero todos estos planes concebían a Charcas esencialmente como un sistema social, económico y político dual. Había de haber una élite blanca de habla castellana y orientación occidental, más o menos delimitada según las líneas de la clase peninsular basada en el nacimiento y el dinero; a su lado una inmensa masa campesina india autogobernada pero plenamente explotable, también diferenciada en una clase de campesinos y nobles, pero por lo demás influía poco en el mundo de sus conquistadores. En realidad, el proceso de conquista y el carácter de los mismos conquistadores poco a poco iría erosionando este modelo relativamente simple, creando una mezcla compleja de nuevas clases, castas y grupos, tanto dentro del mundo indio rural como en los centros urbanos dominados por los españoles.

En primer lugar, los españoles trajeron consigo un nuevo conjunto de enfermedades europeas desconocidas para los indios altiplánicos. Un sistema de explotación basado en una población de alrededor de un millón de campesinos, pronto resultaría que oprimía sólo a la mitad de aquella cifra con los mismos impuestos; hacia fines del siglo parecía que cada generación de indios posterior a la conquista se fuera inmunizando a las nuevas enfermedades, sólo para sufrir de nuevo reiteradas epidemias en ciclos de unos veinte años, epidemias que acabaron hasta bien entrado el siglo XVII. Además los 10.000 españoles que aproximadamente llegaron a la región charqueña fueron mayoritariamente varones, es decir, libres de las rígidas restricciones familiares europeas, que habían dejado atrás en España. También trajeron consigo un número casi igual de esclavos negros africanos. El resultado fue la creación de un grupo racial nuevo de mulatos y mestizos (llamados cholos en Bolivia). Así las pérdidas en la población india de alguna forma quedarían compensadas por un grupo intermedio racialmente amalgamado que combinaba el parentesco de indios y blancos y, en menor medida, de blancos y africanos.

De hecho la conquista tampoco creó como único sistema el orden social rígido intercambiable que había proyectado la corona. De la misma forma que la composición racial de la población iba cambiando lentamente, también lo hacía su estructura social. La base de todo el orden económico y social era el cabeza de familia indio que tenía entre 18 y 50 años de edad, que era miembro originario de su ayllu, con acceso directo a los derechos sobre la tierra. Este indio originario fue el productor principal en la economía charqueña, pagaba el impuesto básico del tributo – que era equivalente de la obligación tributaria de la encomienda que ahora recaudaba directamente la corona– y era el único sometido al impuesto del trabajo de la *mit'a*. Además, los originarios también fueron los principales productores para sus propios *kuraka*, quienes seguían recaudando su propio tributo y también pagaban los impuestos a la iglesia local. Dada la base de tierra y la provisión de mano de obra que los españoles heredaron originariamente de los Inka, el reclutamiento de originarios no fue excesivo y pudieron soportarlo fácilmente a causa de las grandes cantidades de tales originarios disponibles en cada comunidad.

Pero el colapso demográfico de la población india provocó una contracción de la clase originaria, sin ningún alivio consiguiente de las exacciones de su producción excedente. Las presiones sobre los originarios no cesaron de aumentar a lo largo

de dos siglos de decadencia demográfica. El resultado de ello fue, por una parte, el abandono de las comunidades en gran escala; por otra parte, la pérdida masiva de la condición de originario por parte de los indios. Supuesta la gran cantidad de abandonos de la comunidad y la política de nuevas fundaciones comunitarias bajo Toledo y sus sucesores, apareció rápidamente una población campesina flotante. Llegando como emigrantes a las antiguas comunidades o como recién llegados a las nuevas, estos forasteros —a veces llamados también agregados— conseguían unos derechos menores sobre la tierra o simplemente ninguna tierra, sino que se limitaban a instalarse como trabajadores sin tierra en la parcela de los originarios al cambiar de rango acaso perdieron entonces sus tierras, pero también se independizaron de todas sus obligaciones fiscales. Hasta el siglo XVIII los forasteros no tuvieron que pagar el tributo ni estuvieron sujetos a la *mit'a*.

Las mismas presiones demográficas y económicas que dieron lugar a los forasteros, también crearon un grupo enteramente nuevo de indios que no pertenecía a ninguna comunidad libre, sino que vivía en las propiedades de los españoles. A medida que el valor de las encomiendas fue declinando y la corona obligó a su renuncia, los colonos acaudalados encontraron fuentes alternativas de riqueza en la producción agrícola directa. Con el descenso de las poblaciones indias y la reorganización constante de las comunidades, mucha tierra, de las zonas tradicionales, quedó disponible para la explotación privada. Estas tierras fueron rápidamente absorbidas por los españoles más ricos, surgiendo una nueva clase: la de los hacendados. Al principio consiguieron su mano de obra de entre la población flotante de sirvientes indios llamados *yanakuna*; pero pronto los españoles se dieron cuenta que los antiguos originarios se morían por trabajar en las propiedades de los colonos a cambio del usufructo de una parcela de tierra. Además, los españoles no hicieron nada por destruir la estructura del *ayllu*, que en las haciendas funcionaba como en las comunidades. Si bien el término *yana* procedía del imperio inkaico y al comienzo de la época colonial se refería a aquellos trabajadores sin conexiones con el *ayllu* o sin tierra, concedidos a los nobles dirigentes a otros funcionarios por el Inka en calidad de servidores o casi esclavos, a fines del siglo XVI aquel término llegó a significar simplemente trabajador sin tierra. Los conquistadores primitivos acaso utilizaron algunos *yanakuna* precolombinos, pero esta nueva clase de *yanakuna* procedía fundamentalmente de la fuerza de trabajo expulsada por la ruina de comunidades más tradicionales.

Aunque las haciendas se desarrollaron con rapidez a partir de la segunda mitad del siglo XVI, pronto alcanzaron un límite en su crecimiento cuando las comunidades libres se estabilizaron, en la segunda mitad del siglo XVII. Esto dio lugar al fin de la primera época de la expansión de la hacienda. Para entonces habían haciendas por todas las tierras altas y en la mayoría de los valles de subpuna, aunque sólo absorbía aproximadamente un tercio de la fuerza laboral indígena de toda la región de Charcas. Las comunidades libres siguieron siendo la forma dominante de organización social y de tenencia de tierra en la zonas rurales, absorbiendo tres cuartas partes del campesinado indio. Pero a diferencia de las comunidades *yayllu* homogéneos del período anterior a la conquista, las comunidades indias libres del siglo XVII abarcaban dos clases diferentes: los miembros originarios con tierras y sus familias y los forasteros llegados posteriormente (que gozaban de menores derechos a la tierra y estaban obligados a cumplir prestaciones laborales en favor de los originarios). Si bien las comunidades seguían siendo todavía entidades corporativas controladas por sus miembros y, a su vez, poseían el título supremo sobre las tierras para todos ellos, ahora incluían unos ciudadanos de la segunda clase que, de hecho, representaban la mayoría de sus miembros en la mayor parte de los casos. Pero estas diferentes categorías no eran fijas ni inmutables. Hubo muchos originarios que en curso del tiempo renunciaron a sus derechos y se convirtieron o en *yanakuna* en las haciendas de los colonos o forasteros en otras comunidades. Asimismo, hubo *yanakuna* que con relativa facilidad ascendieron al rango de forasteros. Sólo el ingreso al rango de originario demostró ser difícil, pareciendo que sólo por matrimonio existía la posibilidad para quienes no habían nacido en aquel rango.

Este cambio y movimiento en las zonas rurales fue también acompañado por una intensa migración interregional del campo a las ciudades. A los indios originarios que cumplían el servicio de la *mit'a* en Potosí con frecuencia les pareció difícil o poco atractivo volver a sus comunidades de origen, por lo que muchos se transformaron en obreros libres asalariados o "minganos" en la región minera. Muchos indios originarios también decidieron abandonar su vida rural por completo, trasladándose a las poblaciones españolas. Estas poblaciones de varios miles de habitantes comenzaron rápidamente a llenarse de indios, que cumplían todas las tareas de trabajo urbano y que llegaron a ser el factor dominante en la clase trabajadora urbana. Hablando simultaneamente sus lenguas nativas y el castellano, estos

nuevos indios urbanos con frecuencia abandonaron su indumentaria tradicional y empezaron a vestir en una adaptación del estilo hispánico, al tiempo que consumían alimentos de origen europeo tales como el pan. Se convirtieron en cholos urbanos, aunque su ascendencia era puramente india. La designación de indio, cholo y blanco perdió, pues rápidamente su contenido biológico, convirtiéndose en categorías culturales o de "casta social", determinadas por factores extrínsecos tales como el idioma, el vestido y el consumo de alimentos. Tampoco la élite española mestilante estuvo inmune a tales cambios, dado que el concubinato y el nacimiento extramatrimonial se convirtieron en la norma y los frutos bastardos con ascendencia multirracial ascendían a la misma clase de la élite, juntamente con los *kuraka* castellanizados que se convirtieron en miembros de las clases terratenientes locales.

El ritmo del cambio social en Bolivia estuvo influenciado por factores negativos tales como la decadencia demográfica y la explotación de la *mit'a*. Pero el impresionante crecimiento económico que afectó a toda la región después de las reformas de Toledo también se hizo sentir. El primer auge minero de la década de los cuarenta y cincuenta había sido espectacular, pero resultaba ser insignificante en comparación con el crecimiento masivo en las exportaciones de plata del gran auge del período 1570 – 1650. Durante este período, Potosí sólo produjo más de la mitad de la plata del Nuevo Mundo, siendo indiscutiblemente la fuente individual de mineral más importante del mundo. El impacto de Potosí en Europa y en su comercio con Asia fue muy importante. Para Europa la plata de Potosí influyó provocando la tendencia de largo plazo hacia el aumento en los precios. Asimismo en su comercio con Asia. Europa por fin podía aumentar en gran medida sus importaciones de bienes asiáticos, gracias a su capacidad de equilibrar la balanza comercial, que hasta entonces había sido negativa, mediante el pago con plata potosina.

Para Charcas el crecimiento de Potosí en la segunda mitad del siglo XVI fue todavía más traumático que para Europa. La ubicación de Potosí en el centro de la región charqueña, en una zona árida y pobre para la agricultura y la ganadería, significó que todo lo que se necesitaba en las labores mineras, desde los alimentos y las herramientas, hasta los animales y la mano de obra, había de ser importado. Estando sus minas tan lejos del mar también era necesario organizar un complejo sistema de comunicación que habilitará tanto las importaciones europeas como las exportaciones de plata refinada. Así, las tar-

días vinculaciones entre el sector exportador y los mercados local regional e internacional fueron extensas. El crecimiento de la Villa de Potosí y de su industria minera se dejaría sentir desde el norte de la Argentina hasta el sur del Perú, en cuanto una inmensa zona de abastecimiento económico quedó integrada al mercado potosino. Asimismo los mercaderes, comerciantes y cargadores de Lima, Arequipa, Cuzco y La Paz llegaron a jugar un papel vital en la vinculación de las minas de Potosí y de su élite satélite chuquisaqueña con el mundo exterior.

El crecimiento de Potosí desde un poblado de unos pocos centenares de españoles y sus trabajadores indios a una población calculada entre 100.000 y 150.000 habitantes a comienzos del siglo XVII, tuvo un impacto profundo en el crecimiento y poblamiento de otras regiones de las tierras altas. Cochabamba y sus valles adyacentes se convirtieron en grandes productos de maíz y trigo para los mercados de Potosí; el crecimiento de las haciendas en aquellas zonas fue tan rápido y poderoso, que las comunidades libres rápidamente quedaron marginadas a una posición minoritaria regional. Además de ello, las exigencias de mano de obra y la ruina muy temprana de los *ayllu* y comunidades, significó que Cochabamba se convertiría en la zona india más cholificada y bilingüe de todo Charcas. Si bien el kechua siguió siendo la lengua más predominante en el valle, la lengua y cultura castellana se extendieron rápidamente. Muchos de los campesinos agricultores se convirtieron en bilingües y abandonaron la mayor parte de su cultura india tradicional para adoptar una nueva norma cultural mestiza, que surgió sin planificación entre los dos grupos antiguos de conquistadores y conquistados.

En el otro extremo, el crecimiento de la minería potosina condujo a la expansión de la cultura aymara en los valles orientales conocidos como Yungas, mediante el desarrollo de las nuevas zonas de producción de coca. Mientras que la masticación de la hoja de coca había sido una fuente importante de estimulantes en la dieta de la nobleza india anterior a la conquista y por tanto, la planta nativa había sido domesticada desde mucho antes de la llegada de los conquistadores, ahora su uso pasaría por una transformación importante. Destruido el aparato estatal inkaico, después de la conquista, la masticación de la coca se extendió a todas las clases y los españoles se dieron cuenta con rapidez que se trataba de un consumo de absoluta necesidad para los mineros que trabajaban en las minas de plata situadas a gran altura. Así pues la demanda y producción de coca aumentó enormemente después de la conquista y los centros tradicionales en torno a Cuzco ya no bastaban para satisfacer tal

demanda, especialmente en charcas. Si bien la coca había sido cultivada en los Yungas cercanos a La Paz e incluso en la región del Chapare, cerca de Cochabamba, desde los tiempos anteriores a la conquista, su producción era muy limitada en la comparación con la del Cuzco. Pero ahora la demanda sobrepasaba a la oferta, con lo que sobre todo los Yungas se convirtieron en el centro fundamental de cultivo de coca en Charcas, que pronto desplazó a la variedad cuzqueña de los mercados de los centros mineros. El aumento de la producción yungueña que no cesaría de crecer a lo largo de todo el período colonial, significó que los indios nómadas de estos valles serían reemplazados por colonos campesinos aymaras de las tierras altas y que este proceso de poblamiento, iniciado en el siglo XVI, proseguiría ininterrumpidamente hasta el siglo XIX. La colonización de Yungas incluyó esclavos africanos, que se adoptaron rápidamente a la cultura dominante, convirtiéndose en monolingües aymaras a fines del período. Así, los yungas, de ser zona con sólo colonos aymaras dispersos, se convirtieron en una plaza fuerte de cultura totalmente aymara, hasta el punto de llegar a poseer una subcultura aymara negra.

Potosí fue también decisivo para el desarrollo de la región tucumana, llegando a ser las haciendas y estancias del noreste argentino los abastecedores fundamentalmente de mulas, vino y azúcar del mercado potosino, la región de Tarija fue una zona importante de abastecimiento de cereales, mientras que la subregión del valle de Cinti vivió el desarrollo de la agricultura de regadío, en posesión mayoritariamente de mineros potosinos, que se convirtió en la fuente de vinos locales. Al norte de Potosí, el altiplano fue el proveedor fundamental de mano de obra, productos alimenticios tradicionales para consumo minero y la fuente de los inmensos rebaños de llamas necesarios para transportar la plata hasta la costa. Más allá del Lago Titicaca, las minas de Huancavelica fueron las proveedoras exclusivas del mercurio vital para Potosí; en esta región también se satisfarían las demandas de mano de obra de la *mit´a*; además llegaban a Potosí productos tropicales, vinos y otros productos de consumo alimenticio tanto de los valles altos como de los llanos costeños. Este enorme comercio y movimiento de bienes y servicios lo financió tanto la clase de mercaderes de Potosí como de Lima. De hecho, la última parece haber sido la fuente fundamental de capital, financiando el movimiento de la mayor parte de las mercancías desde el norte hacia Potosí y parece haber controlado exclusivamente todo su comercio internacional hasta muy avanzado el siglo XVIII.

El auge y expansión de la segunda mitad del siglo XV también tuvo su impacto en el posterior poblamiento y desarrollo en las zonas internas de Charcas. Así, al fin del siglo la búsqueda de yacimientos minerales fue intensa e incluso las comunidades altiplánicas más pobres desarrollaron cierta actividad minera. Se lavaba oro en la región de Sorata, en los valles cordilleranos del noreste; y comunidades tales como Berenguela, al sur del Titicaca, siguieron desarrollándose como un pequeño pero importante centro minero. Procedió de entre estos mineros altiplánicos a medio tiempo la iniciativa de poblar la región de los indio Uru, al norte del lago Poopó. Toda la región del corregimiento de Paria, (como se llamaba entonces) quedó llenas de pequeñas minas, pero en 1595 se descubrió la mina mayor de la zona, cerca de la que sería la ubicación de Oruro. La mina pasó a llamarse San Miguel, produciendo pronto inmensas cantidades de plata fina.

El resultado de este descubrimiento fue el encadenamiento de una nueva fiebre de la plata entre los mineros altiplánicos procedentes de casi todos los pequeños centros mineros. Los mineros de la Región de Pacajes fueron los que aportaron el capital y la experiencia para poner en explotación estas nuevas minas; en la primera década del nuevo siglo el campamento minero ya contaba con unos 3.000 trabajadores indios y 400 vecinos españoles.

Sin concesiones reales para la *mit'a*, los mineros de Oruro — como los de las demás partes de estas regiones septentrionales — tuvieron que apoyarse en la mano de obra libre asalariada. Comenzaron ofreciendo salarios de cinco reales por jornal a los peones y muy superiores de más de un peso al día a los obreros calificados. Tales salarios consiguieron atraer grandes cantidades de mano de obra india a las minas, pero al mismo tiempo elevaron tanto los costos de la mina de Oruro que la producción sólo progresó lentamente. En 1605 los mineros locales creyeron que el centro había llegado a tener suficiente importancia como para conseguir rango oficial; después de la prolija negociación se fundó formalmente la Villa de San Felipe de Austria de Oruro en la segunda mitad de 1606. A partir de entonces hasta la década de los años ochenta, la ciudad fue creciendo con un ritmo rápido. En 1607 tenía 30.000 habitantes, de los que 6.000 eran mineros indios; en la década de los años setenta la Villa alcanzó su tamaño máximo de unas 80.000 personas.

A pesar de este rápido crecimiento, Oruro nunca rivalizó en poder con Potosí y su producción en el mejor de los casos no superó una cuarta parte de la de aquella Villa Imperial. Con

todo, la Villa y sus minas adquirieron rápidamente gran significación. Se convirtió en una parada de tránsito crucial en la ruta Lima —Arequipa —La Paz — Potosí por un lado; por otro, en el puerto principal altiplánico de entrada de los embarques del mercurio fundamental. Como la vía más barata del mercurio producido en Huancavelica para Potosí era por mar, desde Lima hasta el puerto de Arica y luego en mula a las tierras altas, Oruro se convirtió en la ciudad altiplánica más cercana a aquel puerto de Arica. Así, pues, Oruro pudo asegurarse su mercurio en unas condiciones más favorables que Potosí, consiguiendo un ingreso importante con la organización y financiamiento de los envíos de mercurio.

Tan importante como su situación céntrica lo fue el desarrollo crucial de Oruro como el mayor centro de mano de obra minera libre de todo Charcas. Mientras sus vetas de minerales más ricas persistieron (lo que sucedió hasta la segunda mitad de siglo XVII), las minas orureñas fueron el imán de obreros indios libres de toda la región y mantuvieron altos por todas partes los salarios, con amargas quejas incluso de los mineros potosinos. Si bien los salarios más altos convirtieron la minería de galería en una empresa sumamente costosa, sin embargo dieron a los indios una alternativa bienvenida a las condiciones más duras de Potosí. Esta combinación de factores llevó a la organización de un poblamiento más permanente, convirtiéndose rápidamente la ciudad en una población chola animada y de empuje. También demostró ser una de las ciudades más abierta y violenta, en la que los mestizos incluso alcanzaban los niveles superiores del poder. Oruro se hizo famoso como un lugar relativamente indómito y que gustaba de la independencia política, lo que en el siglo XVIII llevaría a varias rebeliones importantes anticoloniales.

En lo que se refiere a su impacto regional, Oruro tuvo tendencia a reforzar los rasgos de mercado que ya venía induciendo Potosí. También se vio obligada a depender de la producción de mercurio de la zona baja peruana; también sacó el núcleo de su fuerza laboral de entre los indios altiplánicos aymaras. Como Potosí, la mayoría de sus alimentos procedían de los valles orientales, aunque en este punto Oruro incluso dependía más del sistema del valle cochabambino cercano, que se convirtió en el abastecedor individual más importante de víveres templados y semitropicales. Oruro reprodujo buena parte del impacto mercantil de Potosí porque también estaba situado en una zona agrícola fundamentalmente pobre y estéril, con lo que se veía forzado a importar la totalidad de sus bienes alimenticios.

Con la estabilización permanente de Oruro se cerraba el período básico del poblamiento hispánico en la tierras altas y valles orientales principales. Aunque en el siglo siguiente crecería y se ampliaría la frontera misionera de las tierras bajas orientales, la zona nuclear charqueña quedaba plenamente definida a comienzos del siglo XVII. A partir de entonces hasta fines del siglo XVII las poblaciones española y chola crecen constantemente, junto con un descenso lento pero evidente de la población india.

Es este un período de extraordinaria expansión urbana y de la riqueza de Charcas, que se prolongó hasta fines del siglo XVII, arrastrando consigo un auge cultural y artístico de envergadura. Pues la riqueza que manaba a ciudades tales de la región como Chuquisaca, Potosí, Oruro y La Paz condujo a una construcción masiva de templos y catedrales, con el crecimiento consiguiente de las artes plásticas.

Durante el primer siglo posterior a la conquista los españoles trajeron consigo a sus artistas e ideas estéticas. En el siglo XVI predominaron los artistas, artesanos y arquitectos españoles, italianos y flamencos, de los que muchos eran sacerdotes. En los templos tuvo su máxima expresión la vida artística de la colonia, pues los europeos gastaban con la máxima generosidad la riqueza que sacaban de las minas y de los indios en la construcción y ornato de los templos. Un templo de tamaño mediano requería decenios para su construcción y ornamento: con frecuencia era la construcción más costosa de toda la región. Un templo o monasterio grande podía absorber centenares de miles de pesos y equipararse a los ingresos reales totales de una ciudad.

Antes de 1600 la construcción de templos y actividad artística se concentraron en la Villa de Chuquisaca, capital administrativa y eclesiástica de Charcas. En este primer período las influencias predominantes fueron europeas, pues vinieron directamente de Europa artistas maduros para emprender la construcción, pintura y escultura que deseaban los colonos. Los eclesiásticos —trasladándose según las necesidades de sus respectivas órdenes— resultaban ser los artistas más accesibles y económicos que se tenía a mano aunque a fines de ese primer siglo comenzaron a llegar en gran número artistas seglares. Si bien se enseñaba a los indios los rudimentos de todas las artes plásticas (por doquier constituían la clase trabajadora), correspondió a los europeos proporcionar todos los modelos, ideas y técnicas iniciales. Supuesto el hecho de que la misma metrópoli era un centro artístico de importancia mundial durante la mayor parte del siglo XVI y buena parte del XVII, ya se podía pre-

decir que los estilos europeos más recientes —filtrados a través de los intereses hispánicos— predominarían en las colonias.

Durante la primera parte del siglo XVI las normas arquitectónicas estuvieron dirigidas por los temas e ideas renacentistas tradicionales, mientras que en las últimas dos décadas de siglo ya se puede advertir el crecimiento de las influencias mudéjares libéricas. En las artes plásticas las influencias fueron más variadas, pues los estilos italiano y flamenco de la época tuvieron un amplio impacto en los artistas emigrantes. Supuesta la riqueza de Charcas, las ciudades del altiplano podían recurrir a los artistas más avanzados que llegaban a América y pronto los templos de Chuquisaca estuvieron decorados por los mismos artistas que llevaban a cabo el florecimiento artístico de Lima e incluso de Sevilla. El más destacado de estos artistas primitivos que trabajaron en Charcas fue el jesuita italiano Bernardo Bitti, uno de los pintores más originales que trabajó en América en el siglo XVI. Como representante típico entre sus colegas, Bitti había madurado sus ideas formativas en Europa, siendo muy influido por Miguel Angel; residiría en todos los principales centros de la población del virreinato peruano, desde su llegada, en la década de los setenta, hasta su muerte en la primera década del siglo siguiente.

Durante los últimos decenios del siglo XVI el predominio de los artesanos europeos y blancos quedó desafiado por la aparición de los primeros artesanos indios y cholos; la escultura fue su primer campo de trabajo. Como desde el comienzo predominaban entre los indios los talladores de madera y picapedreros y fueron trabajadores y artesanos indios los que realizaron las construcciones de los templos más importantes bajo dirección europea, resultaba natural que comenzaran haciéndose sentir en la escultura. El más importante de estos artistas indios primitivos fue el escultor Titu Yupanki, de Copacabana. Formado por europeos en varias ciudades de Charcas, Yupanki se hizo famoso por su estilo tan original y por la importante escultura que realizó de una Virgen para su población natal de Copacabana, que se convirtió en imagen venerada en toda la región. Comenzando con formas europeas, Yupanki derivó rápidamente hacia su propio estilo y creó varias piezas importantes e innovadoras para templos locales.

Al llegar el siglo XVII hubo un cambio sutil pero importante de influencias y orígenes entre los artistas y artesanos de la región. Con la cantidad increíble de construcciones religiosas y civiles que se había producido, necesariamente habían surgido talleres importantes de europeos que habían necesitado formar

artesanos indios que les ayudaran en su trabajo. Una vez formados, estos oficiales encontraban fácilmente trabajo en el mercado charqueño. Como para construir y ornamentar por completo un templo se necesitaba decenios, los artesanos maestros tendían a comenzar los proyectos, pasando después a otros y dejando a sus ayudantes indios que completaran sus diseños; o bien fallecían y habían de ser reemplazados por aquéllos. Así, en el siglo XVI comenzaría a aparecer un nuevo estilo criollo desarrollado por artistas y artesanos indios o cholos de la región.

Mientras que en el siglo XVI y primera mitad del XVII la arquitectura y las artes plásticas pasaron por un auge decisivo, el primer siglo de dominio castellano no fue especialmente fecundo para las tareas intelectuales no artísticas. En muchos aspectos seguía siendo una ruda frontera minera, dominada por una mentalidad de nuevos ricos. Así pues, quedaron en manos de los sacerdotes y funcionarios gubernamentales las expresiones de una "alta cultura" intelectual; aquéllos, a su vez, estaban fundamentalmente preocupados por la conversión y gobierno de la población india. Dado el mercado intelectual limitado, Charcas no consiguió la imprenta hasta fines del período colonial, por los que sus escasos autores se vieron obligados a enviar sus obras a Lima o incluso a Europa para imprimirlas.

Fuera de las gramáticas y diccionarios de las lenguas aymara y kechua, la obra más importante producida por un escritor de Charcas en el siglo XVI fue, sin duda, el tratado de *Gobierno del Perú*, que escribió el oidor de la audiencia de Charcas, el licenciado Juan de Matienzo, en 1567. La obra de Matienzo, análisis profundo de las condiciones y formas de gobierno locales indias, tuvo una importancia fundamental para determinar los rasgos de las reformas toledanas. De la misma generación y clase como Matienzo, fue el encomendero y licenciado Juan Polo de Ondegardo. Interesado también en el gobierno y religión de los Indios, escribió varias relaciones sobre los Indios del Perú en la época pre-colombina y post — conquista de gran valor y penetración. Pero si dejamos a un lado a Matienzo, hubo en Charcas pocos escritores, si los hubo, en comparación con el grupo coetáneo de etnógrafos y cronistas del Cuzco y Lima. Los charqueños produjeron pocas obras de importancia sobre los tiempos precolombinos, a diferencia de la extraordinaria producción de escritores de las tierras bajas peruanas, tanto de ascendencia hispánica como india.

Los escritores españoles de Charcas se concentraron, más bien, en la segunda mitad del siglo XVI y primera del XVII en escribir sobre su propia historia posterior a la conquista. Los

misioneros escribieron las historias de sus respectivas órdenes y provincias o las historias de los templos locales; las más importantes son las que refieren a Copacabana. Por fin, la primera de una serie famosa de crónicas que se ocuparon de la historia potosina, fue también la más importante de entre estos historiadores primitivos: la *Relación* de Luis Capoche, escrita en 1585.

Los escritores de Charcas de este primer período colonial manifiestan, como rasgo más sobresaliente, un interés por el desarrollo presente y futuro de la región. Fue éste también un período en el que se había producido una intensa colonización, como reacción al nivel creciente de la producción de plata. Pero la crisis de producción argentífera que comenzó a sentirse en los decenios centrales del siglo XVII, tuvo un efecto adverso sobre las oportunidades económicas, sociales y políticas de los emigrantes llegados más recientemente. Este trasfondo de oportunidades en declive y de una creciente estratificación ayuda a explicar la serie de conflictos urbanos entre españoles, que se conoce con el nombre de "guerras civiles" del siglo XVII.

El más importante de estos nuevos conflictos urbanos se había de producir en el mismo corazón del sector exportador, es decir, en la Villa Imperial de Potosí. Los comienzos del siglo XVII demostrarían ser un período de conflictos particularmente intensos entre mineros y mercaderes españoles por el control de la industria minera, disputas que acabaron conduciendo a una guerra abierta entre los diferentes bandos. El más famoso de estos conflictos implicó una larga y prolongada serie de enfrentamientos violentos entre los vascos y los demás españoles (llamados genéricamente "Vicuñas", a causa del tipo de vestido que llevaban) por el control del gobierno municipal de Potosí. Esta llamada "guerra civil" entre Vicuñas y Vascongados tuvo lugar entre 1622 y 1625; fundamentalmente significó el intento de los Vicuñas por desalojar a los Vascos del control sobre las minas y del cabildo. A pesar de la cantidad de violencias, el número total de muertos fue relativamente pequeño y el resultado final fue que los mineros vascos tradicionales conservaron el poder.

Pero la creciente tensión entre españoles urbanos, que implicó luchas de poder de tipo semejante en muchos de los otros centros urbanos, era otro indicio de la gravedad de la larga decadencia económica que comenzaba a sentirse en las décadas centrales del siglo. Ya empezaban a agotarse los recursos disponibles y el acaparamiento de estos recursos por grupos decisivos significaba la eliminación de oportunidades para los europeos recién llegados pero sin contactos, que también deseaban amasar su fortuna. Habiendo fracasado en su intento por desalojar a

las élites atrincheradas en el control de minas e indios, los españoles recién llegados o más pobres emigrarían de Charcas durante el próximo siglo, con lo que comenzaría una decadencia de largo plazo en todos los principales centros urbanos. Así, pues, el fin del primer siglo de expansión económica iría seguido de período secular de depresión, que tendría profundos y prolongados efectos tanto en el sector urbano como rural de la sociedad y economía bolivianas.

CAPITULO III

SOCIEDAD COLONIAL TARDÍA: CRISIS Y CRECIMIENTO

Cuando a mediados del siglo XVII llegó a su cima la producción de plata tanto en Potosí como en Oruro y a continuación entró en una crisis secular, en Charcas se abrió un cambio fundamental en el espacio económico y en la organización social, siendo la región americana más profundamente afectada por la denominada 'crisis del siglo XVII'. El efecto más inmediato de la abrupta caída en la producción de la plata para el siglo que siguió fue una ininterrumpida disminución de la población en la mayoría de los centros urbanos de la región. Y esto dio lugar, a su vez, a una importante contracción de la economía regional, afectando a instituciones como las haciendas y las comunidades indígenas. Desde la perspectiva imperial, por entonces empezó a palidecer la importancia de Charcas. Ya a fines del siglo XVII la Nueva España superaba la producción minera andina global y se había convertido en la principal fuente fiscal española; desde su último cuarto de siglo Perú en general y Charcas en particular habían dejado de exportar a la metrópoli su renta excedente y de ser el centro del imperio español en el Nuevo Mundo.

La espectacular decadencia de las ciudades fue el primer efecto de la depresión de la minería de la plata: entre 1650 y 1750 cayó en picada tanto el número de mineros como el número de vecinos. Los *mit'ayuqkuna* mineros bajaron de unos 13.500 que desde los años 70 del siglo XVI trabajaban anual-

mente en Potosí (divididos en tres turnos de 4.500) a unos 2.000 a fines del siglo XVII. Esta disminución fue consecuencia de la reducción, tanto de la masa de 'originarios' en las 16 provincias mitayas (a causa ya sea de la muerte o de su huída al grupo de 'forasteros' o de *yanakuna*) como de la demanda minera. Esta disminución del mercado de mano de obra afectó gravemente a los indios libres mineros, de los que muchos retornaron al campo; pero esta depresión de la producción argentífera tuvo su mayor impacto en los blancos: por lo menos 100.000 blancos hispanohablantes dejaron los centros mineros y la región charqueña en busca de mejor fortuna en zonas económicamente más dinámicas del Imperio. En esta decadencia secular Oruro y Potosí perdieron más de la mitad de sus respectivas poblaciones: a mediados del siglo XVIII, si en Oruro quedaron 20.000 habitantes, en la Villa Imperial sólo subsistieron 30.000. Pero, de hecho, todas las ciudades de Charcas, o sufrieron pérdidas o se estancaron en su demografía.

La contracción de la demografía y de la producción de plata repercutió en la de los amplios mercados de retaguardia, cuya vida dependía de la de los centros mineros. El caso típico y mejor conocido de esto es Cochabamba, la importante región proveedora de alimentos: al disminuir las necesidades cerealeras de Potosí, la región circundante de La Plata se bastó para satisfacer la mayor parte de las necesidades mineras, ya que los productos cochabambinos eran más caros y, por tanto, menos competitivos. Así, pues, Cochabamba exportó menos de sus valles y se fue convirtiendo en una economía de subsistencia, que sólo exportaba sus excedentes de trigo y maíz al Altiplano cuando allí las cosechas locales sufrían graves crisis. Esta interrupción de sus importantes exportaciones significó, a su vez, el declive del poder de la clase hacendada de Cochabamba y la transformación de sus grandes propiedades en parcelas menores arrendadas. Como la mayor parte de las comunidades indígenas libres ya habían sido sustituídas por peones sin tierra en las haciendas de los españoles, esta fragmentación de la tierra condujo a la aparición de un nuevo sector de pequeños agricultores cholos que explotaban las propiedades arrendadas. Así Cochabamba se convirtió en el principal centro charqueño de una agricultura minifundista, no comunaria y a cargo de productores libres; sus españoles y cholos también se especializaron en

la producción textil, siendo su Valle Central un importante productor de tocuyos populares.

Al bajar la producción como efecto de la decadencia de los mercados urbanos y mineros, las haciendas que producían para ellos también fueron afectadas. Si durante la primera mitad del siglo XVII había tenido lugar un febril crecimiento de las haciendas, a fines de aquel siglo la depresión general en la mayoría de las regiones dio lugar a una disminución en su formación y expansión. Aunque a comienzos del siglo XVII la Corona había realizado periódicamente importantes ventas *('composiciones')* de 'tierras baldías', ésas se fueron haciendo más raras a medida que el siglo declinaba. En 1700 se había estancado la frontera entre las tierras de los *ayllu* indios y las de las haciendas españolas, particularmente desde que la población indígena se estabilizó dentro de sus nuevas *'reducciones'* post-toledanas.

La consolidación de la comunidad indígena quedó reforzada con su expansión demográfica, pues en Charcas el periodo de la gran depresión de la plata colonial coincidió con el periodo del repunte demográfico indígena: allí sólo a fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII (medio siglo largo después que en Mesoamérica) las poblaciones indígenas pudieron superar las enfermedades endémicas europeas con un índice de mortalidad similar a la de sus conquistadores europeos. Este cambio sólo se produjo en las décadas finales del siglo XVII; pero, una vez iniciado, se mantuvo como una tendencia durante el siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, cuando nuevas epidemias volverían a significar un importante freno a la expansión demográfica (pero para entonces se trató de nuevas enfermedades como el cólera, que afectaban a todas las clases y grupos étnicos). Hasta aquella época, en cambio, el crecimiento de la población rural fue impresionante, lo que impulsó un robustecimiento del sistema de comunidades libres.

Así, pues, la combinación de una menor presión sobre sus tierras y de un incremento demográfico dió paso a un importante periodo de crecimiento de las comunidades libres, coetáneo con el de decadencia urbana y minera. Al declinar la minería, disminuyeron las obligaciones de la *mit'a,* que se repartían sobre una población mayor. Las tasas tributarias sólo se

ajustaban con lentitud al número creciente de indios, lo que en cierta medida reducía la carga del tributo. En el campo también había más mano de obra y las comunidades comenzaron a incorporar inmigrantes: a cambio de su trabajo para los miembros 'originarios' de la comunidad, se les concedían unos derechos mínimos sobre tierras. Desde fines del siglo XVII hasta bien avanzado el siglo XIX las comunidades tendieron a crecer como efecto de la expansión de esta población inmigrante ('forasteros' o 'agregados'), En un censo parcial de 1646 estos nuevos migrantes representaban en promedio una cuarta parte de la población total del *ayllu*; en cambio, en el censo tributario de 1786, en La Paz (que contenía la mitad de la población indígena de Charcas), ya constituían más de la mitad. Esta estratificación interna de las comunidades indias les permitió acumular excedentes e incluso promover la construcción de templos en sus pueblos: de hecho, los años finales del siglo XVII y los iniciales del siglo XVIII fueron de un importante florecimiento artístico entre los artesanos indígenas que por entonces trabajaron en los templos altiplánicos. Comunidades y *kurakas* impulsaron, a la par, esas construcciones; y los segundos patrocinaron a los artesanos cholos e indios que construyeron y decoraron esos templos. Aunque la Corona controlaba los fondos comunales y a menudo obligaba a las comunidades a conceder préstamos hipotecarios a los hacendados españoles, con el retardamiento en la expansión de las haciendas también disminuyeron la necesidad de tales fondos y la presión sobre las Cajas de Comunidad, lo que les permitió retener una parte mayor de sus ingresos.

La crisis minera de fines del siglo XVII también llevó a un cambio en la importancia relativa de determinados distritos de Charcas. A diferencia de Oruro, Potosí y La Plata, la ciudad de La Paz sólo pareció haberse estancado y esto solamente por un corto periodo final del siglo XVII; luego retomó su crecimiento, de manera que a mediados del siglo XVIII se convirtió con sus 40.000 habitantes en la ciudad más populosa de todo Charcas. El crecimiento de La Paz por entonces y la relativa decadencia en el resto de las ciudades se puede atribuir en gran medida al crecimiento de la producción y de los mercados indígenas locales: con su retaguardia de alrededor de 150.000/ 200.000 campesinos indígenas (cerca de la mitad de la pobla-

ción indígena total charqueña), La Paz florecía como un importante centro administrativo y mercantil, tanto para la región más densamente poblada del Altiplano como para los valles orientales yungueños, por entonces los principales productores de *coca;* en esos valles se encontraban las más ricas comunidades indígenas (importantes productoras de *coca*) y los españoles recién llegados que comenzaron a terraplenar tierras baldías y a plantar arbustos de coca para producir su tan deseada hoja.

La élite española provincial basaba su renta en el comercio regional y en la producción agrícola: se había convertido en una importante élite terrateniente después de las composiciones de tierras que la Corona había llevado a cabo en la región, sobre todo las de los años 40 del siglo XVII, lo que permitió comprar tierras a un muy gran número de mercaderes españoles y pobladores locales acomodados; durante el último cuarto del siglo XVII lo hicieron sobre todo los criollos: por entonces la mitad de los miembros ricos de la comunidad había nacido en La Paz, sólo un 20 % procedían de la metrópoli y 30 % restante era de otras regiones americanas y europeas. Como podía esperarse, había más criollas que criollos y por entonces en la élite ya figuraba una gran gama mestiza (a causa de la escasez que a lo largo de todo el periodo colonial hubo de españolas metropolitanas). Todavía resulta más elocuente del carácter más abierto de esa élite frente a la de la metrópoli o, incluso, a la de otros centros más avanzados de América, la incidencia extraordinariamente alta de nacimientos ilegítimos entre sus mujeres: en la parroquia de españoles de San Agustín, entre 1661 y 1680 más de la mitad de los hijos de esas mujeres de la élite fueron registrados como ilegítimos, índice extraordinariamente alto aun para los niveles de las élites americanas.

Con sus mercados locales en expansión, el consumo indígena en ascenso y la mayor población rural de Charcas, La Paz también se convirtió en el centro de una producción coquera en incesante crecimiento: producto restringido a la élite precolombina, la *coca* se había convertido en un rubro básico de consumo para los mineros y demás trabajadores andinos. Desde los tiempos más remotos había sido cultivada en los valles tropicales de *Yungas* situados al oriente de La Paz: las comunidades aymarófonas locales habían terraplenado y trabajado esos valles escarpados; por entonces también la élite hispanófona local

los hizo objeto de explotación. Uno de esos propietarios de 'cocales' era Don Tadeo Díez de Medina, nativo y vecino paceño, quien entre 1750 y 1790 se convirtió en el principal hacendado de Charcas; con el patrimonio acumulado con su actividad mercantil durante la primera mitad del siglo, sólo después de su primer matrimonio en 1752 adquirió propiedad rural; pero gracias a ese matrimonio y a las incesantes compras, pudo invertir grandes sumas de su capital de origen mercantil en terraplenar y plantar nuevos cocales. Siguiendo el ejemplo anterior de las comunidades indígenas, también compró importantes haciendas en el Altiplano y en otras regiones vallunas, con lo que organizó un sistema agrícola multiecológico, en el que con frecuencia trocaba hoja de *coca* de sus fincas yungueñas por queso, lana, carne y otros productos de sus haciendas altiplánicas. Aunque era un mercader muy rico, no incursionó en la minería que era una actividad muy especializada.

El más extraordinario de los especialistas mineros/mercaderes de mineral/ fundidores de ese periodo fue probablemente Antonio López de Quiroga, llegado de Galicia a Potosí en 1648 y que falleció allí en 1698. En las primeras décadas del siglo XVII la industria minera potosina había alcanzado su pleno desarrollo: funcionaban con energía hidráulica unos 72 ingenios de molienda y amalgamación; contaba con unas 30 represas y sus correspondientes sistemas complejos de canalización que llevaban el agua a los ingenios. A pesar del declive de la población indígena, siempre hubo una suficiente disponibilidad de mano de obra, si no de ***mit'ayuqkuna***, de ***mink'ayuqkuna.*** El verdadero problema fue el creciente descenso de la riqueza del mineral. Aunque se realizaron nuevas exploraciones y numerosos experimentos para tratar de acceder a vetas siempre más profundas, casi todas las minas antiguas tenían problemas con la inundación de las galerías y con los altos costos de extracción. Los beneficios decrecientes de la minería dieron lugar a cada vez mayores tensiones locales: entre 1622 y 1624 los no vascos denominados 'vicuñas', intentaron expulsar del poder local al grupo hegemónico vasco, originando una espiral de violencia que costó la vida a 64 potosinos; finalmente los vascos se impusieron y en 1625 la justicia real puso fin al conflicto; pero subsistió la causa originaria: la incesante decadencia de las ganancias mineras. En esta nueva fase de mayor dificultad, la ori-

ginalidad de López de Quiroga consistió en la idea de invertir enormes sumas para resucitar la minería abriendo socavones que permitieran acceder a las importantes betas inferiores del Cerro Rico, de manera que se secaran las antiguas galerías inundadas y se pudiera llegar desde abajo a nuevos filones de plata. López de Quiroga procedía de un estrato español superior; se familiarizó con el mundo minero como 'mercader de plata'; sus extraordinarios éxitos en esta ocupación no sólo lo enriquecieron, sino que le dieron un conocimiento íntimo de la industria; a fines de los años 50 ya arrendaba minas y poseía dos ingenios, incautados a prestatarios insolventes. Estas inversiones eran todavía relativamente modestas, pues su actividad principal seguía siendo la compra de plata por quintar y el aviamiento de 'azogueros' (mineros y fundidores). Una década más tarde explotaba 12 minas, pero comenzó a agruparlas en unidades mayores mediante la apertura de grandes galerías que atravesaban varias betas y galerías menores. El genio de López de Quiroga fue acceder a betas antiguas y abandonadas: a fines de los años 60 ya se había convertido en el mayor fundidor de Charcas, lo que le proporcionaba los fondos para abrir socavones mucho más onerosos: galerías horizontales excavadas por debajo de la capa acuática y que pasaban por debajo de muchas minas antiguas abandonadas; éstas, al evacuar el agua, podían entrar de nuevo en explotación. Para los socavones abiertos en diversos centros mineros utilizó por primera vez en América barrenos de pólvora; gastó en ello seis años y varios centenares de miles de pesos en cada uno de ellos. Los cinco socavones que en 1689 había abierto en el Cerro Rico sumaban una longitud de casi dos kilómetros. Sus esfuerzos y los de otros mineros por resucitar viejas minas llevaron a una estabilización temporal de la producción en el último cuarto de siglo (1660-1690), pero aun ellos no tardaron en demostrar que eran de escasa eficacia. Además, después de su muerte la industria minera quedó mucho más fragmentada, sin que hasta el siglo XIX ningún minero particular jugara un papel tan hegemónico en la producción.

En 1689 López de Quiroga patrocinó a su sobrino en una de las últimas expediciones de conquista de los llanos de la Alta Amazonia: en este caso, de la región nororiental de Mojos. El resultado fue un fracaso total: el siglo XVI y comienzos del XVIII ya había pasado la época de ampliar la frontera civil,

pues desde entonces jesuitas, franciscanos y otras órdenes religiosas acabarían poblando parcialmente esta región fronteriza de indios 'salvajes' mediante la famosa frontera misionera. En 1587 los jesuitas fundaron una residencia en Santa Cruz de la Sierra y comenzaron a aprender guaraní, chané y otras lenguas indígenas de la región. Desde los años 90 se fueron aventurando por las regiones septentrionales pero no obtuvieron permiso para fundar reducciones hasta el último cuarto del siglo XVII y entre 1682 y 1744 terminaron fundando en Mojos unas 25 reducciones, con unos 30.000 indios; en 1701 publicaron la primera gramática de la lengua arawak que se hablaba en la región. Ni las enfermedades europeas, ni la indocilidad o la rebelión de los indios pudieron destruir la cultura reduccional, que sobrevivió incluso a la expulsión de los jesuitas en 1767; sólo la explotación de la cascarilla y la recolección de la goma en el siglo XIX asolarían los antiguos pueblos misioneros. Al sur de Mojos se organizó otro estilo de república misionera: en la Provincia de Chiquitos, entre 1691 y 1760 fueron fundadas unas 10 reducciones de indios, que con sus plantaciones y rebaños albergaron unos 20.000 indios neófitos; en ellas levantaron algunos magníficos conjuntos y templos misioneros, que han sobrevivido hasta nuestros días. Aquí y en Mojos los jesuitas tuvieron que luchar contra las incursiones de tropas portuguesas en busca de esclavos indígenas, para lo que –como en Paraguay- tuvieron que armar y defender sus reducciones. En los confines de la ciudad de Tarija surgió un tercer centro de actividad misionera: aunque los jesuitas y los dominicos trataron de establecer reducciones entre los Chiriguano, Macobies, Toba y otras etnias de la región del Gran Chaco, fueron los franciscanos del Colegio de Propaganda Fide quienes a partir de los años 70 del siglo XVIII lograron arraigar en la Cordillera.

Aunque la frontera oriental había sido escenario de intensa actividad a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, para Charcas nuclear la prolongada depresión económica había dado lugar a cambios estructurales de largo efecto irreversibles hasta muy avanzado el siglo XIX. Si bien la producción y exportación de plata iniciaría una larga recuperación en los años 50 del siglo XVIII y se desarrollaría una próspera industria, su máxima producción sólo llegaría a la mitad de la producción de

fines del siglo XVI. Por esta razón el auge tardocolonial de la plata no pudo renovar las poblaciones urbanas: las poblaciones charqueñas de españoles, con mano de obra india y mestiza nunca resucitaron. La producción aumentó, pero lo hizo sobre la base de unas poblaciones urbanas relativamente estancadas (por lo menos en la mayoría de los centros mineros). Esto significó que el desarrollo de la industria minera de fines del siglo XVIII, aunque fue importante para resucitar los lazos económicos regionales de los productores locales, no pudo recobrar plenamente el enorme mercado panandino que había existido antes de la crisis: las actuales vinculaciones entre mercados locales y centros mineros habían perdido buena parte de su importancia o habían desaparecido por completo.

Aunque el siglo XVIII para Charcas colonial demostraría ser un periodo relativamente productivo y de gran desarrollo en la vida artística e intelectual, el crecimiento de los sectores urbanos y de las economías regionales fue muy modesto en comparación con las glorias de los siglos XVI y XVII. Por otra parte, en la producción total americana, Potosí era entonces una fuente claramente secundaria de producción argentífera: desde fines del siglo XVII hasta el final de la Colonia la ininterrumpida expansión novohispana hizo que Charcas quedara como un productor relativamente secundario, incluso a pesar de su recuperación de la segunda mitad del siglo XVIII. Potosí y Oruro, a pesar de su producción disminuída, seguían siendo fuentes importantes de plata del mercado mundial; pero no eran su centro hegemónico, ni siquiera dentro de los Andes: en el Virreinato peruano surgieron otros lugares de producción. A diferencia del Virreinato de la Nueva España, donde la Corona podía exportar anualmente grandes cantidades de moneda a la metrópoli, las colonias peruanas sólo generaban suficientes ingresos fiscales para pagar la burocracia real de la mitad meridional sudamericana. Por tanto, para Charcas el auge del siglo XVIII fue un asunto relativamente frágil y limitado, que no sobreviviría a una serie de problemas estructurales, mercantiles y políticos que surgieron a comienzos del siglo XIX. A pesar de su limitación, la minería charqueña siguió representando el sector industrial de mayor importancia en la región: así, durante la segunda mitad del siglo XVIII tuvo lugar una importante lucha de poder

para controlar la Audiencia de La Plata, que enfrentó a los antiguos gremios mercantiles de Lima y Cuzco con el poder creciente de los nuevos grupos de mercaderes de Buenos Aires.

A fines del siglo XVI se había definido el emplazamiento final de la ciudad portuaria de Buenos Aires, empezando a nacer una pequeña pero próspera economía regional basada en el comercio local y la ganadería; pero este crecimiento fue muy limitado hasta la segunda mitad del siglo XVIII. La ciudad y su retaguardia pudieron utilizar su principal ventaja (su puerto marítimo y sus rápidas conexiones europeas) para promover su desarrollo. Aunque el contrabando ciertamente campeaba en Buenos Aires, su verdadero crecimiento sólo llegó cuando la Corona española cambió de política y se abrió al libre comercio imperial. Una vez estuvo oficialmente permitido el comercio entre Buenos Aires y Europa por un lado y entre Buenos Aires y el de su interior por otro, el crecimiento regional fue formidable. Ya desde fines del siglo XVII la Corona vino demostrando interés por esa capacidad de crecimiento al obligar a Potosí que enviara a Buenos Aires un 'subsidio' anual que contribuyera a sufragar los gastos administrativos y a financiar sus prolongados conflictos con las incursiones que Portugal estimulaba desde su colonia brasileña en el estuario del Río de la Plata.

Más adelante, en 1776, la Corona decidió en favor de Buenos Aires su creciente conflicto con Lima por el control del comercio con Potosí: creó el nuevo Virreinato del Río de la Plata. Charcas y el gobierno audiencial pasaron a formar parte del mismo; dos años más tarde el triunfo bonaerense quedó todavía reforzado cuando se suprimieron la mayor parte de las restricciones comerciales que seguían pesando sobre el nuevo Virreinato. Estas determinaciones políticas fueron decisivas para trasladar la preponderancia potosina del norte al sur: si hasta entonces la ruta meridional sólo había incluído importaciones de las ciudades tucumanas (mulas y víveres) y del Paraguay (yerba mate). En adelante orientó todo su sistema de exportación hacia el sur abriendo una importante nueva vía exportadora que, atravesando sus antiguas ciudades satélites de Tucumán, desembocaba en el puerto de Buenos Aires.

La reorganización del espacio económico charqueño y de sus conexiones con el mundo exterior significó la correspon-

diente decadencia de Lima. Los mercaderes limeños perdieron el monopolio sobre el comercio de Charcas con Europa, que también dejó de ser su principal fuente particular de capital. Esta decadencia en el dominio mercantil sobre su retaguardia minera causó el lento ocaso del poder económico limeño, lo que –a su vez- permitió el crecimiento de otros centros regionales de poder económico. El principal entre ellos fue, naturalmente, Buenos Aires; pero también la relativamente marginal Capitanía General de Chile encontraría una ocasión de crecimiento, que se desarrolló rápidamente a expensas del anterior monopolio de Lima. Así, pues, la reorganización de los vínculos comerciales de Charcas con Europa, si por una parte reflejaron los cambios de largo plazo en el poder económico y político relativo de las diferentes regiones sudamericanas, por otra contribuyó a consolidarlos en tal medida, que el poder del propio Perú y, en menor medida, de Charcas quedó muy venido a menos, pasando a manos de regiones nuevas y más dinámicas como Chile y, sobre todo, el Río de la Plata.

Todas estas tendencias siguieron haciéndose sentir, naturalmente, mucho más allá del siglo XVIII y tuvieron importantes consecuencias para la posición y el poder relativos de los gobiernos republicanos; pero en las primeras décadas del siglo XVIII apenas si se insinuaban estos cambios de largo plazo. Por otro lado, al crear el nuevo Virreinato, la Corona esperaba seguir estimulando la economía exportadora de Charcas: así, la Audiencia de La Plata no tardó en ser dotada de un grupo de funcionarios sumamente capaces y de unos antecedentes extraordinariamente amplios, cuyos esfuerzos se dirigieron ante todo a resucitar la industria minera de la plata en Oruro y Potosí por todos los medios posibles. Como se encargaría de demostrar la evolución posterior, era perfectamente claro que en las zonas mineras charqueñas seguían abundando las vetas de plata ahora había que dar con ellas a mayor profundidad, la mayoría de las veces por debajo de las capas acuáticas mezclada con mayor frecuencia con otros metales y en unos minerales de una calidad inferior a lo que venía sucediendo en épocas pasadas. El derrumbe de la producción de plata era efecto, más que del agotamiento de los yacimientos minerales mismos, del agotamiento de los yacimientos más ricos y más accesibles superficiales o casi superficiales.

Para acceder a este nuevo nivel de yacimientos argentíferos habría que hacer grandes inversiones de capital y la industria minera charqueña era incapaz de generar estos montos de capital; era, pues, necesario que la Corona aportara el apoyo financiero que se requería para excavar una minería de pozo más profundo. La Corona sólo reconoció esta necesidad en el siglo XVIII. En 1736 aceptó rebajar el impuesto del 20 % (cuma') al 10 % ('décimo') de la producción total, decisión que ya había tomado mucho antes en la Nueva España. Luego, en 1779 insistió en la creación de un banco de compra del mineral (Banco de Rescates de San Carlos) que en los años 40 los azogueros habían creado como una institución crediticia y que en 1752 se había convertido en una institución semioficial para la compra de minerales. La compra directa de la plata refinada por el banco eliminó la intervención de los 'mercaderes de plata' o 'rescatadores' garantizando así altos precios a los azogueros y mineros y, lo que era todavía de mayor importancia, ofreciendo crédito para la compra de pertrechos mineros. Resumiendo: puso orden en el caos del mercado capitalista local. Cuando el banco entró en una grave crisis en los años 70, se había convertido en una institución tan importante, que la Corona se vió obligada a hacerse cargo del mismo apoyando directamente su funcionamiento. Finalmente, la Corona, no sólo reorganizó el mercado del azogue después del derrumbe de la producción de Huancané en los años 70 trayéndolo por Buenos Aires en grandes embarques desde la metrópoli (Almadén), sino que subsidió su precio. En 1784 fue reducido para los mineros locales en casi el 20 %.

Mientras la población potosina siguió reduciéndose desde unos 50.000 (en los años 50) hasta unos 35.000 (en los años 80), desde 1730 la producción comenzó a repuntar, particularmente desde la sistemática asistencia prestada por la Corona. Después de cierto debate, la *mit'a* (reducida a unos 2.500 indios anuales) acabó siendo mantenida y reforzada, aportando una base laboral decisiva a los mineros, pues, a pesar de su drástica disminución numérica, a fines del siglo XVIII los mitayos seguían representando cerca de la mitad de los obreros de interior mina, con lo que seguían constituyendo la diferencia crítica entre ganar o perder en las minas de Potosí.

Sostenidos por las subvenciones reales y la *mit'a*, a fines del siglo XVIII los mineros charqueños pudieron impulsar un

crecimiento constante de la producción minera. Esto estuvo emparejado con un crecimiento del sector agrícola de la economía y con un crecimiento general de la población rural. Aunque este vigoroso sector agrícola estaba limitado a los mercados regionales y andinos, su actividad era suficientemente viva para dar a la Corona crecientes ingresos en forma de pago de alcabalas (impuesto a las ventas) y de tributo indígena: a fines del siglo XVIII, en Charcas el tributo se había convertido en la segunda fuente principal de ingresos de la Real Hacienda.

Este aumento de la importancia de los ingresos del tributo se debía fundamentalmente a tres fenómenos independientes del siglo XVIII. El primer y naturalmente más importante factor fue la tendencia de larga duración (iniciada ya en el siglo XVII) del crecimiento de la población rural. El segundo fue que la reducción de la explotación de esa misma población por efecto de la crisis minera, permitió a las comunidades libres recuperar sus recursos y desarrollar más su producción local. El tercero, que el tributo fue extendido a todos los varones indígenas, sin consideración de su condición jurídica en el uso de la tierra, lo que a su vez transformó profundamente las cargas y la extensión de todo el sistema fiscal tributario.

Como la mayor parte de los productos agrícolas que los indios comerciaban entre si o producían para los mercados locales estaba exento de impuestos, la Corona se vió obligada a apoyarse en su impuesto tributario como el principal mecanismo, tanto para obligar a los indios a que acudieran a los mercados españoles como para que aportaran ingresos directos a la Corona; pero, dadas las leyes fiscales, la Corona sólo gravó a los 'originarios' de las comunidades y a pesar del crecimiento general de las poblaciones indígenas rurales, su número se mantuvo estable o se redujo. Esta incapacidad de los 'originarios' para crecer al mismo ritmo de los demás sectores indígenas fue obviamente relacionada con el hecho de que la *mit'a* y las cargas fiscales hacían de la condición 'originaria' algo sólo atractivo para los campesinos más ricos. Incluso la Corona reconoció que estaba destruyendo este sector jurídico de los 'originarios' en propio perjuicio, por lo que en 1734 acabó aceptando el dictamen de los Oficiales Reales locales, extendiendo el tributo a todos los indios.

Aun manteniendo su reconocimiento de las diferencias locales, la Corona ahora dispuso un impuesto fijo de cinco pesos anuales para todos los 'forasteros' que vivían en comunidades y para los *yanakuna* que vivían en las haciendas de los españoles: los primeros habían de pagar su propio tributo; los hacendados pagaban, en cambio, el de los segundos (lo que era otro estímulo para que la mano de obra rural emigrara a las haciendas); pero en ambos casos esta ampliación del tributo a todos los indios del campo significó en los años que siguieron un aumento de los ingresos tributarios entre un 50 y un 66 %; por otro lado, estabilizó el sector de 'originarios', pues ya no eran tan grandes como antes las ventajas para cambiar de condición jurídica.

Con la carga tributaria distribuída más equitativamente y con unos impuestos relativamente fijos, el aumento demográfico rural estuvo en mejores condiciones para hacer frente a la extracción estatal y privada del excedente, sobrevivir y gozando de cierta prosperidad. Asimismo, aunque la Corona mantuvo la *mit'a* como una institución imprescindible para la prosperidad de la región de la minería de la plata, no incluyó a los 'forasteros' ni *yanakuna* en el número de mitayos, con lo que el peso regional de la obligación de la *mit'a* quedó muy reducido con respecto a la carga de los siglos XVI y XVII.

Los indios de comunidad también sufrieron menos molestias de parte de las haciendas: aunque el resurgimiento minero había aumentado la demanda en los mercados urbanos locales, ésta fue satisfecha poniendo en explotación haciendas con una productividad marginal o revitalizando la producción en las mejores. De hecho dio lugar a una poco importante expansión del sistema hacendario, que mostró una relativa estabilidad durante todo el siglo XVIII. Así, la creciente población indígena no tuvo que enfrentar los problemas de una invasión masiva de las haciendas.

Pero, a pesar del relativo aflojamiento de la explotación en la creciente población indígena campesina, ésta permaneció agriamente opuesta a sus autoridades. Eran especialmente odiosas las interminables exacciones de los Corregidores locales y sus ventas forzadas de mercancías a las poblaciones indígenas (los denominados 'repartos de mercancías'). Aunque las mulas

y otras mercancías que compraban los indios les eran de utilidad para sus labores, se sentían agraviados por el carácter forzado de esas ventas y los métodos brutales de su cobro. Por otro lado, fueren cuales fueren los aspectos positivos del sistema de dar crédito a los trabajadores más pobres de la sociedad, los Corregidores, angurrientos de dinero, tenían fama de abusar del sistema en todas las formas que les era posible. Los indios también odiaban los trabajos obligatorios locales que a menudo beneficiaban más los intereses de los españoles que los del Estado. Por otro lado, los *caciques* se encontraban permanentemente atacados en sus propios privilegios y explotados por los españoles, viéndose acorralados contra la pared para defender sus funciones directivas, en creciente erosión. Finalmente, la Iglesia más letrada y culta del siglo XVIII no cedía ni un milímetro en la oposición a la actividad pagana propia de los ideólogos eclesiásticos de los siglos anteriores, lo que daba lugar a un interminable ataque contra los sistemas de creencias religiosas indígenas, obligando a los indios a una permanente defensa.

Este conjunto de factores contribuye a explicar la masiva rebelión indígena que en 1780 explotó en Charcas y en la región cuzqueña, precisamente en el punto álgido de la expansión demográfica y de la recuperación económica y social del siglo XVIII. Los levantamientos de la Gran Rebelión de 1780-1782, indígenas en el campo y mestizos o criollos en las ciudades, no eran nuevos ni en Charcas ni en el Imperio español: en Charcas los levantamientos comunales o incluso provinciales se sucedieron durante todo el periodo colonial. Siendo por lo general reacciones a causas locales inmediatas, esas rebeliones solieron producirse en las comunidades libres a causa de los abusos tributarios del Corregidor local que se excedía en las medidas aceptadas de explotación, de conflictos por la tierra con gente no indígena o, sobre todo, de la interferencia española en el nombramiento de *caciques* locales. Estas rebeliones también fueron comunes en las ciudades, donde podían ir desde alborotos locales de subsistencia en épocas de crisis y de acaparamiento de alimentos hasta las protestas contra los impuestos locales o los funcionarios reales. En los años 30 en Oruro y Cochabamba se había producido este tipo de movimientos o conspiraciones.

Pero todas esas revueltas endémicas solían ser efímeras y de un carácter absolutamente local, lo que no solía exigir sino

un alivio temporal de los impuestos o el retiro de los funcionarios corruptos. La consigna de esas revueltas solía ser 'Viva el Rey y mueran los malos gobernantes'. Esos movimientos eran una parte esencial del gobierno local y todos los reconocían como un desfogue más o menos normal de la protesta local. Esto no excluía que la represión pudiera ser absolutamente violenta, con abundantes muertes. A diferencia de situaciones comparables en Europa, se hacía evidente que, dentro del marco de la opresión general y sistemática de las masas indias, estos alborotos provocaban en las autoridades unas medidas más violentas que las que habrían adoptado en otras circunstancias. Pero se conocían bien los rasgos de ese tipo de movimientos, por lo que el Gobierno nunca se sintió gravemente amenazado en su poder supremo por esas típicas protestas locales.

En este orden de cosas, la Gran Rebelión de 1780-1782 se apartó profunda y radicalmente de aquella tradición. Fue masiva en participación y amplitud: es probable que, en conjunto, los rebeldes llegaran a 100.000; tuvo una coordinación relativamente buena desde las alturas andinas del Cuzco y Charcas hasta el actual norte argentino; fue una rebelión policlasista, multicasta y extremadamente bien llevada, que en último término se proponía la instauración de un territorio autónomo gobernado por los indígenas del lugar y con exclusión de cualquier español. Se trataba, en resumen, de un movimiento independentista. Aunque la dirección viniera de un representante disidente de la clase de los *caciques* cuzqueños, hubo una participación muy importante de los dirigentes autóctonos de Charcas y muchas de las batallas decisivas tuvieron lugar en su territorio. Los dos dirigentes rebeldes más importantes fueron los Aymaras Tomás Katari, *cacique* del pueblo de San Pedro de Macha, en la Provincia de Chayanta, y el comunario Julián Apaza, que adoptó el nombre de guerra Tupaq Katari cuando se impuso como el principal dirigente militar de la rebelión en la región paceña.

El caso de Tomás Katari es una historia verdaderamente extraordinaria. Despojado en 1777 de su cargo tradicional de *cacique* por el Corregidor español local, Katari, analfabeto y monolingüe, en los cuatro años siguientes utilizó todos los recursos jurídicos posibles para ser restaurado en el cargo: desde los memoriales a la Audiencia platense hasta un viaje a la sede virreinal de Buenos Aires para que el Virrey le oyera, defendió

con éxito su causa en todas las instancias de gobierno y por lo general triunfó. Pero los funcionarios locales corruptos, no contentos con seguir haciendo caso omiso de los decretos que le restablecían en el cargo, lo apresaron varias veces; temerosos del poderoso apoyo local de que gozaba, mataron a su principal aliado Isidro Achu, otro *cacique*; luego, en enero de 1781, ordenaron sigilosamente su asesinato, dentro ya del desbarajuste de la Gran Rebelión de 1780-1782. Está probado que mientas defendía su causa, Katari también organizó fuerzas poderosas de oposición al dominio español y entabló contactos oficiales con el movimiento de Tupaq Amaru. Al morir, su hermano y su primo dirigieron una masiva rebelión india que cercó la ciudad de La Plata.

Más amenazante para los españoles fue el comunario Julián Apasa (o como fue conocido en honor de sus dos héroes, Tupaq Katari): sin las pretensiones tradicionales de lealtad ante sus seguidores indios, se perfiló como uno de los principales dirigentes militares en el curso de la misma rebelión y sólo por sus capacidades personales pudo organizar y dirigir un poderoso ejército indio de 40.000 personas. Mercader itinerante de coca y ropa, era un simple 'forastero' de la región de Sica-Sica, teniendo apenas 30 años cuando sobresalió en medio de la rebelión de 1780. Poco sabemos de sus antecedentes: que estaba casado con Bartolina Sisa (que actuó como uno de sus lugartenientes en la guerra), que ni parece haber hablado español ni sabido leer ni escribir; pero demostró ser un dirigente militar capaz, generando intensas lealtades entre sus seguidores.

La rebelión tuvo sus preliminares mucho antes de su inicio oficial (en noviembre de 1780), en los contactos que su caudillo principal José Gabriel Tupaq Amaru tuvo con muchos importantes *caciques* de Charcas y de la región cuzqueña; también con Julián Apasa y otros posibles dirigentes rebeldes. Descendiente directo de los *Inqa* e importante *cacique* del Obispado del Cuzco, Tupaq Amaru era un miembro bien formado y letrado de la nobleza andina; gracias a la legitimidad de su ancestro y a su indiscutible inteligencia pudo convencer a una importante minoría de *caciques qhishwa* y a unos pocos nobles aymaras de que había que destruir el dominio español.

En el desarrollo de la rebelión hay que distinguir dos fases principales: **la primera** fue la rebelión dirigida personal-

mente por Tupaq Amaru, quien se apoderó de la mayor parte de la Provincia del Cuzco, ciudad que asedió desde noviembre de 1780 hasta marzo de 1781; participando gran número de tropas por uno y otro lado, los españoles locales pudieron romper finalmente el cerco y apresar a Tupaq Amaru y a su estado mayor. Pero la ejecución de su dirigente no detuvo ni la expansión de la masiva rebelión ni la adhesión a la rebelión de los dirigentes disidentes locales. **La segunda** comenzó precisamente cuando era reprimida la actividad cuzqueña y tuvo a Charcas como su principal escenario. En enero de 1781 y con el asesinato de Tomás Katari comenzó la rebelión de Chayanta, dirigida por sus primos; en marzo Andrés Tupaq Amaru (sobrino de Gabriel) se apoderó de toda la Provincia de Larecaja y la ribera oriental del Titicaca: después de un asedio de tres meses se apoderó de la ciudad de Sorata (VIII-1781), donde mató a todos los españoles; luego se dirigió a El Alto, donde se unió a Tupaq Katari en el cerco puesto a la ciudad de La Paz (de marzo a junio y de agosto a octubre de 1781); aunque la ciudad nunca cayó en sus manos, en las batallas y escaramuzas perdió la vida aproximadamente la mitad de su población. En noviembre los ejércitos de ayuda acabaron rompiendo el cerco y capturando a Katari.

Entretanto, en febrero de 1781 había explotado en Oruro un alzamiento criollo urbano, dirigido por Jacinto Rodríguez de Herrera: los rebeldes, estrechamente aliados con Tupaq Amaru, lograron desbancar a los peninsulares del control de la ciudad. Éste fue el mayor apoyo mestizo y criollo que los *cacique* indios recibieron y Oruro fue la mayor ciudad española de que se apoderaron los rebeldes. Aunque Rodríguez actuaba en estrecho entendimiento con los *cacique* locales, la alianza entre indios, mestizos y criollos no fue fácil, pues no tardaron en dejarse sentir las diferencias de clase. También aquí las fuerzas reales acabaron reconquistando la ciudad y ejecutando a los principales rebeldes. El último grupo que se unió a la rebelión fueron los artesanos mestizos de Tupiza, quienes en marzo de 1781 asesinaron al Corregidor local; pero este movimiento fue rápidamente dominado, por lo que sólo tuvo un impacto local.

Pero la derrota de los rebeldes no fue solamente una guerra de castas: en realidad, la mayoría de los *caciques* aymara y un número muy importante de nobles qhishwa se opusieron a los rebeldes y combatieron encarnizadas batallas con ellos jun-

to con sus propios seguidores indios y tropas españolas aliadas. En realidad, en esas batallas intraétnicas los rebeldes arrasaron un gran número de casas nobles indias. La mayor parte de los *caciques* aymaras de la ribera meridional del Titicaca se unieron a la causa real y muchos de ellos murieron al enfrentarse a los ejércitos de Tupaq Amaru. Éste fue el caso del *cacique* Agustín Siñani de Surata, quien en los años 60 había costeado las extraordinarias pinturas en que figura con su familia y que se conservan en el templo de Q'araphuq'u (una de las obras clásicas del Barroco mestizo del siglo XVIII); murió defendiendo Surata de las tropas de Andrés Tupaq Amaru. Otro fue Dionisio Mamani, *cacique* de Chulumani, en los valles bajos de los *Yungas* coqueros: organizó militarmente a sus vasallos indígenas para combatir a los rebeldes, libró varias batallas contra ellos, fue obligado a huir a Cochabamba y acabó sus días en su comunidad nativa en una encarnizada batalla con los rebeldes, que destruyeron su casa y sus plantaciones. Otro fue Manuel Antonio Chuquimia, de la comunidad lacustre de Copacabana, quien -como Mamani- se unió al ejército de Sebastián de Segurola y en sus funciones oficiales de Juez Pacificador se mostró particularmente represor. Aunque algunos de los *jilaqata* y otros dirigentes de sus comunidades se unieron a los rebeldes, la nobleza aymara, como clase, tendió a mantenerse leal: en ello pudo haber influído el hecho de que el máximo dirigente de las tropas rebeldes aymaras era un comunario y no un miembro de su clase.

A fines de 1781 la rebelión había sido aplastada en la mayorías de las comarcas rurales y todas las ciudades capturadas habían vuelto a poder de los españoles. Los dirigentes rebeldes fueron ejecutados en la forma brutal acostumbrada; se procedió a una masiva confiscación de propiedades. Todos los *caciques* rebeldes perdieron sus cargos y un gran número de *caciques* leales habían muerto en la lucha. Aunque la Corona reconoció los títulos de los leales sobrevivientes, la destrucción fue tan masiva que en adelante la mayoría de las comunidades libres de las principales zonas rebeldes quedaron bajo el control de españoles (desde entonces, con el título de 'caciques'). Al mismo tiempo, los *jilaqata* o ancianos de las comunidades desde entonces asumieron algunas de las funciones que antes desempeñaba la nobleza. Estos hechos equivalieron a la real extinción

de la clase de los *caciques* en la región del Cuzco y en Charcas, los últimos representantes de la gran nobleza indias que había sobrevivido a la conquista española. Después de la Gran Rebelión de 1780-1782 la nobleza indígena dejó de ser un importante factor en la vida social, económica y política de la región.

A pesar de su impacto masivo y de largo alcance y de su movilización extraordinariamente amplia, la rebelión de Tupaq Amaru no tardó en convertirse en un lejano recuerdo para la población charqueña. Fue también el último intento anterior al siglo XIX de traer justicia e independencia a la región; las rebeliones posteriores y la conquista final de la independencia acabarían llegando de mano de los criollos, siendo un asunto claramente de la clase superior y en gran medida ajeno a los indios. Así, a pesar de su importancia actual y simbólica, la rebelión tupamarista tuvo un impacto poco duradero en Charcas.

La destrucción de vidas humanas y propiedades durante la rebelión había sido masiva, en especial alrededor de La Paz y la región del lago Titicaca; pero el crecimiento general económico y demográfico –muy pronunciado en aquella década- permitió que a fines de los años 80 la mayoría de las haciendas estuvieran reconstruídas: si en los años inmediatamente posteriores a la revuelta la documentación local describía la impresionante pérdida de aperos, ganado y peones en las haciendas abandonadas, al final de la década casi todas ellas volvían a funcionar en su plena capacidad y alcanzaban el mismo nivel de riqueza que antes de la rebelión. Pronto también quedaron niveladas las pérdidas demográficas y para los años 90 la mayor parte del territorio que había sido rebelde ya contenía la misma población que antes de levantamiento.

En los años 90 la mayor población rural (bastante más de las 200.000 personas) y la mayor ciudad de Charcas (más de 40.000 habitantes) se encontraban en la Provincia de La Paz, que por entonces representaban la mitad de la población total charqueña. En las ricas tierras altas y valles de esta hegemónica provincia había unas 1.100 haciendas en las que trabajaban unos 83.000 peones o *yanakuna*; eran propiedad de 719 hácendados (residentes en su mayoría en la ciudad capital); alrededor del 39 % de estos hacendados poseían más de una hacienda y, como en el caso de Tadeo Díez de Medina, diseminaban sus propiedades por diversas zonas ecológicas, complementando

así su producción agrícola. Unos dos tercios de esos hacendados eran varones; el resto, mujeres e instituciones eclesiásticas. En el último cuarto del siglo XVIII la Iglesia charqueña contaba con unos 40 conventos y unos 2.400 sacerdotes, siendo una institución acaudalada, pero no un terrateniente importante: suministraba la mayor parte de los 'censos' (préstamos hipotecarios) necesarios para la compra o expansión de las haciendas; pero, a diferencia de otras iglesias coloniales, seguía siendo un propietario menor de la tierra agropecuaria; esta posición relativamente débil de la Iglesia resultaría sumamente importante en el siglo XIX cuando la República tuvo pocos problemas en controlarla, con sus tierras y rentas, en contraste con las encarnizadas luchas que se sucedieron en la mayoría de los demás países latinoamericanos.

A pesar de la expansión ochocentista de la hacienda en la región paceña, el grupo dominante en el campo, medido por la propiedad de la tierra y por la demografía, siguieron siendo las comunidades libres: en La Paz eran unas 491, con más de 200.000 indios; de éstos, un poco más de la mitad eran 'originarios' y el resto eran inmigrantes posteriores con unos derechos restringidos a la tierra; a pesar de ello, los segundos siguieron creciendo más rápidamente que los 'originarios' y en el siglo XIX se convirtieron en el sector numéricamente predominante de los *ayllu*. Esas comunidades incluso poseían 22 haciendas con más de 1.800 *yanakuna*. Estos indios campesinos terratenientes aportaban la mayor cuota a la Real Hacienda y en la flamante República su tributo también serían la fuente particular más importante de ingresos.

La rápida recuperación de Charcas de las heridas de la Gran Rebelión de 1780-1782 estuvo íntimamente relacionada con los efectos positivos de las reformas borbónicas de la economía, impulsadas en la metrópoli durante las décadas centrales del siglo XVIII. Las reformas de la economía minera no tardaron en traer una nueva prosperidad a la producción de Oruro y Potosí; una reforma general de la estructura comercial originó una sana rivalidad entre Lima y Buenos Aires por el comercio de Charcas; esto, a su vez, dio origen a una segunda serie de redes económicas y de sistemas mercantiles que aceleró en el Altiplano y en los valles orientales conexos el ritmo general de la actividad comercial y mercantil. Finalmente, para poner cier-

to orden en su estructura administrativa adaptándola a las políticas más avanzadas de un comercio más libre y de la libre competencia, la Corona llevó a cabo una importante reorganización administrativa.

El símbolo de la nueva estructura administrativa fue la creación de una nueva autoridad llamada 'intendente': inspirados en la afortunada institución francesa, los intendentes americanos reemplazaron con eficiencia a los antiguos Corregidores y crearon jurisdicciones regionales que ahora abarcaban territorios de los españoles y de los indios. En 1784 nacieron en Charcas cuatro de estos distritos intendenciales: La Paz, Santa Cruz de la Sierra (pero con sede en Cochabamba), Potosí y La Plata. Estas nuevas autoridades recibían muy buenos sueldos, que las independizaban de la necesidad de dedicarse al comercio local para sobrevivir como había sucedido con los corregidores; y se las seleccionaba cuidadosamente de entre los funcionarios experimentados del Imperio; se consideraba que su principal función era promover el crecimiento económico y social regional.

Este cuidadoso proceso de selección y la buena dotación salarial de las nuevas autoridades dio lugar a la aparición de un extraordinario grupo de funcionarios letrados y refinados que gobernaron Charcas durante las dos últimas décadas del siglo XVIII. Destacaron en él Francisco de Viedma en Cochabamba y Juan del Pino Manrique en Potosí: preocupados de reactivar el comercio, experimentando en la agricultura, promoviendo el bienestar general y aumentando las rentas reales, dejaron tras si memoriales admirablemente detallados sobre la vida y la época de los pueblos que gobernaban. También demostraron haber examinado todas las principales cuestiones que se relacionaban con los problemas de carácter social y económico en sus jurisdicciones, ofreciendo análisis detallados sobre estrategias alternativas. A esa galería de intendentes hay que añadir el casi errante Oidor Extraordinario de La Plata, Pedro Vicente Cañete: jurista, historiador y pesquisador administrativo, analizó y legisló la industria minera, la estructura fiscal del gobierno, la cuestión de la *mit'a* y aun la relación entre la Corona y la Iglesia; a menudo entró en acres polémicas con los intendentes, lo que dio lugar a memoriales todavía más detallados sobre el estado de la sociedad. Viedma, Pino Manrique, Cañete y los de-

más intendentes fueron buenos representantes del pensamiento ilustrado del siglo XVIII y trajeron a Charcas una nueva estructura administrativa y una nueva idea de caudillaje y de posibilidades de desarrollo.

Durante el último cuarto del siglo en Charcas se produjo también una revitalización de la educación superior. Como resultado de las reformas en la formación jurídica que en la metrópoli se habían producido en los años 60 y de los efectos negativos que en Charcas había tenido la expulsión de los jesuitas, la Audiencia consiguió que la Corona aprobara en 1776 la constitución en La Plata del primer centro jurídico moderno en el Imperio americano para la formación de los nuevos abogados: para 1808 la Real Academia Carolina de Practicantes Juristas había dado a unos 362 abogados una formación en los más modernos y rigurosos procedimientos del Derecho Civil. Aunque la mayoría de sus estudiantes de élite procedían del propio territorio charqueño, un grupo importante había llegado de las jurisdicciones limeña, chilena y rioplatense. Esta élite ingresó rápidamente en la administración colonial, aportando al servicio real el núcleo fuerte de una generación de abogados de primera clase y bien formados. Teniendo presente la historia posterior de la región, no puede sorprender a nadie que a comienzos del siglo XIX también aportara una importante cuota de dirigentes revolucionarios republicanos.

Esta nueva preocupación gubernamental por la administración y por la economía coloniales condujo a un incremento de la industria y del comercio. En Cochabamba, por ejemplo, Francisco de Viedma dedicó mucha energía a promover el crecimiento regional y parece que jugó un papel importante en quebrar el perfil de estancamiento que la región venía sufriendo desde la crisis del siglo XVII. A finales de siglo Cochabamba se había convertido en una importante zona productora de tejidos bastos ('tocuyos') y volvía a incorporarse en mercados regionales mayores. En cuanto a la industria minera, la permanente intervención de la Corona en los asuntos locales dio lugar a una subvención siempre mayor de los mineros privados, desde el suministro garantizado de azogue hasta el sostén del banco de rescate de minerales (que en los años 70 se convirtió en una institución oficialmente real). Toda esta actividad, junto con la industria en auge en todo el Imperio hispanoamericano, originó

un importante crecimiento de la industria y de la población charqueñas, aunque no un resurgimiento completo de las glorias de las épocas pasadas de la minería de la plata.

Así, el desastre de la Gran Rebelión tupamarista fue absorbido con relativa facilidad por la economía charqueña: a los tres o cuatro años de la misma los ingresos de la Real Hacienda habían recuperado sus niveles anteriores y la mayor parte del sistema destruído de haciendas rurales ya había sido restaurado. Pero fueren cuales fueren los efectos a largo plazo de la subvención gubernamental, del comercio más libre y del crecimiento económico general, no todas las clases ni grupos se beneficiaban por igual de ellos. Así, a pesar de todas las reformas y rebautizos, la Corona seguía manteniendo el sistema opresor de los Corregidores de Indios (ahora conocidos como Subdelegados) en las regiones indígenas, que seguían explotando a sus súbditos indígenas mediante los procesos usuales de compras forzadas, intervención en las elecciones de autoridades, en la selección de los caciques y en las periódicas extorsiones de las autoridades comunales. Por otro lado, la creciente exactitud de los censos gubernamentales (introducidos con criterios modernos en 1786) significó un mayor impacto de la recaudación más eficiente del tributo sobre cada jefe de familia y un registro más exacto de los mitayos. Aunque el crecimiento general suavizó algo los efectos de la antigua estructura fiscal, la administración gubernamental más eficiente neutralizó aquellas ganancias con una recaudación fiscal más sistemática, pero dejando intactos los antiguos mecanismos de explotación.

Los rasgos de decadencia y de nuevo crecimiento que caracterizaron los siglos XVII y XVIII de Charcas iban a influir también en las manifestaciones de actividad artística. Mientras que las principales construcciones y el amplio ornato artístico urbanos se habían concentrado en la ciudad de La Plata desde su fundación hasta mediados del siglo XVII, en la segunda mitad del siglo la ciudad de La Paz y su región fueron el nuevo escenario de la construcción de templos, a la que siguió de cerca Potosí. El tardío arranque de la Villa Imperial se debió a la inicial dedicación de su élite a edificaciones más prosaicas y a las inversiones arquitectónicas más refinadas en la cercana La Plata; en cambio, en la segunda mitad del siglo XVII, cuando su

producción se hundía en una prolongada recesión, Potosí puso en marcha el desarrollo de un centro urbano de cierta distinción.

El nuevo período de expresión artística no sólo se produjo en un nuevo contexto geográfico, sino que también reflejó ciertos cambios fundamentales de estilo y organización. Estilísticamente, el periodo que transcurre aproximadamente entre 1650 y 1700 estuvo dominado en Charcas por los temas barrocos, por entonces también hegemónicos en la metrópoli; pero los artistas que desarrollaron ese estilo (criollos, mestizos o indios) fueron mayoritariamente autóctonos. La gran época de la inmigración de artistas de los centros europeos llegaba a su fin, existiendo suficientes talleres y expertos locales para satisfacer las necesidades regionales, estimulados por ocasionales sacerdotes europeos que traían las últimas modas y gustos. Además, entre los artistas americanos figuraron indios y cholos, incluso en la pintura, un campo que, al igual que el diseño arquitectónico, hasta entonces había sido una ocupación reservada en exclusiva a los europeos.

En el campo pictórico, durante los siglos XVII y XVIII existió una actividad tan intensa, que se pueden distinguir varias 'escuelas' en acción. En primer lugar está la escuela 'popular' de artistas indios y mestizos, cuyas obras suelen carecer de firma y de perspectiva; este grupo anónimo de artistas populares solía estar compuesto de escultores y maestros de obras que también pintaban, dejando su obra por doquier de Charcas (incluso en las mejores catedrales). En el siglo XVIII esos pintores populares comenzaron a mezclarse con una de las 'escuelas' oficiales *(la colla)* o artistas de la región paceña y del Titiqaqa. Las otras dos escuelas oficiales, cuyos artistas firmaban sus obras y utilizaban la normativa perspectiva, eran la chuquisaqueña (donde seguían vigentes los estilos manieristas procedentes de las obras de Bitti) y la potosina (que tendía a subrayar los intereses españoles de la época). Aunque la cincuentena de artistas que firmaban sus pinturas en principio parecían definirse como una clase y grupo aparte, el creciente refinamiento de los artistas populares y la creciente influencia de los estilos mestizos en la élite más profesional llevó a fines del siglo XVIII a una combinación de los estilos popular, *colla* y el importante cuzqueño en un estilo criollo o 'mestizo' de Charcas perfectamente inconfundible.

Mientras que la escuela chuquisaqueña había florecido durante el primer siglo colonial, las escuelas potosina y *colla* predominaron desde 1650 hasta el fin de la colonia. De las dos, la potosina fue la más influyente y poderosa durante el periodo 1650-1750: precisamente cuando la crisis económica se encontraba en su peor punto. la Villa Imperial inició una febril construcción de templos y edificios públicos, sosteniendo la más destacada escuela pictórica colonial. El más destacado de los pintores potosinos y el mayor de la época colonial, fue Melchor Pérez de Holguín, nacido en los años 60 en Cochabamba y llegado a Potosí a comienzos de los 90 para iniciar su carrera. Desde la última década del siglo XVII hasta avanzados los años 20 del siglo siguiente, Pérez fue el primer pintor de la Villa y difundió su arte en todos los templos parroquiales y conventuales, además de recibir importantes encargos de personas seglares. Estilista barroco de extraordinaria habilidad, Pérez generó una prolífica producción, presente en los principales templos de la ciudad; su estilo influyó en muchos de los restantes pintores principales.

En cuanto a la escuela *colla* de pintura que floreció después de 1650, su centro principal no estuvo en algunas de las capitales provinciales como en los casos de la chuquisaqueña y potosina, sino en la zona rural tradicional que circunda el lago Titiqaqa. Esa región era uno de los principales centros agrícolas de Charcas y el epicentro del territorio aymara. El hecho de que las principales realizaciones artísticas tuvieran su asiento en esas pequeñas aldeas campesinas, particularmente en las de las provincias de Chuquito (por entonces, parte del Obispado de La Paz), Pacajes y Omasuyus, parecería dar a entender que, en esta época de crisis general en la industria exportadora minera, existía una inaudita riqueza en el Charcas rural y, sobre todo, indígena. La existencia de esa riqueza lleva a pensar en un descenso del nivel de explotación de las comunidades libres de la región, con lo que los indios de ella podían retener sus ahorros e invertirlos en una importante serie de construcciones y de actividad artística (caso toda ella relacionada con la actividad de la Iglesia). El hecho de que muchos de los artistas de la escuela *colla* fueran indios y mestizos también presupone una creciente especialización de la mano de obra en esos campos; lo que, a su vez, abona la idea de una economía rural relativamen-

te boyante que permitía el desarrollo de tales artistas a tiempo completo.

En la segunda mitad del siglo XVIII el perfil de la actividad artística y arquitectónica volvió a experimentar cierto cambio cuando un estilo artístico mestizo generalizado se apoderó de la mayor parte de la pintura de la región: las escuelas *colla* y popular se mezclaron, reduciendo el peso de las otras dos. Por otro lado, también en la arquitectura a mediados del siglo se agotó el arte barroco, siendo reemplazado como en la metrópoli por un movimiento neoclásico. La construcción en ese nuevo estilo predominó en Cochabamba y La Plata, que volvieron a ser centros importantes de actividad en la fase final de la Colonia; también las catedrales de Potosí y La Paz fueron construídas en ese estilo.

Aunque el arte y la arquitectura quedaron avasallados por el neoclasicismo, parece que en la escultura en madera o piedra y en la platería hasta el final del periodo colonial mantuvo su extraordinario vigor el estilo denominado 'barroco mestizo', en el que los artesanos indios y mestizos predominaron durante el siglo XVIII en esas habilidades. En ese estilo mestizo persistieron los temas barrocos (sirenas míticas, máscaras grotescas...) y las tradiciones cristianas prerrenacentistas; pero se le añadía la flora y la fauna americanas, además de motivos y figuras precolombinos.

Si las artes florecieron en Charcas desde el comienzo y alcanzaron en todos los géneros una extraordinaria calidad, las letras sufrieron de subdesarrollo aun dentro de los niveles hispanoamericanos. Hubo algo de música eclesiástica, de la que la mayor parte no ha llegado hasta nosotros; hubo algo de teatro, incluído un vigoroso teatro religioso e histórico escrito en quechua y aymara por clérigos españoles que deseaban difundir la fe entre los indios. Pero ha sobrevivido poca poesía seria y ninguna pieza teatral de distinción. Aun en los géneros historiográfico y filosófico, hasta bien avanzado el siglo XVIII Charcas fue una región relativamente atrasada, incluso comparada con el Cuzco, para no decir nada del resto de América. Y en las ciencias, la única obra importante que se destaca fue el clásico **Arte de los metales** (1640) del doctrinero A. Alonso Barba, el más importante estudio metalúrgico escrito en América en el siglo XVII.

Pero este relativo atraso de las letras cambió algo en el siglo XVIII, cuando la región pareció participar más en las principales tendencias intelectuales y evoluciones del resto de las colonias hispanoamericanas. Aparecieron algunos historiadores importantes, entre los cuales los principales fueron Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, cuya historia potosina constituye un estudio de peso; y Pedro Vicente Cañete, cuya obra de fines del siglo sobre la Intendencia de Potosí fue sumamente importante. También apareció un grupo de estadistas famosos que produjeron estudios de importancia sobre el funcionamiento de la sociedad colonial: Cañete es, de nuevo, el más destacado; pero junto a él podemos nombrar a los intendentes Francisco de Viedma y Juan del Pino Manrique, al Protector de Naturales Victorián de Villava, y al naturalista bohemio Tadeo Haenke, quien a fines de siglo pasó la mayor parte de su vida en Cochabamba registrando su flora y fauna.

La Universidad de San Francisco Xavier de La Plata también parece haber gozado de especial vigor en el último cuarto del siglo XVIII, en especial desde la fundación de la Real Academia Carolina de Practicantes Juristas: en ella se formaron los primeros dirigentes, memorialistas y panfletistas del movimiento independentista del siglo XIX, como el extraordinario Bernardo Monteagudo, que participó en casi todos los principales eventos de la Guerra de Independencia de la región y en diversas ocasiones fue un íntimo asesor de M. Moreno, B. O'Higgins, J. de San Martín y S. Bolívar; Mariano Moreno, uno de los padres fundadores de Argentina; y Jaime de Zudáñez. Pero, vista en conjunto, la producción literaria y política de Charcas en el periodo colonial tardío fue muy limitada. Ni las instituciones académicas ni los individuos privados parecen haber creado un cuerpo bibliográfico de importancia en ninguna de las disciplinas humanísticas o científicas. Habida cuenta de la relativa riqueza de Charcas y la larga tradición e importancia regional de su centro universitario platense, esta falta de una producción más sustancial resulta difícil de explicar: sin duda influyeron factores como la bajísima tasa de alfabetismo y el pequeñísimo número de hispanófonos dentro de la población total, pues el español permaneció indiscutiblemente como una minoría lingüística durante todo el periodo colonial y hasta muy avanzado el siglo XX; pero en la única forma donde la lengua no era de-

cisiva, las artes plásticas, los charqueños se destacaron por su extraordinaria creatividad y producción, distinguiéndose la Colonia charqueña como una de las grandes épocas artísticas de la historia mundial. El hecho de que, al lado de europeos, ese arte fuera obra de muchos indios y mestizos también permite vislumbrar que fue la única forma de expresión creativa intelectual y cultural plenamente abierta a todos los sectores de la sociedad colonial; por tanto, la forma en que se podía expresar la máxima creatividad posible sin temor a la opresión racial ni al control de clase.

A pesar del significativo aumento de la economía colonial durante el periodo posterior a 1750, que permitió proseguir al tan activo periodo de nuevas construcciones eclesiásticas y civiles en todas las ciudades andinas, la economía charqueña demostraría seguir estando muy afectada por la prolongada crisis del siglo XVII. En efecto, demostraría ser sumamente vulnerable a los cambios de corto plazo en las condiciones del mercado internacional, lo que a su vez demostró que la economía minera contaba con escasas reservas para capear las crisis mercantiles temporeras o un debilitamiento del apoyo gubernamental.

Esta vulnerabilidad se hizo evidente en las primeras décadas del siglo XIX. A fines de los años 90 el suministro de azogue en Potosí ya no procedía de las difuntas minas de Huancavelica, sino que venía por mar directamente de las minas reales metropolitanas de Almadén; el comienzo del gran conflicto internacional que se conoce como las 'guerras napoleónicas' no tardó en implicar directamente a España: en 1796 surgió una acre disputa con Gran Bretaña, que no tardó en convertirse en guerra abierta, desorganizando todas las rutas marítimas entre la metrópoli y América. Para Charcas esto significó la interrupción de las remesas de azogue y, por tanto, de las fundiciones locales; pero todavía tuvo más importancia que el repentino derrumbe de las rutas comerciales internacionales provocó una depresión, temporal pero muy grave, de los mercados comerciales en general, con la consiguiente compresión del crédito en las colonias. Esto, a su vez, dejó a los mineros con poco capital para mantener sus costosas empresas, lo que tuvo como resultado un rápido descenso de la producción.

A comienzos del nuevo siglo el sector minero se encontraba en una crisis general, con una caída en picada de la producción. Ya con su sector exportador gravemente contraído, Charcas todavía fue golpeado por una grave serie de malas cosechas y de epidemias (1803-1805), que tuvieron un profundo impacto tanto en las poblaciones rurales como en los mercados regionales. Así, en el momento de la invasión francesa en la metrópoli (1808) la economía charqueña se encontraba en una situación de depresión general y su población sufría de una temporal pero aguda pérdida de la calidad de vida. Estas circunstancias generaron una atmósfera sumamente tensa en las zonas rurales y, sobre todo, en los reducidos centros urbanos.

CAPITULO IV

LAS GUERRAS DE INDEPENDENCIA Y LA CREACION DE UN ESTADO NACIONAL 1809 — 1841

El siglo XIX empezó para Charcas con una depresión a largo plazo que iba a tener un profundo impacto en sus poblaciones urbanas letradas y en su economía minera de exportación. Este declive y las graves crisis agrícolas que se presentaron en el campo por esta misma década, todo constituyó el trasfondo decisivo para la respuesta regional al derrumbe imperial del gobierno de Madrid. A fines del 1806 y durante todo 1807 los ejércitos de Napoleón fueron invadiendo lentamente España, acabando por forzar la abdicación de la monarquía borbónica. En mayo de 1808 el pueblo madrileño se levantó contra el nuevo gobierno español controlado por los franceses; los rebeldes pudieron organizar por fin una estructura formal de resistencia que se proclamó el gobierno legítimo de los Borbones. Conocido como la Junta Central y controlando la parte meridional de España, el régimen rebelde afirmó su legitimidad a pesar de la abdicación de Fernando VII y exigió la lealtad de los virreinatos coloniales. Una situación de este tipo con un gobierno dividido ya se había presentado en otra ocasión anterior de la historia imperial, al comienzo del siglo XVIII cuando los Borbones y los Austrias habían luchado por el control de España, combatiendo en una

larga y encarnizada guerra en suelo español por apoderarse de la monarquía. Pero por entonces las colonias adoptaron una actitud pasiva, permitiendo que se tomaran en Europa todas las decisiones fundamentales sobre el destino de España y de su imperio.

En 1808, en cambio, el mundo se encontraba en otro lugar: los dos movimientos independentistas de antiguas colonias, en Haití y en los Estados Unidos, tuvieron un profundo impacto para cambiar los conceptos de dependencia del pensamiento colonial americano. Además, Estados Unidos y Gran Bretaña, los dos poderes de importancia, ahora se convirtieron tanto en fuentes importantes de apoyo financiero para los movimientos potencialmente rebeldes, como lugares de refugio. Pero lo más importante de todo fue que la propia Europa ya no era el mismo tipo de estructura monárquica estable que había existido a comienzos del siglo XVIII, durante la guerra española de sucesión. Pues en 1789 la Revolución Francesa había desencadenado una nueva ideología y un nuevo movimiento tan desestabilizadores, que afectaron a todas las monarquías del continente, convirtiendo repentinamente en alternativa viable los gobiernos republicanos.

Las colonias americanas españolas tenían conciencia de todos estos procesos, como vinieron a demostrar las infinitas pequeñas conjuras y revueltas a lo largo de todo el hemisferio. La ideología de las llamadas "revoluciones atlánticas" se difundió por toda América en los años noventa y en la primera década del nuevo siglo. Pero era tal la estabilidad del imperio hispanoamericano que la burocracia real tuvo poca dificultad en suprimir estos movimientos. Al hacerlo esta burocracia contó con el intenso apoyo de las clases blanca y mestiza, a causa de sus temores de que pudieran presentarse unas revoluciones sociales potencialmente destructoras en caso de que se permitiera a los indios participar en los debates políticos de los blancos o se les permitiera determinar el destino de los gobiernos. A este respecto la experiencia haitiana constituía una advertencia, no sólo para las sociedades esclavistas de América, sino también para quienes vivían del sudor de una masa campesina explotada.

Pero el aparatoso derrumbe de la monarquía española y la aparición de un gobierno patriota semipopular en España misma crearon enormes problemas a las élites locales. Estas se encontraron súbitamente enfrentadas con diferentes autoridades conflictivas y cada grupo local tuvo que tomar decisiones fundamentales sobre cómo podría garantizar mejor su propia legitimidad y estabilidad. A la nueva monarquía de José Napoleón

Bonaparte de Madrid, ahora se le añadía un gobierno de la Junta, que gobernaba en nombre del abdicado Fernando VII; después, una monarquía alternativa posible en la persona de la hermana de Fernando, Carlota Joaquina, que llegó al Brasil en 1808 como esposa del monarca portugués y que trató también de obtener la adhesión del imperio americano. Por fin, encontrándose España en un absoluto desorden y bajo control francés y sucumbiendo rápidamente sus aliados europeos ante los ejércitos napoleónicos, los ingleses dirigieron sus energías hacia su interés tradicional por la expansión imperial ultramarina: empezaron apoyando decididamente a los posibles revolucionarios e incluso, haciendo planes para una invasión militar de la América española.

La llegada de las preocupantes noticias de España difundió lentamente un ambiente de crisis e indecisión por todas las Américas durante los meses de julio, agosto y septiembre. En cada paso particular los funcionarios reales locales tuvieron que tomar una serie de decisiones amargas. Al hacerlo también tuvieron que decidir quién debía ser admitido al proceso de decisión. En la mayoría de los casos las audiencias y gobernadores y Obispos decidieron en favor del *status quo*, que definieron como una actitud de esperar y ver, dando preferencia al gobierno de la Junta, que poco a poco se iba retirando a la península de Cádiz. En unos pocos casos decidieron convocar cabildos abiertos para sondear la opinión de la élite local sobre el curso que había que dar a la acción. Unos pocos decidieron apoyar activamente, bien las pretensiones francesas, bien las de Carlota.

Estas lealtades contrapuestas, las noticias amenazantes y la indecisión de los funcionarios locales, todo dio lugar a una situación sumamente tensa a lo largo de América; en ningún lugar ni los criollos ni las élites peninsulares quedaron plenamente contentos con ninguna solución particular. Esto creó un clima favorable a las luchas locales de poder, conflictos entre los gobernadores y sus audiencias u obispos y entre estas autoridades reales y los consejos municipales locales.

Este fue el trasfondo que explica muchos de los curiosos sucesos que tuvieron lugar en Charcas en 1808 y 1809. Esta región se convertiría en la primera zona de Hispanoamérica que fue gravemente perturbada por todos los conflictos que se presentaban en el escenario imperial e internacional; también sería el primer centro de un movimiento independentista. Debido en parte al aislamiento del mar y en parte a que todavía constituía una zona independiente de poder económico entre dos Virreinatos en conflicto (los de Lima y Buenos Aires) y en parte, por fin, a

su autonomía tradicional, el fermento de diferentes grupos pudo crecer durante algún tiempo antes de ser reprimido.

Los primeros problemas de control comenzaron con la llegada de las noticias de la crisis española, que llegaron a Charcas en septiembre de 1808. Inmediatamente se planteó allí un conflicto entre el arzobispo y el presidente de la audiencia por un lado, que exigieron la adhesión a la Junta Central, y los oídores de la audiencia que se negaron a reconocer la autoridad de la Junta. Rápidamente aumentaron las tensiones y a fines de Mayo el presidente de la audiencia, León y Pizarro, fue capturado por los oidores independientes quienes, a su vez, temían que el presidente hiciera lo mismo con ellos, obligándolo a salir de la ciudad. Aunque el intendente potosino, Francisco de Paula Sanz se opuso a este movimiento, por el momento no ofreció resistencia y los oídores semirrebeldes pasaron a enviar emisarios que obtuvieron el apoyo de las demás ciudades. A pesar de las tensiones y de cierta acción motinesca restringida, hasta este momento todo el asunto quedaba limitado a la burocracia y era de carácter casi exclusivamente español peninsular.

No fue éste el caso de la rebelión popular que ahora se presentó en la ciudad septentrional de La Paz. El 16 de Julio de 1809 la inquietud popular entre los vecinos de la ciudad (entre los que figuraban muchos revolucionarios convencidos) condujo a exigir una reunión del cabildo abierto que tomara ciertas decisiones fundamentales acerca del régimen que había que apoyar. El hecho de que la élite local exigiera el derecho de tomar sus propias decisiones sobre estos acontecimientos, con independencia de lo que hubiera decidido la burocracia central de la audiencia en Chuquisaca, refleja perfectamente el creciente poder de La Paz. Siendo ahora la mayor ciudad de Charcas, basaba su autoridad en la riqueza y en la población de su propio *hinterland* agrícola, quedando relativamente inmune a las crisis que afectaban a los centros mineros meridionales. Ahora empezaba a experimentar un resentimiento por el dominio del sur, con lo que los conflictos tanto de España como de Chuquisaca dieron una excelente ocasión para que la élite local manifestara su propia versión de la independencia.

Manteniéndose en contacto directo con los representantes de la casi rebelde audiencia, los líderes locales paceños decidieron actuar con toda claridad y llevar a cabo una revolución completa. Bajo la dirección de un vecino llamado Pedro Domingo Murillo, los rebeldes se apoderaron del gobernador local y del obispo de La Paz, declarando a sí mismos Junta Tuitiva. Inmediatamente declararon su oposición al régimen de la Junta Cen-

tral de España y proclamaron un gobierno americano independiente a nombre de Fernando VII, estratagema clásica que utilizaron todos los demás líderes rebeldes posteriores de América para legitimar sus movimientos independentistas.

Esta fue la primera declaración de independencia de una colonia americana española. Iba a iniciar el largo período de guerras americanas de independencia que durarían de 1809 a1825; pero resultó ser una revuelta efímera. El "grito" de independencia de los jefes rebeldes paceños no encontró eco inmediato entre los indios ni respuesta positiva de las demás élites criollas urbanas. Al recibir noticias de las revueltas, el Virrey limeño ordenó su inmediata represión, enviando al presidente de la audiencia del Cuzco, Goyeneche, a La Paz con cinco mil soldados para sofocar el movimiento. Murillo y sus partidarios, por su parte, pudieron organizar un ejército local de unos 1.000 soldados escasamente armados. Pero en ese momento Murillo y algunos de sus colegas de conspiración demostraron preocuparse por la dirección que el nuevo gobierno de la Junta estaba adoptando e intentaron negociar con Goyeneche. El resultado fue que Murillo y los elementos más radicales del régimen fueron capturados por las tropas reales y la rebelión prosiguió. Al llegar las tropas del Cuzco el ejército rebelde huyó a Yungas, donde en noviembre de 1809 se libró en Irupana un combate importante. El ejército rebelde fue vencido, a lo que siguió el apresamiento de todos los antiguos jefes incluido Murillo. Estos hombres fueron juzgados inmediatamente y en enero de 1810 Murillo y ocho de sus compañeros de conspiración fueron ejecutados; más de 100 personas fueron exiliadas.

Al propio tiempo el Virrey de Buenos Aires nombró un nuevo presidente de Charcas, el mariscal Nieto, que también había llegado con tropas de Buenos Aires aproximadamente al mismo tiempo que el ejército del Cuzco por el norte y que a comienzos de diciembre se apoderó de Chuquisaca. Nieto arrestó inmediatamente a los oidores rebeldes y con esta acción, juntamente con la ejecución de los rebeldes de La Paz, el movimiento independentista de Charcas acabó formalmente y con él, fue aplastado el primer intento de independencia americana.

Con la doble invasión de los ejércitos peruano y argentino, la primera etapa de la independencia charqueña había terminado. Pero el fin de este primer período de actividad revolucionaria no acabó con toda la oposición y violencia en Charcas ni destruyó el entusiasmo criollo por la independencia. Si bien fue realmente destruida la generación del liderazgo urbano de 1809, ahora surgió una serie de jefes guerrilleros que se afincaron

sólidamente en unas seis zonas rurales importantes, como pequeñas republiquetas. Mientras que las ciudades permanecían en la mayoría de los casos en manos realistas, las guerrillas controlaban una parte importante del campo y eran aliados eficaces en las varias invasiones republicanas que se producirían desde el exterior. De 1809 a 1816 estas tropas irregulares conseguirían el apoyo de todas las clases sociales de Bolivia, incluidas las masas campesinas indias.

Pero a pesar del surgimiento de un movimiento guerrillero rural y de la difusión de la rebelión hasta las clases inferiores, la iniciativa de la independencia había salido de las manos de los charqueños. Habiendo sido la primera región en declarar formalmente su independencia, Charcas sería paradójicamente la última región sudamericana en obtenerla. Además, ahora se convirtió en campo de batalla de las fuerzas más poderosas del norte y el sur, perdiendo su iniciativa en todos los sucesos subsiguientes, en favor de los jefes y ejércitos de fuera de sus fronteras.

Así pues, la historia de la independencia charqueña desemboca en la segunda etapa del movimiento independentista en unos hechos que sucedían a miles de kilómetros de distancia de las ciudades altiplánicas. El proceso más importante fue la creación exitosa de un gobierno independiente en la capital Virreinal de Buenos Aires. Después de haber aplastado al ejército británico tras la invasión a la región rioplatense en 1806, el liderazgo porteño pronto se dedicó a cuestionar el poder de su virrey y acabó llevando a cabo una rebelión completa en mayo de 1810. El eufórico régimen bonaerense pronto experimentó la necesidad de extender su poder por todo el antiguo territorio del Virreinato, considerando a Charcas una zona prioritaria de libe-ración. Por su parte, los liberales guerrilleros de Charcas consideraban los sucesos de Buenos Aires como una ocasión extraordinaria para establecer un régimen local independiente.

La reacción inicial de los realistas a los sucesos de Buenos Aires fue la decisión de Francisco de Paula Sanz, en Potosí y de Nieto como presidente de la Audiencia, en Chuquisaca, de cortar los vínculos formales con el antiguo virreinato y devolver Charcas a la jurisdicción del virreinato peruano. Pero esta maniobra no pudo impedir la difusión revolucionaria. En septiembre de 1810 Cochabamba se levantó en rebelión apoyando al régimen de Buenos Aires; al mes siguiente un ejército rioplatense llegaba a la región bajo el mando de Castelli. Obteniendo un tremendo apoyo popular, el ejército argentino pudo apoderarse fácilmente de una ciudad tras otra, recibiendo por doquier una bienvenida

entusiasta. En noviembre cayó Potosí y Castelli apresó a Sanz y a Nieto, ejecutándolos. Entre tanto el presidente del Cuzco, Goyeneche, tuvo que retirarse y pronto Oruro y Santa Cruz se levantaron contra sus ejércitos y unieron sus fuerzas con las de Castelli, quien derrotó al ejército realista. En abril de 1811 Castelli y su ejército rioplatense habían ingresado triunfalmente en Oruro y La Paz y toda la zona de Charcas y volvía a ser una zona libre e independiente.

Pero Castelli resultó ser tanto un administrador inepto como un general sin capacidades, por lo que el apoyo generalmente a su régimen empezó a desvanecerse. Se hizo evidente que Argentina no estaba interesada en permitir la creación de una república independiente ni fomentar los intereses charqueños a costa de las necesidades del Río de la Plata; así, una derrota de los ejércitos de Castelli en Guaqui en junio de 1811 se convirtió en una derrota en toda regla que dio lugar a notable derramamiento de sangre en las ciudades y a los ataques civiles charqueños contra las fuerzas prepotentes argentinas en retirada.

La derrota rioplatense y la reconquista de toda Charcas por los realistas cuzqueños de Goyeneche no terminó con la rebelión ni siquiera dentro de Charcas mismo. En noviembre Cochabamba volvió a levantarse contra la corona y volvió a invadir el altiplano, necesitando Goyeneche emplearse a fondo hasta mayo de 1812 para aplastar esta rebelión, esta vez con considerable violencia por ambos lados. Además los realistas desesperados captaron el apoyo indio y cada vez más *kuraka* figuraban enrolados en los ejércitos de ambos lados, proporcionando tropas indígenas para los combates. A su vez, los indios comenzaron a conseguir armas de ambos lados, con lo que el nivel de violencia y de conflicto social sufrió una escalada notable a fines de 1811 y comienzos de 1812. Una vez alcanzado este nivel de movilización, las fuerzas desencadenadas por el movimiento independentista resultarían difíciles de contener y el nivel de destrucción física y desbarajuste social se hicieron masivos.

Teniendo de nuevo bajo el control realista a Charcas, Goyeneche consiguió extender con el apoyo de Lima la lucha al norte de Argentina, tratando de reconquistar la zona rioplatense; pero este esfuerzo se vino abajo en febrero de 1813 en la batalla de Salta, donde Manuel Belgrano al frente de un ejército argentino septentrional hizo frente a los realistas. Así empezó la segunda invasión rioplatense de Charcas con Belgrano, que tuvo el mismo desafortunado fin que la aventura de Castelli. Si bien Belgrano se apoderó temporalmente de Potosí a mediados de aquel

año, en los últimos meses de 1813 las fuerzas realistas comandadas por el nuevo jefe, Joaquín de la Pezuela, habían derrotado a los argentinos y recuperado la totalidad de Charcas.

Con la derrota de este segundo ejército y la consiguiente invasión de Argentina por Pezuela, los jefes del Río de la Plata se convencieron que Charcas no podía ser su principal objetivo y acabaron apoyando la decisión de San Martín de concentrar sus fuerzas en un ataque por la espalda en Chile como el mejor medio de encaminarse contra el núcleo central del poder realista limeño. Pero esta decisión de atacar por otra parte no significó que Charcas se convirtiera en una zona tranquila, pues ahora se produjeron en su territorio una serie constante de pequeños alzamientos y de rebeliones indígenas incluida una revuelta india antirrealista a mediados de 1814, que trajo consigo la conquista y saqueo de La Paz por los indios de la zona cuzqueña. Entre tanto, la posible amenaza de un Charcas realista preocupaba a los republicanos argentinos, por lo que se organizó un pequeño tercer ejército rioplatense enviando a Charcas en enero de 1815.

Una vez más los invasores argentinos gozaron del apoyo de los republicanos del interior. Rebeldes charqueños se apoderaron de Potosí y Chuquisaca expulsando a los realistas en abril; en mayo los argentinos volvían a controlar ambas ciudades; pero los rioplatenses no pudieron entrar en Oruro y Cochabamba y en noviembre de 1815 sufrieron la peor derrota de la guerra, quedando sus fuerzas totalmente destruidas. Así pues, 1816 inauguró un período de absoluta dominación realista, que Pezuela aprovechó para emprender un ataque masivo sobre todas las fuerzas rebeldes charqueñas. Este ataque acabó con una completa victoria de Pezuela, quien destruyó masivamente a las fuerzas rebeldes. Mientras se calcula que en las zonas rurales actuaron de 1810 a 1816 unos 102 caudillos patriotas, después de aquella fecha sólo subsistieron unos nueve; jefes tan famosos como Manuel Padilla e Ignacio Warnes fueron ejecutados; incluso el intrépido Miguel Lanza fue apresado durante cierto tiempo; otros, como Juana Azurduy de Padilla y Juan Antonio Alvarez de Arenales tuvieron que esconderse. De las seis principales zonas republicanas bajo control rebelde sólo sobrevivió la republiqueta de Ayopaya (en la frontera cordillerana entre Cochabamba, Oruro y La Paz), quedando totalmente aislada y neutralizada.

Así pues, 1816 constituyó un cambio de dirección importante en la historia del movimiento independentista de Charcas; por entonces tanto los esfuerzos externos como internos por lograr la independencia, tanto los que se encontraban bajo su propia

dirección como los que recibían el apoyo de los argentinos, habían terminado desastrosamente. A partir de entonces Charcas quedaría aislada de los principales sucesos en las grandes luchas por la liberación continental y sus impulsos finales por la independencia vendrían de la misma élite que había apoyado las actividades realistas durante todo el período. En 1816 muchas ciudades de Charcas habían padecido saqueo repetidas veces y cada ejército rioplatense que se retiraba había dejado vacía la Casa de la Moneda de Potosí. Lo que no fue destruido en los conflictos urbanos lo destruyeron las rebeliones rurales. Las haciendas fueron arrasadas, las minas aisladas fueron destruidas y la economía de la región quedó en ruinas. Además, con el armamento de las fuerzas indias por parte de ambos contendientes quedó temporalmente eliminado el control criollo del campo, creando tensiones sociales violentas y temores urbanos que condujeron a una incertidumbre y desórdenes todavía mayores.

Aunque 1816 significó el punto más bajo para los rebeldes en su guerra de independencia, pronto sobrevino un cambio de suerte. Aquel año Bolívar logró restablecer con éxito su movimiento revolucionario en Venezuela y los argentinos se sintieron suficientemente fuertes para proclamar oficialmente su independencia total de España. Con la presencia de unos pocos representantes de Charcas, las fuerzas republicanas reunidas en Tucumán en julio de aquel año declararon nación independiente las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1817 había comenzado la contraofensiva al poder realista: San Martín cruzaba los andes en dirección a Chile y liberaba toda la capitanía en la batalla de Maipú en abril de 1818.

De 1816 a 1823 Charcas permaneció relativamente tranquila después de tantos años de constante guerrear; su destino dependía de unos sucesos que escapaban por completo a su control. A comienzos de 1817 los argentinos enviaron una fuerza expedicionaria ligera a Charcas, su cuarta y última invasión de este tipo; pero este ejército permaneció principalmente en las ciudades meridionales, teniendo poca influencia directa sobre la mayor parte del territorio. De hecho, su éxito más notable fue la captura de un joven oficial realista, nativo de La Paz, llamado Andrés de Santa Cruz, que fue reexpedido a Argentina por los republicanos; pero Santa Cruz pronto escapó, llegando a reunirse con los ejércitos realistas de Lima; pero sus experiencias con los argentinos y sus frustraciones con la política fluctuante y vacilante de la corona, que en 1820 una revuelta militar en Cádiz le había obligado a tomar una decisión liberal, lo llevó a unirse a los rebeldes. Así pues, en enero de 1821 había ofrecido en el sur

del Perú sus servicios al general San Martín y a su ejército chileno - argentino invasor. Después de haber prestado servicios notables en la batallas peruanas, San Martín envió a Santa Cruz con una fuerza expedicionaria a auxiliar a las tropas colombianas comandadas por Sucre, que por entonces se encontraban en dura batalla con los realistas en el territorio de la audiencia de Quito. El resultado fue que Santa Cruz y sus tropas se aliaron por completo con Sucre y rompieron su alianza anterior con San Martín.

Toda esta actividad en Perú y Quito preparaba el terreno para una nueva invasión de Charcas de las fuerzas republicanas, pero esta vez con procedencia totalmente nueva. Argentinos y colombianos ya no consideraban la región de Charcas el paso principal para apoderarse de Lima; después de tantos años de guerra tampoco se la veía como un centro financiero importante cuya captura podía reportar ingentes fondos a la causa rebelde. Las rutas chilena y ecuatoriana demostraron ser las mejores puertas de entrada al corazón de la resistencia realista, el Bajo Perú, con su centro vital limeño. En 1820 San Martín había desembarcado sus tropas en el sur del Perú y en 1823 Sucre, aliado con Santa Cruz, había llegado a la región septentrional peruana. En este momento Santa Cruz pudo convencer a sus partidarios colombianos y venezolanos de que un ejército conquistador importante podía ocupar Charcas en medio de la confusión del combate por la totalidad del Perú. Después de una rápida marcha desde la costa, Santa Cruz llevó a cabo una acción exitosa y capturó su ciudad natal de La Paz en agosto. Las fuerzas realistas enviadas para oponérsele fueron derrotados en Zepita y Santa Cruz pudo ocupar también Oruro. Entretanto los rebeldes dirigidos por el general Lanza se apoderaron de Cochabamba y parecía que, por fin, la liberación del control real estaba al alcance de la mano. Pero la evolución en el Bajo Perú dejó las líneas de comunicación de Santa Cruz al descubierto y la existencia de poderosos ejércitos realistas en el centro de Charcas constituían una amenaza demasiado grande. Así pues, al cabo de unos meses de llegar Santa Cruz tuvo que dejar La Paz y los ejércitos realistas recuperaron el control de toda la región.

La retirada de los republicanos y la derrota de Lanza dio a los realistas el control indiscutido de Charcas hasta enero de 1825. Pero Charcas demostraría ser, como plaza fuerte realista, más bien un lugar extraño, pues el general que comandaba las fuerzas realistas de la región, Pedro Olañeta (nativo charqueño), era un archirreaccionario profundamente disgustado por la revolución liberal española. Aunque contaba con el pleno apoyo del

virreinato limeño, Olañeta y su ayudante y sobrino Casimiro, estaban convencidos de que los liberales amenazaban la autoridad real. Así pues, en enero de 1824 el general de Charcas declaró su negativa a enviar tropas o vituallas en ayuda de sus colegas oficiales que libraban batallas desesperadas contra los ejércitos invasores de Bolívar. Durante unos doce meses el régimen de Lima lo halagó, le suplicó y, por fin, envió fuerzas regulares para amenazar a Olañeta. Pero éste persistió en su negativa, aunque también se negó – a pesar de las constantes comunicaciones de su sobrino con los diferentes ejércitos rebeldes– a unirse a las fuerzas republicanas.

Así, de enero de 1824 a enero de 1825, Charcas, aunque oficialmente realista, no participó en ninguno de los acontecimientos que afectaron al poder realista de la región y, en realidad logró derrotar varias fuerzas que le enviaron los realistas para obligarle a darle su adhesión. Al mismo tiempo Olañeta se negó a hacerse rebelde. El resultado final fue el total aislamiento del régimen y el debilitamiento de la defensa del Bajo Perú. En diciembre de 1824 quedó sellado el destino final de la región cuando los ejércitos españoles fueron destruidos en la batalla de Ayacucho por Sucre, tras la cual los oficiales realistas se rindieron por completo a los rebeldes. Aunque en la capitulación los realistas incluían a Olañeta y sus fuerzas, éste se negó a abandonar el mando o a traspasarlo a Bolívar. Esta situación confusa hizo que Sucre tuviera que encaminarse por fin con un ejército a Charcas para estimular la deserción de las tropas de Olañeta. Esto fue lo que ocurrió y en enero de 1825 el viejo general murió en un combate con sus propias tropas alzadas. Con su muerte llegaban a su término las guerras de independencia tanto de la América española del sur como de Charcas, después de casi dieciséis años de encarnizada guerra civil, de graves pérdidas de vidas y de un desbarajuste grave de la economía y de la sociedad.

La liberación militar de Charcas en diciembre y enero de 1825 no resolvió de inmediato la cuestión del destino final de la región. Así como la iniciativa de la guerra contra las fuerzas realistas había salido de las manos de los patriotas locales después de 1816, lo mismo sucedió con el control de su destino futuro. De hecho fueron Bolívar y Sucre quienes determinaron la suerte de las provincias charqueñas, pues fueron ellos los que controlaron el ejército de liberación y el Congreso peruano.

En un principio la idea de que Charcas se convirtiera en república independiente, era anatema para Bolívar y sus planes de una república continental. La idea de permitir a cada región constituirse en estado propio sólo podía llevar al debilitamiento

de América del Sur frente a su antigua metrópoli europea y en el orden mundial. Pero estas ideas iniciales de unidad pronto quedaron desafiadas por la realidad de un conflicto creciente entre su estado de Gran Colombia y el régimen peruano que él había establecido. En 1825 Bolívar ya contemporizaba, comenzando a temer el crecimiento de una república peruana demasiada poderosa que, a su vez, podría amenazar la existencia de sus propias bases en Gran Colombia. La recepción incalificable hostil de Argentina a todos sus planes convirtió en solución razonable la idea de un estado —colchón entre Perú y aquella nación hostil.

Considerando los pros y contras de la situación, Bolívar realmente se sentía perplejo sobre lo que debía hacer, terminando por autorizar a Sucre —aunque sintiéndolo mucho— para que decidiera por sí mismo la situación. El traspaso de la autoridad a Sucre fue, a su vez, un paso positivo para permitir la autonomía charqueña, pues Sucre personalmente no estaba interesado como Bolívar por sus visiones continentales y al mismo tiempo vivía más influido por los intelectuales locales charqueños, absolutamente imbuidos con la idea de crear un estado autónomo.

Para los líderes charqueños, entre los que jugó un papel decisivo el sobrino del general Olañeta, el doctor Casimiro Olañeta, el ideal de un estado autónomo constituía una idea fija. En ella Olañeta y sus demás partidarios anteriormente realistas, recibieron una gran ayuda por parte de las élites urbanas locales de todos los centros principales, fueran republicanos o realistas, pues todos los charqueños habían vivido una experiencia común durante la guerra, que los hacía fundamentalmente hostiles a una anexión tanto a Argentina como al Perú. En primer lugar, ambos bandos estaban disgustados con la conducta de los cuatro ejércitos expedicionarios argentinos que habían invadido Charcas. Aunque los jefes de las republiquetas locales en su totalidad habían apoyado a Buenos Aires, los argentinos habían demostrado su indiferencia ante las necesidades de la población local y su disposición a sacrificar toda la región a sus propias exigencias. Al propio tiempo los realistas ahora contaban con casi 15 años de gobierno bajo el virreinato de Lima y ya no estaban ligados a los circuitos bonaerenses como sucedía antes de 1810.

Así pues, ambos bandos miraban a Lima como la zona más natural de anexión, en lo cual contaban con el apoyo de una unidad económica y cultural. Las tierras altas meridionales del Perú formaban una región natural con el altiplano al sur del Titicaca, compartiendo tanto unos antecedentes kechua y aymara comunes como una ecología semejante y una base económica

casi idéntica. Asimismo los lazos comerciales de todas las ciudades charqueñas, aunque debilitados en gran medida por el cambio constante de los centros virreinales, todavía estaban fundamentalmente orientados hacia Lima, que era considerada como la ciudad más importante que vinculaba todas las redes regionales.

Pero los peruanos en ese momento se encontraban en unas relaciones incómodas con Bolívar y sus ejércitos colombianos; la élite limeña no estaba preparada para estimular coherentemente la anexión de Charcas a sus propias fronteras nacionales. Le interesaba más definir las jurisdicciones de Puno y la frontera costeña de Atacama (especialmente la región Tarapacá) que ligar las ciudades de la antigua audiencia de Charcas a un estado unificado. Los peruanos también consideraban Charcas como un colchón decisivo frente a la agresividad de los regímenes del Río de la Plata, por lo que, en conjunto, se sentían relativamente indiferentes al destino de Charcas desde el momento en que no formaba parte de Argentina.

En este contexto de necesidades y exigencias conflictivas de los centros externos de poder que podían decidir el destino de la región, la élite local asumió la iniciativa en sus propias manos, presionando a Sucre para que declarara oficialmente su independencia como república. Manifestándose Lima desinteresada, cuando no hostil, y contando con su propia y larga historia de gobierno regional autónomo, los charqueños no deseaban otra cosa que asumir la responsabilidad de su propio destino y hacer de derecho lo que ya había existido de hecho durante cierto tiempo: un gobierno regional independiente.

El 9 de febrero de 1825, cuando Sucre y su ejército llegaron a La Paz acompañados del Dr. Casimiro Olañeta como consejero supremo, Sucre promulgó un decreto que convocaba la reunión de una Asamblea Deliberante de todas las provincias de Charcas, que habían de enviar sus delegados en abril de aquel año para determinar la suerte de la región. Este decreto fue la decisión final tomada por los poderes externos para permitir que los charqueños crearan su propio gobierno. Si bien Bolívar en un principio se enfureció con el decreto de Sucre, no lo desautorizó y más adelante aceptó la iniciativa de Sucre. Tras algunos retrasos, por fin se reunieron cuarenta y ocho delegados en Chuquisaca en julio de 1825 para decidir la cuestión; por una abrumadora mayoría, la Asamblea se inclinó por la independencia estatal. El 6 de agosto de 1825 se promulgó una Declaración de Independencia y el nuevo estado tomó el nombre del propio Bolívar en reconocimiento de la suprema necesidad de obtener la final aprobación del jefe militar.

Por aquellos mismos momentos Bolívar iniciaba un recorrido triunfal por Charcas, en cumplimiento de una antigua promesa a sí mismo. El Congreso Chuquisaqueño envió una delegación oficial a La Paz pidiéndole el apoyo a sus decisiones y a la que, de forma controvertida, había adoptado José Antonio de Sucre. Alegando en un principio que el Congreso peruano todavía había de decidir el último destino de la región, Bolívar acabó cediendo después de su gira triunfal por las ciudades de Charcas, ignorando sus propios decretos anteriores y aceptando la independencia de la nueva república; durante unos pocos meses incluso se convirtió en su presidente provisional.

En los últimos meses de 1825 por fin se creó una república independiente en Bolivia sobre la base de la antigua audiencia de Charcas. Para el mundo exterior Bolivia seguía siendo una región mítica de hordas de campesinos indios y de minas increíblemente ricas, que representaban un cofre de riqueza. Pero, por desgracia para Bolivia, la verdad era otra. Al ingresar en su vida republicana Bolivia era una región arrasada por la guerra y en depresión económica, que había de experimentar en los primeros años de su vida un estancamiento económico que duró casi medio siglo. Desde aproximadamente 1803 hasta fines de los años cuarenta la economía boliviana experimentó la progresiva descapitalización de su industria minera, una crisis en su economía internacional y una decadencia de su población urbana experimentada desde la última gran depresión del siglo XVII. Si acaso, la depresión de comienzos del siglo XIX iba a ser mucho peor que la anterior, dejando a Bolivia en los años cuarenta como una economía de mayor predominio rural y de mayor orientación a la subsistencia de lo que había sido en el pasado.

Ya la misma declaración de república independiente para la región iba a tener, de hecho, una influencia profundamente negativa en la economía nacional, profundizando y prolongando la crisis de los últimos años del período colonial. Mientras que los historiadores recientes han mostrado una tendencia a minimizar el impacto de la independencia política sobre la sociedad y política latinoamericanas, en contraste con los historiadores liberales decimonónicos que la consideraban un gran viraje en la historia nacional, un examen de la crisis económica vuelve a mostrar la importancia de los acontecimientos de 1825. Los historiadores del siglo XX tienen razón en señalar la persistencia de las élites tradicionales bajo los disfraces republicanos y en subrayar la continuidad de las instituciones sociales y políticas hasta muy avanzado el siglo XIX, ubicando los años ochenta como el período de cambio fundamental respecto de las estructu-

ras coloniales. Pero también es importante darse cuenta que la destrucción de la unión aduanera colonial en que consistía el imperio colonial hispanoamericano tuvo también impacto profundo en la economía nacional e internacional de las nuevas repúblicas, sin que Bolivia fuera una excepción.

La creación de todas las nuevas repúblicas sudamericanas en el primer cuarto del siglo XIX condujo rápidamente a una nueva era mercantilista, cuando la mayoría de los nuevos estados no tardaron en apresurarse a levantar barreras arancelarias recíprocas, cuando no siempre lo hicieron contra los comerciantes ingleses dominantes. Para Bolivia esto significó que sus mercados tradicionales del norte argentino dejaron de constituir una fuente importante de comercio. De hecho, la independencia boliviana iba a ejercer una influencia negativa, causando una decadencia económica a largo plazo de las provincias del noreste argentino. La ruptura de los íntimos lazos con Lima dio lugar a una grave crisis financiera, que no pudieron colmar fácilmente los pocos capitalistas extranjeros que llegaban. Los costos de transporte, que siempre habían constituido en una seria limitación para el comercio internacional de Bolivia, ahora todavía fueron más prohibitivos, pues Perú, Chile y Argentina le cobraban por el uso de sus puertos. La creación de un puerto boliviano en Cobija, en el desierto de Atacama, fue una pobre compensación para estas nuevas barreras mercantiles, pues incluso en su mejor momento sólo un tercio del comercio exterior boliviano pasaba por sus muelles y todos los servicios de transporte terrestre quedaban bajo control de extranjeros.

Así pues, se puede decir que la independencia destruyó, sino limitó gravemente, la mayoría de los lazos económicos tradicionales de Charcas y arrinconó todavía más la economía hacia un nivel de subsistencia. Entretanto la decadencia de su sector minero obligó al gobierno republicano a jugar un papel económico cada vez más negativo. Al declinar sus propios ingresos por el comercio internacional, los gobiernos bolivianos de la primera mitad del siglo XIX se vieron obligados a apoyarse cada vez más en la manipulación de la moneda y en el forzoso monopolio de la acuñación y exportación de la plata. No contando con el impulso de un mercado exterior en expansión (la fuente común de los ingresos crecientes de los estados más avanzados de la región), los impuestos bolivianos fueron cada vez más regresivos y una limitación cada vez más negativa al comercio y a la producción. Así surgió un círculo vicioso de decadencia, represión, limitación y descapitalización a consecuencia de la creación de un gobierno republicano, que a su vez ya no podía contar

con el capital, el talento o los recursos de un gobierno imperial enorme para resolver la crisis de la producción local.

La destrucción de minas e ingenios durante la guerra de la independencia, el monopolio gubernamental de la acuñación y exportación que reducía drásticamente las ganancias, el aumento de los costos de transporte como resultado de las nuevas barreras arancelarias y el fin de crédito real y de la suspensión de las ventas del mercurio, todo contribuyó a la grave crisis de la industria minera. Mientras que en 1803 había cuarenta ingenios y varios centenares de minas en explotación en Potosí, en 1825 sólo seguían funcionando quince ingenios y unas cincuenta minas. La producción de plata en la última década del siglo XVIII ascendía a un promedio de 385.000 marcos de plata anuales, en la primera década del siglo XIX había bajado a 300.000,siguiendo disminuyendo hasta un promedio de 200.000 marcos en la segunda década del siglo, para llegar al punto más bajo de todos los tiempos con unos 150.000 marcos anuales, en los años veinte. Si bien la producción repuntó ligeramente en los años treinta, habrá que esperar a la segunda mitad del siglo para que la producción vuelva a alcanzar el nivel de los 200.000 marcos.

Esta crisis de la producción se refleja en el descenso de las unidades de producción. En un censo oficial realizado, por fin, en 1846 se calculó que incluso para aquella fecha tardía habían unas 10.000 minas abandonadas en la república. Y se trataba de minas abandonadas no por falta de mineral de plata; más bien las guerras, la destrucción de capitales y equipos y la migración de técnicos condujo al puro y simple abandono. Solo se podía rehabilitar estas minas aún muy ricas mediante ingentes inversiones de capital; también se hacía necesario particularmente el empleo de máquinas a vapor para sacar el agua de las minas inundadas que constituía un problema general.

Con su sector exportador en una depresión a largo plazo, Bolivia se encontró que también disminuía su población urbana de habla castellana. Potosí y Oruro, los dos centros mineros principales, estaban tan gravemente afectados que su población urbana global, en 1827 el viajero inglés J.B. Pentland calculó que había bajado a menos de 15.000 habitantes (9.000 para Potosí y 4.600 para Oruro). Otras ciudades que dependían de la minería no estaban mejor: Chuquisaca, por ejemplo, había disminuido a 12.000 habitantes. Así pues, las guerras y la independencia que resultó de ellas afectó en sumo grado los centros, industria y poblaciones vinculadas al comercio y exportación.

Pero en 1827 Bolivia también estaba habitada por campesinos indios, que se calcularon en 800.000. Y así como el derrumbe

del sector exportador de la crisis del siglo XVII había constituido una ayuda positiva para los mercados agrícolas regionales más locales y para las comunidades indias, otro tanto volvería a suceder en la crisis del siglo XIX. Así, en contraste con la decadencia de los centros mineros y de las poblaciones satélites, las dos ciudades— mercado claves de Cochabamba y La Paz permanecieron estables e incluso crecieron. En 1827 la ciudad de La Paz era sin lugar a dudas la más poblada del nuevo país, con unos 40.000 habitantes; por su parte, Cochabamba le seguía de cerca con 30.000. Una y otra eran fundamentalmente centros urbanos al servicio de la agricultura, que se servían de sus hinterlands respectivos con una densa población campesina india.

El hecho de que estas ciudades crecieran mientras que los centros mineros meridionales declinaban, demuestran claramente el problema paradójico del crecimiento boliviano hasta el siglo XX. La decadencia del sector exportador disminuyó el nivel de explotación española e incrementó la renta de los campesinos indios. Estos pudieron aumentar su comercio interno gracias a sus ingresos en aumento, lo que, a su vez, dio pleno apoyo a las economías regionales e hizo avanzar el crecimiento de los centros urbanos que satisfacían sus necesidades. La guerra y el subsiguiente ataque republicano al patrimonio eclesiástico fue también decisivo para debilitar seriamente a la clase hacendada en toda la república y en la falta de grandes mercados urbanos (se calculó que la nueva república era en más de un 90% rural); la escasez de capital significó que el sistema de haciendas mismo se encontraba por doquier en retroceso completo, siendo las haciendas abandonadas un paralelo evidente a las minas abandonadas.

La importancia de la población india se puso perfectamente de manifiesto en la composición de las rentas del gobierno de la nueva república. Mientras que la primera Asamblea republicana se vio obligada a aprobar los decretos peruanos de Bolívar que suprimían la recaudación del tributo del gobierno real sobre todos los indios varones comprendidos entre los 18 y 50 años de edad, el gobierno boliviano pronto se dio cuenta que no podía seguir dándose el lujo de sobrevivir sin él y al cabo de un año había restablecido el tributo colonial sobre todos sus indios. Hasta qué punto habían cambiado las cosas respecto a la etapa anterior se puede ver fácilmente en el hecho de que este tributo cobrado de nuevo en la misma cuantía que durante la colonia, ahora representaba alrededor del 60% de las rentas públicas, mientras que en la segunda mitad del siglo XVIII no llegaba al 25% de la renta real. Con un comercio internacional estancado, una producción

argentífera en declive y una burocracia incapaz de cobrar sistemáticamente los impuestos sobre la propiedad o los negocios de los blancos y cholos, el gobierno tuvo que depender de la capacitación india como su fuente de ingresos más lucrativa, hasta la segunda mitad del siglo.

Si bien este impuesto constituía una carga evidente para la población india, obligó al gobierno boliviano a proteger las comunidades de la amenaza blanca y chola. Los Congresos bolivianos ratificaron la vigente legitimidad del gobierno comunario y de los títulos de propiedad de la tierra, a pesar de la legislación oficial bolivariana que había puesto en duda su mismo derecho de existir. En realidad , hasta los años sesenta, cuando la importancia del tributo había disminuido apreciablemente dentro del conjunto de las rentas gubernamentales, el gobierno central no adoptó la ideología liberal contemporánea sobre la propiedad de la tierra y comenzó a cuestionar la legalidad de la estructura terrateniente comunaria de las comunidades.

También puso de manifiesto hasta qué punto era desastrosa la situación económica de Bolivia en sus primeros años republicanos, el fracaso del primer gobierno reformista de resucitar con éxito una economía nacional e internacional viables. El régimen de Antonio José de Sucre, instaurado a principios de 1825 y que duró hasta Abril de 1828, fue en realidad un modelo de su tipo para América Latina, saliendo favorablemente comparado con los regímenes reformistas y liberal de Rivadavia en Buenos Aires y Santander en Bogotá, de los que copió muchas de sus reformas. Sucre era un liberal típico del siglo XVIII, con ideas excelentes sobre la creación de un orden económico y social viables. Era también un republicano ardiente y trató de crear las instituciones de un régimen representativo y relativamente abierto. Incluso trató de emprender una profunda reforma de las relaciones entre las masas indias y el estado de habla castellana, favoreciendo a los primeros.

Enfrentado con la necesidad de reorganizar y volver a desarrollar la economía maltrecha por la guerra de independencia, Sucre inició, con el apoyo de Bolívar, una reorganización global de la industria minera. No pudiéndose contar ya con los recursos del imperio español para subvencionar a los mineros, en agosto de 1825 se decidió nacionalizar todas las minas abandonadas. Luego, Sucre se giró hacia los capitalistas extranjeros para obtener el capital tan desesperadamente requerido, invitando tanto a los empresarios argentinos como sobre todo británicos, para que volvieran a poner en explotación las minas. Esto condujo a una actividad febril en 1824 y 1825 con difé-

rentes ingenieros y representantes británicos que viajaban a Bolivia para iniciar un estudio de las minas. También condujo a un auge de la expeculación en los mercados financieros londinenses, con la creación de unas "asociaciones" o compañías mineras creadas para explotar minas sudamericanas . La más importante de estas compañías por lo que se refiere a Bolivia, fue la "Potosí, La Paz and Peruvian Mining Association", que contaba presuntamente con un capital de un millón de libras, pero que sólo disponía de un 5% de aquella cantidad. El derrumbe del mercado londinense en diciembre de 1825 produjo el colapso de casi la totalidad de estas empresas sumamente especuladoras. Llegó por fin a Bolivia desde Inglaterra muy poca maquinaria, capital o personal ingeniero. Los pocos mineros que llegaron de Argentina y Londres pronto se dieron cuenta de que los costos de reapertura de las minas eran prohibitivos sin la introducción masiva de maquinaria de bombeo impulsada a vapor por un lado y la disminución de costos por otro. De entre estos factores de costo, el que en un comienzo resultaba más difícil de superar era la mano de obra. En efecto, en julio de 1825 Bolívar había abolido la *mit'a* en toda la región peruana y una vez abolida el nuevo gobierno republicano se vio incapacitado para reestablecer aquella institución. Así pues, Potosí había de ingresar al mercado libre para todas sus necesidades de mano de obra, debiendo ofrecer altos salarios para atraer a los campesinos de la agricultura. Y estos nuevos costos resultaban demasiado pesados para que los pudiera soportar una industria tan frágil como la minería en aquel momento.

Si bien Sucre hizo renacer con éxito tanto la Casa de la Moneda como el Banco de San Carlos con una base sólida y logró que la acuñación de moneda alcanzara niveles racionales, poco pudo hacer para la reapertura de las minas abandonadas; el resultado final fue que los mineros bolivianos locales fueron los únicos proveedores de minerales de plata al Banco y a la Casa de la Moneda. Además de todos sus esfuerzos, la introducción de maquinaria a vapor (la innovación tecnológica decisiva que se necesitaba en la industria minera de la plata) todavía tardaría varias décadas en llegar; Sucre tampoco pudo controlar el problema crucial de la inundación de las minas.

Más revolucionarias que sus reformas en la industria minera fueron los intentos de Sucre de introducir un sistema fiscal progresivo que sostuviera el nuevo régimen republicano. Aceptando y apoyando la abolición de Bolívar de la explotación represiva de los indios, llevó a cabo la efectiva abolición de la *mit'a* y también prescindió temporalmente del tributo. También atacó los

odiosos monopolios reales y la industria tabacalera quedó libre de toda restricción. Sucre abolió las famosas alcabalas o impuestos a las ventas, lo mismo que redujo algunos impuestos especiales como el que gravaba la producción de la coca. Todos los impuestos dispersos, o bien eran impuestos personales regresivos contrarios al sector social más pobre o bien restrictivos del comercio y la producción; ahora quedaron sustituidos por un impuesto único directo sobre la propiedad urbana rural y los ingresos personales. "Esta contribución directa" fue realmente una reforma revolucionaria que prometió modernizar la estructura fiscal del estado, creando la estructura fiscal más progresiva de que por entonces se podía disponer.

Pero al cabo de un año de su promulgación los nuevos impuestos directos a la riqueza (propiedad inmueble y rentas) tuvieron que ser abandonados. El hecho desnudo era que la burocracia estatal no podía administrar eficazmente aquel impuesto que exigía la cuidadosa evaluación de todos los recursos de toda la ciudadanía y su fiscalización por una administración libre de la corrupción. No se disponían de registros catastrales ni de los censos, fuera de los antiguos padrones y revistas indias. El régimen tampoco pudo crear estos registros vitales, pues con la liberación del imperio español, Bolivia también había perdido la mayor parte de su burocracia gubernamental técnicamente formada y con una buena educación. Se trataba del problema típico de todas las zonas excoloniales recientemente liberadas: los bolivianos quedaron abandonados a su suerte con la cáscara del estado y unos pocos individuos formados capaces de administrar las necesidades del gobierno. Además, con la decadencia de las rentas el nuevo estado se vio incapaz de pagar salarios que atrajeran a las pocas personas capaces que quedaban en Bolivia para su servicio. Así, los ambiciosos planes de Sucre para un sistema fiscal progresivo naufragaron en la incapacidad del estado para realizarlos. El incesante declive del comercio externo, que permaneció duramente gravado, privó al estado de una fuente de ingresos potencialmente creciente y que resultó decisiva para todos los estados más avanzados y en desarrollo de la región. Así pues, en 1826 la administración se vio obligada a abandonar el impuesto directo y volver a los impuestos tradicionales para sostener las finanzas estatales.

El fracaso de su reforma fiscal para generar capital contribuyó a empujar a Sucre hacia un enfrentamiento total con la Iglesia en su papel de poder económico dentro del estado. Anticlerical como todos los miembros de su generación, Sucre y Bolívar buscaron destruir el papel de la Iglesia en la nueva

república. En ésta tarea Sucre contó con la ayuda de una jerarquía mas bien reaccionaria y que había apoyado la causa realista hasta el final. La Iglesia se encontró, pues, con una dirección debilitada y más bien desacreditada cuando Sucre empezó su asalto y no le pudo oponer una resistencia eficaz.

El ataque de Sucre a la Iglesia fue uno de los más radicales de América Latina en el siglo XIX, sorprendentemente también fue su acción de gobierno más afortunada. Comenzó asumiendo el control de los diezmos eclesiásticos, que probablemente ascendían a unos 200.000 pesos anuales. Prosiguió llevando a cabo las anteriores reformas reales de la estructura financiera de la Iglesia, confiscando todas capellanías y obras pías, que eran hipotecas que pagaban intereses por propiedades privadas concedidas a la iglesia para pagar misas y beneficios del clero. A continuación le tocó el turno a las principales organizaciones propietarias rurales y urbanas: los conventos. El nuevo gobierno ordenó la clausura de todos los conventos que tuvieran menos de 12 miembros, logrando reducir su número en Bolivia de 40 a 12. Los conventos subsistentes vieron confiscadas sus propiedades privadas, que pasaron a la administración gubernamental; ésta pago a los frailes que quedaban sus respectivos salarios. Con este solo golpe el estado se apoderó de propiedades urbanas y rurales por un valor de 3.000.000 de pesos. Los conventos femeninos fueron objeto de medidas semejantes y se calcula que los bienes confiscados de ellos ascendía a un valor de otros 3.8 millones de pesos. Mediante todas estas medidas Sucre probablemente puso bajo control del estado unos bienes cuyo valor rondaba entre lo 8 y 10 millones de pesos.

La confiscación del patrimonio eclesiástico fue realmente una acción terrible y revolucionaria, de la que la Iglesia boliviana ya no se recuperaría jamas. Pero a fin de cuentas contribuyó poco, financieramente, al régimen, pues en los deprimidos mercados urbanos y rurales el estado encontró pocos compradores para estas inmensas propiedades. Así pues, el estado se vio obligado a arrendar la mayoría de estas tierras y edificios a sus antiguos arrendatarios: lo que cobró por ellos no fue mayor que lo que sacaba la Iglesia. Pero ahora había contraído la obligación de pagar los salarios y mantener a los frailes y monjas, grupo que ascendía probablemente a unas 500 personas. También tenía que pagar a sus propios administradores, de forma que lo que acababa llegando al estado como renta resultaba una cantidad verdaderamente pequeña. Sin embargo, pudo utilizar algunas de estas propiedades para garantizar ciertos préstamos internos; pero dada la situación de la economía nacional el

mercado de capitales interno no tenía las dimensiones suficientes ni podía proporcionar una fuente de ingresos para el estado. La mayoría de los ingresos generados por el arrendamiento o venta del antiguo patrimonio eclesiástico de hecho fue destinada a la creación de servicios sociales y de centros educativos en los centros urbanos de Bolivia. Las seis ciudades mayores (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Tarija) consiguieron escuelas primarias y orfanatos gratuitos. Pero la mayoría de estas instituciones tuvieron una vida efímera, por lo que también su impacto en la estructura económica y social de la sociedad fue escaso.

Por todo ello, la reforma eclesiástica de Sucre no proporcionó la bonanza financiera que se esperaba de la misma. De hecho, sólo dio al estado un respiro temporal, pero la mayor parte de sus ingresos o fueron absorbidos por el mantenimiento del personal eclesiástico o se dedicaron a iniciar un sistema de educación gratuita o al pago de las deudas militares pendientes. Al final poco quedaba para impulsar el crecimiento económico o el desarrollo de una infraestructura vital de comunicaciones. Pero desde un punto de vista político las reformas eclesiásticas de Sucre tuvieron éxito total. Bolivia se apoderó por completo de las facultades patronales reales, se incautó de todas las tierras de la Iglesia, redujo el número de órdenes religiosas a un volumen insignificante, abolió los vínculos entre seglares y clero al eliminar las cofradías e incluso llegó a incautarse de la plata de los templos. Todo esto se llevó a cabo sin que la élite urbana ni las masas campesinas protestaran. La Iglesia que salió de tales reformas fue una institución dependiente y pasiva en los asuntos del estado para el resto del siglo. Así, Bolivia se ahorró los dolores de los conflictos religiosos que habían de experimentar muchas de las repúblicas americanas, mostrando una tolerancia religiosa desacostumbrada en los cánones latinoamericanos.

Hay que subrayar que Sucre no destruyó a la Iglesia y que con la recuperación del poder romano en todo el mundo durante la segunda mitad del siglo XIX Bolivia también conocería el renacimiento de una Iglesia importante. La reaparición de los jesuitas, la llegada de nuevas órdenes como los salesianos, todo contribuiría a resucitar los poderes educativos de la Iglesia. Pero nunca se restauró su papel económico y el papel político de la Iglesia boliviana quedó enmudecido, siendo de poco interés tanto para la élite tradicional como para las masas revolucionarias.

Aunque Sucre era un líder popular y un comandante militar capaz, acabó encontrándose enfrentado con una situación ingobernable. Las rentas del estado o fueron declinando o se estancaron en sus dos años y medio de gobierno. La carga de un numeroso ejército colombiano de ocupación, con unos 8.000 hombres, también gravaba pesadamente el tesoro y la vida política nacionales. El proceso de fragmentación de la generación de generales republicanos victoriosos iba haciendo sentir su impacto en todos los territorios liberados y Bolivia no fue ninguna excepción. Sucre, desilusionado, pronto se encontró en la oposición de sus antiguos compañeros de armas. Un amargo asesinato y un golpe abortado en Chuquisaca en agosto de 1828 eliminaron por completo el interés de Sucre por permanecer al frente del estado. Tras haberse restablecido de sus heridas dimitió del gobierno y se dirigió al exilio voluntario, regresando a su Caracas natal.

El fin del gobierno de Sucre no canceló los regímenes liberales y reformistas ni desembocó en una época de anarquía como fue el caso de otras repúblicas, tras el derrocamiento de sus jefes originales. Pues había hombres que habían servido a Sucre y le habían apoyado lealmente, quienes ahora se harían cargo de los sucesivos gobiernos de la república durante la generación siguiente. Aunque estos jefes se encontrarían con los mismos problemas de Sucre, causándoles las mismas dificultades, el intento de crear un estado liberal y próspero fue el objetivo de una serie de generales liberales que vinieron después del gran fundador.

Sin lugar a dudas el más importante de estos jefes primitivos fue Andrés de Santa Cruz: originario de La Paz, de padre español y madre aymara, Santa Cruz había ingresado al servicio militar al comienzo de las guerras de independencia y después de una prolongada y distinguida carrera, acabó pasándose al bando republicano en 1821, convirtiendose en un oficial destacado en las filas del ejército expedicionario chileno de San Martín. En 1822 San Martín lo envió a prestar ayuda a Sucre en las campañas de Quito, desde entonces fundió su causa con la de Bolívar, Sucre y sus tropas colombianas. En 1822 fue elevado al grado de general por Bolívar y a mediados de 1823 obtuvo una importante victoria en la batalla de Zepita, el más famoso de sus muchos combates.

Íntimamente vinculado por su padre militar a la aristocracia cuzqueña y largamente relacionado con los principales procesos políticos y militares peruanos, Santa Cruz intervino íntimamente en los asuntos del Perú y en un principio estaba más interesado en la política peruana que en la boliviana. Elegido

por su ciudad natal a la Asamblea Constituyente de 1825 declinó el honor que se le hacía, quedando como simple prefecto, primero de Chuquisaca durante el período de la Asamblea Constituyente y después durante el régimen de Sucre como jefe del distrito paceño. Pero en septiembre de 1826 Bolívar lo llamó a Lima, haciéndolo presidente de la República peruana. Su primera presidencia en el Perú fue efímera y en 1827 Santa Cruz fue expulsado. Pero el derrocamiento de Sucre, que en parte se debía a los esfuerzos de su amigo del Cuzco, el general Agustín Gamarra, que llegó a invadir temporalmente La Paz, llevó a la decisión de llamar a Santa Cruz, para la presidencia de Bolivia. Fue una decisión incluso apoyada por Sucre.

Desde el momento que se le hizo el ofrecimiento hasta su llegada a Bolivia estuvo gobernada por una serie de presidentes provisionales; uno de ellos, el general Blanco, trató sin éxito de apoderarse del gobierno para si. Pero en mayo de 1829 Santa Cruz por fin volvió a Bolivia y juró su cargo. Los 10 años de gobierno de Santa Cruz serían fundamentales en la historia republicana; las instituciones fundadas por él iban a constituir el esqueleto básico de la organización de la vida civil republicana durante el siglo siguiente. De 1829 a 1839 en que fue derrocado por la intervención militar chilena, Santa Cruz demostraría ser uno de los administradores más capaces que Bolivia había de conocer.

El logro fundamental del régimen de Santa Cruz fue la creación de un orden económico, político y social estables. Después de casi un cuarto de siglo de guerras e invasiones ininterrumpidas, pudo garantizar en Bolivia algo parecido a diez años de paz. Gracias a esta estabilidad pudo crear una estructura financiera estatal más viable y conseguir la mayor cantidad de recursos que el estado podía recaudar de la economía. También pudo emplear estos recursos para pagar un ejército semiprofesional y garantizar una administración civil activa y responsable.

En la esfera económica Santa Cruz era un mercantilista decidido. Apenas organizado su gobierno se dedicó a establecer importantes aranceles proteccionistas, llegando al extremo de prohibir por completo la importación de telas de tocuyo. También decidió que trataría de canalizar todas las importaciones por el puerto de Cobija, el único puerto que le quedaba a Bolivia después de los diferentes tratados de reorganización territorial con Chile. Las importaciones procedentes de los puertos más cómodos de Arica y Tacna, que ahora se encontraban sólidamente en manos peruanas, sufrieron grandes impuestos mientras que se ofrecían incentivos de menores impuestos,

puerto libre y subvenciones al comercio dirigido a Cobija. Se ha calculado que en su período de mayor actividad alrededor de un tercio de comercio internacional de Bolivia pasaba por aquella ciudad; Cobija se transformó de una población de pocos centenares de habitantes a otra más de millar, que contaba con instalaciones completas de muelles y almacenes. También se construyó una carretera para coches desde Cobija hasta Potosí, además de otras rutas internas para facilitar los costos decisivos de transporte.

Santa Cruz también dedicó atención a los aspectos habituales de preocupación en la minería. Una vez más con su estilo típico de racionalizar la estructura económica, redujo considerablemente los impuestos mineros. En 1829 dejó de cobrarse el impuesto colonial de Cobos de 1 –0,5%; todos los demás impuestos quedaron unificados en uno solo: de 5%. El impuesto tradicional del 3% sobre el oro también fue retirado en 1830, con lo que parece haber aumentado algo la producción aurífera, aunque la producción de plata permaneció relativamente estable a lo largo de todo el período.

Aunque se suele considerar mérito de Santa Cruz el haber implantado la estabilidad económica, la normalización aduanera, los acuerdos fiscales y la regularización del crédito público, en realidad hubo pocos cambios básicos. En efecto, a pesar de toda la protección arancelaria especializada y de cierta construcción modesta de nuevas carreteras y las garantías de paz, la economía simplemente no reaccionaría a la política mercantilista implantada por el régimen: no obstante toda la protección concedida a la industria textil autóctona del tocuyo, la producción de esta tela se calculó que había diminuido a una cuarta parte de sus niveles coloniales. Así pues, al final del régimen crucista éste se vio obligado a suspender la prohibición total de las importaciones de tocuyo para poder satisfacer las demandas del mercado interno. Además, a pesar de toda la reducción de impuestos, la falta de capital en la minería impedía el aumento de la producción, durante las décadas de los años 20 y 30 la producción permaneció relativamente estancada en cuanto se refiere a la plata que era el principal producto de exportación de la república.

A pesar de la notable mejora del crédito público y de los esfuerzos proteccionistas racionales, las rentas efectivas del gobierno estuvieron estancadas durante las primeras tres décadas republicanas: la cifra de 1.5 millones de pesos anuales de renta pareció ser algo que ningún gobierno pudo traspasar hasta bien avanzada la década de los cincuenta. Por otro lado, esa cifra

también escondía cambios estructurales a largo plazo en la economía. Como habría de subrayar el famoso estadístico José María Dalence en 1846 todas las fuentes de ingresos gubernamentales procedentes de la economía no dejaron de decaer desde los años veinte a los años cuarenta. Sólo el incremento demográfico rural con el consiguiente aumento del tributo, mantuvieron el ingreso total constante. Así pues, la importancia relativa del tributo en las rentas republicanas había pasado del 45% en 1832 al 54% en 1846, mientras que los ingresos aduaneros tanto internos como externos (siendo los segundos el rubro más importante), representaban apenas el 22% del total.

El estancamiento a largo plazo del sector minero resultaría ser fatal para el crecimiento sostenido de la economía nacional, para la disponibilidad de cualquier financiamiento solvente gubernamental para su inversión en la infraestructura básica, o para abastecer el crédito destinado al crecimiento industrial. No obstante sus mejores esfuerzos, Santa Cruz, como todos los presidentes republicanos que le habían precedido, se encontró que los gastos superaban permanentemente a los ingresos. Si bien en sus primeros años redujo algo el gasto militar, el ejército seguía siendo el monstruo que consumía la mayor cuota de la renta pública: En un año normal los costos militares representaban entre el 40 y 50% del gasto total, siguiéndole en el presupuesto el mantenimiento del clero. Si añadimos el costo de la burocracia veremos que apenas quedaba nada para la inversión. Como demostraría el gobierno crucista, sólo nuevos impuestos sobre el comercio interno podían crear fondos necesarios para inversiones vitales.

Esta dislocación a largo plazo en los presupuestos gubernamentales, que presentan un déficit casi uniforme durante este período, impuso la decisión a Santa Cruz a introducir una nueva moneda de plata devaluada: en 1830 y mediante decreto secreto empezó a acuñarse en Potosí una nueva moneda de plata que contenía 18,05 gramos de plata en lugar de los tradicionales 24,45 gramos (el antiguo "peso de a ocho" colonial). Si bien Santa Cruz pensó en crear la nueva moneda feble como un recurso temporal para obtener ganancias suplctorias, acabó convirtiéndose en una dependencia a largo plazo de la economía; su creciente importancia frente al antiguo "peso fuerte" constituye un buen índice de la crisis en aumento de la estructura financiera estatal. Mientras que el régimen acuñó en los años treinta sólo 3,5 millones de pesos de moneda feble de plata frente a 16.5 millones de moneda fuerte en los años cuarenta la proporción había pasado a ser de 9 a 11 millones respectivamente; en los

años cincuenta la nueva moneda presentaba un dominio apabullante con 21 millones de pesos frente a solo 2.5 millones de pesos fuertes.

Supuesto el hecho de que el régimen trató de recoger los antiguos pesos y pagar con los nuevos, se produjo una incertidumbre general dentro de la economía nacional que sólo había de aumentar con los años. Así, el estancamiento a largo plazo de la economía condujo a una crisis a largo plazo en el financiamiento gubernamental, que a su vez condujo a la manipulación monetaria, contribuyó a acentuar todavía más la incertidumbre económica. Incluso el crecimiento tan impresionante de Cobija y de su comercio bajo. Santa Cruz disminuyó rápidamente después de 1836, cuando la creación de la Confederación Peruano – Boliviana volvió a convertir el puerto de Arica en el puerto legítimo de Bolivia. La reducción de los impuestos discriminatorios contra Arica le permitió alcanzar su dominio natural, liquidando prácticamente a Cobija como alternativa viable.

Si bien las reformas económicas de amplio alcance de Santa Cruz no lograron invertir a fin de cuentas el estancamiento de la economía nacional, sus reformas políticas y administrativas y la paz política que alcanzó demostraron ser de importancia vital. Encargando estudios parlamentarios y organizando comisiones especiales, pudo promulgar por fin importantes códigos civil y mercantil, modelados en los napoleónicos. También sistematizó la administración local, restableciendo con éxito el censo rural, para el que se inspiró en la práctica que había permitido el éxito de la recaudación del tributo colonial, Si bien aprobó una constitución democrática con una presidencia limitada, en realidad no tardó en conseguir poderes dictatoriales, implantó una completa censura de prensa y no tuvo inconveniente en exiliar a sus opositores. Con todo, habría que subrayar que si se tiene en cuenta los parámetros de la época, Santa Cruz resultó ser extraordinariamente tolerante con sus opositores y mantuvo el derramamiento de sangre en una cuota mínima durante los conflictos políticos. Además , la tranquilidad de su gobierno entre 1829 y 1835 fue tal que obtuvo un apoyo popular aplastante del sector elitista de la sociedad.

Pero si bien Santa Cruz era una figura dominante en Bolivia, ésta no era la única preocupación de aquél. Desde sus más tempranas intervenciones en la vida del Cuzco hasta su presidencia en Lima a mediados de los años veinte, Santa Cruz intervino profundamente en los acontecimientos peruanos. Participó tan activamente en la política del Perú meridional y de Lima como en las intrigas de Potosí y Chuquisaca. Al hacerse cargo de las

riendas presidenciales de Bolivia de ninguna manera abandonó sus ambiciones políticas peruanas. Cuanto más caótica se hizo la situación política del Perú la figura de Santa Cruz llegó a ser cada vez más atractiva para los peruanos, particularmente para los del sur.

A mediados de la década de los treinta el incesante torbellino creado por la ininterrumpida actividad del líder peruano sureño Gamarra, quien trataba de intervenir también en la política boliviana, junto con el debilitamiento de la crisis que enfrentaba en Lima el régimen de Salaverry, proporcionó a Santa Cruz la excusa para que sus partidarios en ambos estados invadieran el Perú e intentaran un nuevo régimen. En junio de 1835 un ejército boliviano invadió el Perú, invitado por uno de los sectores contendientes en las guerras civiles locales. En agosto los bolivianos habían derrotado el ejército de Gamarra y después de una larga serie de batallas, por fin Salaverry salió vencido y ejecutado en enero de 1836.

En este momento Santa Cruz decidió reorganizar el propio Perú en dos estados autónomos: el Perú septentrional y el Perú meridional, añadiéndoles Bolivia, con lo que constituyó la Confederación Perú — Boliviana. Después de haberse autonombrado protector, maniobró para que todos los grupos regionales acabaran apoyando su idea unitaria, organizándose el gobierno confederal final en octubre de 1836. A pesar de toda su astuta actividad política, Santa Cruz mantuvo una base real de poder sólo en Bolivia y en el Perú meridional; y todavía en esta última zona debía enfrentar la constante oposición de Gamarra.

Pero no obstante todas las incertidumbres a largo plazo de la Confederación, no se puede poner en duda que trajo tanto la paz al Perú como el respeto a su poder en toda la región del Pacífico. Si bien la población del Perú por entonces apenas superaba la de Bolivia, acercándose a 1.5 millones de habitantes, los recursos del estado peruano era potencialmente muy superiores. A diferencia de Bolivia, Perú contaba con una multiplicidad de vigorosas economías regionales, con manufactura autóctona potente, además de una amplia variedad de recursos explotables con relativa facilidad y que se podían poner en explotación rápidamente para su exportación al mercado mundial. Frente a la economía estancada pero estable de Bolivia, la riqueza peruana se podía desarrollar más fácilmente, estando al alcance de la mano un potencial de gran riqueza. Lo que básicamente se requería para despertar plenamente a este gigante dormido era un sistema político estable y una burocracia controlada y responsable.

Tal situación resultaba ideal para Santa Cruz, cuya justa reputación descansaba en sus excelentes capacidades administrativas. Inmediatamente promulgó los códigos civil y mercantil para el nuevo estado, recolectó estadísticas, reorganizó y refinanció la burocracia. También destinó fondos con rapidez para el ejército, al que apoyó y se convirtió en un aliado importante del régimen.

Desgraciadamente para Santa Cruz, los chilenos también se dieron cuenta de su capacidad para hacer del Perú una gran potencia. Sabían que su propia expansión era un movimiento hacia el norte por el territorio del Pacífico en disputa y que se encontraban en activa competencia con los peruanos por unos mismos mercados europeos. En estas condiciones un Perú revitalizado por Santa Cruz no resultaba aceptable; por tanto Chile apoyó activamente a los políticos peruanos disidentes hasta el punto de armarlos y transportarlos de vuelta a su patria. También "disfrazó" sus propias tropas como rebeldes peruanos proponiéndose como gran objetivo la derrota de Santa Cruz por medio de incursiones constantes.

El resultado final de estas invasiones de inspiración chilena y de revueltas subvencionadas por Chile fue un grave debilitamiento del gobierno de la Confederación. Si bien Santa Cruz ganó varias batallas importantes, los prolongados conflictos acabaron haciendo mella; en 1838 los chilenos plantaron un ejército regular en el Perú y en el curso de una batalla importante cerca de Lima, en enero de 1839, las armas chilenas pusieron fin tanto al gobierno de la Confederación como a la carrera política del notable Santa Cruz.

Obligado a exiliarse en Ecuador, Santa Cruz tuvo que abandonar también necesariamente el gobierno boliviano, mientras que su representante local, el general José Miguel de Velasco, asumía el control sobre el estado ahora nuevamente independiente. Pero el régimen de Velasco resultó difícil: el antiguo aliado se convirtió en decidido enemigo de Santa Cruz, confiscando todos sus bienes personales; pero pronto también se encontró él en constante conflicto con uno de los generales crucistas, José Ballivián. Este se dedicó a organizar diferentes alzamientos importantes a lo largo de los pocos años que gobernó Velasco, este presidente pudo realizar algunos cambios: reformó la constitución para que la presidencia estuviera mejor controlada; rebautizó la ciudad de Chuquisaca con el nombre de Sucre; pero no pudo apaciguar la situación política. Después de unos dos años gobernando, una revuelta crucista derrocó a Velasco en junio de 1841.

Pero el derrocamiento de un gobierno boliviano no se consideraba un acontecimiento local en el contexto de la política internacional contemporánea; desde la caída de Santa Cruz, el gobierno de Lima había quedado bajo el control de Gamarra, su más antiguo enemigo. Tanto el Perú como Chile e incluso Argentina observaban de cerca la evolución local boliviana y cuando finalmente se puso en evidencia que Santa Cruz había ganado, Gamarra anunció su intención de invadir la república para impedir el temido regreso de Santa Cruz al poder. En julio un ejército peruano empezó a invadir la frontera y en octubre se había apoderado de La Paz sin librar ninguna batalla importante. Ahora quedó claro para todos que Gamarra esperaba anexionar una parte considerable de Bolivia al Perú. Otros vecinos de la república boliviana consideraban esta ocasión como momento propicio para sus propios proyectos: los argentinos apoyaron un ejército dirigido por Velasco por el sur y Ballivián parecía oscilar entre diferentes campos, uno y otro apoyando a Gamarra, aunque al fin decidieron apoderarse por sí mismos del gobierno y oponerse a la invasión peruana.

En todas estas intrigas y maniobras Ballivián acabó apareciendo como la figura conductora. Estando en curso simultáneamente tres alzamientos internos y con un ejército invasor que amenazaba la misma existencia del estado, al fin todas las facciones decidieron acabar con el apoyo a la vuelta de Santa Cruz y se sometieron a Ballivián como el general más capaz de organizar la defensa. Esta decisión resultó de importancia vital en muchos aspectos para los asuntos internacionales de la nueva república.

Ballivián se enfrentó a Gamarra en la batalla librada junto a la población de Ingavi, en noviembre de 1841; en ella derrotó por completo a las fuerzas invasoras peruanas. Como resultado de esta acción cayó en el Perú el gobierno de Gamarra, Bolivia quedó liberada de sus obligaciones económicas con el Perú que se le habían impuesto como resultado de la descomposición de la Confederación y, por fin, quedó definitivamente rota la íntima conexión de las políticas peruana y boliviana. Después de Ingavi el Perú ya no volvió nunca más a entrometerse en los asuntos bolivianos; por su parte ningún político boliviano volvió a ser un contendiente potencial en la política peruana. Además, el fin de la amenaza crucista significó que Chile y Argentina cesaran ahora en su activa participación y entrometimiento en los asuntos internos bolivianos, permitiendo que la política de Bolivia volviera a ocuparse de los problemas y cuestiones principalmente nacionales.

Por otro lado, el fin de la era crucista marcó también el fin de Bolivia como una potencia importante de equilibrio en el hemisferio meridional. También puso fin a la época tan brillante de jefes extraordinarios que la nueva república había recogido. Si bien el estancamiento económico de la república había limitado siempre los alcances de la acción, los regímenes de Sucre y Santa Cruz representaron lo mejor de la ideología revolucionaria de los grandes movimientos de liberación; ambos hombres demostraron una humanidad y una tolerancia en su conducta política que acabaría entrando en agudo contraste con el siguiente grupo de jefes que gobernarían la república.

CAPITULO V

LA CRISIS DEL ESTADO
1841 — 1880

El período posterucista comenzó bajo la dirección más bien insólita de José Ballivián. Nacido en La Paz en 1805, Ballivián procedía de familia aristocrática (su tío era el alto funcionario real Sebastián de Segurola, que dirigió la represión contra la rebelión de Tupaq Amaru y Tupaq Katari); pero a pesar de sus antecedentes, Ballivián era un individuo relativamente carente de educación, habiendo ingresado en la milicia a los 12 años de edad y sin que conociera en toda su vida de otra cosa que no fuera la carrera castrense. Jefe destacado de los ejércitos independentistas, ascendería a las más encumbradas posiciones en los ejércitos de Santa Cruz. Pero su propia falta de educación y refinamiento Político, además de su acusada personalidad crearon un ambiente en el que el cuartelazo, las masacres y las ejecuciones gratuitas llegaron a ser la pauta consagrada.

Con todo, la era de Ballivián desde 1841 hasta fines de 1847 fue un período tranquilo de gobierno en Bolivia, pasando por último régimen estable del primer período de caudillos. Bajo Ballivián el Congreso se dedicó a organizar la sociedad y muchos civiles capaces formaron parte del gobierno central. Lenta, pero incesantemente, comenzaron a aumentar la población y las rentas públicas; el país trató de reorganizar su espacio interior de acuerdo con las nuevas circunstancias internacionales.

Aunque militarista impenitente, Ballivián reconocía los absurdos a que había llegado Bolivia en su sed de poder internacional. Tras un intento frustrado de invasión al Perú, Ballivián se contentó con gobernar Bolivia. Por entonces se encontró con un ejército hipertrofiado que se tragaba casi la mitad del presupuesto nacional y en el que había un general para cada 100 soldados. Estableciendo especiales concesiones de tierras y fondos de jubilación, Ballivián trató de desmantelar la máquina de guerra boliviana, reduciendo su peso en la política interna. Se disminuyó el número de soldados y oficiales; incluso se fundaron algunas "colonias militares" en los llanos orientales. Sin embargo, los costos de la jubilación de este ejército originaron una nueva y pesada carga sobre la deuda pública y los gastos globales destinados a los militares sufrieron poco cambio.

En otros asuntos el régimen tuvo poco más de éxito. Aunque el presupuesto nacional siguió arrastrando su déficit crónico, los ingresos aumentaron de los 1.5 millones de pesos de los años veinte y treinta a cerca de 2 millones a fines de los años cuarenta. Aunque modesto, se trataba siempre de un progreso. Pero aun en este punto seguían siendo evidentes las limitaciones estructurales a largo plazo. La renta del tributo indio seguía aportando su incesante 40% del total; los ingresos aduaneros seguían sujetos a grandes altibajos de un año a otro; pero ahora el estado había organizado ciertos aranceles e impuestos internos importantes, que producían ingresos más estables. El impuesto a la producción de la coca, producto de exclusivo consumo indio, ahora producía anualmente un promedio de 200.000 pesos; y la exportación renovada de la cascarilla (para la manufactura de la quinina) reportaba una suma parecida, constituyendo un rubro de exportación secundaria, pero de peso, junto con la plata.

El gobierno también fijó su atención a los llanos del Oriente. Fue creado oficialmente el departamento del Beni; se organizaron colonias militares e incluso se intentó formar, sin éxito, varias compañías europeas de colonización. También se discutió intensamente la conveniencia de abrir nuevas rutas fluviales y de canales en los llanos orientales, para dar una salida atlántica a la producción boliviana. Así como el gobierno comenzaba a mirar hacia el este por primera vez, también acabó reconociendo la nueva realidad de la población y de los recursos bolivianos creando un nuevo obispado en Cochabamba, que ahora era la segunda ciudad en importancia de la república: En 1843 el Congreso decretó la creación de esta cuarta circunscrip-

ción eclesiástica, que el Vaticano ratificó por fin en 1847. Así Bolivia contaba ahora con los obispados de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, además del arzobispado de la Plata (Sucre).

Por fin, en 1846 se llevó a cabo el primer censo nacional de Bolivia, a cargo del estadista José María Dalence. Así se descubrió que la población había aumentado constantemente hasta unos 1.4 millones de personas, fuera de unos 700.000 indios dispersos independientes de los llanos del Oriente. Pero a pesar del crecimiento de la población a lo largo del casi cuarto de siglo de vida republicana, había habido poca transformación en la organización social y económica del país. La Paz seguía siendo la ciudad mayor (ahora contaba con 43.000 habitantes), mientras que Cochabamba, la segunda, sólo tenía 30.000. Sumando la población de las 11 ciudades y 35 villas de la república (es decir, la población concentrada en poblaciones de aproximadamente 500 o más habitantes), daba un total que no pasaba del 11% de la población nacional, cifra que no se apartaba demasiado de los cálculos de Pentland inmediatamente después de la independencia.

Como podía ya esperarse de la falta de inversiones gubernamentales y del estancamiento general de la vida urbana, el nivel educativo de la sociedad era extraordinariamente bajo. En 1847 sólo asistían a los centros de enseñanza 22.000 niños, lo que equivalía al 10% de los niños en edad escolar de la república por entonces. Esto parecía implicar que en el futuro no se podían esperar grandes cambios en el alfabetismo de la población, pues Dalence calculó con optimismo que en Bolivia sólo había 100.000 personas alfabetizadas en castellano, cifra equivalente al 7% de la población censada. Sin un aumento sensible en la escolarización, resultaba evidente que el alfabetismo de la próxima generación apenas superaría el de la de 1846.

Tampoco la economía había vivido grandes cambios, a pesar de la paz relativa que venían de garantizar las presidencias de Santa Cruz y Ballivián: si bien la minería de la plata, tras el declive a 156.000 marcos anuales en los años veinte, se había recuperado moderadamente en los años treinta a 188.000 marcos y alcanzando sólo un máximo de 191.000 marcos en los cuarenta, ello sólo representaba la mitad de las cifras alcanzadas en los años noventa del siglo XVIII, con su producción de 385.000 marcos. Además Dalence calculó en 10.000 las minas de plata abandonadas en Bolivia, de las que dos tercios todavía contaban con plata pero estaban inundadas, por los que su explotación no se podía restaurar sin maquinaria de bombeo. De hecho sólo habían 282 mineros activos, que en 1846 sólo empleaban a unos

9.000 obreros, de los que la mayor parte sólo lo eran a medio tiempo, combinando el trabajo minero con el agrícola.

En cuanto al resto de la industria nacional Bolivia cobijaba una sociedad artesana que satisfacía básicamente las necesidades de su población. La industria predominante era la de tejidos de lana para el consumo doméstico o local juntamente con la transformación de los alimentos. El único sector que el gobierno trató de desarrollar en los primeros años —el de las telas baratas de algodón— no logró sobrevivir. A pesar de las prohibiciones esporádicas y de los permanentes y pesados aranceles contra las telas de algodón inglesas, la industria del tocuyo, centrada en Cochabamba, nunca logró recuperar su importancia del siglo XVIII. Mientras que en la época colonial se calculó que la industria cochabambina del tocuyo contaba con varios centenares de obrajes productores, en 1846 apenas llegaban a cien; su producción había descendido de unos 200.000 pesos anuales a sólo unos 60.000 en los años cuarenta. Las necesidades de telas baratas de algodón ahora quedaban satisfechas con las telas inglesas, que dominaban el mercado.

Así pues, Bolivia seguía siendo una sociedad predominantemente rural. El 89% de la población vivía fuera de las ciudades y aldeas, produciendo más de los dos tercios del producto nacional (calculado en mercancías por valor de 13.5 millones de pesos, frente a los 2.3 millones de la minería y los 3.9 millones de la manufactura, en 1846), permaneciendo no sólo totalmente analfabeta sino incluso mayoritariamente ajena a la lengua nacional. Aunque no contamos con estadísticas sobre la situación sociolingüística, no puede considerarse una exageración calcular que no llegaba al 20% la parte de la población que era monolingüe o bilingüe castellana. El kechua seguía siendo la lengua dominante de la república, siguiéndole a poca distancia el aymara. El castellano era, pues, una lengua minoritaria en la república, aunque la única en la vida política y económica nacional.

Dentro de la sociedad rural, el equilibrio de control entre las comunidades y las haciendas permanecía fundamentalmente el mismo de fines de la colonia. En 1846 habían más de 5.000 haciendas, valoradas en 20 millones de pesos y unas 4.000 comunidades libres, con un valor de sólo 6 millones de pesos. Pero mientras que el número y el valor relativo parecían favorecer a las haciendas en el campo, de hecho la mayoría de la fuerza de trabajo vivía en las comunidades libres. Dalence calculó que sólo habían 5.135 cabezas de familia hacendados, frente a 138.104 cabezas de familia comunarios. Aceptando el coefi-

ciente familiar de 4.5 de Dalence, lo anterior significa que 620.000 indios vivían en comunidades, representando el 51% de la población rural.

La población *yanakuna* de las haciendas ascendía probablemente a unos 375.000 a 400.000 indios; los 200.000 habitantes rurales restantes eran probablemente agricultores libres de las zonas del sur u obreros migrantes sin tierras que las arrendaban a las comunidades o a las haciendas.

Si bien las haciendas poseían naturalmente las propiedades de mayor valor comercial, se encontraban en un estado relativo de estancamiento, con las dos únicas excepciones de los Yungas y del valle de Cochabamba.

En el primer caso se trataba del principal centro productor de coca, en aumento a la par del incremento de la demografía indígena. En el segundo, parecía haberse recuperado del trauma económico de la última crisis colonial, convirtiéndose ahora en el principal productor nacional de los cereales básicos: el trigo y el maíz. Había vuelto a ser el "granero de Bolivia". En el resto del País las haciendas llevaban una vida vegetativa, sin constituir ninguna seria amenaza a las zonas de densa población en que predominaban las comunidades.

Pero dentro de las propias comunidades se producían cambios y una gran estratificación interna. La eliminación de la obligación de la *mit´a* había favorecido sin duda a los originarios; habiéndose suprimido las onerosas prestaciones laborales, parece que su número aumentó o por lo menos se estabilizó: en los años cuarenta se calculó que representaban el 35% de los cabezas de familia de las comunidades libres. Los agregados con tierras constituían el 42% de la población comunaria; el 23% restante estaba constituido por el nuevo e importante grupo de los forasteros. Con toda evidencia, el lento crecimiento demográfico comenzaba a generar una clase de indios sin tierra en las propias comunidades.

Si bien se estaban produciendo algunos cambios en el mundo rural mayoritario, el estancamiento de la industria minera y la incapacidad de la manufactura nacional para satisfacer la demanda local significaban que Bolivia se encontraba durante el primer cuarto de siglo de su existencia en la insólita posición de déficit permanente en su balanza comercial. No hubo año entre 1825 hasta los años cincuenta en que Bolivia no presentara un déficit en su cuenta del comercio legal, déficit que sólo podía enjugarse mediante la exportación ilegal de plata y el tan activo contrabando. Así al Banco de Rescate de Minerales del gobierno le era cada vez más difícil rescatar toda la plata producida en el

país, mientras que parecen haber sido muy altas las pérdidas gubernamentales causadas por la exportación ilegal de productos. Finalmente, los déficits gubernamentales fueron un fenómeno crónico desde el momento en que los gastos (particularmente los de carácter militar) superaron con mucho a los recursos del tesoro nacional.

Así pues, a mediados de siglo Bolivia daba la impresión de encontrarse en peores condiciones que al comienzo de su vida republicana; no sólo esto, sino que toda la previsión había de anticipar días peores. Estas perspectivas probablemente se consolidaron con la caída de Ballivián y el comienzo del período más caótico de gobierno caudillista, de 1848 a 1880. Paradójicamente, sin embargo, esta etapa de la máxima turbulencia política resultaría en la gran época de expansión de la economía boliviana. En los años cincuenta y sesenta comenzó con éxito la instalación de maquinaria a vapor en la industria minera del altiplano. Gracias también a los comerciantes y hacendados de Cochabamba y de algunas de las zonas cerealistas más avanzadas, se dispuso por entonces del capital para poner en funcionamiento las minas principales. Acumulando su riqueza de las operaciones mercantiles internas, estos nuevos comerciantes — mineros pudieron comenzar a invertir seriamente en la nueva tecnología minera.

Con el lento desarrollo minero en el altiplano las décadas de los años sesenta y setenta presenciarían el tan rápido crecimiento de la minería en el litoral pacífico boliviano. Las minas de plata de Caracoles de los años setenta, lo mismo que las más antiguas del altiplano, ahora se pondrían en plena producción. A su vez, el crecimiento de las modernas compañías mineras atrajo capital internacional, el que por su parte proporcionó los recursos para ampliar todavía más nuevas operaciones mineras.

Toda esta renovada actividad económica sucedería en medio del período políticamente más violento y caótico de la historia política republicana; pero parece que el caos de la violencia política tuvo escaso impacto en el lento pero constante desarrollo de un sector exportador moderno. Por el contrario, si algo hicieron particularmente los regímenes que se sucedieron entre 1860 y 1880 fue responder adecuadamente a las exigencias de la nueva élite minera y satisfacer sus más inmediatas preocupaciones, que se encaminaban ante todo a poner término a la situación de monopolio estatal en la compra y venta de los metales.

Pero todavía no se ha dado una explicación cabal de este crecimiento paradójico. En primer lugar, resulta evidente que una

serie de acontecimientos externos a Bolivia jugaron un papel decisivo en el despertar del gigante minero. La creciente productividad y los costos en declive de la maquinaria a vapor de Europa y Estados Unidos durante la primera mitad de siglo XIX significaron que las máquinas de vapor de los años cincuenta y sesenta eran mucho más baratas y mucho más fácilmente accesibles y de mucha mayor confianza que en los años veinte. Así se pudieron reducir considerablemente los costos de rehabilitación de una mina inundada. Por otro lado, el crecimiento de la minería peruana y chilena durante este período dio un respaldo general regional de capitales y de experiencia técnica, fácilmente exportable a la incipiente industria boliviana, así como un mercado dispuesto para las exportaciones bolivianas. Por fin, la baja de los precios internacionales del mercurio redujo un costo tradicional importante de la extracción de la plata.

Pero estos factores sólo ayudan a explicar las condiciones internacionales generales, que ahora daban acceso a un bloque mucho mayor de ingenieros, maquinaria y mercurio a un costo muy inferior que en épocas anteriores para los mineros altiplánicos. Los primeros capitales invertidos en la minería altiplánica boliviana todavía procedieron de los propios bolivianos. La cuestión clave sigue siendo saber de dónde vinieron estos capitales, dado el relativo estancamiento de la economía durante el primer cuarto de siglo de existencia republicana. Analizando las primeras compañías mineras de Potosí y Oruro. Resulta evidente que una pro - parte desproporcionadamente alta del capital vino de la aristocracia mercantil y terrateniente del valle de Cochabamba. Parecería, pues, que el constante aunque modesto aumento de la población nacional originó, a pesar de las epidemias bastante graves de los años cincuenta, un mercado interno en expansión para la producción agrícola (maíz y trigo en particular, que constituía el meollo de la agricultura cochabambina). De este mercado interno en crecimiento la élite de Cochabamba pudo extraer un capital excedente. Parece también que Cochabamba contaba con una clase de empresarios incipientes plenamente dispuestos a correr los riesgos de las fuertes inversiones de capital en la industria tradicionalmente tan imprevisible de la minería. El hecho de que la región cochabambina fuera el centro de la población chola más avanzada de la república y tuviera también la clase arrendataria más activa de campesinos libres (cuyo bloque principal ya era bilingüe kechua-castellano), también ayudan a explicar una parte de la evidente habilidad empresarial existente.

A partir de los años treinta se había hecho corriente la creación de compañías nacionales por acciones para emprender operaciones mineras. Acostumbrando poner a la venta una gran cantidad de acciones a un precio bajo, por lo general estas compañías lograban reunir alrededor de 10.000 pesos como capital de operación. Entre las numerosas compañías formadas en este período temprano y pionero, la más importante fue la Compañía Minera Huanchaca, que explotaba las minas de Porco (Potosí), fundada en 1832. Como correspondía a este tipo de empresas, estas compañías primitivas apenas cubrían los costos, gastando muchos años en la construcción de socavones de drenaje y de nuevas galerías minerales para poder poner en explotación las minas, y dedicándose entretanto a la explotación de los yacimientos argentíferos superficiales más accesibles, para poder hacer frente a los gastos. Muchas de las compañías quebraron antes de que pudieran terminar la etapa previa de disposición; en 1856 la Compañía Huanchaca era un caso típico de ellas, pues había gastado unos 180.000 pesos en la infraestructura básica, sin que hasta aquel momento hubiera reportado ningún dividendo a sus accionistas. En aquella fecha el comerciante Aniceto Arce compró la compañía por 40.000 pesos, lanzándose rápidamente a proporcionar el capital vital que se necesitaba para que la compañía funcionara. Por aquellos mismos tiempos, a mediados de los años cincuenta, la familia Aramayo compraba la Compañía Minera del Real Socavón de Potosí.

Por fin, en 1855 el comerciante Gregorio Pacheco incautó a uno de sus deudores las minas de Guadalupe, en la provincia de Chichas (Potosí). Vemos, pues, que en unos pocos años aparecieron las tres principales dinastías mineras de la región potosina. Con las nuevas aportaciones de capital y de dirección las compañías, reorganizadas, comenzaron a prosperar. En los años sesenta los tres empresarios se dedicaron a racionalizar sus operaciones y a introducir cambios estructurales a largo plazo en la industria con la maquinaria moderna, instalaciones de bombeo y reconstrucción de galerías a largo plazo. En los años setenta empezó a hacerse presente el capital extranjero en cantidades cada vez más importantes y en la segunda mitad de aquella década la industria minera de la plata de Bolivia se podía decir que había alcanzado unos niveles internacionales de capitalización, de desarrollo tecnológico y de eficiencia. A fines de los años setenta Bolivia volvía a ser uno de los principales productores del mundo de plata refinada; una industria exportadora

pujante y vital había dado nueva vida tanto a la economía interna como al comercio internacional de Bolivia.

Este ritmo económico creciente de los años cincuenta explica de muchas formas las configuraciones más bien raras de los gobiernos que aparecen en el escenario político. Con la caída de Ballivián surgió otro paceño de generación (nacido en La Paz en 1811): el general Manuel Isidoro Belzu, como el nuevo activista político. De orígenes humildes, aunque aparentemente de extracción española y, como Ballivián, militar por encima de todo desde su adolescencia, Belzu había figurado como oficial de distinción en los ejércitos crucistas y después de que Ballivián hubiera subido al poder, jugó un papel militar decisivo en el nuevo régimen. Renovándose sin cesar las alianzas, surgió —como lo había hecho Ballivián antes que él— como el más poderoso general de la oposición, exigiendo un lugar en el gobierno.

Después de la caída de Ballivián en diciembre de 1847, Belzu apareció como la figura más poderosa: ocupó oficialmente la presidencia en 1848, manteniéndose en el poder hasta 1855, en que se retiró voluntariamente (primer presidente boliviano en hacerlo desde el tiempo de Sucre); pero el caos ininterrumpido de las finanzas gubernamentales y el progresivo debilitamiento de las lealtades, con la aparición de personalidades enfrentadas, dejó el escenario político repleto de generales impagados e insatisfechos, queriendo todos llegar a presidentes. Sin un sistema de partidos políticos constituido para canalizar las exigencias o aspiraciones o para controlar las ambiciones, la política nacional era un terrible campo abierto para que pudiera ocuparlo cualquier jefezuelo regional del momento. El resultado fue que Belzu tuvo que enfrentar alrededor de 30 ó 40 alzamientos diferentes en sus seis años de gobierno. Al final los innumerables combates, amagos de asesinato e intriga agotaron incluso a este guerrero indomable, retirándose por su propia voluntad de la presidencia.

Pero debajo de las intrigas se estaban produciendo ciertos cambios muy importantes, que Belzu reflejó fielmente. Muchos historiadores bolivianos han calificado al régimen de Belzu de aberración, endosándole alegremente los epítetos de "demagogo" y de "socialista". Está fuera de duda que Belzu manifestó clara hostilidad a la alta aristocracia chuquisaqueña y a las demás élites provinciales; o que se declaró partidario de algún tipo de programa para expropiar la propiedad de los ricos; fue también un populista muy imaginativo, presentándose como el representante de los cholos y clases inferiores urbanas, empleando el vocabulario del socialismo cristiano, atacando la legitimidad

de la propiedad privada y de las estructuras clasistas. A menudo repartió dinero entre los pobres de las ciudades, en clásicos gestos demagógicos. Pero un examen cuidadoso del régimen de Belzu mostrará que el presidente y sus principales consejeros civiles fueron los últimos representantes de la posición mercantilista tradicional.

La abundante legislación promulgada por Belzu en el campo económico incluía aranceles proteccionistas contra la manufactura inglesa, promoción de industrias artesanales dentro del país, incentivos fiscales para los productos nacionales, creación de monopolios estatales para el fomento de la economía nacional; incluso leyes que prohibían a los extranjeros ejercer el comercio nacional. Se trataba de esfuerzos que suscitaron la directa oposición de los comerciantes y de sus nuevos aliados mineros, pues unos y otros favorecían el libre comercio y la economía abierta. Precisamente cuando el movimiento de libre comercio comenzaba a ganar partidarios económicos de peso, las clases tradicionales luchaban para impedir el desmantelamiento del viejo programa mercantilista. Belzu se mostró hostil a los nuevos mineros de la plata, de quienes exigió un control más estricto de venta de minerales y creó un banco para la compra de la cascarilla de la quina. Por esta razón las nuevas élites minera y comercial le atacaron duramente y el pueblo le dio su amplio apoyo.

Muy pronto en su régimen se pudo ver la amplitud de este apoyo popular. En marzo de 1849, con motivo de uno de los primeros intentos de algunos generales de derrocamiento de su gobierno, hubo alborotos populares en las ciudades de La Paz y Cochabamba —las más avanzadas y populosas de la república— en apoyo del régimen. En ambas ciudades y durante varios días se produjeron tumultos de las clases bajas, con un ataque casi sistemático a las élites locales. Además, el apoyo popular era tan poderoso que un intento casi exitoso de asesinato (septiembre de 1850) y una larga convalecencia no pudieron derrocar el régimen. Pero de la misma forma que las clases superiores se opusieron a Belzu por su apoyo popular y su mercantilismo intransigente, el presidente no cesó de verse complicado en choques con los dos estados extranjeros al intentar impedir la penetración de mercancías foráneas al mercado nacional y restringir el peso de los comerciantes extranjeros. Este conflicto provocó incluso la expulsión del representante diplomático británico, dando lugar a la archisabida, pero falsa, venganza de la reina Victoria eliminando a Bolivia del mapa.

Pero el creciente poder económico de la oposición librecambista y declinante de los artesanos y manufactureros locales acabó gastando la base de sustentación de Belzu, mientras financiaba a la oposición. Cansado de reprimir los cuartelazos de sus tropas, Belzu anunció su propósito de retirarse, presentando como candidato a su dócil yerno, el general Córdova. Esta elección controlada de 1855, en la que votaron unos 13.500 electores, trajo lo que resultaría ser un gobierno transitorio pero moderado, antes de la victoria final de los partidarios del libre comercio y del capital extranjero.

Córdova se mantuvo en el poder durante dos años, reemplazándolo en 1857 el primer presidente netamente civil de Bolivia, José María Linares. Su régimen, a pesar de todos sus problemas, marcaría claramente el traspaso del poder a los elementos más nuevos de la economía y el fin del monopolio gubernamental en la industria minera. Mientras que Belzu y Córdova se habían mostrado indiferentes a las demandas de la industria minera, Linares hizo de ellas la preocupación prioritaria del gobierno. Linares, aunque nacido en 1810 en Potosí y, por tanto, miembro de la generación que había dado los presidentes a Bolivia desde Santa Cruz, se diferenciaba de los demás en que nunca había abrazado la carrera militar. Hijo de una familia española de la clase alta, Linares – que había recibido una buena educación– había ascendido con rapidez en la política y en el gobierno civil, además de jugar un papel en la educación secundaria de la capital de la república. En un principio había sido un leal partidario de Santa Cruz, sirviéndole como prefecto, legislador y funcionario del gobierno central durante la Confederación. Al terminar oponiéndose a ella, también chocó con Ballivián, por lo que tuvo que exiliarse a Europa durante la presidencia de Ballivián y el comienzo de la de Belzu (ejerció la abogacía en España). Habiendo regresado a Bolivia en los últimos años de Belzu, se lanzó a una incesante conspiración contra el viejo general populista; incluso concurrió a las elecciones de 1855, recibiendo unos 4.000 votos. Al comprobar que el gobierno había manipulado por completo el voto, se dedicó a derrocar por la violencia al régimen.

El gobierno linarista duró de 1857 hasta 1861, en que también fue depuesto; mostró una acogida mucho mayor a las ideas librecambistas. El proteccionismo dado a la industria local fue aminorado; se suprimió el monopolio de la quina; todos los minerales (con la excepción de la plata) pudieron ingresar al mercado; con la condición de que fueran refinados en Bolivia. Pero su régimen no llevó hasta sus últimas consecuencias el li-

bre comercio, según el deseo de los mineros; por el contrario, lo restringió en la venta del mercurio y aumentó el control de la acuñación. Sin embargo, el gobierno linarista alentó a los mineros para que formaran su propia cámara poderosa, con apoyo gubernamental, para impulsar sus demandas.

En los primeros años del nuevo gobierno se puso de manifiesto la importancia alcanzada por estos nuevos propietarios de minas: mientras que las rentas gubernamentales todavía oscilaban entre 1.5 y 2 millones de pesos anuales, las principales compañías mineras (como la del Real Socavón de Potosí, de Aramayo) invertían hasta 281.000 pesos entre su creación en 1854 y 1861; las compañías de Pacheco habían invertido 333.000 pesos entre 1856 y 1861; y era parecida la suma invertida por la compañía Huanchaca. En las zonas mineras ya era corriente el empleo de máquinas a vapor, vagonetas de carril y moderna maquinaria para refinar; a mediados de los años sesenta estas compañías se dirigían a Europa en busca de capitales. Así pues, la inversión de sólo las tres compañías mayores se acercaba a la renta total anual del tesoro nacional.

Junto con el permanente crecimiento de las zonas mineras tradicionales, la provincia costeña de Atacama por fin comenzaba a adquirir cierta importancia. En 1857 se habían descubierto los primeros yacimientos de nitratos en la zona de Mejillones, que dieron lugar al lento pero constante crecimiento del puerto de Antofagasta, que pronto rivalizaría con el de Cobija como principal puerto boliviano en el Pacífico. Pero este crecimiento tuvo lugar bajo el control de capitalistas ingleses y chilenos, quienes obtuvieron del gobierno boliviano contratos de explotación muy favorables, pues apenas reportaban nuevos ingresos al tesoro central.

Tomemos, por ejemplo, el presupuesto de 1860: el tributo indígena sigue doblando la cuantía de cualquier otro rubro, representando el 36% del presupuesto. Por lo demás la renta otrora tan lucrativa de las exportaciones de quina ahora habían desaparecido por completo. Fuente importante de ingresos públicos y de exportaciones en los años cuarenta y primeros cincuenta, en 1855 Colombia rompió el monopolio boliviano sobre la producción de la quina y a partir de aquella fecha su producción quedo reducida a cantidades insignificantes. Por fin, a pesar de los esfuerzos de Linares por controlar a los militares y de la reducción del ejército a sólo 1.500 hombres, los militares seguían tragándose el 41% de los gastos públicos.

Aunque no pudo reformar los ingresos y gastos públicos, Linares se esforzó con éxito por refinanciar la deuda externa y res-

tablecer cierto aspecto de normalidad a la acuñación gubernamental de plata. También trató de reorganizar la administración nacional y de lograr un gobierno local más eficiente. Por fin, también parece que pudo lograr cierto financiamiento para la educación local. Así pues, si bien la administración linarista no transformó excesivamente la economía pública, puso en marcha algunos cambios a largo plazo en la dirección que habría de marcar la victoria definitiva de la ideología librecambista. también inició una reorganización del crédito público que resultaría ser precedente sumamente importante para los gobiernos de los años setenta y ochenta.

Pero el tan estricto reformismo y la mano dura de Linares, quien desde septiembre de 1858 incluso se declaró formalmente dictador, acabaron siendo excesivos para sus seguidores. Si bien sus más ardientes partidarios (como Tomás Frías y Adolfo Ballivián) se constituyeron en poderoso grupo de apoyo, que más adelante recibiría el sobrenombre de los "rojos", sus opositores pudieron encontrar amplio apoyo para derrocarlo. En 1860 el gobierno había cometido una masacre indígena en la basílica de Copacabana, al tiempo que hacía frente a un importante intento de rebelión. Estas acciones debilitaron al dictador Linares, quien fue forzado a exiliarse en enero de 1861 por tres de sus más importantes ministros.

En el intríngulis político resultante fue elegido un nuevo Congreso, en el que tuvieron cabida muchos de los "rojos". Sin embargo, fue elegido presidente el general José María Achá (uno de los tres conspiradores), quedando Linares y sus partidarios excluidos del poder. El nuevo régimen prosiguió en muchos puntos las decisiones políticas fundamentales del linarismo: de hecho, realizando una ulterior liberalización de la economía. Se suprimió el monopolio del mercurio (creado por Linares) y prosiguió la reorganización fiscal, aunque se abandonaron los procedimientos presupuestarios introducidos por Linares.

Aunque Achá prolongó la dirección económica del gobierno de Linares, le cabría el triste privilegio de ser el gobierno más violento del siglo XIX, por lo que toca a la represión de sus opositores. En 1861, en una maniobra típica de la política de la época, el coronel Yáñez apresó a unos setenta partidarios de Belzu, incluido el expresidente Córdova, en La Paz. Simulando un levantamiento de Belzu, Yáñez ordenó la ejecución de estos dirigentes políticos: fue la represalia más sangrienta de la historia republicana hasta la fecha. A partir de entonces el gobierno tuvo que hacer frente —como era ya de rigor— a la constante inquietud política, sometiéndose los futuros candidatos presidenciales a

prueba mediante una serie de despliegues de fuerza y de cuartelazos. Lo que llama la atención de todos estos intentos de conspiración es su escaso impacto en la estructura económica y social generales del estado: mientras que el ejército boliviano había contado con Sucre y Santa Cruz entre 5.000 y 10.000 hombres, en el período posterior a la Confederación y, en particular, al término de la amenaza peruana (Ingavi, 1841) quedó reducido a una fuerza de 1.500 a 2.000 hombres. Este ejército controlaba presuntamente una sociedad que en los años cincuenta contaba con unos 1.8 millones de habitantes.

Vemos, pues, que los constantes intentos de rebelión, con las expediciones de avance y retroceso, sólo acostumbraron a afectar a unos pocos centenares de hombres por cada lado, por lo que no podían causar graves entorpecimientos en la vida económica o social de la sociedad. Además, mientras los regímenes militares reflejaron el creciente poder de la nueva oligarquía minera, los capitalistas mineros los miraron con indiferencia. Absorbidos por la organización de sus compañías sobre una base viable, les quedaba poco tiempo para la política, actividad que no les era necesaria mientras los gobiernos satisfacieran sus necesidades fundamentales. Y saltó el país en una guerra de envergadura con los aliados y sostenedores más íntimos de estos mineros, los chilenos, no sintieron la necesidad de intervenir.

Con esta indiferencia de las nuevas y viejas élites económicas, los políticos civiles se vieron incapaces de poder controlar a los generales o a los soldados. Linares había sido su mejor esperanza, por lo que siguió ejerciendo fuerte atracción una facción constitucionalista sólida (los "rojos"). Pero la mayoría de tales facciones o "partidos", desde las de Santa Cruz hasta las de los partidarios de Belzu, siguió encontrando al general o coronel de su agrado para encabezar su causa y declararlo su candidato. Mientras estas otras facciones políticas y oligárquicas no se pusieron de acuerdo en sostener sus programas en otro terreno, los cuartelazos siguieron un esquema preciso y bien delineado.

Si bien el gobierno de Achá se ajustó a este modelo típico y también reflejó los nuevos intereses económicos, existía un factor nuevo que empezaba a dejarse sentir en el escenario político y económico boliviano y al que en su gobierno se prestó plena atención por primera vez: en 1863 el gobierno de Achá tuvo que ocuparse del primer paso agresivo importante de Chile en la región minera de Atacama. Por entonces se ventilaba en los tribunales bolivianos el arbitraje de un pleito entre sendas compañías mineras financiadas, respectivamente, por Brasil y

Chile. En este conflicto el gobierno chileno se negó a reconocer la jurisdicción boliviana y en 1863 extendió sus pretensiones territoriales hasta las salitreras de Mejillones. Mientras Achá enviaba a Frías para negociar y el Congreso votaba en 1863 en favor de la guerra, el gobierno boliviano se encontraba impotente frente a su vecino meridional. Tuvo que aceptar las exigencias chilenas sobre sus derechos a estas salitreras extraordinariamente ricas.

Al acercarse el fin del período presidencial de Achá, éste trató de reorganizar elecciones libres; los dos movimientos civiles más poderosos resultaron ser el de los "rojos" que apoyaban la antigua línea linarista de gobierno moral civil y los populistas de Belzu; pero antes de que pudieran celebrarse los comicios, un pariente cercano de Achá, el general Mariano Melgarejo, se apoderó del gobierno en diciembre de 1864. Así empezó una de las dictaduras más prolongadas y más tenazmente resistidas de la historia boliviana y uno de los regímenes que ha provocado mayor debate desde entonces.

Al igual que Achá, Melgarejo procedía de Cochabamba y había participado en una larga historia de ocupaciones y cuartelazos militares, además de intervenciones políticas. Se apartaba de sus antecesores fundamentalmente por la edad, pues había nacido en 1820, y en su absoluta falta de apoyo por parte de clase alguna. A diferencia también de sus predecesores (con la excepción de Belzu), vivía totalmente al margen de las clases superiores. Era hijo ilegítimo y su afortunada carrera la debía exclusivamente a sus proezas militares. Por otro lado, carecía en absoluto de la ideología revolucionaria de Belzu, por lo que no hizo el menor esfuerzo intelectual ni político por llegar a las clases populares.

A pesar de la etiqueta de "caudillo bárbaro" que le han impuesto los historiadores bolivianos, Melgarejo representó de múltiples formas la llegada al poder total de la élite minera del país y el triunfo de su política librecambista. Las medidas económicas de su gobierno fueron continuación coherente de las que se habían adoptado con Linares. Además, a pesar de su famosa "borrachera" y estilo disoluto, Melgarejo obtuvo un apoyo importante de la nueva élite minera durante buena parte de su permanencia en la presidencia. En su tiempo también se llevó a cabo el primer ataque de entidad a la cuestión de la propiedad agraria desde los primeros días de la república. Y esta agresión a los derechos legales de las comunidades no estuvo desconectado del apoyo recibido de la élite minera, pues en ambos casos se trataba del mismo movimiento por ajustar la economía y la socie-

dad boliviana al resurgimiento de una poderosa industria minera exportadora de la plata en Bolivia.

Hay que ver el período melgarejista dentro del contexto de la economía internacional para su cabal comprensión. Los años que van de las crisis mundial de 1864 y 1873 fueron extremadamente prósperos y coinciden con la primera gran exportación de capitales europeos al mundo en desarrollo. Fue también el período del gran auge de la industria exportadora de la costa del Pacífico (primero el guano , después el salitre) y en el que el capital inglés – o más en general europeo– y estadounidense se alió con el chileno y peruano en las industrias mineras locales. Esta febril actividad inversora también afectó grandemente toda la región meridional de Atacama conocida con el nombre de Mejillones, que seguía bajo control nominal boliviano, a pesar de la incesante impugnación chilena. Allí se encontraban grandes yacimientos de guano y salitre; por otra parte, en la cercana región de Caracoles se descubrirían importantes yacimientos de plata.

Los escasos recursos de capital bolivianos existentes los absorbía en su totalidad el desarrollo de una industria minera moderna en los centros mineros tradicionales del altiplano. Por tanto, todas estas nuevas zonas atrajeron como imanes a los vecinos de Bolivia. Para los mineros altiplánicos este interés fue un acontecimiento de buen augurio, pues estimulaba el interés por apoyar el crecimiento de la minería de las tierras altas; para el gobierno boliviano, en crónica penuria financiera y cuyas rentas habían permanecido prácticamente estables durante casi medio siglo, este interés por sus recursos costeños fue un inesperado cuerno de la abundancia que sólo podía traer ingentes fortunas personales. Mientras que todos los anteriores gobernantes bolivianos acostumbraron a morir en el exilio en la penuria, los actuales se encontraron repentinamente cortejados por gobiernos y capitalistas extranjeros, demostrando que no querían ni podían resistir a sus tentaciones.

Los historiadores y escritores bolivianos han condenado con razón el gobierno de Melgarejo por haber vendido sistemáticamente el país al mejor postor; pero cabe dudar de si otros regímenes habrían sabido resistir tales requiebros, con un fisco que llevaba unos cincuenta años de estancamiento y con una oficialidad insaciable en su ambición de poder. Por otro lado, también se puede dudar seriamente acerca de si la nueva élite minera se preocupó lo más mínimo por las gigantescas concesiones hechas a los capitalistas extranjeros o por otros aspectos de la política gubernamental que, en su esencia, acabaron con todos los intentos anteriores por lograr un control mercan-

tilista, bien por lo que se refería a la industria minera, bien a la protección de las industrias nacionales.

No interesa saber si Melgarejo y sus hambrientos generales eran mejores o peores que los demás; de lo que no hay duda es que fueron más activos. Por primera vez desde las cavilaciones británicas de 1825 y 1826, ahora los capitalistas extranjeros acudían en procesión a Bolivia con fórmulas milagrosas para enriquecer a todo el mundo. Empresarios clásicos estadounidenses como Henry Meiggs y el coronel George E. Church se encontraron en el escenario juntamente con casas chilenas tan venerables como Concho y Torres y compañía británicas tan clásicas como Gibbs & Co. La fuente principal de la posible riqueza eran los depósitos de salitre y guano de Mejillones. Mediante un tratado de 1866 Bolivia y Chile habían acordado compartir los recursos de la región de Mejillones, reformando la frontera para dar a Chile el control directo de cuanto se encontraba por debajo del paralelo 24. Esta medida trajo ingresos reales; una serie de extranjeros, en su mayoría británicos y chilenos, firmaron contratos de exportación a largo plazo y convenios especiales para concesiones ferroviarias.

Como el gobierno de Melgarejo estaba enfrentando a un presupuesto deficitario desde el mismo día que ocupo el poder, vivía desesperado por conseguir divisas; para ello estaba dispuesto a conceder contratos a largo plazo sumamente generosos a cambio de relativamente pequeñas cantidades de numerario, de uso inmediato. Muchos de estos contratos ascendían a varios millones de pesos, aceptados en las peores condiciones para Bolivia e hipotecando recursos invalorables por largos períodos de tiempo y con gravosos compromisos. De hecho, mucho de estos contratos resultarían absolutamente comprometedores para el gobierno y acabarían dando los antecedentes decisivos para los conflictos comerciales que desataron la Guerra del Pacífico.

Pero el gobierno boliviano se mostraba fundamentalmente indiferente a todos estos problemas a largo plazo. Al comienzo de su gobierno, Melgarejo había recurrido a los préstamos forzosos para llenar las arcas públicas y nunca llegó a controlar realmente los gastos ascendentes. Así pues, quienquiera que le ofreciera unos pocos centenares de miles de pesos podía conseguir concesiones a largo plazo por valor de millones. Además, los políticos bolivianos daban la impresión de que para ellos el auge del mercado de la costa era un mundo irreal que apenas controlaban y en el que con gusto concedían prácticamente cuanto pidieran estos extranjeros industriosos. También vale la pena de advertirse, que a pesar de los complejos contratos para

la exportación de guano y salitre, de los proyectos ferroviarios de la costa pacífica, de las compañías de transporte fluvial amazónico, de la compañía belga de colonización y de otras propuestas especuladoras reales o imaginarias, en ningún momento se pensó en permitir la entrada de empresarios extranjeros a la industria minera altiplánica: ésta quedaba sólidamente reservada para los inversionistas nacionales.

Con su nueva riqueza costeña y con toda la ola de capital especulador que llegaba de Europa y Estados Unidos, hasta los gobiernos extranjeros se sintieron tentados de entrar en tratos con el régimen tan dadivoso de Melgarejo. Así por ejemplo, Bolivia suscribió tratados comerciales y territoriales con cada uno de sus vecinos en la segunda mitad de la década de los años sesenta. En 1865 entró en vigencia un tratado especial con el Perú por el que Bolivia, a cambio del uso libre del puerto de Arica, prácticamente se integraba a la unión aduanera peruana; Bolivia acabó cobrando impuestos peruanos en Cobija, recibiendo a cambio un año fijo de 450.000 pesos anuales de las aduanas de Arica y Tacna. El tratado abría también las puertas a los manufactureros peruanos sin restricción alguna. A Melgarejo le faltó tiempo para hipotecar esta renta fija, procedente del gobierno peruano, para hacer frente al pago de los intereses de los préstamos a corto plazo.

A continuación vino el tratado con Chile en 1866, que no sólo zanjó en favor de Chile las ocupaciones de Mejillones y otras previas, sino que también estipuló que los puertos bolivianos del Pacífico sirvieran para la exportación de minerales sin tener que pagar los impuestos bolivianos, como tampoco los habían de pagar las mercancías chilenas ingresadas por ellos. Con estos dos únicos pasos se destruyó todo el programa mercantilista de los aranceles proteccionistas; Bolivia ingresaba prácticamente en un convenio de libre comercio con Perú y Chile. Después Bolivia negoció la parte que le correspondía de la producción conjunta del guano procedentes de estas zonas afectadas por el tratado: lo hizo con firmas extranjeras en unas condiciones desastrosas y de una manera que sólo podía estimular las incesantes presiones chilenas. Por fin, Melgarejo ofreció al representante diplomático chileno, por el que había ido demostrando estima especial durante las negociaciones del tratado, la cartera de Finanzas en su propio gabinete. Y cuando Vergara Albano rechazó la oferta Melgarejo lo nombró su Agente Financiero en Santiago.

Siguieron los tratados con Argentina y Brasil en 1868; dieron a Bolivia los derechos de libre tránsito fluvial al Atlántico, a

cambio de privilegios arancelarios para la importación de bienes de aquellos dos países. Además, en el tratado con el Brasil se incluyó un "ajuste" territorial de 100.000 Km^2 en favor de aquella potencia. Vemos, pues, que toda la serie de tratados internacionales, además de las exorbitadas concesiones financieras y territoriales (en los casos chileno y brasileño), todos iban encaminados al desmantelamiento del edificio tan minuciosamente levantado de los aranceles proteccionistas que había sido la característica de la economía política boliviana hasta aquella fecha. Todo ello tenía que ver con el gran deseo de la nueva élite minera del altiplano de introducir el libre comercio como principio operante de la economía nacional.

En la esfera económica interna Melgarejo también trató de llevar a cabo reformas fundamentales. Si bien el régimen no conoció barreras en la cuñación de moneda feble, en 1869 promulgó la reforma básica de la antigua moneda colonial, abandonando el peso por la nueva unidad monetaria, el boliviano, basada en el sistema decimal. Fue más importante su intento de destruir los derechos de propiedad de la tierra de las comunidades indias: su decreto de 1866 fue realmente el primer ataque a fondo contra los derechos de propiedad comunarios desde los decretos bolivarianos de 1824 y 1825, suspendidos por Sucre al volver al tributo como la forma básica de gravamen fiscal. Con la repentina riqueza que generaban los yacimientos de mineral y de guano del Pacífico, la importancia relativa de la renta del tributo indígena dentro del conjunto de las rentas estatales comenzaría a disminuir: si bien el valor absoluto del tributo permaneció estable, oscilando entre 800.000 y 900.000 pesos anuales, su importancia relativa fue bajando lentamente, llegando a igualarlo la renta de la exportación y producción mineras. Además, la lenta recuperación de la industria minera comenzaba a repercutir en el crecimiento de los mercados urbanos y en la consiguiente aceleración del ritmo de la agricultura comercial para abastecer tales mercados. Así, los años sesenta presenciaron un repunte del interés por las haciendas rurales y los inicios de un ataque sostenido a las posesiones de las comunidades.

El decreto de confiscación establecía que toda propiedad comunaria pertenecía al estado, exigiendo que los indios residentes en ella compraran los títulos de propiedad individuales del caso, por una suma que oscilaba entre 25 y 100 pesos. Los indios que no realizaran esta compra en el plazo de 60 días de la promulgación del decreto perderían sus tierras, subastándolas el estado a quienes tuvieran interés en adquirirlas. Se establecía, además, que los titulares de bonos de la deuda pública pu-

dieran pagar con ellos las tierras compradas. En caso de que nadie se presentara a la subasta pública, los indios podrían permanecer en la tierras en calidad de arrendatarios, pagando un año al estado.

Al terminar la presidencia de Melgarejo en 1870 los blancos y mestizos habían comprado tierras por valor de más de 1.25 millones de pesos, pagándolas en su mayoría con bonos de la deuda pública. Pero el clamor de las fuerzas antimelgarejistas y el hecho de que la protesta india fue tan violenta y sangrienta contribuyeron a cancelar aquella iniciativa antes de que las tierras de comunidades fueran realmente confiscadas; el gobierno siguiente retornó la mayor parte de las tierras vendidas. En realidad, el "fracaso" del proyecto confiscador se debió a que Melgarejo se precipitó: la demanda de tierras comunarias aumentaría en gran escala y a fines de la década siguiente el gobierno boliviano (por medio de la Ley de Exvinculación de 1874, aplicada después de 1880) realizaría a su gusto todo el programa de confiscación de Melgarejo.

Melgarejo también llevó a término su asalto al proteccionismo y a la ideología mercantilista de sus antecesores, desvirtuando todas las medidas del monopolio de la plata, que constituían la pieza clave que permitía al gobierno mantener a raya a los nuevos mineros de la plata. Durante su régimen las compañías mineras mayores, como la Huanchaca de Aniceto Arce, obtuvieron exenciones que les permitieron exportar por su cuenta la plata al mercado internacional. Así pues, desde fines de los años sesenta el porcentaje de la plata extraída que compró el Banco de Rescates bajó en picado y terminó el control efectivo gubernamental de los precios de la producción nacional de plata. Con estas medidas Melgarejo satisfizo la demanda más importante de la nueva élite minera.

El derrocamiento político de Melgarejo en 1870 no supuso ningún cambio profundo de las orientaciones iniciadas durante sus seis años de gobierno. Si bien el nuevo presidente, general Morales (1870 – 1872), renegoció desesperadamente algunos de los contratos más insólitos y restableció temporalmente la propiedad indígena de las tierras comunarias, en realidad no hizo más que promover la política general iniciada o plenamente implantada por Melgarejo. Con la iniciación de la explotación de las minas de plata de Caracoles, en la costa del Pacífico, en 1870 – que en dos años habían recibido una inversión de capital de diez millones de dólares– y el incesante auge de la región de Caracoles, ahora el gobierno central disponía incluso más dinero y podía emprender las reformas fundamentales que el tan menes-

teroso gobierno de Melgarejo no quiso poner en marcha. En 1871 – 1872 el gobierno, por fin, abolió definitivamente el monopolio estatal sobre la compra de plata a todas las compañías, declarándola libre. También acabó, por fin, con la acuñación de moneda feble que se remontaba de los días de Santa Cruz. Se encargó al Banco Nacional de Bolivia, semiprivado pero poderoso, creado en 1871, la amortización de estas monedas y la reorganización del sistema monetario nacional.

El nuevo gobierno tampoco se opuso de frente a proseguir muchos de los préstamos radicalmente corruptos que se habían estipulado en tiempos de Melgarejo. El contrato con Church para una compañía de embarcaciones a vapor que sirviera el transporte fluvial en el Oriente había llegado a recaudar 2 millones de libras esterlinas, suma de la que el gobierno boliviano jamás percibió prácticamente nada y que jamás puso en funcionamiento ningún barco. La primera concesión efectiva de ferrocarriles fue otorgada a Meiggs y a otros capitalistas extranjeros, también en 1872; en este caso siquiera se alcanzó cierto éxito: aquel año se fundó la "Nitrate and Railroad Company of Antofagasta" con una fuerte aportación boliviana y se inició la construcción de un ferrocarril de Antofagasta a los campamentos de Mejillones, atravesando las nuevas minas de plata de Caracoles. Así comenzó la era del tendido ferroviario en la república, aunque por el momento no se emprendió la conexión ferroviaria entre la costa y el altiplano, medida que constituiría la siguiente demanda de envergadura de los nuevos mineros de la plata altiplánicos.

El derrocamiento del régimen de Melgarejo devolvió fundamentalmente a los antiguos constitucionalistas civiles de Linares – los "rojos"– al poder. Si bien el general Morales ganó las elecciones muy vigiladas de mayo de 1872, con un total de unos 14.000 votos emitidos, la evidente locura y asesinato final de este gobernante potencialmente despótico eliminó un peligro serio para el predominio de los "rojos". En las nuevas elecciones de 1873 fue elegido su máximo jefe, Adolfo Ballivián (hijo del antiguo presidente de Ingavi), tras una campaña electoral bastante libre y abierta, sobre un total de 16.674 votos emitidos. Personalidad urbana, de educación refinada y amplia experiencia de países, Ballivián condujo con acierto a sus partidarios al poder, al fallecer de enfermedad en 1874 fue sustituido por el Dr. Tomás Frías, jefe segundo del partido y presidente del Congreso. Así pues, desde fines de 1870 hasta 1876 el gobierno central estuvo fundamentalmente bajo el control de los jefes del antiguo

partido de Linares y el régimen reflejó los elementos más avanzados de la dirección civil del momento.

Pero la ineptitud de los "rojos" para controlar al ejército y su incesante corrupción, así como su relativa ingenuidad en las negociaciones y contratos internacionales —poco diferentes de los procedimientos melgarejistas —hicieron que los regímenes civiles (el primero de este tipo desde la dictadura linarista misma y sólo el segundo caso de gobierno militar desde la fundación de la república) no se pudieran mantener en el poder. Además, estos civiles todavía no se habían relacionado directamente con la ahora prevalente élite minera del altiplano: si bien Ballivián, Frías y demás políticos gobernantes aceptaban las ideas librecambistas y la conveniencia de una moneda fuerte según propugnaban los mineros altiplánicos, no estaban plenamente integrados a esta élite. Los dueños de minas ahora se encontraban en medio de su mayor fase de reorganización y prestaban poca atención directa a la política. Todo ello contribuyó a debilitar a los civiles, haciéndolos vulnerables a las maniobras castrenses tradicionales.

El general Hilarión Daza surgió, tras los civiles, como la principal figura militar de la república, al frente del batallón Colorados, formado en la época de Melgarejo. Siguiendo las pisadas de Melgarejo y de Morales, Daza derrocó al gobierno de 1876. Una vez en el poder, Daza pronto se encontró en la urgente necesidad de fondos, entrando a saco en el tesoro nacional para pagar a sus inquietos oficiales y mantenerse en el poder. De esta forma, las reformas fiscales introducidas a comienzos de la década por los civiles quedaron desvirtuadas en la segunda mitad de la misma por obra y gracia de Daza. El colapso del tesoro central llevó, a su vez, a las salvajes extravagancias de más préstamos ficticios extranjeros, de concesiones empresariales especiales y de nuevas incursiones sobre el tesoro nacional protagonizadas por especuladores nacionales y extranjeros. Todo ello provocó un ambiente potencialmente explosivo cuando las medidas concesionarias en conflicto y las cambiantes normas fiscales dieron lugar a una situación tensa entre las compañías extranjeras que funcionaban, con apoyo chileno, en el territorio costeño. También fomentó la creencia chilena de que los territorios de Atacama esperaban su anexión.

Así pues, el efímero gobierno civil que siguió al derrocamiento de Melgarejo dio lugar a pocos cambios serios en la política gubernamental o en la organización política nacional; pero la satisfacción de todas las exigencias fundamentales de la élite minera altiplánica por Melgarejo y sus sucesores permitió que

aquélla ingresara en su fase más expansiva de operaciones y reorganización. El período 1873 — 1895 pasa por haber sido la época dorada de la minería de la plata altiplánica del siglo XIX; a fines de los años setenta Huanchaca sola tenía mayores ingresos que el propio gobierno central; además, ahora todas las demás compañías principales estaban completamente reorganizadas, con fuertes aportaciones de capital chileno y extranjero. El crecimiento de la producción boliviana de plata en este período fue fenomenal, como demuestran las estadísticas. Las minas, que en los años sesenta todavía producían un promedio de 344.000 marcos anuales, en los años setenta dieron un salto a 956.000 marcos por año de producción, para pasar a 1.1 millones de marcos en los ochenta y al 1.6 millones de marcos anuales en la década de los noventa. 1895 señaló la cima de la producción de plata del siglo XIX: se calcula que aquel año se produjeron 2.6 millones de marcos.

Los mineros bolivianos no hicieron mayores esfuerzos por garantizar el control gubernamental de la élite civil, pues la vuelta de los militares con Daza no parecía amenazar por ningún lado sus intereses fundamentales. En efecto, Daza los apoyó, prosiguiendo sus proyectos predilectos, fomentando sus intereses chilenos e incluso gobernando con un parlamento que redactó la tan importante Constitución de 1879. Esta dio una carta liberal fundamental al gobierno nacional, subrayando los derechos de la propiedad privada.

Pero la indiferencia política de la élite altiplánica no duraría, pues las mismas debilidades del régimen militar llevarían a Bolivia a una guerra total con Chile, lo que a su vez volvió a crear graves problemas políticos y económicos a los mineros bolivianos. La Guerra del Pacífico (1879 — 1882) aparece, desde la perspectiva boliviana, casi como una tragedia griega. Aunque Bolivia había protestado contra la expansión chilena desde un comienzo, de hecho había permitido que el control de su territorio de Atacama fuera pasando, a partir de los años cincuenta, a manos de los capitalistas, obreros y pobladores chilenos. A partir de 1863 las presiones internas y externas no cesaron de preparar el clímax inevitable. La aceleración del ritmo de las exportaciones guaneras provocaron aquel año la ocupación militar chilena, así como el tratado de 1866, que legitimaba las pretensiones más descabelladas de Santiago. Por entonces se descubrieron los primeros depósitos salitreros en la zona contigua de Mejillones, iniciándose una nueva etapa de intensa penetración, seguida rápidamente por la creación del puerto de Antofagasta, en 1868, con el consiguiente abandono de Cobija.

Los descubrimientos de plata en Caracoles en 1870 fueron seguidos por la chilenobritánica "Nitrate and Railroad Company", en 1872. Esta firma minera pronto controló los yacimientos salitreros y logró dominar también los campamentos mineros más interiores de Caracoles, al acabar el tendido de su ferrocarril. A partir del momento en que la provincia costeña estaba habitada por dos tercios de ciudadanos chilenos, se había convertido en colonia de Chile para todos los efectos prácticos.

Las autoridades bolivianas habían permitido la configuración de esta situación insólita a causa de su necesidad de fondos y de la absoluta incapacidad de los capitalistas nacionales para explotar estos desiertos, previamente vacíos. Pero los jefes militares, tras haber vaciado las arcas públicas, se fueron impacientando cada vez más, descubriendo que sólo podían esperar nuevos ingresos de aquellos mismos centros costeños, pues en el altiplano el poder inmediato de los mineros de Potosí y Oruro les impedía incrementar sus exacciones, a menos que quisieran lanzarse a un enfrentamiento político directo, que por lo demás llevaría a su derrocamiento instántaneo. Por otro lado, los territorios marítimos quedaban lejos y parecían ajenos a la política real de las ciudades altiplánicas, por lo que los generales se sentían con mayor libertad para tratar de reformular concesiones o de renegociar impuestos.

Dentro de este contexto, en 1878 el gobierno boliviano introdujo un impuesto mínimo sobre el salitre exportado por la "Nitrates and Railroad Co. of Antofagasta". El gerente inglés, con el pleno apoyo de los chilenos, se negó a pagar este impuesto "injusto" e "ilegal". Cuando las autoridades bolivianas trataron de apresar al gerente insubordinado, éste fugó a Chile. Y cuando el gobierno anunció que se incautaría del patrimonio de la Compañía para resarcirse del impuesto adeudado, los chilenos llevaron a la práctica su plan larga y cuidadosamente preparado. En febrero de 1879 las tropas chilenas desembarcaron sin problemas en Antofagasta, con la excusa de proteger a los residentes chilenos del lugar; dos días después ocuparon Caracoles; por fin, en marzo, trabaron fuertes combates con los bolivianos en el oasis de Calama. Sólo en abril llegó la declaración formal de guerra, entrando Perú en la contienda al lado de Bolivia; pero para entonces la poderosa escuadra chilena se había apoderado de toda la provincia marítima, incluido el puerto capital de Cobija. Así pues, en dos meses Chile se había apoderado de la totalidad del territorio costeño boliviano.

Pero la Guerra del Pacífico apenas comenzaba, pues los chilenos no se proponían apoderarse sólo de territorios bolivianos;

sino también de la mayor parte de las regiones costeñas mineras peruanas. Tomando como pretexto el llamado tratado "secreto" de apoyo mutuo entre Bolivia y Perú en 1873, los chilenos se habían preparado para una larga guerra naval con Perú. Chile provocó deliberadamente la entrada del Perú en el conflicto ayudando a Bolivia; luego se dedicó a concentrar todas sus fuerzas en la destrucción del poder militar del Perú. A las pocas horas de haberle declarado oficialmente la guerra ya bloqueaba los puertos peruanos del sur.

Cuando Bolivia pudo movilizar un ejército de 4.000 hombres y ponerlos en el escenario bélico de la costa, los chilenos ya atacaban los puertos peruanos de Iquique y Tacna; las fuerzas bolivianas fueron hechas pedazos por las chilenas en combates conjuntos con los peruanos. A finales de aquel año Daza se encontraba al frente de las tropas bolivianas en la costa peruana, pero demostró ser un general todavía peor que político: a pesar de toda la valentía de los soldados, la baja calidad de los generales bolivianos hizo inevitable la derrota, pues por entonces los chilenos se habían hecho con el control absoluto marítimo y podía golpear a su gusto por toda la costa.

Aunque el gobierno boliviano pensaba que era inminente una invasión del altiplano después de la derrota de sus ejércitos principales a fines de 1879, en realidad los chilenos no tenían la intención de cruzar los Andes; el altiplano los dejaba totalmente indiferentes y reconocían que una campaña en el territorio nuclear boliviano sería un asunto duro y muy costoso, con pocas ganancias. Así pues, los bolivianos ahora se convirtieron en el socio claramente menor de los peruanos, espectadores fundamentalmente pasivos del masivo enfrentamiento bélico que tenía lugar en el Perú. El trauma de la guerra, la absoluta impreparación de sus tropas y las desastrosas campañas de Daza como jefe militar provocaron un inmenso descontento popular. En diciembre de 1879 tanto la ciudadanía paceña como los soldados en la costa peruana se alzaron contra el gobierno, saliendo Daza de la presidencia.

Tras laboriosas negociaciones y maniobras constantes, por fin los rebeldes aceptaron designar al único general que no había participado en ninguna de las acciones de conjura y que era sin lugar a discusión el oficial de mejor formación del ejército boliviano, Narciso Campero. Aunque oponiendo gran resistencia, Campero tomó posesión del cargo de presidente en enero de 1880, aceptando conducir el país en la prosecución de la lucha contra Chile. Ingeniero formado en la academia militar de Saint – Cyr y otros centros europeos destacados, Campero se dedicó con todas sus fuerzas a eliminar los aspectos más vergonzo-

sos del gobierno militarista y al afianzamiento de regímenes civiles estables. No tardó en deponer a los peores de los oficiales antiguos, se sirvió del capaz general liberal Eliodoro Camacho para apoyar sus esfuerzos; luego, inmediatamente convocó al Congreso para una sesión especial, con el fin de que le diera su refrendo.

El hecho de que el Congreso de 1880 contara entre sus miembros distinguidos no sólo a la totalidad de los jefes políticos del país, sino también a mineros como Gregorio Pacheco y Aniceto Arce significaba que había llegado a su fin la indiferencia de la nueva élite minera por la política nacional. En efecto, la Guerra del Pacífico había roto sus estrechos vínculos tradicionales con el capital chileno, interrumpido sus exportaciones y obligándoles a reconocer que sus intereses a largo plazo ahora exigían el afianzamiento de un gobierno estable y financieramente sólido. Asimismo su industria pronto vería que su expansión dependía de la creación de una infraestructura moderna de comunicaciones, que ahora aparecía como una necesidad básica para el crecimiento futuro de la minería. Y se veía que sólo un régimen políticamente estable y económicamente viable podía proporcionar financiamiento para carreteras y ferrocarriles, ahora que la riqueza quimérica de la costa pacífica se había perdido definitivamente.

El descrédito de los antiguos jefes militares, el desastre de la estructura financiera estatal que había llevado directamente a la guerra costosa y la pérdida de todos los centros costeños productores de riqueza, todo junto obligó a los mineros y a la élite altiplánica a intervenir directamente en la política. El desastre de la Guerra del Pacífico destruyó el poder del ejército por un lado; por otro, dio a los políticos civiles la justificación que necesitaban para llevar, final y efectivamente, la estructura política nacional a cierto tipo de relación coherente con el carácter cambiante de la economías exportadora y urbana. Todo ello dio como resultado el fin de la era de caudillos y el comienzo de una estructura parlamentaria moderna, con una participación política limitada y dominada por los civiles. Así, al cabo de cincuenta y cinco años de la creación de un gobierno republicano independiente, por fin Bolivia iba a ingresar en la era del clásico gobierno civil decimonónico.

CAPITULO VI

LAS EPOCAS DE LA PLATA Y EL ESTAÑO 1880 — 1932

1880 marcó un importante viraje de la historia boliviana. Para los contemporáneos el suceso más llamativo de aquel año fue la total derrota de las armas bolivianas en manos del invasor chileno y la pérdida de todo su territorio costeño en la Guerra del Pacífico. Menos espectacular, pero de igual importancia fue el ascenso de un nuevo gobierno que reemplazara el antiguo régimen caudillista: aunque la sustitución de los gobiernos por cuartelazos era un rasgo familiar de la vida política de la república desde su creación medio siglo antes, el nuevo régimen marcaba realmente un cambio fundamental en la evolución política nacional. Representaba el primer gobierno republicano viable de carácter oligárquico civil, que se convertiría en la norma de la vida política hasta 1936. Aunque la pérdida de su salida soberana al mar subsistiría como la reivindicación más intransigente de la política internacional boliviana, la instauración de un moderno sistema de partidos y de un gobierno de dominio civil darían lugar a una serie de cambios políticos, económicos y, al fin, sociales a largo plazo en la sociedad de Bolivia, cambios que —a su vez— determinarían profundamente su evolución histórica.

La estabilización y maduración fundamentales de la política boliviana a partir de 1880 no fue el resultado de la Guerra con Chile, sino que derivó más bien de unos cambios básicos en la economía del país, iniciados por lo menos unos treinta años antes. Desde alrededor de mediados de siglo la industria minera de la plata había quebrado casi medio siglo de depresión, empezando a reorganizarse en una escala masiva; esta reorganización incluyó la introducción de capitales en la minería en forma de maquinaria moderna, de consolidación de numerosas compañías mineras y de la liberación de la producción y acuñación del control gubernamental. Todas estas transformaciones requirieron largo tiempo, pues la mayoría del capital se generó dentro del país y hubo que crear una nueva generación de técnicos para desarrollar la industria. En los años sesenta y setenta las minas de Bolivia iban alcanzando niveles mundiales tanto por su producción como por su tecnología; esto, a su vez, planteó la necesidad de mayores necesidades de capital y la apertura de la minería boliviana del altiplano al capital chileno y europeo.

Habiendo comenzado por organizarse políticamente para romper el monopolio gubernamental sobre la venta al exterior y las compras internas obligatorias, la nueva élite minera empezó a funcionar como grupo de presión más coherente con el fin de imponer un gobierno todavía más dócil a sus intereses. Estos iban principalmente encaminados a crear gobiernos estables que pudieran contribuir a financiar las conexiones ferroviarias vitales que necesitaban tan desesperadamente los mineros.

Ingresando a su plena producción precisamente en el momento en que el precio de la plata comenzaba a declinar en el mercado mundial, la nueva élite se veía obligada sin cesar a rebajar sus costos y aumentar la productividad. Esto implicaba el creciente empleo de maquinaria, de energía eléctrica y, sobre todo, la mecanización del transporte.

Mientras que la mecanización de las minas y su electrificación sería asunto exclusivo de los mineros bolivianos, el problema del transporte superaba incluso sus recursos. Pero se trataba de un factor de los costos que se había convertido en un obstáculo importante para la ininterrumpida expansión boliviana. Por tal motivo el financiamiento público e internacional resultaba inexcusable; y sólo un gobierno estable, sensible a sus necesidades, podía dar a los mineros lo que necesitaban.

La guerra fue para ellos un trauma terrible, que había que cancelar lo más pronto posible, transformándolo en una ventaja para Bolivia: ligados estrechamente a sus socios capitalistas ahora chilenos, la guerra fue para ello la ruptura fatal de

sus fuentes de nuevo financiamiento y un grave desbarajuste del comercio exterior. Consideraron que la incompetencia de los anteriores regímenes militares era la causa primaria de la guerra. El resultado final fue que los mineros constituyeron un poderoso partido pacifista, poniendo sus influencias en favor del general Campero, quien había intervenido en el derrocamiento del régimen militar de Daza, en diciembre de 1879.

A partir de ese momento buscaron el rápido fin del conflicto con Chile, que la indemnización por todos los territorios perdidos se invirtiera exclusivamente en la construcción de un ferrocarril; por fin, crearon un partido político, llamado Partido Conservador. Configurado según las líneas de movimientos parecidos en otros puntos del continente, en realidad el Partido Conservador de Bolivia no correspondía al molde tradicional: si bien defendía formalmente los intereses de la iglesia, el principal interés de los conservadores bolivianos era crear un poderoso régimen parlamentario, una presidencia civil y un gobierno dedicado a apoyar masivamente la construcción de una infraestructura de comunicaciones. Siendo el primer y único partido durante cierto tiempo después de la Guerra del Pacífico, los conservadores no tuvieron necesidad de apoyar agresivamente a la iglesia frente a un movimiento anticlerical poderoso y coherente, éste gozaba de poca importancia en Bolivia, a causa del papel relativamente secundario de la iglesia. Así pues, los conservadores, a diferencia de la mayoría de sus colegas americanos contemporáneos, pudieron canalizar todas sus energías a la modernización política y económica de Bolivia.

Esta modernización de la economía y de la política también repercutiría en la sociedad. El desarrollo de un sector exportador moderno tuvo efectos considerables en la estructura tanto social como económica del país. El crecimiento de las minas de Oruro y Potosí originó nuevas demandas de víveres y de mano de obra, afectando profundamente a la población de unos dos millones de bolivianos. La agricultura comercial experimentó un nuevo dinamismo; la apertura de las nuevas conexiones ferroviarias creó nuevos mercados para áreas hasta entonces marginales.

Todo este crecimiento significó que el sistema de hacienda, que durante medio siglo había conocido las mismas estrecheces que la minería, también pudo recuperarse y extenderse. Al propio tiempo, la decadencia de la importancia del tributo indio —hasta entonces la principal renta de los gobiernos— significó que éstos ya necesitaban cubrir sus intereses tras la fachada proteccionista de la propiedad comunaria de sus tierras. Aunque

los títulos de propiedad de las comunidades ya habían sufrido una primera embestida en los años sesenta con Melgarejo, la resistencia india había neutralizado el ataque, conservando las comunidades el control efectivo de sus tierras; pero en los años setenta blancos y cholos aumentaban su presión y los nuevos mercados urbanos y de los campamentos mineros ofrecían incentivos económicos a la élite terrateniente para emprender un asalto a fondo. Dando por buena la tesis elaborada por ella de que las comunidades constituían un sistema anacrónico de propiedad de la tierra y una barrera contra la integración social, la élite recurrió a las clásicas ideas liberales decimonónicas sobre la necesidad de un campesinado libre que poseyera directamente (es decir, individualmente) la tierra. En los años ochenta impuso a las comunidades un sistema de compra directa de la tierra en el que los títulos de propiedad correspondían a los individuos y no a la comunidad. La creación forzada de un "campesinado" indio individualista con títulos de *iure*, permitió a los hacendados quebrar el control *de facto* de las comunidades mediante la compra de unas pocas parcelas, destruyendo así la cohesión comunitaria. El resto fue fácil: bastó combinar el fraude y la fuerza con la simple compra; pronto se produjo una considerable expansión de las haciendas en las tierras altas y valles adyacentes.

El ataque melgarejista de los años sesenta a las comunidades se había basado en estas mismas ideas "liberales"; pero en las décadas siguientes se disponían de mayores capitales para que el nuevo ataque tuviera consecuencias tangibles. Así, el período que va de 1880 a 1930 vivió la segunda gran época dorada de la hacienda. Mientras que las comunidades en 1880 todavía retenían la mitad de la tierra y alrededor de la mitad de la población rural, en 1930 habían quedado reducidas a menos de un tercio en ambos rubros. Fue definitivamente quebrantado el poder de las comunidades indias; sólo la marginalidad de las tierras que conservaron y el estancamiento de la economía nacional, después de los años treinta, impidieron su aniquilación completa.

Esta decadencia progresiva de la comunidad significó la pérdida no sólo de sus títulos de propiedad, sino también de su cohesión social. Aunque muchas de las haciendas habían reconstruido la organización política y social del gobierno comunitario, los *ayllu* de haciendas a menudo se veían impotentes para proteger a sus miembros de la expulsión de sus parcelas y de la misma hacienda; además dentro de las haciendas las necesidades de brazos eran menores que en las anteriores comunidades: el resultado fue la creciente ruptura de las normas sociales in-

dias, la migración a las ciudades y el crecimiento de las poblaciones mestizas urbana y rural. Lo único que impidió la total destrucción de la cultura india fue el incesante crecimiento demográfico indio a lo largo del siglo XIX. Aunque una serie de epidemias a mediados del siglo había retardado aquel crecimiento, la desaparición de enfermedades contagiosas como el cólera, en el último cuarto del siglo, permitió las altas tasas de crecimiento. Fuera de ello, la ausencia de la educación pública antes de los años treinta significó que la lengua de todos los grupos y clases del campo siguiera siendo la indígena.

Así pues, Bolivia permaneció un estado predominante rural e indio campesino hasta muy entrado el siglo XX, a pesar del crecimiento de un sector exportador moderno, de la espectacular expansión de la red agrícola comercial y del sistema hacendado e, incluso, del crecimiento de los centros urbanos modernos. En el censo de 1846 se calculó que la población indígena representaba el 52% del total; en 1900 seguía siendo el 51% de todo el país. Incluso con una generosa definición urbana, en 1900 Bolivia todavía tenía un 73% de población rural. Por fin, el castellano no sólo era una lengua minoritaria en la república, sino que la tasa de analfabetismo aun entre los castellanohablantes era sumamente alta: sobre la población de 7 años para arriba, en 1846 se calculó que sólo el 10% había recibido alguna escolarización; en 1900 aquella cifra sólo había subido al 16%. Y todavía cabe observar que las cifras mencionadas probablemente sobreestiman las tasas de alfabetismo del momento.

Vemos, pues, que los gobiernos republicanos posteriores a 1880 se apoyaban sobre un pequeño porcentaje de la población nacional y que, para todos los efectos prácticos, sólo podían representar a la población alfabetizada de la lengua castellana de la república, que en el mejor de los casos no pasaba de la cuarta parte de la población total. Teniendo en cuenta el requisito de alfabetismo para votar (y no digamos nada de las restricciones financieras para ocupar cargos públicos), el régimen boliviano era, en el sentido más pleno de la palabra, un sistema político de participación limitada, con una base electoral que oscilaba entre las 30.000 y 40.000 personas en el período que se extiende hasta 1900.

Por lo que se refiere a las masas campesinas indias, en los gobiernos republicanos posteriores a 1880 no encontramos nada democrático o participante. Si acaso, estos regímenes fueron más explotadores que los anteriores caudillistas, aunque no fuera más que por la expansión económica de la élite blanca (minera o hacendada), siempre a costa de los indios. Y en ello

esta élite estaba plenamente de acuerdo, pues demostró un gran interés por excluir a las masas indias de la política, negándoles armas o cualquier otro tipo eficaz de protesta. Para ello el ejército particularmente después de su profesionalización y modernización, se convirtió en un instrumento indispensable: mantuvo la sumisión india y se recurrió sin cesar a él para reprimir los levantamientos indígenas periódicos.

La élite se dividió en partidos políticos, incluso echó mano de las armas para derrocar gobiernos; pero estos actos conflictivos y violentos quedaban absolutamente circunscritos a su perímetro básicamente urbano e interno a la clase. Fueron extremadamente raros los recursos de la élite a los grupos externos a ella y de habla no castellana, transcurriendo la vida política del período 1880 — 1932 dentro de una regla estrictamente definidas. Una sola vez, 1899, se permitiría a los indios participar — siquiera por un breve espacio de tiempo— en un conflicto político nacional; y esta intervención acabó con la extinción de los *kuraka* rebeldes. Para las masas indias rurales la expresión política quedaba confinada a los ancianos tradicionales de la aldea o a los líderes, ocasiones que los conducían en las revueltas o "guerras de castas". Por lo general se trató de levantamientos limitados a pequeñas comunidades y de exclusivo carácter defensivo, en protesta por el aumento de la explotación o por los ataques a sus derechos de propiedad sobre las tierras. Así pues, hasta entrado el siglo XX la política fue asunto exclusivo de solamente el 10 — 20% de la población de estado si nos referimos a observadores participantes; mucho menos si hablamos de actores formales.

Este impacto del cambio económico en la vida política y social de la nación tuvo también su correlato en la cultura boliviana: la vida cultural republicana había constituido un aspecto muy adulterado de la existencia estatal. El aislamiento social e intelectual, resultado de la independencia, había repercutido en el pensamiento y la actividad de la élite de la misma forma que el derrumbe de los grandes centros de riqueza redujo el mecenazgo del arte popular que había tenido un florecimiento tan rico durante la época colonial.

Aunque durante los primeros decenios del siglo se habían creado nuevas universidades, la de San Francisco Xavier, de Sucre, siguió siendo el centro intelectual predominante del país. Pero ahora dejaron de llegar estudiantes de Chile y del Río de la Plata; la teología y el derecho siguieron siendo las áreas de actividad tradicional. Además, la pérdida del personal metropolitano, junto con la decadencia general del comercio y de los

contactos internacionales de Bolivia comportaron la pérdida de los estímulos europeos. Ahora las influencias europeas llegaban a Bolivia a través de la experiencia de sus vecinos americanos. Durante las primeras décadas del siglo Bolivia decayó a un nivel de actividad intelectual mucho menos intensa que en cualquier otro momento de su historia.

Por supuesto, habían ciertas excepciones a esta regla general; pero se trataba de individuos aislados, formados en el extranjero y que escribieron sus obras fuera de Bolivia o trabajaron en el país, en un ambiente absolutamente aislado. Unos pocos intelectuales extranjeros también escribieron poemas, novelas, historias u otras obras literarias importantes durante su residencia en Bolivia: José Joaquín de Mora, Bartolomé Mitre y Ramón Sotomayor Valdés, figuran entre ellos. Hubo, no faltaba más, una activa producción panfletaria, que por lo general trataba de cuestiones políticas o económicas, aunque pocos de sus especímenes demostraron originalidad destacada o trascendió el impacto efímero. La única excepción a este panorama general de la cultura literaria anterior a 1880 fue José María Dalence, cuya obra estadística sobre la sociedad Boliviana le ha valido sin disputa el título de padre de las ciencias sociales de Bolivia: sus esfuerzos por reconstruir sistemáticamente la estructura social y económica del país en los años cuarenta no tienen par; la inteligencia y refinamiento de su obra lo señalan como un analista social al corriente de las más recientes innovaciones europeas.

En la literatura y las artes, pocos fueron los logros. La primera novela escrita por un boliviano no apareció hasta los años sesenta; los primeros periódicos literarios efímeros no lo hicieron hasta fines de aquella década y comienzos de la siguiente. La poesía y el teatro de la época merecen un duro juicio de parte de la crítica nacional. También aquí existe la excepción única: Nataniel Aguirre, considerado el novelista más importante de la época moderna de Bolivia; si bien recibió su formación y comenzó a escribir antes de 1880, su obra principal pertenece al siguiente período.

Después de 1880 la vida intelectual se reanimó, como efecto combinado del gobierno civil estable, de la creciente riqueza nacional, de la profesionalización de las ocupaciones y de la introducción de planes de estudios modernos en las escuelas. Los escritores individuales ahora encontraron grupos más o menos cercanos; los individuos de familias acomodadas ahora gozaban de amplias oportunidades para escribir y vivir fuera de Bolivia y para participar en la última palabra de las culturas latinoamericanas y europeas. Lo vemos en el caso de Ricardo Jaimes

Freyre, quien se unió a Rubén Darío en Buenos Aires y se convirtió en una de las voces más distinguidas del movimiento modernista que sacudió las letras hispanoamericanas y españolas. Un escritor boliviano como Gabriel René Moreno, el más destacado historiador boliviano, encontró acogida en las bibliotecas y archivos chilenos; un novelista y ensayista como Alcides Arguedas desde París se hizo conocer por toda América por su nuevo enfoque realista de las letras. Con el ritmo más intenso en la poesía, la literatura y las humanidades en general, los bolivianos denominaron a los escritores que llegaron a su mayoría de edad en estos años la "generación de los ochenta". Fue la primera generación realmente coherente que apareció en las letras republicanas, poniendo unos cimientos de importancia para la evolución cultural subsiguiente. El período 1880 – 1920 fue en muchos aspectos una edad de oro para la literatura nacional.

En cambio, en el campo científico las estructuras tradicionales de las universidades del país impidieron todo cambio serio. Aunque Bolivia en los años ochenta era un país tecnológicamente tan avanzado como cualquier otro del mundo en el área minera, toda su maquinaria y sus técnicos eran importados. Ingenieros extranjeros procedentes de las mejores escuelas de Europa y Estados Unidos instalaban los últimos adelantos en las plantas y minas; pero eran muy pocos los ingenieros autóctonos y ni siquiera en la metalurgia hizo Bolivia ningún descubrimiento de relieve. El problema en las ciencias exactas era la falta absoluta de infraestructura, presupuestos insuficientes y profesores con dedicación parcial impedían el desarrollo de laboratorios científicos y de la investigación sistemática. Mientras que los novelistas, humanistas y científicos sociales podían surgir a partir de las profesiones tradicionales del derecho, la teología y la medicina, no sucedía lo mismo con las ciencias o la tecnología. Aunque ha habido bolivianos que, habiéndose formado y trabajando fuera de su patria, han participado en el desarrollo de la ciencia moderna en los países desarrollados, hasta nuestros días Bolivia sigue siendo un importador de ciencia y tecnología.

En las artes plásticas el estancamiento económico y la decadencia paralela de la iglesia católica durante las primeras décadas del siglo XIX causaron el agotamiento de la gran época de actividad artística creativa de la colonia. La eliminación de los diezmos por Sucre y la incautación de las rentas y propiedades eclesiásticas interrumpió la construcción eclesiástica. No pudiendo ya la iglesia o los ciudadanos piadosos acaudalados ejercer sus mecenazgo también decayó la demanda de pinturas y esculturas. La iglesia decimonónica también se hizo más intole-

rante al catolicismo popular, más tímida en aceptar los estilos artísticos nativo mestizo e indio y superconservadora en su gusto artístico en general. Así pues, cuando las rentas eclesiásticas volvieron a ser de importancia, después de la victoria de los conservadores, y se reanudó la construcción en gran escala, los eclesiásticos y la élite blanca rechazaron la rica tradición artística colonial de Bolivia, copiando servilmente los modelos más reaccionarios de Europa. El resultado conjunto de todos estos factores fue el estancamiento de las artes plásticas bolivianas a partir de las primeras décadas del siglo XIX hasta entrado el siglo XX y la eliminación de las masas indias y cholas de toda participación significativa en la vida cultural del país.

El crecimiento del sector exportador de Bolivia durante la segunda mitad del siglo XIX (en particular después de 1880), presenta, pues, sus aspectos positivos y negativos para la vida política, social y cultural bolivianas. Pero tuvo asimismo algunos efectos perturbadores en la economía nacional: el crecimiento de la industria de la plata no sólo reanimó los centros urbanos, estimuló la economía de las haciendas y reorganizó el espacio económico interno de la sociedad; también hizo más vulnerable la economía boliviana a las fuerzas económicas internacionales. Tanto los importadores de bienes manufacturados que pagaban sus compras en divisas fuertes disponibles por sus exportaciones de minerales, como el gobierno que se había hecho totalmente dependiente de los impuestos al comercio internacional, ahora se encontraban íntimamente ligados a la suerte del sector exportador. Este, a su vez, se hizo más vulnerable a las fluctuaciones de la demanda internacional cuanto mejor le fueron las cosas. Así, el gobierno, los mineros y la élite nacional quedaron atrapados por los condicionamientos internacionales, lo que creaba unos problemas de estabilidad que escapaban a su capacidad de control.

Para un economista, Bolivia era un ejemplo clásico de economía abierta. Como el núcleo principal de su poder interno de compra procedía del sector minero de vanguardia, era muy vulnerable a los altibajos en los precios de sus exportaciones fundamentales. Además, hasta la segunda mitad del siglo XX, incluso en el sector minero, se trató de una economía dominada por un solo mineral. Hasta 1900 este mineral fue la plata y a partir de entonces y hasta fechas muy recientes, el estaño. La fluctuación, por tanto, en los precios mundiales repercutían directa e inmediatamente en la economía local. Las élites regionales poderosas podían desaparecer de la noche a la mañana como efecto de los cambios bruscos en los precios internacionales, lo que

daba lugar al desbarajuste de los mismos cimientos de la élite gobernante. Los bolivianos aprendieron a vivir en esta incertidumbre y trataron de reaccionar lo más rápidamente posible a los nuevos incentivos de los precios; pero las limitaciones en los recursos naturales permitían predecir ya que su respuesta también topaba con unos límites y que nadie podía garantizar el progreso económico a largo plazo del conjunto del país. Esta incertidumbre explica buena parte de la conducta de los mineros, jefes políticos predominantes en el período que siguió a 1880: enfrentados a la caída de los precios mundiales y a los límites de su propio capital, tomaron el control del gobierno y encauzaron todos sus esfuerzos en la disminución de los costos de transporte, el factor más caro de todo el proceso productivo minero. Esto significó que los mineros quisieran un gobierno civil estable cuyos recursos fiscales se pudieran dedicar a una construcción masiva de ferrocarriles. En este propósito los mineros y sus aliados vieron coronados por el éxito sus esfuerzos, aunque al fin el derrumbe total del mercado mundial de la plata les causaría su propia ruina.

Para el sistema político que deseaba la élite minera se necesitaban de partidos políticos formales; éstos nacieron al calor de los debates sobre la Guerra del Pacífico: los mineros adoptaron una posición pacifista prochilena desde los primeros días de la guerra, agrupándose en torno a dos figuras clave, Mariano Baptista (abogado de varias compañías mineras) y Aniceto Arce (el principal minero y productor individual del país). El grupo antichileno y antipacifista se alineó tras el coronel Eliodoro Camacho, jefe de la revuelta Anti —Daza y destacado teórico liberal.

Las elecciones de 1884 ofrecieron la ocasión para someter a prueba la viabilidad de estos partidos. El general Narciso Campero, que había dirigido el menoscabado esfuerzo bélico boliviano después de la destitución de Daza, acabó su período presidencial, instaló un Congreso viable e incluso puso en vigor en1880 la Constitución redactada en 1878. Permitiendo unas elecciones absolutamente libres, el régimen de Campero pudo dar la estabilidad que se necesitaba para la creación de dos partidos coherentes. El vencedor final de las elecciones, tras un necesario segundo cómputo parlamentario, fue el segundo productor de plata en Bolivia, Gregorio Pacheco. Con Mariano Baptista como vicepresidente, Pacheco inauguró la era de la llamada "la oligarquía conservadora", que duró de 1884 a 1899. Durante este período los dos partidos llevaron a término su propia definición, mientras el gobierno se dedicaba a lograr un acuerdo con Chile y a promover la construcción de ferrocarriles en gran escala.

Si bien Pacheco prometió mantenerse neutral en las elecciones de 1888, en realidad el régimen conservador apoyó a Aniceto Arce. Como resultado de esta parcialidad las elecciones de 1888 se convirtieron en un asunto violento, absteniéndose de participar en absoluto los amargados liberales. Hubo, pues, una vuelta a la violencia política a fines de los años ochenta. Este recurso a la violencia era un efecto necesario de la negativa de todos los gobiernos posteriores a ceder la presidencia al partido opositor, pues una vez en el poder y cerca de la única fuente importante de dinero (aparte de las minas y las haciendas), los políticos se negaron a abandonar su suculenta tajada en virtud de cualquier medio electoral o democrático. En todas las elecciones el voto era público; por tanto, fácilmente controlado por los delegados del gobierno central en cada distrito, con lo que éste se aseguraba sin dificultad las elecciones presidenciales y parlamentarias. Cada partido gobernante tenía segura la mayoría en el Congreso, aunque permitía una representación apreciable a todos los partidos opositores, como una válvula de escape tolerable que no ponía en peligro serio su propio control del gobierno. Eso sí, por todos los medios había que controlar la presidencia, aun recurriendo al fraude más descarado. Esto significaba que a lo largo de las dos épocas, conservadora y liberal, la violencia política había de ser endémica; pero conviene subrayar que por lo general esta violencia estuvo dominada por los civiles de un partido concreto, se limitó nítidamente al medio urbano y elitista y dio lugar a poco derramamiento de sangre.

Supuesto el hecho de que en todo momento se dio la impresión de acatar los procesos democráticos, la violencia también pareció quedar reservada a los momentos subsiguientes a una derrota electoral "ilegítima", cuando un partido opositor y la mayoría del público votante creían que el gobierno había infringido sus derechos. Las revueltas acostumbraron a coincidir con los momentos de relevo presidencial y si bien los golpes siguieron formando parte ininterrumpida del escenario político, no comportaron necesariamente la interrupción del poderoso dominio civil, ni la aparición de la anarquía social ni la inestabilidad de la vida política. Aunque los comentaristas posteriores sobre Bolivia contarían el número de revueltas y presumirían un desbarajuste total, en realidad el período 1880 – 1936 fue de notable continuidad y estabilidad, a pesar del periódico recurso a una violencia circunscrita.

El régimen de Aniceto Arce (1888 – 1892) fue el período más visible de dominio conservador. Arce aplastó un importante alzamiento liberal, para dedicarse luego a un programa masivo de

construcción de ferrocarriles; también inició la conexión ferroviaria que partiendo del puerto chileno de Antofagasta había de llegar a La Paz, dando así por primera vez en la historia a Bolivia acceso al mar por ferrocarril. Arce fundó asimismo la Academia Militar y se dedicó a profesionalizar sistemáticamente el ejército. Introdujo la que después sería práctica común de permitir una representación liberal en el Congreso, aunque les cerró el paso a la presidencia. El resultado fue otra elección fraudulenta en 1892, saliendo vencedor Mariano Baptista, el ideólogo del partido conservador.

Como sus antecesores, Baptista (1892 — 1896) se concentró en los ferrocarriles. También suscribió un tratado provisional de paz con Chile y fomentó el desarrollo de los recursos naturales de caucho de Bolivia en el Acre. Baptista traspasó, a su vez, la presidencia al último de los oligarcas conservadores, el minero Severo Fernández Alonso (1896 — 1899); pero para entonces el poder del régimen conservador, que se hallaba sólidamente asentado en las zonas meridionales de la minería de la plata y en la capital Sucre, se iba erosionando progresivamente con la caída de los precios de la plata en el mercado mundial; los liberales, por el contrario, veían crecer cada vez más su poderío al asociarse más íntimamente con las clases urbanas profesionales ascendentes de La Paz y con los grupos ajenos a la minería de la plata, en particular con los nuevos mineros del estaño, que aspiraban a desplazar a la antigua oligarquía.

El crecimiento de la producción de estaño como la industria central de Bolivia después de 1900 arrancaba de las transformaciones de la época conservadora. El gran momento de la industria minera moderna de la plata había logrado para Bolivia los últimos avances de la tecnología minera, desde el empleo de herramientas mecánicas y de electricidad hasta el empleo de ingenieros modernos. Así mismo los magnates de la plata y sus regímenes conservadores se habían propuesto las comunicaciones modernas como su tarea prioritaria, reconstruyendo una red ferroviaria vital que conectaba las regiones mineras con la costa del Pacífico.

Cuando la plata se derrumbó en el mercado internacional, existía ya una tecnología y unas comunicaciones, que podían ser aprovechadas para otros minerales. En concreto, la afortunada coincidencia de una expansión casual de la demanda mundial de estaño para el enlatado de otros mil usos industriales con el agotamiento de las minas tradicionales europeas, permitió a Bolivia capitalizar sus recursos y responder de forma rápida y eficaz a la demanda internacional. Al comienzo, el estaño había

sido un subproducto importante de la minería de la plata, pero los costos de su envío en bruto a las fundiciones europeas siempre habían sido prohibitivos, ante todo por los sistemas primitivos de comunicaciones de Bolivia. Al disponer de un transporte ferroviario barato por primera vez en su historia, Bolivia se encontró súbitamente con un recurso rentable, bastando con embarcar este mineral. Asimismo, el hecho de que el estaño se encontraba exactamente en las mismas regiones que la plata y aún con frecuencia en las mismas minas significaba que apenas se necesitaba deslizar los enclaves mineros tradicionales o las redes de transporte.

El paso de la plata al estaño fue relativamente fácil para la economía y sociedad bolivianas; no lo fue tanto para la élite tradicional. En primer lugar, el crecimiento de la minería del estaño adoptó rápidamente la forma de auge, en cuanto la calidad y la cantidad de la producción subieron desde unos niveles mínimos a unas exportaciones masivas en el lapso de menos de diez años. En segundo lugar, si bien en general las zonas mineras eran idénticas, hubo un traslado sutil pero importante del epicentro hacia el norte, pues las minas del norte del departamento de Potosí y el sur de Oruro jugaban ahora al papel principal en la producción. Por fin, esta mutación fue tan repentina y de tal magnitud el capital invertido en bienes fijos, que muchos de los mineros tradicionales de la plata tuvieron dificultad en pasarse al estaño. El resultado de todo aquello fue que una parte importante de la élite de los magnates tradicionales de la plata no realizaron el paso, una multitud de compañías extranjeras entraron en el mercado y surgió un nuevo grupo de empresarios bolivianos en el escenario nacional por vez primera.

Todos estos cambios provocaron una ruptura importante en el escenario político nacional. La élite antigua, arraigada en Potosí y en su capital subalterna Sucre, cada vez se vio más impotente para reprimir la creciente popularidad de los liberales de la oposición; simultáneamente el enorme crecimiento de La Paz, que ahora se convirtía en el centro clave de servicios de la nueva industria minera del estaño, vino a acentuar todavía más su predominio en la vida económica y social nacionales. Esto provocó la revuelta liberal y regionalista de 1899, en la que la élite mayoritariamente liberal paceña abogó por el dominio federalista local y el derrocamiento del dominio conservador.

La revuelta de 1899 fue, en realidad, una acción militar bastante costosa y amplia, para cuya victoria se presentaron tales dificultades que los liberales llegaron a infringir las normas

tradicionales, fomentando la participación de las masas indias. El resultado fue la intervención temporal de algunos grupos indios en la vida política nacional por primera vez desde los años iniciales de la república; pero una vez que los liberales obtuvieron su victoria, no sólo se olvidaron del federalismo (pasando a ser La Paz la capital de hecho del estado), sino que desarmaron a las tropas indias y ejecutaron a sus jefes.

Así pues, el nuevo siglo coincidió con la subida al poder de un nuevo partido político y la creación de una nueva industria minera. El régimen liberal, que siguió en muchos aspectos al conservador, se apartó de él en unos pocos puntos fundamentales. Ambos se dedicaron a una subvención masiva gubernamental del transporte, apoyaron decididamente la industria minera, así como el desarrollo y la modernización de sus centros urbanos. Ambos regímenes trataron activamente de destruir las comunidades indias y la extensión del sistema de haciendas. Por fin, los dos gobiernos demostraron indiferencia por la cuestión eclesiástica, cuestión prominente en la mayoría de los demás estados latinoamericanos.

Durante el régimen liberal persistieron los antiguos moldes de participación política. Mientras que las elecciones parlamentarias seguirían siendo relativamente libres, las presidenciales también seguirían controladas con el recurso de rigor a la violencia circunscrita como el único medio de que disponían los políticos ajenos al aparato gubernativo para obtener cargos ejecutivos. Los liberales mantuvieron una prensa libre de censura, las libertades civiles para blancos y mestizos y una vida intelectual pujante para la élite; pero ahora surgió un nuevo tipo de liderazgo político. Como reflejo de las complejidades de la nueva era minera, los mineros del estaño estaban demasiado absorbidos por sus negocios para intervenir directamente en la vida nacional; por otro lado, el apoyo sistemático que los conservadores habían dado a la enseñanza y a la profesionalización había acabado creando una clase de abogados y "letrados" en un número y con una experiencia suficientes como para hacerse cargo de los asuntos del gobierno.

Así nació lo que los posteriores analistas políticos llamarían la rosca, entendiendo por ella un gobierno de políticos profesionales que actuaban fundamentalmente en favor de los intereses de los barones del estaño del país. Los grupos de poder económico ya no necesitaban ahora intervenir directamente en el proceso político para conseguir sus propios objetivos. Esto resultó de importancia crucial para los mineros del estaño, pues les permitió concentrar plenamente sus fuerzas en la intensa lu-

cha competitiva por el dominio de las minas bolivianas de estaño. Dado que no existían trabas a la inversión extranjera en las minas y que Bolivia tenía las puertas abiertas a todo tipo de empresarios e ingenieros del exterior desde los mismos comienzos de la expansión de la industria del estaño, constituye una agradable sorpresa comprobar que los propios bolivianos fueron los que surgieron como mineros predominantes en el sector, tras una dura competencia de tres décadas. Al comienzo el capital europeo, estadounidense e incluso chileno compitió con el boliviano en pos del control del sector estañífero; se crearon centenares de compañías, trabajando en muchos casos una misma montaña de aquel mineral; pero de entre todos estos poderosos y bien dotados oponentes los capitalistas locales saldrían de la competencia en los años veinte como el grupo dominante en el control de la industria.

De los tres barones del estaño surgidos de aquella carrera selectiva, sin lugar a dudas el más poderoso fue Simón Iturri Patiño. Habiendo nacido en 1860 en el valle de Cochabamba, parece que Patiño procedía de una familia artesana y parcialmente chola; concurrió a un colegio secundario en su tierra natal; durante los años ochenta y comienzos de los noventa realizó por su cuenta el aprendizaje en diferentes firmas importadoras de equipo minero y directamente mineras, cuando todavía predominaba la minería de la plata. En 1894 compró sus primeras acciones de una mina de estaño de Oruro, en el cantón de Uncía, en la frontera con el departamento de Potosí; en 1897 Patiño se había hecho con el control total de la mina y en 1900 descubrió uno de los filones de estaño más ricos de Bolivia. En 1905 su mina, La Salvadora, se había convertido en la más grande de las de estaño de Bolivia; Patiño por entonces ya se había rodeado de todo un equipo de técnicos extranjeros y trabajaba con la tecnología más moderna. A partir de esta inversión inicial Patiño multiplicó rápidamente sus posesiones, tanto vertical como horizontalmente. En 1910 compró la compañía vecina (la "Uncía Mining Company", de propiedad británica) y en 1924 se convirtió en dueño solitario de los dos centros mineros de Uncía y Llallagua, mediante la compra de la "Compañía Chilena de Llallagua". En aquel momento comenzó a ocupar su posición permanente como controlador de alrededor del 50% de la producción boliviana, con un personal empleado de más de 10.000 obreros.

Entretanto Patiño se interesó por la integración vertical de sus operaciones mineras; en una jugada rara en los círculos capitalistas latinoamericanos, llegó a controlar a sus refinadores

europeos. Después de haber juntado sus fuerzas con sus consumidores estadounidenses, acabó apoderándose del control de la mayor fundidora mundial de estaño boliviano, la "Williams Harvey & Co." de Liverpool, en 1916. Desde el comienzo de los años veinte Patiño vivió permanentemente en el extranjero y por entonces se lo puede describir más exactamente como un capitalista europeo, supuestas sus inmensas participaciones no bolivianas. Con todo, siguió siendo el minero predominante de Bolivia, su principal banquero privado y, por fin, su capitalista más poderoso hasta su muerte en 1947.

De los otros dos mineros que surgieron para repartirse en partes semejantes la otra mitad de la producción total, uno también era boliviano: pertenecía a la antigua familia minera de la plata, los Aramayo; el otro era un judío europeo llamado Mauricio Hochschild. Tanto la compañía Aramayo como la de Hochschild funcionaban con importantes participaciones de capital europeo; ambas —a diferencia de la de Patiño— eran básicamente administradas desde Bolivia mismo. Si bien Hochschild tenía también algunas inversiones en Chile, su residencia principal prácticamente hasta el fin de su carrera estuvo en Bolivia, teniendo allí su principal zona de inversiones. También para la familia Aramayo Bolivia sería su principal ámbito de actividad. Así pues, en los años treinta los tres grandes mineros que dominaban la producción de estaño y una buena parte del plomo, zinc, wólfram y otros minerales, tenían su base principal de operaciones en Bolivia o, como en el caso de las compañías de Patiño, eran propiedad exclusiva de bolivianos. Dado el carácter absolutamente abierto de la industria minera boliviana a todos los empresarios extranjeros desde mediados del siglo XIX en adelante, este control nacional fue realmente un hecho extraordinario en la historia de la minería latinoamericana.

La retirada de Patiño y de los demás nuevos magnates del estaño de la intervención directa en los asuntos nacionales dejó la política boliviana en manos de los individuos de la ascendente clase media superior urbana y profesional y de los representantes de la élite provincial terrateniente (hombres de propiedades modestas y de relativamente pocos peones, pero con unos antecedentes sociales sólidos); casi en su totalidad eran abogados y aunque creían en la concepción liberal del gobierno parlamentario y del derecho constitucional, no creían menos en un sistema de castas y en el mando de la oligarquía blanca.

Esta fe en la casta recibía apoyo de la sorprendente estabilidad de la estructura social de Bolivia, a pesar de los cambios re-

cientes y tan rápidos que habían tenido lugar. Así, en el censo nacional de 1900 sólo el 13% de la población figura como "blanca". Por otro lado, si bien ese censo implicaba un crecimiento considerable de la población urbana en comparación con el de 1846, ello se debía en la definición tan amplia de urbanización, al incluir todo centro de población de más de 200 personas. Si restringimos los centros urbanos al techo inferior más realista de los 20.000 habitantes, comprobaremos que el cambio apenas si era perceptible, en efecto, de 1846 a 1900 el porcentaje de población urbana apenas había subido del 6 al 7%. Incluso La Paz, el centro urbano mayor del país, en 1900 sólo había alcanzado a crecer hasta 55.000 habitantes, es decir, unos 12.000 más que medio siglo antes. Aunque las nuevas minas habían dado lugar a varias nuevas ciudades al sur de Oruro y al norte de Potosí, en 1900 la industria minera en auge, con sus 13.000 obreros, seguía absorbiendo sólo el 1% de la población activa.

Por tanto, a pesar del crecimiento del nuevo sector exportador, de la expansión de la nueva élite blanca y de los cholos y de la caída masiva en la propiedad india de la tierra en el campo, Bolivia seguía presentando un aspecto sorprendentemente tradicional en sus rasgos sociales. Por consiguiente, los liberales no se sintieron apremiados a preocuparse de los graves problemas clasistas y étnicos que agrietaban su sociedad multinacional.

No sólo esto; los liberales demostraron incluso mayor agresividad contra las comunidades que sus antecesores conservadores, llegando a desarmar y destruir a los indios que les habían prestado su colaboración en la revuelta de 1899. también se justificaron ante las mismas élites mineras prosiguiendo el poderoso apoyo gubernamental al sector minero. Esto significaba defensa del libre comercio, tributación mínima de la minería y de las élites terrateniente y adinerada, subvención gubernamental de la construcción de ferrocarriles. Incluso dentro de su propiedad ideología política, los liberales no se mostraron más liberales que sus predecesores. Al igual que los conservadores antes de ellos, este nuevo cenáculo de dirigentes políticos también se negó a ceder el sillón presidencial a sus opositores; a pesar del tremendo crecimiento de la economía nacional, el gobierno no seguía constituyendo una fuente importante de empleo y el presidente era el principal garante de ese empleo. Prosiguieron, pues, las prácticas consagradas de las elecciones parlamentarias libres y de las elecciones presidenciales fraudulentas; también siguió siendo la norma el recurso a golpes de estado restrin-

gidos por civiles para recuperar el mando del partido a largo plazo.

Una vez en el poder, los liberales adoptaron prácticamente todas las posiciones de los conservadores, hasta entonces denostados. Abandonaron por completo la ideología federalista; crearon un régimen centralista en La Paz. Obsesionados por la idea fija de terminar la red ferroviaria y de modernizar las ciudades, no tuvieron reparo en desprenderse en partes considerables del territorio nacional y de posiciones internacionales tradicionales, política que dejó a Bolivia totalmente privada de su acceso al mar y con unas deudas cuantiosas.

El primero de estos acontecimientos internacionales de bulto fue la disputa del Acre, situado en el corazón de la zona amazónica del auge de la goma, los territorios del Acre colindaban con la frontera brasileña y albergaban una población mayoritariamente brasileña. Cuando el último gobierno conservador logró implantar una casa de aduana en Puerto Alonso, sobre el río Acre, recaudando una suma enorme por la goma que se embarcaba a través del Brasil, los colonos del lugar se alzaron. El régimen liberal envió tropas a las remotas tierras bajas orientales para aplastar la revuelta, pero el velado apoyo brasileño dio suficiente fuerza a los rebeldes para superar a los bolivianos. El resultado fue la derrota de las armas bolivianas y la anexión del territorio del Acre al Brasil, en virtud del Tratado de Petrópolis de 1903, contra una indemnización de 2.5 millones de libras esterlinas. Mientras que el gobierno liberal había adoptado una actitud enérgica en la cuestión del Acre, demostró mucho menos agresividad en el frente chileno: superó incluso las más extremadas concesiones que hubieran hecho nunca sus antecesores conservadores, en un intento de obtener fondos y poner punto final a una cuestión antigua y políticamente candente que creían estaba desviando los recursos nacionales. Haciendo caso omiso de su previa posición irredentista que exigía la devolución pura y simple del territorio usurpado, los liberales ahora suscribieron un Tratado de Paz en regla con Chile (1904); por él Bolivia convenía en ceder todo el territorio costeño ocupado y abandonaba sus demandas de un puerto en el Pacífico; por su parte Chile se comprometía a construir un ferrocarril de Arica a La Paz, pagar una indemnización formal de 300.000 libras esterlinas, garantizar los préstamos internos para la construcción del ferrocarril boliviano y, por fin, quedaban sin efecto los convenios comerciales especiales con Bolivia que le daban un trato de país más favorecido. Si bien el tratado resolvía formalmente la cuestión del litoral pacífico, de hecho ésta ha permane-

cido como la cuestión sin resolver de las relaciones internacionales andinas desde los años ochenta del siglo pasado hasta el día de hoy.

Por entonces los acuerdos sobre el Acre y el litoral dieron a los liberales una paz relativa en el frente internacional, además de una amplia base financiera para proseguir la construcción del ferrocarril. Internamente también apartaba la principal cuestión internacional de enfrentamiento político. La eliminación de esta cuestión divisora, la adopción del programa económico básico de los conservadores y la decadencia de la élite sucrense, dieron lugar al dominio casi exclusivo de los liberales en el gobierno nacional. En realidad, el movimiento liberal era tan fuerte que entre 1899 y 1920 no habría ningún intento de golpe de estado, una verdadera marca en la historia de la evolución política del país.

El primer régimen liberal estuvo encabezado por el general José Manuel Pando (1899 – 1904), el gran líder del partido en sus años de oposición. Si bien Pando permaneció fiel a algunas de sus posiciones anteriores, los hombres que le siguieron fueron mucho más pragmáticos y exclusivamente interesados en el poder. El más prominente de estos nuevos hombres fue Ismael Montes, el segundo presidente del período liberal, que acabaría ocupando por dos veces la presidencia (1904 – 1909; 1913 – 1917). Abogado por formación, Montes simbolizaba la nueva generación de políticos de clase media urbana. Personalidad enérgica, con un perspicaz instinto político, pudo evitar efectivamente hasta la I guerra mundial la constitución de un partido opositor compuesto de antiguos correligionarios. En este esfuerzo contó con la ayuda del tremendo auge que la exportación de estaño había traído a la economía. Así pudo ampliarse considerablemente la burocracia estatal, medio que también aprovechó para comprar a toda posible oposición.

Además, la nueva era liberal también compensó efectivamente a la élite nacional con un programa masivo de obras públicas. Con un saldo positivo y de cuantía apreciable en la balanza comercial, Montes pudo obtener financiamiento de la banca internacional privada para los préstamos gubernamentales. En 1906 llegó un gigantesco préstamo de un banco privado estadounidense que permitió a Bolivia a completar sus conexiones ferroviarias internacionales, con derivaciones secundarias a las ciudades interiores de Cochabamba y Sucre, además de la vinculación internacional de los centros mineros de Potosí y Oruro. Se construyó un nuevo ferrocarril hasta Guaqui, junto al Titicaca, con lo que se establecía el enlace con la red peruana.

También hubo una intensa actividad en la construcción urbana, proyectos de saneamiento y de alumbrado, un apogeo de la actividad económica hasta la crisis de 1913 — 1914, en vísperas de la I guerra mundial.

Montes pudo controlar, pues, la selección de su sucesor, Eliodoro Villazón, y más adelante, asegurarse su propia reelección, en 1913. Pero la segunda presidencia de Montes no reeditó el triunfo en toda la línea que fue la primera. Los intentos de administración liberal por crear un banco nacional habían provocado duras presiones de parte de un segmento clave de la élite. Luego la repentina crisis del comercio internacional previa a la I guerra mundial hizo disminuir la producción y exportación de estaño en un tercio entre 1913 y 1914. Por fin, las condiciones atmosféricas adversas causaron una grave crisis agrícola por aquel mismo tiempo.

Con dinero escaso, las rentas del gobierno en declive, la marcha sin obstáculos de Montes se encontró de repente con una oposición intransigente y que no podía comprar. Además, habiendo permanecido en el poder demasiado tiempo, ya no sabía recurrir al tacto o a las sutilezas para aplacar esta oposición en aumento. Todo desembocó en el fraccionamiento casi inevitable del Partido Liberal en dos grupos formalmente constituidos: el nuevo partido surgido de esta fracción recibió el nombre del Partido Republicano, habiendo nacido oficialmente en 1914.

Así Bolivia volvía de nuevo a un sistema bipartidista más normal; aunque como reconocieron tanto a Montes como el fundador del nuevo partido; a Daniel Salamanca, los republicanos eran copia perfecta de los liberales; sacaba sus fuerzas de las mismas clases, apoyaba sin rechistar cualquier demanda del aparato minero y era tan racista y oligarca como sus oponentes. Montes los llamó liberales "apóstatas"; por su parte, Salamanca afirmó que el objetivo del partido era sólo garantizar unas elecciones libres y restringir el poder presidencial. El resultado final de la vuelta al sistema estricto bipartidista fue la vuelta a la táctica de las elecciones presidenciales fraudulentas y el recurso supremo de la oposición a la violencia y a las asonadas.

La recuperación del período posterior a la I guerra mundial permitió a Montes llevar a cabo sus reformas bancaria y financiera con escasa oposición republicana e incluso ganar el apoyo popular de unos 80.000 votantes con motivo de las elecciones parlamentarias y presidenciales. En 1917 su gobierno pasó a manos de un sucesor más moderado, quien demostró su incapacidad para controlar a los republicanos. Con el decidido apoyo de elementos descontentos del sector de los negocios, los republi-

canos realizaron grandes progresos y cuando el último presidente liberal, Gutiérrez Guerra, intentó apañar las elecciones de 1920, el Partido Republicano se levantó, poniendo fin al gobierno liberal.

El dominio republicano, que sólo duró hasta 1924, supuso una mutación sutil pero de peso en el sistema político que se había ido desarrollando y transformando desde los años de postguerra: de un sistema bipartidista, el escenario político nacional comenzará a evolucionar hacia el multipartidismo. Al mismo tiempo comenzaría a cambiar el credo basado en la ideología liberal del siglo XIX, que incluía una considerable dosis de racismo. Por fin, el carácter extraordinariamente abierto de la economía nacional significaría que Bolivia sería uno de los primeros países del mundo en sentir los efectos de la gran crisis económica mundial, conocida como la Gran Depresión.

El crecimiento económico que había tipificado a los gobiernos tanto conservadores como liberales, en un principio había quedado limitado a determinados grupos elitistas. En la segunda década del siglo XX este crecimiento comenzó a repercutir de forma clara en los sectores mestizo e indio, aunque con frecuencia de una forma conflictiva. La expansión de las haciendas condujo a un creciente conflicto agrario con los indios de comunidad, que daría lugar a una serie de grandes revueltas en los años veinte; pero para la élite fue todavía más importante e inmediato la organización de los primeros sindicatos modernos en Bolivia. Aunque las actividades organizativas databan del siglo XIX, Bolivia se encontraba varias décadas detrás de sus vecinos en cuanto a agitación y organización de los obreros: hasta 1912 no se celebró el 1º de mayo; hasta 1916 – 1917 no se fundaron confederaciones obreras locales urbanas; hasta 1920 no comenzaron las huelgas nacionales o urbanas importantes.

Por primera vez la élite tomó conciencia en los años veinte de la existencia de exigencias alternativas y de grupos potencialmente amenazantes fuera de la arena política elitista. Al hacerse más compleja la vida política en el período republicano, haría que surgieran partidos minoritarios, quienes por primera vez discutirían seriamente los problemas y posibilidades del conflicto de clases. Los años veinte también fueron testigos de los primeros brotes del pensamiento marxista europeo, tal como llegó a Bolivia a través de los filtros de escritores argentinos, chilenos y peruanos.

Apenas encaramado al poder, el Partido Republicano se dividió en dos ramas opuestas: una dirigida por el intelectual de clase media urbana, Bautista Saavedra, y la otra por el hacenda-

do y político cochabambino, Daniel Salamanca, Saavedra y sus seguidores pudieron tomar la iniciativa y hacerse con el control del gobierno y del partido en 1921; pero Salamanca y sus fuerzas crearon un Partido Republicano Genuino, lanzándose a una activa labor de agitación contra el nuevo régimen.

La tensión política en aumento de los años veinte, combinada con las crisis políticas que se iban profundizando y los inicios de la Gran Depresión, desencadenaron una violencia política y un conflicto social de una intensidad desconocida hasta entonces. Apenas Saavedra tomó posesión de la presidencia cuando un alzamiento masivo indio en Jesús de Machaca ocasionó la masacre de centenares de indios y de docenas de blancos y cholos. Saavedra recurrió a todas las fuerzas, sin la menor repugnancia, para aplastar la rebelión; atacó los gobiernos comunitarios o*ayllu* como instituciones reaccionarias que había que suprimir por la fuerza, en lo que revivía la clásica posición liberal decimonónica sobre la cuestión indígena.

Pero Saavedra demostró mayor apertura en sus opiniones sobre el movimiento obrero. Empezó considerándolo como un ámbito importante de posible apoyo cuando sus propias bases en la clase alta y media quedaron erosionadas por la oposición republicana genuina y liberal. Faltándoles el apoyo de las élites tradicionales regionales y de la clase hacendada, buscó nuevas bases de apoyo inaugurando la primera legislación laboral y social modernas de la historia boliviana. También manifestó su disposición a apoyar una actividad huelguística limitada y los impulsos de sindicalización, primer ejemplo en un presidente nacional. Pero al enfrentarse con una creciente ola de huelgas, incluida una grave agitación en las minas y la primera huelga general en 1922, Saavedra no tardó en retirar sus previas ofertas de apoyo. De hecho acabó recurriendo también a las tropas para reprimir a los mineros de Uncía a fines de 1923, una de las primeras de las tan numerosas masacres de mineros. Así, mientras su legislación laboral y sus discursos obreristas reflejaban lo que podía haber de cierta conciencia entre la élite blanca sobre la existencia de la lucha de clases en Bolivia, el incesante retroceso del régimen en este campo demostró que Saavedra sostuvo aquellas posiciones más por conveniencia política que por que él, y sus partidarios hubieran dejado muy atrás el pensamiento liberal y positivista decimonónico.

Pero los años veinte fueron un período en que otros miembros de la élite comenzaron poco a poco a adoptar posiciones no tradicionales. En 1920 se creó el primer partido socialista local. A fines de 1921 se fundó un Partido Socialista nacional, que,

aunque se componía de un pequeño grupo de intelectuales con mínimo apoyo obrero, con todo comenzó a debatir problemas básicos como el pongueaje indio, el reconocimiento legal del gobierno comunitario indígena y los derechos obreros y femeninos. Aunque estas ideas resultaban nuevas y revolucionarias en el contexto boliviano, ya formaban parte de la tradición política marxista, bien asentada y más radical, de todos los vecinos de Bolivia, incluido el Perú. La famosa fragmentación de los partidos marxistas latinoamericanos y el surgimiento de los movimientos comunistas en América del Sur en los años veinte, por ejemplo, no tuvieron eco en Bolivia: aquí no apareció el primer partido marxista — y aún moderado— hasta finales de la década; su primer partido comunista formal sólo nació en 1950.

Mucha de esta agitación temprana iba asociada a la breve pero profunda depresión iniciada en la década de los veinte y que dio lugar a una grave, aunque temporal caída en la producción minera. Cuando la producción se recuperó a fines de 1922, también la agitación obrera se apaciguó. Además Saavedra descubrió que el naciente movimiento obrero, aunque por fin creó sus primeras federaciones nacionales y declaró su primera huelga general, era demasiado débil para apuntalar su régimen. La clase media baja, beneficiándose por primera vez de la legislación social moderada, apoyó a Saavedra; pero con su acusada personalidad era inevitable que los liberales y los republicanos genuinos unieran sus fuerzas para oponerse al régimen, por lo que cada vez le fue más difícil gobernar.

La creciente pérdida del apoyo de la élite tradicional llevó a Saavedra a practicar reacciones más bien tradicionales. Después de sus primeras exploraciones con los obreros y la clase media baja, regresó los mercados de capital privado extranjeros en busca de fondos para impulsar proyectos de desarrollo importantes, la fuente de popularidad de los gobiernos que le habían precedido. Negoció un préstamo bancario privado de 33 millones de dólares en Nueva York para los ferrocarriles, obras públicas y el financiamiento del Banco de la Nación: eran las preocupaciones clásicas de liberales y conservadores antes que él. Pero el servicio de la deuda pública boliviana ya era alta y las condiciones del préstamo, que incluían el control directo de Estados Unidos del sistema fiscal boliviano, resultaron absolutamente inaceptables para la mayoría de los bolivianos. Está fuera de duda que los negociadores bolivianos fueron realmente sobornados y que, a pesar de la excelente reputación crediticia del país, éste había sido obligado a pagar unos intereses muy al-

tos. La oposición al préstamo llamado "Nicolaus" fue instantánea y activa.

Por si no fueran pocos los problemas, Saavedra quiso zanjar a la manera autoritaria de Montes el gran debate sobre las concesiones petrolíferas de la región oriental boliviana. En 1920 los republicanos habían abierto las zonas de reserva a los extranjeros, una vez que los empresarios bolivianos demostraron ser incapaces de desarrollar los pozos productivos. En 1920 y 1921 empresarios estadounidenses obtuvieron concesiones; pero estas pequeñas compañías no eran más que testaferros de la gran Standard Oil Company, de Nueva Jersey, a la que el gobierno permitió en 1921 comprar aquellas concesiones, añadirle otras nuevas y crear la 'Standard Oil Company of Bolivia". Dado el trato privilegiado concedido a la Standard Oil y la intensa oposición de la élite a Saavedra, resultaba inevitable que se produjeran incidentes.

Así, a los antiguos temas de la corrupción, el favoritismo y el despotismo presidencial, Salamanca y sus partidarios más conservadores añadieron otro totalmente nuevo: el del nacionalismo económico. En Bolivia la oposición a la explotación de los recursos naturales por las compañías extranjeras comenzó prácticamente con la primera concesión petrolífera. Mientras que nadie había chistado contra las compañías mineras, la Guggenheim y otras estadounidenses que participaban activamente en la economía, el petróleo fue tema especial y los ataques contra la Standard Oil pasó a integrar la retórica tanto de la derecha tradicional como de los nacientes movimientos de izquierda de Bolivia.

Al llegar al final de su presidencia Saavedra intentó desesperadamente de apaciguar todas las facciones. Por un lado ayudó a los mineros a aplastar la huelga de Uncía de 1923, asesinando indiscriminadamente a obreros y familiares. Por otro, a fines de 1923 llevó a cabo una revisión de peso de la estructura fiscal minera, logrando duplicar los impuestos gubernamentales a la producción de estaño. Llevado por la rabia, Patiño sacó de Bolivia las oficinas centrales de su compañía minera, instalándolas en Estados Unidos, registrando la "Patiño Mines and Enterprises" en el estado de Delaware; pero por otra parte prestó al gobierno 600.000 libras esterlinas para la construcción de ferrocarriles, a cambio de la garantía que le dio Saavedra de no elevar los impuestos de nuevo en el plazo de cinco años.

Saavedra no podría cumplir tales promesas y a pesar de todos los esfuerzos hechos para imponer su sucesor o incluso prorrogar su presidencia, tuvo que ceder el poder al candidato de su

propio partido, Hernando Siles, a quien se oponía. La presidencia de Siles fue de activa evolución política y una incesante fragmentación de los partidos tradicionales. Enfrentado al control de Saavedra sobre el Partido Republicano, Siles creó su propio Partido Nacionalista; apoyó el movimiento de reforma universitaria (novedad de importancia) y en 1928 los estudiantes radicales crearon la primera Federación Universitaria Boliviana (FUB). Tanto los socialistas como la FUB, aunque todavía no pasaban de pequeños grupos intelectuales, ahora proponían transformaciones radicales de la sociedad, abogando por la reforma agraria y el fin del feudalismo rural; urgían a la socialización de los recursos naturales y al cambio de la definición de la propiedad privada, prestando apoyo decidido al naciente movimiento obrero.

Al tiempo que el escenario político evolucionaba hacia un marco más complejo de ideologías de luchas de clases, el económico comenzó a degradarse en una medida alarmante. En el período de 1926 – 1929 el gobierno tuvo que enfrentar unos déficits presupuestarios cada vez mayores y dificultades crecientes para satisfacer sus obligaciones crediticias internacionales. Y esto sucedía precisamente en el momento en que el precio del estaño en el mercado internacional había traspasado su cima y empezaba el ciclo de contracción que lo llevaría a la catástrofe de la Gran Depresión. Para hacer frente a la crisis, cuya magnitud todavía se ignoraba, el gobierno recurrió tanto a las medidas tradicionales como a algunas otras muy radicales. En 1927 y 1928 se obtuvieron nuevos préstamos bancarios privados de los Estados Unidos, con el respaldo de impuestos creados especialmente para tal fin. Aquel mismo año el gobierno aprobó las reformas propuestas por la Misión Kemerer, de Estados Unidos; entre ellas, por fin se creó el Banco Central, de control gubernamental, que había de encargarse de inspeccionar todos los aspectos del abastecimiento monetario del país. Además, la llamarada fugaz en las disputas fronterizas del Chaco con el Paraguay, a fines de 1928, también afianzaba los negros presagios de conflictos más duros, dando a Siles la excusa para declarar el estado de sitio para tener a raya a sus enemigos internos. El incidente fronterizo fue sangriento, obligando a Siles a llamar a los reservistas y a ordenar represalias; pero no deseaba una guerra en regla, por lo que negoció a comienzos de 1929 una conciliación con los paraguayos.

La erupción de patriotismo, la implantación del estado de sitio y las reformas política y económica realizadas por Siles apenas tuvieron efecto en la política nacional. Siles demostró ser

un político demasiado cortado en los moldes clásicos para permitir el libre juego de las fuerzas democráticas. Su régimen unió a liberales, republicanos genuinos y saavedristas en un frente ocasional. Entretanto, el deterioro en los precios internacionales del estaño se iba haciendo sentir. En 1929 Bolivia alcanzó la máxima producción de todos los tiempos, con 47.000 Tm. de estaño exportado, aunque a un precio inferior al de las primeras décadas del siglo. Mientras que en 1927 la tonelada se cotizaba a 917 dólares, en 1929 había bajado a 794 dólares, para desplomarse a sólo 385 dólares en 1932. Al bajar los precios del estaño, también lo hicieron las rentas públicas, que procedían básicamente de los impuestos a la exportación del estaño. En 1929 el 37% del presupuesto fiscal se destinaba al pago de la deuda pública; otro 20% al gasto militar; quedaba, pues, muy poco para las necesidades mismas del gobierno (mucho menos para obras públicas o el bienestar nacional).

Justificando sus acciones, como sus predecesores, en la crisis nacional, Siles trató de perpetuarse en el cargo más allá del período constitucional. A mediados de 1930 anunció sus planes oficiales de prorrogar su presidencia mediante la elección parlamentaria para otro período. Acto seguido confió el gobierno a una Junta Militar que supervisara su reelección. Pero la oposición a la maniobra fue universal. Por primera vez en la política nacional los estudiantes universitarios hicieron sentir su poder protagonizando importantes disturbios contra el gobierno. El ejército respondió amotinándose; la Junta se vio obligada a huir. En pleno desarrollo de los desórdenes, incluso se produjo la invasión de radicales marxistas por la población fronteriza meridional de Villazón, quienes intentaban provocar un levantamiento obrero-campesino, iniciativa que no dejó de encontrar cierto eco en el movimiento obrero urbano. Todo acabó en la caída de Siles y de sus partidarios y en la primera manifestación auténticamente exitosa de una actividad política más radical en el frente político nacional. Aunque las fuerzas más tradicionales y conservadoras acabarían beneficiándose de la revuelta de 1930, ésta fue sin embargo la primera ruptura de la ideología política unificada de la oligarquía blanca, que acabaría erosionando sus postulados tradicionales básicos.

Después del motín popular de 1930 se creó una alianza multipartidista; Daniel Salamanca surgió al fin como candidato presidencial de la coalición. Político de hechura clásica, Salamanca todavía sintonizaba menos con las nuevas tendencias de los frentes estudiantil y obrero que Saavedra o Siles; era un latifundista cochabambino, orador parlamentario famoso y, por lo

demás, un liberal sumamente destemplado e inflexible de estilo decimonónico. Su único programa inmediato era el gobierno moral y las elecciones libres, consignas vacías que su propio autor se cuidaría de violar con la misma rapidez que sus antecesores.

Pero en 1930 comenzaba a cojear el gobierno republicano oligárquico basado en la participación restringida, que habían implantado los conservadores en los años ochenta. La Gran Depresión se ensañaba con una gravedad sin antecedentes en la economía abierta de Bolivia. Los precios cayeron en picado, siguió la producción y acabaron haciéndolo los ingresos fiscales. Al propio tiempo los acuerdos del servicio de la deuda prácticamente aniquilaron la capacidad del gobierno para crear nuevos impuestos no hipotecados o para encontrar fondos para sus necesidades más elementales. También empezó a sentirse el sutil, pero ahora ya claramente importante traspaso de la ideología política de las clases gobernantes. La reforma universitaria había introducido el pensamiento marxista en los hogares de la élite blanca por primera vez en la política nacional. Los movimientos obreros comenzaron a atraer la atención nacional mediante su actividad cada vez más intensa huelguística, que provocaba la intervención militar en las minas y al enfrentamiento abierto. Incluso el campesinado indio hizo sentir una inquietud desacostumbrada, con dos levantamientos masivos: el primero en Jesús de Machaca en 1921 y el segundo en Chayanta en 1927.

La depresión aliviaría de muchas formas al gobierno de Salamanca. El despido masivo de obreros obligó a muchos mineros a volver al campo, mientras que la depresión se tragaba la mayor parte de las ganancias conseguidas, por el movimiento obrero organizado. Los indios volvieron a una mayor pasividad cuando se acabó la gran expansión de la hacienda con el fin de la fuerte inversión de capital en las fincas rurales. Pero no desaparecería la juventud universitaria; por el contrario, el creciente impacto de la depresión dio lugar a una nueva conciencia a la que Salamanca no podía responder, fuera del miedo cerval y la represión. Comparado con el radicalismo de otros países sudamericanos, el boliviano permaneció débil y relativamente primitivo, con una o dos generaciones de atraso respecto de los países fronterizos; pero la terca negativa de Salamanca y de sus partidarios a prestar oídos a estas ideas, en contra de lo que habían hecho los republicanos en los años veinte, significó que los grupos radicales y reformistas marginales se vieron obligados a un enfrentamiento todavía más violento con el sistema político tra-

dicional. Sin embargo estos grupos no eran todavía más que un pequeño sector de la sociedad elitista y nunca se habrían convertido en la amenaza que fueron si Bolivia no hubiera sufrido el mayor desastre militar de su historia bajo la presidencia de Salamanca. La Guerra del Chaco sería la fuerza destructora crucial que acabaría destruyendo el sistema tradicional de 1880 – 1932.

Enfrentando un panorama económico internacional cada vez más negro, la Junta provisional trató de soldar a todos los partidos de oposición en un frente unido; lo lograron para el período que transcurrió entre la caída de Siles, en junio de 1930, y junio del año siguiente. Todos los partidos decidieron presentarse por su cuenta a las elecciones parlamentarias, pero apoyaron una sola fórmula presidencial presidida por Salamanca. Pero la crisis económica cada vez más grave empezaba a dejarse sentir profundamente en el país, provocando algunos realineamientos fundamentales, a los que Salamanca se mostraría relativamente indiferente.

Los precios del estaño habían iniciado su baja en 1927; en 1929 también comenzaron a aumentar las existencias no vendidas, que todavía contribuyeron a deprimir más los precios. Por entonces Bolivia y los otros tres productores de estaño (Nigeria, Malaya e Indonesia) aportaban cerca del 80% de la producción mundial. De los cuatro, Bolivia producía el mineral de la ley más baja, con unos costos más altos de transporte y era, por tanto, el productor más caro. Fue el primero, pues, que sintió la sacudida; por otra parte, también le resultó imposible lograr que los demás productores disminuyeran voluntariamente su producción, pues los precios vigentes, aunque ya eran ruinosos para los bolivianos, todavía resultaban rentables para los demás. En julio de 1929 y bajo la presión de Patiño, se creó una Asociación de Productores de Estaño voluntaria, con la participación de las compañías privadas que operaban en los cuatro centros productivos principales. Acordó restringir la producción, que las tres compañías bolivianas mayores llevaron prestamente a la práctica a fines de 1929 y comienzos de 1930; pero las compañías no bolivianas no siguieron el ejemplo, por lo que a mediados de 1930 la estrategia voluntaria se consideró fracasada.

Con unas condiciones de mercado libre intolerables y sin poder conseguir restricciones voluntarias, los productores decidieron, a fines de 1930, ejercer la medida drástica de exigir la intervención estatal en el programa de control de la producción. Fue éste un cambio importante e imprevisto con respecto a la actitud beligerante de los mineros privados contra todo tipo de inter-

vención gubernamental en la empresa privada. Por primera vez el gobierno boliviano no sólo gozaría del privilegio de cobrar impuestos mínimos, sino de asignar y controlar las cuotas de producción, novedad que en las próximas décadas llevaría al control absoluto de la comercialización en el exterior. Se trataba, evidentemente, de una medida desesperada, con la que grandes productores esperaban conservar el control directo de las decisiones gubernamentales que les afectaban; pero simultáneamente hizo posible la primera intervención realmente significativa del gobierno en los asuntos mineros. Además, aunque habría acuerdos de principio sobre las cuotas, los planes de producción tan restringidos para todas las empresas significaron que cualquiera de ellas podían aumentar fácil y rápidamente la producción si un decreto del gobierno modificaba sus cuotas de mercado. Esto provocó especiales tensiones entre los tres barones del estaño, haciendo que sus rencillas de competencia llegaran a las antesalas del gobierno. Los grandes mineros ahora habían de prestar mucha mayor atención directa al escenario político local que antes, comenzando a apoyar a diferentes sectores de la misma élite.

Como sólo habían tres países principales involucrados (Bolivia, Holanda y Gran Bretaña), se vio que se podía establecer con éxito un sistema de cuotas obligatorias: a comienzos de 1931 se puso en vigencia el Programa de Control Internacional del Estaño. El 1º de marzo de 1931, pocos días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno de Salamanca, entraban en vigor las nuevas cuotas, con lo que la producción boliviana sufrió una drástica reducción, provocando una crisis económica masiva en el país. Aunque el programa de restricción de la producción acabó rebajando las existencias mundiales de estaño no vendido y estabilizando su precio, habría que esperar a 1933 para que la producción boliviana recuperara lentamente incluso sus niveles moderados de producción.

Todas estas variaciones internacionales, con el impacto que resultaba para la economía local, fueron seguidas de cerca por la élite boliviana. El gobierno de la Junta probó suerte con los programas de obras públicas y dio pleno respaldo a todos los planes de producción de Patiño. También redujo los gastos presupuestarios a su mínimo; asimismo prestó seria atención a los diferentes proyectos de recuperación nacional que se ensayaban en otras partes del mundo. Entre todos los grupos que intervenían en este debate sobre la economía nacional, los liberales hicieron las propuestas más concretas. Aunque su enfoque era ortodoxo, planteaban una seria intervención gubernamental. Salamanca,

en cambio, parecía haber olvidado todo el problema. Preguntado sin cesar por sus ideas económicas, siempre replicó con evasivas sobre la necesidad de un gobierno moral. Tales ideas confusas podían haber resultado bellas en un momento de crecimiento, con un orden social estable; en aquel momento carecían de sentido. El resultado fue que los republicanos genuinos sufrieron una derrota en las elecciones parlamentarias de 1931, entrando los liberales con mayoría absoluta en el nuevo Congreso. De pronto el rígido Salamanca se encontró enfrentando a un Congreso hostil que no controlaba, con una economía que comprendía mal y con una sociedad en grave malestar a la que no podía ofrecer soluciones.

Casi inmediatamente después de entrar a la presidencia, Salamanca se dedicó a enajenar la mayoría de los principales sectores sociales. Mientras que la Junta había proseguido fundamentalmente la política de Saavedra y Siles de un reformismo moderado, con un interés grande por el bienestar en un momento de crisis económica, Salamanca volvería a la ortodoxia más rígida del pasado: así perdería el apoyo de los partidos elitistas tradicionales haciendo de su gobierno un beligerante, a pesar del apoyo de todos los partidos que lo había llevado a la presidencia.

Su primer gabinete fue exclusivamente republicano genuino, a pesar de la mayoría liberal en el Congreso y de las voces en favor de un gobierno de conciliación. Luego anunció ante un público boquiabierto que el problema principal del país no era la crisis económica, sino el radicalismo y el comunismo. Aunque el pensamiento radical y comunista, y los grupos de esta tendencia, habían por fin echado raíces en la vida nacional durante los años veinte, no pasaban todavía de una minoría marginal, incluso entre la juventud universitaria y el movimiento obrero. Esta obsesión por la amenaza "roja" era algo totalmente nuevo en un político tradicional. Además Salamanca dio un giro de 180 grados en la política del gobierno de una actitud moderada neutral ante los obreros a otra de abierta hostilidad. Salamanca no sólo se opuso a una huelga nacional del sindicato de telegrafistas, sino que lo disolvió; otra huelga general popular de la federación obrera paceña también fue reprimida con violencia, apresando a sus dirigentes. Luego el gobierno anunció el pago de los funcionarios gubernamentales con vales, a causa del déficit presupuestario; y a fines de julio Salamanca puso de manifiesto que Bolivia dejaba de pagar su deuda externa.

Así, apenas con un mes en el gobierno, Salamanca se había enajenado todos los partidos tradicionales (pero sobre todo a los

liberales) con sus ataques partidistas y sus medidas económicas extremas, que la mayoría consideraba innecesarias; también se enajenó a los movimientos estudiantil, obrero y radical. Además, a pesar de su extremoso atrincheramiento en los servicios normales de gobierno. Salamanca proponía el programa más ambicioso y costoso de penetración militar al Chaco que nunca se hubiera propuesto un presidente boliviano. Como inmensas zonas chaqueñas permanecían todavía inexploradas y desocupadas tanto por bolivianos como por paraguayos, esta nueva actitud más agresiva que Salamanca proponía a las fuerzas bolivianas significaba un cambio de monta en la política nacional, de una posición básicamente defensiva a otra fundamentalmente ofensiva. A medida que la situación económica y política se hicieron más tensas Salamanca dedicó más atención a la cuestión fronteriza del Chaco, que consideraba fácilmente solucionable con claros presupuestos morales, mientras que la situación económica se hacía cada vez más compleja y aparentemente insoluble.

El 1º de julio de 1931 Salamanca aprovechó un típico incidente fronterizo para romper relaciones con el Paraguay, iniciativa que muchos consideraron claramente agresiva. Luego, en su discurso presidencial de agosto, anunciaba la disminución ininterrumpida de las rentas gubernamentales, a pesar de todo el apoyo dado al Programa estañífero y de otras medidas proindustriales; subrayó que se habían restringido prácticamente todos los servicios del gobierno, aunque acto seguido hacía conocer la ampliación del presupuesto militar. También planteó una clara política de supresión absoluta de la actividad sindical o huelguística de la clase obrera del país.

Vemos pues, que Salamanca al tiempo que definía unas posiciones más bien extremas, se cerraba todas sus opciones políticas. Esta tensa situación habría podido prolongarse indefinidamente si Salamanca no hubiera impreso a su gobierno una dirección todavía más provocadora frente a los opositores liberales. En junio Salamanca nombró ministro de finanzas a Demetrio Canelas, jefe partidista de Oruro; Canelas abandonó la política conservadora de los meses anteriores y presionó al presidente para que adoptara medidas económicas más radicales para combatir la crisis: su primera propuesta fue adoptar una solución monetaria inflacionaria a imitación de muchos otros países del mundo; quería que Bolivia abandonara el patrón oro implantara el papel moneda no convertible y aumentara el circulante. Los liberales en un principio se opusieron a esta revolución, particularmente porque controlaban el Banco Central y e

Congreso; pero más adelante se vieron forzados a aceptarla cuando en septiembre la propia Gran Bretaña anunció que también iba a abandonar el patrón oro. Bolivia, que formaba parte del bloque de la libra esterlina, estaba obligada a imitarla; Canelas impuso sus reformas. Pero los precios se dispararon inmediatamente, con lo que la posición del gobierno se hizo muy impopular. Los liberales reaccionaron presionando de nuevo al gobierno y tras una serie de agresivas interpelaciones ministeriales, obligaron al gobierno a entrar en razones. Las condiciones impuestas incluían un pacto oficial bipartidista y un acuerdo que daba a los liberales el poder de veto de todas las decisiones económicas.

Derrotado en sus iniciativas y en la independencia en el campo económico, Salamanca intentó entonces de llevar a cabo sus ideas sobre un gobierno autoritario. Alegando la amenaza comunista, que no parecían compartir muchos otros dirigentes de los partidos tradicionales, a fines de 1931 propuso un proyecto de ley de "defensa social". Se trataba de una ley que otorgaba poderes extraordinarios al presidente para enfrentar la oposición política de la izquierda y el movimiento obrero. La reacción fue nutrida y en enero de 1932 las manifestaciones obreras de los pequeños partidos izquierdistas y de los estudiantes y saavedristas, todas ellas masivas, forzaron la retirada del proyecto en el Congreso. Al mismo tiempo Salamanca intentó una vez más desembarazarse de la oposición liberal en el frente económico: ante la previsión de que las rentas públicas cubrirían sólo la mitad de los gastos básicos proyectados, propuso flotar un préstamo internacional. Los liberales rechazaron la idea, obteniendo no sólo la salida del odiado Canelas del ministerio de finanzas, sino que obligaron por fin, en marzo de 1932, a Salamanca a aceptar tres ministros liberales en su gabinete.

Salamanca ahora dependía por completo de los liberales para todas las decisiones básicas en materia económica; también debía hacer frente a una creciente oposición radical, que en buena medida se había creado con sus iniciativas antihuelguísticas y de "defensa social". Por este camino cada vez se fue amargando más con el escenario político nacional. Pero su impotencia en el frente nacional no se compensaba con el internacional, por lo que durante 1932 fue volcando sus energías al Chaco. Era una cuestión que podría dominar, pues confiaba en que el país le seguiría adondequiera lo llevara y en que los liberales y radicales no podrían enturbiarle este campo de acción.

Financió sistemáticamente el ejército, a costa de cualquier otro sector de gobierno; lo impulsó a un programa de explora-

ción y poblamiento cada vez más amplio en el Chaco. Las intenciones de Bolivia fueron tan claramente agresivas, que en los primeros meses de aquel año los radicales comenzaron a abogar por el fin de los aprestos bélicos; pero en esta cuestión los radicales y estudiantes se apartaron de los partidos más tradicionales. Los saavedristas, que ahora habían adoptado el nombre de Partido Republicano Socialista y se habían unido a la izquierda en contra de la Ley de Defensa Social, apoyaron plenamente la aventura de Salamanca en el Chaco, mientras que los liberales también dieron su apoyo total al potenciamiento del ejército.

Así Salamanca contó con el sólido apoyo tradicional, decidiendo llevarlo hasta el límite absoluto. En mayo y junio la coincidencia de dos divisiones del ejército dio lugar a un típico incidente de poca importancia por causa de un abrevadero en el Chaco. Las tropas bolivianas expulsaron a una fuerza paraguaya ya atrincherada; más adelante, alegando que no existía tal fuerte paraguayo, el ejército boliviano se negó a abandonar la nueva posición y dio comienzo al refuerzo rápido y de envergadura de la zona, para rechazar el esperado contraataque de los paraguayos. A fines de junio sobrevino la esperada reacción, que fue rechazada por los bolivianos. Hasta este momento el incidente y no se diferenciaba de docenas de otros; las tropas que habían intervenido eran muy pocas y el conflicto, absolutamente restringido. El procedimiento consagrado era entrar en negociaciones oficiales; pero esta vez Salamanca decidió prescindir de los antecedentes y lanzarse a la guerra; a fines de julio había empezado el conflicto armado total.

Tal decisión estaba íntimamente relacionada con sus frustraciones en la política interna y con su idea de que la creciente crisis económica desembocaría en la anarquía social. El hecho de que en mayo el Programa de Control Internacional del Estaño aprobara la medida radical de prohibir toda la producción del mineral para los meses de julio y agosto y de reducir después la producción a un tercio de la de 1929, significaba que exactamente en el momento en que Salamanca tomaba sus decisiones se proponían las reducciones más extremadas en el ritmo de la industria minera del estaño. Como reacción a la clausura de dos meses y a la situación comercial sumamente desequilibrada que resultaba de aquélla, el gobierno se vio obligado a hacerse con todo el control de todas las operaciones en oro de sus ciudadanos, obligando asimismo a los mineros a entregar el 65% de sus cobros en divisas al Banco Central. Está fuera de duda que esta paralización tan extrema de la economía exporta-

dora nacional fue de importancia crucial para las decisiones que tomó el gobierno en las semanas siguientes.

De toda la documentación publicada desde la guerra también queda fuera de duda que Salamanca y el gobierno boliviano aprovecharon deliberadamente un típico incidente fronterizo para provocar una escalada hacia una guerra total, para sorpresa incluso de los paraguayos. Asimismo es evidente que al tomar las decisiones definitivas, Salamanca —en contra del parecer escrito de su Estado Mayor— forzó el conflicto contra todo arreglo pacífico y hacia la que sería la guerra más costosa de Bolivia en su historia republicana.

Pero en la opinión popular se aceptó casi inmediatamente que la Guerra del Chaco fue resultado del conflicto fundamental por los yacimientos petrolíferos entre la "Standard Oil", de Nueva Jersey, que apoyaba las pretensiones bolivianas, y la "Royal Dutch Shell", instalada en el Paraguay. Sin duda, hacia el fin de este largo y sangriento conflicto, cuando las tropas paraguayas victoriosas se acercaban al borde de la región chaqueña y de las estribaciones andinas, el petróleo se convirtió en un interés importante de sus objetivos de guerra; pero hasta fines de 1934 la guerra tuvo su escenario a centenares de kilómetros de los yacimientos más cercanos; por otra parte, después de la guerra se puso en claro que la "Standard Oil" de Nueva Jersey había vendido ilegalmente petróleo boliviano a Argentina y, a través de ella, al Paraguay, al tiempo que afirmaba no poder producir nada para Bolivia de estos mismos yacimientos. Hay que buscar más bien la causa de la guerra en el complejo conflicto político interno boliviano y en las tensiones causadas por la Gran Depresión en un sistema político frágil; su prolongación sólo se puede entender dentro del apoyo argentino a las pretensiones paraguayas. La habilidad argentina para impedir las iniciativas de paz hasta el fin, juntamente con los ininterrumpidos éxitos paraguayos, significaron que, una vez provocada, Bolivia tenía pocas posibilidades de detener la carnicería.

El que el tiempo haya permitido descubrir como causas de la guerra unos factores diferentes de los que se afirmaban en aquellos momentos, en realidad no quita importancia a la creencia general de que la Guerra del Chaco era un conflicto petrolífero. Decisiones políticas y económicas fundamentales durante la postguerra, como la confiscación de la "Standard Oil" en 1937 y la creación de una compañía monopolista estatal petrolífera, fueron el resultado directo de aquella creencia. Por lo demás, buena parte de la amargura del escenario político de post — guerra era efecto de este conflicto.

Pero las consecuencias del conflicto fueron más importantes que sus causas. En efecto, la Guerra del Chaco destruyó el sistema político que había funcionado en Bolivia desde 1880. El final de la guerra trajo aparejado el derrumbe tanto del gobierno civil como de los partidos políticos tradicionales. Ideas que hasta entonces sólo habían circulado entre un pequeño grupo de intelectuales radicales, ahora se convirtieron en patrimonio común de la gran mayoría de la juventud políticamente conciente y de los excombatientes. Este cambio fue tan revelador que en adelante se hablará de la "generación del Chaco" para referirse a los grupos que llegaron a la mayoría de edad durante la guerra. La cuestión india, la cuestión obrera, la cuestión agraria y la dependencia económica de los mineros privados fueron los nuevos temas del debate nacional, en lugar de las antiguas cuestiones del gobierno civil, las elecciones limpias y la construcción de ferrocarriles. Estos debates llevaron a la creación de nuevos partidos y movimientos revolucionarios en la segunda mitad de los años treinta y en los cuarenta; por fin, a la Revolución Nacional de 1952.

La Guerra del Chaco también marcó un viraje en la historia económica del país. La Gran Depresión y el conflicto subsiguiente del Chaco pusieron fin a la expansión e incluso a la capitalización de la industria minera. A partir de ella la producción y la productividad comenzaron a declinar, en una industria que prácticamente no conoció ningún cambio en su estructura o perfiles de inversión hasta 1952. También en las zonas rurales el relativo estancamiento de la economía nacional acabó con la expansión de la gran hacienda, que se había producido de los años ochenta del siglo XIX a los años veinte del siglo XX. Al final de este período los peones sin tierra probablemente habían duplicado y el número de indios comunarios ahora era muy inferior al de campesinos sin tierra. Así pues, en el período de 1880 — 1932 se había producido una reestructuración fundamental de la economía rural; pero aquel proceso había terminado antes de destruir por completo las comunidades, causando interminables conflictos durante la postguerra, cuando las haciendas se pusieron a la defensiva.

Todo el crecimiento resultante de la gran expansión del estaño apenas repercutió en la modernización del conjunto de la sociedad: se calculó que todavía hacia 1940 más de dos tercios de los bolivianos vivían fundamentalmente al margen de la economía de mercado; y todavía en 1950 el número de artesanos igualaba en la economía nacional al de los fabriles. Aunque dos tercios de la población activa se dedicaba a la agricultura, Boli-

vía seguía siendo un importador neto de víveres (entre los que figuraban tubérculos andinos tradicionales). Así, mientras que el auge del estaño afectó al tercio del país urbano y de habla castellana, sus efectos multiplicadores apenas afectaron a la población rural, con la excepción acaso de la pérdida de su nivel de vida como resultado de la concomitante expansión del sistema latifundista.

Bolivia ingresó a la Guerra del Chaco con una economía en gran medida tradicional, subdesarrollada y dominada por la exportación y salió de ella con las mismas características; pero de ser una de las sociedades menos movilizadas de América Latina, pasó a ser más avanzada que muchos de sus vecinos por lo que se refiere a la ideología radical y a la organización sindical: la guerra arrasó los sistemas tradicionales de creencias e impulsó a repensar radicalmente el carácter de la sociedad boliviana. El resultado de este cambio en el pensamiento de la élite amplia fue la creación de un movimiento político revolucionario que abarcó algunas de las ideas más radicales que habían de surgir en el continente. La guerra también crearía el clima para el desarrollo de uno de los movimientos obreros más poderosos, independientes y radicales de América. Vista desde estas perspectivas, la Guerra del Chaco, como lo había sido antes la del Pacífico, resultaría ser uno de los puntos de viraje de importancia en el proceso histórico boliviano.

CAPITULO VII

LA DISOLUCION DEL ORDEN ESTABLECIDO: 1932 — 1952

La Guerra del Chaco comenzó el 18 de julio, al anunciar Salamanca al país sobrecogido que las fuerzas paraguayas se habían apoderado de un fortín boliviano del Chaco. Por entonces se ignoró tranquilamente que este fortín era, en realidad, paraguayo y que a fines de mayo había sido capturado por los bolivianos. Salamanca dio órdenes para una ofensiva en toda la línea aquella misma noche, declarando el estado de sitio dentro de la misma Bolivia. En aquel momento el Estado Mayor se negó a refrendar los planes bélicos de Salamanca: alegó que el ejército no estaba preparado para un asalto de envergadura; por otro lado consideraba que la escalada del conflicto no guardaba proporción con el incidente. Fue tan intenso el debate entre el Estado Mayor y el presidente que, al fin, Salamanca se vio obligado a reconocer su plena responsabilidad en todas sus decisiones tocantes al comienzo de la conflagración en un documento escrito formal. Habiéndose, así, inhibido de toda responsabilidad por el asalto y acciones subsiguientes, el Estado Mayor acabó aceptando sus órdenes, objetando oficialmente que resultaba suicida y contra los intereses nacionales, pero aceptando cumplir las decisiones presidenciales.

Que la aventura de Salamanca fue afortunada lo puso de manifiesto el apoyo inmediato que le brindó todo el espectro político nacional. A pesar de las protestas paraguaya e internacional contra la legitimidad de las pretensiones bolivianas, los dirigentes políticos e intelectuales sostuvieron la posición de Bolivia, afirmando que el Paraguay era el que creaba la situación bélica. Hubo manifiestos de apoyo firmados desde Alcides Arguedas, a la derecha, hasta Franz Tamayo y Carlos Montenegro, a la izquierda. Hubo también grandes manifestaciones callejeras en todos los centros urbanos del país, al olvidarse por el momento la crisis económica. Para asegurarse la unanimidad el gobierno recurrió al estado de sitio, reduciendo a los radicales sindicales y políticos, encarcelando o exiliando a hombres tales como Ricardo Anaya, José Aguirre Gainsborg y Porfirio Díaz Machicao, entre otros. Los izquierdistas no encarcelados ni exiliados fueron inmediatamente llamados a filas y enviados a las líneas de combate. Así, de un solo plumazo parecía que Salamanca hubiera erradicado la izquierda que tanto le aterraba durante sus meses de gobierno. Pero esta euforia nacionalista fue efímera. Fue el propio Salamanca, el gobernante boliviano moderno más temeroso de la revolución radical y el enemigo más constante de la naciente izquierda radical y de los movimientos sindicales, la principal causa de la conformación de una poderosa tradición revolucionaria en la política nacional. Pues fue la conducta de Salamanca y de sus partidarios políticos de llevar el país a la guerra, la que destruiría todo el edificio de la política tradicional.

A pesar de la movilización de Bolivia y los masivos movimientos de tropas, los paraguayos seguían creyendo que se trataba de un típico incidente fronterizo. Después de reconquistar el fortín en julio volvieron a Washington, esperando proseguir las negociaciones para un tratado de no agresión. Pero Salamanca se negó a dar el brazo a torcer, capturando otros tres fortines importantes de indiscutida propiedad paraguaya. Estos tres fortines (Boquerón, Corrales y Toledo) resultaban vitales para la línea de defensa paraguaya. Su captura por Bolivia exigió una respuesta de envergadura, que el Estado Mayor boliviano había reconocido como inevitable y que conducía sólo a la guerra total. Pero el quijotesco Salamanca pensaba que con un arranque ya había destruido toda la capacidad de iniciativa paraguaya, por lo que decretó suspender las operaciones militares a comienzos de agosto. Entonces volvieron a reproducirse los agrios debates entre los generales y Salamanca sobre lo que se deducía realmente de los primeros enfrentamientos de las tropas, sobre

la culpa de la movilización y sobre las últimas metas bélicas de los bolivianos.

El lenguaje de acusación y recriminación era tan violento como en los momentos peores, indicando con claridad un extremado pesimismo sobre el conjunto de la empresa, que parecía presuponer una derrota final y desastrosa para las armas bolivianas. Y todo ello ocurría en el primer mes de la guerra, antes de que Bolivia hubiera perdido una sola batalla de importancia.

A partir de este comienzo la guerra se fue deteriorando rápidamente en una inacabable derrota, corrompida y sangrienta, y un desastre para Bolivia. Dándose cuenta de que Salamanca se proponía conservar indefinidamente sus fortines y, al mismo tiempo, se negaba a negociar, los paraguayos decretaron la movilización general y lanzaron una contraofensiva en regla. En septiembre el avance boliviano se había detenido por completo y comenzaba la famosa batalla de Boquerón. Unos 600 soldados bolivianos fueron cercados con éxito por las tropas paraguayas en su antiguo fortín. Con sólo 1.500 soldados en todo el frente chaqueño los bolivianos no podían hacer nada contra el asedio.

A fines del mes los bolivianos se vieron forzados a rendirse, llegando la noticia en los primeros días de octubre a un país traumatizado.

Los efectos de la pérdida de Boquerón fueron inmediatos y rotundos.

La opinión pública letrada boliviana ya era víctima de sordos rumores que hablaban de duplicidad boliviana, quedaba perpleja por el uso político que Salamanca estaba haciendo de la guerra y cada vez se sentía más molesta por la tensa situación social producida por el comienzo del alistamiento militar que se hizo sentir en todos los sectores de la sociedad. Así, pues, las noticias de la derrota de Boquerón produjeron importantes desórdenes públicos. El 4 de octubre 20.000 manifestantes antigubernamentales exigieron la renuncia de Salamanca y la vuelta del general alemán Hans Kundt, que los republicanos de Salamanca habían destituido en 1930. Cuatro días más tarde también el congreso solicitó oficialmente la vuelta de Kundt para dirigir las tropas, como si este gesto devolviera de alguna forma la presunta capacidad de hazañas a la máquina bélica boliviana. Por su parte, los militares ya estaban hartos de la dirección del presidente civil, exigiendo dos oficiales importantes del frente —David Toro y Carlos Quintanilla— su renuncia. Aunque al fin se puso fin a la rebelión, se acabó el poder omnipotente de Salamanca, que en su nueva forma sólo había resistido cuatro

meses; el presidente acorralado se vio obligado a recurrir de nuevo a los liberales para formar un gobierno de coalición.

Pero antes de que se pudiera conformar este gobierno de coalición caía otro fortín boliviano. En la segunda mitad de octubre los paraguayos no sólo habían reconquistado todos sus fortines, sino que habían llevado la ofensiva al territorio boliviano, aislando y —por fin— apoderándose del fortín boliviano de Arze. La derrota de Arze fue una derrota total de las fuerzas bolivianas; su resultado fue el derrumbamiento del gobierno y de las negociaciones interpartidistas. Los liberales y los republicanos opositores atacaron a Salamanca, quien a su vez fomentó la violencia popular contra sus periódicos. En noviembre también prohibió todos los sindicatos y federaciones; pero en diciembre se le habían acabado los recursos; tuvo que llamar de Europa al general Kundt para que se hiciera cargo del mando total y efectivo del ejército, con lo que reducía su propio control de los militares a la condición de consejero civil.

Aunque Kundt era un excelente organizador y reconstruyó con rapidez el maltrecho ejército boliviano, su capacidad estratégica y táctica era más bien pobre. Tras haber puesto en pie una fuerza poderosa, luego en seis meses se dedicó a destruirla en un asalto temerario contra la fortaleza inexpugnable de Nanawa. La campaña de Nanawa se prolongó desde enero hasta julio de 1933; los paraguayos no sólo conservaron ese fortín, sino que prácticamente aniquilaron a las fuerzas atacantes, dedicándose luego a flanquear a los bolivianos en otras zonas, infligiéndoles una nueva serie de derrotas. A mediados de 1932 los paraguayos no sólo iban destruyendo división tras división, sino que llevaban a cabo tremendas incursiones territoriales en el sector boliviano del Chaco. Hacia fines de aquel año Kundt fue relevado de sus funciones haciéndose cargo del mando del ejército el general Enrique Peñaranda, a quien acompañaba David Toro como consejero. Pero el relevo sólo profundizó el pesimismo nacional. Bajo Kundt se habían movilizado a 77.000 hombres, de los que 14.000 murieron en la batalla, 10.000 cayeron prisioneros, 6.000 desertaron y 32.000 fueron evacuados a causa de enfermedades o heridas. Quedaban, pues, sólo 7.000 hombres en el frente, con otros 8.000 en servicios auxiliares de retaguardia, resto despreciable y desmoralizado de un ejército en otro tiempo poderoso y bien equipado.

Bajo Peñaranda se organizó un tercer ejército de unos 55.000 hombres y durante seis meses sobrevino un cierto empate de fuerzas. Pero en agosto de 1934 el famoso jefe paraguayo Estigarribia encontró, por fin, el punto flaco en las defensas bolivia-

nas, rompiendo la línea del Chaco boliviano. A partir de ese momento los paraguayos realizaron una arremetida loca hacia las estribaciones andinas, convirtiéndose la guerra en lucha abierta por el petróleo, por estar los paraguayos finalmente a una distancia increíble de los yacimientos bolivianos. En los cuatro meses que transcurrieron de agosto a noviembre los paraguayos capturaron más territorio del que nunca hubiera pretendido en sus exigencias más extremadas anteriores a la guerra.

A fines de noviembre Salamanca había fabricado la elección de su leal partidario Franz Tamayo, dedicándose a realizar sus últimas actuaciones en el cargo destruyendo la oposición militar a su persona. Concretamente, viajó al Chaco para obligar a Peñaranda y Toro a devolverle el comando del ejército. Pero lo que sucedió fue que el 25 de noviembre de 1934 el ejército arrestó a Salamanca en el cuartel de Villa Montes obligándole a dimitir. Después el gobierno fue entregado al vicepresidente y jefe liberal Tejada Sorzano.

Las consecuencias inmediatas de esta rebelión militar fueron extremadamente favorables para el esfuerzo bélico boliviano. Tejada Sorzano era al mismo tiempo un excelente administrador y un político capaz.

Organizó rápidamente un gobierno con participación de todos los partidos, que incluso dio paso a los salamanquistas, consiguió que el barón del estaño, Aramayo, se hiciera cargo de la cartera de Finanzas y luego apoyó sin reservas el comando del ejército. Las finanzas bélicas bolivianas fueron grandemente reforzadas, se puso fin a los conflictos internos del frente doméstico (cesando incluso de hostigar a la extrema izquierda) y se creó un frente unido. Del lado militar, por fin Bolivia se encontraba ahora cerca de sus propias líneas de abastecimiento, luchando en terrenos bien conocidos y enfrentando a un enemigo que ahora había extendido peligrosamente más la mano que la manga y se encontraba con un grave déficit de financiamiento.

Pero a largo plazo el golpe militar significó un viraje fundamental en la política nacional. El concepto de mando civil ahora quedaba roto, aunque pocos se dieron cuenta de ello por entonces, en su odio por Salamanca y respiro por su retirada. Pero una vez que le encontraron el gusto al poder y encontraron en él una justificación para la defensa de su honor militar —tan quebrantado a causa de las acciones de guerra— los coroneles y generales demostraron haberse imbuido por completo de la idea de una constante intervención en los asuntos de gobierno y de la necesidad del control militar sobre la escena política nacional. Así, el golpe de noviembre de 1934 señaló el fin del período de

política civil y el comienzo del fin del sistema tradicional de partidos.

Con la caída de Salamanca la guerra poco a poco fue llegando a su paralización. Los paraguayos invadieron los departamentos de Tarija y Santa Cruz e incluso se apoderaron de algunos de los campos petrolíferos a comienzos de 1935. Pero sin tener Villa Montes este avance no se podía mantener, produciéndose una gran batalla por esta plaza fuerte boliviana meridional. Por entonces surgió el jefe militar más eficaz de Bolivia, el mayor Germán Busch, quien se hizo cargo de la planificación de la defensa de la zona del comando sur. No sólo derrotó a los paraguayos en Villa Montes, sino que pudo llevar a cabo una contraofensiva de envergadura que hizo retroceder, a los paraguayos, de, Tarija y Santa Cruz, reconquistando todos los centros petrolíferos anteriormente perdidos.

Llegados a este punto, ambos bandos se declararon dispuestos a la paz. Los recursos paraguayos estaban casi completamente agotados y la derrota en Villa Montes significaba que nunca podrían apoderarse de la región de las estribaciones andinas. Por otra parte, resultaba evidente que si proseguía la guerra podían llegar a perder sus inmensas ganancias del Chaco, pues los nuevos jefes militares del lado boliviano parecían haber reavivado las capacidades militares de Bolivia. Para los bolivianos ya era una victoria suficiente recapturar todos los territorios no chaqueños. Aunque el gobierno, a diferencia de los paraguayos, gozaba de buen financiamiento gracias a la industria minera boyante y hubiera podido proseguir la guerra durante cierto tiempo, todo el país anhelaba la paz. La amargura de los años de Salamanca y la creencia general de que la guerra había sido luchada en favor de la Standard Oil y se debía sobre todo a la iniciativa de Bolivia, había dado lugar a una hostilidad al conflicto endémico. En mayo de 1935 se organizó una conferencia de paz en Buenos Aires y el 14 de junio de aquel año se firmó un tratado de paz.

Así, casi exactamente mes por mes, terminaban tres años del conflicto más amargo de la historia de Bolivia. Aunque ésta perdió más territorio valioso en su guerra contra Chile del siglo XIX, por entonces los combates habían sido mínimos y el impacto sobre la población, también escaso. En cambio, en la Guerra del Chaco las pérdidas eran fenomenales. Más de 65.000 muertos, desertores o fallecidos en el cautiverio; es decir, aproximadamente un 25% de los combatientes del lado boliviano. Estas pérdidas, sobre una población de sólo alrededor de dos millones

de habitantes, se parecían a las de las naciones europeas en la I guerra mundial.

Además, la guerra había dejado muy maltrecha la validez de las instituciones nacionales. El ejército mismo se había organizado según las castas. Los blancos eran los oficiales; los cholos, los suboficiales y los campesinos indios, la tropa. El único grupo que rompía estas barreras eran los obreros y radicales capturados por Salamanca y enviados a la línea de fuego. Así pues, en el frente seguía funcionando el sistema de castas de la sociedad nacional, lo que provocó un profundo abismo entre el comando y la tropa y contribuyó a fomentar todavía más la patente corrupción de los oficiales blancos. Para los pocos blancos que estuvieron en la línea de fuego la experiencia fue amarga, radicalizándolos en muchos casos frente al problema de las barreras raciales de su sociedad. Para los indios la guerra significó la continuación de los esquemas ya familiares de explotación. Muchos soldados desertaron y hubo, incluso, varios amotinamientos de importancia en el frente. Pero cuando la guerra terminó, los soldados aymaras y kechuas, desesperados por regresar a sus hogares, volvieron a sus parcelas y se reintegraron a sus comunidades con la máxima rapidez posible.

Pero para los cholos y blancos civiles la cosa fue diferente. Muchos de estos individuos, anteriormente militantes, se encontraron totalmente marginados del sistema tradicional. Se habían espantado de la corrupción e incompetencia del alto mando; los había traumatizado el rumor de la duplicidad boliviana en la guerra. Para esta juventud de la que se conocería como "generación del Chaco" su sacrificio había sido inútil. Volvieron de la guerra amargados del comando militar que los había llevado al desastre; se sentían frustrados con el sistema político que había provocado todo el caos del Chaco.

El primer escape de este sentido de amargura y frustración fue la proliferación de novelas sociales realistas que se produjo desde los primeros meses de guerra y siguió predominando en la literatura nacional hasta entrada la década siguiente. Las novelas proletarias amargas se convirtieron en el género del Chaco; en una novela tras otra, la crueldad de la guerra, el derroche de vidas, el hambre y la sed, la incompetencia, la traición y la cobardía de la casta de oficiales se convirtieron en temas comunes.

La novela del Chaco no surgió como ave fénix de las cenizas de la derrota del Chaco, sino que tenía sus raíces en las novelas realistas y amargas de la generación de 1880. En la cima de la paz y euforia liberales, durante los primeros decenios del siglo, escritores como Armando Chirveches, Alcides Arguedas y Jaime

Mendoza habían publicado novelas con temas de corrupción política de la política elitista y de explotación y opresión de los mineros y campesinos indios. Por otra parte, esta generación no exploró solamente estos temas clasistas, pues Adela Zamudio se ocupó —tanto en poesía como en cuentos— de los problemas de la discriminación sexual. Levantándose sobre esta tradición, los escritores del Chaco pudieron expresarse a sí mismos en un idioma que la élite letrada ya venía apreciando. La novela del Chaco le traía una experiencia íntima del desastre chaqueño. Igual que cualquier otra forma de ideología política o propaganda revolucionaria, el realismo de la novela de Guerra del Chaco produjo un impacto profundo en la juventud y en los intelectuales, que constituían el núcleo del pensamiento elitista.

A pesar de reflejar la realidad, las novelas del Chaco ofrecían pocos remedios para curar las causas del desastre nacional. Pero los novelistas no fueron las únicas voces que se levantaron en amarga protesta. El desastre creó también un nuevo movimiento político radical vital, con una hueste de ideas desafiantes para la élite nacional. Aunque Salamanca había hecho cuanto había podido para destruir el movimiento, la guerra misma que él había provocado para justificar su represión se encargó de dar a la izquierda una importante función. La izquierda radical anterior a la guerra mantuvo un frente notablemente activo antibélico y de propaganda contra la sociedad tradicional; este frente demostró tener tanto éxito que pudo apoyar las deserciones de soldados y llegar a ser en la época postbélica una fuerza ideológica de primera magnitud.

Esta reinterpretación radical de la realidad boliviana incluía un ataque fundamental al consenso racista de la sociedad boliviana y al carácter oligárquico de su vida política y económica. Atacaba a la guerra como el resultado directo de la compañías transnacionales (concretamente, de la Standard Oil, de New Jersey). Se pensaba que reflejaba la agonía del viejo orden que, para defenderse, se veía obligado a llevar a la nación a un conflicto internacional. Para este grupo de pensadores radicales, la ideología indigenista y marxista del peruano Mariátegui servía de catapulta fundamental para reanalizar la sociedad boliviana. Según esta concepción de la realidad andina, el problema del indio era, en realidad, un problema de explotación y de tierra; los españoles y sus descendientes habían despojado a los indios de sus tierras y tratado de destruir su cultura para explotarlos; la pasividad y atraso de los indios, en realidad se debía exclusivamente a su explotación; la única vía para romper esta explota-

ción era la destrucción de las haciendas y devolver las tierras a sus trabajadores indios.

Los radicales, entre los que el exponente más destacado durante el período del Chaco fue Tristán Marof, también dedicaron su atención al tema de la economía exportadora. El desarrollo nacional no se podía producir mientras no se explotara en su totalidad los frutos de la riqueza nacional. Pero esto no se podría realizar mientras los mineros privados controlaran la principal fuente de riqueza nacional, que era el estaño y demás minerales. Estos barones del estaño sacaban al extranjero todas sus ganancias de las minas o las mantenían al margen de la promoción de la economía nacional. Por tanto, el estado había de hacerse cargo directamente de las minas para disponer dentro del país de las ganancias creadas por la minería, empleándolas en el desarrollo de la nación.

Con igual énfasis subrayaban el carácter torcido del estado nacional. Sostenían que el mismo estado estaba en manos de la rosca (término peyorativo para designar al grupo de los políticos y abogados que administraba el estado en favor de mineros y hacendados). Afirmaban que los regímenes oligárquicos no democráticos que gobernaban Bolivia existían por necesidad, pues era la única forma de que los mandarines económicos explotaran la nación boliviana. Si bien Marof y otros ofrecían soluciones diferentes, todos hablaban de alianzas entre los obreros, mineros y campesinos indios, cuya meta final sería:"tierras al indio; minas al estado".

Toda esta propaganda izquierdista daría las líneas fundamentales para poner en marcha una completa reinterpretación de la sociedad boliviana. Aunque en un comienzo eran pocos los que aceptaban todos los argumentos propuestos por la izquierda radical, el enunciado de los problemas esenciales de la sociedad nacional dispuso el entramado en el que tendría lugar todo el debate futuro. El tema de la nacionalización de las minas quedó ahora firmemente asentado en la conciencia política de los blancos y mestizos; incluso el tema del indio y de sus justas aspiraciones se aceptaba ahora como legítimo. Que estos temas encontraron eco favorable se puede ver en la evolución de la política postbélica; también lo demuestra un cambio sutil en el carácter de los levantamientos indios de después de la guerra: después de la Guerra del Chaco las rebeliones indias cada vez fueron menos guerras clásicas de castas y cada vez más movimientos de protesta social, en los que la cuestión fundamental eran los derechos de todos los indios.

La creciente conciencia de clase por parte de los campesinos indios estuvo acompañada de un compromiso marxista más radical tanto entre los dirigentes sindicales como de los jóvenes radicales. Fue tan intensa la actividad de los comités de desertores y de los grupos antibélicos, que desde su exilio argentino muchos de tales movimientos acabaron constituyéndose en movimientos políticos más permanentes. Así, en 1934 y durante un congreso especial celebrado en Córdoba, nacía el primero de los principales partidos radicales de postguerra, el Partido Obrero Revolucionario (bajo la dirección de Tristán Marof y de José Aguirre Gainsborg). Aunque estaba compuesto de un pequeño grupo de exiliados radicales, fue un momento histórico en el desarrollo de la izquierda boliviana, pues era el primer partido que creaba la generación del Chaco y en la décadas siguientes constituiría la vanguardia del movimiento revolucionario.

Aunque el POR era todavía un pequeño grupo de intelectuales radicales y pronto sería presa de discrepancias internas a causa del trotskismo, su impacto ideológico fue impresionante. Lo debía a Salamanca y a los dirigentes que habían dado comienzo a la guerra y llevado al país a tres años de amargo conflicto. La profunda derrota de las armas bolivianas, a pesar de su superioridad en combatientes, riqueza y recursos, fue un trauma para la mayoría de las personas alfabetizadas; pero todavía fue peor la tan publicitada corrupción e incompetencia de la oficialidad, que llevaba a la destrucción general de tropas a causa de la inanición, de la muerte y de la captura. Por fin, no hubo boliviano— incluso antes del fin de la guerra— que no conociera la causa de la guerra y del papel jugado por Salamanca en provocarla para salvar su gobierno. En resumen, el público alfabetizado se sentía amargado, frustrado y enfurecido por toda la guerra. Sorprendentemente, era pequeño el odio contra los paraguayos; pero todos los bolivianos demostraban gran hostilidad contra sus propios gobernantes. Este público era el que al fin de la guerra exigía una rendición de cuentas a todos los que habían llevado a aquella derrota. Y al no producirse tal rendición de cuentas, buscaron cambiar radicalmente el orden social, económico y —sobre todo— político de la sociedad en que vivían.

Con la firma de la paz en junio de 1935 todas las tensiones políticas se disolvieron en el práctico derrumbe de los acuerdos entre los partidos tradicionales. Mientras que el ejército había pedido a Tejada Sorzano que prolongara su período presidencial hasta el acuerdo de una paz definitiva, los partidos antiguos se opusieron a la maniobra y los republicanos saavedristas ofrecieron su propia combinación, confiando en volver a gobernar.

Pero a las antiguas agrupaciones de los republicanos, liberales y un pequeño grupo de nacionalistas en torno a Siles, ahora venía a añadirse una larga fila de nuevos partidos, creados todos ellos en la época de paz. Empuñaban una abigarrada lista de nombres y símbolos exóticos; pero los que representaban fundamentalmente eran la juventud y los veteranos de guerra, que en otro tiempo habían sido piezas claves de apoyo de los partidos más antiguos. De repente el término "tradicional" se convirtió en epíteto para todos los partidos oligárquicos anteriores a la guerra y quienes habían apoyado oficialmente el antiguo orden ahora tomaban como moneda corriente cualquier cosa, desde la ideología corporativista italiana hasta la indigenista o marxista. Acusando al recientemente fallecido Salamanca de todos los males de la guerra, los liberales y republicanos creyeron seguir adelante como antes; pero tal esperanza se hizo añicos, pues había desaparecido la base del consenso en el que los partidos antiguos habían construido su poder.

Al tiempo que surgían nuevos movimientos, uno de los excombatientes amargados se hizo presente como poderosa fuerza política y que exigían cuentas claras por la derrota; un movimiento obrero recuperado también exigía sus derechos fundamentales; por fin, un vigoroso cuerpo de oficiales insistía en la protección de su casta amenazada. Estos tres principales grupos de poder temían y se oponían a una vuelta a la política tradicional. Los propios partidos ya no podían movilizar el apoyo elitista popular para combatir a sus oponentes, pues este apoyo ahora se encontraba fraccionado en una multitud de nuevas agrupaciones reformistas, fascistas y radicales. Mientras que los liberales se mantuvieron firmes en sus posiciones clásicas y dieron su pleno respaldo a Tejada Sorzano, el antiguo Partido Nacionalista de Siles — el más reformista de las antiguas agrupaciones— se resquebrajó en una convención nacional celebrada en octubre y fue oficialmente disuelto, desapareciendo así todo lazo formal entre la nueva izquierda y los obreros y los políticos tradicionales. Los republicanos de Saavedra anunciaron un programa "socialista" aproximadamente por el mismo tiempo, cambiando incluso su nombre por el de Partido Republicano Socialista; pero este cambio supuso poca novedad socialista para el grupo, que fue ignorado por las fuerzas de postguerra.

Después del tratado de paz el hábil gobierno de Tejada Sorzano trató de apaciguar a todos estos movimientos nuevos. Apoyó oficialmente a los excombatientes y a sus impulsos organizativos. En octubre dio comienzo a un proceso judicial contra la Standard Oil, que acabaría conduciendo a su confiscación. A fi-

nal de año aceptaba las demandas generales de una convención constituyente; por su propia cuenta incluso propuso la creación de nuevos ministerios de bienestar y de trabajo, que iniciaran la legislación de reforma social. Pero ninguno de tales gestos pareció satisfacer a los grupos reformistas.

Así, la caída del gobierno parecía inevitable. Una organización sindical reanimada, vinculada a un mercado de trabajo restringido en una economía postbélica en auge, dio por fin el aglutinante para derrocar al régimen. Encontrando un poderoso apoyo nacional, incluso desde el gobierno, los radicales sindicalistas que habían vuelto, lograron reorganizar la totalidad de las antiguas confederaciones provinciales. Enfrentados a una aguda inflación que ahora azotaba el país, la rabiosa exigencia de ajustes salariales arrasó con los nuevos grupos. En mayo de 1936, encabezada por el sindicato de gráficos, estallaba una huelga general. El movimiento fue tan vigoroso que Tejada Sorzano, temiendo la violencia revolucionaria, devolvió la política a los cuarteles, declarando el Estado Mayor su neutralidad y, por tanto, su apoyo implícito. La huelga general fue un éxito total; los huelguistas incluso se hicieron cargo por un tiempo de los poderes policiales en las ciudades. Exigiendo aumentos salariales del 100%, la huelga se declaró indefinida. La evidente debilidad del gobierno central ante esta masiva demostración sindical sólo fue la excusa que necesitaba el impaciente grupo de oficiales para madurar sus planes: el 17 de mayo de 1936 ponía fin al antiguo orden, cuando los coroneles David Toro y Germán Busch llevaban a cabo su golpe de estado y se apoderaban del gobierno.

El golpe militar de 1936 había de inaugurar una época de gobiernos a cargo de la joven oficialidad de la Guerra del Chaco. Fue también un período en el que los militares reflejarían las divisiones de la vida política nacional en su conjunto, pasando de la moderación al radicalismo, para volver a lo conservador y tradicional cuando las propias fuerzas políticas nacionales se realinearon. Para los jóvenes coroneles que ahora habían de tomar las riendas del gobierno durante los próximos doce años su intervención estaba motivada por una combinación de identificación con la "generación del Chaco" y sus exigencias reformistas, y del claro temor a una represalia. Las exigencias de los excombatientes y del Congreso para que se instalaran tribunales de crímenes de guerra fueron uno de los factores decisivos que estaba detrás de la propia decisión del ejército de intervenir para defender a su casta.

En un principio los coroneles se unieron para que los dirigiera el siempre activo David Toro, dejando a Germán Busch que dirigiera entre bambalinas. De una forma muy parecida a Saavedra en su olfato por captar las cambiantes corrientes nacionales, Toro se daba cuenta del talante de la nación, reaccionando ante él con la declaración de que su gobierno sería de "socialismo militar". Tan inculto políticamente acerca del marxismo como Saavedra al rebautizar a su partido como Republicano Socialista, con su "socialismo militar", Toro quería indicar fundamentalmente una administración populista y reformista a cargo de la oficialidad militar que ahora vivía una nueva conciencia, que de alguna forma ahora había de resarcirse de los desastres del Chaco llevando al país una nueva justicia social.

Inmediatamente Toro quiso congraciarse al movimiento obrero creando un nuevo ministerio de trabajo, nuevo en la historia boliviana, y nombrando como su titular al dirigente del radical sindicato de los gráficos. Mientras éste hacía entrar al gobierno un corrillo de marxistas y anarcosindicalistas, la mayoría de los grupos civiles vinculados al nuevo régimen estaban más estrechamente ligados a una posición fascista modificada.

El grupo que articuló con mayor claridad la ideología "nacionalsocialista" fue el pequeño Partido Socialista, creado pocos meses antes del golpe de Toro. Sus mejores representantes eran ideólogos tales como Carlos Montenegro y Augusto Céspedes, decisivos ambos en la formación de los posteriores partidos nacionalistas de movimiento de masas. Durante los primeros meses del nuevo régimen este grupo comenzó a publicar *La Calle*, que se convirtió en el órgano de propaganda fascista alemana, con una posición violenta antisemítica. El hecho de que uno de los tres barones del estaño, Hochschild, fuera judío, les ofreció en bandeja a los nacionalistas la ocasión de atacar simultáneamente a los mineros y de vociferar su tesis de una conspiración internacional. Los socialistas nacionales tenían suficiente influencia como para en un momento dado hacer que Toro propusiera un modelo corporativista formal de legislatura nacional y una sindicalización forzosa bajo el control del estado. Pero los radicales del ministerio de trabajo no se dejaron enternecer por tales propuestas y, al tiempo que apoyaban las necesidades organizativas del movimiento obrero, exigían que el gobierno dejara el control sindical en manos de los obreros. Su oposición y la posición personal fundamentalmente indiferente

de Toro bastaron para que no se hablara más de aquellos planes.

Mientras que las nuevas agrupaciones políticas radicales y los partidos tradicionales no dejaron de maniobrar para obtener el control de la dirección del gobierno de Toro, los oficiales inquietos se desilusionaron de todas las discusiones, debates y falta de unanimidad que observaban en los civiles. El período más bien creativo de fermentación política acabó abruptamente a fines de junio cuando Busch anunció el fin de la alianza civil — militar, exilió al perturbador Saavedra y formó un régimen exclusivamente militar. Toro, sin poder, tuvo que aceptar estas decisiones y durante los pocos meses siguientes gobernó con el propósito tanto de complacer a Busch y a los oficiales jóvenes, como de llevar a cabo algunas reformas moderadas que ganaran para su régimen el apoyo nacional y popular.

Todo este fermento político y, especialmente, ideológico había dado lugar a la intranquilidad no sólo entre los ingenuos oficiales, sino también en la élite tradicional. No pudiendo los liberales conservar el poder, habiendo caído en desgracia los republicanos de Salamanca y coqueteando las fuerzas de Saavedra con los nuevos movimientos radicales, la oligarquía se sintió llamada a reorganizar sus defensas formales. En mayo el minero del estaño Carlos Aramayo fundaba un nuevo partido centrista, que se convirtió en una organización de defensa descarada de clase. Obteniendo en un principio el apoyo de la Asociación de Industriales Mineros, acabaría desapareciendo como fuerza de consideración. Pero su misma creación anunciaba a los antiguos partidos que no se toleraría su momentáneo desbaratamiento ante la fermentación postbélica. Constituía una clara aseveración oligárquica de que la política, tal como se la practicaba dentro de los viejos moldes, carecía de una suficiente orientación clasista y del apartamiento de la función fundamental que en adelante habrían de cumplir tales partidos. Si bien los movimientos radicales se encontraban todavía en su estadio reformista y relativamente ineficaz, era evidente su capacidad amenazante. Y los mineros deseaban una reacción más contundente a esta amenaza potencial. La meta de los centristas era obligar a los partidos tradicionales a olvidar sus viejas rencillas, uniéndose en un grupo partidario de una coherente coalición de clase. Este sería el propósito de la élite minera de 1936 a 1952, al tratar de reconstruir la antigua estabilidad por medio de maniobras legales o extralegales. El hecho de que el Partido Centrista desapareciera rápidamente de la escena política y de que entablaran conversaciones los liberales y varias tendencias

republicanas, significaba que los partidos tradicionales habían aprendido la lección.

Para satisfacer las conflictivas demandas con que se encontraba enfrentado, Toro trató —según su estilo acostumbrado— de llegar a compromisos con todas las facciones. Apaciguó a la extrema derecha sacando a los radicales del ministerio de trabajo; respondió a los grupos reformistas proponiendo una convención constituyente que redactara una nueva constitución que formulara las necesidades de reforma del país. Pero todos estos enjuagues no dejaron de poner muy nerviosos a Busch y a su grupúsculo de jóvenes oficiales; en los primeros días de 1937 Busch ofrecía su dimisión como un voto de confianza en el régimen de Toro. En la práctica, se trataba del anuncio oficial de un golpe inminente.

En respuesta a la amenaza de Busch, Toro trató de forjar una encrucijada popular que le proporcionara el apoyo tan desesperadamente requerido. Al cabo de sólo diez días del pronunciamiento de Busch, agilizó el proceso legal contra la Standard Oil y el 13 de marzo de 1937 anunciaba la confiscación oficial de la misma en Bolivia. Todas sus posesiones, equipo y material pasaban automáticamente al monopolio estatal recién creado: Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia. Y todo ello sin ninguna indemnización. Fue una acción histórica, nacional e internacionalmente. Se trataba de la primera confiscación de una transnacional estadounidense en América Latina, adelantándose en más de un año a las grandes confiscaciones mexicanas. Al mismo tiempo lanzaba al gobierno directamente al mercado, convirtiéndolo en un importante productor de productos básicos. Con tal decisión el gobierno boliviano rompía conscientemente con su posición más tradicional de *laissez — faire*, comenzando a tomar un papel activo y positivo en la economía. Podemos ver antecedentes de ello en la existencia de bancos de rescates de minerales en el siglo XIX y en la función activa del estado como efecto de los Convenios del Estaño en la década de los treinta del siglo XX. Pero aquel paso sólo sería el comienzo de una tendencia clara, que en los años cincuenta pondría alrededor de la mitad del Producto Nacional Bruto bajo el control de las corporaciones estatales.

Inmediatamente Toro dio comienzo a los preparativos para organizar un Partido Socialista del Estado; incluso llegó a recibir cierto apoyo de principio de parte de la Confederación Nacional Sindical, de reciente fundación. Pero toda esta actividad febril no logró calmar la creciente sospecha de Busch de que Toro no merecía confianza y su convicción de que él ahora había lo-

grado suficiente experiencia administrativa como para gobernar el país por sí mismo y con el apoyo de la oficialidad joven.

A comienzos de junio, después de 15 meses de la actividad política más caótica pero viva en la historia boliviana, cayó el régimen de Toro, al anunciar Busch que había dejado de tener el apoyo del ejército. Dada la amplia popularidad de que gozaba el régimen reformista de Toro, la mayoría de los observadores creyeron que el desconocido Busch realizaría la restauración del gobierno tradicional de partidos, bajo un control minero más fuerte. Pero en realidad el régimen de Busch resultaría ser una prolongación del período de reforma y de reconstrucción partidaria de la era de Toro.

Aunque en sus actuaciones iniciales parecía que Busch estaba fuertemente interesado en revivir un gobierno civil de coalición basado en los partidos tradicionales, en realidad lo contrario fue lo que sucedió. A pesar de sus reiteradas promesas de apoyar la vuelta de poder, Busch se negó a conceder a los viejos partidos una participación en el gobierno. Al mismo tiempo siguió promulgando leyes nuevas de carácter reformista y aun radical, lo que impulsó a los nuevos partidos reformistas y revolucionarios. Ningún partido asociaría al régimen, con lo que prosiguió en su totalidad la actividad de los nuevos partidos, que a fines de la década llevaría a la consolidación de nuevos partidos reformistas nacionales poderosos. Por su parte, los partidos tradicionales comprobaron que su fracaso en entrar al gobierno o hacerse oír en un parlamento normal significó cuatro años amargos de erosión, al punto de que hacia 1940 no eran más que unos esqueletos de su antigua existencia.

Debe enfatizarse que las reformas propugnadas y llevadas a la práctica por Toro y Busch no pasaban de propuestas relativamente suaves de bienestar y prosindicalistas, sin implicar una profunda reorientación de los recursos nacionales ni la confiscación de la propiedad privada (con la única excepción de la Standard Oil). En realidad, el ejército gozaba —si acaso— de mayores privilegios en los años de Toro y Busch que durante la misma Guerra del Chaco. Aunque ahora estaba reducido a un cuerpo de 5.000 hombres permanentes, los militares seguían absorbiendo en 1937 el 32% del presupuesto nacional. Además, cuanto más Busch iba hacia la izquierda, los generales dirigentes de la antigua oficialidad iban más hacia la derecha; el nombramiento de Carlos Quintanilla como jefe de estado mayor implicaba una evidente pérdida de poder por parte de la oficialidad joven radical.

Si bien los cambios reales bajo Toro y Busch fueron relativamente lentos y progresivos en lugar de rápidos, estructurales y radicales, el período del socialismo militar puso los cimientos para un cambio de mayor alcance. Esto tuvo su mejor expresión en la nueva constituyente de 1938. Hasta la decisión de Toro de convocar una constituyente, Bolivia se había gobernado por la constitución de 1880. Era ésta una constitución de estilo típicamente liberal del siglo XIX. A fin de cuentas, se trataba de un régimen constitucional relativamente limitado, en el que los derechos de los individuos quedaban protegidos de la intervención estatal y en el que los poderes del gobierno central estaban limitados estrictamente.

Esta tendencia a limitar la intervención gubernamental cambió en América Latina con la constitución mexicana de 1917. Los jefes revolucionarios de México y los reformistas radicales de todo el continente exigían ahora que el estado desempeñara un papel activo en la protección, el bienestar y la distribución de la riqueza, reduciendo a su vez los derechos inalienables del individuo. Conocida con el nombre de "constitucionalismo social", esta tendencia predominó pronto en el pensamiento político de los teóricos radicales latinoamericanos, quienes trataban por entonces de crear esquemas de cambio radical y de dar legitimidad constitucional a las innovaciones.

En todos los debates del período inmediatamente posterior a la guerra se hace evidente este tipo de cambio de la teoría constitucional, convirtiéndose en un importante denominador común de las nuevas fuerzas políticas que se hacían presentes en la generación de la Guerra del Chaco. En las elecciones para la constituyente de mayo de 1938 el régimen de Busch acabó apoyando a los grupos nuevos favorecidos por Toro, permitiendo incluso que el movimiento de excombatientes y la federación central obrera presentaran sus propias candidaturas. Esto y la situación debilitada de los partidos más antiguos relativamente desorganizados hicieron que la constituyente de 1938 tuviera una composición sumamente radical.

El resultado fue que la constitución de 1880 quedó derogada, cambiando su orientación fundamental de acuerdo con el nuevo perfil del constitucionalismo social. Los debates sobre los nuevos preceptos también se convirtieron en una forma nacional y legitimadora de difundir la ideología más radical que existía por entonces en el país. Aunque la convención acabó rechazando las propuestas más radicales de la reforma agraria, la aceptación del *ayllu* y la nacionalización de las minas, la constitución aprobada limitaba gravemente los derechos de propiedad. Esta

ya no se consideraba más un derecho inalienable de los individuos, sino un derecho social cuya definitiva legitimidad se había de definir por su utilidad social. Al propio tiempo el estado quedaba responsabilizado del bienestar económico del individuo, de la protección de la mujer, de los menores y de la familia, y de dar una educación libre y universal. El objetivo fundamental de la constituyente en todos estos artículos fue atribuir al estado la plena responsabilidad de la salud, educación y bienestar de todos sus ciudadanos. El gobierno clásico liberal de *laissez-faire*, con una intervención mínima, fue sustituido por el concepto socialista de un estado activo que interviene en todas la zonas de la vida privada del ciudadano, para preocuparse por el bien común.

Pero este tipo de reformismo activo dejó a Busch más aturdido. Situándose cada vez más hacia la izquierda, parecía incapaz de definir su propia posición política, precisamente en el momento en que los partidos izquierdistas e incluso los tradicionales estaban definiendo claramente sus respectivas posiciones durante el período de postguerra. Para los moderados y radicales la constituyente ofreció un foro tanto para la educación ideológica como para la creación de agrupaciones políticas coherentes. Al mismo tiempo la derecha también reorganizaba sus fuerzas. Los liberales se desprendieron de su ala más reformista, poniendo al frente de su partido a Alcides Arguedas, un intelectual liberal más bien reaccionario, opuesto a todas la reformas de la Guerra del Chaco. Luego, la muerte de Saavedra en marzo de 1938 puso fin a la vida del último de los grandes caudillos anteriores a la guerra, impulsando la reunión de todos los partidos republicanos en un solo frente unido. Casi inmediatamente a la noticia de su muerte se concluyeron una serie de acuerdos entre los partidos tradicionales, llamados la "concordancia". Aunque en el futuro se prescindiría de tiempo en tiempo de este acuerdo, fue otro paso hacia el fin de la política tradicional independiente, con lo que a partir de entonces los partidos prebélicos actuarían más o menos como una agrupación coherente de defensa clasista, tratando de resistir a la avalancha de los nuevos movimientos.

Pero ninguno de estos cambios satisfizo a Busch; ni siquiera pudo avenirse a captar las reformas de la constitución de 1938. A pesar de la relativa calma política en la escena nacional, de la coherencia de las nuevas tendencias y del consenso relativamente amplio de que gozaban, creyó que los debates nacionales no conducían a ninguna parte. En abril de 1939 anunció que a partir de entonces su gobierno actuaría como dictadura. En vir-

tud de tal decisión se prohibía funcionar a todos los partidos políticos, quedaban en suspenso las elecciones parlamentarias y la constitución de 1938.

Surgió entonces una prolífica legislación del régimen de Busch: leyes y códigos, de los que la mayoría se ocupaban de la moralidad del gobierno. Pero entre estos decretos más bien tradicionales e ingenuos en mayo de 1939 se promulgó un nuevo Código del Trabajo. Aunque gestado en las reformas propuestas por el ministro del trabajo en tiempo de Toro, el que por fin se promulgara un código del trabajo moderno fue una pieza importante de la legislación nacional, considerándose el "Código Busch" (así fue llamado) —juntamente con la Constitución de 1938— la pieza más duradera de la actividad gubernamental realizada con Busch.

Busch fue objeto de un ataque encarnizado a cargo de los barones del estaño, contra su dependencia del Banco Central para la entrega de divisas. En 1936 Toro había creado un Banco de Compra de Minerales para ayudar a los mineros pequeños y medianos a regularizar sus ventas de minerales mediante la compra por parte del gobierno. Dato todavía más importante, había exigido a los grandes mineros que entregaran sus ganancias en divisas al Banco Central, recibiendo moneda nacional a una tarifa especial. Manteniendo una tarifa de cambio inferior a la del mercado libre, el gobierno podía cuadruplicar sus ingresos fiscales directos e indirectos procedentes de la industria minera. Busch no sólo defendió en esto la posición de Toro, sino que incluso reforzó las exigencias y rebajó más las tarifas especiales, aumentando así la participación gubernamental en las ganancias mineras hasta un 25% del valor de las exportaciones totales de estaño. Así, mientras que los mineros habían alimentado la esperanza de volver por fin a un mercado libre con Busch, la actuación de éste puso fin definitivamente a tales esperanzas: desde 1936 a 1952 el Banco Central mantuvo, bajo la presión por igual de los regímenes radicales y conservadores, un control absoluto sobre todas las ventas al extranjero del estaño boliviano, manipulando la tarifa de cambio para dar lugar a ingresos fiscales en forma de impuestos indirectos.

Pero a pesar de toda la legislación concreta promulgada por el nuevo régimen, Busch pareció quedar absolutamente insatisfecho del ambiente político. Quedó profundamente molesto por el escándalo de la venta de visas a judíos de Europa, que había que instalar en el Chaco y otras zonas orientales. Sospechó que Hochschild violaba las normas sobre control de divisas, haciéndolo detener; pero al cabo de pocos días tuvo que ponerlo en li-

bertad. Cesó primero de organizar y después disolvió su propio partido gubernamental con el único fin de renegociar los contactos con los partidos tradicionales. Y si bien gobernó por decreto, confiando cambiar milagrosamente el destino de Bolivia (sentimiento que manifestó con frecuencia en público), pronto se dio cuenta también que la mayoría de sus reformas moderadas no tenían un impacto impresionante.

De sus últimos discursos y actuaciones se desprende con evidencia que Busch era un individuo influenciado y sumamente perturbado que parecía absolutamente insatisfecho de todo lo que llevaba a cabo. Se suicidó en agosto de 1939, pasmando al país y dando lugar a un tipo de veneración y apoyo que creyó faltarle en vida. Su suicidio y el cambio inmediato de política tras su muerte hicieron de Busch un verdadero mártir de la izquierda revolucionaria. También llegó a ser creencia popular que los barones del estaño y su rosca de partidarios habían asesinado de alguna forma al gran héroe de la Guerra del Chaco. Aunque la mayoría de los investigadores aceptan los argumentos de un suicidio, la muerte de Busch, como el papel de la Standard Oil en la génesis de la Guerra del Chaco, se convirtió en otro poderoso mito político del arsenal de la izquierda radical y reformista, aumentando legitimidad a sus exigencias de cambio por el recurso a los héroes martirizados.

La muerte de Busch también puso fin a la dirección carismática de la oficialidad del Chaco, permitiendo que la oligarquía conservadora cancelara la experiencia del socialismo militar. Valiéndose de la dirección del general Quintanilla, jefe del ejército en tiempos de Busch, la derecha había logrado desradicalizar el mismo ejército, separando del poder a oficiales radicales claves; así, cuando Busch murió, el ejército estaba plenamente de acuerdo en devolver el gobierno a los partidos tradicionales. Para muchos de los derechistas la muerte de Busch fue la ocasión dorada para eliminar todo el caos y los cambios sucedidos como efecto de la fermentación postbélica.

Pero el período del socialismo militar había sido de cambio tan profundo que resultaba imposible lograr una vuelta a la situación anterior a la guerra. El período 1936 – 1939 había sido de notable crecimiento para la izquierda radical; pero todavía más para la izquierda moderada, inexistente con anterioridad. Fue la época de la educación del sector hispánico de Bolivia en la ideología radical y reformista contemporánea, campaña que incluso afectó a algunos campesinos y cholos. Estimulada a veces por Toro y Busch; marginada y aun perseguida otras veces, la izquierda fue creciendo sin frenos durante estos años de postgue-

rra, particularmente en la clase media: profesionales urbanos, oficinistas, estudiantes universitarios, comerciantes y artesanos alfabetos blancos y cholos. Eran los mismos sectores que antes habían constituido el principal núcleo de apoyo del antiguo sistema político. Sacudidos por los horrores de la Guerra del Chaco, estos grupos —pequeños, pero políticamente importantes— rechazaron la dirección de la clase alta tradicional, volcándose hacia las ideologías reformistas para cambiar el sistema corrupto.

Para la izquierda radical, con anterioridad: un grupo de intelectuales, la guerra y el período de Toro y Busch fue también un tiempo importante de crecimiento. Los grupos vitales de obreros y universitarios, meollo de todos los movimientos radicales izquierdistas de América Latina, consiguieron nuevo poder político, mientras que en el período posterior a 1935 se lanzaban a una posición marxista radical. Además, habiendo penetrado en aquellos grupos, la izquierda radical incluso comenzó a tener audiencia en la clase media.

Toda esta fermentación significó que los partidos tradicionales repentinamente perdieran su base popular de apoyo corriente. La élite económica del país, encontrando a sus aliados tradicionales sin poder y enfrentada a una repentina nueva militancia de la izquierda anteriormente marginal, exigió una defensa de sus intereses de clase y un sistema de coalición de todos los partidos para reforzar la posición tan venida a menos de los liberales y republicanos.

Así, el tiempo del socialismo militar señaló el fin del sistema político tradicional creado después de 1880, viendo el paso de un régimen republicano clásico intraclasista, de participación limitada, a otro basado en la política de clase, mientras se libraba una importante batalla por la participación de las clases inferiores en la vida política nacional. Aunque la izquierda moderada y la radical todavía se encontraban en un período de organización y todavía sólo habían nacido unos pocos partidos estables, la derecha fue incapaz de detener su desarrollo y en el tiempo posterior a Busch, la batalla adquiriría dureza y encono, cuando ambos bandos abandonaron la estructura política civil y echaron mano de la violencia pura y simple para apoyar sus posiciones ideológicas y de clase.

Pero a la muerte de Busch los conservadores creyeron que se podía restaurar la situación sin prescindir del sistema antiguo. Presionaron inmediatamente a Quintanilla para que convocara elecciones libres y se restableciera el gobierno civil. Si bien Quintanilla evidentemente alimentaba sus propias ambiciones

para gobernar, se encontró con una oposición cerrada a que permaneciera en el cargo. Por un lado, los oficiales jóvenes manifestaron su lealtad al general Bilbao Rioja, héroe del Chaco y, aparentemente, partidario leal de la línea Toro – Busch. Por otro lado, los partidos de la "concordancia" exigieron poner fin al gobierno de hecho. Por fin, Quintanilla – al cabo de un mes en el poder– decidió poner en vigencia la Constitución de 1938, llamando luego a elecciones para la presidencia y el congreso en marzo de 1940. Eliminó la amenaza de Bilbao Rioja, que ahora contaba con el apoyo también de la izquierda y de los movimientos de excombatientes, exiliándolo en octubre, con lo que puso fin a la alianza entre la oficialidad del Chaco y los nuevos grupos de izquierda. Parecía que la izquierda carecía de jefe y que la derecha podía alcanzar el poder por la vía tradicional.

Pero las elecciones de 1940 demostrarían sacudir a la élite, poniendo de manifiesto la realidad de los cambios de postguerra. Mientras que la totalidad de los partidos tradicionales estrechó filas en torno al general Peñaranda como candidato oficial a la presidencia y apoyó una lista común de liberales y republicanos para el parlamento, la extrema izquierda comenzó a organizar una campaña sistemática en favor del profesor cochabambino de derecho y sociología, José Antonio Arze. Arze formaba parte de un pequeño grupo de marxistas radicales que no sólo se había opuesto a la Guerra del Chaco, sino que también había combatido al reformismo de Toro, quién lo había exiliado en 1936. En su exilio chileno Arze había organizado una coalición socialista marxista de grupos, llamada Frente de Izquierda Boliviana. Si bien el Frente gozaba de un poderoso apoyo obrero y radical, nunca llegó a organizarse eficazmente en un partido coherente. Sin embargo, Arze y sus partidarios decidieron oponerse a Peñaranda: al volver de su exilio, en febrero de 1940, Arze presentó su candidatura oficial.

Fue notable que Arze pudo obtener 10.000 votos sobre un total de 58.000, a pesar de ser una figura nacional desconocida, sin organización partidaria oficial y prácticamente sin ningún apoyo periodístico. Además, los reformistas (o nacionalistas), que habían constituido un factor tan importante en los regímenes de Toro y Busch, apoyaron en su totalidad a Peñaranda, políticamente neutral y moderado, aislando así a los radicales incluso dentro del grupo de la generación del Chaco. Y a pesar de tales obstáculos Arze fue capaz de convencer a 10.000 votantes del antiguo régimen (blancos y cholos urbanos letrados) de que un programa marxista revolucionario era el único viable en Bolivia. La conmoción de la candidatura de Arze hizo añicos la compla-

cencia de la derecha y acabó con sus esperanzas de volver al sistema anterior a 1932.

Esa complacencia todavía salió peor parada en las elecciones parlamentarias. Los partidos tradicionales vieron confirmados sus peores temores cuando la izquierda, tanto en su ala moderada como en la radical, se apoderó del nuevo congreso, el primer organismo representativo que se reunía después de la guerra.

Así pues, la era de Peñaranda de comienzos de la década de los cuarenta, en lugar de significar la vuelta a las normas anteriores, demostró ser un período importante de definición nacional y de nueva organización política. Siendo en el fondo un político liberal, Peñaranda se preocupó tanto por volver al país al sistema parlamentario tradicional, como por apoyar a las potencias aliadas del gran conflicto mundial que se estaba produciendo en Europa. Con estas dos metas marcó la forma del debate y la posición nacional e internacional ante la que la izquierda podría organizar y definir sus varias posiciones, creando así partidos más coherentes y estables de entre las varias tendencias de pensamiento radical y reformista surgidas en la década anterior.

El grupo particular más importante que surgiría en el nuevo parlamento fue el de los intelectuales de clase media e izquierda moderada, que habían participado en la administración de Toro y Busch y habían sido influidos por la ideología fascista. Estos llamados socialistas nacionalistas habían apoyado la candidatura de Peñaranda a la presidencia, pero veían con malos ojos su creciente inclinación a los Estados Unidos. Esta política aliadófila significó también la conversión de la industria boliviana del estaño en aliada y dependiente de las industrias de guerra estadounidenses, lo que vino a inquietar todavía más a estos nacionalistas económicos. Admiradores de Alemania e Italia en el escenario internacional, los socialistas nacionales perseguían en Bolivia la nacionalización de las industrias básicas, sobre todo de la totalidad de las minas de estaño. Dadas sus posiciones, les interesaba tanto nacional como internacionalmente fomentar un movimiento obrero minero poderoso y radical. Bajo la dirección de Carlos Montenegro, Augusto Céspedes (ambos a cargo, entonces, del diario La Calle) y Víctor Paz Estenssoro (que capitaneaba su ala parlamentaria), comenzó a surgir un nuevo partido en la presidencia de Peñaranda, que acabó llamándose Movimiento Nacionalista Revolucionario.

A la izquierda del MNR nació un partido con los partidarios de Arze en el antiguo FIB. Dirigidos por José A. Arze y Ricardo Anaya, estos intelectuales marxistas crearon oficialmente un partido radical llamado Partido de la Izquierda Revolucionaria,

a mediados de 1940. Abogando por la socialización de los medios de producción y la liberación de los indios, el PIR también adoptó una decidida posición prosoviética en los asuntos internacionales. Aunque no era todavía oficialmente un partido comunista, el PIR simpatizaba enormemente con la causa aliada por la política estalinista del momento.

El MNR y el PIR surgieron, juntamente con el POR trotskista, como los tres partidos de la izquierda que se oponían a la agrupación de partidos tradicionales, que se conocía con el nombre de "concordancia" o Alianza Democrática. Los tres creían en la nacionalización de los medios de producción (en primer lugar, de las minas de estaño). Los tres aspiraban a apoyar el naciente movimiento obrero, particularmente en la minas. Pero más allá de estas coincidencias existían discrepancias fundamentales. Tanto el POR como el PIR fueron mucho más allá que el MNR, hablando del problema indio: exigieron el fin del pongueaje, del colonato y de los latifundios; también exigieron que los campesinos se organizaran aliándose con los obreros y la clase media, para constituir una vanguardia revolucionaria. Frente a esta preocupación por el campesinado indio, el programa del MNR callaba, si no era radicalmente hostil, en lo que se reflejaba sus orígenes de clase media blanca.

En el debate sobre las cuestiones internacionales, que por primera vez comenzó a cobrar importancia en la política interna, el POR se mantuvo indiferente al gran conflicto bélico mundial, pudiéndose concentrar exclusivamente en los problemas bolivianos. En cambio, el MNR y el PIR rápidamente se dividieron: el primero tomó una posición claramente favorable a los regímenes fascistas, mientras que el segundo lo hizo a favor de los aliados. Dado el contexto de la política minera boliviana, esto significó que el MNR, igual que el POR, se encontraba en una posición mucho más independiente frente a la política nacional que el PIR, preocupado siempre porque la producción minera boliviana siguiera apoyando la causa aliada. Esta circunstancia y los llamamientos de la derecha en favor de una alianza antifascista limitarían gravemente sus capacidades de maniobra.

Al comienzo del período de Peñaranda quedó claro que el PIR era el partido principal de la izquierda, quedando el MNR como segundo a gran distancia y el POR, como una minoría marginal. Como la izquierda contaba con una voz poderosa en el congreso, el movimiento obrero reaccionó fácilmente al nuevo clima de la élite. Entre los mineros se produjo una febril actividad de sindicalización, con permanentes paros y huelgas, al tiempo que todos los sectores laborales exigían mayores salarios y mejores

condiciones de trabajo. En todos estos esfuerzos los obreros obtuvieron en el congreso un sólido apoyo; hombres como Víctor Paz Estenssoro se convirtieron en exponentes de los derechos de sindicalización. Aunque los partidos tradicionales se opusieron rígidamente a apoyar a los obreros y a los ataques de la izquierda a la administración, Peñaranda se negó a aceptar su consejo de reprimir a los tres partidos izquierdistas. El parlamento de los años cuarenta fue el más radical y libre de la historia boliviana hasta aquel momento.

Aunque liberal en las cuestiones políticas, el gobierno de Peñaranda adoptó posiciones conservadoras en los asuntos económicos y laborales. Ciegamente interesado en la obtención de los préstamos y de la asistencia técnica otra vez accesible de los Estados Unidos, así como de los compromisos a largo plazo de compras de estaño a precios razonables, los bolivianos se encontraron con la oposición implacable de la Standard Oil: ésta exigía una indemnización o la devolución de sus instalaciones o ambas cosas a la vez; de una forma típica, los intereses petrolíferos pudieron controlar la política estadounidense hacia Bolivia. A pesar de la antigua preocupación del Departamento de Estado de los Estados Unidos por cortar los íntimos lazos de Bolivia con Alemania – preocupación que se manifestó desde las misiones militares alemanas y el apoyo a la compañía aérea boliviana (Lloyd Aéreo Boliviano) hasta la subvención del diario del MNR, La Calle, y la indiscutible necesidad de conseguir contratos de materias primas minerales, el Departamento de Estado pareció incapaz durante largo tiempo de superar las exigencias de las compañías petrolíferas multinacionales.

Pero la necesidad de la cooperación boliviana se hizo tan crítica que a fines de 1941 Estados Unidos practicaba con Bolivia fórmulas indirectas del *lend – lease* (ayuda bajo forma de préstamos, a cambio de ventajas militares, políticas o económicas: permiso para instalar bases, alineamiento junto a los aliados, abastecimiento de materias primas, etc.): envío de misiones técnicas y, por fin, convenios de compra de minerales a largo plazo con control gubernamental. En estas circunstancias la Standard Oil acabó aceptando la negociación: el arreglo final incluía la "compensación" por los bienes confiscados mediante la compra boliviana de todos los estudios de prospección y mapas petrolíferos que seguían en poder de la multinacional. En realidad, se trataba de una victoria de la diplomacia boliviana, pues no se discutió la confiscación e incluso se aceptó la legalidad de su posición. Sin embargo, provocó una tormenta por

parte de la izquierda y del conjunto del país, que seguía acusando a la Standard Oil de responsable de la Guerra del Chaco.

Tales protestas se hicieron tan violentas que el gobierno aceptó la documentación falsificada proporcionada por Estados Unidos en la que se acusaba al MNR de urdir una conspiración fascista financiada por los alemanes, con lo que pudo asestar un duro golpe contra este partido. La Calle fue clausurada, el embajador alemán fue expulsado, logrando así que la atención pasara del acuerdo con la Standard Oil al golpe de estado profascista. Los diputados del MNR en el congreso no fueron exiliados, por lo que el debate parlamentario adquirió ribetes apasionados. Puso de manifiesto que el PIR y otros grupos radicales desconfiaran fundamentalmente del fascismo del MNR, aunque consideraban que la conspiración era probablemente una invención estadounidense. Apoyando los elementos reformistas y nacionalistas del programa del MNR, se opusieron a rajatabla a otros aspectos de la ideología del MNR.

Pero una parte apreciable de las posiciones sobre política internacional los diferentes partidos se las encontraron resueltas a causa de acontecimientos externos. En diciembre de 1941 los Estados Unidos entraron en la guerra mundial y en enero de 1942 Bolivia decidió alinearse junto a las fuerzas aliadas de forma oficial, rompiendo relaciones con Alemania y el Japón. Si bien el MNR mantuvo sus simpatías fascistas, a partir de ahora dejó de estar íntimamente asociado con Alemania, pues rompió oficialmente tal vínculo. Esto permitió al partido dedicarse de forma más plena a la situación nacional, que iba convirtiéndose en foco de huelgas y actividad sindical, y moderar su hostilidad contra los partidos de extrema izquierda.

Que toda esta agitación radical iba produciendo su impacto lo pusieron en evidencia dos sucesos de importancia durante la parte final de período de Peñaranda. El primero fueron las elecciones parlamentarias de 1942; el segundo fue la exitosa organización de un sindicato nacional de trabajadores mineros con motivo de una gran masacre minera. En ambos casos quedó en evidencia el poder y militancia de la izquierda y la creciente desesperación de los partidos tradicionales.

En las elecciones parlamentarias de mayo de 1942 los partidos tradicionales sólo alcanzaron 14.163 votos, frente a los 23.401 de todos los grupos y partidos no tradicionales. Así, la tendencia iniciada en las elecciones para la Convención Constituyente de 1938, proseguía con las elecciones presidenciales 1940 y las elecciones parlamentarias de 1940 y 1942. No se había podido detener la erosión en el apoyo del electorado alfa-

beto y mayoritariamente blanco a los partidos tradicionales. En cada elección hasta la decisiva elección presidencial de 1951, el electorado compuesto esencialmente de las clases media y alta blancas mostró su oposición, con unas mayorías que no cesaron de aumentar, al sistema político prebélico polarizándose hacia posiciones más radicales que, en último término, verían la destrucción de la sociedad que había creado y fomentado su crecimiento.

Con la radicalización progresiva de los blancos de clase media tuvo lugar una radicalización más profunda de las clases trabajadoras y, en particular, de su vanguardia más poderosa y revolucionaria, los trabajadores mineros. Ya en 1940 los diferentes sindicatos mineros locales habían intentado organizar una confederación nacional de mineros. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por quebrar estas organizaciones con el pretexto de la situación de guerra, los sindicatos mineros obtuvieron un poderoso apoyo del congreso, por parte de todos los partidos de izquierda. En noviembre y diciembre de 1942 se produjeron una serie de grandes huelgas mineras en Oruro y Potosí, en demanda de mayores salarios y del reconocimiento sindical. La huelga más prolongada y enconada tuvo lugar en las minas de Catavi, de Patiño. A fines de diciembre el ejército disparó contra los mineros y sus familias, causando la matanza de centenares de obreros desarmados. La masacre de Catavi se convirtió en poderosa bandera de la izquierda y de los mineros y en el suceso crucial que amalgamó a unos y a otros en una vanguardia poderosa. Si bien las masacres campesinas y obreras no eran hechos excepcionales en la historia boliviana (antes y después de 1942), la de Catavi se produjo en un momento decisivo de la evolución organizativa de la izquierda y del movimiento obrero, convirtiéndose en la más famosa *cause célebre* particular del período prerrevolucionario.

El gobierno decidió hacer del PIR la víctima propiciatoria de la masacre, clausurando sus periódicos y encarcelando a sus líderes. Pero el MNR fue el que sacó mejores dividendos de lo que no era todavía más que un movimiento minero apolítico. Bajo la dirección de Paz Estenssoro el partido montó un gran ataque parlamentario contra el gobierno de Peñaranda y en apoyo de los mineros, de forma sólo coincidente, contra toda la conexión entre los magnates mineros, el gobierno y Estados Unidos.

En el debate consiguiente el gobierno acabó superando una moción de censura; pero lo hizo al precio de quebrar las coaliciones subsistentes entre los moderados y la izquierda cada vez más radical. La antigua agrupación de socialistas moderados

que quedaba del período de Toro y Busch salió destrozada de los debates sobre la masacre de Catavi; incluso muchos políticos tradicionales abandonaron sus partidos. El resultado fue que el gobierno se encontró con que sólo lo apoyaban los liberales y republicanos más reaccionarios. El posible apoyo del PIR, —que a causa de la entrada de la Unión Soviética en la guerra del lado aliado— ahora simpatizaba más con los esfuerzos del gobierno por proporcionar a los Estados Unidos un contingente sin par de minerales, fue rechazado por el régimen de Peñaranda. De esta forma fue el propio gobierno el que forzó al PIR a unirse al MNR y al POR en la oposición.

A fines de 1943 estaba claro que el gobierno había perdido el control de la situación política; también había empezado a perder el control del ejército. Se intentaron varios pequeños alzamientos; comenzaron a circular noticias sobre las logias militares secretas. La más importante era RADEPA (Razón de Patria), organizada entre la oficialidad joven en los campos de prisioneros del Paraguay. Con la caída de Bilbao Rioja y los radicales inmediatamente después de la muerte de Busch, RADEPA surgió como el grupo de mayor conciencia política del ejército y el heredero de la bandera del socialismo militar; pero a diferencia de sus predecesores, este grupo y sus varios retoños se inclinaban mucho más a la línea fascista que a la socialista reformista. A fines de diciembre de 1943 estos oficiales acabaron aliándose con el MNR y llevaron a cabo con éxito un golpe de estado contra Peñaranda, llevando así al poder al primer gobierno del MNR de la historia boliviana.

El nuevo régimen que surgió fue una junta militar dirigida por el desconocido mayor Gualberto Villarroel, que no era ni un héroe ni una figura de relevancia de la época del socialismo militar. Sin embargo, su posición dentro de RADEPA era fundamental, siendo un partidario absoluto del vago modelo reformista y fascista que enarbolaba el grupo. Al aceptar a tres miembros del MNR en su gobierno, Villarroel trató de aliar a su grupo minoritario de oficiales con los nuevos radicales.

Durante la organización del nuevo gobierno el MNR elevó a Paz Estenssoro como a su líder: el ala extrema fascista estaba representada por Carlos Montenegro y Augusto Céspedes. Pero por más simpatías que la Junta tuviera por la causa del Eje, en 1944 la situación bélica les exigía moderar sus esperanzas. Cuando Estados Unidos y la mayoría de los gobiernos latinoamericanos se negó a reconocer a la Junta, el régimen se vio obligado primero a deshacerse de los jefes más extremados del MNR y luego, a comienzos de 1944, a prescindir totalmente de la colaboración del partido en el gobierno. Pero esta ruptura temporal

con el MNR de ninguna manera anuló los lazos entre ambos grupos; todavía más, la línea ideológica se inspiró en las preocupaciones del MNR.

Entre ellas hubo el intento de llevar las masas campesinas a la política nacional y de apoyar el movimiento obrero minero, particularmente el ala obrera del POR. El MNR trabajó estrechamente con el líder minero porista Juan Lechín. Este apoyo, junto con la ayuda recibida de los obreros ferroviarios, condujo finalmente a la creación de una federación nacional de mineros en Huanuni, en junio de 1944, con unos 60.000 afiliados. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia se hizo cargo inmediatamente de la dirección del movimiento obrero, por ser el sindicato más poderoso del país, prestando un importante apoyo al MNR y a la Junta, a pesar de la oposición obrera al régimen y de su apoyo tradicional al PIR.

Por lo que se refiere a la cuestión indígena, en mayo de 1945 el régimen reunió por fin unos 1.000 *kuraka* indios tanto de lengua kechua como aymara en el I Congreso Nacional Indigenal, celebrado en La Paz. Durante su transcurso Villarroel prometió un considerable esfuerzo del gobierno para proporcionar instalaciones educativas en las comunidades libres, esfuerzo que realmente tendría cierto impacto; por primera vez en la historia promulgó un decreto aboliendo el odioso pongueaje de los indios en las haciendas. Medida verdaderamente revolucionaria y que minaba los cimientos de todo el sistema latifundista, el decreto nunca fue puesto en ejecución; pero dio una mínima justificación a los radicales indianistas y el mismo Congreso Indigenal permitió por primera vez el contacto entre muchos de los dirigentes indios tradicionales, abriendo así el camino a la importante movilización de la ideología campesina contra el régimen de las haciendas.

Por fin, en el campo de los derechos democráticos y de las libertades ciudadanas el régimen apoyó las peores tendencias del MNR y permitió que expresaran plenamente su propia ideología fascista, demostrando ser uno de los más viciados de la historia boliviana. Cuando el PIR ganó una proporción importante de votos en las elecciones para la Convención Constituyente de 1944, el gobierno simplemente asesinó a sus líderes y encarceló a sus partidarios. A su vez, un efímero alzamiento en Oruro a fines de 1945 le dio el pretexto que necesitaba para prender a una serie de políticos tradicionales y ejecutarlos. Este recurso a la violencia contra los intelectuales y políticos de clase media era nueva en la política boliviana, dividiendo profundamente a la nación y volviendo inútiles la mayor parte de las iniciativas re-

formistas, pues la mayoría de los miembros de la élite conceptuó al régimen como gansterismo y fascismo. A fin de cuentas, el empleo de la violencia policiaca y la hostilidad del régimen a los líderes marxistas y políticos tradicionales acabarían destruyéndolo y reducirían al MNR a un poder claramente menor de la escena nacional.

A lo largo de 1944 y 1945 la represión ininterrumpida tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha acabó obligando a ambos grupos a anudar una coalición democrática antifascista. A comienzos de 1946 tal alianza controlaba la mayor parte del movimiento obrero no minero, los estudiantes universitarios y la mayoría de la élite política nacional. A pesar de la ininterrumpida represión gubernamental la coalición fue ganando terreno y en junio — julio de 1946, cuando tenía lugar una huelga de maestros, pudo movilizar a la opinión popular y estudiantil; el 14 de julio de 1946 una manifestación popular de protesta se transformó en revuelta popular. De esta forma, sin la defección de ningún militar ni policía, los civiles llevaron a cabo el derrocamiento del régimen. En la violencia del momento el propio presidente Villarroel fue sacado del palacio presidencial y colgado de un farol de la plaza principal de La Paz.

Parecería, pues, que el MNR y RADEPA habían quedado totalmente desacreditados y que el futuro estaba en manos del PIR , que en realidad era el factor radical clave de la revuelta popular de julio. Pero al cabo de tres años de la revuelta y del exilio de la plana mayor del MNR, éste volvería a surgir como el partido más popular de la izquierda y el movimiento político más poderoso del país. Esta extraordinaria inversión de la propia suerte se debió tanto a la astucia del MNR como a la incompetencia de la dirección del PIR. Pues lo que el MNR descubrió rápidamente y el PIR olvidó fue que seguía viva la generación del Chaco y que las exigencias de un cambio seguían tan vigorosas como siempre. Iría en descrédito de ellos el que el MNR aprendiera de su desastrosa experiencia con los fascistas militares y pudiera resurgir durante el Sexenio (1946 — 1952) como un partido radical y popular de cambio. Para llevar a cabo este viraje se decidió a deshacerse de una vez por todas de sus elementos fascistas. A ello le ayudaron Lechín y sus mineros, entregados a la transformación revolucionaria y que pedían que el partido apoyara su programa. Al mismo tiempo Paz Estenssoro y otros nuevos líderes como Hernán Siles Suazo se dedicaron a restablecer su sólida base de clase media con un fuerte programa de estabilización económica por un lado y de nacionalización económica por otro. Lograrían sus objetivos de una forma tan plena que en la

posterior mitología revolucionaria, la muerte de Villarroel por la muchedumbre popular, en julio de 1946, se transformaría en un importante acto revolucionario y el propio Villarroel llegaría a ser otro mártir al lado de Busch y de los mineros masacrados de Catavi, dentro del panteón revolucionario del país.

En todos estos vericuetos la acción del PIR fue decisiva. Pues al derrocar al MNR y a Villarroel, el PIR decidió que sólo la plena cooperación con los partidos tradicionales podría servir a su causa, decisión en la que cometió un error fundamental, pues así como el MNR no olvidó los cambios desencadenados por la Guerra del Chaco, tampoco lo olvidaron los partidos tradicionales. Aferrada en la posición ahora descarada de defensa de clase, la Concordancia de los partidos tradicionales se dedicó a destruir las nuevas fuerzas políticas desencadenadas por los diferentes regímenes reformistas y radicales. Así pues, se complacía tanto en utilizar al PIR para encubrir sus propias acciones como en que se lo responsabilizara de todas sus acciones antiobreras, especialmente las dirigidas contra los amenazantes obreros de las minas. Los partidos tradicionales, una vez asegurados en el poder, estaban decididos a detener todos los cambios que se habían producido y a volver al sistema anterior a la guerra. Pero esto era una esperanza quijotesca. No sólo terminarían destruyendo al PIR, sino que se destruirían también a sí mismos. Al final del Sexenio los políticos tradicionales ya no pudieron seguir conteniendo los nuevos movimientos, viéndose obligados a abandonar por completo el gobierno constitucional y a confiar en el puro poder militar como la única defensa contra las exigencias populares de cambio.

Hasta qué punto eran revolucionarias estas exigencias se puso en claro durante los meses que siguieron a la revuelta de julio. En el IV congreso nacional de los mineros, celebrado en Pulacayo en noviembre de 1946, la FSTMB aprobó la tesis de la revolución permanente y abogó por la lucha armada violenta de la clase obrera. La llamada Tesis de Pulacayo fue un documento amargo y revolucionario que rechazó todas las posiciones reformistas y progresistas. Aunque aceptaba la revolución de julio como popular, desafiaba el antifascismo de la Alianza Democrática y hablaba del verdadero fascismo de la oligarquía. Exigía una alianza obrero - campesina y un gobierno bajo control obrero. Incluso en sus exigencias más concretas, que por lo general constituían la parte moderada de las declaraciones obreras, la FSTMB adoptó una posición extremista: abogada por el inmediato armamiento de los obreros, por la participación obrera en la administración de las empresas mineras y por la promoción de huelgas revolucionarias

(en contraposición a las económicas). Esta fue, en realidad, la declaración más poderosa del ala porista de los mineros, comprometiendo no sólo a los mineros en la acción revolucionaria sino que forzó al MNR, que había tratado de controlar el movimiento obrero minero, a adoptar también una actitud mucho más revolucionaria.

Como respuesta a la radicalización de los mineros, el gobierno se lanzó a una acción represiva, utilizando a los ministros del PIR para atacar a los obreros. El PIR, por su parte, tras haber probado el poder en el gobierno provisional posterior a Villarroel, no quiso dejarlo cuando los republicanos ganaron las elecciones de 1947, permaneciendo en el gobierno de coalición. Esto resultaría ser un error fatal, pues los republicanos dirigidos por Enrique Hertzog y Mamerto Urriolagoitia constituían el ala más reaccionaria de los partidos tradicionales y estaban decididos a destruir la FSTMB y todo radicalismo en el movimiento obrero. A comienzos de 1947 el ministro de Trabajo, del PIR, envió las tropas a las minas: con el sangriento aniquilamiento de una huelga en Catavi el PIR quedó destruido como partido representativo de la izquierda.

Al propio tiempo el MNR nunca perdió la audiencia entre la clase media, a pesar de que la mayoría de sus dirigentes (empezando por Paz Estenssoro) se encontraba en el exilio. En las elecciones de 1947 había quedado reducido al mínimo apoyo popular, aunque todavía consiguió 13.000 votos, frente a los 44.000 votos de los republicanos victoriosos. Luego, destruido ya el PIR y mostrando los partidos tradicionales una creciente hostilidad incluso al reformismo moderado del modelo Toro – Busch y Villarroel, el MNR logró más votos. En las elecciones parlamentarias intermedias de mayo de 1949 surgió como el segundo partido, detrás de los republicanos, a pesar de la fuerte oposición gubernamental. Su recuperación fue tan inesperada que Hertzog renunció a la presidencia, poniendo el gobierno en manos del vicepresidente Urriolagoitia.

No obstante toda esta serie de indicios de un cambio estructural a largo plazo en la arena política, los republicanos se negaron a enderezar el timón, mientras que el PIR se negó a salir del gobierno. Poco después de las elecciones parlamentarias estallaron nuevas huelgas en Catavi, produciendo el exilio de Lechín, Mario Torres y otros dirigentes de la FSTMB. La Noticia de su exilio provocó un levantamiento obrero armado en Catavi, con la consiguiente intervención masiva del ejército en la zona minera. Al hacerlo el ejército dejó claro que se había librado de todos los elementos reformistas, aceptando por completo la

política represiva del régimen republicano. Temiendo un movimiento revolucionario obrero y del MNR, se aliaron tras su casta conservadora de la alta oficialidad como nunca lo habían hecho antes.

Pero ahora el descenso que la postguerra trajo en la cotización internacional del estaño dio lugar a una grave crisis fiscal en el gobierno. Los precios comenzaron a subir rápidamente en el mercado interno. El gobierno republicano no pudo enfrentar eficazmente el estancamiento y la inflación económicos, perdiendo el apoyo de los grupos que hasta entonces le habían sostenido. Elementos clave de la élite se mostraron indiferentes a la confrontación final entre el gobierno y el MNR. Este partido, con la violenta represión de los obreros y con el fraude electoral para minimizar sus victorias, se lanzó con todas sus fuerzas al derrocamiento armado del régimen. En septiembre de 1949 el MNR, dirigido por Siles Suazo, organizó un levantamiento civil, combatiendo durante dos meses contra el ejército en todas las capitales provinciales; incluso llegó a establecer su cuartel general provisional en Santa Cruz. Si bien el alzamiento fue aplastado de forma muy sangrienta, señaló un cambio importante en el estilo de la política nacional. En primer lugar se trataba de una operación exclusivamente civil. El ejército mantuvo una absoluta unidad contra los rebeldes, prestando pleno apoyo al régimen. A pesar de la anterior íntima alianza entre el MNR y el ejército, la oficialidad se mantuvo firme contra el partido y le infligió una derrota. El alzamiento también fue único por la fusión del apoyo obrero y de la clase media, pues los mineros intervinieron plenamente en él. Todo ello contribuyó a apartar todavía más al partido de lo que pudiera subsistir de su ala fascista, acercándolo a Lechín y a sus partidarios extrotskistas. Por fin sirvió para mostrar al partido que, a pesar de todos sus antiguos lazos, habría de realizar la revolución destruyendo el propio ejército.

Aunque el régimen volvió a exiliar a la dirección movimientista e intentó destruir de otra forma el partido, la fuerza del MNR no hizo más que crecer de día en día. En mayo de 1950 hubo una prueba de su creciente control del movimiento obrero: los obreros fabriles de La Paz transformaron una huelga en otra insurrección armada del movimiento obrero del MNR. Para aplastar la revuelta se echó mano de la aviación y de la artillería contra los barrios obreros. Pero lo significativo del suceso fue la conquista del movimiento obrero urbano por el MNR, que hasta ese momento había constituido un feudo del PIR. Ahora el partido contaba con el apoyo de prácticamente todos los obreros or-

ganizados, fuere cual fuere su tendencia política local, como sucedía con la mayor parte de la clase media.

Que el PIR estaba acabado se puso en evidencia a fines de 1949. Aunque sus miembros más radicales por fin exigieron la salida del gobierno después de las elecciones parlamentarias, no lograron que adoptara una posición más revolucionaria. A comienzos de 1950 el grupo juvenil del partido lo abandonó, constituyendo un Partido Comunista Boliviano oficial; el PIR cayó en la insignificancia. Entretanto el MNR hizo un último esfuerzo por conquistar el poder por medios democráticos. En mayo de 1951 se celebraron elecciones presidenciales: presentó a ellas una fórmula presidida por Víctor Paz Estenssoro (que seguía en el exilio) y Hernán Siles Suazo. Para escalofrío de la derecha, el MNR ganó las elecciones por una clara mayoría: 39.000 votos, mientras que los republicanos sólo obtuvieron 13.000 y el PIR apenas 5.000, menos incluso que los liberales.

Pero antes de que el MNR pudiera tomar posesión de la presidencia el ejército decidió intervenir para impedírselo. A los pocos días de las elecciones, Urriolagoitia renunció a la presidencia, transmitiendo ilegalmente el cargo al jefe de Estado Mayor, quien a su vez nombró al general Hugo Ballivián presidente. El nuevo gobierno lo primero que hizo fue anular las elecciones, poner fuera de ley al MNR como organización comunista y reflejar en su nueva retórica el contexto internacional de la guerra fría en curso. Pero los militares se encontraron con que sólo les ofrecían su apoyo los republicanos y una pequeña ala derechista de un partido fascista clericalista, Falange Socialista Boliviana. Además, incluso los generales se dieron cuenta del desenlace inevitable de la lucha que se acercaba y muchos oficiales destacados decidieron ocupar cargos en el extranjero en este momento crucial del conflicto.

Se puso en evidencia para todos los observadores que ahora el MNR trataría de conseguir por la fuerza lo que se le había escamoteado en la urnas. Siempre dispuesto a emplear la violencia, el MNR se lanzó a una plena oposición militar, convencido como estaba de que sólo una táctica de guerra civil le podría dar el gobierno. La oficialidad permaneció absolutamente fiel a la Junta, a pesar de todos los esfuerzos movimientistas por agrietar el ejército. De esta forma Paz y los dirigentes más conservadores del partido acabaron aceptando que el único medio era armar a todos los civiles y lanzar un levantamiento popular armado. El partido ni siquiera en la guerra civil de 1949 había franqueado los arsenales al público, recurriendo sólo a sus afiliados para la lucha, por temor de que una guerra civil total lle-

vara a la destrucción de todo orden en Bolivia. En cambio ahora practicó esta táctica, como la única que le podía llevar a la victoria.

En ese contexto de conspiración desenfrenada y de violencia general, el régimen se encontró repentinamente en medio de un conflicto internacional complejo acerca de la venta de estaño a Estados Unidos, causa de una grave depresión en la economía nacional. A fines de 1951 el gobierno apoyó las quejas de los industriales mineros por el bajo precio que ofrecía el gobierno de Estados Unidos para la compra de estaño a largo plazo. El resultado fue un acuerdo para suspender las ventas y, por tanto, suspender también la producción durante unos pocos meses, para forzar así a Estados Unidos a atender sus razones. Aunque esta táctica podía acabar logrando lo que pretendía, de momento sólo exasperó las tensiones políticas y económicas del país.

Después de múltiples intentos, el alzamiento final se produjo el 9 de abril de 1952. En tres días de combate intenso, durante los cuales se abrieron los arsenales al público y a los mineros que habían marchado sobre La Paz, por fin el ejército vencido. Al costo de grandes destrucciones y de más de 600 vidas, el MNR volvía al poder. Pero el partido de 1952 era enormemente diferente del grupo profascista derrocado en 1946: ahora era un partido radical de gente de clase media y de obreros revolucionarios, encarnando un nuevo tipo de amalgama de movimiento populista radical. Había llegado al poder también a costa de los partidos políticos tradicionales y de las principales instituciones del orden y de la autoridad (el ejército y la policía). Al aceptar la participación y la ideología obreras y al armar a la masa popular se había comprometido en una actitud absolutamente destructora del viejo orden y, a pesar de su ideología reformista tradicionalmente limitadora, ahora estaba lanzado a un desenlace revolucionario.

Habiendo conquistado el poder frente a la oposición conjunta del ejército y de los partidos tradicionales, los jefes del MNR se sintieron libres de ofrecer un programa moderado o un compromiso con ninguna institución, política o militar. Pronto, no sólo las clases blanca urbana y los cholos sino las masas indias campesinas estaban en poder de armas; el ejército y la policía nacional fueron desmantelados. Todos conocían los objetivos del partido; las armas estaban en manos del populacho militante; los dirigentes que volvían del exilio no habrían de contenerse. Así comenzó la revolución social y económica más dinámica de América Latina desde la mexicana de 1910 .

CAPITULO VIII
DE LA REVOLUCIÓN NACIONAL A LA GUERRA FRÍA, 1952-1982

En 1950 Bolivia seguía siendo una sociedad predominante rural, en la que la mayoría de su población estaba sólo marginalmente integrada en su economía nacional. De toda la población económicamente activa registrada en el censo de 1950, un 72 % se dedicaba a la agricultura e industrias conexas; pero esa fuerza de trabajo sólo producía alrededor del 33 % del Producto Interno Bruto, anomalía que indica claramente el grave atraso económico de ese sector. Con todo, desde 1900 la sociedad boliviana había experimentado profundos cambios en su composición: la población urbana (en centros de más de 5.000 habitantes) había subido del 14 al 23 % del total y en cada uno de los departamentos del país los principales centros urbanos habían crecido con mayor rapidez que el conjunto departamental. En el mismo periodo, la proporción de alfabetos y el número de niños escolarizados también aumentó, particularmente desde que los gobiernos posteriores a la Guerra del Chaco dedicaron mayores sumas al sector educativo: entre 1900 y 1950 la población alfabeta pasó del 17 al 31 % y la población estudiantil preuniversitaria subió de unos 23.000 a 130.000 (cifras equivalentes al 1 y al 5 % de la población total, respectivamente). En el nivel universitario, empero, el cambio había sido mucho menor: si en 1951 el número de universitarios había llegado a 12.000, ese año en todo el país sólo se graduaron 132 estudiantes.

Mayoritariamente rural y agrícola, a mediados del siglo XX Bolivia ni siquiera podía alimentar a su propia población.

A causa de la incesante expansión del sistema de hacienda, la distribución de la tierra había llegado a ser una de las más injustas de América Latina: el 6 % de los terratenientes con 1.000 ha. o más de tierra controlaba el 92 % de la tierra cultivada de la república; por otro lado, estas grandes haciendas estaban subutilizadas, pues no solían explotar más del 1.5 % de sus tierras. En el extremo opuesto estaba el 60 % de los terratenientes de hasta 5 ha. (verdaderos minifundios) que sólo poseían el 0.2 % de la tierra, lo que les obligaba a cultivar el 54 % de ellas. La extremada inequidad en la división de la tierra era esencial para controlar la mano de obra rural: controlando el acceso a las mejores tierras en todas las regiones del país, los hacendados conseguían mano de obra ofreciendo, a cambio del trabajo, tierras de sus haciendas en usufructo. Los indios debían aportar las semillas, las herramientas y, en algunos casos, incluso los animales para el trabajo, mientras que el hacendado sólo debía poner los escasos insumos de capital. Los indios incluso debían transportar las cosechas y prestar servicios personal al hacendado, a su familia y a sus capataces: este 'pongueaje' había formado parte de las obligaciones de los indios de hacienda desde la época colonial, pero no por ello era menos oneroso. Lo único en que coincidían en odiar todos los indios campesinos era el servicio de *pongos*: exigía su presencia en la residencia del hacendado, ya fuera en la propia hacienda o en distantes ciudades, consumiendo en ello grandes cantidades de tiempo y de esfuerzo, sin ningún tipo de remuneración.

Este sistema no incluía el 'peonaje por deudas' ni otros recursos de fuerza y los indios tendieron a moverse libremente dentro y fuera de las haciendas; pero las crecientes presiones sobre la tierra en las zonas de comunidades libres, en especial después de la última gran época de expansión de las haciendas, obligaron a los campesinos a adaptarse al sistema. Aunque los centros urbanos crecían, no lo hacían con suficiente rapidez para absorber la población rural en aumento. Por su parte, la subdivisión de parcelas en las comunidades no tardaba en alcanzar niveles críticos, por lo que cada vez más hijos se veían obligados a trabajar, o en las haciendas para obtener tierra con que alimentarse ellos y a sus familias, o en las ciudades y minas como mano de obra barata.

Con una mano de obra poco costosa, con las semillas e incluso, a veces, las herramientas gratis o a precios mínimos y con unos mercados agrícolas protegidos, los estímulos de los hacendados para invertir en sus propiedades eran mínimos. En realidad, el ausentismo de los propietarios predominaba en todas las regiones rurales, pues la mayoría de los hacendados ejercía profesiones urbanas. El resultado de este sistema era el empleo de una tecnología rudimentaria y la baja calidad de las semillas, con unos rendimientos sumamemnte bajos en alimentos. El sector agrícola estaba tan atrasado que ni siquiera podía satisfacer las necesidades ni de la creciente población de los centros urbanos ni del país en su conjunto. Si en los años 20 el 10 % de las importaciones eran alimentos, en 1950-1952 la cifra había ascendido al 19 %; y hay que destacar que una buena parte de esos alimentos importados eran tubérculos tradicionales andinos que sólo se producen en Bolivia y Perú. Ineficiente, improductivo e injusto, el sistema agrícola boliviano también mantenía fuera del mercado a un alto porcentaje de la fuerza laboral del país, comprimiendo sus ingresos en un trabajo explotador y en obligaciones de servicios; a su vez, esto restringía el mercado de la manufactura a la pequeña minoría urbana y a los relativamente escasos centros agrícolas activos, como los del valle cochabambino.

Dado el carácter limitado del mercado interior, no resulta sorprendente que Bolivia contara con un sector industrial pequeño, que en 1950 representaba apenas el 4 % de la población económicamente activa. La industria se componía fundamentalmente de algunas fábricas textiles y de plantas elaboradoras de alimentos. En 1950 se calculaba que hubieron pocos cambios en la estructura capitalista del sector y que la mayoría de las fábricas se encontraba superanticuada y subproductiva de acuerdo a los criterios mundiales. En la minería todavía era más visible la falta de insumos nuevos de capital que afectaba a la agricultura y a la industria: desde fines de los años 30 no hubo aparentemente grandes inversiones nuevas en el sector minero, precisamente cuando la mayoría de las minas comenzaba a funcionar sin grandes filones. Así, pues, una infraestructura envejecida y una riqueza decreciente de los minerales elevaba inexorablemente los costos de producción a unos niveles antieconómicos y no competitivos (si exceptuamos los periodos de

carestía bélica) en los mercados mundiales. En 1950 Bolivia era el productor de estaño más caro del mundo y a veces se limitaba a cubrir los costos. Los márgenes de ganancia eran minúsculos, con lo que la industria se hacía todavía más vulnerable a las pequeñas fluctuaciones de la cotización mundial. Por otra parte, incluso cuando los precios conocían un repentino repunte, la baja calidad de los minerales disponibles y la baja productividad de las minas significaban que a Bolivia le resultaba extremadamente difícil incrementar la producción. Todavía en 1952, el año 1929 seguía siendo el de la mayor producción estañífera, cuando el país exportó 47.000 tm. de estaño; y no hace falta decir que esa cifra sigue siendo la marca hasta nuestros días.

Debido al relativo estancamiento y atraso de la economía nacional, al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) le resultaría relativamente fácil introducir profundos cambios. Las haciendas, en manos de una clase mayoritariamente ausentista y con poco capital invertido, podrían ser incautadas sin una resistencia importante. Dada la movilización campesina posterior a la Revolución de abril de 1952, no se las habría podido retener sin el pleno apoyo de los poderes policiales del Estado. La estatización del envejecido sector minero tampoco chocaría con una vigorosa oposición de los 'barones del estaño' si se les ofrecía una adecuada compensación. En resumen: así como su poder político se encontraba debilitado, la fuerza de la élite económica estaba relativamente venida a menos en el momento de la revolución.

Los nuevos dirigentes del MNR tampoco tuvieron que superar la resistencia militar. Los tres días de combates entre civiles y mineros por un lado y el ejército por otro habían visto el derrumbe de los militares. Éste fue el suceso verdaderamente chocante de abril de 1952, pues en determinado momento fue rebasado todo el poder policial del Estado. La distribución generalizada de armamento a las masas, la creación de milicias urbanas y rurales, y la neutralización de la Policía Nacional cambiaron la realidad política, económica y social de Bolivia más allá de las más insensatas expectativas de la dirigencia del MNR. Así, por más limitados que hayan podido ser los propósitos de la dirigencia más moderada del MNR incluso en abril de 1952, la realidad del derrumbe del Estado y el armamento de

las masas populares significó que acabaría produciéndose una grave revolución social. Los 'revolucionarios renuentes', como algunos los han calificado, se vieron así lenta e inexorablemente forzados a proponer una reorganización total de la sociedad boliviana.

Uno de los primeros actos del nuevo régimen fue decretar el sufragio universal eliminando la exigencia del alfabetismo. De un golpe fueron libertadas las masas indígenas campesinas y el censo electoral saltó de unos 200.000 a poco menos del millón de personas. El siguiente paso fue cerrar temporalmente el Colegio Militar y expulsar del Ejército a unos 500 oficiales; aunque se le confió la tarea de su propia reorganización, quedó tan reducido en poder y número que muchos creyeron por un tiempo que había dejado de existir. En un comienzo las milicias civiles del MNR estuvieron mejor armadas que la Policía y el Ejército y se encargaron de todas las obligaciones que habían solido desempeñar esas fuerzas.

El MNR también se dedicó a reorganizar sus fuerzas para robustecer su propia base de poder. El régimen apoyó plenamente a los mineros cuando a fines de abril fundaron su propia central nacional, la Central Obrera Boliviana (COB). Aunque la COB se proclamó políticamente neutral y permitió que el POR, el PIR y el nuevo PCB tuvieran representación en ella, en los hechos se convirtió en un poderoso aliado del régimen y acabó nombrando tres ministros obreros en el nuevo gabinete. Lechín, jefe de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) , también fue el jefe de la COB y cuando le tocó fue Ministro de Minas y Petróleo. La COB y la FSTMB representaron el ala revolucionaria radical del partido y no tardaron en plantear un programa revolucionario. Uno de los primeros actos de la COB fue exigir la 'nacionalización' (= estatización) sin compensación de las minas, la liquidación del Ejército y su reemplazo por las milicias, y la Reforma Agraria con la abolición del sistema latifundista y todas las formas de servidumbre campesina.

La dirigencia del MNR encabezada por el Presidente Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo, reaccionaron lentamente a la presión política y paramilitar de los obreros, pero trataron de contener cuanto pudieron sus reformas. Hasta julio no declararon monopolio estatal la exportación y venta de minera-

les, que quedaría en manos del Banco Minero. Aunque se trataba de un paso lógico incluso dentro de los estilos anteriores a la reforma, se necesitaron varios meses de intensos debates para acceder hasta allí. Pero los sectores del partido que deseaban detenerse allí tuvieron que enfrentarse con las crecientes exigencias obreras de una expropiación sin compensaciones. Y estas presiones se hicieron tan poderosas, que la dirigencia acabó aceptando una estatización total. A comienzos de octubre el gobierno creó una empresa estatal semiautónoma para administrar cualesquier minas del Estado: la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Y el 31 de octubre estatizó las tres grandes empresas de Patiño, Hochschild y Aramayo; así pasaron a COMIBOL y al control estatal alrededor de dos tercios de la industria minera del estaño.

Aunque los obreros radicales exigían la expropiación sin indemnización, al MNR le preocupaba las posibles reacciones del gobierno de EE. UU.: como el gobierno había hecho cuanto estuvo en sus manos para suavizar esas relaciones (incluído el fin del boicot del estaño de acuerdo a la mayoría de las condiciones del gobierno estadounidense), no deseaba chocar con un aliado potencialmente peligroso. Como se encontraba en pleno desarrollo la Guerra Fría y EE. UU. intervenía activamente en Guatemala para derrocar a un gobierno revolucionario, el MNR confiaba poder evitar la etiqueta de régimen de inspiración comunista. Como EE. UU. había comenzado calificando erróneamente al MNR como un partido fascista y peronista (recuerdo de su antigua intervención en el gobierno de RADEPA), apoyó moderadamente el nuevo régimen y el MNR por su parte prometió indemnizar a los tres grandes de la minería y no dio signos de querer seguir estatizando otras minas (incluídas las varias minas medianas no estañíferas de empresas estadounidenses). Pero el régimen se vió obligado a aceptar la dirección de la COB y de la FSTMB y el 'cogobierno' obrero en la administración de COMIBOL. Los obreros obtuvieron dos de los siete asientos del Consejo de Administración, así como el poder de veto a las decisiones de COMIBOL que les afectaran. Esto llevó el poder a los obreros, que presionaron para aumentar las plantillas y para crear pulperías bien subvencionadas.

Entretanto, durante la segunda mitad de 1952 y comienzos de 1953 comenzó a derrumbarse la sociedad rural, a pesar

de todos los esfuerzos que hizo el gobierno para controlar la situación. Con la desaparición del Ejército, con el armamento que fluía al campo y con la joven ala revolucionaria de los políticos que diseminaban la consigna de cambio, empezó un ataque sistemático campesino contra todo el sistema latifundista. Comparable con el movimiento campesino conocido como el 'Gran Terror' en la Revolución Francesa, el período desde fines de 1952 hasta comienzos de 1953 contempló la destrucción de toda huella de trabajo en las zonas rurales con la muerte o expulsión de capataces y terratenientes, y la ocupación violenta de las tierras. Los campesinos, reviviendo sus organizaciones comunales tradicionales, empezaron a organizar 'sindicatos' con el aliento de la COB, a recibir armas y a crear milicias. Aunque el campo había contemplado con relativa indiferencia y se había visto poco afectado por los grandes combates de abril de 1952, a fin de este año fue escenario de tremenda violencia y destrucción.

Por más renuente que el régimen haya podido ser a encarar seriamente el problema de la hacienda, la masiva movilización de los campesinos (ahora, mayoría electoral) y la sistemática destrucción del sistema de propiedad agraria, forzaron al régimen a actuar. En enero de 1953 creó la Comisión de Reforma Agraria con militantes del PIR y del POR; y el 2 de agosto promulgó el decreto de una revolucionaria Reforma Agraria. Por ella se expropiaban todas las tierras de haciendas, indemnizando a los dueños con bonos de indemnización a 25 años plazo; otorgaba esas tierras de haciendas a los obreros indígenas a través de sus 'sindicatos' y 'comunidades', a condición de que no fueran vendidas individualmente. Los bonos acabaron considerándose sin valor y, de hecho, fue una expropiación sin indemnización. El gobierno trató de salvaguardar lo que quedara de sector moderno con uso intenso de capital en el campo, excluyendo de la expropiación las fincas con un uso intenso de capital. En las regiones indígenas andinas fueron expropiadas casi todas las tierras y los indios no tardaron en dejar de pagar la indemnización, pues las tierras fueron efectivamente expropiadas; las únicas excepciones se dieron en la región relativamente despoblada de S. Cruz y en las regiones meridionales de haciendas medianas como Monteagudo, de cierta agricultura con un modesto uso de capital y sin poblaciones indígenas residen-

tes; o en la región vitivinícola con pequeñas propiedades del valle de Cinti. En el resto del país la hacienda fue abolida, la clase hacendada destruída y la tierra pasó mayoritariamente a manos de los campesinos indios.

Al mismo tiempo pronto acabó la tutela de las organizaciones sindicales indígenas por parte del proletariado urbano y minero, erigiéndose los dirigentes campesinos como principales poderes en las zonas rurales. Aunque entre los indios había numerosos grupos y asociaciones regionales en competencia, los centros más importantes de conducción política campesina fueron la comunidad de Achacachi (en la ribera del Titicaca) y el pueblo de Uqureña en el valle cochabambino. El primero fue el centro de organización campesina de los aymara y el segundo, el de los quechuas hablantes. Si bien con frecuencia actuaron conflictivamente entre si y cayeron en el soborno de los regímenes en el poder, los campesinos mantuvieron el control de sus sindicatos y han sido una fuente esencial de poder político nacional desde 1952 hasta el presente. Satisfechos en la cuestión de la tierra, los campesinos se convirtieron en una fuerza relativamente conservadora en el país y cada vez se mostraron más indiferentes con sus antiguos colegas urbanos. Durante las dos generaciones siguientes su principal preocupación fue el suministro de servicios modernos de salud y de educación a sus comunidades, además de la garantía de sus títulos de propiedad de la tierra.

El genio de Paz Estenssoro fue percibir la importancia de esta fuerza totalmente nueva y absolutamente conservadora en el escenario nacional. Cuando su poder declinó entre sus antiguos partidarios en la clase media y creció su dependencia de la COB revolucionaria y de los grupos obreros, se dió cuenta de que tendría que crear con los campesinos una nueva base de poder para las alas centrista y derechista de su partido. Esta maniobra tuvo tanto éxito, que en el cuarto de siglo que siguió el campesinado se convirtió en el bastión de los elementos conservadores del gobierno. Y una vez sellada, esta alianza sobrevivió a la inicial destrucción del MNR y aun al retorno de los regímenes militares de derecha.

El derrumbe del Estado, la estatización de las minas, la destrucción del sistema de haciendas y la masiva transferencia de recursos gubernamentales a los programas de bienestar so-

cial, provocó la ruina de la economía nacional y de los ingresos fiscales. La expropiación de las minas sustrajo grandes sumas de las arcas estatales y la Reforma Agraria redujo drásticamente el suministro de alimentos a las ciudades, forzando la importación masiva de alimentos para impedir la hambruna. La única forma de resolver todos esos problemas fue el incremento del circulante nacional: su resultado fue una de las inflaciones más altas del mundo (1952-1956); el costo de vida aumentó en un 2000 %, con un índice inflacionario anual de más del 900 %.

Con su decisión de financiar la revolución con la espectacular devaluación de la moneda nacional, en los hechos el MNR obligaba a las clases medias a pagar parte de ella. Las rentas fijas se volatilizaron y los valores de la propiedad inmobiliaria urbana desaparecieron de la noche a la mañana. De repente la clase media vió atacados sus intereses más esenciales. La eliminación de una parte de sus rentas hizo nacer su inmediata hostilidad al régimen: habiendo sido hasta entonces el núcleo del partido y su más decidido partidario, la clase media urbana desertó en buena parte del MNR: rechazando al PIR y al PCB como alternativas viables, trasladaron su lealtad a Falange Socialista Boliviana (FSB), hasta entonces un partido marginal.

Partido católico conservador con ribetes fascistas, la FSB nació en la Universidad Católica de Chile en la segunda mitad de los años 30. Como el POR, empezó siendo un partido secundario, que gozó de un poderoso apoyo de la Iglesia y adoptó una moderada posición nacionalista; pero con sus proclamas entró en competencia con los grupos de centro y de derecha que daban su apoyo al MNR antes de 1952, mientras que el apoyo clerical le enajenó la mayoría de sus seguidores, dada la débil posición de la Iglesia en la sociedad nacional. Pero cuando después de 1952 el MNR atacó las rentas de la clase media y dirigió coactivamente sus ahorros hacia las clases más populares, fue olvidado el clericalismo de FSB, surgiendo ésta como el partido más poderoso de las ciudades. Su nueva fuerza se hizo patente en las elecciones intermedias de la primera presidencia de Paz Estenssoro y, todavía más, en las elecciones generales de 1956, cuando FSB ganó en las ciudades al captar el voto de la mayor parte de los partidarios del MNR de antes de 1952.

Cuando el MNR, coalición de revolucionarios urbanos, obreros organizados y el campesinado, reemplazó el anterior apoyo de la clase media, por lo que le permitió seguir ganando las elecciones en las urnas. No obstante la pérdida de la clase media, el MNR se negó a dar ningún nuevo paso hacia la revolución socialista: no cesó de reafirmar su legitimidad y su relación con el viejo orden y, aunque estatizando las tres principales empresas mineras, hizo todo cuanto estuvo en sus manos para atraer nuevos capitales extranjeros y proteger la propiedad privada. En la Reforma Agraria sacrificó la mayor parte de la propiedad, pero aun ahí trató de mantener el Departamento de Santa Cruz como la principal zona de expansión de la inversión privada. Finalmente, aunque la creación de COMIBOL y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) convirtió al gobierno en el mayor productor particular de la economía nacional y creó un modelo de 'capitalismo de Estado' para la economía, la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) invirtió grandes sumas como capital de operación del sector industrial privado.

Frente a una economía en bancarrota, la incapacidad del régimen para alimentar a su pueblo y la falta de capitales para emprender todos los ambiciosos programas de bienestar y reformas que había propuesto, el partido decidió también buscar asistencia financiera de los EE. UU. Ya en junio de 1953, bajo la intensa presión de los EE. UU. y ante la negativa de las fundiciones 'William Harvey Co.' de Patiño a refinar el estaño boliviano, el gobierno se avino a indemnizar a los tres 'barones' Patiño, Hochschild y Aramayo. Al mes siguiente firmó con EE. UU. un contrato de venta de minerales, país que también anunció la duplicación de su anterior programa de ayuda y el embarque inmediato de alimentos por valor de cinco millones de dólares en virtud de la Ley Pública 480 (Bolivia fue el primer país latinoamericano en beneficiarse de esa donación de víveres exportados). Al cabo de una década de ayuda masiva Bolivia había logrado la extraordinaria marca de haber obtenido 100 millones de dólares en ayuda estadounidense, lo que por entonces la convirtió en el mayor receptor particular de ayuda extranjera de EE. UU. en América Latina y el mayor per cápita en el mundo. El país se hizo tan adicto a esa ayuda, que en 1958 un tercio del presupuesto nacional se cubría directamente con fondos de EE. UU.

Para el Gobierno estadounidense la decisión de la ayuda a Bolivia fue sumamente paradójica, pues se produjo durante el régimen de la guerra fría y muy conservador encabezado por el presidente Dwight Eisenhower y el Secretario de Estado John F. Dulles. Hostil a los regímenes revolucionarios, uno habría pensado que la administración estadounidense republicana habría sido la última en ver con buenos ojos las peticiones bolivianas de ayuda; pero la aparición de regímenes revolucionarios en Guatemala y Guyana había generado en EE. UU. un extraordinario temor a perder el control del hemisferio occidental, llegando a la convicción de que Bolivia seguiría rápidamente el mismo camino. Ante el primer peligro durante la guerra fría de su hegemonía absoluta sobre su esfera de influencia latinoamericana, el gobierno de Eisenhower consideró que el apoyo a los 'fascistas' del MNR era la única forma de evitar que la revolución cayera en manos de los comunistas. Bolivia había sido, en realidad, un caso pionero del primero de los importantes programas latinoamericanos de ayuda (el del Punto IV durante la presidencia de Truman), que había logrado resultados importantes. Por tanto, la embajada estadounidense recomendó proseguir la ayuda a Bolivia y aceptó la posición de Paz Estenssoro en sentido de que él y su régimen era la única alternativa a la toma del poder por los comunistas. Finalmente, dado el pequeño monto de las inversiones de EE. UU: en las empresas mineras bolivianas y/o en la agricultura, ninguno de los decretos de expropiación había afectado gravemente a las empresas estadounidenses, de manera que el Departamento de Estado no sufrió presiones para oponerse al régimen.

La abundante ayuda que llegó a Bolivia resultó decisiva para dar estabilidad económica al país: los envíos previstos por la Ley Pública 480 le dieron los víveres vitales que necesitaba para atravesar el periodo de grave distorsión agrícola que había provocado la Reforma Agraria. Esta ayuda dio sin duda al gobierno la ecuanimidad para tratar con los campesinos que acaso no hubiese tenido si la hambruna se hubiese apoderado de las ciudades; también suministró los fondos para crear un moderno sistema de carreteras, tan decisivo para la integración de la sociedad nacional. La ayuda estadounidense fue también decisiva para el desarrollo de la región cruceña, de tanta importancia para la economía boliviana. Las masivas inyecciones de capital

para la salud y la educación también sirvieron para convertir los atrasados servicios sociales de Bolivia en un sistema más moderno. Finalmente, el tan decisivo y raro financiamiento del funcionamiento directo del gobierno contribuyó a la paz social, que acaso no hubiese existido de no haber habido la ayuda al régimen. Con el dinero requerido para mantener a flote al régimen y la población alimentada y vestida, la ausencia de ese financiamiento seguramente hubiese llevado a una historia social más ensangrentada que la que Bolivia vivió después de 1952.

Pero esta ayuda tuvo su precio, pues –como de costumbre- el gobierno de EE. UU. exigió apoyo para las empresas estadounidenses que funcionaban en el extranjero. Esto significó, además de las incesantes presiones para que se redujera el poder de la COB y se pusiera fin al cogobierno en las minas, que se amortizara los bonos desde los años 20 y que se promulgaran nuevos códigos de inversiones y de petróleo favorables a los intereses de EE. UU. A pesar de su contundente ayuda al gobierno, EE. UU. se resistió a todos los esfuerzos bolivianos por capitalizar YPFB: quedó claro que las nuevas inversiones petrolíferas sólo llegarían con un nuevo código petrolero que volviera a permitir las inversiones privadas directas estadounidenses en el petróleo boliviano. En octubre de 1955 fue promulgado un nuevo Código del Petróleo con asistencia de EE. UU. y a fines de la década unas diez compañías estadounidenses trabajaban en Bolivia; de ellas la más importante era la '*Gulf Oil Co.*', que inició sus operaciones el mismo año 1955. Y cuando la empresa petrolífera estatal brasileña 'Petrobras' propuso al gobierno boliviano que, en virtud tanto de los tratados preexistentes como del tan liberal nuevo código, le otorgara concesiones, el gobierno rechazó todas las propuestas.

En la mayoría de los casos, las decisiones favorables al capital norteamericano o al voto internacional estadounidense le resultaron relativamente baratas al régimen; en cambio, la decisión de obligar a Bolivia a aceptar una estabilización monetaria fue de carácter muy diferente, lo mismo que la intervención directa estadounidense en la política interna. Al final de la presidencia de Paz Estenssoro en el MNR habían surgido dos tendencias: un ala de centro-derecha y de clase media representada por Siles Zuazo y una coalición de izquierda y obrera dirigida por Lechín y la COB. Aunque favoreciendo ya a una como a

otra a La Paz jugó básicamente un papel de dirigente neutral ajeno a las facciones. Los moderados aceptaban las diversas reformas sociales, pero presionaban al régimen para que mantuviera su base de clase media; esa ala también exigía una modernización de la economía, aun a costa de algunos de los objetivos sociales de la revolución. Dada la terminación de la fase inicial destructora de la revolución y la permanente pesadez de la economía nacional, probablemente era inevitable que los elementos moderados conservadores acabaran imponiéndose. Aunque las dos tendencias rompieron ideológicamente, no había duda que trabajaban en estrecha conjunción; así, cuando Paz acabó su presidencia se aceptó que Siles Zuazo le sucediera en el cargo y que Lechín sería el siguiente candidato oficial. Para sellar este acuerdo, Siles aceptó como compañero de fórmula y candidato a la Vice-Presidencia a Ñuflo Chávez Ortiz, Ministro de Trabajo y Asuntos Campesinos.

En las elecciones de junio de 1956 se puso en evidencia que el MNR no tuvo mayor problema en movilizar su poderosa coalición campesina y obrera, obteniendo una cómoda mayoría de unos 790.000 votos; pero la erosión del apoyo de las clases medias también quedó a la vista con los 130.000 votos, mayoritariamente urbanos y 'blancos', que captó FSB y le convirtieron en el segundo partido. Para tratar de reconquistar la base de la inquieta clase media y para reforzar sus ideas de desarrollo, el gobierno de Siles decidió aceptar los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI) referentes a la política fiscal. Dada la situación cada vez más difícil de la economía interna y la incapacidad del régimen para sobrevivir sin las subvenciones directas de EE. UU., eran inevitables algunas concesiones. Siles sólo tenía tres opciones: generar el capital que necesitaba socializando completamente la economía, lo que no quería hacer por razones ideológicas; seguir con el programa inflacionario hasta que se produjera un derrumbe total y/o un golpe falangista acabara con el régimen; aceptar las condiciones de EE. UU. y sonsacarle la mayor ayuda posible para hacerlo al menor costo posible de sus programas sociales. Optó por esta tercera vía.

A fines de 1956 EE. UU.. elaboró su 'plan de estabilización', que Bolivia aceptó en enero de 1957 bajo los auspicios del FMI. Este plan exigía que Bolivia equilibrara su presupues-

to, pusiera fin a la subvención alimenticia de los mineros, redujera los incrementos salariales, creara una sola tasa de cambio de divisas y adoptara una serie de otras medidas colaterales que redujeran la iniciativa y los gastos del gobierno. Ese plan de estabilización fue extremoso para los criterios de la época: se propuso la creación de una moneda estable con un crecimiento inflacionario casi nulo en el plazo de uno o dos años. El plan tuvo éxito: la moneda quedó estabilizada, se eliminaron los déficits del gasto público y COMIBOL logró un presupuesto más equilibrado. De hecho, a comienzos de los años 60 Bolivia pudo dejar las subvenciones directas de EE. UU. a su presupuesto; ingresaban en el país grandes sumas de capital extranjero privado y, sobre todo, público, en forma de préstamos y de inversiones. En las minas aumentó la productividad y empezó a hacerse realidad la estabilidad económica necesaria para el ahorro y las inversiones internas.

Pero el precio fue alto. EE. UU. insistió en que se llevara a cabo el plan sin atender a sus consecuencias políticas. La izquierda se lanzó a una fuerte oposición al gobierno de Siles; el vice-presidente Ñuflo de Chávez renunció y a pesar de las grandes huelgas mineras dirigidas por Lechín en las minas se cerraron las pulperías subvencionadas. Entonces la embajada norteamericana creyó posible aislar y destruir a Lechín, que a los ojos de EE. UU. se convirtió en el enemigo número uno. Así como Siles Suazo nunca empleó la fuerza contra los mineros y obtuvo casi todas las concesiones de la COB mediante sus propias huelgas de hambre y las amenazas de renuncia, nunca rechazó seriamente el ala izquierda del partido. Aunque sostuvo que la estabilización y los recortes eran las únicas medidas que podían garantizar las victorias de la izquierda y suprimir el ala derecha y FSB, aceptó la idea de que Lechín y la COB le sucedieran en 1960. Pero la permanente presión de EE. UU., ahora influenciada por una serie de liberales de la guerra fría que fueron embajadores durante las presidencias demócratas, fue inflexible contra Lechín y la izquierda. Con la esperanza de disminuir esa hostilidad, Lechín y Siles convinieron en una plataforma de compromiso para el tercer periodo presidencial: Paz Estenssoro volvería a dirigir el partido y Lechín sería su vice-presidente. Lechín viajó a Washington e, incluso, a Formosa para entrevistarse con los dirigentes de China Nacionalista, aceptando así

simbólicamente las peores posiciones de EE. UU. en la guerra fría. Cuando se trató de pagar el precio de un acuerdo para una importante inyección de inversiones alemanas y estadounidenses en COMIBOL ('Plan Triangular'), también aceptó eliminar el cogobierno obrero en las minas.

Pero, a diferencia de Siles, en su segunda presidencia (1960-1964) Paz se mostró implacablemente opuesto al subsistente poder de la COB y de los mineros: rearmó al Ejército, justificándolo sin cesar ante EE. UU. como un medio para evitar la subversión comunista; permitió que los militares norteamericanos infiltraran la estructura de comando boliviana y promovieran sus ideas de 'subversión interna' y de contrainsurgencia en el entrenamiento del Ejército boliviano. Paz también impidió que las milicias se rearmaran e hizo cuanto pudo para que la balanza del poder militar volviera a inclinarse del lado del Ejército, a costa de las milicias civiles y obreras. Pero entonces Siles y Lechín se unieron y rompieron con el partido, destruyendo así temporalmente al MNR. Contando solamente con el Ejército y los campesinos como sus principales partidarios, Paz escogió a un destacado general, René Barrientos, para que le acompañara como candidato vicepresidencial y se arriesgó a competir por un tercer mandato.

Las elecciones de 1964 dieron a Paz su tercera presidencia, pero con la oposición de la izquierda y el centro del MNR y la inflexible enemiga de FSB resultaba inevitable que los militares fueran alentados a volver al poder. Así, en noviembre de aquel mismo año las Fuerzas Armadas derrocaron a Paz en un golpe de estado relativamente incruento, poniendo el gobierno en manos de una junta encabezada por el vicepresidente Barrientos. Los militaron volvían, por tanto, a la política nacional y seguirían siendo en ella la fuerza hegemónica hasta 1982. Había acabado la fase revolucionaria de la Revolución Nacional, a la que seguiría una larga reacción termidoriana.

Durante los 18 años siguientes diversos grupos e instituciones de la sociedad nacional lucharían para dominar las fuerzas desencadenadas durante la Revolución Nacional: el ejército, los campesinos, los obreros organizados y los partidos políticos (tradicionales y nuevos), todos buscaron el poder. De esta prolongada, encarnizada y violenta lucha surgió un sistema po-

lítico más articulado y una sociedad más compleja, pero a un alto precio para todos. Aunque los dirigentes de la oposición del MNR supusieron que el derrocamiento de Paz Estenssoro era una transición temporal, la realidad fue que en 1964 había empezado un nuevo periodo político. La joven oficialidad militar que había llegado al poder con el MNR construiría una compleja alianza con los campesinos, mostrándose hostil a la política democrática y a la clase obrera organizada. Esa oficialidad justificaba la legitimidad de los gobiernos militares autoritarios como la única vía de modernización (ideología prevalente por entonces en toda América). Muchos de esos regímenes también encontrarían apoyo en los sectores más recientes de las clases más adineradas y de las poderosas élites regionales que consideraban a los militares más proclives a favorecer sus intereses que al viejo MNR.

Sin embargo, el cambio institucional (a menudo, ascensos personales caóticos y conflicto ideológico dentro de la propia institución castrense), a diferencia de las Fuerzas Armadas más tradicionales y firmemente jerárquicas de Chile, Argentina y Brasil, generó una oficialidad mucho más impredecible que muchas otras latinoamericanas. Así, en la época de los regímenes militares hubo muchos cambios radicales de opinión, abruptos cambios de régimen y una permanente aparición de personalidades nuevas e inesperadas; pero a pesar de todos los cambios muy rápidos y, a menudo, aparentemente fortuitos, hubo una serie de convenios fundamentales, sólo raramente quebrantados. Esas coaliciones se basaban en la aceptación de las reformas socioeconómicas básicas de la Revolución Nacional por parte de los militares y, sobre todo, un firme compromiso con la Reforma Agraria y la movilización del campesinado; fue, en efecto, su reconocimiento y activa aceptación del campesinado lo que tipificó esos nuevos regímenes militares como semipopulistas, esencialmente basados en una alianza con frecuencia informal, pero plenamente funcional, entre el campesinado y las Fuerzas Armadas. Todos estos rasgos ya se hicieron plenamente visibles en el primero de esos regímenes militares, el de Barrientos, quien estableció la mayoría de esas normas básicas que normaron esos regímenes militares de los años subsiguientes.

El régimen barrientista mostró rápidamente su implacable hostilidad contra el sindicalismo y la izquierda. Buscó apoyo en una nueva coalición gubernamental de partidos en la que coincidían desde los demócratas cristianos hasta FSB; pero desde un comienzo apoyó incondicionalmente las reformas revolucionarias que afectaban a los campesinos (Reforma Agraria y voto universal). Uno de los primeros actos de su gobierno (reiterado por los demás gobiernos posteriores, de izquierda o de derecha) fue declarar su indesviable apoyo a la Reforma Agraria y no tardó en incrementarse la distribución de títulos de propiedad. También dio pleno respaldo a los programas de bienestar y educación rural y a los sindicatos campesinos (que conservaron sus armas y recibieron protección). De hecho, en el campo el gobierno de Barrientos fue el más popular después del de Paz Estenssoro: hablante nativo del qhishwa, Barrientos dominó los sindicatos campesinos y logró fama por su generosidad en comprar la ayuda individual y el apoyo indígena. El resultado fue un régimen militar contrario al proletariado urbano y conservador. Resumiendo, fue una poderosa coalición que sólo dejó de funcionar por la descarada corrupción y la inestabilidad de las Fuerzas Armadas.

El gobierno de Barrientos logró desmantelar la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), sacó unos 6.000 trabajadores de COMIBOL y no trepidó en masacrar en la noche de San Juan de 1967 a los huelguistas mineros de Catavi-Siglo XX. Barrientos logró decapitar temporalmente el movimiento sindical, pero no eliminó su posible poder. Los obreros bolivianos se habían ido radicalizando en los años 40 y supieron resistir las reiteradas intervenciones e ilegalizaciones que una serie de regímenes militares trató de imponer desde 1964; pero la casi constante presencia de tropas en las minas logró aislar y controlar temporalmente por primera vez desde 1952 el otrora todopoderoso movimiento sindical.

La combinación de un aumento de los precios del estaño en el mercado internacional, de la llegada de capitales extranjeros y la forzada disminución de la fuerza de trabajo y de los salarios, produjo en 1966 el primer superávit de COMIBOL. A partir de entonces comenzó una tendencia duradera en la producción y en las cotizaciones que hizo de COMIBOL una importante fuente de ingresos gubernamentales. También se pro-

dujeron cambios fundamentales en el sector de la minería privada plenamente alentados por todos los gobiernos del MNR mediante subsidios especiales y otros tipos de ayuda, los sectores de la pequeña y mediana minería también aumentaron su producción. Las minas medianas adquirieron especial importancia y al final de los años 60 habían alcanzado a representar alrededor de un tercio de la producción total de estaño. Así, pues, no sólo COMIBOL crecía, sino que todo el sector minero se iba, haciendo más complejo, con un nuevo grupo de mineros medianos que aparecía como una poderosa fuerza del sector privado. En 1965 fue aprobado un liberalizado código de inversiones extranjeras por el cual EE. UU. pudo arrendar a COMIBOL la 'Mina Matilde' de zinc; y la 'Gulf Oil' obtuvo nuevas concesiones. Todos esos factores económicos consolidaron la posición política de Barrientos y en las elecciones generales de 1966 pudo presentarse con una poderosa coalición de campesinos, grupos enriquecidos, los políticos conservadores falangistas y miembros de la burocracia gubernamental. A pesar de su victoria en todo el campo y de la aparente desintegración de la oposición convencionalmente izquierdista, la hostilidad obrera al régimen no cesó y por primera vez desde 1952 el gobierno enfrentó un problema de rebelión armada.

Si bien muchos pequeños grupos guerrilleros -en su mayoría de base urbana intelectual- comenzaron a actuar durante la presidencia barrientista, el caso más importante de alzamiento armado tuvo un origen totalmente externo al escenario nacional. En noviembre de 1966 el revolucionario argentinocubano Ernesto 'Che' Guevara llegó a Bolivia y estableció su campamento en el Departamento de Santa Cruz, aparentemente más interesado en organizar un cuartel general guerrillero para actuar en Argentina y Brasil que en Bolivia. Aunque estaba en contacto con el Partido Comunista Boliviano (PCB), no hizo ningún intento de entrar en contacto con los mineros, lo que puede explicarse porque por entonces los campamentos mineros estaban ocupados por el Ejército, siendo escenarios de violencia y conflictos casi diarios. El 'Che' parecía dedicarse más bien a establecer un centro de entrenamiento sumamente aislado para su minúsculo grupo como preparación para otro tipo de aventuras.

Pero en marzo de 1967 su grupo guerrillero tuvo el primer choque armado con el Ejército. Con un fuerte apoyo de EE. UU. Barrientos y el Comandante de Ejército, el Gral. A. Ovando, aplastaron el movimiento rebelde. En abril fue apresado Régis Debray, el periodista francés que acompañaba al 'Che' y en octubre los últimos guerrilleros murieron o huyeron y el 'Che' fue ejecutado. Así Barrientos pudo sobrevivir a la oposición armada de la izquierda y conservar un amplio apoyo popular entre el campesinado y la clase media. No hay grandes dudas que cuando en abril de 1969 murió en un accidente aéreo, mantenía el absoluto control del país. A pesar de la corrupción de su gobierno, de la defección de su íntimo amigo y Ministro del Interior (el coronel Antonio Arguedas) y de otros problemas, Barrientos demostró ser un político tan consumado que sin duda habría ganado unas segundas elecciones.

La casta militar que apoyaba a Barrientos fue incapaz de mantener su posición ideológica y política, quedando divididos y corruptos. A pesar de sus antecedentes y experiencia comunes, sus gustos políticos divergían ampliamente, de manera que nada garantizaba que sus trayectorias pasadas permitieran predecir sus futuras posiciones políticas. Todo esto se puso en evidencia en los gobiernos que sucedieron a Barrientos. De 1969 a 1982 se sucedieron los gobiernos militares, con unas líneas políticas que abarcaron desde la extrema izquierda hasta la derecha reaccionaria, pasando por la reformista. Las políticas gubernamentales dependieron enteramente de las personalidades e ideas de cada oficial que se apoderó del poder, sin que de ninguna manera reflejaran una posición coherente de las propias Fuerzas Armadas. Si la mayoría de los estados mayores sudamericanos de ese periodo presentaban una personalidad corporativa y una línea común frente al mundo civil, en Bolivia esto no ocurrió.

El general Alfredo Ovando, socio de Barrientos en el golpe de Barrientos de 1964 y jefe de estado mayor, acabó haciéndose del poder en septiembre de 1969: era un reformista moderado de tradición movimientista y, en realidad, trató de llevar lentamente su gobierno a un acomodo con la izquierda. En octubre de 1969 estatizó la '*Gulf Oil Co. of Bolivia*' y a comienzos de 1970 volvió a legalizar la COB y la FSTMB, permitió a Lechín volver a la conducción sindical y retiró por primera vez

desde 1964 las tropas de las minas. También trató de movilizar la antigua izquierda en un nuevo MNR revitalizado; pero al final Ovando no pudo ni movilizar el apoyo popular que había logrado Barrientos ni organizar un sistema coherente de partidos políticos que apoyara su régimen. Al mismo tiempo el Ejército se disgustó con Ovando, que había permanecido alrededor de nueve años en el poder en calidad de jefe de estado mayor y/o de presidente. Así que también intervinieron las ambiciones frustradas de los militares. El resultado fue una decisión de octubre de 1970 de sustituir a Ovando por el gral. Juan José Torres (su anterior jefe de estado mayor), dando inicio a uno de los gobiernos más extraordinarios de la historia boliviana: entre octubre de 1970 y agosto de 1971 Torres demostró ser el general más revolucionario e izquierdista de cuantos han gobernado el país.

Torres, que en su juventud había sido falangista, actuó en la campaña contra el 'Che' y apoyó las acciones del Ejército durante el periodo que culminó en su golpe de estado Hizo su aparición como un político idealista de izquierda que deseaba ampliar la 'apertura democrática' de Ovando incluyendo una movilización todavía más radical de los obreros y de los políticos de izquierda. Uno de sus primeros actos al tomar posesión de sus funciones fue aceptar la ayuda financiera de la URSS y su bloque para COMIBOL. Esta ayuda ya había sido ofrecida varias veces en el pasado, pero la presión de EE. UU. había hecho diferir su aceptación al MNR y a los anteriores gobiernos militares. Torres también suscribió contratos para la construcción de fundiciones de estaño, liberando así por primera vez a Bolivia de su dependencia de las fundiciones europeas y norteamericanas para procesar sus minerales. Al final, los soviéticos iban a proporcionar casi la misma asistencia financiera a COMIBOL que EE. UU., casi 250 millones de dólares cada uno.

Torres también anuló el contrato de COMIBOL con una empresa estadounidense para extraer estaño de los desmontes de Katawi y rescindió el contrato con la '*U. S. Steel*' para la explotación de zinc en 'Mina Matilde'. Aunque este tipo de sentimiento hostil a las empresas estadounidenses tenía sus precedentes, Torres todavía dio otro paso más al expulsar del país al Cuerpo de Paz, alegando que fomentaba la práctica del aborto entre el campesinado. Si bien estas medidas antinorteamerica-

nas contaron con el apoyo popular, provocaron una fuerte reacción de parte de EE. UU., que ahora se sentía por primera vez desde 1952 totalmente extrañado de Bolivia.

El hecho de que Torres pudiera llevar su oposición a esos extremos en buena parte era reflejo de las nuevas condiciones de la economía boliviana. A comienzos de los años 70 Bolivia comenzaba a cosechar los frutos de las inversiones económicas y sociales realizadas por el MNR de 1952 en adelante: el desarrollo de un moderno sistema carretero, el crecimiento de la agricultura comercial cruceña, las fuertes inversiones en COMIBOL y, sobre todo, en YPFB, y unos precios en ascenso de los minerales en el mercado internacional, todo ello se combinó para producir un importante crecimiento de la economía nacional. También hay que tomar en cuenta los espectaculares avances del alfabetismo y de la educación fiscal, así como la liberación de recursos humanos mediante la abolición de todas las restricciones a que antes de 1952 estaba sometida la población rural, incrementando así el valor del capital humano del país. El gobierno boliviano dependía mucho menos de la asistencia directa de EE. UU. para mantener la cuantía de las inversiones estatales o incluso para aportar mayor financiamiento para el desarrollo. Entre las fuentes internacionales de financiamiento y los inicios de un importante desarrollo de las inversiones en la minería y en la agricultura comercial, Bolivia se encontró relativamente libre de su anterior dependencia de la generosidad estadounidense.

Los esfuerzos de Torres por crear una izquierda unida en el frente interno, fueron menos felices. Quebrada por las divisiones del Partido Comunista en sus alas moscovita y maoista, la subdivisión del POR en varias facciones, la COB, Lechín y sus partidarios no pudieron ponerse de acuerdo en lo que había que hacer y, en los hechos, se mostraron temerosos de la creciente radicalización de sus aliados radicales de otrora de la clase media. Al mismo tiempo sus experiencias con Barrientos los hacía precavidos contra una alianza con los poderosos sindicados campesinos. Pero a comienzos de 1970 la COB creó una asamblea política que trató de dar cierta unidad a la antigua izquierda del MNR; ésta fue la base de una denominada 'Asamblea del Pueblo' organizada en junio de 1971 con el fin de que reemplazara al Parlamento; pero no obtuvo ni la legitimidad del

voto popular ni los poderes de una legislatura boliviana (aunque funcionó en el Palacio Legislativo). Acabó estando conformada por 218 delegados: de ellos, sólo 23 representaban a las confederaciones campesinas, frente a 123 delegados de los sindicatos (de los que la FSTMB sola contaba con 38). También formaban parte de ella todos los principales grupos izquierdistas y un nuevo partido poderoso, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), acabado de nacer con el ala izquierdista del Partido Demócrata Cristiano y el sector universitario del antiguo MNR. Pero la izquierda radical y los obreros no quisieron dar un apoyo pleno al gobierno relativamente inestable de Torres. Aunque esa Asamblea atemorizó a la derecha y al centro con actos simbólicos de desafío, no aprobó ninguna medida legislativa de importancia. Por su parte, el gobierno se negó a entregar armas a los obreros y a desafiar de alguna forma a las Fuerzas Armadas.

La agitación de la Asamblea del Pueblo creó el apoyo civil a un golpe de estado militar. En enero de 1971 el coronel Hugo Bánzer, director del Colegio Militar, intentó dar ese golpe de estado, pero el Ejército permaneció leal al gobierno. En los meses subsiguientes la Asamblea apoyó la incautación obrera de **El Diario**, de algunas pequeñas minas y de haciendas de S. Cruz por parte de los maoistas. Así, cuando Bánzer volvió a dar un golpe de estado en agosto de 1971, la izquierda no pudo pararle los pies: con el apoyo de los sectores derechista y centrista del MNR de Paz Estenssoro y de FSB, Bánzer recibió un importante financiamiento de la élite regional cruceña, nerviosa por las amenazas de ampliar la Reforma Agraria a las nuevas zonas de la agricultura comercial. Claro que el derrocamiento de Torres encontró alguna resistencia: aunque el Presidente se negó a abrir a los obreros las puertas de los arsenales, universitarios y trabajadores se opusieron a los militares y las tropas leales trataron de defender a Torres. El resultado fue que el golpe de estado de Bánzer de 1971 fue el más sangriento desde la rebelión de abril de 1952.

Bánzer comenzó a gobernar precisamente cuando los cambios de la estructura internacional de los precios de minerales acababan de afectar profundamente la economía boliviana: de 1970 a 1974 casi se triplicó el valor de las exportaciones bolivianas (de 226 a 650 millones de dóls.). Dadas las anteriores dos décadas de inversiones y cambios estructurales, esta nueva

riqueza quedó fácilmente absorbida y se produjo un auge económico: no sólo hubo importantes inversiones nuevas en la minería mediana y una expansión en las exportaciones de otros minerales fuera del estaño, sino que la región de S. Cruz ahora tenía una significativa producción excedentaria y por primera vez el país exportó productos agrícolas (sobre todo, azúcar y algodón). La construcción urbana conoció un auge y hubo incluso cierto desarrollo del sector manufacturero.

Simultáneamente las dos décadas de una importante inversión en la educación acabaron teniendo impacto: dentro del gobierno y de sus organismos productivos autónomos surgió un grupo de expertos técnicos que aportó al mismo una nueva fuente de poder y de conocimientos especializados. Además de la aparición de este nuevo sector profesional y de servicios, se produjo el ascenso de nuevas élites regionales. A este respecto, es sorprendente el espectacular crecimiento de la ciudad de S. Cruz de la Sierra, pues pasó de ser la cuarta ciudad en los años 40 a la segunda en los años 70, además de ser una metrópoli urbana avanzada, conectada con el resto del país por carreteras asfaltadas hábiles todo el año y vinculada con el resto del mundo por vuelos internacionales diarios. La expansión cruceña trajo un profundo cambio a los grupos de poder nacionales y regionales. Dadas las importantes inversiones en los sectores de hidrocarburos y agrícola de la región cruceña y el crecimiento de su población, fue inevitable que sus poblaciones mayoritariamente blanca y chola reclamaran mayor voz en la toma de decisiones. Por primera vez en la historia republicana existía una fuente importante de poder económico y político fuera de las tradicionales regiones altiplánica y valluna.

El régimen banzerista siguió la senda de sus predecesores de impulsar la Reforma Agraria y de alentar la activa colonización de los llanos orientales: otorgó más títulos de propiedad y benefició a más familias campesinas que cualquier otro gobierno anterior, civil o militar: de los 31 millones de ha. distribuídas de 1953 y 1980 entre 434.000 familias campesinas, alrededor del 81 % de la tierra llegó al 62 % de todas las familias durante los gobiernos miltares de 1964-1980 y de ella, más de la mitad correspondió a Bánzer. Pero, a pesar de este fortalecimiento de un aspecto fundamental del Pacto Militar-Campesino, Bánzer fue el primero de los generales que redujo la impor-

tancia de los campesinos en la vida política nacional, en gran parte a causa de las nuevas demandas procedentes de ese sector. El aumento de la población en las zonas rurales, la consiguiente fragmentación de las parcelas y la aparición de una nueva conciencia de los campesinos como productores agrícolas para los mercados urbanos, comenzó a tener efectos sobre las poblaciones rurales. Ya no le bastaban los títulos, sino que querían créditos, apoyo a los precios y otros tipos de asistencia gubernamental para mejorar su capacidad de maniobra en los mercados. Por ello no fue casual que la primera confrontación y masacre entre campesinos y militares desde 1952, sucedida en el valle de Cochabamba en enero de 1974, fuera efecto de las protestas campesinas contra los precios de los alimentos impuestos por el gobierno.

El gobierno de Bánzer también aceptó las ideas antidemocráticas que por entonces predominaban en el continente. El modelo brasileño fue un ejemplo para los militares bolivianos: se sostenía que el gobierno democrático acababa desembocando en el caos social y que sólo 'despolitizando' a esas masas el desarrollo económico podía avanzar de una forma racional; con una cuidadosa tutela y la participación 'controlada' se podía producir una rápida 'modernización'. La intervención militar dejó de ser un asunto transitorio, convirtiéndose en una alternativa a la política democrática de largo plazo. Casi inmediatamente después de subir a la presidencia, Bánzer declaró ilegales a la COB y a la FSTMB y les negó reconocimiento oficial a todos los partidos situados a la izquierda del MNR tradicional. Esto dio lugar al encarcelamiento de muchas personas y al exilio de la dirigencia del MIR y del PRIN (título por entonces de la vieja ala de Siles Zuazo-Lechín del MNR), sin que se retrocediera ante el uso sistemático del asesinato y de la tortura.

Bánzer se dedicó inmediatamente a resolver el conflicto que había explotado con Torres: se aprobó una Ley de Inversiones nueva y más liberal; se pidió nuevamente y obtuvo una importante ayuda para la dotación material y personal de las Fuerzas Armadas; pero la nueva relación con la URSS y sus estados satélites de Europa oriental había adquirido demasiada importancia para que incluso el gobierno banzerista la rechazara: así, pues, el bloque socialista siguió prestando la ayuda a largo plazo para el desarrollo de las fundiciones de estaño y de otros mi-

nerales. El gobierno de Bánzer también cambió abruptamente la tradicional alianza con Argentina, inaugurando una nueva e íntima relación con Brasil: reflejando los intereses cruceños a largo plazo por abrir su economía y sus productos a los mercados brasileños, el gobierno de Bánzer suscribió una importante serie de convenios económicos que priorizaban la participación brasileña sobre la Argentina en el desarrollo de los recursos naturales bolivianos (sobre todo, los petrolíferos y siderúrgicos de la región de Santa Cruz).

Bánzer trató de crear un partido político nacional, forzando a sus dos aliados, FSB y el ala Pazestensorista del MNR, a aliarse con su Frente antes de ingresar en el gobierno. Este intento de crear un gobierno populista militar de derecha acabó siendo poco atractivo para el propio Bánzer, quien a fines de 1974 anunció un giro brusco de todo su gobierno llevando a cabo un 'autogolpe' (así fue calificado), por el que formó un gobierno exclusivamente militar, apoyado por los tecnócratas y ex-políticos sin partido; al desligarse del MNR y exiliar a Paz Estenssoro, hizo saber que todos los partidos, incluídos los de centro y de derecha, quedaban fuera de la ley y que a partir de entonces gobernarían las Fuerzas Armadas, sin ningún tipo de concesiones democráticas.

La decisión de romper abruptamente con la tradición era clara consecuencia de dos procesos importantes, uno internacional y otro interno. El primero y más importante factor era el derrocamiento del gobierno de Allende en Chile (septiembre de 1973) y el inicio del gobierno de Pinochet: para Bánzer estaba claro que en el continente se iba imponiendo el modelo de gobiernos autoritarios no democráticos y antipartidos. El segundo factor era el crecimiento extraordinario de la economía nacional que ganaba el apoyo popular al régimen banzerista a pesar de su proceder antidemocrático: entre 1973 y 1974 el precio del estaño en el mercado mundial casi se duplicó, lo que se tradujo en una duplicación del valor total de las exportaciones nacionales y la generación del mayor superávit comercial de la historia del país. Los precios también ascendentes del petróleo convirtieron repentinamente la relativamente modesta producción petrolífera de Bolivia en una bonanza exportadora (en 1974 representó el 25 % del valor de las exportaciones). Dado que las exportaciones petrolíferas cesaron con la década, fue de mayor impor-

tancia el comienzo de la exportación de las muy abundantes disponibilidades de gas natural, iniciadas en 1972 y que ya en 1974 representaban el 4 % de todas las exportaciones, cifra que aumentaría sin cesar durante lo que quedaba del siglo; en 1971 también comenzaron las exportaciones de estaño fundido y refinado, rubro que en 1974 equivalía al 9 % del valor total de las exportaciones. Todo ello significó que las exportaciones tradicionales de minerales de estaño y de otros minerales no refinados había disminuído desde aproximadamente el 90 % del valor total de las exportaciones (años 60) a un poco menos del 50 % (mitad de los años 70). Finalmente, en 1970 comenzaron las primeras exportaciones de productos agrícolas (azúcar y algodón) y crecieron ininterrumpidamente en los años siguientes, representando en 1974 el 6 % del valor total de las exportaciones: aunque éste era todavía un rubro relativamente pequeño dentro del conjunto de las exportaciones, durante el periodo 1970-1976 fue el segundo en ritmo de crecimiento (con un índice de crecimiento promedio anual del 49 %), detrás de las exportaciones de gas natural, con un impresionante crecimiento anual del 50 %.

El auge de los primeros años 70 parecía ser un reflejo del cambio a largo plazo en el carácter de las exportaciones bolivianas y del crecimiento económico y no del clásico ciclo de auges a corto plazo emergente de los cambios repentinos de los precios internacionales. El Dpto. de S. Cruz ahora exportaba sin cesar su producción agrícola y cuando los precios del azúcar cayeron, el paso al algodón puso de manifiesto que existía una infraestructura básica capaz de superar los vaivenes de la demanda mundial. También se hizo evidente que las exportaciones de gas natural a sus vecinos (fundamentalmente, Argentina; luego, Brasil) constituía un mercado que no cesaría de crecer en los años siguientes. Finalmente, la subida a largo plazo de los precios de los minerales ajenos al estaño y la exportación de metal de estaño refinado parecía prometer al país un próspero futuro económico de larga duración. Los socios comerciales de Bolivia también cambiaban: dejó de depender de ningún socio comercial, como había sido el caso en el pasado. Ahora la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) absorbía un tercio de sus exportaciones; Europa otro 20 %; EE. UU., otro tercio; y el resto, los países asiáticos. Por otro lado, la procedeń-

cia de las importaciones también era una combinación muy variada: la importancia de la ALALC y Asia iba en ascenso, mientras que la de Europa y EE. UU. decrecía.

El aumento extraordinario de la balanza comercial favorable llevó a una gran prosperidad de la construcción: las ciudades principales (La Paz y S. Cruz de la Sierra) se poblaron de rascacielos, cambiando toda la estructura arquitectónica urbana de esas dos ciudades. Fue reparado el sistema aeroportuario y en S. Cruz de la Sierra se construyó uno internacional nuevo. Todavía tuvo mayor trascendencia que la red de carreteras asfaltadas de La Paz llegó hasta Oruro y el lago Titiqaqa: otra carretera cruzó la región cochabambina del Chapare, facilitando así el narcotráfico de la cocaína. El Chapare, que hasta entonces no había producido más del 5 al 10 % de toda la cocaína del país, al final de la década producía más del 70 % del total nacional (casi en su totalidad para el mercado internacional).

Pero el auge se marchitó y Bánzer no pudo controlar la sociedad boliviana profundamente movilizada. Excesos en los presupuestos públicos y una corrupción rampante le obligaron a devaluar la moneda en un 66 % por primera vez desde el plan de estabilización de 1956. La inflación resultante provocó alborotos y la compresión de los salarios demostró no ser más que paños calientes. A pesar del acantonamiento de tropas en las bocaminas y la presunta liquidación de la FSTMB y la COB, prosiguieron las huelgas y la violencia obrera. A comienzos de 1976 hubo huelgas nacionales y Bánzer tuvo que cerrar las universidades. El gobierno, no sólo no pudo eliminar los sindicatos, sino que también perdió la mayor parte del voto nacionalista de clase media cuando admitió el fracaso de las negociaciones con Chile para obtener una salida al mar. A pesar de los desesperados intentos de Bánzer por lograr una solución a cualquier precio, incluso la propuesta de un canje territorial por un puerto, nada se obtuvo de Pinochet y a fines de 1976 fueron abandonadas las negociaciones. Finalmente, la clase media y alta, que aportaba la base civil de esos regímenes militares en el resto de América Latina, en Bolivia demostró mucha mayor voluntad de confiar sus intereses a un sistema de partidos democráticos que a un gobierno militar desconocido. Viendo la corrupción y la indisciplina de la oficialidad, la élite civil no confió en el desenlace de un golpe de estado contra Bánzer, pues no

había ninguna forma de saber si el siguiente caudillo sería un Torres, un Barrientos o un Bánzer.

A comienzos de 1977 Bánzer prometió elecciones para 1980 y en noviembre, tres años después de su promulgación, derogó todos los decretos autoritarios; pero las Fuerzas Armadas se habían hecho tan odiosas, que se vió forzado a anunciar que no sería candidato; y a finales de aquel año tuvo que anticipar las elecciones para 1978. Pero ni siquiera esto bastó, pues no tardó en surgir la exigencia de una amnistía total para los 348 dirigentes sindicales y políticos exiliados. Cuando Bánzer se negó a acceder a esa exigencia, en los últimos días de 1977 un pequeño grupo de esposas de dirigentes mineros inició una huelga de hambre en el Arzobispado de La Paz; la Iglesia apoyó decididamente el movimiento y en las primeras semanas de enero de 1978 más de 1000 personas de todo el país se habían unido a la huelga de hambre. Los huelguistas exigían una amnistía total y también libertad sindical. La huelga fue tan abrumadora, que Bánzer se vió obligado a capitular suscribiendo un documento de aceptación con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que encabezó el movimiento.

Los exiliados, al retornar, se apoderaron de los sindicatos y desbancaron a los interventores gubernamentales; a los pocos días la FSTMB y la COB renacieron con la misma dirigencia de 1971. Las huelgas, la agitación obrera y una febril actividad política llevó a Bánzer a despedirse de la idea de mantenerse en el cargo. Anunció que el Gral. Juan Pereda Asbún sería su sucesor y que el nuevo gobierno restablecería la democracia. El candidato opositor a los militares fue Hernán Siles Zuazo y una nueva agrupación de partidos políticos de centroizquierda: al abandonar en 1972 el MNR dominado por Paz Estenssoro, Siles había fundado en el exilio chileno su propio Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI). El MNRI se unió al MIR y a otros grupos para formar poco antes de las elecciones de julio una débil coalición electoral: la Unidad Democrática y Popular (UDP). Para sorpresa de los militares, las elecciones demostraron que los campesinos ya no votaban en rebaño: tanto campesino y las masas urbanas apoyaban la fórmula de Siles, que el gobierno vió que iba a perder las elecciones y los militares decidieron dar un golpe de estado.

Pero el gobierno de Pereda sólo duró unos pocos meses y en noviembre subió una nueva junta militar presidida por el Gral. David Padilla, quien no sólo propuso elecciones libres, sino que anunció que el gobierno no tendría un candidato propio ni apoyaría a ninguno civil. Así empezó uno de los periodos políticamente más creativos de la historia boliviana contemporánea: en el lapso de cuatro años y de tres elecciones presidenciales, las antiguas tradiciones electorales cambiaron de forma importante, dando paso al sistema político nuevo y más complejo vigente hasta nuestros días: en lugar de un partido popular de masas basado en el apoyo campesino, desde 1978 hasta hoy surgió una multitud de partidos competidores apoyados por complejas combinaciones de votantes urbanos y rurales; Bolivia había creado un electorado moderno.

Esta nueva diversidad del electorado nacional reflejaba los cambios tanto de la sociedad como de la economía. Como reveló el censo de 1976, Bolivia acusaba plenamente el impacto de la introducción del bienestar social moderno, cifrado en la educación y la salud. La introducción de unos servicios mínimos de salud prácticamente para toda la población significó que las tasas de mortalidad del país por fin habían disminuído y estabilizádose en unos niveles bajos. Con estas tasas de mortalidad en descenso y las altas tasas de natalidad (de aproximadamente el 44 ‰), la población comenzó a crecer a un ritmo rápido. Así, a pesar de una tasa general de mortalidad del 18 ‰ y de una extraordinariamente alta de mortalidad infantil del 202 ‰ nacimientos vivos a fines de los años 70, desde 1950 el país tuvo un índice de crecimiento del 2.6 % anual, con un crecimiento biológico de la población total de 2.7 millones (1950) a 4.6 millones (1976).

Por otra parte, este aumento de población fue mucho más urbano y con una educación mucho mejor que la de las generaciones precedentes: mientras que en 1950 el total de personas que vivían en pueblos y ciudades de cualquier tamaño era del 34 %, en 1976 esta cifra había saltado al 50 % (de la que el 42 vivía en poblaciones de más de 2.000 habitantes). En 1950 sólo pasaba por alfabeta el 31 % de la población en edad escolar o superior a ella; en cambio, en 1976 la cifra había pasado al 67 %, con más del 80 % de los niños de entre 10 y 14 años de edad escolarizados. Finalmente, el porcentaje de hispanoha-

blantes había aumentado en tal proporción, que en 1976 el español ya era por primera vez la lengua mayoritaria de Bolivia. De los 4.6 millones de personas registradas, 1.6 millones pasaban por monolingües españolas y otros 1.7 millones, por bilingües, lo que en conjunto significaba el 72 % de la población total. Los monolingües en lenguas indígenas, a pesar de los índices sin precedentes del crecimiento de la población rural, ahora habían decrecido: en el cuarto de siglo intercensal los monolingües quechua habían descendido de 988.000 a 612.000 y los monolingües aymara, de 664.000 a 310.000. El crecimiento del bilingüismo explica el encaramamiento del español en 1976 como lengua mayoritaria, lo que era otra prueba del impacto del sistema escolar en las regiones rurales: no sólo había habido un enorme aumento de la población chola, como demuestran aquellas cifras, sino que –factor todavía más importante- los campesinos indígenas del campo ahora utilizaban en gran proporción el español junto a sus lenguas propias.

Así, el electorado boliviano de 1979 estaba mejor educado, era más alfabeto y más hispanohablante que en cualquier otro momento de la historia del país. Tanto Paz Estenssoro y su resucitado MNR como Siles y su alianza UDP encontraron apoyo entre los campesinos y los obreros. Por otra parte, las nuevas clases profesionales crearon nuevos partidos y coaliciones para expresar sus propias necesidades. Y de repente, los partidos viejos y nuevos se encontraron con una gama equilibrada de agrupaciones de la derecha, del centro y de la izquierda. Incluso el otrora despreciado Bánzer logró organizar su propio partido (que obtuvo cierto apoyo regional de importancia) y se convertiría en uno de los principales políticos nacionales, caso raro de evolución en la política de los países latinoamericanos.

Estas tan complejas divisiones explican por qué en las elecciones de julio de 1979 Paz Estenssoro y Siles Zuazo encabezaron las fórmulas opositoras y por qué otro viejo político de los días del MNR, Walter Guevara Arze, aparecería como el candidato de compromiso cuando los dos dirigentes llevaron la elección a un empate. Mientras los dirigentes nuevos y más jóvenes no pudieran medir sus fuerzas en unas nuevas elecciones abiertas, prefirieron apoyar a los héroes de épocas pasadas. Las elecciones de 1979 fueron extraordinarias: una de las más limpias de la historia nacional, llevaron a las urnas a 1.6 millones

de bolivianos que dieron su voto a una mayoría de coaliciones y partidos que mostraban una fuerza bastante pareja en todas las regiones, de las que Santa Cruz acabó pasándose al campo antibanzerista.

Aunque Paz Estenssoro ganó las elecciones por simple mayoría, los partidos no pudieron ponerse de acuerdo sobre el candidato que sería presidente, sobre todo porque las demás fórmulas todavía excluían a Bánzer y a su nuevo partido de cualquier negociación. Como anticipando una dura batalla, el Congreso acabó decidiendo repetir las elecciones el próximo año, nombrando a Guevara (presidente del Senado y viejo camarada de Siles y de Paz) presidente interino hasta las elecciones de 1980. Primer gobierno civil desde 1964, el de Guevara sólo duró unos pocos meses al ser derrocado por una junta militar en noviembre de 1979; pero la oposición política fue tan intensa (con violencia y huelgas generales que dejaron más de 200 muertos), que los militares se vieron obligados a dejar el poder a las pocas semanas. Accedió a la presidencia otro civil de compromiso, Lidia Gueiler, que fue la primera mujer del país que ocupó el cargo y una de las pocas en toda América. La selección de Gueiler también demostró el tremendo apoyo popular dado a la vuelta de un gobierno civil. Ningún partido apoyó el golpe de noviembre de 1979 y las acusaciones de que el MNR de Paz Estenssoro lo había hecho bastaron para cortar el nudo gordiano que se había presentado en las dos elecciones anteriores y que volvería a presentarse en unas terceras elecciones generales, en las que Hernán Siles Zuazo y la UDP obtuvieron una simple mayoría en junio de 1980.

Pero la efímera vuelta de los gobiernos civiles con Guevara y Gueiler costó demasiadas concesiones a la oficialidad de línea dura encabezada por el Gral. Luis García Mesa: negándose a permitir que Siles tomara posesión del cargo, en julio de 1980 las Fuerzas Armadas se hicieron del poder a pesar de la oposición de todos los partidos políticos y grupos civiles; pero el retorno de un gobierno autoritario militar del estilo de los primeros años de Bánzer no destruyó ni los poderosos sindicatos ni el sistema de partidos civiles: aunque puestos fuera de la ley como en ocasiones pasadas, esas organizaciones siguieron manteniendo una poderosa clientela entre la población civil; durante los dos años de predominio militar, hubo una masiva oposi-

ción civil que se manifestó por cualquier medio, desde las huelgas y manifestaciones ilegales hasta las huelgas de hambre, lo que destruyó cualquier apoyo civil posible a esos gobiernos. El nivel de corrupción en las Fuerzas Armadas escaló nuevas cimas con su participación directa en el narcotráfico internacional que nuevamente hacía su aparición. Finalmente el autoritarismo castrense llegó a su punto culminante cuando en enero de 1981 en La Paz asesinó a nueve dirigentes del MIR y organizó escuadrones de la muerte paramilitares según el modelo argentino. El gobierno de García Mesa (que duró hasta agosto de 1981) y de las juntas que le sucedieron fueron tan extremistas, que recurrieron a conocidos fascistas internacionales como el italiano Pier Luigi Pagliai y el alemán Klaus Barbie ('Altmann').

La incesante oposición civil, la corrupción ampliamente denunciada de las Fuerzas Armadas y los problemas económicos no resueltos de los últimos años 70, todo se juntó para acorralar a las juntas de gobierno y finalmente destruyeron incluso el apoyo de la oficialidad. Estos problemas económicos procedían de la dependencia del país de la rentabilidad y funcionamiento de las empresas públicas autónomas: después de siete años de gobierno de Bánzer su administración se encontraba en un caos absoluto. Aunque las exportaciones habían subido de los 200 millones de dóls. en 1971 a más de 700 millones en 1978 y las inversiones públicas en proyectos de desarrollo habían alcanzado un extraordinario 48 % del presupuesto del estado, la mayor parte de esos fondos había sido malgastado. Sobre todo las tres principales empresas (YPFB, COMIBOL y ENAF o empresa nacional de fundiciones) habían sido programadas por encima de su capacidad real y descuidado las nuevas exploraciones; el resultado fue el desastre económico: por doquier disminuía la producción y la deuda pública que generaban esas empresas hacía tambalear todo, además de que el financiamiento de ese sector público se llevaba en 1980 un excesivo 30 % de las divisas. Finalmente vino a añadirse el derrumbe de los precios internacionales de las materias primas de exportación. Si en los primeros años de la década los índices de crecimiento llegaron al 6 % anual, en 1977-1978 habían descendido a cero. Desde comienzos de 1978 el Producto Interno Bruto (PIB) no cesó de descender y al año siguiente ya por primera vez desde los años 50 hubo una tasa negativa de crecimiento; la

crisis de la producción nacional se mantuvo ininterrumpidamente durante la década siguiente, correspondiendo las peores disminuciones anuales en 1982-1983 (-6.6 %). Bolivia ingresaba en una de las depresiones más prolongadas de su historia, crisis que duró hasta los años 90. Dentro del contexto de esta crisis política y económica, los gobiernos violentos y expoliadores se convirtieron en un anacronismo que el país no se podía permitir. Ni los militares, por más represores que fueran, pudieron controlar una sociedad tan movilizada.

CAPÍTULO IX

CREANDO UNA DEMOCRACIA MULTIÉTNICA, 1982-2002

En septiembre de 1982, la forzada renuncia de la última junta militar y la decisión de reconvocar el Congreso que había sido elegido en 1980, acabaron poniendo fin a la era de regímenes militares autoritarios. Reinstalado este Congreso, eligió inmediatamente a Hernán Siles Zuazo. De golpe revivió el sistema político democrático. A la izquierda estaba Siles Zuazo, jefe de la reconstituida ala progresista del MNR, aliada con los dirigentes sindicales tradicionales de la COB, nuevos dirigentes campesinos, diversos partidos izquierdistas y el importante grupo de intelectuales radicales del MIR, dirigido por Jaime Paz Zamora, quien se convirtió en Vicepresidente. A la derecha y centro estaban los partidos que habían participado en las elecciones de 1979 y 1980, todos ellos ahora fuerzas políticas plenamente desarrolladas y que dominarían el escenario político nacional durante la década siguiente. Al centro estaba el MNR histórico (dirigido por Víctor Paz Estensoro), que incorporaba tanto el centro y derecha antiguos como un grupo de dirigentes indios más antiguos que, aunque se habían independizado del MNR, seguían dando fuerte apoyo a Paz Estensoro. Finalmente, estaba ADN (Acción Democrática Nacionalista), el partido fundado por Banzer al final de su presidencia militar y que en abril de 1979 abrió sus puertas a militantes de la antigua Falange y del PIR reconstituido. Para sorpresa de muchos, este partido demostró mayor fuerza de la que se esperaba y no sólo legitimó a Hugo Banzer como un poderoso líder civil,

sino que también ganó el apoyo de nuevas élites económicas, como por ejemplo los empresarios privados mineros y los grandes agricultores cruceños, además de muchos tecnócratas altamente calificados que habían hecho su aparición durante las dos décadas que siguieron a la Revolución Nacional. Banzer logró distancias de las juntas militares del periodo 1979-1982, dando sistemáticamente su apoyo a los procesos democráticos, con lo que se convirtió en una columna del sistema político civil. El paréntesis militar había diferido la aparición de una dirigencia política civil más joven, dando la última oportunidad de gobernar a los antiguos dirigentes del periodo de la Revolución Nacional: si en la primera mitad de los años ochenta la dirigencia procedía de los años cincuenta, en la segunda una nueva camada de políticos más jóvenes comenzó a ocupar la escena política nacional.

Con una determinación sorprendente, Siles se lanzó a desmantelar el feroz aparato paramilitar que las últimas juntas militares habían organizado con ayuda de oficiales argentinos y fascistas extranjeros. En una rápida cadena sucesiva, el jefe de la GESTAPO Klaus Barbie fue expulsado a Francia y el terrorista Pierluigi Pagliai fue entregado al gobierno italiano. Los argentinos fueron expulsados y el gobierno procedió con rapidez a expulsar a los jefes más autoritarios del ejército. La reacción nacional y extranjera a tales medidas fue plenamente entusiasta.

Pero la economía heredada por el régimen de Siles Zuazo naufragaba por doquier; no sólo esto, sino que no dejaría de empeorar durante el resto de la década. Si bien era un hábil jefe de oposición, con fama de honradez, Siles era un administrador incompetente y un pobre negociador político. A los pocos meses de su elección ya se había enemistado con el MIR y el resto de sus principales aliados, demostrando su incapacidad para controlar una economía gravemente enferma. La combinación de estos factores acabaría destruyendo la credibilidad de su gestión aunque no la legitimidad de su gobierno civil.

A fines de los años setenta, el final de los precios inflacionarios de la OPEP y de la producción de pretróleo

coincidieron con el desgobierno estatal del periodo militar para llevar a la bancarrota a la economía del sector público y a una profunda depresión a la del privado. Entre 1980 y 1984 el valor de la producción agrícola descendió en un 11% el valor de las exportaciones, en un 25% entre 1981 y 1984 el PIB per cápita en dólares corrientes disminuyó un 1% anual. La misma producción agrícola quedó gravemente afectada por la acentuada sequía de 1983. La deuda contraída en los días de las altas cotizaciones de los minerales en el mercado mundial y del pago de bajos intereses, llegó en 1983 a unos 3.000 millones de dólares, cifra que si era baja para los niveles latinoamericanos, resultaba alta para Bolivia. Esta suma representaba el 80% de todo el PIB; en 1984 sólo el servicio de la deuda equivalía al 36% del valor total de las exportaciones. Factor todavía más importante, la producción de estaño conoció, por primera vez en el siglo XX, una aguda y permanente baja. Aunque en los años setenta la producción anual media seguía rondando las 30.000 toneladas métricas y en los primeros tres años de los ochenta todavía siguió supurando la franja de las 25.000 toneladas métricas, en 1984 no llegó ni a las 20.000 toneladas métricas y no cesó de descender, sin volver a alcanzar ya las 20.000 toneladas métricas. En 1983 Brasil se convirtió en el mayor productor de estaño de América Latina y desde entonces Bolivia no ha representado ni el 10% de la producción mundial. En 1986 los mineros privados (agrupados como mineros 'medianos', 'mineros chicos' y 'cooperativistas' según el volumen de su producción) superaron por primera vez la producción de la COMIBOL..En la historia boliviana, en la segunda mitad de los años ochenta se podría dar oficialmente por cerrada la era del estaño; en los años noventa el zinc se había convertido en la exportación mineral boliviana de mayor valor.

Aunque la demanda internacional de cocaína empezaría a ofrecer un importante nuevo mercado a los productos bolivianos, ni siquiera este rubro altamente rentable compensaría la decadencia general de la economía minera ni la desaparición de los préstamos exteriores. Simultáneamente el gobierno demostró su incapacidad para controlar el gasto público cuando los ingresos estatales pasaban por una restricción. La

solución inevitable para el gobierno de Siles Zuazo consistió en incrementar la emisión monetaria. Entre 1980 y 1984 la masa de dinero circulante aumentó en más de 1000%. Los precios quedaron rápidamente afectados y en mayo de 1984 Bolivia ingresaba oficialmente en la hiperinflación, con unos índices de aumento de los precios de más del 50% mensual: si en los años setenta el crecimiento promedio había sido del 4.7% anual y la inflación, de sólo el 15.9%, en los ochenta el decrecimiento promedio fue del 2.3%, la inflación en 1983 saltó a los tres dígitos y en 1984, a un increíble 2.177% anual. En el primer semestre de 1985 la inflación subió al 8.170% (calculado sobre una base anual).

En el contexto de una crisis fiscal total de esas dimensiones, resultaba inevitable que Siles Zuazo se viera pronto privado del apoyo popular y que la mayoría de sus aliados políticos desertaran de su gobierno. En enero de 1983 Paz Zamora renunció a la vicepresidencia y su poderoso MIR salió del gobierno. Siles también perdió el apoyo de Lechín, de la COB y de muchos de sus antiguos aliados del MNR. A pesar de sus voluntarias huelgas de hambre que trataban de repetir su eficaz táctica de 1957 y aun de su breve secuestro por los militares (abortado por la masiva oposición civil). Siles no pudo gobernar eficazmente ni imponer medidas estabilizadoras serias. Ante este callejón sin salida, Siles fue persuadido a que abandonara el cargo antes del término de su mandato, alegando que en realidad éste databa de 1980. Y consintió en convocar elecciones presidenciales para julio de 1985.

La elección de 1985 ofreció a los partidos antiguos, en especial al llamado MNR 'histórico' y a la ADN la oportunidad de consolidar su presencia como poderosas tiendas políticas; pero también dio a muchos de los grupos más recientes (que habían formado parte de la alianza democrática e izquierdista que habían respaldado a Siles Zuazo) la ocasión de constituirse en fuerzas independientes. En la izquierda consolidada (el MIR de Paz Zamora y el Partido Socialista-1 de Marcelo Quiroga Santa Cruz, fundados en los años setenta) destacaban como los dos partidos más importantes; pero a la luz de acontecimientos

futuros, todavía resultaba de mayor importancia la aparición del *Movimiento Revolucionario Tupac Katari,* que se constituía pura y simplemente en un partido de los derechos indígenas y que habrían de obtener el 2% del voto popular. Durante muchos años la dirigencia indígena había quedado neutralizado por la COB y, en opinión de la izquierda, iba asociada al Pacto Militar-Campesino, aunque de hecho se había ido formando una nueva dirigencia india autónoma. Ya a fines de los años sesenta surgieron jóvenes dirigentes independientes entre los sindicatos rurales tradicionales, especialmente entre los aymaras, que hasta ese momento se habían mostrado más tranquilos. El bloqueo de Cochabamba en 1974 y la consiguiente masacre campesina por los militares agruparon a estos nuevos hombres. En 1976 comenzó a organizarse el movimiento Tupac Katari entre dirigentes campesinos aymaras del Departamento de La Paz. A fines de los setenta el movimiento ya había conseguido controlar la mayoría de los sindicatos oficialistas y organizado su propia CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia). En 1981 los 'kataristas' controlaban los sindicatos campesinos aymaras y conseguían representación en la COB. Ese mismo año la COB eligió por primera vez como uno de sus propios dirigentes a un líder campesino aymara y miembro de citado movimiento: Genaro Flores. Este giro de la COB resultó definitivo: ahora los dirigentes campesinos, los empleados públicos y los gremialistas comerciales urbanos acabaron reemplazando a los mineros todopoderosos en la confederación obrera. Los nuevos dirigentes indígenas exigieron cambios en lo que consideraban un trato discriminatorio del estado en lo concerniente a los precios agrícolas, al acceso al crédito, a la educación, a la salud o incluso, en relación a sus culturas tradicionales. Propusieron una serie de cambios en relación al carácter de la identidad boliviana y al papel de los pueblos indígenas en la sociedad moderna, subrayando tanto los problemas étnicos como las cuestiones clasistas. Aunque no tardaron en asomar organizaciones rivales que negaban el derecho a expresar este nuevo poder político de los campesinos indígenas hasta entonces sometidos y de grupos mestizos urbanos, en los años siguientes este nuevo movimiento indígena se fue haciendo cada vez más poderoso e independiente. Acabó

encontrando su expresión más coherente y poderosa en un nuevo partido político de masas que haría su aparición a fines de los noventa; esta mayoría indígena de reciente movilización, en la primera década del siglo siguiente acabaría destruyendo el sistema de partido tradicional.

En un principio parecía que los partidos tradicionales podrían controlar y dirigir desde arriba este nuevo movimiento político por medio de una dirigencia política clásica no indígena o mestiza. Desde comienzos de los años ochenta apareció un complejo sistema político en el que ningún partido político tenía una posición dominante. A partir de 1985, en cada elección acostumbró dividirse en tres direcciones básicas: la izquierda, el centro y la derecha, cada una de ellas con un alineamiento político y compuesta de bloques de partidos. Para resolver esta situación había una segunda vuelta de la elección presidencial pero esta vez quedaba en manos del Congreso recientemente elegido. Después de la última presidencia de Siles y hasta 2005 ningún candidato presidencial consiguió una mayoría en las urnas. Así que cada elección presidencial trajo complicadas negociaciones post-electorales, por lo general entre MNR, MIR y ADN. Este sistema concedió mucho poder a los partidos menores y a las fracciones, de los que muchos se unieron al partido que asumía la presidencia bajo los acuerdos de una coalición. Estas elecciones fragmentarias también forzaron a todos los partidos a dar una respuesta a las poblaciones indígenas y mestizas, que constituían la mayoría de votantes. Aunque pobres y con un alto porcentaje de analfabetismo, estos campesinos tendían a incluir altas tasas de votantes a causa de su movilización política y de sus poderosos sindicatos y organizaciones comunales. Esto también condujo a los nuevos líderes políticos de habla aymara y qhishwa a organizar partidos populistas o directamente étnicos, con el objetivo de movilizar este voto.

Las elecciones de 1985 definieron claramente el nuevo sistema electoral existente después del paréntesis militar. Alrededor de 1.4 millones de votantes fueron a las urnas, dando a Hugo Banzer la victoria relativa; pero el nuevo Congreso estaba dominado por los partidos de centroizquierda, quienes

eligieron a Víctor Paz Estenssoro, de 77 años de edad, para su cuarta presidencia. Aunque su anterior periodo en los primeros años sesenta había echado los cimientos del Pacto Militar-Campesino y apareció implicado en el golpe militar de 1979, Paz Estenssoro seguía siendo una figura poderosa entre las masas campesinas que asociaban su nombre con la Reforma Agraria de 1953, que todavía contaba con un apoyo decidido. Para sorpresa de amigos y enemigos, esta aparente reliquia de una época pasada demostró ser el político civil más dinámico y hábil que ha gobernado en las últimas décadas del siglo XX. Echando por la borda posiciones tradicionales, aceptando reformas radicales, sin contemplaciones y rápido en sus reacciones políticas, no tardó en dominar la vida nacional de una manera que recordaba su primer periodo presidencial. Sin duda su acto más impresionante fue su llamado Nuevo Plan Económico de mediados de 1985: haciendo suyas muchas de las propuestas de ADN e incluso concluyendo un pacto oficioso con este partido, Paz Estensoro impuso un programa económico, a la vez tradicional en su estructura e insólito en su contexto. Cuando los gobiernos contemporáneos de Argentina y Brasil, enfrentados a los mismos problemas de una inflación incontrolada y de una deuda internacional, seguían aplicando lo que sus economistas habrían de denominar un 'shock heterodoxo', Paz Estenssoro prefería aplicar un tratamiento de 'shock ortodoxo'. Esto significaba devaluaciones monetarias, precios y tipos de cambio libres del control gubernamental y estricta reducción del gasto público. He aquí en muchos puntos un ejemplo clásico del grupo de políticas conocido como Consenso de Washington.

Para sorpresa general, Paz Estenssoro adoptaría los principios del liberalismo económico y rechazaría las ideologías del nacionalismo económico y del capitalismo de Estado en cuya anterior implantación en Bolivia había jugado un papel fundamental. Las razones para este rechazo, eran de doble tipo: por un lado, los efectos de la hiperinflación que por segunda vez se dejaba sentir en la historia moderna boliviana, una crisis que condenaba la economía nacional a una profunda ruina; por otro, el derrumbe total del costoso sistema de la minería

estatal, basado en una industria del estaño que agonizaba rápidamente. Que estos dos hechos inesquivables se produjeran en una sociedad más desarrollada y más compleja que la que el propio Paz Estenssoro había heredado 33 años antes, le llevaron a pensar que había que adoptar una solución de raíz. Con la ayuda de expertos norteamericanos, en cosa de unos pocos meses Paz Estenssoro llevó a cabo un clásico shock económico ortodoxo, modelo de manual en política económica conservadora.

En virtud del Decreto 21.060 de 29 de agosto de 1985 se devaluó la moneda, se implantó un tipo de cambio flotante, uniforme y libre; se eliminaron todos los controles de precios y de salarios; subieron considerablemente los precios del sector público; se redujo drásticamente el gasto público y disminuyeron los salarios reales de los empleados públicos. Se suspendió temporalmente el pago de la deuda externa de Bolivia (única medida heterodoxa del programa). Con la subida de precios y la suspensión de las inversiones la economía cayó en una grave recesión. Se desbarató un intento de huelga general con el estado de sitio y la popularidad general ganada con el fin de la hiperinflación dio a Paz Estenssoro el apoyo necesario para imponer su reforma. Aparajedas al *shock* fiscal, se introdujeron importantes reformas impositivas procedentes, muchas de ellas, de las recomendaciones del grupo asesor conocido como la Comisión Musgrave de los años setenta. Pronto se introdujo el impuesto al valor agregado (IVA), con el que las arcas del Estado comenzaron a acumular de nuevo fondos excedentes.

Paz Estenssoro también atacó la burocracia estatal. Reemplazando el gas al estaño como primer rubro de exportación y produciendo Bolivia cantidades cada vez menores de estaño caro, COMIBOL perdía su misma razón de ser. Paz Estenssoro, fundador de la institución, comenzó a desmantelar esta institución estatal, otrora poderosa. La reforma de COMIBOL también significó el debilitamiento de su sindicato. Entre 1985 y 1986 COMIBOL pasó de 27.000 obreros a sólo 7.500. En el mismo periodo incluso YPFB tuvo que despedir 4.000 obreros quedando reducido a una fuerza de trabajo de 5.000. Todos estos cambios llevaron a una importante disminución del poder

de la FSTMB y, más en general, del movimiento obrero, que ya no podía seguir jugando la misma poderosa función política y económica que desde los años cuarenta había desempeñando en la sociedad boliviana. Un indicio de estos cambios fue la retirada en 1986 de Juan Lechín de la dirección de la FSTMB y al año siguiente su salida de la cúpula de la COB. Por primera vez desde 1944 uno de los tres grandes dirigentes del MNR se encontró sin ningún cargo en el movimiento obrero. La tan debilitada FSTMB fue controlada por dirigentes trotskistas. Al mismo tiempo la CSUTCB, dirigida por Genaro Flores, se convirtió en el grupo particular más importante de la COB.

La persistente crisis del mercado mundial del estaño prestó una gran ayuda a Paz Estensoro en este momento crucial. En octubre de 1985 el Consejo Mundial del Estaño (organización de 32 países que compraban mineral con el fin de estabilizar su precio) fue a la bancarrota, derrumbándose el mercado internacional del estaño. Durante casi medio año no se hizo ninguna transacción de estaño en el mercado londinense de minerales; incluso Malasia, el mayor productor mundial de estaño, se vio obligado a cerrar cien minas de estaño y a despedir 4.000 obreros. A escala mundial Bolivia era uno de los productores más caros del estaño más pobre. A causa de estos altos costos de extracción y de las deficiencias de las fundiciones bolivianas (que por fin habían entrado en funcionamiento a comienzos de los años setenta), el estaño refinado boliviano lo mismo que sus minerales brutos no podían encontrar mercado. Las marchas de hambre, las huelgas generales, los bloqueos de carreteras y las demás protestas de los mineros encontraron poco eco de parte de otros sectores sociales. Cuando Paz Estenssoro quebró sus manifestaciones apresando a sus dirigentes hubo poca oposición seria.

Pero los éxitos político y fiscal del llamado Nuevo Plan Económico se lograron a costa del crecimiento económico y del aumento de la miseria social. El paro subió a más del 20% y los centros mineros tradicionales de Oruro y Potosí conocieron una grave decadencia económica. La ayuda estadounidense fue fundamental para aliviar los peores aspectos del plan de austeridad del gobierno, pero la aparición de la economía

ilegal y paralela de la coca ofreció algunos recursos decisivos para aminorar los efectos de este duro tratamiento de *shock*. Aunque la hoja de coca era autóctona en Bolivia y constituía desde tiempos inmemoriales un considerable cultivo de consumo interno de los valles yungueños de La Paz, desde los años setenta se fue convirtiendo en un importante cultivo de exportación a causa de la creciente demanda mundial de cocaína —su principal derivado— y de la extensión de nuevas zonas productoras de coca en las tierras bajas tropicales del Chapare.

La construcción de las primeras carreteras modernas en los años setenta hacia la región del piedemonte amazónico del Chapare (provincia tropical baja del extremo oriental del departamento de Cochabamba), atrajo gran cantidad de migrantes altiplánicos a estas tierras vírgenes, siendo la coca uno de los cultivos tradicionales de la zona. Con un contenido de alcaloide mayor que la hoja producida en los Yungas, el producto del Chapare no gozaba de alta estima para el consumo tradicional de las poblaciones indígenas andinas, por lo que en un principio la coca no era la principal producción de los migrantes a Cochabamba que cultivaban la región. Pero la hoja de coca chapareña resultó ideal para producir cocaína. Las cambiantes modas de consumo de drogas entre la población de las economías avanzadas del mundo y, sobre todo, la de los Estados Unidos, en los años setenta adoptaron la cocaína como droga preferida. Esto resultó una 'bendición' para los productores bolivianos, que aportaban más del tercio de la producción mundial. Con la hoja de coca chapareña, más cotizada en el mercado internacional que en el nacional y con su situación alejada de los centros urbanos tradicionales, desde mediados de los años setenta la región del Chapare se convirtió en el principal centro de suministro de hoja de coca para los delincuentes exportadores de cocaína. La coca no era sólo autóctona de la región y un producto con uso intenso de mano de obra, sino que mayoritariamente se la producía en pequeñas parcelas, calculándose que dos tercios de la producción procedían de parcelas de seis o menos hectáreas. Estas parcelas de propiedad campesina se agrupaban en colonias y grandes

sindicatos campesinos, portavoces eficaces de los intereses de estos pequeños propietarios. Por primera vez en la historia moderna de Bolivia un producto de exportación de primer orden estaba en manos de pequeños productores campesinos. Por el carácter de uso intenso de mano de obra de este cultivo y por el poderoso movimiento sindical campesino, los traficantes internacionales no tuvieron inconveniente en dejar el cultivo de la hoja de coca en manos de estos pequeños agricultores, limitándose ellos a la elaboración y comercialización de la producción de los productores campesinos. Aunque a mediados de los años ochenta los traficantes bolivianos acabarían produciendo la base o pasta de cocaína con la hoja producida por los campesinos, la cristalización final y la comercialización del producto en el mercado mundial siguió en manos de los intermediarios colombianos. El Chapare, la región vecina del Beni y las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba se convirtieron en los centros de esta nueva industria y este nuevo 'comercio' de exportación, mientras que en los Yungas se siguió produciendo hoja de coca para los mercados tradicionales de consumo interno.

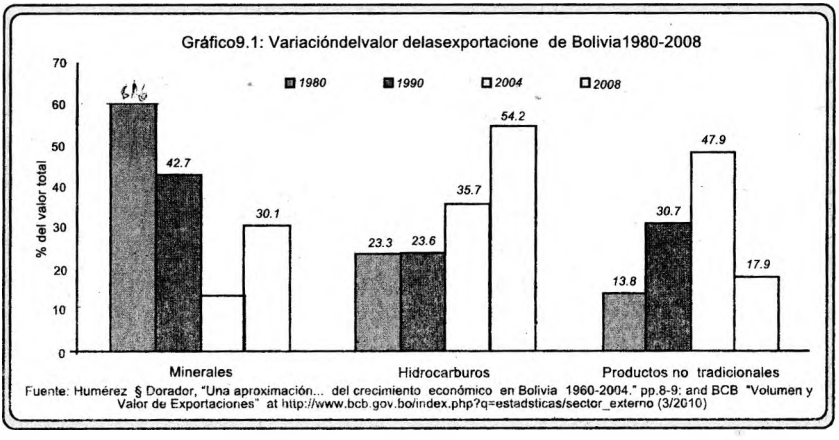
Aunque, naturalmente, se presentan problemas a la hora de calcular la escala e importancia de esta economía 'clandestina' que forma parte del llamado mercado 'informal' o no registrado y fiscalmente inexistente, es evidente que aun los cálculos más prevenidos aceptan que a mediados de los años ochenta el valor de las exportaciones de la droga elaborada con la hoja de coca equivalía, si no superaba, al de la exportaciones legales. La producción física fue al paso de las crecientes exportaciones. Si en 1976 sólo se dedicaban 12.000 hectareas a la producción de hoja de coca, en 1985 la superficie de cultivo había crecido a más de 66.000 hectareas; en este mismo período la producción pasó de menos de 15.000 tonelas métricas. A 153.000 toneladas métricas de hoja de coca, de las que sólo el Chapare producía más de 100.000 toneladas métricas. En una superficie que oscilaba entre 40.000 y 45.000 hectareas. Se calcula que por esa época por lo menos un cuarto de millón de agricultores se dedicaba a este cultivo. Sin ninguna duda la producción de la hoja de coca se ha convertido en el cultivo agrícola más importante, aunque incluso en el Chapare los agricultores

campesinos de la coca también se dedicaban a la producción de alimentos.

Pero la exportación de cocaína ha estado sometida a una fiscalización internacional de carácter cada vez más estricto, en forma de una creciente presión de los Estados Unidos, que ha reemplazado la 'guerra fría' por la 'guerra a la droga" y que desde los años ochenta hasta la actualidad ha constituido un aspecto fundamental de las relaciones entre ambos países. Sin embargo, no era menos importante la competencia de otros productores. La producción no sólo se extendió al vecino Perú, sino que los agricultores colombianos por primera vez comenzaron a producir hoja de coca. A comienzos de los años noventa la combinación de precios en caída, de aumento de la competencia y de los esfuerzos de la fiscalización internacional, había reducido mucho la importancia de la producción boliviana: en 1992 los cocales bolivianos se habían reducido a 40.000 hectareas en cambio los peruanos ascendían a 113.000 hectareas; y los colombianos, a 89.000 hectareas. En 1999 había solamente 14.000 hectareas plantadas y la producción de cocaína se había reducido a 70 toneladas métricas frente a las 300-400 toneladas métricas que producía Colombia y las 175-240 toneladas métricas del Perú. Dada la caída de los precios y de la producción, las remesas de cocaína dejado de ser un rubro principal de las exportaciones bolivianas. A fines de los años noventa la intervención gubernamental también logró una importante reducción de las exportaciones ilegales de cocaína

En los años ochenta estaba fuera de discusión que las exportaciones de pasta base y de cocaína refinada eran de suma importancia para la economía boliviana; por su parte el gobierno hizo cuanto pudo para alentar la reinversión de esas ganancias clandestinas en la economía nacional. En los años ochenta estas ganancias fueron para Bolivia una importante fuente de crecimiento económico, especialmente cuando nuevos sectores de crecimiento como el gas y la agricultura comercial apenas empezaban a adquirir importancia. Aunque en los años noventa por fin la economía volvió a crecer, sus índices de crecimiento todavía eran relativamente bajos. Sin embargo,

en la última década del siglo XX ha habido una reorganización profunda de la economía nacional, íntimamente relacionada con las políticas e inversiones gubernamentales. Los dos nuevos sectores que acabaron dominando las exportaciones fueron el del gas natural (desarrollado por YPFB conjuntamente con empresas extranjeras, privadas o de propiedad estatal) y el de cultivos comerciales (en especial la soya). La construcción en 1972 de un gasoducto desde Santa Cruz hasta la frontera argentina, por fin fue seguida de la construcción conjunta —por YPFB y Petrobras del Brasil— de otro desde los campos hidrocarburíferos cruceños hasta la metrópoli industrial de Sao Paulo. Acabado en 1999, el nuevo gasoducto creó un nuevo mercado para el gas boliviano, no tardando esas exportaciones al Brasil en superar las dirigidas a Argentina, habiendo pasado su volumen total de unos 100.000 millones de pies cúbicos en 1999 a más de 500.000 millones en 2008. Si los dos siglos anteriores en Bolivia se pudieron conocer como los de la plata y el estaño, el actual tenía todas las razones para titularse el del gas natural. En 2008 es evidente que ha tenido lugar un cambio importante en la canasta de productos que Bolivia exporta, con un espectacular descenso de los minerales tradicionales y su reemplazo por los hidrocarburos, en primer lugar el gas natural. Hay también un aumento sustancial en las exportaciones no tradicionales (soya y otros cultivos comerciales agrícolas) (ver gráfico 9.1.).

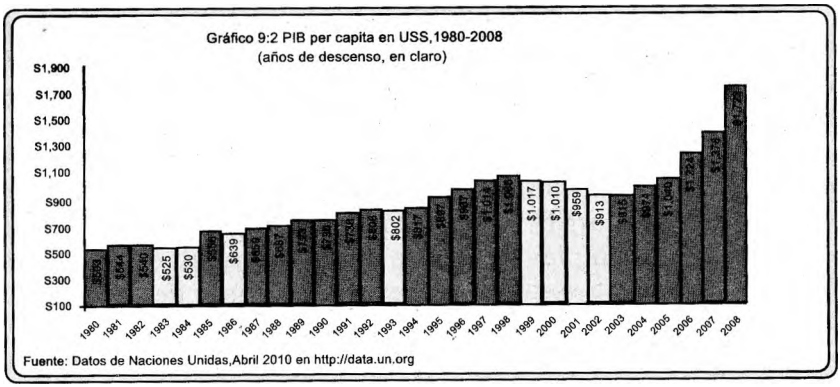


Aunque desde los años cincuenta Santa Cruz se había ido convirtiendo en una región agrícola comercial cada vez más importante de grandes exploraciones, la expansión en los años noventa de la frontera occidental soyera brasileña hacia Santa Cruz ha hecho de la región cruceña un importante exportador internacional de productos agrícolas. La soya ha pasado a ser recientemente una de las exportaciones más valiosas de Bolivia, que en 2008 equivalió al 5% del valor total exportado. La soya, junto con el azúcar, la semilla de girasol y las maderas tropicales representaron un 10% del total de exportaciones. La impresionante de esos cultivos comerciales es que la eficiencia de los productos bolivianos no está lejos de la de los soyeros brasileños, que figuran entre los más productivos del mundo. Desgraciadamente, en las regiones andinas productoras tradicionales de alimentos las inversiones estatales o privadas han sido pequeñas: así los productos andinos de papa lograron unas cosechas por hectárea que representaba sólo el 12% de lo que ese mismo año lograban producir los productores estadounidenses. La construcción de carreteras y los créditos agrícolas concedidos por el gobierno de La Paz a partir de mediados de los años cincuenta, junto con el capital generado por las exportaciones ilegales de cocaína han acabado creando un sector agrícola moderno, pero han tenido escaso impacto en la productividad de los agricultores campesinos tradicionales.

También en el sector exportador minero tradicional ha habido un cambio fundamental. El zinc se ha convertido en el mineral tradicional más importante, siendo en 2000 su valor exportado el doble del estaño; y esto a pesar de que Bolivia sigue siendo un pequeño productor mundial de ese metal. Incluso las exportaciones de plata reportan mayores ingresos que los del otrora todopoderoso estaño. Pero Bolivia sigue teniendo importantes reservas estañíferas y la producción de estaño, aunque menor que las del Perú y Brasil, en las dos últimas décadas se ha estabilizado entre 10.000 y 20.000 toneladas métricas. Bolivia incluso ha exportado cierta cantidad de estaño procesado en sus refinerías subutilizadas. Aunque los minerales tradicionales siguen perdiendo cuotas de exportación, el rápido

crecimiento de las exportaciones gasíferas ha significado que la aplastante mayoría de las exportaciones bolivianas sigue siendo de recursos no renovables. La producción de gas natural, de desarrollo lento, por fin se ha convertido en 2001 en el rubro principal de exportación, creciendo con tanta rapidez que en 2008 representaba el 45% del valor de todas las exportaciones, con el 11% para el zinc y el sólo 3% para el estaño. Ha habido también un constante crecimiento de las exportaciones renovables y no tradicionales, desde madera y castaña hasta café, azúcar, algodón, soya y aceites de girasol. En 2008 la soya y los aceites vegetales representaron el 8% del valor de las exportaciones. El crecimiento de estas nuevas industrias, que entraron en su plena producción en los años noventa y en la primera década del siglo XXI, significó que la economía boliviana había comenzado a crecer a un ritmo desconocido desde los años sesenta, logrando un índice superior a los generales latinoamericanos de los años noventa y de la primera década del nuevo siglo.

A pesar del rápido crecimiento de las exportaciones, que se han más que duplicado en unos pocos años del nuevo siglo XXI, en 2008 Bolivia permanece en el fondo de los países latinoamericanos en cuanto al valor total de sus exportaciones de bienes y servicio, sólo por encima de la mayoría de las repúblicas centroamericanas y Haití; pero detrás de Honduras y Paraguay. Así, a pesar del crecimiento de nuevas fuentes de riqueza, desde el gas hasta la soya, Bolivia sigue siendo un país pobre. Aunque la renta per cápita ha crecido desde 730 dólares (1990), hasta 1.723 dólares (2008) (ver gráfico 9.2.), Bolivia sigue siendo el tercer país pobre de América Latina, sólo por encima de Haití y Nicaragua. El país sigue recibiendo grandes sumas de ayuda extranjera, aunque estas sumas han ido disminuyendo con el tiempo. Todavía en 1999 el 33% de los ingresos del gobierno central procedía de la ayuda exterior, pero en el presupuesto general de 2010 este rubro ha caído al 3% gracias a los crecientes ingresos fiscales, a los ingresos por regalías (también en aumento) y a las remesas de los emigrantes.



Así como la estructura económica boliviana sigue cambiando y evolucionando, en los últimos veinte años también ha cambiado la estructura política. Indudablemente, la consolidación de un sistema multipartidario, la aparición de un poderoso legislativo, la creciente importancia de la política municipal y regional, así como el recurso a los pactos multipartidarios de gobierno, se han convertido en nuevos factores de la evolución política de Bolivia. La lucha por los derechos civiles fundamentales y el final del paréntesis militar, en la política nacional ha acabado debilitando tanto a la izquierda revolucionaria como a la extrema derecha. Al mismo tiempo, la base de la extrema izquierda se ha transformado como efecto, por un lado, de la caída de la antigua central sindical y de la federación de mineros; por otro, del ascenso de las nuevas organizaciones campesinas. En 1971, con su programa de derechos aymaras, los kataristas no cesaron de hacerse más poderosos en los sindicatos locales del altiplano, para pasar después a apoderarse de la nueva y poderosa confederación campesina la CSUTCB *(Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia),* fundada en 1979. Esta confederación no tardó en pisar fuerte en la COB y acabaría haciéndose de su dirección y reorientando sus demandas, pasando de sus intereses exclusivamente clasistas a las cuestiones étnicas y clasistas. Aunque algunos sindicatos siguieron en manos de la extrema izquierda (sobre todo la trostkista del POR, que controlaba la confederación de maestros de primaria), la mayoría adoptó posiciones más moderadas.

A su vez, la incapacidad de los tres principales partidos (el viejo MNR, la ADN de Banzer y el nuevo MIR) para obtener mayorías absolutas en el Congreso o en las elecciones presidenciales, obligó a los partidos a forjar pactos multipartidarios para gobernar, permitiendo la más ordenada sucesión de gobiernos de la historia boliviana. La creación de una Corte Electoral con importantes atribuciones también dio paso a la era de las elecciones más limpias de fraude de la historia democrática de Bolivia. Todos estos cambios crearon un clima de consenso y de negociación política entre partidos competidores, cosa nueva en el escenario político. Al mismo tiempo los régimenes post-militares debatieron y finalmente aprobaron algunos de los cambios más importantes desde la fundación de la república en las instituciones gubernamentales.

Muchos de estos cambios comenzaron en la presidencia de Siles Zuazo y siguieron en la de Paz Estenssoro; su última presidencia fue también importante por contribuir a dar paso a una nueva generación de dirigentes políticos. El más importante de esos jóvenes dirigentes fue Gonzalo Sánchez de Lozada, formado en los Estado Unidos y uno de los nuevos mineros que aparecieron después de la época de 1952. Habiendo accedido a la presidencia del Senado y de ella, al Ministerio de Planificación y jefatura del equipo económico del gobierno, Sánchez de Lozada demostró ser un formidable oponente a la camarilla del viejo Paz Estenssoro (que había tenido una importante participación en el sangriento golpe de estado de Natusch Busch de 1979).

Paz Estenssoro trabajó estrechamente con su equipo rival, Hugo Banzer y su ADN para imponer su plan económico. Dominando ambos partidos el Congreso, al gobierno del MNR le fue fácil controlar tanto la legislación aprobada como el ejército y otras fuerzas del estado de las que se dependía para someter la protesta obrera. Pero el costo fue para su propio partido; aunque Sánchez de Lozada acabó controlando el MNR histórico y fue su candidato en las elecciones de mayo de 1989, ahora tuvo que enfrentarse a una poderosa oposición dirigida por Hugo Banzer y el creciente poder del MIR, que se había quedado al margen de los ataques anti-obreros más agresivos

del gobierno del MNR.

Las elecciones de 1989 representaron la jubilación de toda una generación de dirigentes políticos que habían dominado la vida nacional desde los años cuarenta. Los candidatos presidenciales de los tres partidos eran por primera vez hombres que habían adquirido relieve político después de la Revolución de 1952. Con Lechín fuera del movimiento obrero, con Siles Zuazo caído en desgracia y con Paz Estenssoro demasiado viejo para volver a gobernar, solamente quedaba Banzer de la generación anterior y aun él solo ingresó en la arena política en la segunda mitad de los años sesenta. Aunque Banzer había ganado las elecciones de 1985 en número de votos, ahora quedó segundo, después de Sánchez de Lozada. El gran vencedor de las elecciones de 1989 fue el MIR: si en 1985 sólo había obtenido el 8.9% de los votos, en 1989 subió al 19.6% de los mismos. Ante esta contundente demostración del MIR, Banzer renunció a la competición y pactó con el MIR para que Jaime Paz Zamora fuera el Presidente de la República. Al hacerlo Banzer elevaba por primera vez al poder a un miembro de la nueva izquierda post-revolucionaria.

Estas elecciones también pusieron de manifiesto que en el país había echado sólidas raíces una compleja división de partidos y de preferencias políticas. Las tendencias ya apuntadas en 1980 y en 1985 persistieron en 1989: es decir, los tres partidos principales dominaban la escena política. Pero la posibilidad del cambio también se hacía visible en la aparición de dos nuevos partidos populistas de peso y que habían nacido inmediatamente antes de las elecciones de 1989: CONDEPA (Conciencia de Patria, que Carlos Palenque, hombre de los medios de comunicación, fundó en 1988 basándose en un amplio apoyo en La Paz y entre los mestizo y aymara-hablantes del altiplano) UCS *(Unión Cívica Solidaridad,* fundada en 1989 por el industrial cervecero Max Fernández, con un fuerte apoyo en Santa Cruz). Ambos partidos obtuvieron buenos resultados en las elecciones; CONDEPA posteriormente pasaría por ser el origen de la mayoría de los partidos de masas de base indígena que harían su aparición en la primera década del siglo XXI.

Vale la pena destacar que los tres partidos principales (MNR, ADN y MIR) reciben una cantidad importante de votos de todas las clases sociales y en todas las regiones del país. En estas elecciones también se pudo ver el intento del movimiento katarista de entrar directamente en la política: mientras que a CONDEPA y UCS lograron buenos resultados, los kataristas sólo obtuvieron 23.000 votos. Pertenecían, pues, al pasado los días de un Estado monopartidista (que nunca lo fue por completo, ni siquiera en la primera fase de la revolución de 1952 dirigida por el MNR) y los del voto masivamente manipulado en las poblaciones rurales. Si en las comunidades indígenas se puede seguir votando en bloque, también muchos campesinos comenzaron a dispersar sus votos entre múltiples partidos, de manera que no podía pensarse en una vuelta a los días del Pacto Militar-Campesino.

En la campaña electoral de 1989 no fue menos significativo el que ninguno de los tres partidos principales pusiera en duda ni el *Nuevo Plan Económico* ni el desmantelamiento del sistema capitalista de Estado, lo que de hecho quizá fue uno de los factores que a largo plazo influyó en su decadencia. Incluso el MIR prometió respetar los programas de estabilización económica y se negó a restaurar las antiguas empresas estatales (aunque esto hizo que perdiera su ala más izquierdista). Todos más bien se esforzaron por subrayar los temas del crecimiento y del desarrollo. En el poder, el MIR no demostró mayor radicalidad que los partidos más antiguos, especialmente al colaborar estrechamente con la ADN conservadora de Banzer, apoyando la retirada estatal de la industria del estaño y la apertura de la economía al capital extranjero y privado. También perdieron el apoyo de la COB y la FSTMB al gobierno; pero el MIR, a pesar de su abandono del movimiento sindical, en un comienzo no perdió su base y siguió representando a una parte de la izquierda. Aunque en los años noventa una fracción del MIR logró algunos avances, el MNR recuperó la mayor parte de su antiguo apoyo, llegando incluso a ser un partido importante en El Alto, (la clásica ciudad mestiza), hasta mediados de 2000.

Aunque el MIR tuvo problemas de gobernabilidad al llegar al poder, fue un período de importante debate intelectual sobre la

naturaleza del Estado y el orden social y económico tradicional. Fue cuestionada la viabilidad del presidencialismo, del centralismo y otros temas anteriormente intocables. El gobierno también logró condenar y encarcelar al dictador militar general Luis García Mesa por su violento derrocamiento del gobierno de 1980, siendo uno de los pocos gobiernos democráticos que logró encarcelar a uno de los dirigentes del periodo militar anterior. Hubo también la primera manifestación a escala nacional de la difícil situación en que viven las poblaciones indígenas de los llanos del Oriente: en una espectacular marcha desde el Beni a La Paz, en 1990 unos 800 hombres, mujeres y niños de 12 naciones indias de las regiones orientales exigieron protección de sus tierras frente a la invasión y explotación de no indios. Por primera vez la CSUTCB se adhirió a estos nuevos grupos indígenas que representaban a los Chiquitano, Guaraní y otros pueblos hasta entonces ignorados. La política municipal también se convirtió en el centro de actividad más importante cuando los nuevos partidos quitaron el gobierno de muchas ciudades de la nación a los partidos nacionales. Así, CONDEPA, bajo el compadre Palenque y su subcomandante Remedios Loza, conocida como la 'cholita' Remedios, se apoderó del gobierno municipal de La Paz. Además en 1989, Remedios Loza fue la primera mujer de pollera (tradicional vestido mestizo) en ser elegida para el Parlamento: y dirigió este importante partido después de la muerte de Carlos Palenque en 1997).

En las elecciones de 1993 el MNR volvió al poder, con un muy robusto 34% de votos ganado por Gonzalo Sánchez de Lozada; pero para vencer en las zonas rurales el MNR tuvo que apoyarse en los kataristas; favor que devolvió reservando la vice-presidencia a uno de sus dirigentes, Víctor Hugo Cárdenas. Con este nombramiento la élite reconocía la nueva importancia de las poblaciones rurales y urbanas mestizas e indígenas en la política nacional. No sólo la esposa del vice-presidente convirtió en costumbre el uso de la vestimenta indígena tradicional en actos políticos y sociales, sino que el nuevo gobierno en 1994 reformó la Constitución de 1967, declarando en su primer artículo que Bolivia, no sólo es "libre, independiente, soberana", sino también "multiétnica y pluricultural", la primera vez en

la historia republicana que esto era reconocido. También se aprobó un importante paquete de leyes que reconocían, no sólo la personería jurídica de las comunidades indígenas, sino también la de todas las asociaciones y sindicatos campesinos. La Constitución reformada también garantizaba a los ayllus y comunidades sus derechos tradicionales a la tierra con la garantía inequívoca de la existencia de las propiedades comunarias, es decir los derechos comunales de propiedad en manos de las comunidades y no de los individuos, incluso les garantizaba su derecho a usar leyes tradicionales.

Para apoyar esta nueva visión que iba apareciendo de una nación multiétnica, el gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997) tuvo que introducir cambios fundamentales en la organización estatal y la participación política. Con la Ley de Participación Popular (1994) y la Ley de Descentralización (1995) el MNR trató de cambiar el carácter centralista del estado dando mayor autonomía económica y política a los municipios. Donde antes de esta ley sólo existían algunas docenas de municipios (y todos ellos situados en centros urbanos importantes y capitales departamentales), ahora el gobierno anunciaba la creación de 311 gobiernos municipales, todos con sus propios alcaldes y consejos municipales, y con todas las oficinas electorales; y los creó en todo el territorio nacional. Esto significó la existencia de municipios rurales y urbanos. Con esta ley el número de autoridades electas pasó de 262 a 2.900. Al mismo tiempo estos nuevos gobiernos locales quedaban bajo la vigilancia de Comités de Vigilancia nombrados oficialmente y compuestos de organizaciones de base locales debidamente registradas. Durante los tres años siguientes el gobierno reconoció oficialmente 13.827 de estas organizaciones territoriales, desde juntas vecinales urbanas hasta sindicatos campesinos. Estos Comités debían fiscalizar los gobiernos locales, pudiendo acusar a las autoridades locales de malos actos en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente a estos gobiernos de nueva elección por primera vez se les dio un considerable poder económico. Los municipios ahora controlaban sus propios presupuestos y el 20% de los

ingresos estatales les era devuelto, acomodándose siempre el dinero recibido al censo de su población. El gobierno organizó entidades de investigación que prestaran su ayuda a los municipios, llevando a estos programas de descentralización grandes sumas de la ayuda externa. La Ley de Reforma Educativa de 1994 también daba a los nuevos municipios cierto control sobre la educación local, pudiendo intervenir en el currículo no central, en todos los gastos de infraestructura y en el suministro escolar.

Este cambio político-administrativo era tan profundo que se calculó que, después de la entrada en vigor de la Ley de Participación Popular, casi dos tercios de los 1.624 alcaldes y concejales municipales elegidos para estos cargos eran campesinos o indígenas. La política nacional comenzó a cambiar cuando los partidos principales se vieron forzados a dedicar una atención importante a la política local. En las primeras elecciones municipales siguientes salieron elegidos muchos dirigentes locales de partidos pequeños y a menudo extremistas, socavando así a los antiguos partidos nacionales. El hecho de que estos nuevos gobiernos municipales dispusieran de cerca de 3.000 puestos de trabajo en sus manos, fue un factor importante (incluso para los partidos de base política nacional). El gobierno también decidió aumentar la representación democrática dividiendo los curules de diputados entre los elegidos según las listas de partidos nacionales (plurinominales) y los que candidateaban para una sola circunscripción (uninominales), aunque pertenecieran a un partido nacional, lo que también contribuyó a debilitar los antiguos partidos nacionales. Fueren cuales fuesen los problemas inmediatos planteados al programa, no cabe duda alguna que dio inicio a uno de los más profundos procesos de cambio político y administrativo de la historia boliviana.

Pero la presidencia de Sánchez de Lozada también trajo una importante ampliación de las políticas económicas neoliberales que habían empezado a mediados de los años ochenta al emprender una privatización casi general de las empresas del estado. En 1992 se había aprobado una ley de privatización, que el gobierno hizo un gran esfuerzo

para darle pleno cumplimiento. La mayoría de las empresas menores fueron liquidadas a inversionistas privados, pero las grandes se vendieron mediante un plan de capitalización. Esto significaba que el Estado conservaba la propiedad del 50% de esas empresas, pero vendía el otro 50% a grupos privados, que también pasaban a administrar la empresa. Entre estas empresas capitalizadas figuraban YPFB (a cargo del petróleo y el gas), ENDE (la empresa nacional de electricidad), ENFE (ferrocarriles), ENTEL (responsable de todas las comunicaciones) y el LAB (la aerolínea nacional). Para suavizar el impacto, el gobierno destinó sus cuotas accionarias al BONOSOL (bono anual y vitalicio para todos los ciudadanos residentes en Bolivia de más de 65 años).

De todas estas capitalizaciones la que tendrían un impacto mayor fue la de YPFB, en 1996. Sus trabajadores pasaron inmediatamente de casi 6.000 a 2.000 y acabó renunciando a las actividades de exploración, producción y transporte de petróleo y gas (que pasaron a manos del llamado YPFB residual). Se firmaron contratos con numerosas empresas extranjeras (privadas y estatales), pero bajaron en picada las regalías por los nuevos descubrimientos de petróleo y gas. Estos contratos y el papel pasivo de YPFB provocarían en los años siguientes un enorme conflicto político.

Como resultado de la capitalización y de la descentralización, el MNR obtuvo un pobre resultado en las elecciones de 1997, con apenas el 18% de los votos, por detrás de ADN (21%) y del todavía poderoso MIR (20%). Dadas las anteriores alianzas, no fue sorpresa para nadie que el MNR diera su apoyo a ADN en las negociaciones congresales posteriores a las elecciones, de las que Hugo Banzer salió nombrado presidente de la República. Así el exdictador y general volvió a gobernar el país, esta vez por un periodo de cinco años (de acuerdo a la reforma constitucional de 1994). No siendo ni un populista al estilo de Perón, ni un caudillo con fuerte apoyo militar, Banzer fue el caso raro de un dictador militar convertido en político al frente de un respetable partido de centro-derecha. Dejando de lado sus capacidades administrativas, no hay duda que Banzer representaba un fenómeno sin par en la política latinoamericana del siglo

pasado; pero su mala salud a mediados de 2001 y una economía desfalleciente con tasas negativas de crecimiento obligaron a Banzer a renunciar, siendo reemplazado por el vice-presidente Jorge Quiroga.

Las elecciones de junio de 2002 volvieron a dar un candidato más votado con menos del 25% de los 2.8 millones de votos válidos, que en la segunda vuelta parlamentaria salió elegido Presidente por segunda vez: Gonzalo Sánchez de Lozada. Así, un MNR aparentemente revitalizado por una nueva generación de dirigentes, parecía destinado a volver al poder como partido dominante. Pero las elecciones demostraron marcar un punto de inflexión fundamental en la historia política moderna boliviana. Iba a derrumbarse el sistema de gobierno de los partidos políticos en vigencia desde 1985. En este periodo el sistema presidencial de Bolivia había conocido modificaciones importantes a causa del peso creciente del gobierno parlamentario. Por su parte, la legislatura bicamaral se había reorganizado para reflejar con mayor sensibilidad el voto directo de la ciudadanía. Gracias al reforzamiento del gobierno municipal y al aumento del poder del Senado y del Congreso, ambos efectivos, Bolivia se alejaba de su tradicional sistema de gobierno centralista y presidencialista; pero los partidos que habían creado este sistema más descentralizado estaban a punto de desaparecer. En estas elecciones tanto la antigua ADN de Banzer como el MIR decayeron como partidos nacionales significativos: de hecho, el candidato que seguía al MNR, también con el 25% de los votos, pertenecía a un partido nuevo y era un dirigente indígena aymara.

Este cambio fundamental era la culminación del ascenso de los partidos políticos indígenas que se había podido observar desde los años setenta con el movimiento katarista, seguido del extraordinario crecimiento de CONDEPA, el primer partido verdaderamente indígena, a fines de los años ochenta y comienzos de los noventa. A mediados de los años noventa, las reformas del Estado bajo el esquema de la participación popular colocaron en cargos públicos un número cada vez mayor de dirigentes indígenas rurales y mestizos. Finalmente, hizo su aparición un nuevo centro de movilización política indígena,

alejada de las habituales regiones altiplánicas y del valle de Cochabamba. Este nuevo movimiento cocalero era resultado de la guerra de Estados Unidos en materia de drogas, que había llevado a su masiva intervención en la política boliviana desde fines de los años ochenta y durante los noventa, junto con el frecuente conflicto violento entre los gobiernos y los cocaleros, con sus sindicatos y federaciones. Todos estos movimientos, tradicionales y nuevos, ayudan a explicar los orígenes de la masiva movilización contra las más extremistas políticas neoliberales que desde 1985 habían practicado los partidos 'tradicionales'.

Aunque grupos extremistas aymaras se habían presentado en las elecciones de los años noventa, particularmente bajo el liderazgo de Felipe Quispe (quien en 1998 había pasado a dirigir la CSUTCB), el más importante de estos nuevos movimientos fue el que organizaron los cocaleros del Chapare bajo la dirección de Evo Morales, quien en 1988 se había apoderado de una de las importantes federaciones sindicales regionales, al FCT (Federación de Cocaleros del Trópico). Morales y sus seguidores crearon la ASP (Asamblea por la Soberanía de los Pueblos), que fue el inmediato antecedente del partido MAS (Movimiento al Socialismo). Utilizando los sindicatos campesinos como base, su nuevo partido supo apoderarse de los gobiernos municipales, no sólo de las zonas cocaleras, sino en todo el departamento de Cochabamba: el propio Morales en 1997 fue arrolladoramente elegido al Congreso Nacional por el Chapare: ese año salieron elegidos al Congreso cuatro dirigentes indígenas, todos de Cochabamba. Aunque en 2002 fue expulsado del Congreso, Morales y su partido sobresaltaron las tiendas políticas tradicionales cuando en las elecciones presidenciales de ese mismo año obtuvieron el segundo lugar. En realidad, en las elecciones de 2002 los dos partidos indigenistas, el MAS de Morales y el MIP (Movimiento Indio Pachakuti) de Felipe Quispe, obtuvieron un tercio de los curules parlamentarios; el MAS incluso obtuvo ocho senadores. Estos nuevos dirigentes indios ahora presentaron un sentir de demandas tocantes a cuestiones económicas y sociales concretas relacionadas con las masas urbanas pobres y rurales. También propusieron un

cambio del carácter de la economía política boliviana con la vuelta al control estatal de los recursos naturales, una nueva identidad nacional y un nuevo papel de los pueblos indígenas en la sociedad boliviana moderna.

Este movimiento, no sólo condujo al desarrollo de nuevos partidos y de grupos de presión a escala local y nacional, sino que también creó una nueva era de creciente movilización política y de protestas violentas de masas en las calles y carreteras de Bolivia. Esta nueva era comenzó poco antes de las elecciones generales con la 'guerra del agua' (enero de 2000 en el valle de Cochabamba): el intento gubernamental de privatizar el sistema público y municipal de agua potable, vendiéndolo a Bechtel (una multinacional estadounidense), dio lugar a una protesta cada vez más exacerbada. Después de tres meses de movilización masiva de grupos locales, con huelgas generales y una importante participación de los campesinos qhiswa, el gobierno acabó abandonando sus planes de privatizar el sistema de agua potable del valle. Aunque la decisión gubernamental de abandonar la privatización apaciguó las protestas, ésta fue la primera movilización popular importante que combinaba demandas económicas inmediatas con debates de alto vuelo sobre las políticas gubernamentales y las demandas de grupos indígenas en pos de mayor poder político.

La apertura de la moderna industria de gas natural a la participación extranjera (aunque muchas de esas empresas en realidad eran estatales de otros países), fue el segundo tema en torno al cual giró un ataque popular masivo contra las políticas privatizadoras posteriores a 1985. La segunda presidencia de Sánchez de Lozada se propuso utilizar este nuevo recurso del gas natural al margen del control de YPFB, vendiendo gas boliviano en los mercados transatlánticos de ultramar. La decisión de construir un gasoducto trasandino a puertos chilenos condujo a la 'guerra del gas' (2003) y a la masiva y con frecuencia violenta movilización de campesinos y mestizos contra el MNR y su jefe. El uso de territorio chileno para el proyectado ducto y la persistente privatización de este nuevo recurso natural crucial, como había establecido la Ley de Hidrocarburos de 1996, fueron los factores decisivos

que crearon un movimiento simultáneamente nacionalista e izquierdista que planteó un poderoso ataque frontal contra las políticas privatizadoras del gobierno en materia de recursos naturales. En septiembre de 2003 hubo protestas urbanas en La Paz y Cochabamba; luego una masacre de campesinos en el emblemático centro aymara de Warisata. El 13 de octubre, un bloqueo de las comunicaciones de El Alto con La Paz por protestantes anti-gas, obligaron a Sánchez de Lozada a enviar tropas al altiplano, lo que dio lugar a un alto número de muertos entre protestantes desarmados. El resultado fue una inmediata escalada de los bloqueos carreteros, el sitio de la ciudad de La Paz por una población movilizada de El Alto y un aumento de los choques y de la violencia entre policía y protestantes. La hipotética simpatía de las clases de la élite por el MNR se evaporó con los persistentes bloqueos y las protestas diarias que iban paralizando la economía de la sede del gobierno. El 17 de octubre de 2003 Sánchez de Lozada renunció a la presidencia y salió del país. El vice-presidente Carlos Mesa, personalidad de los medios de comunicación sin partido nacional ni grupo que lo apoyara, fue el nuevo presidente de una Bolivia muy cambiada. Reconociendo los repentinos y profundos cambios que se estaban produciendo en el país, Mesa juró el cargo no en el tradicional Congreso, sino en la ciudad mestiza de El Alto.

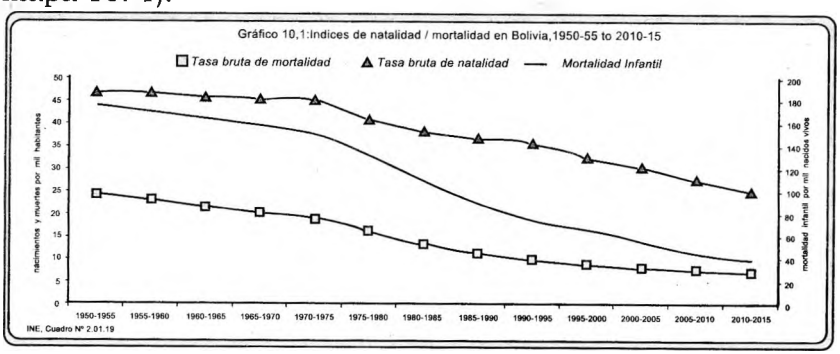
CAPÍTULO X

La aparición de una élite mestiza e indígena, 2002-2010

La conmoción de las elecciones de 2002, seguida por los bloqueos masivos, violentos y cada vez más efectivos de grupos de mestizos e indígenas, crearon las premisas para la aparición del primer partido político de masas coherente y poderoso, dirigido por un mestizo y con dirigentes indígenas.

Para las elecciones presidenciales de diciembre de 2005 la mayoría de los partidos tradicionales habían sido sustituídos por un nuevo partido no-indígena conocido como PODEMOS, mientras que Morales y su MAS se presentaba como el partido más poderoso del país. En diciembre de 2005 el MAS y el MIP (el otro partido indígena) lograron 1.6 millones de votos sobre un total de 2.9 millones de votantes: por tanto, el 56% del total. Así que en sólo tres años todos los partidos tradicionales perdieron su importancia y fueron reemplazados por nuevas agrupaciones de movimientos no-indígenas y por una multiplicidad de partidos indigenistas; de ellos el más importante era el MAS, manejado por Evo Morales, quien acabó llegando al poder en las elecciones de 2005. Por primera vez en la historia republicana salía elegido quien se autodefinía como indígena.

Después de 2002 no sólo cambiaba la política de partido, sino que en este estado más descentralizado aparecían nuevas alianzas regionales. Lentamente y con algunas variantes locales, de una forma bastante espectacular aparecía una nueva división política entre el bloque de departamentos andinos y un grupo de departamentos del Oriente y el Sur del país (Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija), formando lo que los bolivianos comenzaron a llamar la 'media luna' (pues rodeaban el territorio andino en forma de una media luna). Las tensiones entre los militantes dirigentes indígenas de los departamentos de La Paz y Cochabamba y aquellas regiones orientales ricas en gas, petróleo y empresas comerciales agrícolas en manos de grupos no-indígenas, contribuyeron a definir una nueva realidad política. Esta no significaba que todos los partidos nacionales no tuvieran presencia en ninguna de las zonas ni que las tensiones regionales entre las poblaciones urbana y rural de cada región no fuera otra causa de división. Además, estos territorios andinos y orientales cambiarán en los años siguientes de unas elecciones a otras, por lo que las agrupaciones regionales fueron más bien fluidas; ni siquiera las divisiones étnicas encontraban una definición totalmente geográfica. Ninguna región se planteó nunca seriamente la independencia política y cada conflicto acabó en compromiso entre ambos grupos de regiones. Pero esta división, aunque imprecisa, definía una nueva realidad política entre una élite tradicional y una nueva clase indígena que había llegado al poder en el gobierno central, realidad que queda bien ilustrada con la elección presidencial de 2005, que muestra los departamentos en que el MAS ganó y perdió (ver mapa 10. 1).



Los orígenes de este profundo cambio político se remontan medio siglo antes: a la Revolución Nacional de 1952. Resulta poco discutible que ese suceso repercutió profundamente en sus consecuencias tanto buscadas como no buscadas. Las dos medidas más importantes del temprano periodo revolucionario fueron la Reforma Agraria y la concesión por primera vez en la historia republicana del derecho de voto al margen de si sabía o no sabía leer. En agosto de 1953 el Decreto de Reforma Agraria expropió efectivamente todas las tierras de las haciendas andinas, distribuyéndolas entre los trabajadores indios por medio de sus 'sindicatos' y 'comunidades', bajo la condición de que no las podían vender individualmente. Las únicas tierras que el estado no expropió eran las de la poco poblada región cruceña; las regiones vallunas sudorientales de tamaño mediano como Monteagudo; y la región de pequeñas propiedades vitícolas en el valle de Cinti, que practicaba una modesta agricultura con uso intenso de capital y sin poblaciones indígenas residentes. En el resto del país se abolió la hacienda, se destruyó la clase hacendada y la tierra pasó mayoritariamente a las manos de campesinos indígenas. En 1993 se habían extendido unos 831.000 títulos de propiedad con una superficie de 44 millones de hectáreas (equivalente aproximadamente al 40% de la superficie de Bolivia) a 626.998 beneficiarios. A esta reforma Agraria vinieron a añadirse los dos periodos de hiperinflación (a mediados de los años cincuenta y a comienzos de los años ochenta) que debilitaron y en muchos casos destruyeron las élites rurales blancas que habían gobernado los pequeños pueblos y comunidades rurales. Estas élites fueron reemplazadas por doquier por una nueva clase 'mestiza', es decir indios que entraban en el mercado de trabajo, adoptaban las normas urbanas y el bilingüinismo, trasladándose a pequeños pueblos y ciudades a lo largo y ancho del país. Los 'mestizos' ahora se convirtieron en intermediarios entre los mundos rural y urbano, que iban evolucionando en Bolivia.

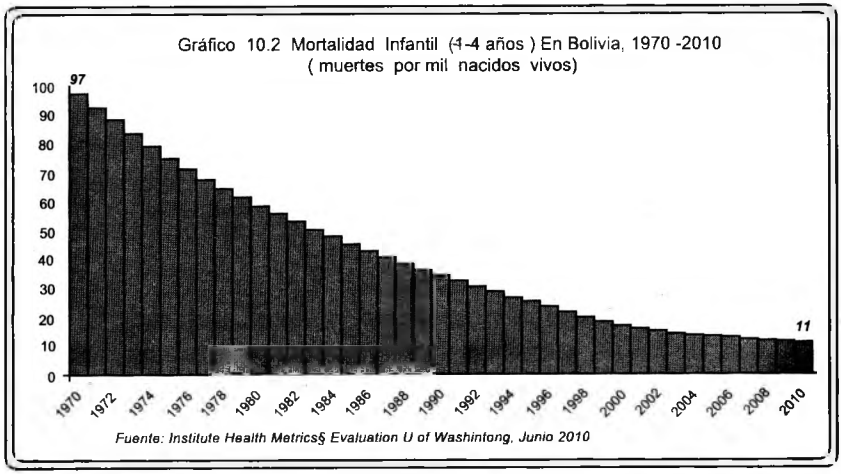
No fue menos decisiva la concesión del derecho de voto a la población indígena. En uno de los primeros actos del gobierno del MNR de 1952, fue implantado el voto universal y eliminada la exigencia de saber leer y escribir. De un golpe las masas

campesinas indígenas pudieron votar, con lo que la población votante saltó de 126.00 (1951) a 955.000 (1956), llegando en 1964 a 1.3 millones. Aunque las masas indias necesitaron varias generaciones para encontrar su voz política independiente cada gobierno sucesivo fuera militar o civil tuvo que hacer algún gesto para satisfacer sus demandas de escuelas, vivienda, electricidad, alcantarillado y apoyo económico general. Aunque los gobiernos fueron muy poco eficientes en prestar este apoyo y aunque las demandas del grupo a menudo iban cambiando con el tiempo, el cambio hacia la vida nacional fue profundo.

De no menor importancia que la distribución de la tierra, la Reforma Agraria de 1953 también liberó a todos los campesinos indios y trabajadores rurales de cualquier servidumbre personal ('pongueaje' y 'colonato') que los había mantenido ligados a la tierra. Este simple hecho dio una movilidad desconocida hasta entonces en la historia boliviana. La migración a los centros urbanos (que crecían a un ritmo siempre mayor) les ofrecía buenas oportunidades de educación, empleo y bienestar. Al mismo tiempo, la creación de una red de carreteras y la apertura de las áreas rurales a los mercados nacionales llevó nueva riqueza al campo. Las organizaciones sindicales y municipales garantizaban el apoyo de proyectos comunes y la capacidad de efectivizar las demandas de mejores servicios de salud y educación. Estas organizaciones fueron realmente tan importantes, que se convirtieron en norma en las nuevas tierras de las provincias orientales abiertas a la migración andina.

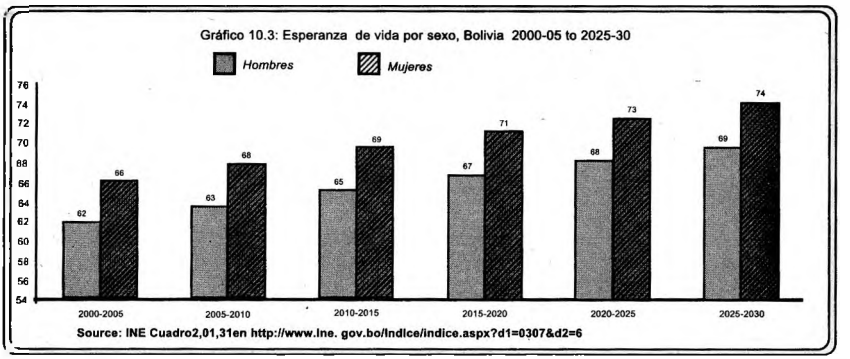
Con un nuevo compromiso con la salud y el bienestar de sus ciudadanos, los gobiernos posteriores a 1952 crearon (o mejoraron importantes iniciativas anteriores) en las esferas de la salud y de la educación que acabaron teniendo un importante efecto socia y demográfico. Aunque anteriores iniciativas en saneamiento y la oferta de servicios de salud había comenzado a rebajar la mortalidad general, las importantes inversiones en salud de los gobiernos posteriores a 1952 consiguió una rápida disminución de la mortalidad infantojuvenil y una importante baja de los índices brutos de moralidad (ver gráficos 10.1 y 10.2).

Por otra parte, la relativa importancia de la mortalidad neonatal e infantil postmeonatal fue cambiando lentamente. Si en 1970 la mortalidad postneonatal representaba el 55% de la mortalidad infantil total, 2010 había descendido al 47% de la tasa de la mortalidad infantil. Se trata de un cambio decisivo, pues en países avanzados las muertes postneonatales representan solamente un tercio del índice de la mortalidad infantil total, lo que refleja el hecho de que la mayoría de las muertes infantiles ocurrían muy temprano, dentro del año siguiente al nacimiento, debidas en primer lugar a defectos natales y no a las diferencias socioeconómicas de vida. En las sociedades más pobres la tasa superior de muertes ocurridas entre un mes y un año después del nacimiento (conocidas como 'postneonatales') suelen ser efecto directo de la situación social y económica. Así pues, el retroceso relativo de la importancia de estas muertes postneonatales resulta ser otro importante indicador de la mejoría del panorama de la mortalidad infantoinfantil, todo lo cual tendrían un efecto importante en la esperanza de vida de los bolivianos.



Dada esta constante disminución de la mortalidad postneonatal e infantil, cuyos índices tienen una influencia decisiva en la esperanza de vida, no resulta sorprendente que a partir de 1950 los índices de supervivencia de Bolivia experimentaran un cambio muy rápido y espectacular. En 1950

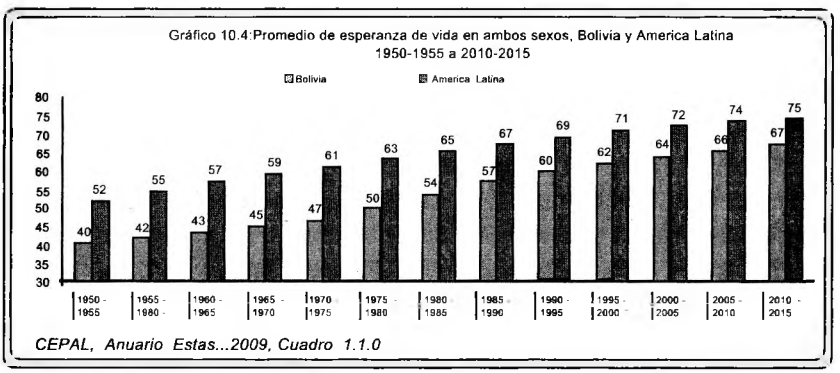
la esperanza media de vida al nacer era de 38 años en varones y en mujeres, de 42 años. Según el primer censo posterior a la Revolución de 1952, celebrado en 1976, la esperanza media de vida había aumentado en más de 10 años, tanto en varones como en mujeres: 48 y 52 años respectivamente, mientras que la tasa de mortalidad infantil había disminuido a 130, que seguía siendo un índice extraordinario alto, pero que significa una importante mejoría con respecto a las cifras de 1950. La crisis económica y el estancamiento relativo de los años ochenta y comienzos de los noventa no fueron acompañados de un estancamiento de los índices demográficos. Gran parte de esta disminución más rápida en años recientes fue efecto de una serie de actos y decisiones de los años noventa. En la Ley de Participación Popular de 1994 aproximadamente el 6% del dinero devuelto a los municipios estaba destinado a desarrollar un programa de atención básica de salud, que iba acompañado de un fondo destinado a apoyar el libre acceso a la atención médica en el parto. En 2005 la mortalidad infantil ha caído a 61 muertes por 1.000 nacimientos vivos, mientras que la mortalidad materna ha bajado a 229 muertes por 1.000 nacimientos vivos, cuando en una fecha tan reciente como 1994 todavía eran 390. Aunque estos índices seguían siendo altos para los niveles mundiales y aun latinoamericanos, en Bolivia constituyen un cambio profundo y duradero. La esperanza de vida también ha crecido espectacularmente: en 2010, sesenta años después de los datos de 1950, en promedio había aumentado en 26 años para ambos sexos; los varones ahora tenían una esperanza de vida de 64 y las mujeres, de 69 años, índice que cabe esperar vaya aumentando quinquenalmente, llegando a mediados de siglo cerca de las tasas contemporáneas latinoamericanas (ver Gráfico 10.2). Aunque estos aumentos forman parte de una tendencia mundial y todavía dejan a Bolivia con uno de los índices de esperanza de vida más bajos del continente americano, ha disminuido la brecha entre ricos y pobres. Dentro del marco de los índices globales latinoamericanos, los bolivianos han ido cerrando progresivamente la brecha; si en 1950 los separaban 11 años en 2010-2015 sólo son 7 años (ver gráfico 10.3).



La disminución de la mortalidad postneonatal e infantil fue efecto de los programas sanitarios gubernamentales, particularmente la masiva vacunación infantil de las últimas décadas. Si en una fecha tan reciente como 1980 sólo se había vacunado al 10-15% de los niños menores de tres años, en 2008 un programa más amplio de vacunaciones obligatorias llegó a 80-95% de toda la población infantil afectada por el conjunto de vacunas (tuberculosis, difteria, tos ferina, poliomelitis, sarampión; desde 2003, hepatitis B y miningitis). Además, el programa gubernamental de vacunación es tan efectivo entre las poblaciones rurales pobres como en las urbanas. Así, en el año 2000 alrededor del 92% de los niños menores de tres años fueron vacunados contra la poliomelitis y en 86% de los niños del campo. Ha habido asimismo un aumento, lento pero constante, de las consultas prenatales y de la asistencia médica en los partos, lo que ha contribuido eficazmente, la creciente disponibilidad de agua potable y de alcantarillado moderno en los hogares bolivianos ha contribuido evidentemente a la disminución de las altas tasas de desórdenes intestinales, principal causa de las muertes infantiles. Si en 1975 dos tercios de los hogares bolivianos no contaba con agua potable, en 2003 este índice ha bajado a un poco más de un tercio de los hogares. Las tasas de afecciones intestinales y malnutrición entre párvulos y niños también han disminuido significativamente; pero por desgracia la diarrea y las enfermedades respiratorias (índices clásicos de pobreza) siguen siendo la mayor causa de muerte infantil.

Aunque tanto la mortalidad como la fertilidad han

presentado importantes diferencias regionales, clasistas y étnicas, no hay mayores dudas de que las direcciones de las tendencias son las mismas en todas las regiones y entre los grupos. La pregunta que surge entonces es cuántos de estos cambios se deben a los gobiernos posteriores a la Revolución de 1952 y cuántos se deben a los cambios generales hemisféricos. Hasta cierto punto, las estadísticas demográficas mundiales permiten detectar ambas influencias. Lo impresionante es que Bolivia no ha cambiado de posición relativa (entre las peores del continente) en lo que se refiere a la mortalidad y a la esperanza de vida comparándolas con el resto de naciones del hemisferio occidental; pero con el tiempo no ha dejado de irse estrechando la brecha entre la mortalidad superior de la población boliviana y las tasas generales latinoamericanas (ver gráfico 10. 4).

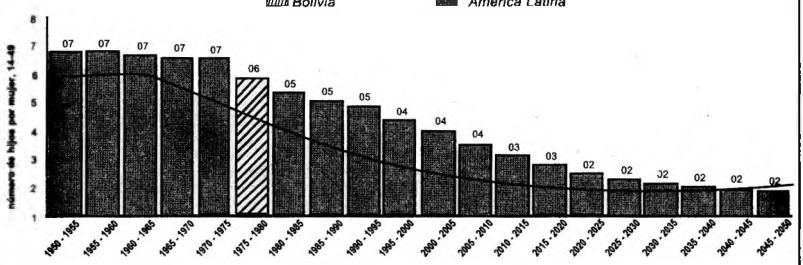


CEPAL, Anuario Estas...2009, Cuadro 1.1.0

El efecto de este crecimiento demográfico masivo y el correspondiente aumento del nivel educativo y el acceso a la contracepción, a fines de los años setenta y comienzos de loa años ochenta ha acabado llevando a una espectacular disminución de la fertilidad. En Bolivia, como en el resto del mundo en desarrollo, los embarazos no deseados comenzaron a disminuir a un ritmo cada vez más rápido durante la segunda mitad del siglo XX, aunque en Bolivia esto se produjo con bastante retraso en relación a la situación mundial. La alta tasa de 6.5 hijos nacidos por mujer en edad fértil seguía siendo la norma todavía a mediados de los años setenta; pero inmediatamente los nacimientos comenzaron a disminuir

rápidamente, quedando en 2010 las tasas totales de fertilidad en 3.4 hijos, comenzando a acercarse lentamente al número hemisférico. El INE calcula que la fertilidad boliviana sólo caerá por debajo de los niveles de reemplazo hacia los años 2035-2040, unos veinte años después de que ello haya ocurrido en el conjunto de América Latina (ver gráfico 10. 5).

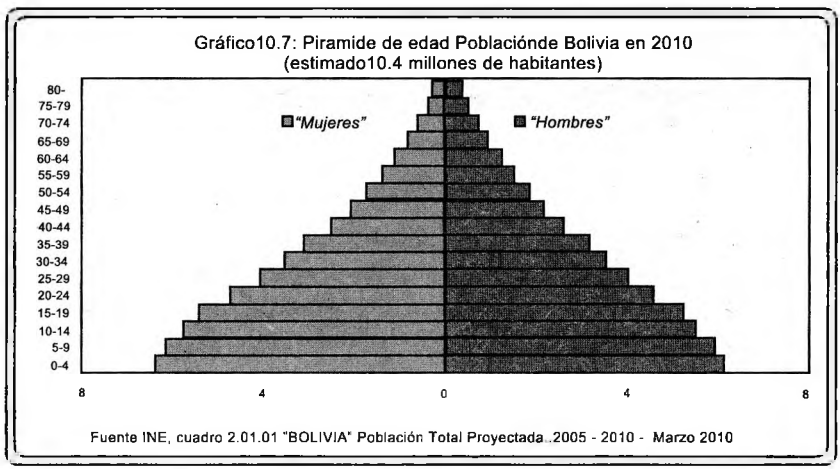
Gráfico10.5:Indice de fertilidad enBolivia y América Latina,1950-55 a 2045-50



CEPAL, Anuario Estadistica...2009, cuadro 1.1

El descenso de la mortalidad y la fertilidad han tenido también, obviamente, efectos en el crecimiento demográfico. Como las tasas de mortalidad comenzaron a conocer una caída importante antes de que lo hicieran las de nacimiento, se produjo un crecimiento demográfico explosivo: si a comienzos de los años ochenta el crecimiento demográfico era todavía al 2% anual, en los años noventa alcanzó un 2.7% anual y sólo en 2009 bajó por debajo del 2%, calculándose que ese índice de crecimiento seguirá disminuyendo durante el resto del siglo; pero la alta tasa de crecimiento alcanzada en los años noventa significó que la población nacional se duplicaba cada 25.7 años. Desde la segunda mitad de los años ochenta el crecimiento de la población boliviana se había mantenido por encima de la tasa general latinoamericana. La población había pasado de 3 millones a 6.4 millones entre los censos de 1950 y 1992, a los que se venían a añadir un estimado de otros dos millones para el censo de 2001; y también se calcula que en 2010 ha dejado atrás la cota de los 10 millones. Este crecimiento significa que Bolivia posee una de las poblaciones más jóvenes del mundo. Aunque la caída de las tasas de nacimiento y de la creciente esperanza

de vida van cambiando lentamente la estructura demográfica, la edad media de su población ha pasado de 18 años en 1992 a 21.9 en 2010, lo que le da una de las poblaciones más jóvenes del continente americano. Una mirada a la distribución de edades por sexos pone de manifiesto la transformación del perfil piramidal clásico de 1950 (ver gráfico 10. 6) a los comienzos de una estructura en forma de jarra, típica de las sociedades industriales avanzadas, con menos nacimientos y muertes en 2Q10 (ver gráfico 10. 7).



Si la fertilidad y la mortalidad de los bolivianos ha permanecido entre las más altas de la región, demostrando que Bolivia ha cambiado más lentamente que otros países latinoamericanos, no pasa lo mismo con el alfabetismo: Bolivia ha superado su posición relativa anterior en lo que se refiere a alfabetización y educación en tal medida, que ya no figura entre las naciones más pobre del continente si tomamos en consideración estos efectos, tan importantes en la evolución del capital humano. Aunque se ha afirmado que el aumento

de las inversiones en educación y de la creciente matriculación de estudiantes datan de antes de la Revolución de 1952, está claro que los cambios más rápidos del último medio siglo se han producido en las áreas de la educación y de la alfabetización. Aunque Bolivia en 1950 figuraba entre las poblaciones menos educadas del hemisferio occidental, en 2010 por fin había alcanzado un índice cercano al de todos sus vecinos sudamericanos y claramente superior al de la mayoría de las repúblicas centroamericanas y Haití. De hecho, la evolución de sus índices educativos y de alfabetización muestra datos que le favorecen al compararlos con los logrados por su vecino Brasil durante el mismo periodo de tiempo.

A finales de siglo el gobierno gastaba en educación más que la mayoría de países de la región, es decir alrededor del 8% de su PIB. Si en 1950 el país daba educación primaria a una cuarta parte de sus niños, en 2007 la tasa neta de matriculación había subido al 84%. En cambio Bolivia no queda tan bien en la educación secundaria: en 2007 sólo el 47% de sus niños y niñas de ese grupo de edad la reciben (tasa que le colocaría hacia el fondo de la mayoría de los países latinoamericanos). Ese año había 1.9 millones de estudiantes en las escuelas primarias y de kindergarten, más otros 537.000 en los colegios secundarios. Los índices bruto y neto de matriculación muestran que a menudo hay más estudiantes que los que corresponderían a su edad, lo que demostraría la existencia de cantidades importantes de alumnos que repiten y abandonan. Con todo, esos índices han ido disminuyendo lentamente y tanto la tasa de repetidores como la del fracaso escolar en años recientes han caído por debajo del 10% en la primaria y en la secundaria. Sean cuales fueren los problemas actuales del sistema, la tendencia es hacia una cobertura universal, por lo menos en la primaria, y hacia unas mayores tasas de matriculación en la secundaria. Esto ha significado que el número promedio de años de escolarización durante este periodo tampoco ha cesado de subir de cuatro a nueve años; por otra parte, el porcentaje de bolivianos con más de 19 años que en 2006 no han gozado de ninguna escolarización, ha bajado al 12% (7% en los hombres y 17% en las mujeres). Como era de esperar, las generaciones más jóvenes han disfrutado de un número mucho mayor de

años de escolaridad que el promedio nacional.

A diferencia de la mayoría de indicadores y económicos que muestran sistemáticamente que la parte no-indígena de la población boliviana es más rica y más sana que la parte indígena, en el acceso a la educación primaria prácticamente no hay diferencia entre ambos sectores. En el presente siglo el 93% de los niños indígenas y no-indígenas entre 6 y 11 años va a la escuela; sólo en el índice rural hay un pequeño desequilibrio a favor de la infancia no-indígena (90 frente a 87%). Aunque cabía esperar otra cosa dada la mayor pobreza de las poblaciones indígena y rural, en los porcentajes respectivos de asistencia a la enseñanza secundaria encontramos muy poca diferencia: mientras que los chicos indígenas de 12-16 años la siguen en un 79%, en el caso de los no-indígenas la tasa es del 83%. Si buscamos la tasa de terminación de estudios primarios entre jóvenes de 15-19 años de cada grupo, tenemos un 85% entre los no-indígenas frente a un 75% entre los indígenas. Naturalmente, los logros escolares en el nivel más avanzado presenta mayores distancias entre ambos grupos y aun entre ambos sexos. Sin embargo, el gobierno boliviano ha hecho un largo camino en la oferta educativa a toda la población; las tendencias del último siglo muestran un incesante incremento de los estudiantes matriculados en la educación secundaria.

Todas estas evoluciones en materia educativa han tenido un efecto directo en los índices de alfabetismo. Teniendo en cuenta las complejas divisiones lingüísticas de Bolivia, la conquista de unos índices tan altos de alfabetismo ha sido un logro extraordinario. Si en 1950 la mayoría de la población ni siquiera hablaba español y mucho menos había sido alfabetizada en esa lengua, como solamente el 31% de la población pasaba por alfabetizada, en 1976 la cifra había saltado al 67% y en 2003, al 87%. En realidad, durante ese periodo el índice de alfabetismo de Bolivia le ha permitido pasar del 13° al 8° lugar de América Latina, con un índice superior de alfabetismo que su vecino Brasil.

Que Bolivia actualmente imparta educación primaria a casi la totalidad de sus niños ha tenido un efecto profundo

en todos los aspectos de la sociedad, pero especialmente en la lengua nacional hablada. Sólo en el censo de 1976 el español ha acabado convirtiéndose en la lengua mayoritaria de la nación: por entonces más del 83% de la población de más de seis años hablaba español, aunque sólo el 42% de ella era monolingüe en esta lengua. Al mismo tiempo el 62% de la población total se declaró indígena, lo que significaba que la población indígena mediante el sistema educativo se ha convertido ante todo en bilingüe y alfabeta en la lengua nacional. Según el censo de 2001, alrededor del 74% de los 3.7 millones de hablantes de lenguas indígenas en español. Vale la pena notar que los aymara-hablantes eran mucho más bilingües que los qhiswahablantes, realidad que puede ayudar a explicar su mayor militancia política. Entre los 1.3 millones de aymarahablantes alrededor del 80% era bilingüe, mientras que entre los 2 millones de qhishwahablantes sólo lo era el 69%. Varios investigadores han destacado que entre los hablantes alfabetos de una lengua indígena existe una línea continua que se traduce en un movimiento ininterrumpido del *monolingüismo indígena* al bilingüismo, predominante hasta comienzos de los años noventa; en el nuevo siglo el movimiento cada vez más va del bilingüismo al *monolingüismo español,* esto explica por qué monolingües españoles se autoidentifican como población indígena. Sin embargo, la dimensión de la población que conoce y habla una lengua indígena sigue siendo totalmente impresionante. El más rápido crecimiento demográfico de la población indígena en un comienzo significó que los hablantes de lenguas indígenas habían pasado de 1.8 millones en 1950 a 4 millones en 1992; pero según el censo de 2001 su número ha bajado a 3.7 millones: a pesar del crecimiento de la población rural a un ritmo sin precedentes, el número de monolingües indios no ha cesado de disminuir. En 2001 los monolingües qhiswa han bajado a 632.000 y los aymaras a 263.000. Además , estos monolingües de 2001 eran casi todos habitantes rurales, que en su mayoría vivían dispersos por el campo (sólo un 10 y un 17% respectivamente, vivían en pueblos o ciudades de más de 2.000 habitantes). Al mismo tiempo, el número de bilingües poco a poco ha comenzado a disminuir a medida

que más indígenas abandonaban su lengua nativa a pesar de la introducción de la educación bilingüe en los años noventa. La posición mayoritaria alcanzada en 1976 por el español fue una prueba del impacto escolar en las zonas rurales; según muestran estas cifras, no sólo había crecido mucho la población mestiza, sino —cosa más importante— que ahora incluso los campesinos indios rurales empleaban en gran escala el español juntamente con sus lenguas indígenas tradicionales.

A pesar del retroceso de las lenguas nativas, el número de personas que se autoidentificaron como indígenas ha seguido siendo muy alto. Aunque en 2001 solamente el 45% de la población total era monolingüe o bilingüe indígena, se calculó que 5.4 millones de personas (dos tercios de la población boliviana) eran indígenas; entre los que de ellos tenían más de 15 años, un 4,4% de hablantes indígenas no se autoidentificaron como indígenas, mientras que el 14% de la población indígena, pero no hablantes indígenas, si se autoidentificaron como indígenas. En una encuesta nacional de hogares celebrada en 2005 apareció que el 53% de la población se autoidentificaba como indígena, pero sólo el 42% hablaba una lengua indígena. Aunque algunos indígenas migran hacia la categoría no-indígena, para la mayoría de los pueblos indígenas la identidad indígena sigue siendo muy fuerte, a pesar del declive de los hablantes monolingües y bilingües de estas lenguas nativas. Por otra parte, quienes se autoidentifican como qhishwa o aymara en su mayoría son urbanos, a pesar de que muy pocos monolingües viven en las zonas urbanas. Finalmente, en un nueva encuesta nacional de hogares de 2007 se calculó que el 79% de la población hablante de lenguas nativas era alfabeta (en la zona urbana lo era el 87% del grupo; en la rural, el 73%). El hecho de que los autoidentificados indígenas sean en su mayoría hispanohablantes y alfabetos, aun en el caso de que hablen una lengua indígena, y esto tanto en la ciudad como en el campo, da a entender una población indígena altamente integrada en la sociedad y el gobierno nacional no obstante sus altos niveles de pobreza.

La creciente urbanización de la sociedad repercutió profundamente en los cambios lingüísticos y de alfabetización

producidos, lo mismo que en las consecuencias sanitarias y demográficas de la población boliviana. De una sociedad fundamentalmente rural que era todavía en 1950, en los últimos 60 años la nación se fue transformando en otra predominantemente urbana. En 1950 sólo el 20% de la población vivía en ciudades de más de 20.000 habitantes; en cambio, según el censo de 2001 más de la mitad de la población vive en centros urbanos. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que en 1950 sólo tenía 364.000 habitantes ahora. El área metropolitana alcanza los dos millones en 2010 en los tres mayores centros urbanos (Santa Cruz, las ciudades gemelas La Paz-El Alto con poco menos de dos millones, y Cochabamba con un millón) vivían 5.3 millones de habitantes, es decir algo más de la mitad de los calculados 10.4 millones de bolivianos. Esta urbanización de la población nacional también conllevó un ascenso del nivel de vida. Todos los índices de salud, bienestar y educación demostraron sistemáticamente que las poblaciones urbanas ofrecían mejores condiciones que las rurales.

Pero las mencionadas tasas de pobreza, sea cual fuere su definición en Bolivia, en las últimas décadas han disminuido muy lentamente, particularmente en las zonas urbanas. Si bien los niveles de pobreza han disminuido bastante drásticamente en la población rural gracias a las inyecciones de fondos y otras medidas gubernamentales, la pobreza urbana ha persistido bastante establemente. Así, entre 1999 y 2007, en las zonas rurales la extrema pobreza ha bajado del 59 al 48%, pero en las zonas urbanas ha permanecido en el mismo 21-22%. Por otra parte, en todo ese mismo periodo los niveles nacionales de pobreza (pobreza extrema y normal) se mantuvo aproximadamente en un 60%, todavía en 2005 se calculó que dos de cada tres bolivianos era pobres y uno de cada cuatro era indigente. Aunque las condiciones urbanas eran mejores que las rurales, la pobreza seguía siendo la norma de la mayoría de bolivianos. El mismo 2005, cuando Bolivia tenía el 31% de su población considerado como en extrema pobreza (que se suele definir como insuficiente ingestión alimenticia), sólo Honduras, Nicaragua y Paraguay presentaban unos niveles iguales o mayores de indegencia. Según la definición del propio gobierno, en 2007 alrededor del 60% de los hogares bolivianos

no cumplían con las normas mínimas en materia de vivienda, alimentación, agua potable y alcantarillado. En la zona rural esa cifra llegaba al 77% y aun en las ciudades superaba el 50%

Con todos esos índices, no es sorprendente que Bolivia siga siendo el segundo mayor receptor de ayuda extranjera en el mundo en desarrollo de América Latina. Según las cifras recopiladas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la ayuda que recibió Bolivia en el periodo 2004-2007 equivale en promedio al 2% de su PIB siendo el segundo receptor de los países latinoamericanos. En el caso boliviano esta ayuda representó mucho menos de su PIB que en los casos de Haití y Honduras.

Dada la pobreza, las décadas recientes de turbulencia economía y los crecientes niveles de educación, no sorprende que en las últimas décadas en Bolivia haya habido una emigración significativa. En primer lugar, hay que recordar que por varias décadas muchos trabajadores fueron a Argentina; pero en los años ochenta y noventa ha habido una continua emigración a los Estados Unidos, seguida después de 2000 por una masiva hemorragia de emigrantes a España, donde actualmente hay alrededor de 229.000 bolivianos residentes (Padrón Municipal de 2009); aproximadamente 232.000 residían en Argentina (según el censo de 2001) y en 2000 otros 53.000 residían en los Estados Unidos (censo) y 20.000 en Brasil (censo). Los otros países latinoamericanos vecinos contenían probablemente unos 10.000 bolivianos, además del gran número de migrantes estacionales que trabajan en Argentina y, en menor medida, en Chile y Brasil. En total, en las últimas décadas aproximadamente medio millón de emigrantes bolivianos permanentes han remitido desde el exterior una corriente permanente de ahorros, cuyo volumen alcanzó la cima en 2007 con una cifra que representaba el 7.4% del PIB, en un momento en que la ayuda extranjera había caído al 1.5% del PIB; pero con la recesión mundial esas remesas han ido cayendo hasta representar sólo el 5% del PIB según las estimaciones más recientes.

Junto con la emigración internacional también la movilidad

interna ha tenido su importancia para la evolución reciente de Bolivia. En la segunda mitad del siglo XX la urbanización también ha dado lugar a profundos cambios en la distribución de la población nacional. A comienzos del siglo XX el eje principal de la nación era La Paz-Oruro-Potosí, línea de norte a sur, que formaba el corazón de la nación: aquí estaba el centro de la minería, el comercio y la agricultura, mientras que Santa Cruz era una región aislada y deprimida; por su parte Cochabamba tenía una economía relativamente enclaustrada y atrasada. Con la progresiva decadencia de la minería, acentuada a partir de la mitad del siglo, el centro comercial desde La Paz poco a poco fue moviéndose hacia el este y actualmente abarca los departamentos de Paz, Cochabamba y Santa Cruz, mientras que el eje Oruro-Potosí-Sucre ha caído en una grave depresión. Fundamentalmente, el nuevo corredor NO-SE que conecta las tres ciudades de La Paz-El Alto, Cochabamba y Santa Cruz con sus noroeste-sudeste respectivas provincias, concentra la mayor parte de la actividad económica del país. Los tres respectivos departamentos en 2009 aportaron el 93% de los impuestos y en 2000 producían el 71% del PIB boliviano. Los tres departamentos tienen también las ciudades más avanzadas y de un crecimiento más rápido. Los antiguos centros mineros de Potosí y Oruro se han estancado, siendo actualmente sus poblaciones urbanas y rurales las más pobres del país. Recientemente el gobierno ha calculado que más del 80% de la población residente en estos dos departamentos mineros antiguamente ricos, es pobre y que más del 60% vive en extrema pobreza. Incluso sus poblaciones urbanas eran considerablemente más pobres que el promedio general. Si en 1950 los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Cochabamba representaban el 34% de la población nacional (cifra muy parecida a la de 1900), según el censo de 2001 los mismos departamentos sólo contienen el 20% del total. En cambio, Santa Cruz que en 1950 sólo tenía el 10% de la población (también aquí, muy similar a 1900), en 2001 representaba el 25% de los habitantes del país. La suma de la población de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que en 1950 era un poco superior al 50% del total, según el censo de 2001 concentraba

más del 70% del total; en 2010 se calcula que contienen el 72% de la población nacional.

Aunque la población rural ha descendido espectacularmente en sus cifras relativas; en cambio, la agricultura boliviana salvo en las nuevas zonas de cultivo ha permanecido sorprendentemente atrasada; todavía en 1976 la agricultura seguía ocupando el 54% de la mano de obra masculina; y en 2007 seguía haciéndolo con el 34%, pero los agricultores no eran más eficientes, pues este mismo año su producción sólo representaba el 13% del PIB. La mayor parte de esa agricultura, sobre todo en los Andes y los valles orientales, ha seguido practicando el cultivo tradicional de baja productividad de productos alimenticios; pero en el pasado medio siglo en el oriente boliviano también ha habido una transformación radical: en las últimas décadas en la región cruceña los cultivos industriales han llegado a ser una nueva industria. Si en 1980 los cultivos industriales (sobre todo algodón, azúcar, soya y semilla de girasol) representaban el 12% de la tierra agrícola; en 2008 la cifra ha subido al 47% del total de la tierra usada, prácticamente igualando la superficie dedicada al cultivo de granos y tubérculos. En los llanos de Santa Cruz, cultivos industriales como la soya y la semilla de girasol alcanzan unos niveles de producción cercanos a los típicos mundiales. En cambio, los cultivos andinos de alimentos producían menos que en los Andes peruanos; buena parte de esta baja productividad se relaciona con el hecho de que Bolivia gasta menos dinero en investigación agrícola y en programas de extensión que cualquier otro país latinoamericano. La agricultura tradicional, que sigue absorbiendo la mayoría de la población rural ha permanecido subcapitalizada e ineficiente. A pesar de todas las recientes transformaciones agrícolas en Santa Cruz y en algunas de las regiones vallunas cercanas, Bolivia sigue siendo uno de los países agrícolas más atrasados del continente americano.

La imagen de Bolivia que se desprende del presente análisis de algo más de medio siglo de desarrollo socio-económico es la de un importante cambio social combinado con persistente pobreza y relativo atraso económico. La educación y la salud han conocido el más espectacular progreso; pero la persistente

pobreza y el parcial aumento de los niveles de vida comunes a todo el continente americano, se han producido dentro del marco de un cambio radical del sistema social. Si el lento crecimiento de la economía no ha promovido una gran movilidad social, la migración urbana y el surgimiento de un poder político campesino rural y mestizo urbano han marcado una profunda diferencia en la respuesta de todos los gobiernos bolivianos a las demandas de mejores condiciones sociales. Lo que sólo cabe llamar el 'mestizaje' de la sociedad boliviana se ha convertido en un importante fenómeno después de medio siglo de revolución social y de dos períodos hiperinflacionarios que han destruido gran parte del tradicional poder económico 'blanco'. La creciente esperanza de vida y el aumento de los años de escolaridad de las clases populares bolivianas explican su capacidad para participar significativamente como actores autónomos en la escena política nacional. El nuevo siglo ha marcado claramente un gran cambio en el relativo equilibrio del poder político, social y, en cierta medida, económico entre los grupos étnicos del país. En la última década el poder político de la población mestiza se ha expresado, no sólo en los partidos tradicionales y extremistas, y en el gobierno nacional, sino también en El Alto de Bolivia, que es el emblemático centro urbano mestizo. En 1988 el suburbio obrero de El Alto, situado en la periferia occidental de La Paz, por fin fue reconocido como ciudad independiente, pasando su administración a manos de la nueva élite mestiza. Esta población de altura por entonces cantaba con unos 307.000 habitantes (la mitad del tamaño de La Paz), pero ya era mayoritariamente bilingüe y se relacionaba muy íntimamente con las comunidades aymaras que la rodeaban. Al nacer ya era cuarta ciudad del país, pero según el censo de 2001 se había convertido en la tercera en importancia, con sus 695.000 habitantes, de los que el 86% figuraban como indígenas. En 2005 tenía unos 872.000 habitantes, suplantando a La Paz como la segunda ciudad del país. Aunque El Alto tenía tasas más altas de pobreza y peores condiciones de vida que La Paz, su población gozaba de un nivel de vida superior al de las zonas rurales del altiplano de donde procedían sus inmigrantes, con lo que ha demostrado ser un extraordinario factor de incremento de la movilidad social de la clase 'mestiza'. El Alto es también

un centro de intensa interacción entre pueblos indígenas y no-indígenas, donde el español se ha convertido en la lengua de contacto incluso para la población aymara dominante.

Al mismo tiempo, la integración de las economías regionales en las ciudades centrales y la eliminación de las antiguas élites rurales 'españolas', han dado paso a una élite regional 'mestiza' más poderosa. De esta élite y de la población mestiza urbana ascendente ha surgido toda una nueva generación de profesionales 'mestizos' con educación secundaria y universitaria. Aunque desde las épocas más lejanas ha habido siempre algunos 'mestizos' que estudiaron en la universidad, constituían una minoría diferenciada y forzada a abandonar su lengua, cultura y orígenes, y a adaptarse a las normas de la cultura 'blanca', La nueva generación de mestizos 'cultos' incomparablemente más numerosa que en cualquier época anterior parece tener ahora la opción de conservar sus lazos étnicos, autoidentificándose como indígenas y a veces incluso hablando sus lenguas originarias indias juntamente con el español. Así, estos mestizos urbanos proclaman su identidad simultánea como 'mestizo' y como aymaras o qhishwa u otro pueblo indígena, negándose así a adoptar la identidad 'blanca'. Esto ha tenido profundas consecuencias sociales y políticas para Bolivia, siendo un desarrollo relativamente único para los criterios latinoamericanos. También significa que incluso cuando los mayores niveles de educación reducen el número de monolingües de lenguas indígenas, la identidad indígena persiste como una fuerza poderosa y movilizadora en la política nacional.

Desde las elecciones generales de 2002 hasta las de diciembre de 2005 las clases indígenas y 'mestizas' se apoderaron de las carreteras y autopistas de Bolivia en un periodo extraordinario de movilización popular. La explosión de la 'guerra del gas' de 2003 fue seguida, en octubre, del derrocamiento del gobierno de Sánchez de Lozada, al que siguieron los 20 meses de tumultuosa presidencia de Carlos Mesa. Reconociendo el poder de esta nueva movilización, Mesa juró su nuevo cargo presidencial en la ciudad 'mestiza' de El Alto y no en el Palacio Legislativo o en el cercano Palacio Quemado del centro de La Paz, como

había sido tradicional. Aunque Mesa pudo detener el baño de sangre retirando la policía y el ejército de los enfrentamientos con los protestantes, no pudo detener por completo los bloqueos. Y fue obligado a renunciar cuando quedó patente que no podía dominar el Congreso. En junio de 2005 Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte Suprema, fue nombrado presidente interino, pudiendo por fin imponer un nivel de calma política que no había existido en los dos años anteriores. Aunque la mayoría de los sondeos preelectorales daban a Evo Morales una mayoría de intención de voto para la presidencia, existía la creencia generalizada de que cualquier retorno a las negociaciones congresales postelectorales provocaría la vuelta a las protestas masivas populares indígenas. En aquel momento la mayor parte de la élite decidió que era preferible dar a Morales una victoria total, con lo que pudo duplicar los cálculos preelectorales con el 54% de los votos válidos, siendo el primer presidente desde la democracia restaurada que obtuvo más del 50% de los votos. De los 2.9 millones de votos válidos de las elecciones generales de 2005, Morales obtuvo 1.5 millones y el MIP consiguió 62.000. El MAS también obtuvo 12 de las 27 senadurías y 72 de las 130 diputaciones.

La elección de Evo Morales ha demostrado ser una transformación mucho más extremista de lo que en un principio se pensó. Se esperaba que habría una importante presencia de dirigentes políticos indígenas y 'mestizos' en los cargos de poder del gobierno nacional, lo que efectivamente ocurrió. Dado el prolongado conflicto por la producción de coca y la vinculación de Morales con los sindicatos cocaleros del Chapare, también se esperaba un cambio en la política de erradicación de los cultivos de coca junto con una mayor independencia de los Estados Unidos. Todo ello sucedió, hasta el punto de expulsar al embajador estadounidense. Lo que no se esperaba tanto fue el absoluto rechazo del programa privatizador que había dominado la política gubernamental nacional desde los años noventa. Poco a poco y con precaución el gobierno de Morales ha re-estatizado la producción de gas y petróleo, las empresas de telecomunicaciones y de electricidad (incluso cuando se trataba de cooperativas bolivianas). Ha propuesto la eliminación de los sistemas privados de pensiones, ha re-creado una empresa aérea

estatal, ha estatizado dos fundiciones suizas, y ha impulsado sistemáticamente el control estatal de los recursos mineros, desde el hierro hasta el litio. Lenta pero sostenidamente, el Estado se va convirtiendo en el actor dominante de la economía nacional a través de empresas estatales que se han creado o revitalizado, programa que sólo han intentado unos pocos de los demás países latinoamericanos, a pesar de que muchos de ellos rechazaron las políticas más extremadas de la era neoliberal de los años noventa. Desde enero de 2006 en que llegó al poder, el gobierno de Morales ha estatizado un total de 12 importantes empresas extranjeras y una cooperativa boliviana de electricidad.

El hecho particular más importante fue la estatización de los yacimientos bolivianos de gas y petróleo, desarrollados o explotados por una serie de empresas extranjeras (en muchos casos, empresas estatales extranjeras, entre las que destaca la brasileña Petrobras). El 1° de mayo de 2006 el gobierno de Morales se apoderó de las posesiones gasíferas de todas las principales empresas extranjeras. A YPFB de Bolivia que había sido hecho socio pasivo de las nuevas exploraciones y desarrollos de petróleo y de gas, se le confió el control activo de los campos y de sus instalaciones. Todas las empresas que funcionaban en Bolivia perdieron a favor de YPFB el 50% de sus operaciones de propiedad local. Las empresas extranjeras seguirán manejando sus instalaciones, pero sólo recibirían el 18% de sus ingresos totales como compensación de sus gastos. El Estado recibiría el 32% de los ingresos, YPFB la misma cantidad y el restante 18% también iría al Estado por concepto de regalías, lo que daba al Estado una participación del 50% en el total de las ventas de gas y petróleo (y del 82% incluyendo la cuota de YPFB). En mayo de 2007 el gobierno también se salió del Banco Mundial, afirmando que apoyaba las multinacionales. El paso siguiente llegó en mayo de 2008 con la estatización de la empresa de telecomunicaciones italiana Telecom, que desde 1995 era socio con la propiedad del 50% de las acciones de la empresa estatal ENTEL, que desde 1995 era socio con la propiedad del 50% de las acciones de la empresa estatal ENTEL, administrando el monopolio boliviano de telecomunicaciones. Y en mayo de 2010 les llegó el turno a todas las empresas eléctricas.

Todas estas estatizaciones y el aumento de regalías en un comienzo incrementaron los ingresos gubernamentales en un grado impresionante. Desde 2003 Bolivia también ha conocido una balanza comercial favorable, con lo que ha acumulado importantes reservas de divisas. Pero la cadena de estatizaciones de empresas extranjeras ha afectado gravemente los niveles de inversión directa extranjera en Bolivia: esta ha venido disminuyendo desde la primera mitad de la década y actualmente ha quedado por debajo del procedente de los fondos de ayuda extranjera y de las remesas de los bolivianos en el exterior. También el nivel de inversión extranjera de capital ha caído de un 61% del PIB en 2000 a un 35% en 2008 y sigue disminuyendo. Desgraciadamente la dependencia de la ayuda extranjera y de las remesas, juntamente con la disminución de la inversión extranjera de capital, tienen la capacidad de afectar a largo plazo la economía nacional. Con las exportaciones de minerales y de gas afectadas por los precios mundiales y la disminución de reservas, queda por ver si los ingresos por exportaciones de las empresas estatizadas y los pocos productores privados bastarán para reemplazar la falta de inversiones extranjeras en el desarrollo a largo plazo del país.

Al mismo tiempo, la falta de inversiones significativas, especialmente en manufacturas con uso intenso de mano de obra, ha llevado a Bolivia a tener uno de los mercados de trabajo informal más grandes del continente americano. Se calcula que actualmente el 80% de la fuerza de trabajo consiste en ocupaciones de producción y salario bajos en el sector informal o en la agricultura de subsistencia. En 2007 se calculó que el 88% de la población boliviana no contaba con ningún sistema de pensiones y que el 82% no disponía del tradicional aguinaldo (o 13ª mensualidad) de que gozan los asalariados del sector formal. Ese mismo año sólo el 27% de los bolivianos disponían del NIT (número de identificación tributaria). Habida cuenta de los importantes *shochs* de la economía en lo años ochenta y de nuevo en los noventa y primeros años del nuevo siglo, Bolivia no ha podido generar un número importante de puestos de trabajo que vinieran a cambiar aquella dinámica. Esta falta de puestos de trabajo bien renumerados y productivos ayuda a

explicar los niveles extraordinariamente altos de pobreza a lo largo y ancho del país.

Además de sus estatizaciones, el gobierno de Morales también ha logrado importantes progresos en el acceso a la tierra de los grupos más pobres de la sociedad boliviana. Aunque la Reforma Agraria de 1953 ha devuelto la mayor parte de la tierra del altiplano y los valles a los trabajadores indígenas, las inmensas llanuras orientales no quedaron afectadas desde cuando eran mayoritariamente subdesarrolladas. Pero la apertura sistemática en los años posteriores a 1953 de las regiones cruceña, beniana y pandina al desarrollo agrícola moderno y a la colonización, condujo a la formación de una nueva zona de latifundios, yendo estas tierras a parar masivamente de forma gratuita y con frecuencia corrupta a élites privilegiadas. Particularmente durante los regímenes militares se han concedido inmensas superficies a individuos privados. Ya en la segunda presidencia de Sánchez de Lozada se reconoció que había que acabar con este sistema corrupto, no sólo en nombre de la justicia a las poblaciones indígenas de la región, sino también en defensa de una mayor eficiencia económica de las regiones con una agricultura comercial, que ahora necesitaban estas tierras incultas, pero de propiedad privada. En 2002 se aprobó una nueva Ley de Reforma Agraria, pensada para eliminar estas grandes propiedades no cultivadas y devolver algunas de ellas tanto a los grupos indígenas de la región recientemente rehabilitados como a agricultores privados productivos. El nuevo gobierno de Morales ha dado un importante impulso a este proyecto: desde 2006 hasta mediados de 2009 ha distribuido alrededor de 31 millones de hectáreas a 154.000 campesinos y hacendados (unas cinco veces más que la cantidad repartida antes de 2006), dando una mayor proporción que antes a los pueblos indígenas.

El nuevo gobierno del MAS también adoptó un nuevo realineamiento de la política internacional boliviana. Bajo el caudillaje de Evo Morales, como nunca, desde 1945 Bolivia se ha alejado de la esfera de influencia estadounidense. Esto le ha permitido una política exterior activa e independiente, en la

que el gobierno ha subrayado su alianza con grupos indígenas situados desde América Central hasta Europa septentrional. También le ha llevado a una campaña a favor de la defensa del medio ambiente desde plataforma internacionales. No puede negarse que este gobierno ha desempeñado un papel en asuntos internacionales muchos más activo y que ha demostrado más independencia de los Estados Unidos que cualquier gobierno boliviano anterior.

Menos sorprendente que su campaña re-estatizadora y su política exterior fue la decisión con que el MAS y Evo Morales han impuesto una Constitución que ampliaba en gran medida los conceptos de un Estado tanto plurinacional como descentralizado, tema central de su partido y de sus partidarios desde mucho antes de 2005. Como los delegados a la Asamblea Constituyente fueron elegidos mediante elecciones propias, resultó un cuerpo mucho más extremista y representativo que el Congreso Nacional. Casi la mitad de los constituyentes no llegaban a los 40 años alrededor del 34% eran mujeres, y un significativo 56% se autoidentificaban como pertenecientes a un grupo indígena. Dada esta representación, era previsible que la Constitución salida de esa asamblea expresara la mayoría de las ideas propugnadas durante décadas por dirigentes indígenas extremistas. Dentro de un debate encarnizado, la nueva Constitución fue redactada en 2008 y aprobada en referendo en 2009. Entró en plena vigencia en 2010, cuando por primera vez en la historia boliviana los departamentos eligieron a sus propios prefectos y consejos legislativos.

La Constitución de 2009 no sólo garantizó los derechos tradicionales de los gobiernos comunitarios tradicionales, sino que también reforzó la descentralización mediante las autonomías departamental, regional, comunal y municipal. Pero sobre todo la Constitución fue una excelente expresión de las demandas que los dirigentes 'mestizos' e indígenas habían venido planeando en los 40 años anteriores por un reconocimiento fundamental de sus necesidades y anhelos por parte del Estado y de la élite de la sociedad 'blanca'. Sobre todo pedían el reconocimiento de su dignidad y de su valor como plenos ciudadanos, particularmente de aquellos cuyo ancestro

era anterior a la conquista europea. El respeto, la dignidad y el reconocimiento de los derechos y creencias individuales y comunitarias fueron declarados aspecto fundamental de la política estatal. No sólo los consagrados grupos indígenas andinos se vieron reconocidos y destacada su importancia, sino que también los pueblos indios orientales y la comunidad negra fueron singularizados como merecedores del apoyo del estado.

La Constitución de 2009 también declaró que Bolivia era un Estado unitario basado en el derecho plurinacional comunitario, democrático, descentralizado y con regiones autónomas (en las que de una forma muy amplia se incluían departamentos, municipios, regiones, grupos étnicos y comunidades autogobernadas). El artículo 5 declaraba que las lenguas oficiales del estado eran el español y las 37 lenguas indígenas habladas en Bolivia, debiendo los gobiernos nacional y locales usar dos lenguas (el español y otra indígena según las condiciones locales). La Constitución habla de la "interculturalidad" como el instrumento para la cohesión de un estado unificado (artículo 98) y a lo largo de ella se repite constantemente el tema del respeto de los individuos y las comunidades, desde su vestimenta hasta su sistema de creencias. Y a partir de esta Constitución el país ha adoptado el nombre de 'Estado Plurinacional de Bolivia'.

Los derechos civiles garantizados en el artículo 21 dejan muy atrás los acostumbrados para incluir cosas como la "privacidad, intimidad, honra, propia imagen y dignidad", además de la "autoidentificación cultural". La nueva Constitución también prohibió cualquier tipo de discriminación de los ciudadanos por causa de su lengua, raza, color, sexo, religión o cualquier otro rasgo humano. Y perfiló asimismo lo característico de un estado de bienestar social muy ambicioso, garantizando que el estado suministrará agua, alimentos, atención sanitaria gratuita, pensiones, vivienda y educación a todos sus ciudadanos. Incluso planteó que el Estado debe garantizar un ambiente sano a todos. De hecho la Constitución contiene muchos artículos destinados a la protección del medio ambiente, a la garantía de la biodiversidad y a una infinidad de otros asuntos relacionados con estas preocupaciones modernas. Además de contener todas

las declaraciones usuales pro-familia, la Constitución también reconoce en concreto, en lo que se refiere al patrimonio y a las relaciones personales, las uniones libres o de hecho estables, con los mismos derechos de las parejas casadas legalmente (artículo 63, II).

El estado ha de garantizar los derechos de las comunidades indígenas a la tierra (artíulo 30), pero también deben respetarse y aun promoverse su cosmología, medicina, rituales, símbolos y vestimenta tradicionales (artículo 30, IX) y han de poder ejercer sus propios sistemas político, judicial y económico según los define su propia cosmología (articulos 30, 190-192). La Constitución incluso dedica toda una sección a la protección de las culturas tradicionales como patrimonio nacional (artículos. 98-101). El estado también debe garantizar la educación intracultural, intercultural y plurilingüe (artículo 30). En una ampliación realmente inusitada de la autonomía, el Estado también debe permitir a las comunidades indígenas de 'originarios' autodeclararse entidades autogobernadas independientes de las jurisdicciones municipal o departamental, con competencias iguales a las de esas instituciones los pueblos o comunidades indígenas amenazadas de extinción, lo mismo que los grupos indígenas aislados y sin relaciones con el mundo exterior, deben ser protegidos y en el caso de los segundos, incluso se les debe permitir permanecer aislados si así lo desean.

Se trata claramente de una 'constitucional social', según se calificó anteriormente a la mexicana de 1917 y la boliviana de 1938. El derecho a la propiedad privada (individual y colectiva) queda limitada por su obligación de cumplir una función social y de no perjudicar el interés colectivo de la sociedad (art. 56). También sanciona específicamente el derecho del Estado a participar directamente en la economía para la producción de bienes y servicios (art. 316). La Constitución prioriza la inversión nacional frente a la extranjera, afirmando que la inversión extranjera estará sometida sin excepción al derecho boliviano (art. 320). Además de ratificar los tradicionales derechos al subsuelo, la Constitución cuenta con todo un capítulo sobre los hidrocarburos, que han de estar bajo el exclusivo control del Estado y de su brazo operativo YPFB (arts. 359-368). Finalmente, respondiendo a la instalación en el país de grupos

militares estadounidenses como parte de las campañas anti-cocaína, también prohibe específicamente la instalación de bases militares en territorio boliviano (art. 10).

Además del derecho obligatorio de voto de todos los adultos mayores de 18 años y del importante derecho de los bolivianos en el extranjero a votar en las elecciones generales, la Constitución también permite a las comunidades indígenas emplear sus normas tradicionales para elegir sus representantes, donde el Estado sólo podrá intervenir si el voto no fuera "igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio" (art. 26). También quedan garantizados los derechos a la huelga y a la negociación colectiva. Finalmente, la organización política descentralizada del Estado boliviano, iniciada en 1995, culminó con la elección de los gobernadores y concejos departamentales (art. 278-279). La Constitución también permite la organización de regiones autónomas e incluso de comunidades indígenas autónomas de 'originarios', aunque sus límites y competencias parecen haber sido postergadas para cumplimiento posterior (art. 289-296).

Además de revisar la Constitución, el régimen de Morales ha ampliado en gran medida los anteriores programas de bienestar y subrayado especialmente las transferencias de ingresos derivados de las estatizaciones. El gobierno ha hecho un importante esfuerzo por incrementar los programas de redistribución de ingresos ya iniciados durante la segunda presidencia de Sánchez de Lozada. El programa de pensiones "Bonosol" de los años noventa se convirtió en la "Renta Dignidad", que da una pensión mínima a todos los bolivianos mayores de 60 años, independientemente de si gozan de alguna otra pensión. A comienzos de 2009 la recibían unos 757.000 bolivianos ancianos. Otro programa, que va siendo común en América Latina, consiste en el pago en efectivo del "bono Juancito Pinto", condicionado a la asistencia escolar en el sector fiscal. Finalmente, hay un programa "bono Juana Azurduy"'que permite a las mujeres embarazadas recibir atención médica trimestral y post-parto, encaminado a reducir la alta incidencia de mortalidad infantil y materna. Aunque los anteriores programas se financiaban al margen del presupuesto gubernamental, el "bono Juana Azurduy" contó con un aporte importante del Banco Interamericano de

Desarrollo. La importancia de esos programas puede medirse por su cobertura y por su porcentaje del PIB. En 2010 la "Renta Dignidad" representaba el 1.5% del PIB (cifra muy grande para este tipo de transferencias condicionadas de dinero); el "bono Juancito Pinto" equivalía al 0.3% y el "bono Juana Azurduy", a otro 0.2%. En 2009 el "bono Juancito Pinto" se pagaba a 1.7 millones de escolares de primaria; ese mismo año el "bono Juana Azurduy" llegaba a 340.000 madres y ascendía a 25 millones de dólares. Pero en lugar de que el Estado aporte los fondos de los programas de privatización, estos fondos ahora proceden del incremento de regalías generadas por el Estado mediante la re-estatización de diversas industrias.

El gobierno de Morales ha venido gozando en diversas formas de una época afortunada. El aumento de la demanda china de materias primas ha mantenido altos los precios de las exportaciones básicas de minerales, con su correspondiente aumento de ingresos públicos. El hecho de que el gobierno brasileño de Lula simpatizara con el régimen de Morales significó que la estatización de los campos gasíferos pudiera llevarse a cabo con una conflictividad relativamente baja y que Petrobras siguiera exportando gas al Brasil, aunque ya no quisiera seguir invirtiendo en gran escala en nuevas exploraciones o instalaciones. El ambiente internacional continental también fue propicio. Desde comienzos de siglo Estados Unidos ha abandonado una activa política intervencionista en América Latina a causa de su concentración en Oriente Medio. Finalmente, la existencia de gobiernos simpatizantes en Venezuela y Ecuador, además de los centroizquierda en Argentina, Brasil y, hasta hace poco, Chile, ha dado a Bolivia un gran espacio internacional, en que la estatización de empresas extranjeras (muchas de ellas, estatales) ha comportado pocas consecuencias negativas inmediatas. Las posiciones activas anti-estadounidenses tampoco le han causado reacciones perjudiciales en el campo internacional.

Pero también ha tenido sus costos. El partido del MAS y sus dirigentes, al aceptar su visión de una sociedad revolucionaria, cada vez más han querido atacar instituciones democráticas fundamentales. Todavía no se sabe hasta dónde irán el partido

y sus dirigentes en esa dirección para justificar sus reformas sociales y económicas. También han provocado internamente una permanente tensión política, Finalmente, su vuelta a la re-estatización de la exploración de los recursos naturales y a la reorganización de las empresas estatales se ha producido con un alto costo económico; ha significado la pérdida de las inversiones extranjeras directas, sin que se haya desarrollado un mercado nacional de capitales suficiente para viabilizar un crecimiento económico sostenible a largo plazo. También ha tenido como efecto que el gobierno perdiera o expulsara una parte de sus expertos técnicos, además de debilitar la burocracia precisamente cuado la necesita para llevar a cabo aquellas estatizaciones de una forma eficiente.

Recientes anuncios de enjuiciar a anteriores presidentes democráticamente elegidos por las políticas económicas que impulsaron, son ejemplo de un régimen que se siente amenazado por las anteriores élites y que casi nunca quiere negociar con las fuerzas opositoras. Los ataques contra la eficiente y crucial Corte Nacional Electoral, en abril de 2010, cuando el voto ciudadano no repitió los resultados que deseaba el partido de gobierno, fue otra expresión preocupante de ciertas tendencias autoritarias dentro del MAS. Finalmente, la campaña bastante sistemática contra los jefes elegidos de la oposición de rango nacional, departamental y municipal, muestra un gobierno que sigue teniendo problemas en practicar las normas de una política que pueda llamarse 'democrática'.

El propio partido también ha comenzado a mostrar grietas por sus bordes cuando los dirigentes indígenas y mestizos demuestran ser más independientes y más locales en sus compromisos políticos. El MAS ha tenido problemas para controlar las ciudades, pero todavía para hacerlo en algunos de sus centros tradicionales de apoyo. Así, en las elecciones departamentos y municipales de abril de 2010, la oposición ha obtenido un apoyo importante en El Alto, además de vencer en La Paz. El MAS también tiene algunas dificultades en el altiplano con dirigentes opositores que cuestionan candidatos nacionales del partido. El partido de gobierno también ha perdido tres departamentos (Santa Cruz, Tarija y el Beni) en manos de la oposición. Pero a pesar de todos estos reveses,

incluso en los departamentos de la 'media luna' donde ha perdido el MAS, se ha situado en un respetable segundo lugar. En estos departamentos orientales, núcleo de la agricultura comercial y de los yacimientos de gas natural y de petróleo, el MAS actualmente está bien asentado. Asi, a pesar del inevitable debilitamiento del movimiento al comienzo del segundo periodo de Evo Morales, el MAS sigue siendo un poderoso 'partido' nacional dirigido por dirigentes 'indígenas' que acaban de hacerse con el poder. Por otra parte, el propio Morales sigue siendo considerado un jefe dinámico y carismático, que al presente cuenta con el apoyo mayoritario de la población.

ENSAYO BIBLIOGRÁFICO

I. Estudios generales

Bolivia ha estado bien servida por sus historiadores tradicionales con varios tratados generales que ofrecen un esquema coherente de la evolución del país. Las más importantes e influyentes de estas numerosas historias generales son las de A. Arguedas, Historia *General de Bolivia* (La Paz,1922) y de E. Finot, *Nueva historia de Bolivia* (Buenos Aires,1946). Entre las obras más recientes de síntesis se pueden mencionar la permanentemente actualizada de J. de Mesa, T. Gisbert y C.D. Mesa, *Historia de Bolivia* (La Paz,2001), C. López Beltrán, *Biografía de Bolivia, un estudio de su historia* (La Paz,1993) y A. Crespo, J. Crespo E y M.L. Kent (eds.), *Los bolivianos en el tiempo* (La Paz,1995); se ofrece un estudio general de la historia nacional, comparándola con la del Perú, en M. Mörner, *The Andean Past. Land, Societes and Conflicts* (Nueva York,1985) y el más reciente de Brooke Larson, *Trials of Nation Making, Liberalism, Race and Ethnicity in the Andes, 1810-1910* (Cambridge,2004). Una visión alternativa de la historia nacional ha sido propuesta por X. Albó y J. M. Barnadas, *La cara india y campesina de nuestra historia* (La Paz,1984) y profundizado por Forrest Hylton and Sinclair Thomson, *Revolutionary horizons: past and present in Bolivian politics* (London,2007). Entre los panoramas bibliográficos recientes, son útiles y merecen consultarse los de J.M. Barnadas, *Manual de bibliografía. Introducción a los estudios bolivianos contemporáneos, 1960–1984 (Cuzco,*1987), de B.

Larson, "Algunos nuevos rumbos de la investigación histórica y antropológica de tema boliviano en los Estados Unidos", *Historia Boliviana* 7 (Cochabamba,1987), y de H. S. Klein, Recent Trends in Bolivian Studies", *Latin American Research Review* 31:1 (1996). Se encuentra una introducción reciente a los archivos bolivianos en R. Barragán et al. *Guía de archivos para la historia de los pueblos indígenas en Bolivia* (La Paz,1994). Finalmente, hay que mencionar algunas importantes revistas históricas nacionales: *Historia Boliviana* (Cochabamba), editada por J.M. Barnadas de 1981 a 1987– *Historia y Cultura* (La Paz), que desde 1973 publica la Sociedad Boliviana de Historia; *Anuario del Archivo y Biblioteca Nacionales* (Sucre) desde 1995; *Data: Revista del Instituto de Estudios Andinos y Amazónicos* (La Paz,1991-1997); e *Historias* (La Paz,1997-2003) de la Coordinadora de Historia.

Por lo que se refiere a obras más especializadas, L. Peñaloza, *Nueva historia económica de* Bolivia (7 v., La Paz,1981–1987) proporciona una introducción razonable del tema aunque limitada. Es más esquemático, pero con importante información estadística retrospectiva, E. Arze Cuadros, *La economía de Bolivia... 1492–1979* (La Paz,1979). G. Lora ofrece un estudio general del movimiento obrero en la historia boliviana en su *Historia del movimiento obrero en Bolivia* (4 v., La Paz, 1967–1980). G. Francovich se ocupa de la historia de las ideas en *La filosofía en Bolivia* (Sucre,1945). La producción de los his-toriadores está bien atendida en V. Abecia, *Historiografía bol*iviana (2ª ed., La Paz,1973). Una historia de las legislaturas constitucionales boliviana está en R. Barragán *La asamblea constituyente en la historia de Bolivia* (La Paz,2006).M. Rolón Anaya estudia el pensamien-to político en, *Política y partidos en Bolivia* (3ª ed., La Paz,1999), que también contiene la más completa presentación de los programas y plataformas partidarias, que pueden complementarse con G. Lora, *Documentos políticos de Bolivia* (2 v., La Paz,1987) y lo más nuevo en programas de partido han sido reunidos por la Corte Nacional Electoral (CNE) *La representación política en Bolivia. Partidos políticos* (La Paz,2005). Los primeros estudios so-bre las conductas electorales en el periodo moderno lo presenta S. Rome-ro Ballivián, *Geografía electoral de* Bolivia (2ª ed., La Paz,1998) y *Geografía electoral de Bolivia: así votan*

los bolivianos (La Paz,1993) y el reciente estudio *El tablero reordenado. Análisis de la elección presidencial de 2005* (La Paz,2006). La Corte Nacional Electoral ha promovido útiles estudios sobre elecciones, votación y registro de votos. Ver por ejemplo el detallado análisis de Carlos Hugo Cordero Carraffa *Historia electoral de Bolivia 1952-2007* (La Paz,2007); y para la representación electoral durante la historia republicana ver Eduardo Leaño Román *Sistemas electorales en Bolivia. La conversión de votos en cargos del Ejecutivo y Legislativo* (La Paz,2005) así como la práctica compilación estadística sobre el voto en "25 Años de evolución electoral en Bolivia," *CNE, Unidad de Análisis e Investigación, Boletín Estadístico* III:7 (2007); el registro de votantes (Padrón Nacional Electoral o PNE) y su evolución desde 1985 a 2005 en *CNE, Unidad de Análisis e Investigación, Boletín Estadística* V (2005). Uno de los más interesantes estudios sobre la reciente e importante reforma administrativa en los municipios es el de M.S. Grindle, *Audacious Reforms. Institution Invention and Democracy in Latin America* (Baltimore,2000); ver tam-bién H. Grebe López *et al., Las reformas estructurales en Bolivia* (*La* Paz,1998), y para un detallado análisis de la reformas de descentralización consideradas en la Constitución de 2009 ver Carlos Romero y Carlos Böhrt Irahola, *Autonomías Se hace camino al andar* (La Paz,2009). Los textos constituciona-les de Bolivia hasta la década de 1950 se encuentran en la compilación y análisis de C.F. *Trigo, Las constituciones en Bolivia* (Madrid,1958) y mientras H. Vaca Díez examina el *Pensamiento constitucional boliviano, 1826–1995* (La Paz,1998). La legislación boliviana para los indios y la sociedad rural está recopilada en los dos volúmenes de J. Flores Moncayo, *Legislación boliviana del indio. Recopilación, 1825–1953* (La Paz,1953) y A. Maldonado, *Derecho, agrario. Historia–Doctrina–Legislación* (La Paz,1956).

Entre las numerosas, historias de las complejas relaciones internacionales de Bolivia, la mejor es la de V. Abecia Baldivieso, *Las relaciones internacionales en la historia de Bolivia* (2 v., 2ª ed., La Paz,1986). Ver también la reciente compilación de estudios de E. Arze Quiroga, *Las relaciones internacionales de Bolivia, 1825–1990* (La Paz,1991). Las íntimas relaciones con Gran Bretaña ha estudiado R. Querejazu Calvo en Bol*ivia y los ingleses* (La Paz,1971) el análisis de L.E. Bieber, *Las*

relaciones económicas de Bolivia con Alemania, 1880-1920 (Berlín,1984) es modélico para entender las relaciones de Bolivia con un país extranjero. El ha ampliado ese estudio en su libro *Pugna por influencia y hegemonía. La rivalidad germano-estadounidense en Bolivia, 1936-1946*(Frankfurt,2004). Las conflictivas relaciones con Chile está, desde el punto de vista chileno la obra de F.A. Encina, *Las relaciones entre Chile y Bolivia, 1841–1963* (Santiago de Chile,1963) y los estudios en torno a las relaciones con Estados Unidos se explican abajo.

La literatura del país cuenta con diversos estudios desde diversas perspectivas y de una utilidad también diversa: E. Finot, *Historia de la literatura boliviana* (4ª ed., La Paz,1975), E Díez de Medina, *Literatura boliviana* (Madrid,1954), J. Sanjinés se ha ocupado del tema en dos obras: *Tendencias actuales en la literatura boliviana* (Valencia,1985) *y Literatura contemporánea y grotesco social en Bolivia* (La Paz,1992). El mejor estudio de la novela sigue siendo el de A. Guzmán, *La novela en Bolivia* (La Paz,1955) y su *Diccionario de la Literatura Latinoamericana. Bolivia* (Washington,1955), que en otra versión ha vuelto a aparecer como *Poetas y escritores de Bolivia (Co*chabamba,1975); existe un breve panorama general de T. Gisbert, *Literatura virreinal de Bolivia* (La Paz,1963) y el estudio de P. Zayas de Lima, *La novela indigenista boliviana, 1910–1960* (Buenos Aires,1985). No existe ningún panorama completo de las artes plásticas, aunque como podrá verse en las secciones siguientes, la obra de J. de Mesa y T. Gisbert es fundamental para una valoración del tema en los periodos prehispánico, colonial y republicano; una buena introducción a la arquitectura boliviana es *Bolivia. Monumentos históricos y arqueológicos (Méxi*co,1970). La pintura moderna es estudiada por P. Querejazu en *Pintura boliviana del siglo XX* (Milán,1989); para el teatro, M.T. Soria, *Teatro boliviano en el siglo* XX (La Paz,1980); para el cine, A. Gumucio, *Historia del cine en Bolivia* (La Paz,1984) y J. Sánchez H., *The Art and Politics of bolivian Cinema* (Lanham, MD,1999).

Aunque existen muchas historias de las órdenes religiosas, además de diversas colecciones documentales y estudios internacionales más amplios, la única historia general de la Iglesia en Bolivia es de E. López Menéndez *Compendio de* la *historia eclesiástica de Bolivia,* (La Paz,1965). Otra institución

que cuenta con su historia es el ejército: J. Díaz A., *Historia del ejército de Bolivia, 1825– 1932* (La Paz,1940); J. Dunkerley, *Orígenes del poder militar en Bolivia. Historia del ejército, 1879–1935* (La Paz,1987) y G. Prado Salmón, *Poder y fuerzas armadas, 1949–1982* (La Paz,1984). La medicina ha sido estudiada por J.M. Balcázar, *Historia de la medicina en Bolivia* (La Paz, 1956), En cambio, la importante profesión' de la abogacía no cuenta con ningún estudio aceptable. Puede verse un análisis original de la evolución de la ingeniería en M. E. Contreras, *Tecnología moderna en los Andes. Minería e ingeniería en Bolivia en el siglo* XX (La Paz,1994).

Dada la importancia de la minería y el extraordinario terreno del país, Bolivia ha sido objeto de amplia investigación por especialistas nacionales y extranjeros en los campos geológicos y geográfico. Mucha de esa bibliografía está resumida en J. Muñoz Reyes., *Geografía de Bolivia* (3ª ed., La Paz,1991) y en F. Ahl-feld,*Geología de Bolivia* (3ª ed., La Paz,1972). El estudio más reciente y amplio es el de I. Montes de Oca, *Geografía y recur-sos naturales de Bolivia* (3ª ed., La Paz,1997). El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios ha realizado un intere-sante esfuerzo de recartografiar los suelos y el clima de Bolivia recurriendo a criterios más modernos en *Mapa ecológico de Bolivia* (La Paz,1975). Un estudio inglés ofrece un aná-lisis más tradicional y de gran importancia de los suelos bolivia-nos: T.T. Cochrane, *Potencial agrícola del uso de la. tierra de Bolivia* (La Paz,1973); sus zonas ecológicas se estudian en. C.E. Brockman (ed.), *Perfil ambiental de Bolivia* (La Paz, 1986). Aunque limitado es útil el análisis de la distribución de las plantas comerciales y de subsistencia de G. Barja y A. Cardozo, *Geografía agrícola de Bolivia* (La Paz,1971). Conservan la importancia que le dan sus amplias recopilaciones estadísticas los estudios gubernamentales de comienzos del siglo XX de la Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica, *Sinopsis estadística y geográfica de la República de Bolivia* (2v., La Paz,1903), *Geografía de la República de Bolivia* (La Paz,1905)*y Diccionario geográfico de la República de Bolivia* (4v., La Paz,1890–1904).Una interesante geografía política de Bolivia relativa a sus problemas fronterizos es la de J.V. Fifer, *Bolivia. Territorio, situación y política desde* 1825 (Buenos Aires,1976).

El contexto geográfico urbano se explora en W. Schoop, *Ciudades bolivianas* (La Paz,1981). En la actualidad el país también cuenta con amplias colecciones de mapeos aéreos y satelitales, además de mapas demográficos y geográficos modernos del Instituto Geográfico Militar y del Instituto Nacional de Estadística. Los mapas satelitales son analizados y registrados en L.E. Giddings, *Bolivia -from Space* (Houston,1977). El único, aunque limitado, intento de ofrecer cartografía histórica es el de R. Condarco Morales, *Atlas histórico de Bolivia* (La Paz,1985). Una amplia bibliografía sobre exploraciones se describe en M. Frontaura Argandoña, *Descubridores y exploradores de Bolivia* (La Paz,1971). Para la fauna de la región, existen dos estudios básicos: R.A. Payntner, *Omithological Gazetteer of Bolivia* (2ª ed., Cambridge,1992) y S. Anderson, *Mammals of Bolivia. Taxonomy and Distribution* (Nueva York, Bulletin 231, American Museum of Natural History,1997) y para un detallado análisis de los bosques ver T.J. Killeen et al., *Guía de árboles de Bolivia* (La Paz/St.Louis,1993).

Para conocer la evolución de la población boliviana ver A. Averanga Mollinedo, *Aspectos generales de la población boliviana* (3ª ed., La Paz,1998) y A.S. Siliz Sánchez, *La población de Bolivia* (La Paz,2001). También ver las numerosas publicaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), especialmente el *Anuario Estadístico* y la serie anual de datos económicos y sociales compuestos por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Ministerio de Planificación y Desarrollo (UDAPE); además están las publicaciones de los organismos de la ONU dedicadas a Bolivia (especialmente la CEPAL): *Anuario estadístico de America Latina y el Caribe* y *Panorama social de América Latina* (anuarios en varios volúmenes disponibles on-line). CELADE (una sub-división de la CEPAL) es la fuente principal para las estadísticas demográficas comparativas, ver especialmente su *Latin American and Caribbean Demographic Observatory (Bulletin)* y sus diferentes bases de datos on-line. Entre los recientes estudios demográficos están R. Forste, "The Effects of Breastfeeding and Birth Spacing on Infant and Child Mortality in Bolivia", *Population Studies* 48/3 (1994). Es de interés académico la adaptación a la vida en las alturas: ver P.T. Baker y M.A. Liffle (eds.), *Man in the Andes. A Multidisciplinary Study of*

High–Altitude Quechua (Stroudsburg, PA,1976) y varios,trabajos aparecidos en–el *American Journal of Physical Anthropology.*

II. Universos precolonial y colonial

Las novedades más sugerentes de la historiografía boliviana se refieren a los temas precolombinos y a la historia social y económica colonial. Gran parte de ese trabajo ha sido ejecutado por historiadores y antropólogos, quienes se han influido mutuamente para dar lugar a nuevas interpretaciones. Para el hombre primitivo y su evolución en la región ver S. J. Feedel, *Prehistory of the Americas* (2ª ed., Cambridge,1992) y para la avance de las sociedades avanzadas, L. G. Lumbreras, *The Peoples and Cultures of anciente Peru* (Washington,1974) y K. 0. Bruhns, *Ancient South America* (Cambridge,1994). Un panorama reciente del inconstante campo de la arqueología andina está en T. N. D'Altroy, "Recent Research on the central Andes", *Journal of Archaeological Research* 5:1 (1997). Entre los estudios anteriores dedicados a los desarrollos locales anteriores a la conquista se registra: A. Posnansky, *Tiahuanacu* (2 v., Nueva York,1945), D. E. Ibarra Grasso, *Prehistoria de Bolivia* (2ª.ed., La Paz,1973) y los discutidos trabajos de C. Ponce Sanjinés, *Descripción sumaria del templete semisubterráneo de Tiwanaku* (La Paz,1964) y T*iwanaku: espacio, tiempo y cultura (La* Paz,1972). Tras décadas de enclaustramiento, sólo recientemente han sido autorizadas excavaciones a gran escala por arqueólogos profesionales bolivianos y extranjeros; esta nueva investigación se ha concentrado en Tiwanaku y la base agrícola de civilizaciones avanzadas en el altiplano sintetizada por A. L. Kolata en su obra *The Tiwanakit– Portrait of an Andean Civilization* (Cambridge,1993) y los dos volúmenes que ha recopilado: *Tiwanaku and Its Hinterland Archaeology and Paleoecology of an Andean Civilization* (2 v., Washington DC,1996-2000). También se ha hecho mucho trabajo en las poblaciones tiwanakotas situadas al norte del lago, en los que han intervenido jóvenes arqueólogos, bolivianos: véase J. Albarracín Jordán, *Tiwanaku, arqueología regional y dinámica segmentaria* (La Paz,1996) y del mismo autor y J. E. Mathews, *Asentamientos*

aymaras fueron inicialmente estudiados en base a colecciones de superficie, cuyos resultados fueron presentados por J. Hyslop en "El área Lupaca bajo el dominio incaico. Un reconocimiento arqueológico" *Historica* (Lima) 3:1 (1979) y en su tesis doctoral "An *archaeological Investigation of the Lupaca Kingdom and Its Origins* " (Columbia U., New York,1976). C. J. Julien estudió la etnohistoria en *Hatunqolla: A View of Inca Rule from the Lake Titicaca Region* (Berkeley,1983). Otras investigaciones arqueológicas del lugar son: M. Bermann, *Lukurmata. Household Archaeology in Prehispanic Bolivia* (Princeton,1994); Ch. Stanish, *Ancient Titicaca: the evolution of complex society in southern Peru and northern Bolivia*(Berkeley,2003); Ch. Stanish y B. S. Bauer (eds.) *Archaelogical Research in the Islands of the Sun and Moon, Lake Titicaca, Bolivia* (Los Angeles,2004), and Ch. Stanish, A. B. Cohen y M. S. Aldenderfer, (eds.), *Advances in Titicaca Basin Archaeology* (Los Angeles,2005). P. Lecoq ha estudiado a grupos aymaras que controlaban el salar de Uyuni en *Uyuni Préhispanique. Archéologie de la cordillére intersalar (sud–ouest bolivien)* (Oxford,1999) y hay nuevos trabajos de los valles como la tesis de A. Higueras-Hare, "Prehispanic settlement and land use in Cochabamba, Bolivia" (U. of Pittsburgh, Pittsburgh,1996).

Para interpretar la naturaleza de la civilización andina en el periodo de su máximo desarrollo previo a la conquista española, ha sido fundamental la obra de J.V. Murra. Entre sus numerosos estudios, los más importantes desde una perspectiva boliviana son *Formaciones políticas y económicas en el mundo andino* (Lima,1975), "An Aymara Kingdom in 1576" *Ethnohistory 15*/2 (1968) y sus ediciones de G. Díez de San Miguel, *Visita hecha a* la *provincia de Chucuito... en el* año 1576 (Lima,1964) y *Visita de los valles de Sonqo en los yunka de coca de La Paz [1568–1570]*(Madrid,1991). Estas visitas de los reinos aymaras del lago Titicaca han ins-pirado muchos de los trabajos de F. Pease, algunos de los. cuales han quedado, recogidos en *Del Tawantinsuyu* a *la historia del Perú (Lima*,1978); para una visita de los valles de Cochabamba ver J. M. Gordillo y M. Del Río, *La visita de Tiquipaya (1573). Análisis etno–demográfico de un padrón toledano* (Cochabamba, 1993). Sobre el Tawantinsuyu en la historia boliviana, los estudios de J.V.

Murra, A. Métraux, J.H. Rowe, S.E Moore, R.T. Zuidema, M. Rostworowski, W. Espinoza, F. Pease, N. Wachtel y, C. Morris son de ayuda para comprender la experiencia boliviana. Sobre el papel especial de los valles de Cochabamba como importante granero del imperio de los *Inca,* ver N. Wachtel, "Los mitmas del valle de Cochabamba: la política de colonización de Wayna Capac" *Historia Boliviana* 1 (198l); la cuestión de otros grupos étnicos bajo el dominio *inca y aym*ara ha sido estudiada por T. Saignes, *En busca del poblamiento étnico de los Andes bolivianos (siglos* XV y XVI) (La Paz, *1986).* El papel de los metales en las sociedades indoamericanas antes y después de la conquista está en M. Money, *Oro y plata en los Andes: significado en los diccionarios de Aymara y Quechua, siglo XVI-XVII*(La Paz, 2004).

El tema de la conquista española ha sido tratado y en inglés ya en el siglo XIX por W.H. Prescott y finos sintetizadores, uno de cuyos más recientes representantes es J. Hemming, *The Conquest of the Incas* (Nueva York,1970); por su parte, N. Wachtel, *La visión de los vencidos* (Madrid,1978) plantea una reconstrucción sumamente imaginativa de la perspectiva india de aquel acontecimiento.

En las últimas tres décadas se han elaborado importantes estudios sobre todos los aspectos del periodo inmediatamente anterior y posterior a la conquista en Bolivia. Gran parte de ellos fueron sintetizados en el número especial coordinado por J. V. Murra de la revista *Annales. Economies – Societés – Civilisations* 33 (1978), mas tarde traducido al inglés en 1986. En él hay trabajos de N. Wachtel sobre los Uru, de T. Saignes Sobre las complejas relaciones étnicas en el valle de Larecaja, de T. Bouysse-Cassagne sobre los sistemas de creencias aymaras. Esta últíma autora ha desarrollado más sus ideas en La *identidad aymara. Aproximación histórica (siglos* XV y XVI) (La Paz,1987) y también ha reconstruído el mapa de las lenguas indígenas que en el siglo XVI se hablaban en Charcas, trabajo aparecido en N.D. Cook (ed.), Tasa *de la Visita general de E de Toledo* (Lima,1975); la reconstrucción más ambiciosa de las principales lenguas indígenas del altiplano en el momento de la conquista es la de A. Torero, "Lenguas y pueblos altiplánicos en torno al siglo XVI", *Revista Andina* 5:2 (1987).

La frontera indígena oriental ha sido tema de trabajos muy originales como la tesis doctoral de T. Saignes: *"Une frontière fossile: la cordillière chiriguano au XVI siècle"* (U. de París, Paris, *1974); Los Andes orientales: historia de un olvido,* (La Paz, *1985)* y *Ava y karai. Ensayos sobre la frontera chiriguano (siglos XVI–XX)* (La Paz, 1990). Ver también el estudio clásico de W.M. Denevan. La *geografía cultural de los llanos de Mojos* (La Paz, 1980); más recientes son las obras de A.M. Lema y M. Alvarado, *Pueblos indígenas de la Amazonía boliviana* (La Paz, 1998) y de A.M. Presta (ed.), *Espacio, etnias, frontera. Atenuaciones políticas en* el *sur del Tawantinsuyu, siglos XVI-XVIII* (Sucre, 1995). Desde una perspectiva comparada E. M. Renard– Casevitz et al., *Al este de los Andes. Relaciones. Entre las sociedades amazónicas y andinas entre los siglos* XV y XVII (2 v., Quito, 1988) y en P. García Jordán (ed.), *Fronteras, colonización y mano de obra indígena. Amazonía andina (siglos XIX–XX)* y *La construcción del espacio socio–económico amazónico en Ecuador, Perú y Bolivia (1792-1948).* (Lima, 1998). También se ha dedicado atención a los grupos (ni aymaras ni quechuas) existentes antes y después de la conquista en el altiplano, ver C.B. Loza, "Los Quirua de los valles paceños: una tentativa de identificación en la época prehispánica", *Revista Andina* 11 (Cuzco, 1984); el tema de los Uru ha sido revisado por H.E. Manelis Klein, "Los urus: el extraño pueblo del altiplano" *Estudios Andinos* 3/1 (Pittsburgh, 1973); y N. Wachtel ha combinado el análisis de archivo y etnográfico en su monumental *Le retour des ancétres. Les indiens Urus de Bolivie, Xe–XVIe siécle. Essai d'histoire régressive* (París, 1990);- también ha tocado temas conexos en *Gods and Vampires. Return to Chipaya* (Chicago, 1994).

La temprana integración de las poblaciones campesinas amerindias residentes en el sistema colonial hispánico ha sido tema de muchos trabajos. En las páginas de la efímera revista *Avances* (La Paz, 1978, 2 números) aparecieron importantes artículos de T. Platt, R. Choque y S. Rivera; más recientemente, R. Choque ha reunido sus investigaciones antiguas y nuevas sobre las funciones económica y social de los nobles indígenas en *Sociedad y economía colonial en el sur andino (La* Paz, 1993). También han escrito sobre el tema J.V. Murra Aymara *Lords and their European Agents at Potosí", Nova Americana* 1

(Turin,1978); B. Larson, *"Caciques, Class Structure and the colonial State in Bolivia ", Nova Americana* 2 (Turin,1979); T. Saignes, *Caciques, Tribute and Migration in the Southern Andes* (Londres, 1985); S. Arze y X. Medinaceli, Imá*genes y presagios El escudo de los Ayaviri, mallkus de Charcas* (La Paz,1991); L. Escobari, *Caciques, yanaconas y extravagantes. La sociedad coloniales Charcas, siglos* XVI–XVIII (La Paz,2001). T. Saignes también estudió las rebeliones tempranas los movimientos antiespañoles en "Algún día todo se andará: los movimientos étnicos en Charcas (siglo XVII)", *Estudios Andinos* 2 (1985). Las tres principales misiones fronterizas de los llanos orientales de Charcas (Mojos, Chiquitos y el Gran Chaco) han sido objeto de importantes estudios. Las primeras dos regiones fueron estudiadas por J. Chávez Suárez, *Historia de Moxos* (2ª ed., La Paz,1986) y A. Parejas Moreno les ha dedicado varios volúmenes: *Historia del oriente boliviano, siglos* XVI y XVII (Santa Cruz,1979), *Historia de Moxos y Chiquitos a fines del siglo* XVIII (La Paz,1976) y junto con V. Suárez, *Chiquitos. Historia de una utopía* (Santa Cruz,1992). D. Block La *cultura reduccional de los llanos de Mojos, Tradición autóctona, empresa jesuítica y política civil, 1660-1880* (Sucre,1997) y P. Querejazu y P. Molina Barbery (eds.), *Las misiones jesuíticas de Chiquitos* (La Paz,1995). J. S. Saeger investigó la frontera indígena meridional del Chaco en *The Chaco Misisons Frontier The Guaycuruan Experience (Tucson,*2000) y E.D. Langer, *Expecting pears from an elm tree: Franciscan missions on the Chiriguano frontier in the heart of South America, 1830-1949* (Durham,2009),

La historia demográfica amerindia boliviana ha quedado revisada con el estudio de N. Sánchez Albornoz, *Indios y tributos en el Alto Perú* (Lima,1978) particularmente en lo que se refiere al crecimiento demográfico y a la estratificación interna. Otros han aprovechado los registros del tributo indígena para estudiar la distribución de la población y la posesión de la tierra: D. Santamaría. "La propiedad de la tierra y la condición social del, indio en el Alto Perú, 1780–1810", *Desarrollo Económico* 66 (Buenos Aires,1977) *y Haciendas y campesinos en el Alto Perú colonial* (Buenos Aires,1988); B. Larson, "Hacendados y campesinos en Cochabamba en el siglo XVII", *Avances* 2 (La Paz,1978) y H.S. Klein, *Haciendas y ayllus: La sociedad rural en Bolivia, ss.* XVIII y XIX (Lima,1995).

La mano de obra rural también ha sido el tema de una muy útil recopilación de notas y documentos S. Zavala, El *servicio personal de los indios en el Perú* (3v. México,1978–80); un análisis detallado de la propiedad rural del siglo XVIII hace R. Arze Aguirre, *"Las haciendas jesuitas de La Paz (siglo XVIII) ", Historia y Cultura*1 (La Paz,1973) y N. Sebill, *Ayllus y haciendas* (La Paz,1989)

La sociedad colonial española ha sido bien estudiada en monografías recientes y en colecciones importantes de documentos: J.M. Barnadas, *Charcas. Orígenes históricos de una Sociedad colonial,' 1535–1565* (La Paz,1973) ha estudiado las primeras décadas de la Audiencia. E. Arze Quiroga, *Historia de Bolivia...siglo XVI* (La Paz,1969) ofrece un estudio razonable apoyado en fuentes publicadas., A. Crespo ha publicado un conjunto de estudios de historia política urbana: *Historia de la ciudad de La Paz, siglo* XVII (Lima,1961), *El corregimiento, de La Paz, 1548,1600* (La Paz,1972) y *Laguerra entre vicuñas y vascongados, Potosí, 1622–1625* (Lima,1956). Junto a sus estudiantes ha publicado Alberto Crespo et al., *La vida cotidiana en La Paz durante la guerra de independencia, 1800-1825* (La Paz,1975). Una aportación importante a la historia urbana es la crónica de la vida de La Plata en el primer tercio del siglo XVII es P. Ramírez del Águila, *Noticias políticas dé Indias (1639)* (Sucre,1978); el papel de las mujeres indígenas urbanas ha sido estudiado por L.M. Glave, *"Mujer indígena, trabajo doméstico y cambio social en el Virreinato peruano del siglo XVII: la ciudad de La Paz y el sur andino en 1684" Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos* 16:3–4 (Lima,1988) y A. Zulawski, "Social Differentiation, Gender and Ethnicity: Urban Indian Women in colonial Bolivia, 1640–1725", *Latin American Research Review* 25:2 (1990).'

La minería colonial potosina y la Villa Imperial misma han sido tema de numerosas crónicas ya en los tiempos coloniales de las que la mayoría se han publicado recientemente. Las más importante son: Luis Capoche "Relación general de la Villa Imperial de Potosí", edición de L. Hanke en *Relaciones históricas de la América meridional* (Madrid,1959); B. Arzáns de Orsúa y Vela, *Historia de la Villa Imperial de Potosí,* editada por L. Hanke y G. Mendoza (3 v., Providence, R. I.,1965); y P. V. Cañete y Dominguez, *Guía histórica geográfica, física... de*

Potosí, edición de A. Alba (Potosí,1952). En esta edición de Arzáns hay importantes artículos de G. Mendoza, L. Hanke, M. Chacón, J. de Mesa, T. Gisbert y G. Lohmann sobre diversos aspectos de la historia potosina. Hanke ya había explorado la historia de Potosí en el libro *La Villa Imperial de Potosí. Un capítulo inédito en la historia del Nuevo Mundo* (Sucre,1954). G. Mendoza, el gran archivero de Bolivia, también ha dedicado varias monografías a Potosí y sus figuras más destacadas como El *Doctor don Pedro Vicente Cañete* (Sucre,1954) y una guía documental sobre la *Guerra civil entre vicuñas y vascongados y otras naciones en Potosí, 1622–1645* (Potosí,1954). Sobre un destacado metalurgista y científico del siglo XVII estudia J. M. Barnadas, *Álvaro Alonso Barba. Investigaciones sobre su vida y su obra, 1569–1662* (La Paz,1986). La investigación actoral sobre la minería colonial está dominada por los estudios de P. Bakewell, quien ha dado a conocer dos monografías principales, además de numerosos ensayos técnicos de importancia: P. Bakewell, *Miners of the red Mountain. Indian Labour in Potosí, 1545–1650* (Albuquerque,1984); *Silver and Entrepreneurship in Seventeenth–Century Potosí. The Life and Times of Antonio López de Quiroga* (Albuquerque,1988); "Registered Silver production in Potosí District, 1550–1735" *Jahrbuch für Geschichte... Lateinamerikas* 12 (1975); "Technological Change in Potosí. The Silver Boom of the 1570s", *Jahrbuchfuer Geschichte... Lateinamerikas* 14 (1977); "Los determinantes de la producción minera en Charcas y en Nueva España durante el siglo XVII" *HISLA* 8 (1986). Estos pueden complementarse con los trabajos de M. Helmer, ahora recopilados en *Cantuta. Recueil d'articles parus entre 1949 et 1987* (Madrid,1993). D.E. Brading y H.E. Cross ya habían ofrecido una comparación similar en "Las minas de plata en el Perú y México colonial. Un estudio comparativo", *Desarrollo Económico* 41 (Bueno Aires,1971). Un estudio sobre la acuñación de moneda es el de A. J. Cunietti–Ferrando, *Historia de la Real Casa de Moneda de Potosí durante la dominación hispánica, 1573–1825*, (Buenos Aires,1995); sobre las monedas mismas en los periodos colonial y republicano ver A. Kwacz, *Monedas,, medallas y billetes de Bolivia* (La Paz,1999). El sistema de trabajo de la *mita* cuenta con los análisis de A. Crespo, "La mita de Potosí", *Revista*

Histórica 22 (Lima,1955–1956); de T. Saignes, "Notes on the regional Contribution to the mita in Potosí in the Early Seventeenth–Century ", *Bulletin of Latin American Research* 4 (London,1985); y J. Cole, *The Potosí Mita,* 1573–1700 (Stanford,1985). El trabajo libre asalariado en las minas de Oruro ha sido el tema de A. Zulawski, *They Eat from their Labor Work and social Change in colonial Bolivia* (Pittsburgh,1995). Sobre la minería colonial tardía existen también dos estudios importantes de R. M. Buechler, *Gobierno, minería y sociedad. Potosí, 1776–1810* (La Paz, 1989) y E. Tandeter, *Coacción y mercado: La minería de la plata en el Potosí colo-nial, 1696–1826* (Buenos Aires, 1992). Ver el artículo de R. M. Buechler, "Technical Aid to Upper Peru. The Nordenflicht Expedition" *Joumal of Latin American Studies* 5 (1973).

Se han ocupado del debate sobre la *mita* en el siglo XVIII, E. Tandeter en la obra mencionada y Buechler en "El *Intendente Sanz y la mita nueva de Potosí", Historia y Cultura* 3 (La Paz,1978). Esos debates se reflejan en el *Código Carolino* elaborado por P.V. Cañete, (2 v., Buenos Aires,1973–74). Las repercusiones económicas de la minería charqueña han sido estudiadas en una obra teórica magistral de C.S. Assadourian, *El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico* (Lima,1982). También conocemos la influencia de Potosí en algunas rutas comerciales por los trabajos del propio Assadourian, *El tráfico de esclavos en Córdoba: de Angola a Potosí, siglos XVI–XVII* (Córdoba,1966) y de N. Sánchez Albornoz, "La saca de mulas de Salta al Perú, 1778–1808", *Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas* 8 (Rosario,1965). El estudio clásico sobre los mercados regionales y las élites en conflicto, en el que participa Charcas, sigue siendo el de G. Céspedes, *Lima y Buenos Aires. Repercusiones económicas y políticas de la creación del Virreinato del Plata* (Sevilla, 1946); por su parte el comercio estudia L. Escobari de Querejazu, *Producción y comercio en el espacio sur andino, siglo XVII: Cuzco Potosí, 1650–1700* (La Paz,1985) y E. Tandeter *et al.,* "El mercado de Potosí a fines del siglo XVIII ", en la recopilación de 0. Harris, *La participación indígena...* citada más abajo.

Entre los estudios sobre la Real Hacienda y la estructura

fiscal de Charcas figuran los de T. Wittman, *Estudios históricos sobre Bolivia* (La Paz,1975) *y Estudios económicos de Hispanoamérica colonial* (Budapest,1979); el de H. S. Klein, *The American Finances the Spanish Empire, 1680-1809* (Albuquerque,1998); el de C. López Beltrán, *Estructura económica de una sociedad colonial: Charcas en el* siglo XVII (La Paz,1988); J. J. Te Paske, "The Fiscal Structure of Upper Peru and the financing of Empire " *Essays in the political, economic and social History of Colonial Latin America* K. Spalding (ed.) (Newark,1982). Las cuentas mismas de la Real Hacienda para todo el periodo colonial han sido publicadas en el volumen 2 *(Upper Peru)* de J. J. Te Paske y H. S. Klein, *Royal Treasuries of the Spanish Empire in America* (3 v., Durham,1982*)*.

Ha comenzado la investigación sobre la economía no minera. Entre los trabajos figuran los de M. Money, Los *obrajes, el traje* y el *comercio de ropa en la Audiencia de Charcas* (La Paz,1983) y de H.S. Klein, "Acumulación y herencia en la élite terrateniente del Alto Perú: el caso de Don Tadeo Díez de Medina" *Histórica 7:2* (Lima,1983). Por el contrario, muy poco existe sobre la industria de la construcción, vital para la información de los centros urbanos y sus monumentales iglesias; tampoco sobre la mano de obra, calificada o no, sobre el comercio y el crédito locales y en general sobre la vida económica urbana. La historia de los precios ha alcanzado la categoría de tema serio con el trabajo de N. Wachtel y E. Tandeter, *Precios y producción agraria. Potosí y Charcas en el siglo XVIII* (Buenos Aires,1984).

En la sociedad colonial tardía tuvo una importante repercusión el masivo alzamiento campesino de 1780 y años siguientes y que se conoce como la Rebelión de Tupac Amaru. El relato más completo de los sucesos políticos y militares que conformaron esa serie de rebeliones, sigue siendo el de B. Lewin. *La rebelión de Tupac Amaru y los orígenes de la independencia hispanoamericana* (Buenos Aires,1967). Entre las interpretaciones posteriores de las causas de ese importante movimien-to figuran las de 0. Cornblit, *Power and Violence in the colo-nial City. Oruro from the mining renaissance to the rebellion of Tupac Amaru (1740–1782)* (Cambridge,1995); la de N. C. Ro-bins, *Priest-Indian conflict in Upper Peru : the generation of rebellion, 1750-1780* (Syracuse,2007) además de las

contenidas en la recopilación de A. Flores Galindo (ed.), *Tupac Amaru II–1780. Antología* (Lima,) y en S. O'Phelan, *La gran rebelión en* los *Andes de Tupac Amaru a Tupac Catari* (Cuzco,1995). J. Golte, *Repartos y rebeliones. Tupac Amaru y las contradicciones de la economía colonial* (Lima,1980) ofrece una explicación alternativa, basándose en el análisis pormenorizado de la venta forzada de bienes importados. El carácter peculiar de la rebelión mixta mestizo–india de Oruro lo ha explorado F. Cajías "Los objetivos de la revolución indígena de 1781: el caso de Oruro" *Revista Andina 1:2 (Cuzco,1983)*; por su parte, M. E. Del Valle de Siles estudiado el cerco indio de La Paz y a su dirigente Tupac Katari, empezó con la edición del diario de F T. Díez de Medina, *Diario del alzamiento de indios conjurados contra la ciudad de... La Paz, 1781* (La Paz,1981) labor coronada con la monografía *Historia de la rebelión de Tupac Catari 1781–1782* (La Paz,1990). Interpretaciones recientes de esta gran rebelión indígena son Sinclair Thomson, W*e alone will rule: native Andean politics in the age of insurgency* (Madison,2002) and Sergio Serulnikov, *Subverting Colonial Authority. Challenges to Spanish Rule in Eighteenth-Century Southern Andes* (Durham,2003).

La extraordinaria creatividad artística de la sociedad colonial de Charcas ha sido el campo de trabajo los distinguidos historiadores del arte J. de Mesa y T. Gisbert. Juntos o por separado han amasado un corpus de pintores, escultores, arquitectos y artistas de todo tipo y toda procedencia que trabajaron en Charcas. Entre sus trabajos conjuntos están *Holguín y la pintura altoperuana del virreinato* (La Paz,1956), *Escultura virreinal en Bolivia* (La Paz,1972), El *pintor Mateo Pérez de Alesio* (La Paz,1972), *Bitti.: un pintor manierista en Sudamérica* (La Paz,1974) y Ar*quitectura andina, 1530–1830* (La Paz,1997). Por su parte, T. Gisbert ha escrito una extensa obra sobre el arte colonial indígena: *Iconografía y mitos indígenas en el arte* (2ª ed. La Paz,1994) y otra sobre indios y no indios: El *paraíso de los pájaros parlantes. La imagen del otro en la cultura andina* (La Paz,1999); con S. Arze y M. Cajías el *Arte textil y mundo andino* (La Paz,1987). Para el lector general existen dos obras con excelentes reproducciones de las obras pictóricas: T. Gisbert, *Bolivian Masterpieces. Colonial Painting* (La Paz–Houston, 1994) y P. Querejazu, *Potosí colonial Treasuries*

and the bolivian City of Silver (Nueva York,1997).

El estudio de la historia colonial boliviana cuenta desde hace más de un siglo con excelentes colecciones documentales, entre las más importantes: P. de Angelís (ed.), *Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las provincias del Río de la Plata* (6 v., 2ª ed., Buenos Aires,1970–72); M. Jiménez de la Espada (ed.), *Relaciones geográficas de Indias: Perú* (3 v., Madrid,1965), V.M. Maúrtua (ed.), Juicio *de límites entre Perú y Bo*-livia (12 v., Barcelona,1906–07), R. Levillier (ed.), La *Audiencia de Charcas. Correspondencia de presidentes y oído*-res (3 v., Madrid,1918–22). Tratan del periodo colonial la mayor parte de los trabajos H. Vázquez Machicado *Obras completas* (7 v., La Paz,1988)

III. Independencia y siglo XIX

El periodo de las guerras de independencia y los primeros años de la república tienen nuevas publicaciones de importancia que han supuesto una revisión de las interpretaciones anteriores. El trabajo de R. Arze, *Participación popular en la independencia de Bolivia* (La Paz,1979) aporta el trasfondo popular decisivo para el estudio de la élite que había hecho Ch.W. Arnade, La *dramática insurgencia de Bolivia* (La Paz,1972). Un análisis, detallado de los hechos en E. Just, *Comienzo de la independencia en el Alto Perú. Los sucesos de Chuquisaca, 1809* (Sucre,1994). Otros estudios son los de Jorge Siles Salinas, *La Independencia de Bolivia*(Madrid,1992) y José Luis Roca, *Ni con Lima ni con Buenos Aires: la formación de un estado nacional en Charcas* (La Paz,2007). El caso de una región ha sido estudiado por E. Arze Quiroga *Bolivia. El proceso de lucha inicial por la independencia, La insurrección de Cochabamba, 1808--1815* (La Paz,1998). Un libro sobre la propagan-da política del periodo es V. Torrico Panozo, El *pasquín en la independencia del Alto Perú* (México,1997) y el diario de un testigo lo propone Nataniel Aguirre *Juan de la Rosa memoirs of the last soldier of the independence movement,* editado y traducido por S.G. Waisman, and A.M. Paz-Soldán (New York,1998). El im-portante papel del presidente Sucre queda bien ilustrado en W.L. Lofstrom, El *mariscal Sucre en*

Bolivia, (La Paz,1983) com-plementado por el interesante estudio de T. Millington, *Debt Politics after Independence. The Funding Conflict in Bolivia* (Gainesville,1992). El comple-jo papel de Santa Cruz lo examina P.T. Parkerson, *Andrés de Santa Cruz y la Confederación Perú–Boliviana, 1835–1839* (La Paz,1984), que com-plementa la conocida biografía de Alfonso Crespo, *Santa Cruz el cóndor indio* (México,1944).

Varios volúmenes de documentos sobre este periodo publican C. Ponce y R.A. García (eds.), *Documentos para la historia de la Revolución de 1809* (4 v., La Paz,1953–1954); V. Lecuna (ed.), *Documentos referentes a la creación de Bolivia* (2 v., Caracas,1975). Información crucial sobre este periodo decisivo ofrecen los relatos de viajeros contemporáneos como los de A. D'Orbigny, *Voyage dans Amérique méridionale* (9 v., París,1844) y E. Temple, *Travels in various parts of Peru* (2 v., Filadelúa,1833). Juan Albarracín Millán, *Las exploraciones de Alcides D'Orbigny en Bolivia* (La Paz,2002) analiza los viajes. La fuente más importante de información estadística temprana de Bolivia es el estudio clásico de J. M. Dalence, *Bosquejo estadístico de Bolivia* (Chuquisaca,1851) complementado por J.B. Pentláng *Informe sobre Bolivia* (Potosi,1975). Varios investigadores peruanos han reunido información interesante sobre la vida rural y urbana de Bolivia en el siglo XIX dirigidos por P. Macera, *Fuentes de historia social americana* (7 v., Lima,1978).

En contraste con los desatentidos los estudios económicos, hubo una recuperación de la histo-ria social del periodo. Este renacimiento se inició con un es-tudio innovador que echaba por tierra todos los presupuestos tradicionales sobre el aislamiento político del indio: R. Condarco Morales. *Zárate, el temible Willka. Historia de la rebelión indígena de 1899* (2ª ed., La Paz,1982), tema tratado posteriormente por M.D. Demelas, "Jacqueries indiennes, politique créole, la guerre civile de 1899 ", *Caravelle* 44 (Toulouse,1985). Se criticó la idea de una Bolivia rural del siglo XIX dominada por las haciendas y aislada de la economía de mercado. Estos postulados fueron desafiados por los trabajos de S. Rivera, "La expansión del latifundio en el Altiplano boliviano: Elementos para la carácterización de una oligarquía regional" *Avances* 2

(La Paz,1978) y E.P. Grieshaber, "Survival of Indian Communities in Nineteenth–Century Bolivia: A Regional Comparison ", *Journal of Latin American Studies,* :2 (1980). La aparición de varios estudios permite particularizar la compleja evolución de la sociedad rural de las principales regiones del país; de entre ellos B. Larson, *Colonialismo y transformación agraria en Bolivia. Cochabamba, 1550–1900* (Cochabamba,1992); E. Langer, *Economic Change and Rural Resistance in Southern Bolivia,* ~1930 (Stanford,1989) y T. Platt, *Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y tributo en el norte de Potosí* (Lima,1982). Un modelo alternativo de crecimiento del siglo XIX, que subraya el papel de los indios forasteros en los ayllu está en H. S. Klein *Haciendas y ayllus,* arriba citado. Un panorama del la lucha por la tierra y los derechos indígenas está en L. Gotkowitz, *Revolution for Our Rights. Indigenous Struggle for Land and Justice in Bolivia, 1880-1952* (Durham,2007). Un desafío al modelo que sostiene hubo una destrucción total de las comunidades indígenas después de 1880 lo hace un breve y provocador ensayo de G. Rodríguez O., *Expansión del latifundio o supervivencia de las comunidades indígenas cambios en la estructura agraria boliviana del siglo XIX* (Cochabamba,1983). Estudios sobre las élites regionales: A. Pérez Torrico, *El Estado oligárquico y los empresarios de Atacama,* 1871–1878 (La Paz,1994); G. Rodríguez *O., Poder central y proyecto regional. Cochabamba y Santa Cruz en los siglos XIX y* XX (Cochabamba,1995); y para un periodo más reciente el estudio de G. Rojas *et al., Elites a la vuelta del siglo. Cultura política en* el *Beni* (La Paz, 2000).

V. La primera mitad del siglo XX

Con la llegada de] siglo XX el ritmo de la investigación se ha acelerado grandemente. Las primeras décadas del siglo fueron de fermentación intelectual. Desde las iniciales sacudidas de una crítica de la sociedad racista en las novelas y "sociología" de A. Arguedas hasta el desarrollo sistemático de un punto de vista indigenista en F. Tamayo, *La creación de la pedagogía nacional* (La Paz,1910) los escritores comenzaron desafiar los presupuestos de su sociedad. Un análisis de este ambiente

(2ª ed., La Paz,1962) y en los manuales de historia de la literatura boliviana de Finot y de Diez de Medina arriba citados. Un perspectiva del periodo de la historia económica, política y social véase el compendio editado por F. Campero, *Bolivia en el siglo XX* (La Paz,1999).

El período liberal, en general, fue desatendido excepto por J. Albarracín, *El poder minero en la administración liberal* (La Paz,1972); *Bolivia: el descentrañamiento del estaño (La Paz,1993) Los republicanos en la historia de* Bolivia (La Paz,1993) *y El poder financiero de la gran minera boliviana* (La Paz,1995). La Revolución de 1898–1899 que llevó los liberales al poder fue estudiada por L. Antezana Ergueta, La *guerra entre La Paz y Chu*-quisaca *(1899)* (La Paz,1999) a completarse con el de R. Condarco Morales sobre la participación indígena en el mismo conflicto. Ha habido cierta predilección por la biografía política: los escritores bolivianos se han sentido atraídos por los dirigentes de los años 20 y 30, entre cuyas producciones se encuentran al-gunas de las mejores muestras de ese género literario. Hay dos excelentes biografías sobre ese periodo: las de B. Carrasco, *Hernando Siles* (La Paz,1961) y de D. Alvéstegui, *Salamanca. Su gravitación sobre el destino de Bolivia* (3v., La Paz,1957–62). Una valoración general del periodo en H. S. Klein, *Parties and Political Change in Bolivia, 1880-1952* (Cambridge,1969). Dos destacados estudios de historia política contempo-ránea: A. Céspedes, El *dictador suicida. 40 años de historia de Bolivia* (Santiago de Chile,1956); y los tres pri-meros volúmenes de los cinco que comprende la serie de P. Díaz Machicado, *Historia de Bolivia. Saavedra, 1920–25* (La Paz,1954)*; Historia de Bolivia: Guzmán, Siles, Blanco Galindo, 1925–31* (La Paz,1954*)* y *Historia de Bolivia: Salamanca. La guerra del Chaco. Tejada Sorzano* (La Paz,1955). La mayor rebelión indígena del periodo ha sido estudiado por R. Choque y E. Ticona, *La sublevación y masacre de 1921* (La Paz,1996*).* que forma parte de una obra más amplia dedicada a la comunidad aymará de *Jesús de Machaqa. La marka rebelde.*

La historia económica de este periodo también ha recibido mayor atención que la de periodos anteriores. La- industria minera ha sido objeto de un análisis económi-co global de cierto refinamiento en W. Gómez, La *minería en el desarrollo*

económico de Bolivia, 1900–1970 (La Paz,1978) y las reconstrucciones históricas de A. Mitre, *Ba-jo un cielo de estaño. Fulgor y ocaso del metal en Bolivia* (La Paz,1993) *y El enigma de los hornos. La economía política de la fundición de estaño. El proceso boliviano a la luz de otras experiencias* (La Paz,1993). Completando esos macroanálisis, hay estudios pormenorizados de la industria temprana en P. A. Blanco, *Monografía de la industria minera en Bolivia* (La Paz,1910); H. S. Klein. "La formación del imperio del estaño de Patiño", *Historia Boliviana* 3:2 (Cochabamba,1983) y D. Ibáñez C., *Historia mineral de Bolivia* (Antofagasta, 1943). Para biografías de los principales mineros ver: Ch.F. Ged-des, *Patiño, rey del estaño* (Madrid,1984); A. Crespo *Los Aramayo de Chichas: Tres generaciones de mineros bolivianos* (Barcelona,1981) y H. Waszkis, Dr. Moritz (Don Mauricio) Hochs-child, 1881–1965 (Francfort,2001). La economía de la mano de obra en la minería del estaño ha sido objeto de estudio en M.E. Contreras, "Mano de obra en la minería estañífera de principios de siglo, 1900–1925" Historia y Cultura 8 (La Paz,1985), quien también ha estudiado "La minería estañífera bo-liviana en la Primera Guerra Mundial" en R. España-Smith (ed.), *Minería y economía en Bolivia* (La Paz,1984). Estudia el crecimiento temprano de esta industria J. Hillman "Los orígenes de la industria del estaño en Bolivia" *Historia Boliviana* 7 (Cochabamba, 1987) y su presencia internacio-nal en "Bolivia and the International Tin Cartel, 1931–1941" *Journal of Latin American Studies* 20:1 (1988*); "Bolivia and british Tin Policy, 1939–1945",* ibid, 22:2 (1990) y K.E. Knoor *Tin Under Control* (Stanford,1945). E1 papel político de los mineros ha sido evaluado en W.L. Lofs-trom, *Attitudes of an industrial Pressure Group in Latin America: the "Asociación de Industriales Mineros de Bolivia" 1925-1935* (ltha-ca,1968). También comienza a estudiarse la economía no mi-nera del periodo: ver M.L. Soux, La coca *liberal. Producción y circulación a principios del* siglo XX (La Paz,1993) y A. Mi-tre, *Los hilos de. la memoria. Ascensión y crisis de las casas comerciales alemanas en Bolivia, 1900-1942* (La Paz,1996). Trata de los ferrocarriles M.E. Contreras "Bolivia, 1900-1939. Mining. Railways and Education " en E. Cárdenas el al. (ed.), *An Economic History of Twentieth Century Latin America* (Londres, 2000).

Evaluaciones de la economía nacional del periodo en W.L. Schurz, *Bolivia. A Commercial and Industrial Handbook* (Washington DC, 1921) y en P. Walle, *Bolivia. Its People, and Resources* (Nueva York,1914). Se analizan aspectos concretos de la economía o de la política económica nacional en Ch.A. McQueen, *Bolivian public Finance* (Washington,1925) y C. Gallo, *Taxes and State Power: Political Instability on Bolivia, 1900-1950* (Filadelfia, 1991). Sobre la historia de los préstamos extranjeros ver el estudio de M. A. Marsh, *Nuestros banqueros en Bolivia. Un estudio de la inversión de capital norteamericano en el extranjero* (La Paz,1980). Entre los numerosos estudios de la historia bancaria, es útil J. Benavides, *Historia bancaria de Bolivia* (La Paz, 1955). Examina el efímero auge gomero del Acre J.V. Fifer, "Los constructores de imperios: Historia del auge de la goma ,en Bolivia y la formación de la Casa Suárez " *Historia y Cultura* 18 (La Paz,1990).

Si bien los investigadores no han analizado en profundidad los cambios sociales que han afectado a la sociedad con el crecimiento de la industria del estaño, la modernización de las ciudades y la culminación de la expansión de las haciendas, existe abundante información para llevar a cabo aquel análisis. Así, en 1900 se celebró el primer y uno, de los mejores censos nacionales: Oficina Nacional de Inmigración y Propaganda Geográfica, *Censo Nacional de la Población de la República de Bolivia de septiembre de 1900* (2 v., La Paz,1902–04). Esta repartición gubernamental publicó también numerosos estudios geográficos, citados arriba. Desde aproximadamente la segunda mitad de los años 80 del siglo XIX y a un ritmo creciente bajo los muy eficientes liberales, casi todos los ministerios del gobierno publicaron estadísticas anuales sobre la sociedad y la economía del país.

VI. Desde los años 30, hasta el presente

La Guerra del Chaco ha producido una amplia bibliografía que va desde novelas a memorias de batallas individuales y experiencias de guerra. Buena parte de esas obras se encuentra resumida en R. Querejazu Calvo, *Masamaclay. Historia, política, diplomática y militar de la Guerra del Chaco* (3ª ed. La Paz,1975); D.H. Zook Jr., *La conducción, de* la *Guerra del Chaco* (Buenos

Aires,1962) es una buena historia de la guerra misma y de los debates diplomáticos de entretelones. La política de la guerra y de los gobiernos militares radicales siguientes es tratado con detalle en las obras ya citadas Díaz Machicao y Klein, así como en el segundo volumen de la historia contemporánea de A. Céspedes, *El presidente colgado* (La Paz,1971); en los dos últimos' volúmenes de la serie de P. Díaz Machicado, *Historia de Bolivia. Toro, Busch, Quintanilla, 1936–1940* (La Paz,1957*); Historia de Bolivia. Peñaranda, 1940-1943* (La Paz,1958). Sobre el papel crucial de los asesores militares alemanes ver L.E. Bieber, "La política militar alemana en Bolivia, 1900–1935*" Latin American Research Review* 29/1 (1994) y Eleanor Hancock, *Ernst Röhm. Histler's SA Chief of Staff* (London,2008). Un estudio detallado de los gobiernos militares socialistas en F. Gallego, *Los orígenes del reformismo militar en América Latina. La gestión de David Toro en Bolivia* (Barcelona, 1991) y *Los orígenes del reformismo militar en América Latina. La gestión de Germán Busch en Bolivia* (Barcelona,1992). Sobre el financiamiento de la guerra ver M. E. Contreras, "Debt, Taxes and War". The Political Economy of Bolivia, c. 1920–1935." *Journal of Latin American Studies* 22/2 (1990). El mejor estudio del impacto de la guerra, que incluye una innovadora historia oral de los excombatientes del Chaco, es el de R. Arze Aguirre, *Guerra y conflictos sociales. El caso rural boliviano durante la campaña del Chaco* (La Paz,1987).

Investigadores, bolivianos y extranjeros han examinado la Guerra del Chaco en el nacimiento de la llamada "generación del Chaco" y los profundos cambios políticos en la sociedad boliviana desde los años 30. Desde perspectivas heterogéneas, podemos mencionar a S. Almaraz, El *poder y, la caída. El estaño en la historia de Bolivia* (2ª ed., La Paz,1969); dos importantes estudios son de R. Zavaleta Mercado, El *poder dual en América Latina. Estudio de los casos de Bolivia y Chile (México,1974)* y *Lo nacional popular en Bolivia (México,1986).* Entre los investigadores extranjeros: R. J. Alexander, *La revolución Nacional Boliviana* (La Paz,*1960); J.* Malloy, *Bolivia. La revolución inconclusa* (La Paz,*1989); y* Ch. Mitchell, *The Leggpy of Populism in Bolivia. From the MNR to Military* Rule (Nueva York,1977*).* Los aportes más recientes son los de J.

Bolivia, 1952–1982 (La Paz,1990); J. Malloy y E. Gamarra, *Revolution and reaction. Bolivia, 1964–1985* (New Brunswick,1988) y el volumen de artículos por Crabtree y Whitehead abajo citados.

Para la comprensión del horizonte de ideales políticos del siglo XX son de importancia varias obras que han contribuido a definir nuevas formas de pensamiento: entre ellas, las tres obras más significativas son el manifiesto indigenista de F. Tamayo, ya citado; T. Marof, *La tragedia del altiplano* (Buenos Aires,1934) y C. Montenegro, *Nacionalismo y coloniaje* (La Paz,1943).

Para la segunda mitad del siglo XX hay estudios detallados sobre partidos y personalidades. La historia más completa de un partido es la del MNR: L. Peñaloza, *Historia del Movimiento Nacionalista Revolucionario, 1941–1952* (La Paz,1963) y L. Antezana E., *Historia secreta del Movimiento Nacionalista Revolucionario* (7 v., La Paz, 1984-88). Para analizar los orígenes del partido trotskysta es de utilidad G. Lora, *José Aguirre Gainsborg, fundador del* POR (La Paz,1960) y la nueva obra sobre el papel del POR y los sindicatos mineros es S. Sándor John, *Bolivia's Radical Tradition. Permanent Revolution in the Andes*(Tucson,2009). Para los demás partidos marxistas no hay estudios generales y mientras existen biografías partidistas de todas las figuras dirigentes del periodo posterior a 1952, hasta el momento no se han publicado estudios serios de investigación. Tenemos, en cambio, algunas obras sobre candidatos y grupos populistas, por ejemplo, F. Mayorga (ed.), *¿Ejemonías? Democracia representativa y liderazgos locales: Percy Fernández, Manfred Reyes Villa, Mónica Medina* (La Paz,1997). Para determinados periodos o episodios pueden ser de utilidad Ph. Labrevoux, *Bolivia bajo el Che* (Buenos Aires,1968) y la recopilación de escritos del 'Che' Guevara durante este periodo: J. Maestre (ed.), *Bolivia. Victoria o muerte* (Madrid,1973). La ejecución del 'Che' ha sido relatada en estilo popular por H. B. Ryan, *The Fall of Che Guevara. A Story of Soldiers, Spies and* Diplomats (Nueva York,1998). El Ministro del Interior con el gobierno de Torres ha escrito un relato completo de este periodo memorable: J. Gallardo Lozada, *Diez meses de emergencia en Bolivia.* (Buenos Aires,1972). Los antecedentes y la ideología de la cúpula militar durante este

periodo han sido analizados por J.P. Lavaud, "L'art du coup d'Etat. Les militaires dans la societé bolivienne (1952–1982)", *Revue Francaise de Sociologie* 30/1 (1989) y su detallado análisis de' las protestas populares que contribuyeron a derribar los gobiernos militares en: *La dictature empéchée. La gréve de Jaim des Jemmes de mineurs, Bolivie, 1977–1978* (París,1999).

En contraste con. la penuria de buenos estudios sobre dirigentes, los movimientos obreros y campesinos recientemente politizados han sido objeto de abundante atención. Además de la ya citada historia del movimiento obrero de Lora, está la obra de Z. Lehm, y S. Rivera, *Los artesanos libertarios y la ética del trabajo* (La Paz,1988), sobre los anarquistas de la primera mitad del siglo. También la COB ha recibido la atención de J. Lazarte, *Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia. Historia de la COB, 1952–1987* (La Paz,1989) y también J.H. Magill, La*bor Unions and political socialization. A Case Study of bolivian Workers* (Nueva York,1974). Se examina la evolución del proletariado minero y su proceso de sindicalización y radicalización en G. Rodríguez O., El *socavón y el sindicato. Ensayos históricos sobre los trabajadores mineros,* siglos XIX–XX (La Paz,1991); R. Zavaleta Mercado, "Forma clase y forma multitud en el proletariado minero en Bolivia", en R. Zavaleta M. (ed.), *Bolivia hoy (Méx*ico,1983); L. Whitehead, "Sobre el radicalismo de los trabajadores mineros en Bolivia", *Revista Mexicana de Sociología* 42/4 (1980) y "Miners as Voters. The Electoral Process in Bolivias Mining Camps", *Journal of Latin American Studies* 13 (1981). Los trabajadores mineros también han sido tema de la extraordinaria biografía de una esposa de minero. D. Chungara, 'Si *me permiten hablar...'. Testimonio, de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia (México,1977)* y de un estudio antropológico de J. Nash, We Eat *the Mines and the Mines Eat Us. Dependency and Exploitation in Bolivian Mines* (Nueva York,1979), así como su versión de la autobiografía de un minero: J. Rojas y J. Nash, I *spent* my *Life in the Mines. The Story of Juan' Rojas, Bolivian Tin Miner* (Nueva York,1992). Entre otras autobiografías recogidas por antropólogos está la elaborada por H y J. Buechler, *The World of Sofia Velázquez. The Autobiography of a Bolivian Market Vendor* (Nueva York,1996); la de Manuela Arí *An Aymara Woman:s Testimony*

y Pedro Condoni y F. Estival, *Nous les oubliés de l'Altiplano témoignage de Pedro Condoni [sic], paysan des Andes boliviennes* (París,1996). Para la vida de una familia judía austriaca llegada a Bolivia a fines de los años 30, ver L. Spitzer, *Hotel Bolivia. The Culture of memory in a Refuge from Nazism* (Nueva York,1998).

Los estudios sobre los campesinos todavía han sido más numerosos que los de los obreros. Hay un original estudio de S. Rivera, *Oprimidos, pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y qhechwa de Bolivia, 1900–1980* (La Paz,1986). Los dos centros clave de sindicalización campesina, el valle de Cochabamba y el altiplano paceño norte los han estudiado: J. Dandler, El *sindicalismo campesino en Bolivia: los cambios estructurales en Ucureña (México,1969) y X. Albó, Achacachi: medio siglo de luchas campesinas* (La Paz,1979), dos buenos estudios tanto históricos como contemporáneos por un sociólogo y un antropólogo. Sobre, la evolución política e ideológica contemporánea de los sindicatos campesinos ver *X. Albó,* "De MNRistas a Kataristas. Campesinado, estado y partidos, 1953–1983 ", *Historia Boliviana* 5:1-2 (Cochabamba,1985); J. Hurtado, El *Katarismo* (La Paz,1986) y D. Pacheco, *El indianismo y los indios contemporáneos en Bolivia* (La Paz,1992). Estudia la movilización de los quechuas J.A. Rocha, *Con el ojo de adelante y con el ojo de atrás. Ideología, étnica, el poder y lo político entre los quechuas de los valles y serranías de Cochabamba -1935–1952* (La Paz,1999); y F. Patzi Paco, *Insurgencia y sumisión. Movimientos indígeno–campe*sinos, *1983–1998* (La Paz,1999); J. Salmón analiza todo el debate premoderno de la ideología indigenista en El *espejo indígena. El discurso indigenista en Bolivia, 1900–1956* (La Paz,1997). Muchas de las obras mencionadas en la sección sobre la situación social también se ocupan de la sindicalización y actividades políticas de los campesinos.

Las tirantes y complejas relaciones de Bolivia con EE. UU. (la potencia más influyente que interfiere en su desarrollo durante el siglo XX), han sido parcialmente analizadas por B. *Wood The Making of the Good Neighbor* Policy (Nueva York,1961); C. Blasier, *The Hovering Giant. U. S. Responses to Revolutionary Change in Latin America* (Pittsburg,1976) y K. D. Lehman, *Bolivia and the United States. A limited Partnership* (Athens,

GA,1999). Entre los estudios sobre aspectos concretos de esas relaciones estám J. W. Wilkie, *The Bolivian Revolution and United States Aid since 1952* (Los Angeles,1969) y E. Gamarra, *Entre la droga y la democracia. La cooperación entre EE. UU. Bolivia y la lucha contra el narcotráfico* (La Paz,1994). Hay también estudios de excepcional calidad sobre la economía boliviana desde los años 20. La mejor historia general de la economía desde esa fecha hasta la segunda mitad de los años 50 es el estudio de la CEPAL, *El desarrollo económico de Bolivia* (México,1957) al que se puede añadir la obra de C. H. Zondag, *The Bolivian Economy,* 1952–1965 (Nueva York,1966). Aunque no existe una síntesis general del periodo moderno, si hay numerosos estudios especializados sobre determinados procesos económicos. Uno de los participantes en el programa de estabilización de la segunda mitad de los años 50, G. .J. Eder, es autor de *Inflation and Development in Latin America. A Case History of Inflation and Stabilization in*Bolivia (Ann Arbor,1968). La crisis del endeudamiento y sus efectos han sido objeto de los estudios de 0. Ugarteche, El *Estado deudor Economía política de la deuda. Perú y Bolivia 1968–1984* (Lima,1986) y R. Devlin y M. Mortimore, Los *bancos transnacionales, el Estado y el endeudamiento de Bolivia* (Santiago de Chile,1983). También se ha estudiado el reciente 'choque' ortodoxo de mediados de los años 80: J. A. Morales y J. D. Sachs, "Bolivia's Economic Crisis", en J. D. Sachs (ed.), *Developing Amercuntry Debt and the World Economy* (Chicago,1989); J. Sachs "The Bolivian Hyperinflation and Stabilization" *American Economic Association. Papers and Proceedings* 77:2 (Nashville,1987) y 0. R. Antezana Malpartida, *Análisis de la Nueva política Económica* (La Paz,1988). Se han estimado asimismo el volumen y los rasgos de la importante economía informa] en S. Doria Medina, La *economía informal en Bolivia* (La Paz,1986). Un buen estudio sobre desarrollo esta en M. Weisbrot, R. Ray, and J. Johnston, *Bolivia: The Economy during the Morales Administration* (Washington, 2009) y los varios estudios del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas, Universidad Católica Boliviana; ver por ejemplo el estudio Lykker Anderson, *Baja movilidad social en Bolivia: Causes y consequencias para el desarrollo* (La Paz,2002)

Existen también numerosos análisis sobre salud y la

situación de pobreza iniciados en los años 70 con N. T. Chirikos *et al., Human Resources in Bolivia,* (Columbus,1971); Misión USAID en Bolivia, *Bolivia Health Sector Assessment* (La Paz,1975) y los volúmenes patrocinados por UNICEF en los años 80, R. Morales Anaya, *Desarrollo y pobreza en Bolivia. Análisis de la situación del niño y la mujer* (La Paz,1984) *y La crisis económica en Bolivia y su impacto en las condiciones de vida de los niños* (La Paz,1985). Varios estudios sobre salud y vivienda ofrecen información actual con los resultados de los programas gestionados por el gobierno boliviano desde 1980. Estas encuestas de salud (llamada ENDSA) fueron hechas cada cinco años hasta 2008, ver Ministerio de Salud y Deportes e INE, *Encuesta nacional de demografía y salud 2008, Informe Preliminar* (La Paz, 2009). Los datos de las encuestas de vivienda, hasta 2008, llamadas inicialmente MECOVI y ahora simplemente "Encuesta de Hogares" están en . Numerosos autores y organismos gubernamentales se han ocupado de la cuestión de la pobreza: entre esas las obras ver R. Morales Anaya, *Bolivia. Política económica, geografía y pobreza. Ocho cimas a la vez* (La Paz,2000); *Naciones Unidas, Dónde estamos el 2000? Remontando la pobreza. Ocho cimas a la vez* (La Paz,2000). Datos sobre pobreza se encuentran en INE. *Bolivia. Mapa de la pobreza 2001* (La Paz,2001) y sobre las condiciones sociales en nivel local ver UDAPSO *Índices de desarrollo humano y otros indicadores sociales en 311 municipios de Bolivia* (La Paz,1997) y también PNUD, *Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2007* (La Paz,2008)

La minería hasta 1970, una fuente clásica es la ya citada obra de W. Gómez; para el periodo posterior completar con M.A. Ayub y H. Hashimoto, *The Economics of Tin Mining in Bolivia,* (Washington,1985). El nacimiento de las nuevas empresas privadas mineras medianas lo estudian M.E. Contreras y M.N. Pacheco, *Medio siglo de minería mediana en Bolivia, 1939–1989* (La Paz,1989). Los debates sobre COMIBOL y su cogobierno en los años cincuenta se ven en A. Canelas, Mito *y realidad de COMIBOL* y S. Cabrera, *La burocracia estrangula la COMIBOL* (La Paz,1960).Un puntual análisis de la estructura fiscal minera antes de las reformas actuales presenta M. Gillis (ed.), *Taxation and Mining. Non Fuel Minerals in Bolivia and other Countries* (Cambridge,1978) La trabajo

anterior de S. Almaraz, *El petróleo en Bolivia* (La Paz,1958) debe completarse con el excelente análisis del petróleo y el gas de C. Miranda Pacheco, "Del descubrimiento petrolífero a la explosión del gas" en F. Campero (ed.), *Bolivia en el siglo XX* (La Paz,1999). Información estadística actual sobre minerales y la industria hidrocarburífera ver en Ministerio de Minería y Metalurgia, *Estadísticas del sector minero-metalurgia 1980-2008* (La Paz, 2009).

Una misión oficial dirigida por R. Musgrave ha realizado estudios minuciosos sobre la estructura fiscal estatal, sus resultados están en *Reforma fiscal en* Bolivia (2 v., La Paz,1977). Cuestiones básicas de política económica después de1952 están bien analizadas en M. Burke, *Estudios críticos sobre la economía boliviana* (La Paz,1973) y C. Goodrich, T*he Economic Transformation of Bolivia* (Ithaca, NY,1955), La agricultura ha recibido un tratamiento moderno de cierto refinamiento en E. B. Wennergren y M.D. Whitaker, *The Status of Bolivian Agriculture* (Nueva York,1975). Esta obra se ocupa en primer lugar de la producción agrícola después de 1952. Análisis de las estructuras y la producción en las haciendas anteriores a la Reforma Agraria ofrece E. Flores, "Taraco: Monografía de un latifundio del altiplano boliviano" *El Trimestre Económico* 22:2 (México,1955); la tesis doctoral de P.R. Turovsky, "Bolivian haciendas before and after the Revolution " (U. de California, Los Angeles,1980) y luego J. Benton, *Agrarian reform in Theory and Practice. A Study of the Lake Titicaca Region in Bolivia* (Aldershot,1999). Sobre los cambios producidos por la Reforma Agraria de 1953 en la situación económica y social hay una gran cantidad de estudios que cubre la mayor parte de las principales regiones del país: W.J. McEwen, *Changing rural Society. A Study of Communities in Bolivia* (Nueva York,1975) es una introducción global al tema; para estudios detallados sobre regiones o zonas particulares ver W.E. Carter, *Aymara Communities and the Bolivian Agrarian Reform* (Gainesville,1964); R.*A. Simmons, Palca y Pucara. A Study* of.. *Two Bolivian Haciendas* (Berkeley,1974); D. Heyduk, *Huayrapampa. Bolivian Highland Peasants and the New Social Order* (Ithaca, NY,1971); K. Healy, *Caciques y patrones: una experiencia de desarrollo rural en el sud de Bolivia* (Cochabamba,1983); B. Leons, "Land reform in the Bolivian

Yungas", *América Indígena* 27:4 (México,1967); M. Burke, "Land Reform and its Effect upon Production and Productivity in the lake Titicaca Region" *Economic Development and Cultural Change 18* (Chicago,1970); D.B. Heath *et al., Land Reform and Social Revolution in Bolivia* (Nueva York,1969); D.B. Heath, "New Patterns for Old: Changing Patron Client Relations in the Bolivian Yungas" *Ethnology* 12 (1973); la sección dedicada a Bolivia en A. Pearse, *Latin American Peasant* (Londres,1975); D. Heyduk, "The Hacienda System and Agrarian Reform in Highland Bolivia: A Re-evaluation" *Ethnology* 13:1 (1974); y los artículos de *R. Godoy,* "Ecological. Degradation and Agricultural Intensification in the Andean Highlands", *Human Ecology* 14:4 (1984); B.S. Orlove y R. Godoy, "Sectorial Fallowing Systems in the Central Andes", *Journal of Ethnobiology,* 6:1 (1986) y su trabajo escrito conjuntamente con J. Morduch y D. Bravo, "Technological adoption in rural Cochabamba, Bolivia" *Journal of Anthropological Research* 54:3 (1998). R.A. Godoy *Indians, markets, and rainforests: theory, methods, analysis* (New York, 2001) compara Bolivia con otras regiones.

La migración de los campesinos indios qhishwa y aymara a las tierras bajas orientales fue una novedad en la sociedad rural boliviana de las últimas tres décadas, aunque en el altiplano y en los valles altos se haya mantenido el ritmo de crecimiento demográfico. Hasta el presente no existe ningún estudio particular que abarque todos los aspectos de este complejo fenómeno si bien se han escrito tesis doctorales algunas de ellas son: R. Henkel, *"The Chapare of Bolivia. A Study of Tropical Agriculture in Transition "* (U. of Wisconsin, Madison,1971); H. Zeballos, "From *the Uplands to the Lowlands. An economic Analysis of Bolivian Urban-Rural Migration* (U. of Wisconsin, Madison,1975) y C. Weil y J. Weil, *Verde es la esperanza. Colonización, comunidad y coca en la Amazonia* (Cochabamba,1993). Un estudio dedicado a las migraciones hacia la región de Santa Cruz es L. Gill, *Peasant, Entreprenuers and Social Change. Frontier Development in Lowland Bolivia* (Boulder, 1987); A. M. Sterman, *Camba y colla. Migración y desarrollo en Santa Cruz, Bolivia* (La Paz, 1987); y M. Redclift, "Sustainability and the Market: Survival Strategies on the Bolivian Frontier" *Journal of Development Studies* 23 (1986). Científicos sociales y trabajadores para el desarrollo comunitario

también han estudiado los grupos altiplánicos y vallunos. Sin discusión los más serios son los que en las tres últimas décadas han producido dos instituciones a cargo de los jesuitas: CIPCA de La Paz y ACLO de Sucre. La migración urbana a La Paz ha sido objeto de una ambiciosa investigación estadística patrocinada por CIPCA y realizada por X. Albó, T. Greaves y G. Sandoval, *Chikiyapu. La cara aymara de La Paz* (4v., La Paz,1981–7); la ciudad de El Alto y su población chola estudiaron G. Sandoval y F. Sostres, La ciu*dad prometida. Pobladores y organizaciones sociales en El Alto* (La Paz, 1989); M. Antezana Villegas, El Alto *desde El Alto II* (La Paz, 1993). Mientras L. Gill ha estudiado diversos aspectos de la ciudad en dos obras: Preca*rious Dependencies. Gender, Class and domestic Service in Bo*livia (Nueva York,1994) y T*eetering on the rim: Global Restructuring. Daily Life and the armed retreat of the Bolivian State*(Nueva York, 2000). Una visión etnográfica de la ciudad está en S. Lazar, *El Alto, rebel city: self and citizenship in Andean Bolivia* (Durhman, 2008).

Aunque la migración interna dentro de Bolivia ha sido constante desde 1952, la migración internacional a gran escala es un fenómeno reciente. El estudio del INE, *Estudio de la migración interna en Bolivia* (La Paz,2004) es el único y sólido estudio. Argentina fue la meta de la migración internacional, estacional y permanente, más antigua; ver R. Benencia y G. Karasik, *Inmigración limítrofe: los bolivianos en Buenos Aires* (Buenos Aires,1995). Después del 2000 se da una migración masiva hacia España y fue estudiada por M. Fernández García, "Bolivianos en España," *Revista de Indias* 245 (2009). Lamentablemente el pequeño contingente de migrantes bolivianos a Estados Unidos no ha sido estudiado sistemáticamente.

El último medio siglo Bolivia ha sido objeto de investigaciones antropológicas sobre todos los aspectos de la cultura india. Las poblaciones aymaras contemporáneas, por ejemplo, tienen estudios tempranos en W. La *Barre, The aymara Indians of the Lake Titicaca Plateau, Bolivia* (Washington,1948); H. Tschopik, "The Aymara" en J. H. Steward (ed.) *Handbook of South American Indians* (Washington,1946), v. II; H. y J. Buechler, *The Bolivian Aymara* (Nueva York,1971) y han sido completados por otros nuevos sobre diversos aspectos de la

vida campesina del aymara contemporáneo. La mejor introducción a estos nuevos materiales es X. Albó (ed.), *Raíces de América. El mundo aymara* (Madrid,1988). Entre los estudios sobre aspectos concretos de la cultura aymara son los siguientes: sobre las creencias religiosas W.E. Carter, "Secular Reeforcement in Aymara Death Ritual" *American An'thropologist* 70:2 (1968); J. Monast, Los *indios avmaras: ¿evangelizados o solamente bautizados?* (Buenos Aires,1972) y los estudios de las obras colectivas ya citadas, editadas por J.V. Murra. El ritual aymara lo estudió T. A. Abercrombie, *Pathways of Memory and Power: Ethnography and History Among an Andean People* (Madison,1998) y T. Platt, Los *guerreros de Cristo. Cofradías, misa solar y guerra regenerativa en una doctrina. Macha (siglos XVIII-*XX) (La Paz,1996). El parentesco lo ha estudiado X. Albó Es*posas, suegros y padrinos entre los aymaras* (2ª ed., La Paz,1976). Junto a éstos está el antiguo estudio de W.E. Carter y M. Mamani, *Irpa Chico. Individuo y comunidad en la cultura aymara* (La Paz,1982). La fisiología de altura de los aymaras es analizado por T.D. Brutsaert, J. D. Haas y H. Spielvogel, "Absence of Work Efficiency Differences During Cycle Ergometry Exercise in Bolivian Aymara," *High Altitude Medicine & Biology* 5:1 (2004). La mezcla de sistemas de creencias médicas en las pequeñas poblaciones del altiplano. son objeto de análisis en una obra interesante de L. Crandon-Malamud From *the Fat of Our Souls. Social Change, Political Process and Medical Pluralism in Bolivia*(Berkeley,1991) mientras se analiza el aymara en un pueblo rural en J. R. Barstow "An Aymara Class Structure: Town and Community in Carabuco" (U. of Chicago, Chicago,1979). Un grupo aymara en el multilingüe Norte de Potosí ha sido estudiado por 0. Harris: To *Make the Earth Bear Fruit. Essays on Fertility, Work and Gen-der in Highland Bolivia* (Londres,2000) y R. Godoy, *Mining and Agriculture in Highland Bolivia* (Tucson,1990). Una síntesis de la lingüís-tica aymara en L. Briggs, "A Critical Survey of the Literature on the Aymara Language", *Latin American Research Review* 14:3 (1979); J. de D. Yapita y L. Briggs, "Ayma-ra Linguistics in the past 22 Years " *Latin American Indian Literatures Journal* 4:2 (1988); H.E. Manelis Klein y L. Stark (eds.) *South American Indian Languages. Retrospect and Prospect* (Austin,1985); L. Campbell, *American Indian*

Languages. The Historical Linguistics of Native America (Nueva York,1997). Estudios de lingüísti-ca aymara están en la serie de M.J. Hardman (ed.), *The Aymara Lan-guage in Its Social and Cultural Context* (Gainesville,1981); ver también X. Albó y F. Layme (eds.) *Literatura aymara. Antología* (La Paz,1992).

La población qhishwa de Bolivia es objeto de estudio intenso, aunque todavía menos que su contraparte peruana. X. Albó ha realizado un buen análisis sociolingüístico en *Los mil rostros del quechua. Sociolingüística de Cochabamba* (Lima,1974). Las obras citadas de Dandler y de Simmons relativas a las comunidades de habla qhishwa del valle cochabambino, junto a J.F. Goins, *Huayculi: Los indios quechua del Valle de Cochabamba* (México,1967) y M. Lagos, Autonomy *and Power The Dynamics of Class and Culture in Rural Bolivia* (Philadelphia,1994). T. Platt ha analizado el simbolismo quechua en *Espejos y maíz* (La Paz,1976) y en un ensayo incluido en el volumen dirigido por J. V. Murra; también examina la evolución histórica de los quishwa del norte de Potosí en sus libros ya mencionados. Otro grupo qhishwa potosino (los Yura) ha sido analizado por R. Rasnake, *Dominación y resistencia cultural. Autoridad y poder en un pueblo andino* (La Paz,1990).

Las extraordinarias prácticas médicas de los indios Qallawaya que viven en la región altiplánica -con numerosos estudios iniciales-, han seguido atrayendo el interés de dos obras de J.W. Bastien, *Mountain of the Condor. Metaphor and Ritual in an andean Ayllu* (St. Paul,1978) *y Healers of the Andes. Kallawaya Herbalists an their medical Plants* (Salt Lake City,1987); L. Giraula, *Kallawaya. Curanderos itinerantes de los Andes* (La Paz,1987); G.A. Otero *La piedra mágica. Vida y costumbres de los indios callahuayas de Bolivia (México,1951).* Ver también G. Fernández *et al., Médicos y yatiris. Salud e interculturalidad en el altiplano aymara* (La Paz, 1999).

Los indios de las tierras bajas del Oriente han concitando el interés de los etnólogos. A comienzos del siglo XX, E. Nordenskioeld llevó a cabo estudios clásicos de esta región *The Ethnography* of *South Ame-rica Seen from* Mojos *in Bolivia* (2ª ed., Nueva York,1979). También la obra de A.R. Holmberg, *Nómadas del arco largo. Los sirionó del oriente boliviano* (México,1978), etnia que ha estudiado H. Schefer y E Lounsbury A *Study in structural Semantics. The Sirionó Kinship System*

(Englewood Cliffs,1971); J., Riester *En busca de la Loma Santa* (La Paz,1976) y en *Los' Guarasug'we: Crónica de sus últimos días* (La Paz,1977). La demografía y las lenguas de estas numerosas etnias es el tema abordado por P. Plaza y J. Carvajal en *Etnias y lenguas de Bolivia* (La Paz,1985) y en varios informes del Banco Mundial y de la ONU.

El folklore boliviano también ha merecido considerable atención de parte de autores como M.R. Paredes, *Mitos, supersticiones y supervivencias populares de Bolivia* (La Paz,1920); J. Lara, *Leyendas quechuas* (La Paz, 1960); E. Oblitas Poblete, *Magia, hechicería y medicina popular boliviana* (La Paz,1971); V. Varas R.,– *Huañaypacha. Aspectos folklóricos de Bolivia* (Cochabamba,1947) para mencionar sólo algunos de los más prolíficos. Mucha de esta información resulta sistemáticamente accesible en J. E Costas A., *Diccionario del folklore boliviano* (2 v., Sucre,1967).

Un tema fundamental de la actualidad en Bolivia es la cuestión indígena. Para iniciar el estudio de este importante tema ver R. Molina y X. Albó *Gama étnica y lingüística de la población boliviana* (La Paz,2006), basado en un análisis amplio del censo de 2001 y en el análisis del INE, *Análisis sociodemográfico. Poblaciones nativas* (La Paz 1997) elaborado a partir del censo 1990. Albó se interesó en el origen de las autoridades sobre los que tiene sólidos estudios, por ejemplo, la procedencia de los diputados a la Asamblea Constitucional de 2008, ver X. Albó, "Datos de una encuesta. El perfil de los constituyentes" *Tinkazos*, 11 (2008) y X. Albó y V. Quispe, *Quienes son indígenas en los gobiernos municipales* (La Paz,2004)

Hay falta de visiones generales de la situación social de la población boliviana contemporánea aunque algunas zonas y algunos problemas han recibido atención. Fuera de los análisis sobre la pobreza y la salud citados anteriormente, la movilidad social contemporánea en la sociedad rural ha sido estudiada en J. Kelley y H. S. Klein, *Revolution and Rebirth of Inequality. A Theory applied to the bolivian National Revolution* (Berkeley,1981). La estructura y el mercado de trabajo de las poblaciones urbanas ha sido objeto de interés en las obras ya citadas de X. Albó sobre La Paz y de Sandoval sobre El Alto; ver también R. Casanovas y A. Rojas, Santa *Cruz de la Sierra.*

Crecimiento urbano y situación ocupacional (La Paz,1988); S. Escobar v C. Ledo *Urbanización migraciones y empleo en la ciudad de Cochabamba* (La Paz,1988); M. Urquiola, *Participando en el crecimiento. Expansión económica, distribución del ingreso y pobreza en el área urbana de Bolivia, 1989–1992 y proyecciones* (La Paz,1994) y R. Morales Anaya, *Desarrollo humano en las montañas. Informe del desarrollo humano de la ciudad de La Paz* (La Paz,1995).

Existe una amplia bibliografía sobre el consumo de la coca entre la población campesina: ver W.E. Carter *et al., Coca en Bolivia* (La Paz,1980) y un número entero de la revista *América Indígena* 33:4 (1978). El problema de la cocaína ha provocado una frondosa bibliografía, en su mayoría muy polémica. Entre los estudios más ponderados se pueden mencionar los de D. Pacine y Ch. Franquemont (eds.), *Coca and Cocaine. Effects – on People and Policy in Latin* América (Boston,1986); G. Flores. y J. Blanes, *Dónde va el Chapare* (Cochabamba,1984); H. Sanabria, *The Coca Boom and Rural Social Change in Bolivia* (Ann Arbor,1993); y H. Sanabria y M. B. Leons (eds.), *Coca, Cocaine and the Bolivian Reality (Al*bany,1997). Una etnografía del cultivo tradicional de la coca en Yungas estudia *A.* Speeding, *Wachu wachu. Cultivo de coca e identidad en los Yunkas de La Paz* (La Paz,1994) y una buena historia de la industria tradicional de la coca en la obra ya citada de M.L. Soux. Las cifras mas confiables para la producción de coca en Bolivia está en el informe anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), *World Drug Report, 2009* (Vienna and New York, 2009)

Se toman en cuenta las antologías colectivas que tratan de la evolución política, económica y social de Bolivia desde 1952: J.M. Malloy y R.S. Thom (eds.), *Beyond the Revolution. Bolivia since 1952* (Pittsburgh,1971); J. Lademani (ed.), *Modern Day Bolivia. Legacy of the Revolution and Prospects for the Future* (Tempe, AZ,1982); F. Calderón y J. Dandler (eds.), *Bolivia.* La *fuerza histórica del campesinado (Cochabamba,* 1984) más dos colecciones editadas J. Crabtree y L. Whitehead (eds.), *Towards democratic Viability. The Bolivian Experience* (Nueva York,2001) y *Unresolved tensions: Bolivia past and present* (Pittsburgh, 2008). En honor de 50° aniversario de la revolución de 1952 se publicó la colección M. Grindle y P.

Domingo (eds.) *Proclaiming Revolution: Bolivia in Comparative Perspective* (Cambridge y Londres, 2003) y un volumen sobre la primera administración del gobierno de Morales en A. Pearce, (ed.) Evo Morales and the Movimiento al Socialismo in Bolivia: The First Term, 2005-2009 (London, 2010). .

Números especiales dedicados a Bolivia ha publicado *Problémes de l'Amérique Latine* 62 (Paris,1981); *Caravelle* 44 (Toulouse,1985); *Cahiers des Amériques Latines,* nueva serie 6 (Paris,1987); *Journal of Latin American Studies* 32 (Londres,2000) y *Journal of Latin American Anthropology* 5:2 (Washington,2000). Otras incluyen estudios históricos, etnológicos o ambos: J.P. Deler y Y. Saint Geours (eds.), *Estados y naciones en los Andes* (2 v., Lima, 1986) y 0. Harris *et* al. (ed.), *La participación indígena en los mercados surandinos. Estrategias y reproducción social. Siglos XVI a XX* (La Paz,1987).

La producción en las dos últimas décadas sobre autonomía, descentralización, ciudadania y comunidades indígenas ha sido muy buena y dificil de resumir, ver M.T. Zegada, *En nombre de las autonomías: crisis estatal y procesos discursivos en Bolívia* (La Paz,2007); M. Galindo, *Visiones Aymaras sobre las autonomías* (LaPaz, 2007); H.F.C. Manillsa, *Problemas de la autonomía en el oriente boliviano: la ideología de la Nación Camba en el espejo de las fuentes documentales.* (Santa Cruz,2007); and J.P. Guevara Ávila, "Balanza de ocho años de descentralización. Cambios estatales a partir de la descentralización y la Participación Popular en Bolivia," en M. de la Fuente, C. Auroi y M. Hufty (eds.) *¿Adónde va Bolivia?* (La Paz,2005).

Aspectos legales de la cuestión de autonomía comunitaria indígena está en X. Albó and C. Romero, *Autonomías indígenas en la realidad boliviana y su nueva constitución* (2ª ed., La Paz,2009). Centros de investigación han publicado constantemente, especialmente FED-ILDIS y la Agencia para el Desarrollo de las Naciones Unidas en Bolivia. La relación entre el Estado y las regiones ha producido trabajos no polémicos como el de R. Barragán "Hegemonías y "Ejemonías": las relaciones entre el Estado Central y las Regiones (Bolivia, 1825-1952)" *Iconos. Revista de Ciencias Sociales,* 34 (2009); R. Barragán y J. L. Roca, *Regiones y poder constituyente en*

En esta exploración bibliográfica se hace evidente que tanto los investigadores bolivianos como los extranjeros han quedado fascinados por la experiencia boliviana y se han esforzado por comprender las complejas fuerzas que han moldeado esta sociedad. Como mi propósito fundamental ha sido dar al lector una introducción a las cuestiones básicas, sin registrar todas las obras descritas sobre cada tema, he dejado de lado muchas otras; pero los libros y artículos citados pondrán al lector en la pista de otras fuentes, que le permitirán profundizar en el estudio. Para terminar, quiero esperar que mis comentarios habrá dado a los investigadores interesados algunas pautas sobre lo que se ha hecho y sobre las apasionantes posibilidades que quedan por explorar en los estudios bolivianos.

CRONOLOGÍA HISTÓRICA

AC Antes de Cristo

2500	Inicio de la agricultura aldeana.
1800	Inicio de la cerámica.
800	Chavín, primera civilización panandina.
100	Estados regionales.

DC Después de Cristo

600-1200	Estado de Tiwanaku.
1400	Nacimiento de los reinos aymaras.
1460	Conquista de los reinos aymaras y creación del Qullasuyu por los Inqa.
1470	Rebelión aymara contra los Inqa.
1532	Llegada de los españoles al Perú.
1537	Rebelión de Manqu inqa.
1538	Inicio del poblamiento español en Charcas.
1545	Descubrimiento del Cerro Rico de Potosí.
1552	Creación del Obispado de La Plata.
1559	Creación de la Audiencia de La Plata.
1560s	Final del poblamiento de las regiones periféricas de Charcas.
1572-1576	Visita del Virrey Francisco de Toledo a Charcas, inicio de la mit'a, de la amalgamación de los minerales de plata y de la concentración forzada de la población indígena.
1580s	Comienzo de la construcción de Santuario de Copacabana a orillas del lago Titicaca.
1584	Publicación de la primera gramática aymara.
1590,s	Descubrimiento de yacimientos de plata en Oruro.
1605	Creación de los Obispados de La Paz y de Santa Cruz de la Sierra.
1609	Creación del Arzobispado de La Plata.
1619	Celebración del Sínodo de La Paz.

1624	Creación de la Universidad de San Francisco Xavier.
1650s	Comienzo de la crisis secular de la producción de plata en Potosí.
1682	Fundación de la Misión de Mojos.
1691	Fundación de la Misión de Chiquitos.
1734	Ampliación del tributo a los indios forasteros y yanaconas.
1751	Creación del Banco de San Carlos de Potosí para la compra de minerales.
1767-1768	Expulsión de los jesuitas.
1776	Creación del Virreinato del Río de la Plata,, con sede en Buenos Aires e incorporación de Charcas en él.
1780-1782	Gran levantamiento indígena dirigido por Tupaq Amaru en Cuzco y por Tomás Katari, Tupaq Katari y Andrés Amaru en Charcas; rebelión criolla, chola e india en Oruro (único movimiento multiétnico del levantamiento).
1784	Reorganización administrativa de Charcas con la creación de las intendencias.
1796	Guerra hispano-británica; comienzo de una importante crisis del comercio internacional, con graves efectos en Charcas.
1808	Invasión napoleónica de España y derrumbe del gobierno metropolitano
1809	Rebelión de la élite en La Plata (25 de mayo); rebelión independentista popular en La Paz (16 de julio).
1809-1825	Guerra de Independencia de Charcas.
1810	Revolución de Buenos Aires (25 de mayo) y regreso de Charcas al Virreinato del Perú.
1824	Batalla de Ayacucho en la que el Gral. A.J. De Sucre y su Ejército Grancolombiano derrotan al Ejército realista del Bajo Perú.
1825	Liberación de Charcas y declaración de la independencia de Bolivia (6 de agosto).
1825-1828	Primera presidencia republicana de Antonio José de Sucre.
1829-1839	Presidencia de Andrés de Santa Cruz.
1836-1839	El Mariscal Andrés de Santa Cruz crea la Confederación Boliviano-Peruana, que acaba derrocada por las tropas chilenas invasoras.
1841	Batalla de Ingavi que pone fin a las recíprocas intromisiones

	de Bolivia y Perú en sus asuntos internos.
1841-1847	Presidencia de José Ballivián.
1847-1855	Presidencia de Manuel Isidoro Belzu.
1850s	Inicio de la industria minera moderna.
1860-1870s	Descubrimiento de importantes yacimientos de guano, plata y nitrato en el departamento de Litoral.
1864-1871	Presidencia de Mariano Melgarejo; intensas negociaciones con gobiernos y empresarios extranjeros.
1879	Chile invade y ocupa el Litoral dando comienzo a la Guerra del Pacífico.
1880	Batalla del Alto de la Alianza (26 de mayo) y fin de la participación boliviana en la Guerra del Pacífico con la total derrota del ejército de Bolivia. Aprobación de una nueva Constitución, fundamental para la nueva época civilista y vigente hasta 1938.
1880-1899	Gobierno del Partido Conservador; predominio de los mineros de la plata en el ejecutivo y en el legislativo.
1898-1899	Revolución "federal" del Partido Liberal, que derroca a los conservadores y a la oligarquía de Sucre. La Paz se convierte en la sede de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
1899-1903	Rebeliones separatistas de los gomeros del Acre que acaban con la cesión del territorio al Brasil.
1899-1920	Gobierno del Partido Liberal; predominio del dirigente liberal Ismael Montes.
1902	El estaño reemplaza a la plata como primer rubro de exportación (representando más del 50% de su valor total).
1920-1934	Gobierno del Partido Republicano; periodo en que la producción de estaño llega a su cima (años 20) y de la Gran Depresión. Los dirigentes principales fueron Bautista Saavedra, Hernando Siles y Daniel Salamanca.
1932-1935	Guerra del Chaco con Paraguay que acaba con la más cara derrota de la historia boliviana.
1936-1939	Presidencias militares de David Toro y Germán Busch de carácter populista de izquierda y conocidas como socialismo militar.
1937	Nacionalización de la Standard Oil of Bolivia y creación de YPFB (empresa petrolera nacional de Bolivia).
1939-1943	Gobierno civil conservador bajo Enrique Peñaranda.

1942	Fundación del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
1943-1946	Gobierno radical de RADEPA y MNR bajo la presidencia de Gualberto Villarroel.
1944	Fundación del primer sindicato minero: la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).
1945	Celebración del I Congreso Indígena Nacional.
1946	Tesis de Pulacayo, declaración radical del congreso de la FSTMB después del derrocamiento de Villarroel.
1942	Gobiernos conservadores civiles y militares.
1952	Revolución Nacional del MNR (9 de abril).
1952-1964	Gobiernos civiles del MNR bajo las presidencias de V. Paz Estenssoro y H. Siles Zuazo. Nacionalización de las minas y creación de COMIBOL; Reforma Agraria, voto universal y creación de la Central Obrera Boliviana (COB).
1964	Derrocamiento del régimen del MNR (4 de noviembre).
1964-1970	Presidencias populistas militares de René Barrientos y de Alfredo Ovando.
1967	Constitución vigente (reformada en 1994).
1966-1967	Guerrilla del Che Guevara en Bolivia.
1970-1971	Gobierno radical populista militar de Juan José Torres y creación de la "Asamblea Popular".
1971-1974	Gobierno civil-militar del MNR y FSB bajo la presidencia de Hugo Banzer.
1974-1978	Gobierno militar conservador de Hugo Banzer.
1978-1979	Gobiernos militares de transición y reorganización de los partidos civiles.
1979-1980	Elecciones generales y reaparición de Siles Zuazo como jefe de una coalición de partidos viejos y nuevos; breves gobiernos civiles presididos por Walter Guevara Arze y Lidia Gueiler.
1980-1982	Gobiernos militares reaccionarios con una masiva protesta popular.
1982-1985	Presidencia de Hernán Siles Zuazo con la vuelta del civilismo, pero con el problema de la hiperinflación.
1985-1989	Última presidencia de Victor Paz Estensoro, con la ejecución de un radical 'choque' ortodoxo (20 de agosto de 1985).

1989-1993	Gobierno de MIR-ADN bajo la presidencia de Jaime Paz Zamora.
1993-1997	Gobierno de una coalición presidida por el MNR bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada; leyes de participación popular y de descentralización.
1997-2002	Gobierno de una coalición presidida por ADN bajo la presidencia de Hugo Banzer y desde 2001, Jorge Quiroga.
1995	Fundación del Movimiento al Socialismo (MAS). Evo Morales fue elegido parlamentario en 1997.
2002-2003	Segunda presidencia incompleta de Gonzalo Sánchez de Lozada con Carlos Mesa (2003-2005); Eduardo Rodríguez Veltzé completó el período.
2006-2010	Primera administración de Evo Morales. Nacionalización del gas y electricidad y la reconstrucción de YPFB y COMIBOL, Plan Dignidad y otra.
2009	Nueva Constitución Plurinacional.
2010	Segunda administración de Evo Morales.

CUADRO Nº 1:
POBLACION DE BOLIVIA
Departamento y Capitales de acuerdo a los Censos Nacionales, 1846-2001

Departamento	Capital	1846	1900	1950	1976	1992	2001	Sup. Aprox. Km2
LA PAZ		412.867	426.930	948.446	1.484.151	1.900.786	2.350.466	133.985
	La Paz*	42.849	52.697	321.073	654.713	1.118.870	1.487.248	
COCHABAMBA		279.048	326.163	490.475	730.358	1.110.205	1.455.711	55.631
	Cochabamba	30.396	21.881	80.795	205.002	397.171	778.422	
ORURO		95.324	86.081	210.280	311.245	340.114	391.870	53.588
	Oruro	5.687	13.575	62.975	124.121	183.422	202.010	
POTOSI		243.269	325.615	534.399	658.713	645.889	709.013	118.218
	Potosí	16.711	20.910	45.758	77.334	112.078	133.268	
CHUQUISACA		156.041	196.434	282.980	357.244	453.756	531.522	51.524
	Sucre	19.235	20.907	40.128	62.207	131.769	194.888	
SANTA CRUZ		78.581	171.592	286.145	715.072	1.364.389	2.033.739	370.621
	Santa Cruz	6.005	15.874	42.748	256.946	697.278	1.114.095	
TARIJA		63.800	67.8877	126.752	188.655	291.407	391.226	37.623
	Tarija	5.129	6.980	16.869	39.087	66.900	135.651	
BENI		48.406	25.680	119.770	167.969	276.174	362.521	213.564
	Trinidad	3.194	2.556	10.759	27.583	57.328	75.285	
PANDO		1.560	7.228	19.804	34.409	38.072	52.525	63.827
	Cobija**					10.001	20.987	
TOTAL BOLIVIA		1.378.896	1.633.610	3.091.031	4.647.816	6.420.792	8.274.325	1.098.581

Notas.- * «Las cifras de la ciudad de La Paz incluyen a la recién creada ciudad de El Alto. En el censo de 1992, La Paz tenía 713.378 habitantes, y El Alto unos 405.492. el censo del 2001 señala para El Alto una población de 694.749 y para La Paz 792.499.

** «El departamento de Pando no tuvo centros urbanos considerables hasta 1992. En 1976 Cobija, la capital, tenía solamente 1.726 habitantes.

Fuentes:

1846 José M Dalence, *Bosquejo estadístico de Bolivia* (Chuquisaca, 1851).

1990 Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda *Geografía, Censo general de población, 1º de septiembre de 1900*, 2 vols. (La Paz, 1902- 1904).

1950 Dirección general de estadística y Censos, *Censo demográfico, 1950* (La Paz, 1955). Este censo contiene también las cifras de superficie.

1976 Instituto Nacional de Estadística *Censo de 1976. Resultados provisionales. Totales del país* (La Paz, 1977).

1988 Instituto Nacional de Estadística, Bolivia. *Encuesta Nacional de Población y Vivienda. resultados finales* (La Paz, 1988). p. 53.

CUADRO N° 2
Producción de plata en Bolivia (1550 - 1909)
(Produccion decenal en marcos de plata)

Decenio	Producción anual media	Producción anual máxima	Producción anual mínima
1550-59	278,055	379,244	207.776
1560-69	241,348	248,443	216,516
1570-79	278,093	613,344	114,878
1580-89	750,073	865,185	668,517
1590-99	803,272	887,448	723,591
1600-09	762,391	844,153	624,666
1610-19	666,082	746,947	620,477
1620-29	590,900	646,543	536,473
1630-39	598,287	793,596	530,674
1640-49	520,859	619,543	463,799
1650-59	461,437	523,604	424,745
1660-69	362,425	398,459	321,889
1670-79	343,478	380,434	289,216
1680-89	370,646	409,328	326,904
1690-99	290,526	375,459	236,935
1700-09	198,404	226,186	178,087
1710-19	152,696	198,682	114,310
1720-29	145,555	200,693	119,576
1730-39	140,186 c	169,707	82,811
1740-49	92,119 c	111,947	81,081
1750-59	123,864 c	126,957	115,373
1760-69	142,114	158,883	117,323
1770-79	170,381	242,067	150,746
1780-89	378,170	416,676	335,848
1790-99	385,283	404,025	369,371
1800-09	297,472	371,416	194,535
1810-19	208.032	338.034	67,347
1820-29	156,110	177,727	132,433
1830-39	188,319	228,154	169,035
1840-49	191,923	256,064	142,029
1850-59	201,482	224,313	189,573
1860-69	344,435 c	391,304	312,174
1870-79	955,629 c	1.150,779	391,304
1880-89	1.111,568 c	1.660,804	597,686
1890-99	1.655,762	2.630,907	1.202,927
1900-09	799,791	1.288,452	385,522

Fuentes: Peter J. Bakewell, "Registred Silver Production in Potosí, 1550 – 1745", *Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas* 12 (1975), cuadro Nº 1,92 – 97; Ernesto Rück, *Guía general de Bolivia. Primer año* (Sucre, 1865), pp. 170 – 171; para 1755 – 1859; (Lamberto de Sierra), *'Manifiesto' de la plata extraída del Cerro de Potosí, 1556 – 1800* (Buenos Aires, 1971), pp. 35 – 37, para 1735 – 1754; Adolf Soetbeer, *Edelmetallproduction und Wertverhältniss zwischen Gold und Silber* (Gotha, 1879), pp. 78 – 79, para 1860 – 1875; *The Mining Industry, Technology and Trade* I (1892) 207, para 1876 – 1891; II (1893) 333, para 1892 – 1893; VII (1898) 203, para 1894; República de Bolivia, Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica, *Geografía de la República de Bolivia* (La Paz, 1905), pp. 354 – 355, para 1895 – 1904; Walter Gómez, *La minería en el desarrollo económico de Bolivia* (Cochabamba, 1978), pp. 218 – 220, para 1905 – 1909.

Notas: c = Cifras de producción calculada. Todas las cifras de producción posteriores a 1859 han sido pasadas a marcos de kilos, a la tasa de 1 marco = 230 gramos. No pudiendo disponer en la actualidad de las cifras de producción de los años 1734 – 1755, he utilizado las cifras del quinto que da Sierra. Se ha utilizado un coeficiente de 0.52 para pasar de pesos corrientes a marcos de plata; este factor procede de la relación encontrada entre las cifras fiscales de Sierra y las cifras de producción de Rück para el período 1756 – 1760. El coeficiente 0.52 fue el valor más alto de entre una serie que comenzaba en 0.43.

Cuadro Nº 3:
Producción de estaño en Bolivia
(1900 — 1979) (en Tm.)

Decenio	Producción anual media	Producción anual máxima	Producción anual mínima
1900—09	14,909	21,342	9,739
1910—19	24,710	29,100	21,324
1920—29	3,216	47,19 (1929)	19,086
1930—39	25,864	38,723	14,957 (1933)
1940—49	38,827	43,168	3,800
1950—59	28,861	35,384	18,013
1960—69	24,705	29,961	19,718
1970—79	29,731	32,626	25,568
1980—88	19,001	29,801	7,231 (1988)

Fuentes: Walter Gómez, *La minería en el desarrollo económico de Bolivia* (Cochabamba, 1978), pp. 218 — 220, para 1900— 1970; James W. Wilkie y Peter Reich, eds., *Statistical Abstract of Latin América* (Los Angeles, 1980), vol. 20, p. 225, para 1971 — 1976; U. S. Departament of the Interior, *Minerals y earbook 1978 — 1979* (Washington, 1980), vol. I, p. 926, para 1977 — 1979 y Banco Central, *Boletín Estadístico, Sector Externo, 1980 — 1988* (La Paz, 1989), p. 43, para 1980 — 1988.

CUADRO N° 4
Indicadores Socioeconómicos Básicos de Bolivia

Indicador	Cifra	Año
Población	8.329	2000c
Superficie (miles de km2)	1.099	1999
Densidad demográfica (km2)	8	1999
% urbana	58 %	2000
% crecimiento anual promedio de la población	2.3 %	1995-2000c
Índice de fertilidad total (número de hijos)	4,4	1995-2000c
% de la población de 0-14 años	39.6 %	2000c
Índice bruto de natalidad		
(1 habits. residentes)	33.2	1995-2000c
Índice bruto de mortalidad		
(1 habits. residentes)	9.1	1995-2000c
Mortalidad materna		
(por 100.000 nacidos vivos)	390	1990-1998c
Esperanza de vida al nacer (en años)	62	1999b
Mortalidad infantil (1 nacimientos)	60.6	2000
Mortalidad infantil ((1 nacimientos vivos)	25	1999b
% de niños con menos peso del que les corresponde según la edad	6 %	2000
% de niños malnutridos de menos de 5 años	8 %	2000
% de niños de menos de un año con la 3° dosis de la triple vacuna	89 %	2000
% de niños de menos de 1 año con la 3° vacuna contra la poliomelitis	89 %	2000
% de niños de menos de 1 año con la vacuna contra la tuberculosis	95 %	2000
% de partos atendidos por profesionales de salud	63 %	2000
% de la población que no recibe atención médica	22 %	2000
Grado de Desarrollo Humano según la ONU	0.652	1999
Grado de Desarrollo de Género según la ONU	0.557	1999
Coeficiente de Gini de desigualdades en los ingresos	0.44	1990°
% de la población que vive en la pobreza	51.5	1999
% de la población que vive en extrema pobreza	23.6	1999
PIB (en millones)	8.281 $	2000
Renta per cápita	994 $	2000
Valor de las exportaciones (bienes y servicios) (en millones)	1.457 $	2000
Valor de las importaciones (en millones)	1.848 $	2000
Balanza comercial (en millones)	-392 $	2000
% de las exportaciones a EE. UU.	24	2000
Total de la deuda externa (en millones)	4.574 $	2000
% de la población económicamente activa en la agricultura	43.2	1997
en la industria	18.4	1997

Indicador	Cifra	Año
en servicios	38.4	1997
% de la población económicamente activa en el sector informal	51.3	2000u
Total de la ayuda externa (en millones)	569 $	1999b
Ayuda per cápita	70 $	1999b
La ayuda en % del PIB	7	1999b
La ayuda en % del gasto público	29.6	1999b
Servicio de la deuda en % del total de Exportaciones	30.2	1998b
% de viviendas con agua potable	71	1998
% de viviendas con alcantarillado	65	1998
% de viviendas con electricidad	71	1998
% del PIB gastado en la educación	5,9	1997c
% de analfabetos de ambos sexos	14.4	2000c
Población en Primaria (en millones)	1,578	1999
% de la población en edad escolar matriculada en Primaria	95	1990-2000
% de la población en edad escolar matriculada en Secundaria	37	1990-2000
Años de escolaridad promedia cumplida (en la población de 20 ó más años)	7.3	1999
En la población urbana	9.4	1999
En la población rural	3.1	1999
Lengua más habladas (en la población de 6 y más años de edad)		
Español	58.3 %	2000
Aymara	15.7 %	2000
Qhishwa	22.9 %	2000
Guaraní	0.6 %	2000
Otras originarias	0.4 %	2000
Extranjeras	2 %	2000
Población indígena y nativa rural estimada (en millones)	2.1	2000b
Etnicidad de la población		
Qhishwa	27.2 %	1999
Aymara	22.5 %	1999
Guaraní	1.2 %	1999
Mojeño	1.5 %	1999
Chiquitano	1.7 %	1999
Otros	2.9 %	1999
Ninguna	42.9 %	1999
% de población católica	85	1992
% de población protestante	11	1992

Notas: Salvo que se indique otra cosa, las cifras proceden del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos marcados con una 'c' proceden de CEPAL, **Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2000;** los datos marcados con una 'b' proceden de Banco Mundial, **World Development Indicators 2001**; los datos indicados con una 'u' proceden de UDAPE, **Bolivia: Evaluación de la economía, año 2000**; y los datos indicados con una 'o' proceden de PNUD, **World Income Inequality Database**, vol. 1.0 (sept. 2000)

La presente Cuarta Edición de
"Historia de Bolivia", se terminó
de imprimir en Mayo de 2011, en
los Talleres Gráficos de Libreria
Editorial "G.U.M."
La Paz - Bolivia